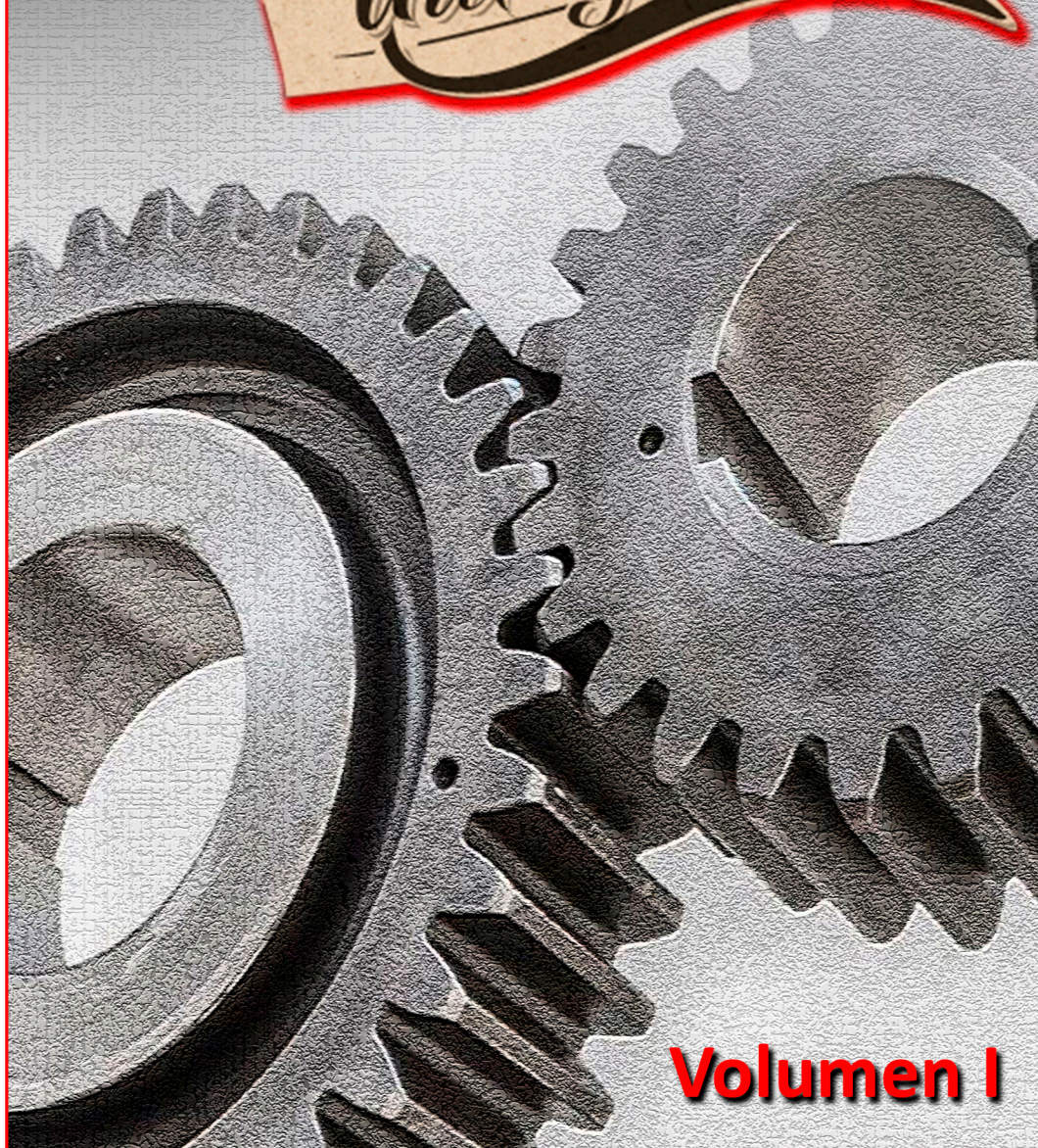


*Enciclopedia
Internacional
de la*

Autogestión



Volumen I

LA AUTOGESTIÓN ES TANTO UN OBJETIVO COMO UN CAMINO

Como fin, la autogestión constituye la forma de organización y el modo de funcionamiento de una sociedad basada en la participación de todos en la toma de las decisiones en el campo económico y político.

Como camino, la autogestión es necesaria para acumular fuerzas, para demostrar que las dominaciones y jerarquías no son fatales, y que otra sociedad poscapitalista es posible.

La autogestión es desde este punto de vista una utopía concreta.

Este primer volumen de la Enciclopedia Internacional de la Autogestión, se centra en las realizaciones en los continentes africano y de América latina

AUTOGESTION

L'ENCYCLOPÉDIE INTERNATIONALE

tome 1

EDITIONS
SYLÉPSE

VV AA

ENCICLOPEDIA INTERNACIONAL DE LA AUTOGESTIÓN

Volumen I

Obra publicada en colaboración con la Asociación por la Autogestión

www.autogestion.asso.fr

© EDICIONES SYLLEPSE 2019

edition@syllapse.net

libros para ir más allá de lo imposible

Traducción y edición digital: C. Carretero

Difunde: Confederación Sindical Solidaridad Obrera

http://www.solidaridadobrero.org/ateneo_nacho/biblioteca.html

CONTENIDO

NOTA EDITORIAL

Que esta enciclopedia se convierta en un bien común

PRÓLOGO

Del pasado/presente a la invención de otras posibilidades

PARTE I. MUNDO ÁRABE

I. ARGELIA (1962-1965)

II. EGIPTO

III. TÚNEZ

PARTE II. AMÉRICA INDO-AFRO-LATINA

Un volcán de emancipación en construcción

IV. AMÉRICA ANDINA

V. ARGENTINA

VI. BRASIL

VII. CHILE (UNIDAD POPULAR, 1970-1973)

VIII. MÉXICO

IX. PERÚ

X. URUGUAY

XI. VENEZUELA

LA AUTOGESTIÓN ES TANTO UN OBJETIVO COMO UN CAMINO

Como fin, la autogestión constituye la forma de organización y el modo de funcionamiento de una sociedad basada en la participación de todos en todas las decisiones en el campo económico y político, en todos los niveles del ámbito colectivo para la emancipación de todas y todos.

Como camino, la autogestión es necesaria para acumular fuerzas, para demostrar que las dominaciones y jerarquías no son fatales, y que otra sociedad poscapitalista es posible.

La autogestión es desde este punto de vista una utopía concreta.

La ambición de la Asociación es promover la reflexión y la educación popular sobre el tema de la autogestión. Tiene como objetivo poner en común experiencias de forma crítica sin transformarlas en modelos normativos, y apoyar cualquier iniciativa en línea con un proyecto emancipador. Reúne a hombres y mujeres, sindicalistas, cooperativistas, asociaciones, feministas, ambientalistas y políticos de diferentes orígenes.

AGRADECIMIENTOS

Agradecimiento especial a:

Alberto Acosta, Michel Antony, Dario Azzellini, Isabelle Bleton, Pierre Cours–Salies, Emmanuel Delgado–Hoch, Magali Della Sudda, Anne Guérin, Daniel Guerrier, Ralf Hoffrogge (workerscontrol.net), François Longérimas, Christian Mahieux, Gus Massiah, Alexandar Matkovic, Julie Matthaei, Sylvie Mayer, Frank Mintz, Eduardo Montes (Frente de Economía Social–La Campora), Irène Paillard, Sylvain Silberstein, Nils Solari, Alan Tuckman (Workerscontrol.net), el Comité de cancelación de la tercera deuda mundial (Lieja), Éditions Anthropos (París), François Maspero (París), La Brèche (París), Queimada (Madrid) y Spartacus (París), el Institut Tribune socialiste (París), el Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestion (Madrid), el Instituto Internacional de Investigación y Formación (Amsterdam), el Centro Tricontinental (Louvain–la–Neuve), el Centre Europe Tiers Monde (Ginebra), la cooperativa Sub, Union syndicale Solidaires, A contre (Lausanne), Inprecor (París), Notas laborales (Detroit), Revue études comparative Est–Ouest (París), la asociación Radar (Montreuil), el sitio Workerscontrol.net. Sin olvidar a quienes dan vida a la autogestión en el día a día y a quienes nos han confiado su documentación, sus colecciones de carteles y fotos y por supuesto sus textos.

NOTA EDITORIAL

QUE ESTA ENCICLOPEDIA SE CONVIERTA EN UN BIEN COMÚN

Ediciones Syllepse

Cuatro años después de su publicación, las ediciones de Syllepse ofrecen acceso libre y gratuito a *Autogestión. La enciclopedia internacional*.

Compuesto por trescientas entradas escritas por ciento cincuenta autores de muchos países, la Enciclopedia cubre los cinco continentes, treinta y cinco países y se extiende desde 1848 hasta la actualidad. Se trata de un proyecto internacional a gran escala, multilingüe y de largo plazo.

Esta Enciclopedia convoca y combina la Comuna de París, la Revolución Rusa, la España libertaria de 1936, la Yugoslavia titista, la Hungría de los consejos obreros, la Argelia de la independencia, la Checoslovaquia de la primavera, la Polonia de Solidarnosc, la Francia de Lip, las utopías norteamericanas, poder popular chileno y portugués, Black Power, Porto Alegre,

revoluciones árabes, brotes de autogestión chinos, australianos y japoneses, Venezuela, los mineros del país de Gales, las alternativas, los astilleros del Clyde, el inmenso volcán autogestionado sudamericano, el zapatismo, el procomún, la transición energética y ecológica, el feminismo, la escuela y la cultura, la ciudad, los memorandos de Grecia, las recuperaciones de empresas de Francia, Italia, Croacia, y por supuesto, Argentina, Brasil y Uruguay...

Algunas de las contribuciones escritas en 2015 o antes pueden parecer anticuadas, e incluso rebasadas por el curso de los acontecimientos. Por ejemplo, los aportes sobre Venezuela y, más ampliamente, los referentes al continente sudamericano. Sin embargo, las posibilidades descritas en estos artículos, incluso si se han superado, siguen siendo un hecho para el futuro.

Si esta Enciclopedia es el “buque insignia” del anclaje de la autogestión de nuestra editorial, muchos títulos de nuestro catálogo se refieren más o menos explícitamente a la autogestión como práctica crítica de las relaciones de explotación y dominación. Señalaremos aquí algunos de ellos, entre los más emblemáticos: [Cooperativas contra el capitalismo](#); [Dispensarios griegos autogestionados](#); [Ocupar, resistir, producir](#); sin olvidar la revista [Les Utopiques](#), cuyo número 10 está dedicado a la autogestión.

Para facilitar la lectura de las 2398 páginas del libro, lo hemos dividido en seis volúmenes. Todos pueden elegir de acuerdo con sus deseos de material en el que pensar. Invitamos a los lectores a distribuir los archivos PDF a aquellos que puedan

estar interesados. No estamos defendiendo ningún derecho de propiedad aquí.

Nosotros esperamos que esta enciclopedia se convertirá en un bien común para el uso libre por todos.

Estos primeros seis volúmenes serán seguidos por tantos volúmenes como lo permitan la experiencia de autogestión y la reflexión.

Marzo 2019

No sabían que era imposible, así que lo hicieron.

Mark Twain

PRÓLOGO

DEL PASADO/PRESENTE A LA INVENCIÓN DE OTRAS POSIBILIDADES

Benoît Borrits, Bruno Della Sudda, Jean–Pierre Hardy, Arthur Leduc, Patrick Le Tréhondat, Robi Morder, Richard Neuville, Catherine Samary, Patrick Silberstein

Como el famoso espectro del comunismo que durante mucho tiempo ha sido la pesadilla de los dueños de los cinco continentes, la de la autogestión parecía adormecida, enterrada bajo el polvo de las bibliotecas, almacenada en la tienda de complementos de otra época. Los Guizot y otros Metternich de nuestro tiempo podían dormir tranquilos. Si durante quince años, que habían tenido algunos temores, el flujo y las derrotas de las dos últimas décadas del siglo XX había empujado la parte posterior del espectro hasta el fondo de las viejas cavernas. Entonces, casi de repente, sin que lo supieran

los que guardaban los viejos libros de magia, *the take*, *la prise* –la “toma”, he aquí una palabra que dice el significado de las cosas– ha resurgido en esta Argentina tan cercana y tan lejos.

“Ocupar, resistir, producir”

“Ocupar, resistir, producir”, otra frase más de Argentina que dice claramente lo que está surgiendo. Aquí y allá, gracias a la deserción de los poseedores, la gente de las fábricas, oficinas y barrios se apoderó de los bienes que fueron expropiados: la tierra, el negocio, una clínica de salud, un “territorio”, una ciudad, la democracia, un bien común...

Poco a poco, el velo sobre la autogestión da paso si no a la luz –todavía hará falta tiempo y experiencia acumulada para vislumbrarla y que no ciegue–, a un claroscuro que proyecta, un poco de claridad sobre lo que es posible.

En realidad, el espectro solo dormitaba y, sin embargo, como el famoso topo, deambulaba, invisible y esquivo, aquí y allá al capricho de la destrucción capitalista, las explosiones sociales y las convulsiones en la cultura y la civilización.

En su tiempo, los tambores de Eduardo Galeano habían traído una primera noticia: los invasores no eran invencibles. Hoy, el compromiso de Pilpa, Fralib, Vio.Me, Zanón, RimaFlow, Flaskô, New Era Windows y otros

demuestran que “¡es posible!”: “Fabricamos, vendemos, nos pagamos sin jefe”. Esta declaración debería aparecer en todas las cabeceras de los sitios de Internet y en las pancartas de los contestatarios de la “Tina” (There is no other choice: No hay otra opción = no hay otra opción que el orden establecido) de Margaret Thatcher.

Fralib+Lucas Aerospace+Porto Alegre: “¡He aquí un programa!” La cuestión de la gestión de los negocios, la tierra, los servicios, los bienes comunes y la Ciudad por parte de los ciudadanos–productores debe perforar ahora los tímpanos de los Guizots y Metternich de nuestro tiempo.

El clamor que viene es evidentemente, ahora, sólo un susurro. Sin embargo, a pesar del formidable ambiente hostil, hemos visto desenrollarse el perfil de una Internacional de Empresas Recuperadas, insolentemente bautizada como “Economía de los Trabajadores”. Qué insolente es mostrar y demostrar, contra todo pronóstico, no con “argumentos sino con acciones”, lo que la Asociación Internacional de Trabajadores proclamó en vísperas de la Comuna de París:

Los obreros han probado que la producción [...] puede ejercerse sin que exista la clase de los empresarios que contratan a la de los obreros; que los medios de trabajo, para dar frutos, no necesitan ser monopolizados ni desviados hacia medios de dominación y explotación contra el trabajador; y que el trabajo asalariado, tanto como el trabajo esclavo, como el trabajo servil, es sólo una forma transitoria e inferior que está destinada a desaparecer cuando llegue el trabajo asociado.

Si esta Internacional nació en el sur del continente americano, en el baño de juventud del movimiento alter–globalizador, se afianzó en 2014 en Europa, en Gémenos, cerca de Marsella, entre los Fralib. Después del 1º de mayo de la Conferencia Mundial celebrada en Venezuela en julio de 2015, las próximas reuniones continentales ya están previstas, América afro-latino-india, por supuesto, pero también en Europa. ¡El espectro ha vuelto!

Más allá de las solidaridades necesarias, es precisamente el pensamiento estratégico compartido el que debería beneficiarse de él, sobre todo porque se basará, en Francia, en una primera victoria cuya importancia hay que subrayar: al constituirse la Scop–Ti, los Fralibs hicieron retroceder efectivamente la multinacional Unilever. Ya en México, al recuperar su fábrica y ponerla de nuevo en funcionamiento, los Tradoc habían ganado un enfrentamiento contra la multinacional de neumáticos Continental.

Un espectro con mil rostros

Por supuesto, el espectro de la autogestión todavía tiene muchos desafíos que asumir: debe organizar sus enfrentamientos e intercambios, reestructurar sus sectores, revisar su memoria, construir y experimentar las nuevas formas que necesita, aumentar el número de iniciativas y las implementaciones. Por supuesto, producir y vender té a primera vista parece “más fácil” que fabricar piezas o productos químicos en un proceso de producción globalizado.

Por eso el espectro no siempre asume explícitamente la identidad de la autogestión, que cruza caminos, que se camufla bajo seudónimos y múltiples identidades. Pero sea lo que sea, es ahora cuando los empleados de la multinacional Sanofi están desarrollando las condiciones para una producción socialmente útil, como las de la británica Lucas Aerospace que ayer había elaborado un plan de reconversión industrial.

Los Metternich y los Guizots de nuestro tiempo observan con atención el espectro ya que, como sus antecesores, “grandes señores bien intencionados” y “fanfarrones filántropos burgueses”, se esfuerzan por “abrumar...” Estas cooperativas “que [han] tratado en vano de aplastar”. “La utopía del soñador” que ellos “anatematizaron como un sacrilegio socialista”, debe sin embargo, según ellos, confinarse a los márgenes del sistema económico, como forma de truncarlo y marginarlo.

Paradoja de paradojas, es interesante señalar que, contrariamente a las polémicas de la autogestión de la época dorada europea de los años setenta, difícilmente se razona sobre la autogestión: el equilibrio de poder ha cambiado y la crisis de los proyectos “socialistas”, “ha contribuido a hacer a la vez más complejo y más esencial que nunca el cuestionamiento del horizonte capitalista mediante la liberación de una orientación de ruptura movilizadora, radical y radicalmente democrática. Estamos de acuerdo, más o menos, queramos o no, en esta aparente contradicción: “No, la autogestión no es posible en un sistema capitalista. Sí, su aprendizaje es posible en un sistema capitalista”. Aunque aparentemente no es posible, sin embargo, se está intentando y arrojando luz

sobre el rastro de la ruptura. Este es el mensaje que nos transmiten los Vio. Me de Grecia cuando declaran que si “las fábricas y los bienes sociales deben ser administrados por los productores”, deben estar por su parte “liberados de los capitalistas”. Además, la Asociación Internacional de Trabajadores no dijo otra cosa en su Discurso Inaugural y en su enfoque de las “escuelas del comunismo” que iban a ser luchas autoorganizadas de todo tipo, tanto en el sistema como contra él.

Las glosas (marginales) de los años setenta dejaron en el olvido, de hecho las estamos discutiendo hoy, experiencias concretas y utopías en apoyo de asuntos serios. Así, en Argentina, el fenómeno masivo de recuperación de empresas ha relanzado el debate oponiendo “nacionalizaciones bajo control obrero” y “cooperativas”. Pero en un contexto en el que era imposible apoyarse en las autoridades públicas, la mayoría de las empresas afectadas optaron rápidamente por constituirse en cooperativas: porque era necesario seguir produciendo para vivir y abrir brechas en el sistema. El debate sólo puede continuar, en particular a favor de un posible cambio en la situación política nacional. En Estados Unidos, la pregunta ni siquiera surge. La elección de la cooperativa se hace inevitable, mientras que la financiación privada sin ánimo de lucro (ONG, sindicatos, etc.) multiplica las ayudas para la constitución de dichas cooperativas.

Evidentemente es diferente en Francia donde, habiendo florecido el lassallismo sin decirlo, nos dirigimos al Estado para pedir una solución. Y, sin embargo, con Scop–Ti, La Fabrique du Sud... y SeaFrance, hay muchas oportunidades para entablar un

debate: socialización, apropiación colectiva, expropiación, cooperativas, etc. Volkswagen y la situación en Grecia son ejemplos de los mismos problemas con la necesidad de una respuesta internacional que coloque a los ciudadanos-productores en el centro del juego.

Ni que decir tiene que la constitución de empresas recuperadas a lo largo del tiempo, cualquiera que sea su personalidad jurídica, abre un debate estratégico. Esto se alimenta, en particular, de tener en cuenta la evaluación de su funcionamiento interno, el modo de integración en un territorio local, la consideración de las cuestiones ecológicas y la solidaridad cívica, a pesar de que están sumergidas en un formidable entorno capitalista, y en gran medida sujetas a él. Aunque todavía son limitados en número, estos proyectos autogestionados, disfrazados para la ocasión de proyectos cooperativos, porque eso es lo que son, son cada vez más numerosos. ¿Se trata de un punto de apoyo a las resistencias o, por el contrario, de un estancamiento legitimado por los poderes existentes al desviarse tal vez de demandas más radicales en cuanto a la satisfacción de necesidades y derechos, y que en definitiva cumplen con la “Reglas del juego” de la competencia en el mercado? El segundo término de la alternativa será tanto más poderoso cuanto que no se ha hecho nada para integrar estas experiencias en una visión y actividad del movimiento social, en redes de acción y reflexión que evalúen sus aportes, sus límites y sus dificultades, para ir más lejos.

Si la alterglobalización ha contribuido poderosamente a la deslegitimación de la ideología capitalista, si los procesos

revolucionarios iniciados y las nuevas movilizaciones ciudadanas a raíz de ello han contribuido a romper brechas, todavía no ha surgido ningún proyecto alternativo coherente llevado a cabo por grandes sectores a escala mundial. No se ha encontrado una solución a la crisis global y multifacética que comenzó en 2008 y la situación caótica en el mundo solo está empeorando. En tal contexto, ¿cómo no entender que el regreso de la autogestión está desdibujando un camino difícil y plagado de trampas?

Utopías concretas

Los proyectos cooperativos en funcionamiento se topan con límites y contradicciones y, en ocasiones, conllevan ambigüedades. No todos, y no en todo momento, tienen el sabor y el aroma de la autogestión como imaginan los amantes de los modelos. Esto no es nuevo; hoy como ayer, los escollos son numerosos: burocratización, desamortización, asfixia del espíritu inicial, normalización, transformación en su contrario... Estas utopías concretas son sin embargo muy significativas de la aspiración a hacerse cargo de los propios asuntos, organizarse sin jerarquías y sin jefes, para establecer otras relaciones sociales. Como escribió Karl Marx a Ludwig Kugelmann el 9 de octubre de 1861, “en las utopías de un Fourier, de un Owen, se puede leer el presentimiento y la expresión fantástica de un mundo nuevo”. Estos momentos, estos “territorios fronterizos”, de hecho, dan un vistazo a la

sociedad postcapitalista, a la autogestión generalizada. Es al mismo tiempo un elemento decisivo de respuesta a la crisis de civilización a la que nos conduce el capitalismo, una herramienta para deconstruir la ideología dominante y para preparar rupturas con el orden globalizado establecido. Los movimientos que han comenzado a organizarse, de lo local a lo global –contra los tratados de libre comercio, por la “soberanía alimentaria” o la defensa de los derechos universales– están contribuyendo a recomponer la acción y el pensamiento “estratégico” donde se afirma la exigencia democrática de la pluralidad social y el control sobre los principales problemas sociales. Es un componente esencial de una nueva reflexión de “autogestión” que no se detenga en las fronteras de las empresas atomizadas.

Sin duda es útil recordar que en cada época los movimientos de emancipación han organizado, en el seno mismo del modelo de sociedad dominante, "contrapoderes" opuestos al poder de los amos del Estado y del dinero. Sociedades de socorro y ayuda mutua, asociaciones y sindicatos, periódicos, editoriales, centros de vida comunitaria, casas populares, bolsas de trabajo, cooperativas y empresas culturales de todo tipo, han configurado una conciencia autónoma e iniciado lo que hoy llamaríamos prácticas alternativas que sugieren que otro mundo es posible.

Al mismo tiempo, proyecto, programa y práctica social, la autogestión se abre paso en la historia de la emancipación. Pero no es sólo la música de un futuro incierto lo que escuchamos; es también la realización de la autogestión en el corazón mismo de la sociedad, cuando los grupos y

movimientos sociales intentan apoderarse de los bienes comunes y hacen lo posible por modificar las condiciones que se les imponen.

Explorar el pasado y combinarlo con el presente

Esta Enciclopedia Internacional de la autogestión, puesto que de eso es de lo que se trata, ha por tanto, convocado y conjugado la comuna de París, la Revolución Rusa, la España libertaria de 1936, la Yugoslavia de Tito, la Hungría de los Consejos Obreros, la Argelia de la independencia, la primavera checoslovaca, la Polonia de Solidarnosc, la Francia de Lip, las utopías norteamericanas, el Poder Popular chileno y portugués, el Black Power, Porto Alegre, las revoluciones árabes, los brotes de autogestión en China, Australia y Japón, Venezuela, los “contraplanes obreros”, los mineros de Gales, las alternativas a los astilleros navales de la Clyde, el inmenso volcán de autogestión sudamericano, el zapatismo, los bienes comunes, la transición energética y ecológica, el feminismo, la escuela y la cultura, la ciudad, la Grecia de los memorandums, las recuperaciones de empresas de Francia, Italia, Croacia y, por supuesto, Argentina, Brasil y Uruguay.

En 2010, la publicación del libro *Autogestión: ayer, hoy, mañana* correspondió a una observación y una apuesta: el regreso de la autogestión. Ahora sabemos que la apuesta está ganada: esta vuelta, por frágil e incierta que sea, es una vuelta duradera. Sintomáticamente, desde 2010, han aparecido en las

librerías varios libros, en inglés y español en particular: *La autogestión como alternativa: Crisis y autogestión en el siglo XXI* y *Dominar y poseer: el control de los trabajadores desde la Comuna hasta la actualidad*.

Caja de herramientas y buzón de sugerencias, esto es lo que quiere ser esta Enciclopedia. Otras ediciones completarán los huecos y ausencias y sobre todo, ojalá, los momentos y los territorios fronterizos autogestionados por venir. El comité editorial internacional que se está creando estará dispuesto a realizar este trabajo para que en los susurros de autogestión de nuestro tiempo, escuchemos el clamor de Jacques Roumain:

Reconstruiremos Copán, Palenque
Y el Tihuanaco socialista
Trabajador blanco de Detroit, peón negro de Alabama
Innumerables personas de las galeras capitalistas
El destino nos levanta hombro con hombro
Y negando el antiguo mal de los tabúes de sangre
Pisamos los escombros de nuestras soledades
Y elaboramos el mortero de los tiempos fraternos
con el polvo de nuestros ídolos.

(“Madera de ébano”)

I. EL MUNDO ÁRABE

ARGELIA (1962 – 1965)

UNA DEMOCRACIA AUTOGESTIONADA EN GESTACIÓN

Michel Raptis

En Argelia, desde la liberación del país en 1962, hasta la caída del gobierno de Ahmed Ben Bella el 19 de junio de 1965, tuvo lugar una experiencia de importancia más allá de los límites nacionales: la introducción de la autogestión en las explotaciones agrícolas y las empresas industriales abandonadas por sus propietarios europeos.

Esta experiencia se vio favorecida por la interacción de un conjunto de factores que derivan de la estructura económica y social específica del país, su régimen colonial, las consecuencias de la guerra de liberación y el papel subjetivo, también, de una serie de argelinos y elementos europeos que se vieron envueltos en el proceso de la revolución argelina.

Que Argelia, desde el estallido de la guerra de liberación en noviembre de 1954, se vio arrastrada imperceptiblemente a un

proceso de carácter eminentemente revolucionario, más allá de los objetivos de la independencia nacional formal, este hecho lo confirman [...] los acontecimientos que marcaron al país después de esta independencia [...]. El proceso revolucionario no es producto de la preexistencia de una “dirección” revolucionaria consciente, sino, sobre todo, de un desequilibrio objetivo de las estructuras tradicionales que lleva a las masas en movimiento a la búsqueda confusa de un “tema”, de una “solución” a una situación que se ha vuelto insoportable, insostenible. El “direccionamiento” subjetivo es la condición indispensable para la culminación exitosa del proceso revolucionario, pero no el factor determinante para desencadenar este proceso.

Si en Argelia se produjo una experiencia revolucionaria al día siguiente de la independencia nacional, con mucho, en nuestra opinión la más importante a escala mundial, desde la de la revolución yugoslava, la revolución china y la revolución cubana, este fenómeno se debe, en parte, a falta, precisamente, de una “dirección” tradicional que no haya podido alterar el estado casi “crudo” de esta experiencia.

Durante todo un período, el actor principal en el escenario revolucionario del país destrozado por las consecuencias de la larga y cruel guerra de liberación, fueron las masas desheredadas de campesinos y trabajadores y una “dirección” asumida en la cúspide por un pequeño equipo de origen “nacional–revolucionario” dominado por la personalidad de Ahmed Ben Bella, y, en niveles inferiores, por un número igualmente reducido de militantes argelinos y europeos,

algunos de los cuales eran de formación marxista revolucionaria, en todo caso de formación crítica y creativa, inconformista.

Por supuesto, si el inicio de un auténtico movimiento revolucionario de clase se vio favorecido por estas condiciones específicas que caracterizaron a Argelia después de la independencia, la falta de una dirección colectiva arraigada en la clase, es decir, de una verdadera vanguardia política, fue un hándicap terrible y decisivo, en el desarrollo, la consolidación y la victoria de la apertura revolucionaria.

Pero nuestra [...] intención, que concierne exclusivamente al “expediente de autogestión en Argelia” en el período comprendido entre el verano de 1962 y el verano de 1965, no es acometer una crítica de todas las razones que determinaron la evolución registrada hasta ahora en la situación argelina. Nuestro objetivo es hacer una contribución sobre las condiciones en las que la autogestión ha podido crearse, institucionalizarse y funcionar en Argelia, a partir de documentos inéditos hasta el momento y gracias a nuestra experiencia personal en este campo donde hemos tenido que trabajar desde el inicio de la experiencia de autogestión.

Entre 1962 y 1965, miles de explotaciones agrícolas y empresas industriales de Argelia fueron sometidas al sistema de autogestión, codificada por los llamados decretos de “marzo de 1963”¹, y la mayoría de estas empresas siguen existiendo a pesar de todas las distorsiones que ya ha sufrido el diseño original del sistema. Consideramos esta experiencia como una

¹ Decretos que establecieron comités de gestión en empresas agrícolas vacantes.

de las más interesantes realizadas en la larga marcha histórica del mundo obrero en el proceso de lograr su verdadera liberación social, y absolutamente acorde con las preocupaciones de nuestro tiempo, ya sea que se manifiesten bajo un régimen capitalista o en un régimen socialista, relativo al acceso de los productores directos y los ciudadanos a la gestión efectiva de la producción, del Estado, y de la vida social en su conjunto.

Esta experiencia está ligada a los diversos intentos de los trabajadores, a lo largo de la historia moderna, de emerger, con motivo de una grave ruptura del equilibrio social, en el escenario político como una fuerza autónoma, para constituirse finalmente en una “clase dominante”, gestionando por sí misma el proceso de producción en el que está directamente involucrada, así como toda la vida política y social. Desde el momento ya de la Revolución inglesa del siglo XVII –por no remontarnos a movimientos anteriores– los *levellers* (niveladores) reclamaron la explotación conjunta de las tierras reales y feudales que la desaparición de la monarquía acababa de dejar “vacantes”. Sabemos que intentos similares dieron origen a la Revolución Francesa y sus repercusiones a lo largo del siglo XIX.

Conocemos más particularmente las referencias de Proudhon a la gestión por parte de los productores asociados y especialmente la experiencia histórica de la Comuna de París, así como las referencias a esta experiencia contenidas en la obra de Karl Marx y Friedrich Engels que esbozan –de seguro todavía de forma muy imprecisa–, la concepción de un Estado

basado en “asociaciones de productores libres e iguales”, que actúan “en plena conciencia según un plan común y racional” (Engels a Bebel, 20–23 de enero de 1886), y sobre la federación de municipios “autogobernados” por “los productores” en sustitución del “antiguo gobierno centralizado” (Karl Marx, *La guerra civil en Francia*).

Pero fue la Revolución Rusa, en 1905 y luego en 1917, la que destacó el papel de los “consejos”, de los “soviets”, como órganos democráticos del poder real del proletariado constituido como “clase dominante”. Durante todo un período estos “consejos obreros” ejercieron una “fascinante fuerza de atracción”, como dice Max Adler en *Democracy and Worker’s Councils*, sobre “todos los estratos de la población trabajadora” en Rusia y en otros lugares. Esta “fascinante fuerza de atracción” también se encuentra en una serie de experimentos similares llevados a cabo después de la Segunda Guerra Mundial, también en Polonia y Hungría durante los acontecimientos de 1956². Las razones por las que los “consejos”, en la URSS en particular, no pudieron subsistir como sistema de poder, de gestión de la economía, del Estado, de toda la sociedad, “expresando directamente la voluntad del proletariado”, es una cuestión que no entra dentro del alcance de este trabajo. Basta con señalar que el sistema, de hecho, ha dado paso a una dirección cada vez más centralista de la economía planificada y controlada por el Estado, que consideramos un factor fundamental en la formación de la burocracia. Solo ciertas necesidades inmediatas obligaron a los bolcheviques a apartarse de las “normas” de la sociedad

2 Consejos obreros en Budapest

democrática e igualitaria descritas en *El estado y la revolución* de Lenin y de la concepción inicial del papel de los “consejos” en esta sociedad, como un hecho indiscutible. Las condiciones precisas en las que se intentó construir el socialismo, durante el período histórico de transición, en ese país aislado y, además, atrasado, no se percibieron claramente en ese momento. De ahí las sucesivas alteraciones y ajustes realizados por Lenin, en particular en la política y la práctica del poder en la URSS entre 1918 y 1923. Pero lo que fue, por supuesto, en la mente de Lenin sólo un retroceso temporal y cíclico, más particularmente con respecto a el papel de la clase, el estado, el partido, los sindicatos, en la gestión de la economía y de la sociedad, se ha convertido en una práctica y una teorización perdurables, mientras tanto la gestión estatal exclusivamente centralista de la economía nacionalizada, y pronto planificada, resultó ser un factor de formación irresistible de una burocracia omnipotente, titular de esta gestión.

A Yugoslavia le debemos la concepción, introducida desde arriba por las propias autoridades, de una economía socializada y democráticamente autogestionada por los productores, y del conjunto de la vida social. El establecimiento de la autogestión a nivel primero de las empresas económicas básicas en el decenio de 1950 y luego también a nivel de los municipios, y gradualmente de toda la vida social, marca en Yugoslavia el intento de restaurar la estructura “soviética” de la transición. Estado de los trabajadores a un nivel incluso superior al que experimentamos en los primeros años de la Revolución Rusa.

Por supuesto, el sistema de autogestión en Yugoslavia es solo un borrador que siempre presenta una serie de

imperfecciones, lagunas, deformaciones burocráticas. Todavía no existen las condiciones generales de funcionamiento de una autogestión global adecuada.

Este es también el caso de la autogestión en Argelia, que solo se aplicó a nivel de granjas y empresas industriales que quedaron “vacantes” tras la salida de sus propietarios europeos. Para que la autogestión se desarrolle plenamente y se consolide como un sistema económico y social específico distinto del de una economía nacionalizada y planificada gestionada exclusivamente por la administración estatal centralista, debe deshacerse de la tutela política y administrativa; definir las relaciones entre los grupos de productores directos y el personal técnico; determinar la relaciones con el mercado y el plan a escala nacional.

Tanto la experiencia yugoslava como la experiencia argelina más limitada han sacado a la luz claramente estos tres grupos principales de problemas de autogestión.

Es casi inevitable que la autogestión en sus primeras etapas esté bajo la tutela del poder político y de la administración, que en cierto sentido encarnan los intereses generales y a largo plazo de la comunidad social. Los trabajadores formados bajo el capitalismo no tienen una preparación adecuada para su papel de “gerentes” y, de hecho, existe el peligro de verlos adoptar actitudes individualistas o “localistas”. Por otro lado, en cualquier caso, no pueden cumplir con sus tareas en la gestión de la economía sin la colaboración de los servicios políticos y administrativos del poder obrero.

Pero la “tutela” debe estar orientada desde el principio en el sentido de ayudar realmente a la clase a aprender la autogestión y por tanto en una perspectiva de tutela continuada y acentuada. Si, por el contrario, esta última se estabiliza y se apropia de toda una serie de prerrogativas que pertenecen a la esencia misma de la autogestión, estamos ante una formación burocrática de autogestión que, a la larga, corre el riesgo de vaciarla de su contenido. Es en la forma en que se ejerce y evoluciona la supervisión política y administrativa sobre la autogestión que se reconoce el carácter verdaderamente proletario y socialista, o no, del poder revolucionario. Porque su objetivo solo puede ser ayudar a la clase a administrar la economía misma, el Estado, el conjunto de la sociedad y no mediante sucesivas delegaciones de su poder a los partidos, al Estado, incluso a los sindicatos.



Desde este punto de vista, el sano desarrollo de un régimen proletario y socialista se mide por el declive paulatino de la supervisión política y administrativa en favor de la expansión continua y acelerada de las prerrogativas de autogestión. Los críticos de la autogestión plantean el

argumento de la incapacidad de los trabajadores para ascender al papel de verdaderos gestores de la vida económica, política y social, cada vez más complicada hoy en día, que requiere de un mayor número de “especialistas técnicos y científicos de todo tipo”. La respuesta a este argumento radica en el proceso de continua desproletarización, desde el punto de vista cultural, de los trabajadores directos, que un verdadero poder obrero debe comenzar por incluir el tiempo necesario para la formación política, profesional y general de los trabajadores en el ámbito laboral de trabajo diario pagado. Esto supone una profunda revolución en el sistema educativo al asociar estrechamente los lugares de trabajo y los centros educativos.

Todos aquellos que se han planteado seriamente la cuestión de la liberación social efectiva de los trabajadores mediante su promoción como directivos de la sociedad han tenido que subrayar la importancia de la educación como medio para abolir gradualmente la condición proletaria. Porque esto se debe tanto al sistema salarial como al bajo nivel cultural de los trabajadores. La educación continua que es necesaria debe ser política, profesional y general. La educación política puede y debe suplir durante todo un período las deficiencias derivadas de la falta de una formación profesional y general adecuada y dotar a los trabajadores de una concepción global de las condiciones generales de su trabajo, de su función y de sus derechos, de sus deberes también, en el marco de un sistema basado en la autogestión.

No puede, sin embargo, eclipsar durante mucho tiempo la necesidad de que se acompañe de una formación profesional y general de los trabajadores, con el fin de eliminar

gradualmente la brecha existente entre ellos y los elementos de mayor nivel técnico y formación científica. Porque esta brecha, mientras exista en proporciones significativas, incluso con tendencia a agravarse, constituye una debilidad orgánica de la estructura de autogestión. Tiene necesariamente como resultado el dominio de facto de los colectivos obreros por parte de los directores técnicos o, por el contrario, la degradación cualitativa de estos últimos en detrimento del desarrollo de la eficiencia productiva del sistema. Poseer una superioridad cultural abrumadora, especialmente profesional, constituye una ventaja que invariablemente, irresistiblemente, se convierte en una ventaja burocrática, es decir, en la creación y consolidación de privilegios de poder y poder material.

Un verdadero régimen revolucionario que se proclame obrero y socialista debe proceder desde el principio a elevar constantemente el nivel formativo de los trabajadores, para desproletarizarlos culturalmente, para que puedan desempeñar eficazmente su papel de gestores de la sociedad. No es nuestra responsabilidad fijar el costo material de dicha póliza, que debe cubrirse deduciendo del tiempo de trabajo diario el tiempo dedicado a esta educación. La solución a encontrar gradualmente dependería de cada caso concreto y resultaría económicamente rentable, estamos convencidos de ello, ya que contribuiría a estimular y mejorar el esfuerzo productivo de los trabajadores. Después de una fase que tendría lugar bajo el signo de la supervisión política y administrativa, la autogestión podría conducir a lo que algunos yugoslavos están considerando seriamente ahora: la organización de los productores directos como “gerentes” o empleadores de equipos de gestión técnica y sus servicios

auxiliares. De hecho, la función del empresario, del empleador, debería recaer exclusivamente en los productores directos que contratarían, contra un salario por determinar, los servicios de técnicos para satisfacer en la medida de lo posible los desiderata democráticamente definidos por las organizaciones de trabajadores en la autogestión³.

Esta nueva etapa de transición en el desarrollo de la autogestión de la clase obrera daría paso posteriormente a modificaciones resultantes, entre otras cosas, del nuevo nivel cultural (político, profesional y general) alcanzado por los productores directos y de la modernización avanzada del aparato productivo de la sociedad. Durante esta etapa intermedia, la autogestión se desarrolla en las condiciones de una economía de mercado y monetaria, combinada con la existencia de una planificación nacional, desarrollada y aplicada democráticamente. Este es el tercer grupo de problemas que enfrenta la experiencia de autogestión.

La solución de estos problemas también es concreta, según cada caso particular, y progresiva. De hecho, la construcción del socialismo debe verse como que se extiende a lo largo de

3 "La gestión de productores directos asociados y sus órganos de autogestión" en este caso significaría "la realización de algunas actividades fundamentales, a saber: 1) mantener y promover la estructura económica existente de la empresa; 2) regular informes internos y definir deberes y derechos; 3) elegir el equipo de gestión (o el director, al cual dejaremos el cuidado de formar su "gobierno" el cual estará compuesto por un número razonable de miembros) y aprobar la creación de los servicios auxiliares necesarios para su operación; 4) determinar los objetivos de la actividad económica, la cantidad de ingresos y su distribución, así como las medidas a tomar para poder competir y monitorear progreso técnico; 5) adoptar el programa general que el equipo de gestión técnica propone para la consecución de los objetivos en cuestión; y sexto, monitorear y controlar la ejecución de las decisiones de los órganos de autogestión, evaluar el "costo" de cada acción en particular "(Dragicevic, 1966).

todo un período histórico y está constantemente determinado por el continuo aumento de las fuerzas productivas nacionales y la ampliación de su base internacional. Luego de un período inicial, de diversa duración, de preponderancia de la supervisión administrativa centralista sobre la autogestión, la economía planificada, permitirá que el sistema se desarrolle al abrigo de las realidades e influencias del mercado mundial. Casi autosuficiente, debe llegar a una fase de participación progresiva “en la división internacional del trabajo”. Esto es para eliminar los costos de producción antieconómicos, para llevar el aparato productivo al nivel internacional, y así medir el progreso real del sistema. Esta fase tiene como objetivo estimular el desarrollo de las fuerzas productivas poniéndose al día con los rendimientos y velocidades internacionales, condición esencial para la estabilización del nuevo sistema económico y social, distinto de la coerción política, que promueve el desarrollo, la arbitrariedad e incluso la omnipotencia de la burocracia administrativa. Por supuesto, la liberalización económica propia de esta fase, que implica una liberalización igualmente política y general de la dictadura burocrática, no está exenta de peligros y crisis, siempre que la base de la experiencia permanezca confinada al nivel nacional. Pero en la medida en que la estructura del poder político del proletariado se democratice precisamente por la ampliación y el florecimiento de la autogestión, siempre existe la posibilidad de contrarrestar las fuerzas económicas de carácter capitalista, de corregir a tiempo los excesos, las brechas y desequilibrios, y así superar cada vez las posibles crisis a un nivel superior mediante la progresiva evolución global del sistema.

Durante esta fase los estímulos materiales son necesarios e inevitables. Pero en realidad, en un sistema de autogestión, el llamado incentivo material debería ser una forma de compensación de los productores

Los colaboradores directos se acercan cada vez más a la modalidad eminentemente socialista, es decir, a la retribución según el trabajo realizado, individualmente, por equipo de trabajo y por toda la empresa. La condición proletaria que, desde el punto de vista económico, deriva del trabajo asalariado, sólo será efectivamente abolida mediante la introducción de un modo de remuneración acorde al trabajo. Por otro lado, este método de remuneración será el más productivo. Las cuestiones de evaluación de los ingresos, y en consecuencia también del trabajo realizado, sobre todo a la hora de valorar la productividad resultante del trabajo colectivo en equipo y por la articulación más adecuada entre equipos y talleres a escala de toda una empresa, son muy difíciles de resolver, aunque no pueden ser un argumento decisivo contra este método de remuneración. La empresa capitalista, ayudada por técnicos calificados, logra calcular los costos de su producción y el progreso de su productividad. La empresa socialista debería poder calcular cuál es la contribución de cada productor directo al aumento de la productividad.

Los incentivos materiales, en contradicción con la pretensión absolutamente legítima de los productores directos de ser retribuidos según el trabajo realizado (las desviaciones, una vez realizadas, van a la manutención de la sociedad y a los fondos sociales, etc. de la empresa), sólo deben afectar a la gestión. El

hecho de que la clase obrera esté obligada durante todo un período a contratar los servicios de esta categoría de elementos a un precio elevado no debería ser un argumento para que no pueda apropiarse de una parte creciente de la productividad de su trabajo. En efecto, es necesario distinguir estrictamente entre los exorbitantes privilegios materiales de la burocracia técnica, administrativa y política, y el derecho de la clase obrera bajo un régimen que se proclama socialista, a ser retribuida según el trabajo realizado, según su cuantía de trabajo, para usar la expresión utilizada por Marx.

Todos estos problemas, descritos muy brevemente, los hemos visto aparecer, incluso durante la experiencia argelina, por muy limitada que sea. Surgen sin [...], por supuesto, haber aún podido encontrar una solución. Pero la autogestión, por su propia esencia, desarrolla una crítica radical, un dinamismo revolucionario; cuestiona toda la estructura anterior de la sociedad y determina un proceso de transformación global y permanente de la misma. Por lo tanto, no debe ser juzgada sobre la base de los problemas no resueltos que plantea, sino sobre la base de las tendencias fundamentales para remodelar la sociedad en su conjunto de acuerdo con las aspiraciones e intereses de la masa de productores directos y ciudadanos. [...]

Fuente: Michel Raptis, “El dossier de la autogestión en Argelia”, Autogestión, n ° 3, septiembre de 1967.

Para saber más:

Dragicevic, A. (1966) “Autogestión y clase obrera”, Cuestiones actuales del socialismo, nº 82, julio–septiembre.

LA DEMOCRACIA AUTOGESTIONARIA ARGELINA A PRUEBA

Mohammed Harbi

Cuando en el otoño de 1963, el presidente Ahmed Ben Bella decidió organizar un congreso de trabajadores del sector agrícola autogestionado, erróneamente llamado “congreso de fellahs”, la primera pregunta fue quién debería organizarlo. El Frente de Liberación Nacional (FLN), cuyo dispositivo aún se encuentra en gestación luego de su implosión en el verano de 1962; la Oficina Nacional de Animación del Sector Socialista (BNASS), autora del proyecto de los Decretos de marzo de 1963⁴; la Unión General de Trabajadores de Argelia (UGTA) o Ministerio de Agricultura y Reforma Agraria, brazo ejecutivo de la política agraria.

En una entrevista con *Révolution africaine* (julio de 1963), Ahmed Ben Bella cree que le corresponde al sindicato llevar al sector socialista de la mano. Dando la espalda a este compromiso, confió la preparación del congreso al FLN. Este cambio se puede explicar por el descrédito de la dirección de la

⁴ Decretos sobre la autogestión de empresas industriales y mineras.

UGTA. Al llegar a la cúspide de la organización tras un verdadero golpe de Estado apoyado por Ahmed Ben Bella, Mohamed Khider y Bachir Boumaza, la dirección central no consiguió tocar el corazón de los trabajadores. No siendo reconocida su legitimidad. Al mismo tiempo, los partidarios de la autonomía frente al FLN, seguros del apoyo de los sindicatos urbanos, intentaron desde fuera establecerse en el sector agrícola, para combatir cualquier desviación estatal de la autogestión y unificar a la clase trabajadora bajo su égida.

La conquista de la UGTA es un tema importante para todas las facciones del FLN, tanto a la derecha⁵ como a la izquierda. En el mundo del trabajo, los trabajadores del sector agrícola constituyen la mayoría de la clase trabajadora. La primera iniciativa para organizar un congreso de trabajadores de la tierra tiene su origen en la comisión orgánica del FLN bajo el liderazgo de Omar Benmahjoub, miembro del buró político.

Inicialmente, hay un núcleo central encomendado a Belhamissi, uno de los secretarios de la UGTA “ilegítima” que cuenta con el apoyo de la secretaría del FLN y sus colegas de la dirección de la UGTA para organizar reuniones en la UGTA a nivel nacional y preparar el programa del congreso. No se notifica ni al buró político ni al comité central. El caso se dio a conocer cuando el ministro de Agricultura, Ahmed Mahsas, informado por sus colaboradores de las reuniones organizadas en los terrenos agrícolas, se hizo cargo del proyecto por su cuenta. Parece ser un momento en que

⁵ Hay partidarios de la propiedad privada y estadistas vinculados a Ben Bella, así como ex apparatchiks del PPA-MTLD.

Benmahjoub y Mahsas están actuando en concierto. Benmahjoub busca investir como candidato a Belhamissi en la secretaría general de la UGTA y está lleno de elogios para él. Sigue repitiendo: “Este Belhamissi es una revelación a nivel sindical”, pero omite señalar que éste, maestro de su región, ni siquiera fue elegido por la Federación de los trabajadores de la educación y de la cultura. En cuanto a Mahsas, su propósito es claro. Se abrió con franqueza después del congreso a un miembro del buró político, Aït El Hocine, ex director de la Asociación de Argelinos en Francia: “Sí, todos ustedes tienen bases en las federaciones, yo también quiero crear una.”⁶

¿Qué se puede hacer para evitar la contratación de trabajadores agrícolas y ayudar a los partidarios de la autogestión en la lucha contra los burócratas que quieren apoderarse de la UGTA? Incluso antes de que Zahouane, el jefe del comité de orientación, fuera alertado, se llevaron a cabo reuniones informales entre elementos de BNASS (Lotfallah Souleiman, Mohammed Harbi), UGTA (Mourad Benattig, Rebah Slimane) y un diputado (Abdelaziz Zerdani). El resultado es un texto distribuido por la sección UGTA de Argel–Centro (Documento nº 1)⁷. Inmediatamente después, Abdelaziz Zerdani planteó la cuestión durante una reunión del comité de orientación. Se tomó la decisión de bloquear las maniobras encaminadas a revisar los Decretos de marzo sobre autogestión y consolidar el control estatal del movimiento obrero. Los defensores de la autogestión en el comité central se reúnen en la prefectura de Argel bajo la presidencia de

⁶ Comentarios comunicados a Hocine Zahouane por Aït El Hocine.

⁷ Sobre el Congreso de Trabajadores de la Tierra.

Hocine Zahouane, encuentro durante el cual se toman las siguientes medidas: lanzar una campaña de información a todos los niveles para denunciar las intrigas de los burócratas del FLN que sustituyen el normal funcionamiento de las instituciones por intrigas en la sombra; apoyarse en los textos de la *Carta de Argel* y el discurso de Ahmed Ben Bella en el congreso del FLN (abril de 1964); nombrar a Mohand Saïd, líder de la comisión de organizaciones de masas, para seguir el trabajo del congreso; instruir a Mohammed Harbi para que escriba una nota de orientación a la prensa, la radio y la televisión para aclarar la opinión sobre los intentos de revisar los Decretos de marzo (Documento n ° 2) ⁸.

Las directrices del comité de orientación son seguidas al pie de la letra por todos los órganos de prensa y más particularmente por los periódicos semanales *El Moudjahid* de lengua árabe y *Chabab* (juventud) bajo la autoridad de Zemnouar Merrouche y Haidar Hassani. *En Révolution africaine*, Amar Ouzegane se mantiene en una cautelosa reserva.

Nuestro objetivo no es reemplazar a los representantes de los trabajadores agrícolas, sino neutralizar la acción de sus enemigos. Tan pronto como se abre el congreso, el presidente Ben Bella da su garantía a Mahsas: “Les presento a Mahsas, quien estuvo en prisión conmigo. No tiene lección que aprender de nadie”. El ataque disfrazado tiene como objetivo a Mazouzi, Rebah, Slimane y Mourad Benattig y refuerza a sus

⁸ Instrucciones generales a la prensa escrita y oral.

amigos. Conmocionado, Mazouzi abandona el congreso. Sin embargo, los funcionarios del Ministerio de Agricultura no tienen las manos libres. Los delegados de los trabajadores agrícolas no se rinden. Los recalcitrantes son secuestrados en Rocher-Noir antes de la apertura del congreso. Maltratados por Mokhtar Bouchafa⁹ quien los amenaza ostensiblemente con su revólver, reaccionan en el Congreso y presentan sus quejas sin evasivas. De sus intervenciones se desprende que las asambleas de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) se convirtieron, como el primer congreso de la UGTA, en un operativo policial (Documento n ° 3)¹⁰.

A la izquierda, Hocine Zahouane decide reaccionar el sábado. Se mantuvo en contacto con los ejecutivos del comité de orientación (el capitán Mostafa Khalfallah, Ali Merrouche), de la comisión económica (Hamadache) y de la UGTA (Rabah y Benattig), acudió al congreso donde encontró un ambiente irrespirable. Juzgado como futuro secretario general de la FNTT, Bouchafa dirige los trabajos del congreso y expulsa a Belhamissi recurriendo a la violencia. Zahouane telefonea a Ben Bella, le cuenta sobre el ambiente que reina en el congreso y sobre la voluntad de los funcionarios del Ministerio de Agricultura de tomar el control de la junta ejecutiva de la FNTT mediante amenazas e intimidación. A continuación, se realiza un intercambio sobre la noción de productor. No logran llevarse bien por teléfono, Zahouane luego va a la Villa Joly y le da un informe sobre el progreso del “congreso”. Avergonzado, Ben Bella finalmente promete después de una estrecha

9 Líder del comando FLN en Argel ante Yacef Saadi.

10 ¿Cómo fue el congreso de trabajadores de la tierra?

discusión que de los cuarenta y dos miembros de la junta ejecutiva, solo habría dos funcionarios. Va a Ben Akroun para dar una conferencia a Bouchafa y sus colegas. Son las cuatro en punto. Todos creen en un cambio de tendencia de Ben Bella. Los seguidores de Benmahjoub Nekkache y Boudissa van a la villa Joly y le hacen cambiar de opinión. Alrededor de las 6 p.m., Zahouane se acercó al congreso. Los juegos estaban casi hechos. Algunos delegados lloraban de rabia. Zahouane regresó a Villa Joly para pedirle explicaciones a Ben Bella. Este último no supo qué contestar y terminó diciendo: “Los otros hermanos de la comisión orgánica se están ocupando de eso”. Les pido que no aumenten la tensión y que dejen de intervenir. El intercambio es tenso: “No respaldaré tal política y deben esperar mi renuncia”. Ben Bella lo acompañó hasta el ascensor, “No, no es como me lo dices”. A las 21 horas, Zahouane vuelve al congreso. Los impostores estaban jubilosos junto a Boudissa, pero Ben Bella sancionó a Bouchafa que pierde la secretaría general a favor de Ramdane Bouchebouba, ex general a cargo de la organización MTLD, arrestado en Francia durante la guerra como jefe de la wilaya.

La misma noche de la clausura del escandaloso congreso, Zahouane envía un artículo al *Pueblo de Argel*, al *Republicano* y a *Argel Le Soir* y los conspiradores son acusados ante la opinión pública (Documento n ° 4) ¹¹.

No fue hasta el 29 de diciembre que Zahouane volvió a ver a Ben Bella en presencia de Ben Alla. Ben Bella levanta los brazos al cielo y dice: “¿Cómo nos estás dando un golpe así,

11 ¿Productores o mercachifles?

Hocine?” “Te lo advertí, responde Zahouane y de todos modos este congreso es un escándalo y sigue siendo impugnado”. “Sí, verás, es porque no quería dejar el Congreso en manos de los comunistas”, respondió Ben Bella.

Comunistas para Ben Bella, eran los nacionalistas de izquierda, es decir todos los que se le habían opuesto en la cuestión de la autonomía de los sindicatos y que, sobre el terreno, eran los adversarios de los sindicalistas del PCA.

En la reunión del comité central que siguió al congreso de la FNTT, Saadouni propuso denunciar el congreso de la FNTT. Ben Bella evade la pregunta y no la pone en la agenda. Fue, tras el calvario del Congreso, un momento que reveló las ambigüedades del presidente Ben Bella sobre la cuestión de la autogestión y las ilusiones que en él albergan los diseñadores de los Decretos de marzo. En verdad, el año 1964 se caracteriza por una ofensiva sin cuartel de los partidarios del conservadurismo social y de los estatistas que avanzan enmascarados tras el escudo de la religión. La izquierda, que incluye al partido de la secularización, ha sido acusada de anti-arabismo, anti-islamismo y ateísmo (Documento nº 5)¹². Y, como Ben Bella ve al Islam como el pegamento normativo de la sociedad, ha demostrado ser más sensible a las presiones de sus amigos estatistas que a los intereses fundamentales de la clase trabajadora.

Abril de 2010

¹² *Un artículo antisocialista.*

Documento n ° 1

ACERCA DEL CONGRESO DE TRABAJADORES DE LA TIERRA

La apresurada convocatoria de un congreso de campesinos con vistas a crear una federación nacional dentro de la UGTA es una maniobra cuyo éxito puede resultar desastroso para el movimiento revolucionario en Argelia.

Esta maniobra tiende a: liquidar la autogestión y los Decretos de marzo legalizando la burocratización y vigilancia del sistema; tomar por sorpresa los esfuerzos que están comenzando a hacer los elementos revolucionarios del movimiento obrero para crear un verdadero sindicato de trabajadores de la tierra, un sindicato que agrupe y organice a los trabajadores agrícolas y campesinos pobres con miras a la reforma agraria popular; asegurar el control de la burocracia policial en el próximo congreso nacional de la UGTA introduciendo una “federación” que estaría representada por una avalancha de delegados [...]; liquidar las perspectivas revolucionarias sembrando confusión en las mentes de la gente, afirmando perentoriamente que la revolución socialista “ya está consumada” y que las contradicciones que se han manifestado no son más que simples “tensiones” que deben resolverse en una aberrante unión orgánica y sindical de “trabajadores del campo, ejecutivos técnicos y empleados del Ministerio de Agricultura”.

En nuestra opinión, la batalla que debe librarse en el marco de este congreso es una batalla decisiva, cuyo resultado marcará el desarrollo de la situación futura. Si la burocracia antisocialista y policial del Ministerio de Agricultura tiene éxito en su maniobra, los elementos revolucionarios del movimiento sindical y del Partido sólo tendrán un campo de acción muy limitado. [...]

En efecto, la maniobra de la burocracia del Ministerio de Agricultura y los elementos burocráticos de la UGTA consiste en esto: convocar un congreso de “delegados no representativos” y bautizarlo al mismo tiempo “segundo congreso de autogestión agrícola” y “congreso constitutivo de la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGTA”; obtener la aprobación por este congreso de un “reglamento interno de un dominio autogestionado” que liquide de hecho autogestión y la reemplace por “participación de los trabajadores en la gerencia”; [...] lograr el control de la burocracia policial sobre esta federación sindical, organizando tanto a los partidarios de la autogestión como a los liquidadores de la autogestión, es decir “los ejecutivos técnicos y empleados del Ministerio de Agricultura”; asegurar de esta federación una mayoría de delegados al próximo congreso nacional de la UGTA.

¿Se trata de un congreso de los trabajadores de la tierra?

De acuerdo con los estatutos de la UGTA, los trabajadores que ya sean miembros de la UGTA y que acrediten que han

pagado sus cotizaciones con regularidad pueden constituirse como “federación profesional”. Sin embargo, con el pretexto de que “el principio de la UGTA quiere que defendamos a los sindicatos y no sindicatos”, se mantuvo el principio de “representación por áreas” (un delegado por seis áreas). Tanto trabajadores sindicalizados como no sindicalizados participaron en la designación de los delegados. Por estatutos, el congreso no es ni puede ser un “congreso constitutivo de una federación nacional de la UGTA de los trabajadores de la tierra”. ¿Por qué esta confusión? Durante la sesión del 29 de noviembre de 1964, Belhamissi declaró: “Para nosotros es importante crear esta federación para que haya hermanos que cuiden seriamente a los trabajadores de la tierra. Lo principal es configurar estructuras. Esta declaración descubre el estancamiento: no se trata de convocar a trabajadores sindicalizados pertenecientes a la misma categoría de profesiones a formar en sindicatos regionales primero y luego en federación nacional, se trata de crear sindicatos. Estructuras para que *los hermanos se ocupen de los trabajadores de la tierra.*”

¿Quién cuidará de los trabajadores de la tierra?

El artículo 1 del proyecto de estatuto declara: “De conformidad con los estatutos de la UGTA, la Constitución de la República Argelina Democrática y Popular y la Carta de Argel, se ha formado una federación sindical entre campesinos,

gerentes técnicos y empleados del Ministerio de Agricultura, tomando el título de Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra. No hay necesidad de buscar más la respuesta a nuestra pregunta: son “los ejecutivos técnicos y empleados del Ministerio de Agricultura” quienes se ocuparán de los trabajadores de la tierra; tanto más cuanto que la presión de facto de la burocracia policial se volverá irresistible tras la liquidación de la autogestión, liquidación que está en la agenda del congreso “constitutivo”. [...]

Burocratizar y vigilar la autogestión para asegurar una mayoría de delegados al próximo congreso nacional de la UGTA.

De hecho, el objetivo perseguido por la burocracia policial es: [...] asegurar, mediante la participación de “ejecutivos técnicos y empleados del Ministerio de Agricultura”, un control de facto sobre esta federación; hacer que los trabajadores de la autogestión participen “en masa” en esta federación infiltrada para asegurar una mayoría de delegados en el próximo congreso [...].

[Las] instrucciones del Ministro de Agricultura garantizarían que la burocracia policial tenga representación mayoritaria en el próximo congreso nacional de la UGTA (2.000 delegados teniendo en cuenta sólo los 200.000 trabajadores de “autogestión”). Sin necesidad de un “golpe de Estado”, sin

necesidad de medidas “ilegales”, la burocracia policial puede asegurar “democráticamente” el nombramiento del líder central y su secretariado. Pero mientras tanto, es necesario que la burocracia policial encuadre a los trabajadores de la autogestión. Esto está asegurado por: la participación en la misma federación de trabajadores y “gerentes técnicos y empleados del ministerio”; la introducción de un proyecto de reglamento interno de un área autogestionada que de hecho liquida la autogestión. Cabe señalar también que el proyecto de informe elaborado con miras al “congreso constitutivo” evita hablar de “gestión directa”, principio básico de los decretos calificados como históricos de marzo de 1963¹³. Por otro lado, habla en varias ocasiones de “la participación activa de los trabajadores en la gestión y administración”.

El proyecto de reglamento interno crea órganos adscritos al director, que sustituyen “directamente” y transfieren todas las responsabilidades de gestión que antes eran delegadas al Consejo de trabajadores; y el comité de gestión se transforma en una “junta de homologación”. [...]

Denunciar la maniobra

La apuesta, por tanto, va más allá de la autogestión, que ya está más o menos castrada. Lo que está en juego es político. Su objetivo es disciplinar a una organización nacional: la UGTA. Por eso, a toda costa, los militantes revolucionarios

13 Decretos que instituyen los Comités de Gestión vacantes en la empresas agrícolas.

deben mobilizarse para frustrar la maniobra de la burocracia termidoriana. [...]

Documento n ° 2

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA PRENSA ESCRITA Y ORAL

Hocine Zahouane

[...] La prensa nacional debe reafirmar que el Congreso de los Trabajadores de la Tierra, para ser válido, debe respetar estrictamente los estatutos de la UGTA. Esto supone: a) que los delegados al Congreso han sido elegidos democráticamente, que son en consecuencia la emanación del colectivo de los trabajadores [...]; b) que estos delegados son trabajadores que comparten [...] las condiciones de vida y de trabajo de las masas trabajadoras que se supone que representan.

El Partido recuerda que sólo bajo la estricta condición de que se apliquen estas reglas de la democracia revolucionaria, los trabajadores tendrán confianza en el sindicato [...], que permitiría el desarrollo de la producción y la movilización en el entusiasmo por el progreso de la realización de la revolución socialista.

[...] Confiar en los trabajadores es evitar sistemáticamente someterlos a la tutela de un burocratismo paternalista que ignora la voluntad de los trabajadores y muchas veces la burla.

La prensa nacional debe reafirmar enérgicamente el principio que el Partido ha escrito en la carta y que declara que la autogestión es el medio para que las masas trabajadoras emerjan gradualmente sobre el plano político y económico para constituirse como una fuerza dirigente. Esto resalta la importancia del papel que el Partido otorga a las masas y también la importancia de la autogestión como medio de promoción.

El Congreso de los Trabajadores de la Tierra no puede ir en contra de esta exigencia histórica, que se ha convertido en la exigencia fundamental de las masas trabajadoras. En la autogestión, los productores son los dueños de su destino. No encargan a nadie hacer la revolución por ellos. [...]

Con motivo de [este congreso], es necesario que la prensa nacional recuerde el principio de la alianza inquebrantable entre los trabajadores del campo y los de las ciudades. Querer oponerse a unos u otros, es [...] trabajar para debilitar a ambos, es asestar un golpe fatal a la revolución socialista. [...]

23 de diciembre de 1964

Documento n ° 3

¿CÓMO FUE EL CONGRESO DE CAMPESINOS?

[...] Reunidos en pequeños grupos, [los delegados] discutieron sin interrupción. A veces con calma, a menudo con pasión. Se discutieron varios temas: cuándo se iba a realizar el congreso, cómo se elegían los delegados, etc. De vez en cuando, los abucheos aumentan y los delegados amenazan con retirarse. Aquí, un delegado de los trabajadores es desafiado por funcionarios de ONRA. Allí, un delegado de la ONRA es rechazado por los trabajadores, quienes disputan que sea un trabajador agrícola. [...] Escuchamos a un trabajador de Orléansville decirle a un funcionario de la ONRA: “Vende el 404, quítate los guantes, ven a arar con nosotros; entonces estarás con nosotros.”

Todas estas diferencias no nacieron en el Congreso. Se habían manifestado en los pre-congresos que se desarrollaron de manera diferente.

Algunos pre-congresos salieron bien. En otros, la burocracia eligió a los delegados sin tener en cuenta la opinión de las bases.

[...] Se leía en los rostros las expresiones de tensión, de descontento; los campesinos con turbantes blancos y amarillos

agitaban los brazos y decían que no aceptarían caminar como ovejas bajo los palos de la burocracia. Solo se calmaron con la llegada del secretario general del partido, el hermano Ben Bella, a quien recibieron con una tormenta de aplausos y vítores. [...]

Ben Bella comienza su discurso diciendo: “No pertenezco ni a la agricultura ni a la UGTA, pero diré una palabra sincera. Este congreso hizo realidad uno de nuestros sueños, el de ver a los trabajadores del campo organizados en una Federación. Habéis tomado decisiones en vuestro primer congreso. La mayoría de estas decisiones no se han implementado. He venido aquí para hablaros sinceramente sobre nuestras deficiencias”. Después de preguntarse: “¿Se aplica la autogestión?”, El presidente responde: “No: los trabajadores todavía no están desempeñando su papel; la asamblea de trabajadores, el comité de dirección, el consejo de trabajadores no están cumpliendo las funciones definidas por los trabajadores, tales como están definidas por los Decretos de marzo y la Carta de Argel.”

A continuación, se leyeron los informes en francés. Los fellahs protestaron pidiendo la traducción, que a menudo era en árabe literario, que los fellahs no podían seguir ni comprender claramente. Se tradujeron algunos capítulos importantes; pero desde el fondo de la sala los fellahs gritan: “No entendimos nada, hablemos en nuestro idioma”.

A continuación se leyó el informe de orientación, que es el más importante porque resalta los puntos principales de la autogestión, ya que precisamente limita el papel de los

sindicatos revolucionarios en el nuevo régimen. En este informe se dice que “la agricultura representa una gran parte de nuestra producción nacional. La UGTA debe organizar a todos los trabajadores de la tierra para que la revolución agraria continúe hasta el final porque solo nuestro éxito en este campo puede ayudarnos a industrializarnos. Los que se oponen abierta o discretamente a la toma de los medios de producción por parte de los trabajadores son unos saboteadores”. El informe continúa diciendo que el papel de los sindicatos es organizar a las masas trabajadoras y guiarlas en la lucha por una mayor producción.

El segundo día [...] los trabajadores se levantan y piden a sus compañeros que abandonen el congreso en protesta por la presencia de delegados no electos. Una gran parte de los delegados se levanta y camina hacia la puerta. Pero la oficina de convenciones logra calmar a los delegados.

A lo largo del Congreso, los abucheos, los gritos, las acusaciones se repiten por todos lados. [...]

El delegado de Annaba tomó la palabra. Critica el proyecto de estatuto de la finca autogestionada que pone a las organizaciones bajo la autoridad del director. Pregunta, si no hay secretos, que expliquemos a qué apuntamos con este estatuto. (Este estatuto fue retirado después de plantearse la oposición de la mayoría).

Essaif al Arbi (de los Aures) comienza su discurso diciendo: “Queremos libertad. Estamos en contra de la opresión. Rechazamos todo paternalismo burocrático. Queremos

escuelas para nuestros hijos y escuelas de formación para trabajadores agrícolas de vanguardia. Queremos subsidios familiares para trabajadores agrícolas y distribución de las ganancias, así como almacenes para la conservación de los productos agrícolas”.

Boudhraa Abdellah (Constantine) denuncia primero la contrarrevolución apoyada por la reacción interna y externa. Luego pide al Partido y al gobierno que respeten los Decretos de marzo y apliquen todas las decisiones del primer congreso y la Carta de Argel (“que es nuestra linterna en la oscuridad”). Continúa: “Hay trabajadores que aún viven bajo la dictadura de los déspotas, los funcionarios, los enemigos de los pobres y los débiles. Los Decretos de marzo otorgan a los trabajadores el derecho a administrar la finca. Pero los trabajadores no controlan las granjas. Le gustaría que los servicios agrícolas presentaran cuentas a los trabajadores y que los trabajadores controlaran estas cuentas. Los trabajadores pueden aplicar los Decretos de marzo, pero algunos funcionarios lo impiden.”[...] Propone formar cooperativas de consumo en grandes fincas o en grupos de fincas cercanas y crear fábricas para procesar productos agrícolas. [...]

Pide que se lleve a cabo rápidamente la siguiente etapa de la reforma agraria como exige la Carta de Argel, para expropiar a los grandes propietarios [...]. Antes de finalizar su discurso, que los congresistas vitorearon en pie, concluyó: “Hermanos, ustedes conocen todas las presiones y opresiones que ejerce la administración. Vamos a luchar contra el despotismo sea cual sea su origen. Los trabajadores que tienen derecho a asistir al Congreso y a llamarse trabajadores agrícolas son los que se

entregan al frío y al sol, que sudan arando y cosechando. Y estos son los que defienden los derechos de los trabajadores. En cuanto a los que dan órdenes, con las manos en los bolsillos, no son nuestros. [...] “

Hamdache Bouelam (Aïn–Temouchent): “Dicen que nos pagan 800 francos. Pero recibimos 750 francos de los que nos quitan el seguro social del que no nos beneficiamos [...]. Nuestros niños han sido expulsados de las escuelas porque no están limpios y no tienen zapatos.

Pero no podemos comprarles zapatos. Golpea la mesa gritando: “Esto es contrario a la Constitución socialista que todos votamos”. Continúa: “¿Por qué el funcionario del sector agrario recibe 120.000 francos mensuales? Sumad, hermanos, asignaciones familiares y vivienda gratuita y coches estatales; mientras que los trabajadores de la tierra y especialmente los temporeros sólo trabajan de seis a siete días al mes debido a la lluvia y reciben 735 francos por jornada laboral.”[...] Reanuda: “El hermano Ben Bella liquidó a Ben Gana y Borgeaud. Y nosotros, debemos liquidar a los burgueses que nos gobiernan. Y el hermano Ben Bella debe ayudarnos contra estos ghouls (lobos). Dadnos democracia y os mostraremos cómo los derrotamos.” (Los congresistas se levantan y gritan a coro: “¡Los venceremos, los venceremos!”)[...] Continúa: “Hermanos, los burgueses del 404 quisieron comprarme, pero no pudieron. Porque nosotros somos trabajadores, siempre con los trabajadores y contra la burguesía, se encuentre en la administración o en otro lugar. No le estamos pidiendo al gobierno que nos dé a nosotros, ni a los temporeros, lo que no puede darnos. Pero

queremos que le quite a los vientres gordos para dárselo a los pobres”. Salió de la tribuna gritando: “¡Viva el socialismo! ¡Vivan los obreros de la tierra! ¡La verdad! (*¡Assah fi Assah!*) ¡Abajo los opresores!”

Los trabajadores se levantan, gritan, bailan; sus turbantes se deshacen, una parte en el suelo y la otra todavía en la cabeza. Un ambiente de delirio. Repiten a coro (y ritmo) las consignas lanzadas por Hamdache.

Belkacem Ouiche (Orán) pide la nacionalización de las estaciones de productos agrícolas y desarrolla su propuesta.

Ben Daoud Mohamed (Saïda): “[...] Sesenta y tres comités de gestión me han encargado decir que todavía estamos colonizados por la burguesía”. [...]

Benkhedda Ayache (Aïn–Temouchent): “Durante dos años, hemos trabajado la tierra como los colonos. Queremos que de este congreso surja una unión revolucionaria y fuerte que imponga nuestras propias decisiones y los Decretos de marzo.”[...] Luego grita: “Los funcionarios de la ONRA vienen a nosotros en sus 404 y nos dicen que no hay dinero para dar trabajo a los desocupados. Todavía nos están colonizando. Debemos luchar por nuestros derechos y nuestras leyes dondequiera que estén. Hermanos, soy el delegado del trabajador pobre. No soy delegado del Ministerio de Agricultura. Esta federación debería ser la federación de trabajadores de la tierra y no la federación del ministerio de agricultura.” [...]

Bougheffa Djelloul (Sidi-Bel-Abbès) [...] hablando de las acciones de la burocracia: “Un bulón cuesta 3.000 francos, nos cobraron 30.000 francos. ¿Cómo se quiere que la autogestión tenga éxito con estas personas? En cuanto al dinero de las verduras, no sabemos quién se lo tragó”. [...]

Darbal Allaoua (Sétif) pide [la creación de] sindicatos campesinos y cooperativas de consumidores para luchar contra los especuladores. [...]

Larbi Mohand (Tiaret) interviene en nombre de los funcionarios del ministerio. Acoge con satisfacción el artículo 41 que prevé sanciones contra los “trabajadores refractarios”. En su opinión, el trabajador debe ser ante todo militante del partido para tener derechos.

Ben Ressay Ahmed (Tlemcen): “Hay burgueses que han tomado las tierras de la autogestión.”

Ahmed Mabrouk (Al Asnam) denuncia los diversos métodos de sabotaje ejercidos por la burocracia contra la autogestión. “Ejemplo: tenemos huertos de granadas con un precio en fruta de 7 millones de francos. Pero ONRA pidió 20 millones para que nadie los compre. Y eso es lo que pasó. Las granadas se pudrieron en los árboles. De 17.000 árboles, podríamos haber obtenido mil quintales. Pero solo vendimos 300 quintales. El resto se pudrió en el lugar. Es sabotaje. Y después de eso, venimos a decir que los trabajadores no trabajan. Hace dos meses que trabajamos día y noche sin que nos paguen. Nos enviaron un especialista en cosecha. Hermanos os juro que ni siquiera sabe recoger tomates. He

estado haciendo este trabajo durante treinta años. Y me dice que no sé cómo hacerlo. [...] Debo decir con franqueza: no aceptemos la dictadura de los funcionarios. [...]"

Adjali A bdelkader (Al Asnam): "Estamos aquí en nombre de los trabajadores y para los trabajadores. Estamos en contra de la presión sobre los delegados. Queremos que se apliquen la Carta de Argel y los Decretos de marzo."

Documento n ° 4

¿Productores o mercaderes?

Hocine Zahouane

Las palabras a veces delatan confusión. En el campo de la lucha, cada partido busca darles un significado acorde a sus intereses. La historia de nuestro movimiento revolucionario contiene ejemplos de esto.

En el momento de la conquista colonial de nuestro país, Bugeaud buscó apaciguar la resistencia de Abd El Kader dándole lecciones sobre la interpretación del Corán. “Tu libro sagrado”, le dijo, “te permite deponer las armas si las fuerzas enemigas son superiores a ti.” A lo que nuestro gran resistente respondió que conocía suficiente religión para aprender lecciones de un incrédulo. Poco antes del estallido del 1º de noviembre de 1954, Jacques Chevalier, entonces señor de la colonización, clamó la ira de Dios sobre las cabezas de los nacionalistas argelinos, enemigos de la paz social y el orden público, siempre interpretando versos del Corán.

Es decir, el lenguaje no es una cuestión de opciones, sino de la sociedad en general. Es el uso que hacen los hombres lo que le da sentido. Tras la adopción de la Carta de Argel, y en un

momento en el que su aplicación tropieza con una serie de obstáculos, el significado de las palabras adquiere un rostro combativo. Seamos claros. Esto no es una riña de niños o preciosas peluqueras, es el problema del futuro de la revolución, por lo tanto, el de todos los militantes y las masas trabajadoras.

Entre las palabras que han sido engalanadas y que tocan el arsenal de nuestro lenguaje revolucionario, una acaba de adquirir dimensiones protagonistas en el “congreso” de los trabajadores de la tierra en Ben-Aknoun. La interpretación que se hace de ella corre el riesgo de cuestionar los fundamentos ideológicos de la Carta de Argel: es la noción de productor.

¿Qué es un productor? ¿Qué es un productor según se define en la Carta de Argel? La respuesta es simple, aunque puede ser difícil si queremos entablar una disputa a nivel lingüístico, a nivel de etimología de las palabras. Sin embargo, lo que nos interesa aquí no es el razonamiento de un gramático, es el razonamiento dialéctico el que debe hacernos situar el sentido de las palabras como desean los enemigos del socialismo por un lado y, por otro lado, como lo entienden los socialistas genuinos.

Para mayor claridad, tomemos las diferentes posiciones históricas del productor. En un régimen de esclavitud, el esclavo pertenecía, él y lo que producía, a su amo. Es comparable a un instrumento de producción. La preocupación del amo era solo asegurar el mantenimiento físico del esclavo como se aseguraría el mantenimiento de una máquina. La historia nos dice que en ciertas minas de América del Sur se

alimentaba a los esclavos con frijoles, un bien que tenía la propiedad de evitar su rápido agotamiento.

Bajo el régimen feudal, el siervo estaba obligado a producir para mantener al amo y asegurar su mantenimiento físico. En un régimen capitalista, el trabajador vende su fuerza de trabajo sobre la base de los acuerdos establecidos con el patrón. En los tres casos, la separación es claramente clara entre el productor y el amo de la producción, entre el esclavo y el amo, el trabajador y el patrón. En los tres casos, el productor no tiene el control de su producción. Lo que difiere es sólo el margen de su producción que el amo le concede para reparar su fuerza física gastada en el trabajo, ya sea en forma de frijoles para los esclavos, parcelas para el siervo o salario para el trabajador.

En el régimen socialista, el productor es dueño de su producción. Es él quien, organizado socialmente con otros productores, decide luego la naturaleza y el destino de su producción. Aquí, se nos dirá, surgen preguntas: ¿mediante qué sistema de organización el productor se hace dueño de su producción?; ¿Dónde está la separación entre productor y no productor? La respuesta a estas preguntas es que:

1. El productor se hace dueño de su producción por la institución de la propiedad social a través del Estado que debe ser un cuerpo de administradores construido por los mismos productores, y que deben estar sujetos a la voluntad de los productores y no por encima de ellos.

2. La separación entre productores y no productores es precisamente la que existe entre trabajadores directamente

vinculados a la producción, es decir, aquellos cuya fuerza de trabajo se transforma en bienes materiales, y por otra parte el cuerpo de los directivos que no produce, sino para gestionar la producción en nombre de la comunidad. La autonomía que existía entre el patrón y el trabajador corre el riesgo de cambiar simplemente de aspecto si el gerente se arroga derechos políticos y rehuye la dependencia de los trabajadores.

Ahí radica la razón de la existencia de sindicatos en un régimen socialista. Porque la explotación del hombre es ante todo la imposición de condiciones de trabajo, y por tanto de vida, ya sea a través de capital o por función.

Si los directivos al servicio del Estado obrero, por tanto dependientes de los trabajadores y no por encima de ellos, irrumpen en los sindicatos de productores y los caporalizan, entonces no hay socialismo. Solo hay un cambio de forma en la explotación de los trabajadores.

Pero, dirán estos gerentes, nosotros también somos parte de la sociedad; ¿nuestros problemas donde se resuelven? Los verdaderos productores estarán tranquilos para contestarles: “Te pagan con cargo al presupuesto del Estado, tus salarios son fijos y de ninguna manera se ven afectados por el volumen o la calidad de la producción.

Para protegerte contra posibles decisiones deshonestas, tienes órganos de apelación y posiblemente tus sindicatos de funcionarios. Es así como deben plantearse los problemas a nivel de las relaciones entre los productores y sus sindicatos y el órgano de dirección. Esta es la única manera de garantizar

que los productores sean realmente productores dueños de su producción y no solo un producto básico que podría manipularse para fines ajenos al socialismo. Así es como salvaguardaremos los principios de la Carta de Argel.

Fuente: *The People*,

28 de diciembre de 1964

Documento n ° 5

UN ARTÍCULO ANTISOCIALISTA

En la edición árabe de *Revolución y Trabajo*, órgano de la UGTA, del 26 de octubre de 1964, Hocine Zahouane, jefa del comité de orientación del FLN, pudo leer con sorpresa una supuesta “carta de lector” condenando “el socialismo que instauró el judío Karl Marx”. “¿Por qué entonces”, leemos, “todo este ruido y esta conmoción en torno a la lucha de clases?” Esta mercancía importada de Marx y Lenin no tiene cabida en la Argelia musulmana que se ha confiado al destino y la presidencia de Dios... Nuestro socialismo árabe–musulmán rechaza la lucha de clases, prohíbe la abolición de las clases, respeta la propiedad privada”. El editor en jefe del periódico “sindicalista”, T. Chafaï, fue, encarcelado durante 48 horas, por orden de Zahouane, por haber incluido esta homilía y la propia revista fue incautada. Pero su verdadera inspiración no fue otra que Safi Boudissa, tanto uno de los secretarios nacionales de la UGTA como el dudoso empresario de las llamadas “cooperativas” de Blida. Durante la última remodelación del gabinete, Boudissa no recibió menos ascenso: ahora es ministro de Trabajo de Argelia.

DECRETOS QUE ESTABLECEN COMITÉS DE GESTIÓN EN EMPRESAS AGRÍCOLAS VACANTES

Artículo 1. Cada empresa agrícola vacante que comprenda más de diez trabajadores se constituirá en un Comité de dirección compuesto por al menos tres miembros. Este comité será elegido por todos los trabajadores que habitualmente trabajan en la empresa así como por los combatientes, activistas y víctimas de la represión que sean instalados en la empresa por orden de la prefectura.

Art. 2. El Comité de gestión elegirá entre sus miembros a un Presidente que declarará la constitución del comité a la autoridad prefectural responsable de emitir su aprobación.

Si se aprueba la comisión, el Presidente cumple las funciones de director–gerente previstas en el artículo 11 de la ordenanza 62–020 de 24 de agosto, relativa a la protección y gestión de los bienes vacantes.

Art. 3. Durante la vacancia de la empresa, el Presidente del Comité de dirección velará, en su calidad de consejero delegado, y en lugar del propietario, la gestión de esta empresa.

En particular, podrá comercializar los productos de la finca y contratar con las entidades de crédito agrario los préstamos

necesarios para su correcto funcionamiento, todo ello de conformidad con las leyes y normativa vigente.

Art. 4. Todos los recibos efectuados por el Director gerente deberán depositarse periódicamente en las cajas registradoras de los establecimientos bancarios o de crédito legalmente constituidos; el Director gerente sólo podrá retirar las cantidades necesarias para las necesidades de operación, previo acuerdo escrito del departamento contable o su representante.

Art. 5. Los trabajadores y empleados de la explotación recibirán el salario legal correspondiente a su empleo. Participarán en la gestión de la empresa por intermedio del Comité de dirección en las utilidades resultantes, en las condiciones que se definirán posteriormente.

Art. 6. En caso de regreso del propietario, la autoridad de la prefectura decidirá las condiciones para su reinstalación. En todo caso, el Comité de dirección seguirá ejerciendo los derechos que le reconoce el artículo 5 de este decreto.

DECRETOS DE AUTOGESTIÓN DE EMPRESAS INDUSTRIALES Y MINERAS

Artículo 1. Las empresas industriales y mineras, así como las explotaciones agrícolas vacantes, serán autoadministradas por los siguientes órganos: 1. la Asamblea general de trabajadores; 2. el Consejo de trabajadores; 3. el Comité de gestión; 4. el Director.

Sin embargo, por decisión del Presidente del Directorio, determinadas empresas u operaciones de importancia nacional pueden integrarse al sector público y ser administradas por organismos públicos o semipúblicos o empresas nacionales.

Art. 2. La asamblea general de trabajadores está integrada por trabajadores permanentes de la empresa o de la explotación, elegidos de acuerdo con los criterios definidos en los artículos 3, 4 y 5. El número de sus miembros se define anualmente según el grado de desarrollo e intensificación del negocio u operación.

El plan de desarrollo e intensificación del negocio u operación está de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo.

Art. 3. Para ser miembro de la Asamblea general de trabajadores, el trabajador debe reunir las siguientes condiciones: ser de nacionalidad argelina; [...] tener como recurso principal, únicamente el producto de su trabajo en el

negocio u operación; ser un trabajador permanente en el negocio u operación; tener una presencia ininterrumpida de al menos seis meses. (Sin embargo, los trabajadores permanentes que hayan abandonado la empresa o la explotación como resultado de la lucha por la liberación están exentos de esta última obligación).

Art. 4. Los trabajadores temporeros no pueden ser miembros de la asamblea general ni gozar de los derechos y prerrogativas inherentes a esta calidad.

Art. 5. El Director, previa consulta a los servicios competentes y al consejo municipal para la animación de la autogestión: elabora la relación de miembros de la asamblea general de trabajadores y les expide las tarjetas de afiliación; y determina anualmente el número óptimo de trabajadores permanentes, técnicamente necesarios para la realización del programa económico de la empresa o la explotación.

Art. 6. Cada miembro de la Asamblea general de trabajadores tiene derecho a un voto. [...]

Art. 8. La Asamblea general de trabajadores debe ser convocada por el Consejo de trabajadores o el Comité de dirección al menos una vez cada tres meses. Puede ser convocada extraordinariamente por iniciativa de un tercio de sus miembros. [...]

Art. 9. La Asamblea general de trabajadores: aprueba el plan de desarrollo del negocio u operación en el marco del Plan Nacional así como los programas anuales de equipamiento,

producción y comercialización; adopta normas sobre la organización del trabajo y sobre la definición y reparación de tareas y responsabilidades; aprueba las cuentas de fin de año; y elige, si es necesario, el Consejo de trabajadores.

Art. 10. El Consejo de trabajadores, elegido entre los miembros de la Asamblea general de la empresa o del holding, tiene como máximo 100 miembros y al menos un miembro por fracción de 15 trabajadores, sin que el mínimo sea inferior a diez.

Art. 11. Al menos dos tercios de los miembros del consejo de trabajadores deben estar directamente involucrados en la producción de la empresa o de la explotación. [...]

Art. 12. Los miembros del Consejo de trabajadores son elegidos por tres años y su mandato es renovable cada año por tercios.

Art. 13. El Consejo de trabajadores se reúne al menos una vez al mes por decisión del Comité de dirección. No obstante, podrá reunirse en asamblea extraordinaria a iniciativa de un tercio de sus miembros.

Art. 14. El consejo de trabajadores: [...] decide sobre la compra y venta de equipos en el marco del programa anual de equipos adoptado por la Asamblea general; sin embargo, el valor del patrimonio inicial no debe disminuir; decide sobre préstamos a largo y medio plazo, en el marco del plan de desarrollo adoptado por la asamblea general; decide sobre la exclusión de miembros sujetos a apelación a la asamblea general; decide sobre la admisión de nuevos trabajadores

permanentes [...]. En caso de falta de asesoramiento, el Director podrá ocupar su lugar. La admisión de nuevos trabajadores debe realizarse, con carácter prioritario, entre excombatientes o víctimas de la represión; examina las cuentas de fin de ejercicio antes de su presentación a la junta general; elige y supervisa el Comité de gestión.

Art. 15. El Comité de dirección se compone de tres a once miembros elegidos entre sus miembros por el consejo de trabajadores, al menos dos tercios de los cuales deben estar directamente involucrados en la producción. El Comité de dirección nombra a un presidente de entre sus miembros cada año. La renovación se realiza cada año al final del ejercicio y por tercios, como se dice para el Consejo de trabajadores.

Art. 16. El Comité de dirección asume las tareas de dirección del negocio u operación y en particular elabora el plan de desarrollo del negocio u operación en el marco del Plan Nacional, así como los programas anuales de equipamiento, producción y comercialización; establece normas sobre organización del trabajo, definición y distribución de tareas y responsabilidades; establece las cuentas de fin de año; prepara las decisiones del consejo de trabajadores; decide sobre préstamos a corto plazo en el marco del equipo anual, producción y marketing; decide cómo comprar los productos necesarios para el suministro, como materias primas o semillas etc., como parte del programa de producción anual; decide cómo se comercializan los productos y servicios; aborda problemas de producción, incluida la contratación de trabajadores estacionales.

Art. 17. El Comité de dirección se reúne al menos una vez al mes y con la frecuencia que los intereses de la sociedad así lo requieran, convocado por su Presidente. Podrá admitir en sus reuniones, y con carácter consultivo, a miembros del Consejo o de la Asamblea general y trabajadores susceptibles de desarrollar propuestas y sugerencias previamente sometidas a la Comisión de dirección y relativas al funcionamiento de la empresa.

Art. 18. Para que el Comité de dirección pueda deliberar válidamente, deben estar presentes los dos tercios de sus miembros, incluido el Director. Las decisiones se toman por mayoría simple de los presentes. En caso de empate, el del presidente es decisivo. [...]

Art. 20. El Director: representa al Estado dentro de la empresa u operación; asegura la legalidad de las operaciones económicas y financieras del negocio u operación; en particular: se opone a los planes de explotación y desarrollo que no se ajusten al Plan Nacional; se opone a su veto en caso de no aplicación de los artículos 3, 4 y 5; se opone a la disminución del valor inicial de los medios de producción de la empresa o la explotación; asegura, bajo la autoridad del Presidente, el funcionamiento diario del negocio u operación aplicando las decisiones del Comité de dirección y del Consejo de trabajadores [...].

Art. 21. El Director es miembro *ex officio* del Comité de dirección con derecho a voto. Nunca podrá ser Presidente. El Comité de dirección puede encargarle que presente informes al Consejo y a la Asamblea general.

Art. 22. El Director, que debe presentar las cualidades morales y profesionales requeridas para su cargo, es designado y convocado por el órgano de control, previa aprobación del consejo municipal para la coordinación de la autogestión. Sólo podrá ser relevado de sus funciones como consejero por falta grave o incompetencia manifiesta o si el consejo municipal de animación de la autogestión le retira el visto bueno.

Art. 23. En cada municipio se crea un Consejo municipal para la animación de la autogestión, integrado por los presidentes de los comités de gestión, un representante del partido, la UGTA, la ANP y las autoridades administrativas del municipio. Si es necesario, se puede crear una junta intercomunal en lugar de los consejos comunales sin poder sustituirse más de cinco consejos. Un representante del organismo regulador podrá asistir a todas estas reuniones.

Art. 24. El Consejo municipal para la animación de la autogestión, asiste en la creación y organización de órganos de gestión de empresas o explotaciones; interesa a los trabajadores en cuestiones de autogestión; coordina la actividad de las empresas y operaciones de autogestión del municipio; pide la asistencia técnica y financiera del organismo supervisor en términos de gestión y control y concede y retira su aprobación al consejero designado por el órgano de control [...].

Art. 25. El Consejo municipal de animación de la autogestión elige a su Presidente entre los presidentes de las empresas y explotaciones autónomas. Se reúne por iniciativa de su presidente, al menos una vez cada tres meses.

Art. 26. Los miembros de los Consejos de trabajadores, de los Comités de dirección de empresas y fincas o de los Consejos comunales de animación de la autogestión no pueden percibir ninguna retribución particular por el cumplimiento de sus misiones, entendiéndose que el tiempo dedicado a las deliberaciones y el trabajo de estos órganos se considerarán como parte de su trabajo normal y se retribuirán en la misma base.

Art. 27. Los miembros de los órganos mencionados ejercen las funciones que les han sido atribuidas únicamente durante las reuniones de los órganos de los que son miembros y no podrán ejercer dichas funciones fuera de las sesiones de dichos órganos, salvo que sea expresamente por mandato de los mismos organismos del que dependen.

Art. 29. Las disposiciones de este decreto son exigibles desde su publicación y deben tener plena y completa vigencia en el plazo máximo de un año¹⁴.

Marzo de 1963

14 Proyecto de Ley sobre el Sistema Nacional de Autogestión.

DECRETOS SOBRE LAS REGLAS PARA DISTRIBUIR LOS INGRESOS DE LAS FINCAS Y EMPRESAS AUTOGESTIONADAS

Artículo 1. El ingreso anual de cada granja o empresa de autogestión es igual a la producción anual de esta empresa, es decir, la masa de bienes y servicios producidos por ella durante un año, menos los gastos operativos distintos de la remuneración del trabajo. El método de cálculo y las reglas de valoración se establecerán reglamentariamente.

Art. 2. Los ingresos anuales así determinados se dividen en dos grandes grupos: los beneficios a la comunidad nacional y los ingresos propios de los trabajadores de la finca o de la empresa autogestionaria.

Art. 3. Los beneficios para la comunidad nacional consisten en retiros para el fondo de amortización financiera de la finca o la empresa de autogestión. El monto y el uso de este impuesto está fijado por reglamento. No obstante, la empresa podrá quedar parcial o totalmente exenta de este gravamen por parte de la autoridad de control, si las circunstancias económicas, internas o externas así lo requieren. [...]

Art. 4. Los ingresos propios de los trabajadores de la finca o de las empresas de autogestión, incluyen: la remuneración de los trabajadores no permanentes de la finca o de la empresa de

autogestión, en particular, los salarios y beneficios proporcionados a estos trabajadores, de acuerdo con las leyes sociales; la retribución básica de los trabajadores fijos, fijada por la autoridad de control, por puesto y sobre la base de estándares mínimos de productividad; bonificaciones por desempeño otorgadas a los trabajadores permanentes en función del desempeño por puesto y por equipo. Estos bonos son establecidos por el Comité de gestión y deben ser aprobados por la autoridad supervisora. Se les paga periódicamente en la medida en que la producción efectiva de los trabajadores supere las normas mínimas previstas [...].

Los sueldos básicos y las bonificaciones por desempeño se otorgan en efectivo o en especie mediante los productos de la empresa u operaciones de autogestión cuyo valor se calcula a precios de mercado. Las condiciones de pago las fija el Comité de gestión con el acuerdo del Director; [...] un resto para distribuir. El Consejo o, en su caso, la Asamblea general de trabajadores, determina su distribución. Podrá decidir retirar de este saldo las cantidades destinadas a: el fondo de inversión para la operación o la empresa de autogestión; al fondo social del holding o de la empresa de autogestión (vivienda, equipamiento para la educación, esparcimiento, salud, mutualidad, participación en fondos municipales, sindicales, cooperativos, etc.); a cualquier reserva o disposición que estime necesaria. El saldo se reparte al cierre del ejercicio entre todos los miembros de la Asamblea general de trabajadores, en proporción a la retribución básica más las bonificaciones por desempeño, otorgadas a los miembros de esta Asamblea.

Sin embargo, es posible que la Asamblea general de trabajadores, a propuesta del Comité de dirección, realice una deducción de este saldo, antes de su distribución, en beneficio del Director y miembros del Comité de dirección como bonificación por buena gestión. Si el flujo de caja de la empresa o la operación de autogestión es ajustado, el director puede decidir que las sumas a pagar a los miembros de la Asamblea de trabajadores se registren dentro de la empresa hasta que sus recursos en efectivo permitan una liquidación efectiva. Esta regulación nunca puede conducir a un aumento del endeudamiento de la operación o de la empresa de autogestión frente a terceros.

Art. 5. Si los ingresos anuales de la finca o de la empresa de autogestión no le permiten cumplir con sus obligaciones para con los trabajadores y la comunidad nacional, definidas en los artículos 3 y 4 anteriores, el Comité de dirección deberá tomar las medidas de reorganización necesarias, a propuesta del Director. Estas medidas se someten al Consejo y a la Asamblea general de trabajadores.

Art. 9. El miembro de la Asamblea general de trabajadores que abandona la empresa o la operación de autogestión, por cualquier motivo, no tiene derecho al fondo de inversión, fondo social, amortización económica, reservas de la empresa y provisiones. Salvo que haya sido excluido por falta grave, participará *pro rata temporis* en la distribución de los ingresos netos.

CIRCULAR SOBRE EL MÉTODO DE ELECCIÓN DE CONSEJOS DE TRABAJADORES Y COMITÉS DE DIRECCIÓN

Oficina Nacional de Animación del Sector Socialista

De cara a la instalación de los primeros consejos y comités de gestión [...] previstos y en el marco de la campaña nacional que se iniciará próximamente para la reorganización democrática de las organizaciones de autogestión, es necesario tomar las precauciones necesarias y medidas siguientes:

1. Una Comisión electoral compuesta de tres a cinco miembros nombrados por unanimidad por los trabajadores para cada empresa o finca o por municipio en el caso de fincas pequeñas, será responsable de la elaboración de las listas electorales y de la votación. Ningún miembro de esta comisión puede ser candidato a las elecciones.

2. Las elecciones de los consejos de trabajadores y comités de dirección se basarán en listas de candidatos elegidos entre quienes tienen derecho a considerarse miembros de la Asamblea general de trabajadores.

3. Estas listas serán elaboradas por los representantes de la UGTA en cada empresa o holding, o por grupo de trabajadores, o de forma conjunta.

4. En el caso de empresas u holdings de hasta cincuenta trabajadores fijos, cualquier posible grupo de diez trabajadores tendrá derecho a presentar su propia lista completa o parcial de candidatos al Consejo de trabajadores o al Comité de dirección (en el caso de que un Comité de dirección sea elegido directamente) distinto al posiblemente presentado por la UGTA.

5. La elección de los Comités de gestión por los Consejos de trabajadores también se basará en listas. Cada miembro del Consejo de trabajadores tiene derecho a proponer una lista de candidatos al Comité de dirección.

6. Las listas de candidatos a consejos de trabajadores o comités de dirección, una vez constituidas, son aprobadas por la Comisión electoral que las adscribe a la empresa u operación [...].

El día de la votación, la Comisión electoral procederá al voto secreto por papeleta. Cada papeleta debe contener los nombres de todos los candidatos, por separado para cada lista. En la papeleta de votación, el votante marca al candidato por el que está votando encerrando en un círculo el número de serie que precede al nombre del candidato y elige de entre las distintas listas, un número equivalente al número de miembros del consejo de trabajadores o del comité de dirección.

7. Si el elector es analfabeto, podrá acudir a la mesa de votación acompañado de un miembro de la Comisión electoral de su elección, quien le ayudará a indicar, en la forma indicada,

el nombre del candidato de su elección. Luego, él mismo coloca la papeleta en la urna.

LA CARTA DE ARGEL

Partido del Frente de Liberación Nacional

La dinámica global de la lucha social, tal como se manifestó después de la liberación, trabaja a favor de una apertura socialista de la revolución. La inmensa mayoría de la población campesina y obrera vive en condiciones de extrema pobreza. [Se tomaron medidas por el poder para ir en la dirección de la transformación radical de la sociedad]. Estas medidas [...] se vieron aceleradas por el hecho de la abrupta desaparición de la clase propietaria del país representada por la población europea.

Es en la interacción de estas condiciones objetivas donde debemos buscar el origen del decreto de nulidad de transacciones que expresaba la decisión del poder de frenar el crecimiento de fuerzas hostiles al socialismo, impidiéndoles acaparar el patrimonio nacional recuperado gracias a los sacrificios de campesinos y trabajadores durante la guerra de liberación.

Es también en esta interacción de condiciones objetivas donde debemos buscar el origen del movimiento de “Comités de gestión” que constituyen una continuidad de la revolución a través de las medidas de las autoridades político–militares de

la posguerra. El movimiento impulsado, institucionalizado por el poder, resultó en el actual sistema de autogestión, principal característica en Argelia de la apertura al socialismo.

La autogestión expresa la voluntad de las capas trabajadoras del país de emerger en el escenario político-económico y constituirse como una fuerza líder. En el plano económico, la autogestión planteaba la necesidad de la extensión de la reforma agraria y las nacionalizaciones, tanto en la agricultura como en la industria y la reorganización del comercio exterior e interno, así como del sistema bancario. En el plano político, plantea las relaciones recíprocas del Estado, el partido, los sindicatos y las masas en una nueva perspectiva que implica el desarrollo constante del carácter democrático de todas estas instituciones en sus relaciones con las masas. La indispensable democracia socialista debe manifestarse y materializarse en la existencia en la base de auténticos órganos democráticos para la gestión de la economía, auténticos órganos populares para la administración democrática de los municipios, auténticos sindicatos democráticos y una administración eficiente, controlada por las masas.

Es en la autogestión donde el desarrollo ininterrumpido de la revolución nacional popular en una revolución socialista se ha manifestado y se manifestará, planteando todos los problemas económicos y políticos resultantes de la transición en curso del colonialismo al surgimiento de un Estado que recorre un camino hacia el socialismo. En este proceso, el papel de los trabajadores urbanos junto a los trabajadores agrícolas en el sector autogestionado será cada vez más decisivo, ya que los cimientos sociales del poder revolucionario solo pueden ser las

masas trabajadoras aliadas con los campesinos pobres del sector tradicional y los elementos intelectuales revolucionarios.

La naturaleza del poder revolucionario es ser defensor de los intereses de las capas trabajadoras que constituyen sus bases sociales, por lo que no puede dejar de chocar con las capas privilegiadas que incluyen por un lado a todos aquellos que, en cualquier grado, tampoco, ostentan la propiedad de los medios de producción y, por otro lado, la burguesía burocrática.

Problemas de transición y tareas Edificación

Plantear el problema del capitalismo en términos puramente económicos y no ver la contradicción entre gobernantes y ejecutores es condenarse a hacer del socialismo una receta para la acumulación primitiva y perder así su significado humano. El socialismo no es solo una determinada organización de la producción, es la recuperación de la sociedad por parte de los individuos que la componen y su libre desarrollo. El socialismo no se define únicamente por la nacionalización de los medios de producción. También y sobre todo se define por la autogestión, una verdadera solución a la doble contradicción de la propiedad privada y la separación entre control y ejecución.

El período de transición es cuando la organización política de la sociedad se prepara para el socialismo a partir de la abolición de la explotación del hombre por el hombre, el establecimiento de bases materiales y sociales para un rápido desarrollo de las fuerzas productivas y una liberación de la actividad creadora de

los trabajadores. Ninguno de estos aspectos puede ser privilegiado a expensas de los demás porque es un todo indisoluble.

Estas condiciones generales implican la construcción de un Estado popular que exprese la voluntad de las masas de construir el socialismo y que organice la defensa de las conquistas revolucionarias al mismo tiempo que anima una política dinámica en las relaciones con otros pueblos.

La tarea principal de tal estado es preservar los experimentos socialistas actuales, ayudarlos a superar las dificultades inevitables, intervenir en el sector privado para acelerar su socialización y compensar la falta de gestión directa cuando esta no sea posible, sin perder nunca de vista que este rol directivo –excepcional– es un paso intermedio para preparar la autogestión orgánica.

Estas condiciones previas preparan la industrialización, pero no resuelven el problema por sí solas. En países con una estructura esencialmente agraria, existe una demanda de los campesinos para mejorar su suerte en comparación con el antiguo estado de cosas. Este requisito, que se traduce en un aumento del consumo, conduce por tanto a una reducción del excedente social. Surge una contradicción, cuya solución debe abordarse con toda claridad.

Compensar la reducción del excedente social mediante la búsqueda de ayuda extranjera compromete, incluso, la independencia nacional. Organizar la sociedad según sus limitaciones para obtener una rebaja autoritaria del nivel de

vida es abrir el camino a una burocratización que es la negación misma del socialismo.

Por otro lado, lo que hay que evitar es que el privilegio técnico se convierta en un privilegio político y que los ejecutivos, organizados en capas particulares, organicen la empresa según un modelo tecnocrático. También aquí la solución radica sobre todo en la aplicación de la autogestión.

El principio esencial del período transitorio es que los mismos medios no pueden utilizarse indistintamente al servicio de no importa qué fin.

Existe una relación intrínseca entre los instrumentos que usamos y el resultado que obtenemos. No se puede desarrollar una nueva sociedad sobre la base de métodos y estructuras que son parte del desarrollo capitalista. El principio de la división de la sociedad en esferas dominantes que dirigen y las masas que ejecutan es el principio mismo de la sociedad capitalista.

Las preguntas de la nueva sociedad son: “¿Quién controla y sanciona la obligación de trabajar?” ¿Quién marca las pautas? ¿Quién gestiona la producción? Si las respuestas organizan una separación entre la categoría social responsable de gestionar el trabajo de otros y los productores, el socialismo se ve comprometido. Solo la colectividad organizada de trabajadores puede asumir tal tarea. Solo ella puede establecer planes que sean algo más que diagramas artificiales, alcanzables solo en el papel, solo ella puede, a un problema

colectivo, dar una solución colectiva. Este es el significado de la autogestión.

El programa de transición es el paso necesario en la realización de las condiciones materiales y humanas del socialismo. La escasez económica justifica la división del trabajo, pero ella no puede justificar la persistencia de la explotación de ninguna forma.

En tal período, el problema de la remuneración y los beneficios sociales otorgados a las capas dominantes y los aparatos estatales es muy importante. Sería ilegítimo que se estableciera una casta privilegiada, tanto por satisfacción de prestigio como por situación económica. Por otro lado, un gasto generoso no solo empeoraría las dificultades de la acumulación, sino que crearía una base para el descontento y la explicable contestación.

La autogestión es el principio mismo de esta sociedad. En ella se ligan el fin de la explotación, la comprensión por cada trabajador de su actividad porque la función económica y la función política se vuelven inseparables; el interés directo del productor en su producción, es decir, todo lo contrario del trabajo asalariado. En ella se realiza el inicio del reinado de la libertad.

La reforma agraria

La reforma agraria debe tener en cuenta las aspiraciones de los fellahs de poseer tierras de las que han estado frustrados durante demasiado tiempo. Sin embargo, una simple redistribución parecería una empresa antieconómica si no se complementara con medidas que conduzcan a la superación de esta forma de apropiación. En una primera etapa, la organización de un sistema cooperativo parece la mejor manera de ir más allá de esta forma de apropiación y permitir un fortalecimiento de la productividad general; especialmente porque una tradición comunitaria secular favorece tal evolución.

Este sistema cooperativo debe estar abierto a todos los pequeños agricultores que encontrarán los medios para desempeñar un papel cada vez más importante en la vida y el desarrollo económico del país. La idea es integrar gradualmente esta masa extremadamente importante del pequeño campesinado en todas las actividades nacionales. Sin embargo, no debemos perder de vista que este sistema cooperativo representa, en cualquier caso, una forma de organización más rudimentaria en comparación con la organización socialista que es la autogestión. El objetivo debe ser la transformación gradual de estas cooperativas en organizaciones de autogestión. Durante el período de convivencia de los dos sistemas, el partido y el gobierno deben

asegurar que la transición a la autogestión, que excluye la coerción, sea para el campesino una promoción.

La industria

Las estructuras industriales legadas a Argelia por la colonización están muy poco desarrolladas. Se trata fundamentalmente de talleres, pequeñas industrias alimentarias y unos complejos de tamaño medio (Cristalería norteafricana, Acilor, etc.) dedicados, para su abastecimiento, a la buena voluntad del mercado francés. Al contrario de lo que sucedió en el sector agrícola, sólo una pequeña parte de este débil establecimiento industrial, se ha situado en autogestión. Esta situación de inferioridad, junto con los medios de acción de que dispone el capital extranjero particularmente interesado en la industria, hace que el sector autogestionario sea especialmente vulnerable.

Este sector tiene que defenderse de fuerzas mucho más poderosas que las que se oponen al desarrollo del sector agrícola autogestionado. Por tanto, parece que la defensa, consolidación y desarrollo del sector industrial autogestionado debe ocupar principalmente al Partido y al gobierno. Sin embargo, el desarrollo del sector industrial autogestionado supone no solo la orientación y la transformación progresiva del sector industrial privado sino la creación por parte del Estado de nuevas empresas industriales.

La planificación

El desarrollo económico del país depende de la planificación. Esto es necesario para compensar el retraso acumulado. Pero ella no es una panacea. Mal concebida, no cimentada sobre bases estructurales y económicas reales, agrava el atraso en comparación con el país industrializado.

A nivel técnico, la planificación está vinculada al conocimiento exacto del estado del país, las necesidades regionales, las necesidades prioritarias y la verificación permanente del funcionamiento del plan para que se corrijan sus defectos. La exactitud de la información es un problema fundamental ya que las oficinas tienden a ser complacientes y creen que el desarrollo teórico equivale a logros concretos. Esta circulación de información no puede tener lugar sin la participación directa de los trabajadores interesados en el plan.

Desde el punto de vista económico, la planificación requiere la movilización y centralización del excedente económico, es decir, de lo que en valor de producción excede lo necesario para el consumo de los trabajadores. Esta movilización y centralización puede tomar dos formas complementarias: en manos del Estado para las empresas que están directamente bajo su gestión, por un lado; en manos del sector autogestionado y las cooperativas de producción por otro lado. Requiere el uso de excedentes de tal manera que los trabajadores vean los efectos de la planificación muy

rápidamente, de lo contrario seguirá siendo un objetivo externo que no incentivará su esfuerzo.

No hay plan posible sin la participación consciente y activa de los trabajadores. Esto es tanto más cierto en los países subdesarrollados donde hay pocos medios y cada esfuerzo de la población es de importancia decisiva. Esta participación debe hacerse no solo para la defensa de la planificación frente a sus adversarios, ni solo para el control de la ejecución, sino también y especialmente para la elaboración del plan. Por lo tanto, no podemos separar las organizaciones de planificación y las organizaciones de autogestión.

16–21 de abril de 1964

EGIPTO

LOS TRABAJADORES TOMAN LAS COSAS EN SUS MANOS

Jano Charbel

Cansados de la inacción del gobierno en la renacionalización de sus empresas, pero validados por la justicia, algunos trabajadores intentaron tomar cartas en el asunto a través de experiencias de autogestión, lo que los llevó a ver que el gobierno se oponía activamente a sus esfuerzos.

Las autoridades pusieron fin a un experimento de este tipo en la Compañía Tanta Flax, cuya renacionalización se esperaba desde hacía más de dos años. El 15 de marzo, Simo (Middle East Paper Company) se convirtió en la séptima empresa en ser renacionalizada por orden judicial desde finales de 2011. Sin embargo, las autoridades aún no han vuelto a poner en funcionamiento esta empresa en el sector público ejecutivo.

No podemos pagar el alquiler ni alimentar a nuestras familias. Rápidamente estamos perdiendo toda esperanza, ya que no parece haber una preocupación real por parte de las autoridades, ni una voluntad real de resolver nuestras

demandas. Más de 500 empleados están muriendo lentamente a medida que nuestro negocio está paralizado. Apelamos desesperadamente al Estado para que salve nuestro negocio.

El tribunal administrativo dictó sentencias que revocaron las privatizaciones de Tanta Flax Company, Nubariya Seeds Company, Shebin al-Kom Textile Company y Nile Cotton Ginning Company, así como Nasr Steam Boilers Company y la cadena de grandes almacenes Omar Effendi. Según las expectativas del Tribunal, estas empresas de servicios públicos se vendieron a inversores privados entre 1990 y 2010 a un precio muy por debajo de su valor real de mercado. No gestionadas ya por inversores, privados o públicos, estas empresas y sus trabajadores han quedado en gran parte en el limbo. A excepción de las tiendas Omar Effendi, y en una menor medida de la Shebin al-Kom Textile Company, el estado no ha invertido en la renacionalización o reactivación de estas empresas.

Con la esperanza de recuperar sus puestos de trabajo y ver reiniciar sus fábricas, los trabajadores de estas siete empresas han presentado demandas y organizado protestas y sentadas para exigir la vuelta al trabajo durante tres años. Las demandas se produjeron cuando altos funcionarios estatales, –incluidos el primer ministro Ibrahim Mehleb, Maré Chal Abdel Fattah al-Sisi y el ministro de Trabajo Nahed al-Ahsry–, exigieron que los trabajadores dejaran de protestar y hacer huelga y ayudasen a la recuperación económica reanudando la producción.

Pero estos llamamientos a la vuelta a la producción les suenan a chino a muchos trabajadores. “Son palabras vacías a la atención de los medios”, dice Hecham al-Oql de la empresa Tanta Flax and Oils, quien agrega que los trabajadores quieren “que nuestros negocios funcionen, pero el gobierno nos impide volver a ponernos en marcha”.

Después de años sin salario, los trabajadores de Tanta Flax fueron el último grupo en intentar autogestionar sus fábricas.

Experiencias de autogestión

El 19 de marzo, decenas de ex trabajadores relanzaron dos de las diez líneas de producción de Tanta Flax. Cuando la noticia del reinicio de la fábrica se difundió fuera de los muros de la empresa, las autoridades locales cortaron el suministro eléctrico y el experimento tuvo que terminar después de unas horas. Las fuerzas policiales fueron enviadas a la fábrica menos de dos horas después de haber sido informadas de las acciones de los trabajadores. “Dijeron que simpatizaban y apoyaban nuestros esfuerzos, luego, unos minutos después de reiniciar el trabajo, la electricidad se cortó repentinamente”, dice Oql. Otro ex trabajador, Gamal Othman, explica: “Después de anunciar nuestra intención de autogestionar el negocio, el Holding Company for Chemical Industries llamó a la administración local de servicios públicos en Tanta para que nos cortasen la electricidad”. “A través de la autogestión, nuestra intención era mostrar a la casa matriz que es fácil relanzar las fábricas de la empresa y que teníamos materias

primas para asegurar un mes de producción”, explica, un poco decepcionado, Othman.

Othman agregó que sus colegas y él mismo han buscado presionar a mediados de mayo sobre la empresa matriz y el Ministerio de Inversiones para que cumplan con su promesa de comprar la cantidad necesaria de semilla de lino a los agricultores locales, estimada en alrededor de 7 millones de libras egipcias. “Tememos que si la empresa no compra estos cultivos a los agricultores, se los venderán a otros, y que los planes de reiniciar la empresa antes del próximo año, por lo tanto, nunca se implementen”, advierte.

Tanto la matriz como el Ministerio de Inversiones han hecho declaraciones de que relanzarán la Compañía Tanta Flax en 2015, pero no se ha dado una fecha concreta para esta operación.

Othman critica la incapacidad del gobierno para volver a explotar Tanta Flax y otras empresas varadas:

Las autoridades no deben pagar una indemnización a los trabajadores igual a su salario básico, cuando están sin trabajo y las líneas de producción permanecen paralizadas. Es un desperdicio de recursos estatales. Más bien, las autoridades deberían invertir para movilizar a los trabajadores y sus empresas, ya que esto beneficiará tanto al Estado como a los trabajadores.

Los trabajadores de la empresa Tanta se inspiraron en la exitosa experiencia de autogestión de Nubariya Quel Seed Company, iniciada dos años antes. Estos dos años de

autogestión han demostrado ser fructíferos para la empresa, los beneficios generados se estiman en 10 millones de libras egipcias.



Autogestión en Port Said

Rentable, la empresa Nubaseed se vendió al inversor saudí Abdel Ellah al-Kaaki en 1999, el mismo empresario que comprará Tanta Flax Comp en 2005. Kaaki había detenido todas las inversiones en estas dos empresas en 2011, cuando los trabajadores habían presentado su recurso ante el tribunal administrativo y exigió la renacionalización de la empresa. Sin embargo, la exitosa experiencia de autogestión de los trabajadores de Nubaseed fue detenida a fines de 2013 por el gabinete del ex primer ministro Hazem al-Beblawi, cuando los ministros apelaron contra la sentencia de renacionalización en 2011.

Se espera que el tribunal administrativo emita su veredicto el 12 de abril sobre esta apelación. Según Oql, “la pelota está en

la cancha del Ministerio de Hacienda. Ha estado allí durante casi tres años, pero seguimos esperando la acción.

Con el fin de presionar al Ministerio de Inversiones para que reiniciara nuestra empresa, les informamos que estábamos preparados para trabajar sin paga durante un mes, sin cargo, para que nuestra empresa se recuperase y recuperar nuestros trabajos.

Sin embargo, no tenemos respuesta por parte de ellos, por lo que decidimos probar unilateralmente la autogestión de la empresa”.

El ex candidato presidencial Khaled Ali, quien se ha desempeñado como abogado para la mayoría de las empresas privatizadas mencionadas anteriormente, pidió a las autoridades que el estado permitiese que los trabajadores manejen sus empresas ellos mismos cuando cierren o cuando los inversionistas hayan huido del país.

Entre las experiencias notables de autogestión se encuentra la de la fábrica de bulbos Ramy Lakkah, que duró de 2001 a 2006.

Cuando el propietario y los inversores abandonaron el país, esta experiencia logró aumentar tanto la producción como las ganancias de la empresa. Una vez saneadas sus finanzas, la empresa pasó a manos de su antiguo propietario, Lakkah, a su regreso de Francia.

En este mismo sector industrial, la empresa textil conocida como Empresa Económica para el Desarrollo Industrial se autogestionó con éxito de 2008 a 2010.

Su propietario, Adel Agha, había huido del país y abandonado a más de 500 trabajadores que lograron manejar el negocio ellos mismos. Esta empresa y su empresa matriz Ahmonseto fueron liquidadas en 2010 y cerradas cuando los bancos recuperaron los activos de Agha.

La fábrica de papel Simo

Cuando los trabajadores de Simo consideraron volver a hacer funcionar su negocio, no pudieron llevar a cabo este proyecto porque el gas y la luz estaban cortados desde junio de 2013, ya que los antiguos propietarios no habían pagado sus facturas.

Como en el caso de las empresas mencionadas, el tribunal administrativo determinó que la fábrica de papel Simo, privatizada en 1997 como sociedad anónima, se había vendido a inversores por debajo de su valor real.

Desde junio de 2013, cuando recurrieron ante el tribunal administrativo, más de 500 trabajadores de la empresa Simo, que originalmente empleaba a unos 3.000 antes de la privatización, se encontraban sin trabajo ni remuneración.

“Hemos firmado peticiones dirigidas a funcionarios del gobierno, el Consejo de Ministros y las autoridades locales pidiendo la reactivación de nuestra fábrica, en vano”, dijo

Abdel Ati Gharib, presidente de la sección de cerveza síndica de Simo.

Los trabajadores de Simo protestaron frente a la sede del gabinete con trabajadores de varias otras empresas varadas el 8 de marzo, exigiendo inversiones estatales para que sus negocios vuelvan a encaminarse.

Una moción, presentada por el Holding de Industrias Químicas –que, como la empresa Tanta, debe administrar y supervisar a Simo– contra el veredicto del 15 de marzo, detuvo la renacionalización de Simo.

El tribunal administrativo aún no ha emitido su veredicto sobre esta apelación. “Nuestra empresa es muy rentable y puede volver a operar fácilmente con una pequeña inversión, mantenimiento y pago de salarios”, dice Gharib. “Estamos listos y en condiciones de volver al trabajo y, de hecho, insistimos en ello. Solo queremos recuperar nuestro trabajo y nuestro empleo. “El Ministerio de Trabajo debe pagar a los trabajadores de Simo un mes de salario básico a partir de la próxima semana, según Ghareeb, quien agrega: “Si bien estamos agradecidos por cualquier tipo de ayuda, no estamos pidiendo limosnas ni soluciones temporales. Estamos pidiendo el reinicio de nuestra empresa y la reincorporación de todos los trabajadores cualificados.”

“Los trabajadores de Simo se turnan para dormir en la empresa, ubicada en Shubra al-Khaima, para proteger sus cinco fábricas y evitar intrusiones y robos”, agrega Gareeb.

No podemos pagar el alquiler ni alimentar a nuestras familias. Perderemos la esperanza, ya que no parece haber una preocupación real por parte de las autoridades, o ninguna voluntad real de resolver nuestras quejas. Más de 500 empleados mueren lentamente en la parálisis de nuestra empresa. Pedimos desesperadamente al estado que salve nuestro negocio.

Ghareeb y miles de otros trabajadores recuerdan a las autoridades la decisión de abril de 2013, que condenó al ex primer ministro Hicham Qandil a un año de prisión por no respetar el veredicto de renacionalización de la Nile Cotton Ginning Company. Cuando este último apeló contra este veredicto, su sentencia fue confirmada en septiembre de 2013. El ex primer ministro fue detenido en diciembre de 2013 y actualmente cumple su condena.

Queremos que el gobierno implemente lo que dice para la producción, dice Ghareeb, para ayudarnos a que este negocio vuelva a funcionar, y en cuestión de meses estaremos obteniendo ganancias.

Abril 2014

Traducción: Patrick Le Tréhondat

Fuente: Mada Masr, www.madamasr.com

TÚNEZ

ÓPTIMA EVOLUCIÓN DEL GRUPO SCOP

Colectivo

Optimum Group Evolution es una empresa de telemarketing cuyo jefe ha desaparecido sin preocuparse por el pago de salarios.

Ubicados en una región donde las luchas sociales son una tradición, sus empleados hoy desean hacerse cargo de su empresa en forma de una cooperativa de producción, una situación delicada en un país donde aún no existe este estatus. Nosotros publicamos su declaración aquí.

Declaramos que somos ex empleados de Optimum Group Evolution. Todos trabajamos desde 2009 hasta marzo de 2011 como teleinvestigadores, en particular para grandes clientes como Tunisie Telecom.

Hemos sido abandonados por el dueño de la empresa [...] que nos ha despedido sin pagarnos dos meses de sueldo y ha

cerrado las instalaciones de la empresa sin preocuparse de nuestro futuro.

Actualmente, en abril de 2013, Optimum Group Evolution aún dispone de una plataforma de *call center* totalmente equipada en la tercera planta del edificio perteneciente al centro tecnológico Gafsa en el centro de la ciudad de Redeyef. En este piso hay 40 computadoras equipadas con software de tele-encuesta y que contienen las bases de datos con las que trabajamos.



[El jefe] no ha estado interesado en esas computadoras, software y base de datos durante dos años. Ha abandonado completamente el negocio y no vendrá a Redeyef.

Nosotros, en cambio, estamos sufriendo un paro forzoso y queremos volver al trabajo. Como la herramienta de trabajo de nuestra antigua empresa está en Redeyef y todos vivimos en Redeyef, [...] declaramos nuestra voluntad de retomar los trabajos en la construcción del centro tecnológico de Gafsa en nuestra ciudad.

Estamos formando una cooperativa de producción y declaramos que queremos:

- Reiniciar las computadoras y el software con la ayuda de especialistas informáticos competentes de Redeyef;

- Volver a contactar con nuestros antiguos clientes, en particular Tunisie Telecom, y decirles que estamos listos para reanudar el trabajo con ellos;

- Con la ayuda del Foro de Derechos Económicos y Sociales de Redeyef y Avocats sans frontières, deseamos negociar con MB para encontrar una fórmula legal para asumir el control de la empresa que sea satisfactoria para nosotros y para nuestra antigua dirección;

- Con la ayuda de activistas de la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT) de centros de llamadas, contratar nuevos gerentes y supervisores para administrar nuestra cooperativa;

- Encontrar nuevos clientes para nuestra empresa cooperativa de los centros de llamadas de Redeyef, crear nuevos puestos de trabajo para jóvenes que viven en nuestra ciudad Redeyef.

Para ello pedimos la ayuda de todas las fuerzas militantes de Redeyef, de la cuenca minera, de Túnez y así como la ayuda de nuestros amigos en el exterior para llevar a cabo nuestro proyecto, importante para nuestra ciudad, nuestras familias y nuestro lugar como ciudadanos de Túnez.

Abril 2013

II. AMÉRICA INDO-AFRO-LATINA

UN VOLCÁN DE EMANCIPACIÓN EN CONSTRUCCIÓN

Richard Neville

La América indo-afro-latina, ha sido durante mucho tiempo un caldo de cultivo para experimentos revolucionarios. En los últimos veinte años, como reacción a los estragos de las políticas neoliberales resultantes del consenso de Washington, probablemente se haya convertido en el principal centro de resistencia a la globalización capitalista y a la hegemonía del Imperio. La riqueza y diversidad de estas experiencias permiten calificar al subcontinente como un verdadero laboratorio social. Aparece como una “zona de tormenta” del sistema–mundo capitalista (Gaudichaud, 2013).

En enero de 1994, la insurrección zapatista contra la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) mostró el camino de la resistencia contra las instituciones internacionales. Le siguió una década más tarde la movilización del continente de Alepo contra el Tratado de Libre Comercio de las Américas (TLC) y su fracaso en la cumbre de Mar del Plata en noviembre de 2005. La campaña “500 años de resistencia” con motivo de la *El quinto centenario* de la colonización española en 1992 marca el surgimiento de

movimientos indígenas contra la dominación imperial y oligárquica. Probablemente sea uno de los hechos más decisivos de la América Latina contemporánea. En consecuencia, en Ecuador, luego en Bolivia y más ampliamente a nivel regional, los movimientos indígenas se afirman cada vez más como verdaderos actores sociales y políticos.

América Latina es también, en muchos sentidos, un lugar de innovación política y social. La resistencia al modelo de dominación adopta dos formas: por un lado, mediante la elección de nuevos líderes más o menos reñidos con el dogma liberal y que cuestionan las instituciones existentes y la democracia formal; por otro, reforzando los movimientos sociales que actualizan notablemente la cuestión de la apropiación social. Lejos de ser oponibles, estas dos formas son a veces complementarias, incluso si los vínculos se han debilitado en los últimos años. De hecho, en varios países, la acumulación de fuerzas de los movimientos sociales ha permitido cambios de gobierno o ejercer presión sobre los poderes.

Apenas elegidos, los líderes de Venezuela, Bolivia y Ecuador convocan asambleas constituyentes para cambiar sus respectivas constituciones y reformar fundamentalmente las instituciones estableciendo formalmente la democracia participativa. En esto les precedió la izquierda del Partido de los Trabajadores Brasileños que innovó a nivel de la democracia local al iniciar el presupuesto participativo en la ciudad de Porto Alegre en 1990 y luego en el Estado de Rio Grande do Sul en 1999. Esta experiencia tuvo un impacto mundial, que naturalmente llevará a designar la ciudad de

Porto Alegre como sede del primer Foro Social. Mundial (FSM) en 2001.

Las experiencias continentales impulsadas por los movimientos sociales son diversas. Las formas de organización que son el Movimiento Campesino Sin Tierra (MST) en Brasil, la Confederación de Movimientos Indígenas (CONAIE) en Ecuador, los piqueteros (movimientos de desocupados), los movimientos de recuperación empresarial en Argentina y Uruguay, los movimientos obreros sin techo brasileño y Uruguay, los Caracoles (buen gobierno de los Cons Eils) en Chiapas, la Marcha Mundial de las Mujeres, a menudo están en desacuerdo con las formas tradicionales de lucha del movimiento obrero. Estos movimientos son los lugares para el desarrollo e implementación de nuevas prácticas sociales que favorezcan la democracia activa o directa y la emancipación. Probablemente sea en América Latina donde el movimiento altermundista ha sido el más influyente. Sin lugar a dudas, que ayudó a romper con la lógica de la doctrina Monroe (1823), de romper los silos nacionales y para permitir una articulación continental de los movimientos sociales en los principios del siglo XXI (Algranati, Taddei, Soane, 2011).

Si, durante su historia reciente, el subcontinente se ha convertido en un caldo de cultivo para experimentos inspirados en la autogestión, sería reductivo limitar la riqueza de experiencias a las dos últimas décadas. De hecho, la historia del movimiento obrero latinoamericano está sembrada de luchas que plantearon la cuestión de la apropiación social y las formas practicadas de autoorganización: de la influencia ejercida por los emigrantes anarquistas europeos en la conducción de las

luchas sociales y el cooperativismo en el Cono Sur (1890–1930) (Ferrer, 2004) a las experiencias peruanas y chilenas bajo los gobiernos de Juan Velasco Alvarado y Salvador Allende a principios de la década de 1970 (Raptis, 1973; Gaudichaud, 2013), incluidas las cuatro mil tomas de fábricas en Argentina en 1964 (Mandel, 1973; Moreno, 2005), el cordobazo en Argentina (1969) y la Asamblea Popular en Bolivia (1971) (Lavaud, 1977), hay multitud de “flashes de autogestión” (Iturraspe, 1986). Pero se produjo una profunda cesura con la “noche oscura” de las dictaduras en el Cono Sur (1964–1989) que aniquiló cualquier intento de emancipación durante estos años.

Para este libro, dada la multiplicidad de experiencias, sus impactos y repercusiones en esta región, y más en general en el mundo, teníamos muchas opciones para elegir. Por tanto, es bastante natural que atribuyamos un lugar significativo a la América indo–afro–latina. Obviamente, tuvimos que tomar decisiones drásticas, lo que implicaba carencias y límites. En lugar de retomar experiencias pasadas, favorecemos las experiencias continuas que reclaman la transformación del sistema porque para nosotros la autogestión no es una utopía obsoleta ni una moda pasajera. El único desvío histórico se refiere al papel de los cordones industriales y del Poder popular en Chile en la época de la Unidad Popular presidida por Salvador Allende, que ha sido en gran parte oscurecido por las obras que relatan la historia de la Unidad Popular, con la notable excepción de la obra de Franck Gaudichaud (Gaudichaud, 2013). De este período, nació, por un lado, un ejemplo único de la construcción y diseño de una ciudad construida íntegramente por sus habitantes, la comunidad

urbana autogestionada, Villa El Salvador en Perú (Favreau, 2008) y, por otro lado, la Federación de cooperativas de vivienda de usuarios de ayuda mutua (Fucvam), movimiento popular autónomo, principal organización social uruguaya en el campo de la vivienda popular y el desarrollo urbano (Neuville, 2013), que ha sobrevivido en el tiempo conservando sus valores originales.

Por lo tanto, hemos intentado distinguir entre diferentes formas de prácticas y aspectos de autogestión contemporáneos: socialización e intentos de controlar la economía, economía feminista “descolonial”, formas de participación en instituciones, conceptos de plurinacionalidad e indigenismo, ejercicios de poder popular y antipoder y ocupaciones urbanas.

Si hay empresas recuperadas en varios países como Brasil, México y Venezuela, es el movimiento argentino y, en menor medida uruguayo, el que es a nuestro modo de ver ejemplar por su escala, su anclaje y su vitalidad. También es parte de un proceso histórico y se basa en gran medida en la profunda conciencia del movimiento obrero en este país (Ruggeri, 2015).

El presupuesto participativo implementado en Porto Alegre permitió renovar una democracia representativa ampliamente desacreditada y volvió a poner al pueblo en el centro del proceso de toma de decisiones. Al articular las formas delegada y directa, abrió la perspectiva de la “democracia activa”. Su impacto global “confirma que esta es una de las formas de reconstruir un proyecto socialista” (Pont, 2007). Los últimos gobiernos del estado de Rio Grande do Sul (2011–2015)

persiguieron la innovación democrática con el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación para fortalecer el “poder popular y ciudadano”.

En un contexto de fuerte agitación política y desengaños, Brasil sigue siendo un lugar de resistencia a través de luchas urbanas, *acampamento* en Fortaleza con la Comuna del 17 de abril. (Bajard y Terrié, 2013), en Porto Alegre (Neuville, 2012) o los de junio de 2013 por las demandas reivindicativas de servicios públicos.

El surgimiento del movimiento indígena, y en particular del movimiento andino, fue decisivo en los cambios realizados en Ecuador pero sobre todo en Bolivia. Revelaba una verdadera filosofía de vida con vocación universal con el concepto de “Buen vivir”, que se caracteriza por “convivir en armonía con la naturaleza” (Acosta, 2014). El indianismo, bastante distinto del indigenismo, permitió combatir el modelo de dominación imperial “eurocéntrica” y la discriminación de los Estados–nación al cuestionar la “colonialidad del poder” (Quijano, 2014). Reafirma las identidades mientras conceptualiza la “unidad en la diversidad” como en Bolivia donde la acumulación de fuerzas en resistencia al modelo neoliberal contribuyó a la elección de Evo Morales y estableció una nueva concepción del poder. El Movimiento al Socialismo (MAS) se define a sí mismo como un “movimiento de partido” y una federación de movimientos sociales. Este “instrumento político atípico” ha captado toda nuestra atención a pesar de las limitaciones observadas en su funcionamiento.

La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) ha concentrado los parámetros esenciales de una democracia radical y directa, autogestión, autonomía de sujetos y colectivos sociales. El repertorio de acciones y las tradiciones políticas involucradas han permitido el surgimiento de un nuevo colectivo social en una apuesta radical y alternativa al sistema hegemónico, La Comuna de Oaxaca (Almeyra, 2010).

Luego de su irrupción en 1994, el movimiento zapatista logró actualizar a partir de 2003 “las temporalidades de un pasado común sin dejar de referirse a las temporalidades nacionales y globales de las luchas por la justicia, la democracia y la libertad”. Probablemente sea la experiencia de autonomía más notable.

La clase obrera mexicana no ha quedado al margen del fenómeno de la recuperación de empresas, citemos dos largas luchas emblemáticas que, con veinte años de diferencia, han dado lugar a experiencias numéricamente importantes: la Sociedad Cooperativa de Trabajadores Pascual y la Cooperativa de trabajadores democráticos de Occidente (Tradoc). La primera se estableció a mediados de la década de 1980 en la Ciudad de México y produce zumos de frutas y bebidas. Pascual, que genera alrededor de 5.000 empleos directos, obtiene sus suministros de azúcar de una cooperativa agroindustrial y de frutas de ejidatarios (tierras explotadas en conjunto) mediante contratos de producción (Marañón–Pimentel, 2007). Un ejemplo notable de autogestión, también muestra una solidaridad activa con muchos movimientos sociales en el país. El segundo es una lucha victoriosa de 1.141 días contra la empresa multinacional

de neumáticos Continental Tire, que ha dado lugar a la reanudación de la producción desde 2005.

Finalmente, el “proceso revolucionario” venezolano, en profunda crisis (Lander, 2014), es tratado desde el ángulo de la participación popular en la implementación de las misiones sociales, el desarrollo endógeno de la economía social, el movimiento cooperativo, el control obrero y los ayuntamientos. Todos los cuales han salpicado los primeros años del proceso destinado a conducir al socialismo del siglo XXI...

En los últimos tiempos, como reacción al modelo neodesarrollista generalizado y en un contexto de crisis ecológica y climática, la centralidad de las luchas se ha desplazado hacia la defensa de los bienes comunes naturales. En esta coyuntura, los movimientos sociales se enfrentan a nuevos desafíos estratégicos frente al nuevo orden capitalista y las políticas extractivas implementadas por gobiernos progresistas, inmersos en una nueva fase de “acumulación por despojo” (para usar la expresión de David Harvey). Desde Santiago a México (para educación) vía São Paulo (para transporte), la región no se ha librado de movimientos de revuelta ciudadana, como los que surgieron desde 2010 en cuatro rincones del planeta para denunciar la corrupción política, las élites financieras y la connivencia entre el mundo político y el financiero capitalista (Castells, 2012).

En la América Indo–Afro–Latina, los movimientos sociales han reformado profundamente la noción de autonomía y la práctica de la emancipación. Estas

prácticas de gestión comunitaria han suscitado numerosos debates sobre la valoración de la autonomía y han dado lugar a la expresión y conceptualización del contrapoder (Hardt y Negri, 2000), del antipoder (Holloway, 2002) y del poder popular como parte de una estrategia de control del Estado con cambios políticos (Boron, 2001), incluyendo intentos de doble poder. La diversidad de experiencias actuales demuestra ampliamente la riqueza de las prácticas emancipadoras que se desarrollan en el subcontinente latinoamericano. Expresan relaciones diferenciadas con el poder. Algunos valoran la autonomía, la democracia directa y la apropiación espacial; otros desarrollan prácticas colectivas innovadoras pero también plantean demandas programáticas y por lo tanto desafían a los poderes constituidos y más clásicamente constituyen movimientos de contrapoder.

Finalmente, ciertas experiencias de participación iniciadas por los gobiernos pueden contribuir al ejercicio del poder popular. En su diversidad, los movimientos sociales cuestionan claramente la cuestión de la democracia en estos aspectos económicos, políticos y sociales, ya sea a través del control y gestión directa de la producción, la participación activa en los órganos de decisión o la autoayuda, organización y autonomía. En esto, con matices, se pueden categorizar como movimientos de autogestión (Neuville, 2012).

La América Indo–Afro–Latina está en perpetuo movimiento, es un “volcán” (Gaudichaud, 2008) donde se desarrollan multitud de experiencias y fuentes de “emancipación en construcción” (Gaudichaud, 2013).

La acumulación de fortalezas y experiencias sigue siendo un activo innegable para continuar por el camino trazado durante las dos últimas décadas. A imagen de las empresas tomadas por los trabajadores en Argentina, ¿no habrían dado paso los “flashes de autogestión” de ayer a experimentos duraderos?

Junio 2015

Descubra más:

Acosta, Alberto (2014), *Le Buen vivir, París, Utopía*.

Algranati, Clara, Taddei, Emilio, Seoane, José (2011), “América latina: Balance de una década de luchas y cambios”, CETRI, diciembre.

Almeyra, Guillermo (2007), “Revolución, poder, libertad: la experiencia de la APPO (Oaxaca)”, comunicación al V congreso de Marx Internacional, 3–6 de octubre, La Sorbonne / París 10–Nanterre.

Bajard, Flora y Julien Terrié (2013), “Brasil: La Commune du 17 avril” en América Latina: Emancipaciones en construcción, París, Syllepse, www.syllepse.net/Ing_FR_srub_98_iprod_560-ameriques-latines-emancipations-en-construction.html.

Boron, Atilio, (2001) “La selva y la polis. Reflexiones en torno a una teona política del zapatismo”, Buenos Aires, en Osal / Clacso, n ° 4, junio.

Castells, Manuel (2012), Redes de Indignación y Esperanza, Madrid, Alianza.

Favreau, Louis (2008), “Villa El Salvador: economía solidaria, desarrollo local y coproducción de servicios en un tugurio”, en Duchatell, Julie y Rochat, Florian, Produire de la riche en caso contrario, Ginebra, CETIM.

Ferrer, Christian (2004), Cabezas de tormenta, Buenos Aires, Anacarres.

Gaudichaud, Franck (dir.) (2008), El volcán latinoamericano: izquierdistas, movimientos sociales y neoliberalismo en Latinoamérica, Paris, Textuel.

Gaudichaud, Franck (2013), Chile 1970–1973: A Thousand Days That Shaken the World, Rennes, Rennes University Press.

Gaudichaud, Franck (coord.) (2013), América Latina: Emancipaciones en construcción, París, Syllepse, www.syllepse.net/Ing_FR_srub_98_iprod_560-ameriques-la-tines-emancipations-en-construction.html.

Gaudichaud, Franck (2013), ¡Venceremos! Análisis y documentos sobre el poder popular en Chile (1970–1973), París, Syllepse, www.syllepse.net/Ing_FR_srub_74_iprod_580-venceremos-.html.

Hardt, Michael y Antonio Negri (2000), Empire, Paris, Exils.

Holloway, John (2008), *Changing the world without take power*, París / Montreal, Syllepse Lux, www.syllepse.net/Ing_FR_srub_76_iprod_362-changer-le-monde-without-seizing-the-power.html.

Iturraspe, Francisco (1986), *Participación, cogestión y autogestión en América Latina*, Caracas, Nueva Sociedad.

Lander, Edgardo (2014), “Venezuela: crisis terminal del modelo petrolero rentista? », Septiembre, www.tni.org/en/work-area/environmental-justice.

Lavaud, Jean-Pierre (1977), “La movilización política del campesinado boliviano”, *Revue française de sociologie*, XVIII, 18-4.

Mandel, Ernest, (1973), *Control obrero, consejos obreros, autogestión*, París, François Maspero.

Marañón-Pimentel, Boris (2007), “La cooperativa agroindustrial Pascual en México: Posibilidades y límites de la economía social”, Montreal, CIRIEC / Universidad de Quebec en Montreal (UQAM).

Moreno, Hugo (2005), *Le désastre argentin: Péron isme, politique et violence sociale (1930-2001)*, París, Syllepse.

Neuville, Richard (2013), “Cuatro décadas de luchas de los” urbanos sin tierra “en Uruguay”, en Franck Gaudichaud (coord.) (2013), *América Latina: Emancipaciones en construcción*, París, Syllepse, www.syllepse.net/Ing_FR_srub_98_iprod_560-ameriques-latines-emancipations-en-construction.html.

Neuville, Richard (2012), “Tipología de experiencias de autogestión en América Latina e India”, *AlterAutogestion*, septiembre,

Pont, Raúl (2007), “La experiencia de Porto Alegre”, FondationS, n ° 5.

Quijano, Anibal (2014), Textos de Fundación, Buenos Aires, El Signo.

Raptis, Michel (2009), “Trabajadores y autogestión en Chile y Perú”, Manière de voir, n ° 103, febrero-marzo.

Ruggeri, Andrés (2015), “Ocupa, resiste, produce” Autogestión de trabajadores y empresas recuperadas en Argentina, París, Syllepse.

AMÉRICA ANDINA

COMUNIDADES Y AUTONOMÍA

Richard Neville

La llegada al poder del *indio* Evo Morales constituye un momento histórico especial. Sin embargo, esto no significó el desarrollo de un “indianismo” estrecho y exclusivo, sino el proyecto de una nación abierta a todos, multiétnica y pluricultural, promoviendo la “unidad en la diversidad” en todos los países, a la imagen del Estado Plurinacional boliviano.

Luego de cinco siglos de dominación colonial, imperialista, oligárquica y neoliberal, durante los cuales los recursos naturales de los países de América Latina no han dejado de ser saqueados, el sistema hegemónico imperial y unipolar es cada vez más impugnado. De hecho, el surgimiento del movimiento indígena¹⁵ como actor social y político es probablemente uno

15 En este artículo privilegiamos la utilización de la palabra “indígena” que produce consenso en el seno de las organizaciones sociales y culturales de las poblaciones originales, en vez del término “indio”, que tiene una connotación fuerte y que era el utilizado por los colonizadores.

de los hechos más decisivos de la América Latina contemporánea. En su diversidad, se está construyendo paulatinamente como un movimiento social regional con un contenido universalista y una visión global de los procesos sociales y políticos globales.

El quinto centenario de la colonización española y la campaña “500 años de resistencia” en 1992 fueron para todos los pueblos originarios de América Latina la oportunidad de redescubrir las civilizaciones precolombinas de las que son descendientes y reclamar el reconocimiento de sus derechos. Desde entonces, el movimiento indígena ha dejado de ser un simple movimiento de resistencia para adoptar una estrategia ofensiva de luchas, que incluye plantear la cuestión del acceso al poder en la región andina. Este movimiento emprendió una profunda crítica y rompió con la visión “eurocéntrica” de la estructura del poder colonial. Se presenta como un movimiento de civilización capaz de recuperar el patrimonio de las civilizaciones originales. Ha iniciado un proceso de recuperación de identidades, conocimientos y producción de saberes que le ha permitido resistir más de cinco siglos de dominación. Se ha convertido en sujeto político y en un movimiento portador de un proyecto colectivo y emancipatorio.

Ricas y diversas experiencias de transformación social están cambiando la fisonomía política, económica y cultural de la región, rompiendo con la herencia colonial y la visión occidental dominante. Este proceso de transformación implica la recuperación de la historia, la creación de matrices teóricas y metodológicas para la producción de conocimientos capaces

de dar cuenta de la complejidad y densidad de la realidad social. También implica la recuperación de saberes milenarios y ancestrales, saberes y formas de concebir el mundo para reconstruir la memoria colectiva y construir identidades y proyectos sociales.

La emancipación frente al yugo y la herencia colonial, el progreso y la deconstrucción realizados han demostrado ser fundamentales para estructurar movimientos sociales y políticos capaces de propiciar el surgimiento de otro modo de relaciones sociales. El movimiento indígena ha desarrollado nuevos conceptos como el de Estado plurinacional que cuestiona la noción de Estado-nación, que ha demostrado ser extremadamente discriminatorio. Ha recuperado ciertos valores como el “buen vivir” en armonía con la “Madre Tierra” para reafirmar sus identidades. Se estructura como una unidad geográfica e histórica coordinándose como lo hizo durante el Foro Social Mundial (FSM) en Belém. Sin querer realizar un análisis comparativo, recordamos brevemente que los procesos organizativos y las especificidades varían según los países andinos. Hemos optado por desarrollar el caso particular de Bolivia porque es el proceso más avanzado ya que este país es liderado por un “indio” desde 2006.

En este país, el surgimiento del indigenismo en la década de 1970 contribuyó al despertar de la conciencia y a la estructuración del movimiento campesino e indígena. La acumulación de fuerzas y experiencias de luchas contra el neoliberalismo y el compromiso institucional de los movimientos sociales a través de un “instrumento político” atípico han permitido ver cambios y acceder al poder. La

victoria de Evo Morales es sin duda el resultado de esta conjunción. Al articularse el indianismo, el marxismo y el nacionalismo revolucionario, han dado lugar a una forma de gestión y una nueva concepción del poder que se han impuesto.

El colonialismo y la visión eurocéntrica

Como ocurre con todas las formas de colonización del mundo, la de América Latina se caracterizó por la violencia extrema, el saqueo inconmensurable, un modelo de explotación de los pueblos originarios y la dominación racista y cultural que resume Álvaro García Linera¹⁶:

La colonización organizó toda la zona andina en dos repúblicas, la de los indios y la de los españoles, con legislación separada pero también funciones sociales diferenciadas: tierra, poder político, cultura y lengua legítimas, control de minas, negocios y comercio en manos de los Españoles; trabajo en servidumbre, obediencia, lenguaje de las escrituras, dioses clandestinos y cultura estigmatizada en manos de los indios. La colonización de América, como toda colonización, fue un golpe de fuerza que estableció una división entre dominantes y dominados, poseedores y desposeídos; pero con la peculiaridad de que

¹⁶ Convertido en sociólogo, influenciado por Toni Negri y Pierre Bourdieu, después de haber sido activista

radical (comprometido con el Ejército Guerrillero Túpac Katari), es vicepresidente de la República de Bolivia desde 2006.

la “naturalización” de este brutal golpe de fuerza, su legitimación, su lectura y su justificación, se hicieron en nombre de una supuesta diferencia de culturas (“unos más aptos para gobernar, otros para ser esclavizados”), o de la diferencia de religiones (“unas más civilizadas, otras más profanas”), o de la diferencia de razas (“unas más humanas y racionales que las otras”) (García Linera, 2008: 89).

La tierra de los nativos, que fue expropiada durante la colonización europea, no es solo un medio de producción fundamental. Tiene un significado más profundo en la forma de existencia de los pueblos indígenas: es la “madre que nos acoge” o Pachamama, el espacio donde se crea y se recrea la vida. Esta relación profunda entre el hombre y la tierra como fuente de vida se contraponía radicalmente a la del colonizador que veía la tierra como objeto de posesión y espacio de saqueo y extracción de metales y piedras preciosas; objeto de depredación (Galeano, 1998).

Estos antagonismos produjeron una enorme tensión y sufrimiento entre los pueblos indígenas que fueron despojados de sus riquezas y esclavizados en la minería. La esclavitud en las minas fue uno de los principales mecanismos de exterminio de las poblaciones indígenas. En Potosí, ocho millones de nativos y africanos murieron en la explotación de las minas de plata entre 1545 y 1825 (Galeano, 1998). En unos pocos decenios, las poblaciones indígenas de América Latina fueron diezmadas y reducidas a la mitad.

En el modelo de dominación imperial “eurocéntrica”, que más allá del período de colonización se ha perpetuado a lo

largo de los siglos, la civilización occidental se ha consolidado como el único modelo de civilización del planeta. Este pretendía definir la producción y reproducción de la vida material de los pueblos y la elaboración de sus imaginarios. A pesar de su nivel de elaboración y complejidad, de su grado de desarrollo o de sus aportes a la humanidad, se consideró a otras civilizaciones como culturas que habían quedado rezagadas con respecto al modelo preponderante. Para Mónica Bruckman, “la arrogancia de esta visión justificaba formas violentas de colonización pero constituía una barrera cognitiva que impedía a Occidente reconocer y comprender la complejidad del mundo” (Bruckman, 2009).

Así, se han depreciado conocimientos milenarios, formas de organización más humanas, más respetuosas con la naturaleza y la vida.

El eurocentrismo ha impuesto su ciencia y una forma única de producción de conocimiento. El denominado conocimiento “universal” se considera válido para cualquier período histórico o realidad social del planeta. La noción de modernidad, insertada orgánicamente en la estructura del poder colonial, como forma de existencia social y modo de desarrollo, ha tenido una enorme capacidad destructiva para las sociedades (Quijano, 2005: 9–31). Ha constituido la base de la estructura de poder para imponer la civilización occidental como el único camino hacia el progreso.

La colonización de América Latina genera la acumulación de capital y las bases materiales necesarios para la transformación de Europa occidental en un centro hegemónico del

mundo del siglo XVI (Galeano, 1998). La independencia de los países en los comienzos del siglo XVIII no cambian fundamentalmente el modelo de dominación que sólo tomó otras formas con la Doctrina Monroe¹⁷ y estrategias europeas separadas. En cambio, el revestimiento de Estados–nación en el lugar de las antiguas colonias resultó ser artificial y un nuevo instrumento de dominación sobre los pueblos.

Estados-nación discriminantes y excluyentes

En el sistema capitalista dominante, la idea de interés nacional corresponde a la existencia de una sociedad territorial dominada por una burguesía local que ejerce el poder. En América Latina, antes de la Revolución Mexicana, estas características sólo se correspondían a Chile desde el establecimiento de la República en los comienzos del siglo XIX. Este estado nacional fue creado exterminando a los mapuche. El Estado–nación se consolidó en la década de 1930, bajo el gobierno del Frente Popular, que implicó una especie de pacto político entre la burguesía chilena y los partidos

17 El 2 de diciembre de 1823, el presidente James Monroe enunció la doctrina que llevaría su nombre y sentó las bases de la diplomacia estadounidense durante un siglo y medio. En un largo discurso aparentemente inconexo, desafía directamente a las potencias europeas. Les dice: 1) Estados Unidos habiendo reconocido la independencia de las nuevas repúblicas el año anterior América Latina, América del Norte y América del Sur ya no están abiertas a Colonización europea. 2) Estados Unidos considerará cualquier intervención de su parte en los asuntos del continente americano como una amenaza para su seguridad y para la paz. 3) Por otro lado, Estados Unidos nunca intervendrá en los asuntos europeos. La doctrina de Monroe se puede resumir como "América para los estadounidenses".

políticos representantes de los trabajadores y las capas medias para fortalecer las instituciones de la democracia liberal y burguesa. Estos permitieron que Salvador Allende y la Unidad Popular tomaran el poder en 1971, pero su lealtad a estas instituciones también facilitó su derrota en el golpe de Estado de 1973. La contrarrevolución llevada a cabo bajo la sangrienta dictadura de Pinochet cambió las bases sociales del estado para adaptarlas a la neoliberalización capitalista y las necesidades de la globalización. El resultado es una nueva sociedad capitalista chilena distinta de la boliviana, aunque Bolivia también experimentó feroces dictaduras durante el mismo período. En Bolivia, la demanda de las poblaciones –que fueron precisamente víctimas de Estados no nacionales y no democráticos– no es exigir más nacionalismo ni más Estado sino sobre todo construir otro Estado. Se trata sobre todo de descolonizar este Estado para democratizarlo y avanzar hacia la creación de un Estado plurinacional (Quijano, 2006: 21).

Esta posición desafía radicalmente la posición errónea de la Tercera Internacional que consideraba que todos los países sometidos al Imperio deben tener burguesías nacionales con las que los dominados y los explotados deben aliarse frente a la dominación imperialista. Pese a la oposición de José Carlos Mariátegui¹⁸, que consideraba que no había burguesía nacional en América Latina, la gran mayoría de los partidos de izquierda del subcontinente adoptaron la doctrina del nacionalismo que dominaría durante todo el siglo XX. Para Aníbal

18 José Carlos Mariátegui (1894-1930), filósofo y periodista cuyo pensamiento marcó sosteniblemente el continente sudamericano. Participó en la creación del Partido Comunista Peruano (PCP) y la de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

Quijano: “La colonización del poder en los países andinos había hecho históricamente insostenible el proyecto liberal–eurocéntrico de un Estado–nación moderno” (Quijano, 2006: 22).

El Estado–nación se define como una unidad nacional cuya homogeneización artificial es fuente de discriminación y exclusión cultural (Bruckman, 2009).

Una opinión que no comparten Toni Negri y Michael Hardt, sin embargo, quienes persisten en pensar que cualquier país, sea cual sea el contexto histórico, es por definición una nación y que cualquier Estado central es por tanto un Estado–nación (Hardt y Negri, 2001).

La reafirmación de identidades y la definición de nuevos conceptos

En la década de los noventa, el movimiento indígena emprendió una deconstrucción del modelo de dominación reafirmando las identidades desde sus valores y conceptualizando una nueva forma de Estado y modo de gestión del poder que presentamos sucintamente:

La Pachamama

Luego de varios siglos de resistencia, el movimiento indígena recupera el sentido de su relación con la “Madre Tierra” al exigir respetarla como fuente de vida. Se trata, por tanto, de preservar la Tierra, el medio ambiente, el espacio donde el hombre se beneficia de la flora y la fauna con sentido de respeto y conservación. Esta postura ecológica, que corresponde a una visión milenaria del mundo, coloca al movimiento indígena en una posición progresista para el futuro de la humanidad y del planeta. Requiere que la extracción de recursos naturales y energéticos se lleve a cabo sin devastar la tierra y favoreciendo principalmente a las poblaciones que habitan los territorios. El principio indígena del “vivir bien” define la vida y el ser humano como valores fundamentales para la organización de la sociedad y para un nuevo modelo de desarrollo y un proyecto colectivo de futuro.

El Estado Plurinacional como Proyecto Político

El movimiento indígena desafió la noción de plurinacionalidad, que fue rápidamente adoptada por las fuerzas progresistas en Bolivia y Ecuador. Esta nueva forma de Estado político e institucional, susceptible de ser aceptada por un amplio movimiento político y social, se ha convertido en un eje constitucional prioritario para las asambleas constituyentes. Este proyecto político desafía la visión homogeneizadora del Estado y la tradición política occidental

en América Latina. Este nuevo modelo se considera inclusivo. Basado en el principio de “unidad en la diversidad”, reconoce la existencia de múltiples nacionalidades, culturas, idiomas, religiones y formas de espiritualidad. Incorpora formas comunes de organización y autoridad en la institucionalización del Estado, constituyendo una experiencia política absolutamente nueva en la región.

La descolonización del poder: “mandar obedeciendo”

La organización comunitaria, el principio de reciprocidad y solidaridad son características de ciertas sociedades indígenas precoloniales que han sido retomadas por el movimiento indígena latinoamericano en la práctica cotidiana y como patrimonio y forma de ver el mundo. Al mismo tiempo, se están creando nuevas formas de autoridad colectiva y gobierno comunitario, donde la comunidad gobierna todo y donde el poder del individuo está sujeto al de la comunidad. Una de estas nuevas formas de autoridad y el ejercicio del poder la da el movimiento zapatista en México donde el principio de “mandar obedeciendo” refleja claramente las dos dimensiones de la autoridad. Para Monica Bruckman: Una de las principales tareas emancipadoras es liberarnos del eurocentrismo como visión del mundo y como estructura para la producción de conocimiento. Es necesario recuperar nuestra historia y nuestra memoria colectiva así como el legado de nuestra civilización para construir nuestros propios modelos de desarrollo y predecir el futuro. El movimiento indígena nos ofrece un enorme potencial y, a través de la profundidad de su

proyecto y su praxis, abre un nuevo horizonte histórico en América Latina y en el mundo (Bruckman, 2009).

El movimiento indígena como una unidad geográfica e histórica

Durante la última década, el movimiento indígena latinoamericano ha dejado de ser un conjunto de movimientos locales para convertirse en un movimiento único, articulado y articulador. Está construido en áreas geográficas donde se desarrolló la civilización Inca y las civilizaciones originales que la precedieron y que ocuparon Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Cinco siglos no fueron suficientes para desmantelar una unidad histórica y civilizadora como el Tawatinsuyo de los Incas y sus profundas raíces en los Andes. Los estados nacionales formados a partir del siglo XIX y las guerras de independencia no reemplazaron las profundas raíces históricas de los pueblos locales que se reconocen como quechuas, aymaras o mapuches antes de ser bolivianos, peruanos, ecuatorianos o argentinos.

La reconstrucción de los Andes, como unidad geográfica e histórica de las civilizaciones pre-inca e inca, profundizó el proceso de integración del movimiento indígena sudamericano que, en julio de 2006 en Cuzco, fundó la Coordinación Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) con la participación de los pueblos quechua, ichwa, aymara, mapuche, etc. En esta cumbre, once organizaciones representativas están desarrollando una plataforma de luchas por el movimiento indígena de todo el continente que incluye la construcción de

estados plurinacionales, la defensa de los recursos naturales y energéticos, el agua y la tierra, los derechos colectivos de las comunidades indígenas y la autodeterminación de los pueblos como principio fundamental. Es un plan de acción que incluye los principios fundamentales de la convivencia y el respeto por las diferentes culturas, pueblos y nacionalidades.

La creación de espacios de coordinación y articulación del movimiento indígena ha generado una intensa dinámica y una creciente capacidad de movilización a nivel local, regional y continental. En enero de 2009, durante el último FSM en Belém, las organizaciones y redes indígenas adoptaron una declaración llamando a la unidad para articular alternativas a la “crisis de la civilización capitalista occidental”. Los ejes principales son: la tierra como fuente de vida y el agua como derecho fundamental; la descolonización del poder y el autogobierno comunitario; estados multinacionales; autodeterminación de los pueblos; unidad, equidad y complementariedad de género; respeto por las diversas creencias de la vida cotidiana y por la diversidad; libertad frente a la dominación o discriminación racial, étnica o sexista; decisiones colectivas sobre producción, mercados y economía; la descolonización de la ciencia y la tecnología; una nueva ética social como alternativa al mercado (Apelación de los pueblos indígenas, 2009).

El CAOI se ha convertido en un espacio dinámico de articulación política y social que también pretende atender a las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, Centroamérica y Norteamérica, con el fin de ampliar el espectro de unificación, la articulación e integración del

movimiento indígena a todo el continente. Sin embargo, en los países andinos, las configuraciones difieren según la historia y las capacidades organizativas de las fuerzas sociales.

Procesos diferenciados en los países andinos

En Perú, Ecuador y Bolivia, los movimientos indígenas adoptan diferentes estrategias según su peso y alianzas. La relación con el poder no surge en los mismos términos. Un análisis comparativo de los procesos permite percibir mejor estas relaciones.

En Perú, donde la mayoría de la población es considerada “indígena”, los movimientos indígenas no han logrado organizarse como en los países vecinos Bolivia y Ecuador. Esta diferencia se explica por el hecho de que desde 1945 el país ha experimentado una pérdida de identidad, un proceso de urbanización, crisis del Estado oligárquico y quiebra de sus principales expresiones de dominación cultural. La cultura señorial y criolla impuso el término de *métis*. Una proporción significativa de la población que se opuso a esta identificación fue víctima de la “guerra sucia” entre el terrorismo de Estado y Sendero Luminoso entre 1980 y 2000. Durante este período, unas 60.000 personas fueron asesinadas, precisamente campesinos nativos. Esto resultó en una gran desconfianza de estas poblaciones frente a las formaciones de izquierda.

Las únicas comunidades que realmente se han organizado en las últimas tres décadas han sido en la cuenca del Amazonas con la formación de la Coordinación de Organizaciones

Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). Más recientemente, con el impacto de los procesos en curso en Bolivia y Ecuador, las comunidades que enfrentan a las empresas mineras multinacionales han comenzado a identificarse como indígenas y a crear movimientos políticos de identidad (Quijano, 2006: 18–19). Se enfrentan a la política represiva del gobierno que preside Alan García Pérez desde 2006. El 5 de febrero de 2009, Día Mundial del Medio Ambiente en Bagua, el gobierno no dudó en masacrar a las poblaciones amazónicas Awajun y Wami que se oponen a las multinacionales petroleras, del gas, minerales y de la madera (Blanco, 2009).

El movimiento indígena no tiene una verdadera organización social y política. Ollanta Humalla, líder del Partido Nacionalista Peruano (PNP) está tratando de hacerse eco de algunas de sus demandas. Se benefició del apoyo de las poblaciones indígenas del Centro y Sur del país durante las elecciones presidenciales de 2006 donde quedó primero en la primera vuelta antes de ser derrotado por una alianza socialdemócrata de derecha en la segunda vuelta.

Ecuador es el único país donde todos los grupos indígenas han logrado crear una organización común respetando sus diferentes peculiaridades, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) en 1986. También fue el movimiento indígena el que adoptó por primera vez la idea de que la “descolonización del poder no implicaría la destrucción o eliminación de otras identidades resultantes de la historia del Ecuador, sino la erradicación de las relaciones sociales y el

marco de poder, para construir un nuevo modelo intercultural y un nuevo tipo de autoridad política”.

En junio de 1990, bajo los auspicios de la CONAIE, decenas de miles de indígenas paralizaron el país al organizar grandiosas manifestaciones en las ciudades y el campo y al bloquear las principales carreteras de la región andina durante nueve días. Exigieron reforma agraria, política de regadíos, créditos y precios agrícolas equitativos y reconocimiento oficial del carácter plurinacional del Estado. Otros levantamientos tuvieron lugar en 1992, 1994, 1997, 1998, 2000 y 2001. Entre 1997 y 2005, tres presidentes de la República fueron destituidos por movilizaciones populares.

En 1995, considerando que los ejes de su proyecto político, en particular la plurinacionalidad y la autodeterminación, no podían ser satisfechos por el sistema político vigente, la CONAIE decidió dotarse de una estructura política, el Movimiento de unidad plurinacional Pachakutik (PK). Esto debe permitir la autorrepresentación y la participación directa en el sistema político y ser autónomo frente a las organizaciones sociales de las que proviene. Pachakutik se diferencia de otros partidos políticos: ausencia de un líder carismático, estructura colegiada que asocia a líderes indígenas y mestizos, largos procesos deliberativos y renovación del campo político ecuatoriano (Ramírez Gallegos, 2008: 85).

Pero apresuradas alianzas políticas llevaron a los líderes del movimiento a participar en el gobierno del coronel Gutiérrez, lo que resultó ser un grave fracaso y repercutió en la CONAIE. Pachakutik deja el gobierno después de siete meses. Tras un

proceso de renovación organizativa, la CONAIE vuelve a convertirse en el principal representante de la población indígena en el Ecuador. En 2005, jugó un papel fundamental en términos de movilización en el fracaso de la aprobación del tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos y obligó al gobierno a cancelar el contrato de explotación petrolera con la multinacional estadounidense Oxy.

En las elecciones presidenciales de 2006, la mayoría de la población indígena votó por Rafael Correa. Luis Macas, candidato del PK obtiene solo el 2,4% de los votos. CONAIE y PK están a favor de la no participación en el gobierno central y la confederación indígena adopta una posición de contrapoder. En 2008 y 2009, la CONAIE se moviliza para frustrar los proyectos de explotación petrolera en la Amazonia impulsados por el gobierno.

En Bolivia, el “indianismo” –que surgió en la década de 1970 bajo la bandera del Katarismo¹⁹– ayudó a redefinir el papel y la

19 El katarismo, en referencia al líder indígena Tupac Katari que lideró un levantamiento alrededor de La Paz a fines del siglo XVIII, es una corriente que contribuyó a renovar un sindicalismo Campesino boliviano, hasta entonces aliado a los regímenes militares. Sus líderes buscaron luchar contra la cooptación de los líderes sindicales y desarrollar una ideología indianista en la que basar en las luchas. El katarismo ha "reconstruido" una identidad indígena, donde los militares pues los gobiernos del MNR solo querían ver "campesinos". De ahí sigue

una ideología que teoriza la doble opresión del campesino, por su condición económica, pero también por su condición de indígena víctima de discriminación dentro de un estado colonial. Su líderes clave, como Genaro Flores, posteriormente jugaron un papel clave en la lucha por la restauración de la democracia. Los lazos con los militares definitivamente se cortaron con la fundación de la CSUTCB en 1979, y su membresía en la Central Obrera de Bolivia (COB) al año siguiente, el primer paso para construir un sindicalismo de lucha campesina en Bolivia.

influencia que las poblaciones indígenas²⁰ podrían ejercer en una perspectiva de reconocimiento y transformación social. De hecho, los nativos nunca aceptaron el yugo de los vencedores, ya fuera bajo el imperio inca, la colonización española o bajo la república independiente que era sólo la continuación del sistema político–económico de la colonia. En las últimas décadas hay que mencionar en primer lugar el “despertar” aymara de los años setenta que, de alguna manera, preparó la creación del Movimiento al Socialismo (MAS).

En esta época aparecieron los primeros partidos políticos aymaras: el Movimiento Revolucionario Túpac Katari (MRTK) y el Movimiento Indio Túpac Katari (MITKA), ambos referentes al héroe aymara del gran levantamiento de 1780–1782. Estos partidos denunciaron la explotación económica, la opresión cultural y la discriminación racial que sufren los pueblos indígenas. Reclamaron sus tradiciones y culturas, democracia comunitaria y autonomía. Participaron en algunas elecciones, obtuvieron algunos cargos electos y así pudieron resaltar los temas del renacimiento y las reivindicaciones étnicas (Rudel, 2007).

A fines de la década de 1970, los “kataristas” ejercieron influencia sobre la Confederación Sindical Unificada de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), organización

20 Según el censo realizado en 2001 por el antropólogo boliviano Xavier Albó, la proporción de "indígenas" oscilan entre el 55% y el 62% de la población boliviana. El estudio encontró 30% de quechuas, 25% de aymaras que son los dos grupos más importantes que viven en el Altiplano encontramos a los chiquitanos (2,2%) y los guaraníes (1,5%) que viven en al sur del país y finalmente treinta y dos "grupos étnicos", cada uno de los cuales representa menos del 1% de la población población y que viven en la parte amazónica de Bolivia.

que rompió con el dominio militar sobre el mundo campesino. A fines de la década de 1990, el aymara Felipe Quispe Huanca se convirtió en el líder de la confederación campesina. Asociado a sectores de la izquierda urbana, entonces liderada por Álvaro García Linera, participó en la formación de centros de lucha armada al estilo cubano cuyos líderes fueron encarcelados. Al salir de la cárcel, Felipe Quispe creó el Movimiento Indio Pachakuti (MIP) y lanzó el proyecto de una república aymara independiente.

Por su parte, los pueblos indígenas de la vasta región amazónica –unas 800 000 personas– que llevan mucho tiempo enfrentando la requisa de sus tierras por parte de grandes terratenientes de la agroindustria y de la ganadería extensiva crearon la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) para la defensa reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios.

En 1979, el movimiento campesino se reorganizó y creó la CSUTCB. Los sindicatos cocaleros juegan un papel vital en la resistencia activa a las políticas de erradicación de la coca. La izquierda todavía se niega a ceder todo su lugar al campesinado. En 1995, las organizaciones campesinas e indígenas decidieron crear su propio instrumento político bajo el nombre de Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP). Esta nueva organización se basa en las confederaciones sindicales del mundo rural.

El MAS: un instrumento político atípico

El MAS fue creado oficialmente en 1999 (año de su reconocimiento por la Corte Nacional Electoral) con personalidad jurídica de MAS-IPSP (Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos) (Neuville, 2008: 11-25). Por tanto, es un partido reciente pero que se inscribe sin embargo en un tiempo más largo. Siguió a la Asamblea para la ASP creada en 1995. Se define a sí mismo como un "partido-movimiento" y una federación de movimientos sociales (Harnecker y Fuentes, 2008). Fue a partir de la década de 1980 que el sindicalismo campesino y en particular el cocalero surge como una fuerza de gran importancia en la escena social y política boliviana. En 1985, la aplicación de políticas y ajustes estructurales por el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) contribuye al desmantelamiento del sindicalismo obrero y a su reconversión que se orienta hacia los círculos campesinos y *cocaleros* de regiones de Yungas y Chapare. Es en las regiones productoras donde se organiza y fortalece el sindicalismo campesino, con el auge de poder de la CSUTCB, que tuvo éxito en la unificación de los diversos sindicatos campesinos en 1979. En la década de 1990, la promulgación de varias leyes sobre la regulación de la coca por el gobierno de Bolivia, bajo la presión de Estados Unidos, reforzó el sentimiento anti imperialista. Se organizan muchas movilizaciones, como bloqueos de carreteras y marchas que ayudan a fortalecer la solidaridad entre las comunidades rurales e indígenas.

El tema étnico toma un protagonismo cada vez más importante en el discurso cocalero. La defensa de la tierra y la

hoja de coca se convierte en un reclamo identitario y étnico. Evo Morales, ahora líder del partido, es un buen ejemplo de esta doble filiación cocalero y aymara. Los campesinos indígenas no son realmente reconocidos por la izquierda y, desde un punto de vista institucional, esto es lo que los lleva a crear su propio instrumento político. Concebido como una verdadera federación de movimientos sociales con un vínculo orgánico, el MAS es el instrumento que se supone debe representarlos.

Su creación permitió federar organizaciones indígenas andinas, como los quechuas y aymaras, los indígenas de la Amazonía (una treintena de etnias) y los guaraníes del sur. En el acto fundacional del MAS participan cuatro organizaciones: CSUTCB, CIDOB, Confederación de Colonizadores (CSCB) y Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia–Bartolina Sisa (FNMCB–BS). Este partido y sus múltiples componentes se embarcaron rápidamente en el camino de la conquista directa del poder participando en las elecciones. Este es un cambio que marca una ruptura con las estrategias anteriores. Anteriormente, los sindicatos y los movimientos sociales solo servían como “escaleras políticas” para los partidos que luchaban por el poder, y el partido victorioso se olvidaba de estos movimientos y sus reivindicaciones la noche de las elecciones.

Las referencias ideológicas del MAS son diversas, se basan en una compleja articulación entre marxismo, indigenismo y nacionalismo revolucionario (Do Alto y Stefanoni, 2008: 64). Inspirándose en el discurso katarista, se trata de poner fin a la doble opresión: étnica y de clase, de promover la

indianidad en un proyecto multicultural y de recuperar la soberanía nacional. Más que la clase, son las personas las que ocupan un lugar central; un pueblo definido como una especie de alianza de clases para oponerse a las oligarquías. La relación que poco a poco va forjando Evo Morales con las capas media e intelectual simboliza bien esta alianza. La idea de nación se expresa en el rechazo al neoliberalismo y al imperialismo, y es lo que estructura el discurso de los líderes del MAS. Tienen la intención de restaurar el control estatal sobre los recursos naturales y los servicios públicos.

Distinguiéndose de la forma “clásica” de partido, el MAS se caracteriza sobre todo por su originalidad en su funcionamiento, su estructura y sus referentes ideológicos. Concebido como un instrumento político de masas, rápidamente logró conquistar el poder por medios electorales para iniciar una transformación social de la nación boliviana. Su articulación con los movimientos sociales permite controlar el ejercicio del poder e incidir sobre las decisiones fundamentales (Bosetti, 2007).

El MAS lucha contra la persistencia del viejo espíritu colonial, la segregación racial y la ruptura con el modelo económico neoliberal: privatización de empresas nacionales seguida de despidos masivos, aumento del costo de vida, frenar la reforma agraria y concentración de tierras en beneficio de grandes explotaciones agroindustriales, saqueo del bosque subtropical para la explotación de la madera y el desarrollo de la ganadería, destrucción del medio ambiente y el hábitat de los

pueblos indígenas del bosque. Se trata de descolonizar el poder.

La acumulación de fuerzas de resistencia al modelo neoliberal

El año 1985 representó un cambio importante en la situación económica de la izquierda boliviana: las privatizaciones y el desmantelamiento de empresas estatales provocaron despidos masivos y afectaron particularmente las bases militantes de la Central Obrera Boliviana (COB). Veinte mil jóvenes fueron despedidos y la marcha que emprendieron en 1986 fue severamente reprimida. Una gran mayoría se ve obligada a exiliarse e irse a centros urbanos como El Alto ampliando el sector informal o instalándose en las zonas de producción de coca (Yungas y Chapare).

La “guerra del agua” en Cochabamba en 2000 permitió la popularización de este nacionalismo indígena en las zonas urbanas. A partir de esa fecha se multiplican los levantamientos populares contra las políticas neoliberales y las multinacionales que se benefician de esta política. Ya no es la COB la que juega un papel importante en estas movilizaciones sino nuevos actores como la Coordinadora del Agua en Cochabamba o la Federación de Comités Vecinales (Féjuve) en El Alto en febrero de 2005 contra la empresa Aguas del Illimani (propiedad de Suez–Lyonnaise des eaux).

La “guerra del gas” de octubre de 2003 contribuyó a reforzar este neonacionalismo en las ciudades. El rechazo de todas las exportaciones de gas a California a través de un gasoducto que

pasa por Chile resultó en movilización popular impulsada por organizaciones de la ciudad de El Alto, como La Fejuve y la Central Obrera (COR) en conjunto con las organizaciones campesinas del Altiplano. Se elaboró una plataforma de demandas propias de los movimientos sociales conocida como la “Agenda de Octubre”, exigiendo la nacionalización del gas y la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Los días de octubre marcan una ruptura con el sistema político boliviano y la fuerte represión (casi 60 muertos) obligó a Gonzalo Sánchez de Lozada a huir hacia Miami.

En mayo–junio de 2005 estalló una nueva crisis tras la negativa del sucesor de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, a promulgar una ley aprobada por el Congreso que permite la renegociación de contratos con multinacionales que explotan hidrocarburos. A partir de entonces, el gobierno se vio obligado a organizar elecciones en un plazo de seis meses. Tuvieron lugar en diciembre de 2005.

Indeología, Estado plurinacional y nueva concepción del poder

La victoria de Evo Morales y el MAS es el resultado de un cúmulo de luchas populares y una importante radicalización social que han terminado por desacreditar a la clase dominante. Luego del segundo lugar obtenido por estrecho margen en junio de 2002, Evo Morales llegó al poder con el compromiso de implementar la “agenda de octubre”. Esta victoria se hizo posible con la movilización de las “clases

medias urbanas” y en particular de muchos intelectuales de izquierda marxista y nacionalista, como el vicepresidente, Álvaro García Linera.

Se marca un cambio notable en la historia de Bolivia. Por primera vez, un “indio” llega al poder. No es simplemente una victoria de la izquierda, sino la victoria del “indigenismo” después de más de cinco siglos de colonialismo e injusticia. Utilizando formas de lucha institucionales y extrainstitucionales, el movimiento popular indígena logró a través de su instrumento político derrocar a las élites del neoliberalismo que habían monopolizado el poder durante más de dos décadas e inaugurar una nueva hegemonía indígena–popular. Evo Morales hereda un país arruinado donde el Estado ya casi no existe y en el que –por usar una expresión local– hasta los ceniceros de los ministerios han desaparecido. Bolivia se había convertido en un paraíso para los bancos, las multinacionales y las familias de grandes propietarios agroindustriales y mineros.

Para Hervé Do Alto (2007: 84), la victoria del MAS–IPSP también tiene su origen en las luchas que permitieron la Revolución Nacional de 1952. Ciertamente las referencias han cambiado, se invoca más fácilmente al líder indígena Túpac Katari, quien luchó contra los colonizadores españoles en 1780 en vez de a Marx o Marcelo Quiroga Santa Cruz, líder socialista de la década de 1970; y los actores ya no son los mineros sino los campesinos indígenas. Sin embargo, los protagonistas actuales parecen estar impulsados por el mismo *leitmotiv*, el movimiento popular boliviano se basa en un nacionalismo

antiimperialista que apunta tanto a Estados Unidos como a las oligarquías locales.

El proyecto MAS es construir una nueva nación donde todos los hombres sean iguales en la diversidad de sus orígenes étnicos, idiomas, costumbres y creencias y romper así con la actitud imperante desde la colonización que consideraba a los “indios” como seres inferiores. También se trata de asegurar la base económica de la nueva Bolivia y una “vida digna” para todos sus ciudadanos recuperando la soberanía sobre los recursos naturales.

La autorrepresentación de las poblaciones y clases olvidadas se convierte en uno de los ejes centrales de lo que se llama evismo, que no es una doctrina sino un conjunto de medidas y enfoques pragmáticos dictados por las circunstancias, definido como una praxis (García Linera, 2006: 26). El evismo no concibe la representación política a través de la delegación del poder. Es una forma de autorrepresentación política de la sociedad plebeya. Los movimientos sociales ya no constituyen la base sino que se convierten en actores directos que evolucionan de la resistencia al control estatal.

Un segundo factor clave en esta estrategia es una forma de reconstrucción de la identidad y presencia indígena. Frente al indigenismo radical e intransigente de los años setenta, Evo Morales propone un cambio sobre todo cultural. A partir de su indianismo flexible y cultural, puede abrirse a mestizos, blancos, a todos aquellos que deseen construir un nuevo proyecto basado en la nación pero de una manera distinta a lo que propuso el nacionalismo revolucionario de 1952. En esta

nueva etapa, el indígena es un sujeto político autónomo que propone un nuevo modelo de nacionalismo, una nación multicultural bajo la bandera de la “unidad en la diversidad”.

En la práctica, las bases económicas de este nuevo proyecto se basan en la recuperación de los recursos naturales, la nacionalización y especial atención a la pequeña producción, microempresas, artesanos, comunidades y campesinos. La base material es la prioridad dada al individuo, la familia y la comunidad, que constituyeron las fuerzas de la rebelión como cooperadores, cocaleros, microempresarios o federaciones de asociaciones de vecinos.

El reconocimiento de la realidad “indígena” se vuelve significativo. Ya sean quechuas, aymaras, guaraníes, chiquitanos o de la selva y la cuenca del Amazonas, todos reclaman el fin de la colonización y el fin de 500 años de injusticia. Para el MAS, la idea de nación se basa en la presencia indígena en su diversidad y teniendo en cuenta sus propios factores identitarios (lenguas, etc.). La nueva Bolivia debe ser una nación abierta a todos, multiétnica y multicultural, rompiendo con el dominio de la élite blanca.

Los muchos idiomas originales deben respetarse, enseñarse y utilizarse a diario. Las religiones originarias de los Andes y de los pueblos de la selva obligados a esconderse detrás de los símbolos del catolicismo deben retomar abiertamente su lugar.

Se debe reforzar la toma de decisiones por consenso, en la que toda la comunidad está llamada a participar y que reduce el rol del líder comunitario (un cargo nunca dado de por vida

pero sujeto a renovación dictada por las circunstancias) debe reforzarse para “mandar obedeciendo”. También debe restablecerse la antigua autonomía de los pueblos indígenas sobre sus territorios tradicionales, que no debe confundirse con la autonomía departamental que estuvo en el centro de fuertes tensiones durante el proceso constitucional, ni con la autonomía de las entidades administrativas derivadas de la colonización.

El “indianismo” del MAS no significa la marginación de la Bolivia no nativa, ni su rechazo con desprecio, en nombre de alguna venganza histórica. Lejos de cualquier concepto indígena, se pretende que sea un factor determinante en la construcción de una nación unida en la diversidad. El nuevo “indigenismo” quiere ser “flexible” y “cultural” frente a un cierto indigenismo intransigente y excluyente que tuvo sus partidarios en el pasado. El “indigenismo”, es un contrato social real que se ofrece a los múltiples componentes de la nación.

La nueva Constitución aprobada en enero de 2009 está relativamente en línea con las expectativas de las organizaciones sociales. El artículo 1 confirma el carácter plurinacional del Estado con el reconocimiento de los derechos de las distintas comunidades y su plena integración en el país: “Bolivia se constituye en un Estado unitario y social, de derecho plurinacional y comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural y descentralizado con autonomías”.

Por primera vez, los derechos de todos, los diferentes idiomas y culturas también son reconocidos en este país. Si toda privatización futura de los recursos naturales se configura como una “traición a la patria”, la propiedad privada es respetada, en la medida en que no perjudique el interés colectivo” (art. 56). El gobierno nacionalizó parcialmente la explotación de petróleo y gas y renegoció los contratos con las multinacionales.

El MAS, en su lucha por asumir el control del Estado, tomó prestada la disciplina de organización y movilización del sindicalismo. Al integrar elementos del indianismo, el nacionalismo popular, el sindicalismo y el marxismo, Evo Morales logró convertir al MAS en una máquina de poder. Para Álvaro García Linera:

En otras palabras, la experiencia que vivimos hoy es la base del debate en torno a la forma clásica de lucha por el acceso al poder [...] La pregunta insoluble: ¿somos un partido de cuadros o un partido de masas? ¿El poder se ejerce desde arriba o se construye desde abajo?, es planteado teóricamente por el evismo en las estrategias de lucha mientras que a la vez, está en trance de resolución. Estrictamente hablando, este es el único ejemplo en el mundo donde los movimientos sociales han llegado al poder estatal (García Linera, 2006: 30).

Evo Morales conceptualizó el proceso que lidera como una “revolución democrática y cultural” o “revolución democrática descolonizadora” que cambia las estructuras de poder, la composición de las élites gobernantes y los derechos y,

por ende, las instituciones del Estado con el fin de transformar la estructura económica para redistribuir la riqueza.

Sin embargo, generar energía desde abajo no resulta tan sencillo. Los componentes sociales tradicionalmente corporativos tienen dificultades para adquirir una visión universal, es una dificultad consolidar el actual proceso de cambio contrahegemónico. Asimismo, ante la ausencia de estructuras institucionales que permitan la articulación entre movimientos sociales e intelectuales o técnicos, esta tarea frecuentemente recae en Evo Morales. Para Pablo Stefanoni, “la estrategia que llevó a Evo Morales a la presidencia no fue una elaboración teórica sino una sucesión de decisiones guiadas por la razón práctica adquirida en las trincheras del sindicalismo campesino” (Stefanoni, 2006: 41).

Cuatro años después de su llegada al poder, el MAS y Evo Morales sin duda han iniciado reformas y un proceso de cambio en el país. Respetaron la “agenda de octubre”²¹. No se inspiran en tal o cual ideología, su acción se caracteriza especialmente por un gran pragmatismo. Tienen la intención de construir un Estado fuerte para recuperar la soberanía nacional y orientar la actividad económica. La derecha y la oligarquía de Oriente se han enfrentado al poder. Su voluntad separatista, si tiene éxito, podría tener repercusiones en toda América Latina. El proceso de cambio, por tanto, sigue siendo frágil, pero las autoridades pueden contar con una base social sólida, siempre dispuesta a movilizarse para defender los primeros logros de la “revolución democrática y cultural”.

21 La agenda de octubre es la plataforma de demandas desarrolladas por los movimientos sociales.

Para el gobierno, la construcción de una verdadera nación bajo la bandera de la “unidad en la diversidad” sigue siendo un verdadero desafío, pero la descolonización del poder está bien y verdaderamente emprendida. La experiencia boliviana se ha convertido en un referente para la mayor parte de los pueblos indígenas de América Latina que luchan por el reconocimiento de sus derechos, sus identidades, sus lenguas y sus culturas pero también para poder cultivar la tierra y decidir, lo que resumen con el lema de “vivir bien” en armonía con la “madre tierra”, la tierra nutricia.

Abril de 2010

Para saber más

“Llamada de los pueblos indígenas” (2009), Rouge et Vert, FSM especial de Belém, n ° 286–287.

Blanco, Hugo (2009), “Massacre à Bagua”, Inprecor, n ° 551–552, julio–agosto.

Bosetti, Louise (2007), Presentación del MAS, OPALC.

Bruckman, Monica (2009), “El movimiento indígena en América Latina”, América latina en Movimiento, www.rebellion.org.

Do Alto, Hervé (2007), “De la revolución nacional al triunfo de Evo Morales. Una mirada atrás a medio siglo de luchas en la Bolivia popular (1952–2007)”, Actuel Marx, n ° 42, París, PUF.

Do Alto, Hervé (2008), “La” revolución “de Evo Morales o los sinuosos caminos de la refundación de Bolivia” en Franck

Gaudichaud (dir.), *Le volcan latino-Américain. Izquierda, movimientos sociales y neoliberalismo en América Latina*, París, Textuel.

Do Alto, Hervé y Pablo Stefanoni (2008), *Seremos millones. Evo Morales y la izquierda en el poder en Bolivia*, París, Raisons d'Actions, 2008.

García Linera, Álvaro (2006), "El evismo: lo nacional-popular en acción", *Observatorio social de América latina*, n ° 19, Buenos Aires, Clacso.

García Linera, Álvaro (2008), *Por una política de igualdad. Comunidad y autonomía en la Bolivia contemporánea*, París, Las praderas ordinarias.

Galeano, Eduardo (1998), *Las venas abiertas de América Latina*, París, Plon.

Harnecker, Marta y Federico Fuentes (2008), *MAS-IPSP: Instrumento político que surge de los movimientos sociales*, Caracas, CIM.

Hardt, Michael y Toni Negri (2008), *Empire*, Paris, Exils.

Neuville, Richard (2008), "El MAS: un instrumento político atípico", en Richard Neuville y Rémi Querbouët, "Bolivia: La revuelta democrática y cultural contra la oligarquía", *Rouge et Vert*, n ° 275, mayo.

Polet, François (dir.) (2009), *La Bolivie d'Evo: ¿democrático, indigenista y socialista?*, París / Lovaina, Syllepse / Cetri, 2009.

Poupeau, Franck (2008), *Carnets boliviens 1997–2007: A taste of dust*, Montreuil, Aux Places to be.

Quijano, Anibal (2005), “Dom Quijote e os mohinos na América latina”, *Revista de Estudos Avançados*, n ° 19.

Quijano, Anibal (2006), “Estado–nación y movimientos indígenas en la región Andina: cuestiones abiertas”, *Observatorio social de América Latina*, n ° 19, Buenos Aires, Clacso.

Ramírez Gallegos, Franklin (2008), “El movimiento indígena y la reconstrucción de la izquierda en Ecuador” en Gabriel Vommaro (coord.), *La “tarjeta roja” de América Latina*, Bellecombe–en–Bauges, Le Croquant.

Rudel, Christian (2006), “Del colonialismo al indianismo”, *Développement et civilisations*, n ° 346, septiembre.

Stefanoni, Pablo (2006), “El nacionalismo indígena en el poder”, *Observatorio social de América Latina*, n ° 19, Buenos Aires, Clacso.

CONSTRUYENDO EL “BUEN VIVIR – SUMAK KAWSAY”

Alberto Acosta

América Latina, partiendo de una renovada crítica a la idea del desarrollo, se verá entorpecida en un interesante proceso de reencuentro con sus orígenes. Por un lado, se recuperará en él una tradición histórica de críticas y cuestionamientos al desarrollo elaborado y presentado hace tiempo atrás, pero que quedaron rezagados y amenazados de olvido. Por otro lado, afloran nuevas concepciones, sobre todo originarias de los pueblos y nacionalidades ancestrales del Abya-Yala, que se complementan con aportes de otras regiones de la Tierra.

Mientras buena parte de las posturas convencionales sobre el desarrollo e incluso muchas de las corrientes críticas se desenvuelven dentro de los saberes occidentales propios de la Modernidad, las propuestas latinoamericanas recientes escapan a esos límites.

De hecho, estas propuestas recuperan posturas clave ancladas en los conocimientos y saberes propios de los pueblos y nacionalidades ancestrales. Sus expresiones más conocidas nos remiten a las constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia

(2009); en el primer caso es el “Buen Vivir” o *Sumak Kawsay* (en kichwa), y en el segundo, en particular el “Vivir Bien” o *Suma Qamana* (en aymara) y también *Sumak Kawsay* (en quechua).

Existen nociones similares (mas no idénticas) en otros pueblos indígenas, como los Mapuche (Chile), los Guaranís de Bolivia y Paraguay, los Kunas (Panamá), los Achuar (Amazonia ecuatoriana), pero también en la tradición Maya (Guatemala) y en Chiapas (México), entre otros.

Además de estas visiones del Abya-Yala (América, en la actualidad), existen, en otras muchas partes del planeta, aproximaciones a pensamientos filosóficos de alguna manera emparentados con la búsqueda del Buen Vivir desde visiones humanistas y no utilitaristas.

El Sumak Kawsay o Buen Vivir, en tanto cultura de la vida, con diversos nombres y variedades, ha sido conocido y practicado en diferentes periodos en las distintas regiones de la Madre Tierra: el Ubuntu en África o el Svadeshi, el Swaraj y el Apargrama en la India. Aunque se le puede considerar como uno de los pilares de la cuestionada civilización occidental, en este esfuerzo colectivo por reconstruir/construir un rompecabezas de elementos sustentadores de nuevas formas de organizar la vida, se podrían recuperar incluso algunos elementos de la “Vida buena” de Aristóteles.

El Buen Vivir, entonces, no es una originalidad ni una novelería de los procesos políticos de inicios del siglo XXI en los países andinos. Tampoco son los pueblos y nacionalidades

ancestrales del Abya–Yala los únicos portadores de estas propuestas. El Buen Vivir formó parte de una larga búsqueda de alternativas de vida fraguadas en el calor de las luchas de la Humanidad por la emancipación y la vida.

Una propuesta desde la periferia del mundo

El Buen Vivir, en tanto sumatoria de prácticas vivenciales, muchas de ellas de resistencia a la realmente larga noche colonial y sus secuelas todavía vigentes, es aún un modo de vida en diversas comunidades indígenas, que no han sido totalmente absorbidas por la modernidad capitalista o que han resuelto mantenerse al margen de ella. Sus saberes comunitarios, esto es lo que cuenta, constituyen la base para imaginar y pensar mundos diferentes en tanto camino para cambiar éste.

De todas maneras, siempre será un problema comprobar lo que es y lo que representó un saber ancestral, probablemente cuando lo que se presenta como tal no es realmente ancestral, ni hay modo de corroborarlo. Las culturas son tan heterogéneas en su interior que puede resultar injusto hablar de “nuestra” cultura como prueba de que lo que uno dice es correcto. Además, la historia de la Humanidad es la historia de los intercambios culturales y eso también se aplica a las comunidades originarias americanas. Es imperioso, de todos modos, recuperar las prácticas y vivencias de las comunidades indígenas, asumiéndolas tal como son, sin llegar a idealizarlas.

Lo destacable y profundo de estas propuestas alternativas, de todas formas, es que surgen desde grupos tradicionalmente marginados. Son propuestas que invitan a romper de raíz con varios conceptos asumidos como indiscutibles y a cuestionar la estructura homogeneizadora y totalizadora del capitalismo. Son las voces de las otras y los otros, que desde la alteridad exigían la construcción del Buen Vivir y la reconstitución de su capacidad de propuesta. Son voces que comienzan a ser replicadas en otros lugares del planeta. Aunque resulte curioso y que no necesariamente pueda ser visto como una réplica del Buen Vivir andino–amazónico, vale anotar el hecho de que el alcalde de la ciudad de Colonia (Koln) haya declarado un día al año, como el día del “buen vivir” (así, en español), para reflexionar sobre la necesidad de otro estilo de vida.

Lo que cuenta en este punto es reconocer que en estas tierras americanas y en otras latitudes existen memorias, experiencias y prácticas de sujetos comunitarios que ejercitan estilos de vida no inspirados en el tradicional concepto del desarrollo y del progreso, entendido este como la acumulación ilimitada y permanente de riquezas. Es imperioso, entonces, impulsar la recuperación de dichas prácticas y vivencias de las comunidades indígenas, asumiéndolas tal como son, sin llegar a idealizarlas.

Una alternativa al desarrollo

El Buen Vivir, surgido de raíces comunitarias no capitalistas, plantea una cosmovisión diferente a la construcción

occidental de la civilización hegemónica. Rompe por igual con las lógicas antropocéntricas del capitalismo en tanto civilización dominante así como con los varios socialismos “reales” existentes hasta ahora y sus contradicciones intrínsecas.

La propuesta del desarrollo, surgida desde la lógica del progreso civilizatorio de occidente estableció una compleja serie de dicotomías de dominación: superior–inferior desarrollado–subdesarrollado, avanzado–atrasado, centro–periferia, primer mundo–tercer mundo... Así cobró nueva fuerza la ancestral dicotomía salvaje–civilizado, que se introdujo de manera violenta hace más de cinco siglos en nuestra Abya–Yala con la conquista europea. Desde entonces se inaugura un brutal proceso de conquista y colonización, vigente todavía en todas las repúblicas latinoamericanas del siglo XXI.

En ese contexto de proyecciones globales se plasma la estructura dominante de la civilización actual. La institucionalización de la dicotomía superior–inferior implicó la emergencia de expresiones múltiples de colonialidad como formas para justificar y legitimar la desigualdad. La colonialidad del poder expresada en el mantenimiento de relaciones de dominación norte–sur, la colonialidad del saber que impone el conocimiento occidental homogeneizante pretendiendo anular los saberes populares, la colonialidad del ser que silencia la alteridad y la otredad de las minorías, y la colonialidad del tener que pretende reducir el Buen Vivir a términos de consumo, y en ese sentido se crea superior a quien más tiene.

Dichos patrones de colonialidad, vigentes hasta nuestros días, no son solo un recuerdo del pasado sino que explican la organización actual del mundo en su conjunto, en tanto punto fundamental en la agenda de Modernidad y de la Ilustración.

En términos concretos, a lo largo y ancho del planeta, las sociedades fueron y continuaron siendo reordenadas para adaptarse al “desarrollo”. El desarrollo se transforma en el destino común de la Humanidad, una obligación innegociable. Para conseguirlo, por ejemplo, se acepta la destrucción social y ecológica que provocan aquellas modalidades extractivistas de acumulación heredadas desde la colonia, como la megaminería, a pesar de que ésta ahonda y profundiza la dependencia del mercado exterior y del gran capital transnacional.

Cuando los problemas comenzaron a minar nuestra fe en el desarrollo, empezamos a buscar alternativas de desarrollo, le pusimos apellidos para diferenciarlo de lo que nos incomodaba, pero seguimos por la misma la senda: desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo sostenible o sustentable, codesarrollo, desarrollo a escala humana, desarrollo local, desarrollo endógeno, desarrollo con equidad de género, codesarrollo, desarrollo transformador... desarrollo al fin y al cabo... Hasta que se llegó a entender que el problema radica en el desarrollo.

El Buen Vivir desnuda los errores y las limitaciones de las diversas teorías del llamado desarrollo. Critica el concepto de desarrollo transformado en una entelequia que norma y rige en la vida de gran parte de la Humanidad, donde

perversamente es imposible alcanzar ese tan ansiado desarrollo. Mientras que, por otro lado, aquellos países que se asumen como desarrollados muestran cada vez más señales de su maldesarrollo. Y eso en un mundo, en donde, por lo demás, las brechas que separan a los ricos de los pobres, incluso en los países industrializados, se ensanchan permanentemente.

Recordemos, para redondear estas reflexiones, que bajo algunos saberes indígenas no existe una idea análoga a la de desarrollo, lo que lleva a que en muchos casos rechace esa idea. No existe la concepción de un proceso lineal de la vida que establezca un estado anterior y posterior, a saber, de subdesarrollo y desarrollo; dicotomía por la que deben transitar las personas para la consecución del bienestar, como ocurre en el mundo occidental. Tampoco existen conceptos de riqueza y pobreza determinados por la acumulación y la deficiencia de bienes materiales.

El Buen Vivir asoma, entonces, como una categoría en construcción y reproducción permanente. En tanto planteamiento holístico, es preciso entender la diversidad de elementos a los que están condicionadas las acciones humanas que propician Buen Vivir, como son el conocimiento, los códigos de conducta ética y espiritual en la relación con el entorno, los valores humanos y la visión del futuro, entre otros. El Buen Vivir, en definitiva, constituye una categoría central de la filosofía de la vida de las sociedades indígenas.

Si aceptamos que el Buen Vivir es algo diferente al desarrollo, no se trata de aplicar un conjunto de políticas, instrumentos e

indicadores para salir del “subdesarrollo” llegar a esa condición deseada del “desarrollo”. Una tarea por lo demás inútil.

Luego de cinco siglos de horrores y errores cometidos en nombre del progreso –y del desarrollo en las últimas seis décadas–, queda claro que el tema no es el de simplemente aceptar una u otra senda. Los caminos hacia el desarrollo no son el problema mayor. La dificultad radica en el concepto mismo del desarrollo.

El mundo vive un “mal desarrollo” generalizado, incluidos los considerados países industrializados, es decir aquellos cuyo estilo de vida debía servir como faro referencial. Esos países, además, son los principales causantes de los cambios climáticos a nivel mundial. Por primera vez en la historia de la Humanidad la producción de residuos –producto de toda transformación de la energía y la materia– superó la capacidad de asimilación y reciclaje de la Tierra y la velocidad en la extracción de recursos comenzó a ser muy superior al tiempo de producción, poniendo en riesgo la reproducción de la vida. Este colapso ambiental devela que las relaciones entre la sociedad capitalista y la Naturaleza están enfermas, y que el funcionamiento del sistema mundial contemporáneo es “maldesarrollador”.

En suma, es urgente disolver el tradicional concepto del progreso en su deriva productivista y del desarrollo en tanto dirección única, sobre todo en su visión mecanicista de crecimiento económico, así como sus múltiples sinónimos. Pero no solo se trata de disolverlos, se requiere una visión diferente, mucho más rica en contenidos y en dificultades.

Ahora, incluso en los países del norte, cada vez más personas desencantadas e indignadas, ya trabajan por el decrecimiento y buscan otras opciones de vida que propenden al reencuentro del ser humano con la Naturaleza. Así en nuestra época convergen varias visiones que proponen superar el capitalismo (ecologismo popular, marxismo, anarquismo, feminismo, etc.), surgidas también desde los oprimidos, y que se refuerzan con esta perspectiva incluyente.

Hacia un reencuentro con la Naturaleza

El Buen Vivir fue fundado en la superación de dos dicotomías perversamente agudizadas por la modernidad, por un lado la dominación del ser humano sobre la Naturaleza y por otro, la explotación entre seres humanos: norte–sur, ciudad–campo, y en general de los grupos hegemónicos por sobre las mayorías de explotados.

En el lugar de mantener el divorcio entre la Naturaleza y los seres humanos, en lugar de sostener una civilización que pone en riesgo la vida, la tarea pasa por propiciar su reencuentro. Hay que superar la civilización capitalista, en esencia depredadora y por cierto intolerable e insostenible, “Que vive de sofocar la vida y al mundo de la vida”, para ponerlo en palabras del gran filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría. Para lograrlo habrá que transitar del actual antropocentrismo al (socio) biocentrismo. Con su postulación de armonía con la Naturaleza, con su oposición al concepto de acumulación perpetua, con su regreso a valores de uso, en este sentido, el

Buen Vivir representa la puerta para formular visiones alternativas de vida.

El logro de esta transformación civilizatoria megahistórica, requiere profundos cambios. La desmercantilización de la Naturaleza se perfila como uno de los primeros pasos esenciales. En síntesis, el Buen Vivir se aparta de las ideas occidentales convencionales del progreso, y apunta hacia otras concepciones de la vida, otorgando una especial atención a la Naturaleza y la vida digna de todos los habitantes del planeta.

El buen vivir un reto democrático

Queda en claro, por lo tanto, que el Buen Vivir es un concepto plural (mejor sería hablar de «buenos vivires» o «buenos convivires») que surgen especialmente de las comunidades indígenas, sin negar las ventajas tecnológicas del mundo moderno o posibles aportes desde otras culturas y saberes que cuestionan distintos presupuestos de la modernidad dominante. El respeto por la soberanía de los pueblos, por sus definiciones productivas, reproductivas y por su construcción territorial permitirá espacios de intercambio e interrelación horizontal que rompan finalmente con las expresiones de colonialidad heredadas.

No nos olvidemos que la Humanidad enfrenta grandes retos. El sacrificio de la Naturaleza y del trabajo humano, en aras de la expansión planetaria del capitalismo, ahogan cada vez más la vida. Dicho devenir destructor reproduce en sí mismo nuevas violencias estructurales, como son las guerras, las migraciones

forzadas, el narcotráfico... Y esto consolida un proceso de regresión política que conduce a formas cada vez más totalitarias de organización de la sociedad. Enfrentar esta realidad, cargada de incertidumbres, es el compromiso a ser asumido. Urge dar sentido democrático a la lucha en contra de esta barbarie, de la cual ya nos advirtió Rosa Luxemburg.

En síntesis, esta compleja tarea implica aprender desaprendiendo, aprender y reaprender al mismo tiempo. Una tarea que exigirá cada vez más democracia consensual, cada vez más participación y siempre mucho respeto entre todas las culturas. Nadie puede asumirse como propietario de la verdad.

13 de septiembre 2015

Fuente: *La Línea de Fuego – Pensamiento crítico.*

ARGENTINA

LA CAPITAL MUNDIAL DE LAS EMPRESAS RECUPERADAS

Richard Neville

Argentina se ha convertido en los últimos años en la capital de la autogestión que ha surgido como la única respuesta inmediata y práctica a la quiebra del sistema capitalista. Por su magnitud, la autogestión de las empresas, en las más diversas formas, constituye uno de los ejemplos recientes más ricos. Los debates en la izquierda provocados por estas “recuperaciones” son igualmente ricos en lecciones.

Si la autogestión pasara a formas prácticas y concretas y no se apegara a las declaraciones de principios, no solo nos preguntaríamos por el mal funcionamiento del sistema existente, sino también por la posibilidad de establecer una economía alternativa de carácter social, que conduciría a una ruptura con el discurso hegemónico de los últimos quince años y el reinado del mercado (Fajn, 2002).

Las políticas ultraliberales, llevadas a cabo durante veinticinco años y en particular desde 1989, por los gobiernos

de Carlos Menem y Fernando De la Rúa, han sumido a la Argentina en la crisis socioeconómica más profunda de su historia. El modelo de acumulación y concentración financiera ha provocado el continuo cierre de empresas del sector industrial, la disrupción interna de los circuitos comerciales y la marginación de importantes sectores productivos. Los cuatro años de recesión, que precedieron a la crisis de 2001, caracterizados por una fuerte caída de la demanda, el producto interno bruto y la inversión, generaron un ciclo de depresión en la economía. Esta situación ha obligado a amplios sectores de la población a buscar formas de supervivencia, a través del desarrollo del trueque y el fortalecimiento de las solidaridades dentro de las comunidades vivas.

Es en este contexto que estalla el levantamiento del “19–20” de diciembre de 2001, al “corralito”²². Esta explosión social vio surgir un extraordinario proceso de autoorganización y resistencia social con la formación espontánea de asambleas populares y el desarrollo de los medios alternativos. Al mismo tiempo, el movimiento *piquetero*²³ gana fuerza y la recuperación de empresas por parte de los trabajadores (ERT) está adquiriendo una escala sin precedentes.

22 "Corralito": bloqueo del dinero depositado por ahorradores en cuentas bancarias.

23 El movimiento piquetero está formado por una treintena de organizaciones de desempleados, entre que aparecen: Corriente Clasista y Combativa (CCC) vinculada al PCR (Maoísta), Federación Tierra y Vivienda (FTV) vinculada a la CTA, Polo Obrero, vinculada al partido trotskista del mismo nombre, Movimiento Territorial de Liberación (MTL) y el MST Teresa Vive, vinculado al Partido Comunista, Coordinadora Anibal Verón o el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) que son independiente. Este movimiento, nacido a partir de 1996, ha seguido fortaleciéndose al incrementar el número de obstáculos para obtener los subsidios estatales que, con mayor frecuencia, reúnen para operar talleres de ropa, panaderías, jardines colectivos en beneficio de de la comunidad.

En un contexto económico y social catastrófico donde apenas existe protección para los trabajadores, este movimiento juega un papel decisivo y contribuye al surgimiento de auténticas prácticas de autogestión.

Constituye una práctica económica innovadora y una respuesta pragmática de los trabajadores de otros lugares frente a una crisis que a menudo trasciende el marco estricto de la empresa. Este movimiento de recuperación de negocio no es nuevo, tiene sus raíces en la tradición de lucha del movimiento obrero argentino y la conciencia histórica. Si es aconsejable sopesar su dimensión con respecto a la población activa del país, es sin embargo, un movimiento importante que tiene un significado político y un valor simbólico extremadamente fuerte.

La emblemática experiencia de los trabajadores de Zanón es indicativa del espíritu de resistencia que se está gestando. Además, actualiza los debates del siglo XIX en el modo de gestión: entre nacionalización bajo control obrero o gestión obrera y cooperativismo; entre reforma y revolución. La perseverancia del fenómeno indica claramente que se ha anclado en el panorama social argentino. De hecho, la estabilización y durabilidad de las experiencias resultantes del movimiento de diciembre de 2001 ayudan a ofrecer una alternativa viable. Evidentemente, las recuperaciones de empresas que surgieron con la crisis financiera y económica de 2008 tienden a demostrarlo.

Un desastre anunciado

Durante la década de 1990, bajo el gobierno de Menem, las cifras de desempleo aumentaron drásticamente. En diciembre de 2001, la tasa oficial de desempleados rondaba el 20% y el trabajo informal representaba el 50%. Durante 2001, más de 1.500 empresas entraron en concurso de acreedores y acumularon importantes deudas con el Estado.

Esta situación fue causada por la aplicación de políticas económicas neoliberales, bajo la dictadura militar. En 1991, el Congreso aprobó la Ley de Convertibilidad que estableció la paridad entre el peso y el dólar. La aplicación ciega de las directivas del referido Consenso de Washington ha significado la drástica reducción del gasto público, la flexibilidad del mercado laboral, las privatizaciones y la apertura total al capital extranjero.

Bajo el peso de la deuda y el dictado de las instituciones internacionales, el gobierno privatizó todas las empresas públicas (telefonía, electricidad, gas, correos, transporte público, etc.) que quedan bajo el control de empresas españolas (Telefónica, Endesa, etc.) o francesas (France Telecom, EDF, etc.), lo que provoca un gran número de despidos y un deterioro de las condiciones laborales. Por ejemplo, la petrolera YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), vendida a la española Repsol, ve su plantilla dividida por diez; la adquisición de la compañía aérea Aerolíneas Argentinas por parte de Iberia se traduce en una reducción del salario de

los trabajadores del 20% y, según Éric Toussaint (2002), por la cesión de los Boeing 707 por el precio simbólico de 1,54 dólares.

El gobierno está recortando el gasto público en administración, educación y salud, recortando empleos de funcionarios públicos, privatizando la seguridad social y destruyendo el sistema de jubilaciones y pensiones. La apertura total de la economía acelera el proceso de desindustrialización. Las empresas cierran una tras otra. Las pequeñas y medianas empresas (textiles, metalurgia, cuero, electrodomésticos, industria alimentaria, etc.) son las más afectadas, pero las grandes empresas no se libran y ven su actividad reducida a la subcontratación en nombre de multinacionales. Solo una minoría de la burguesía nacional, a través de sociedades holding asociadas con multinacionales, se beneficia de esta política.

La flexibilidad del mercado laboral, la abolición de los convenios colectivos, la introducción del empleo temporal sin cobertura de seguridad social acentúa la explotación y la precariedad. Todo este proceso se da con la complicidad de la principal central sindical argentina, la Confederación General de Trabajadores (CGT)²⁴. Este desmantelamiento global provocó un terremoto en el país que Hugo Moreno resume así: “La salvaje reestructuración capitalista y la aplicación ilimitada de las recetas del neoliberalismo crearon las condiciones para un vacío social y económico. No tardará en completarse en forma de una catástrofe anunciada” (Moreno, 2005: 164).

24 Sobre este tema, ver la película de Fernando Solanas, Memoria del saqueo, 2003.

En 1999, la sustitución del gobierno de Menem por el de De la Rúa no cambió nada. Bajo el liderazgo de Domingo Cavallo, el indestructible ministro de Economía, continúa la misma política. A principios de diciembre de 2001, decidió bloquear los activos bancarios, lo que derivó en una huelga general el día 13 y la revuelta popular espontánea del “19–20”. Y gritó la consigna “Qué se vayan todos”, el pueblo rebelde, consciente de la impotencia de la clase política sabe que los cambios de gobierno no resolverán nada y dado que su futuro le pertenece. Miles de trabajadores expulsados de su empresa responden con ocupación, resistencia y finalmente la reanudación de la producción.

Un proceso pragmático

El proceso de recuperación suele darse antes del cierre o crisis terminal de las empresas y consiste en proponer la continuación de la actividad de la empresa en forma de autogestión de los trabajadores. Como reacción al fenómeno de la exclusión generalizada, la clase obrera argentina está experimentando diferentes formas de acción, y la recuperación de empresas por parte de los trabajadores es uno de los emblemas de esta resistencia.

En general, los sindicatos se involucran poco en ella, solo la Central de Trabajadores Argentinos (CTA)²⁵ y ciertos sectores

²⁵ La CTA fue creada en 1995 rompiendo con la política colaboracionista de la CGT. Ella reúne principalmente a trabajadores del sector público, organizados dentro de la

de la CGT acompañan este proceso. La CTA intenta anclar estas experiencias, que surgen como un medio de supervivencia, en un contexto más global y en la construcción de un nuevo proyecto social. Ella también ayuda a crear redes de marketing y fondos de financiación.

El cierre de varios miles de empresas –5.000 en cuatro años según estimaciones de la Asociación de Economistas de Izquierda (EDI)– y la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo crean un clima de inseguridad entre los trabajadores que mantienen sus puestos de trabajo y crean desesperación entre aquellos que lo pierden. Ante el abandono de las empresas por parte de los patronos, los trabajadores decidieron ocupar las fábricas para defender la herramienta de trabajo y resistir los intentos de desalojo para reiniciar el proceso productivo bajo gestión directa.

Para Eduardo Lucita, es “un proceso pragmático, no suele haber una predeterminación ideológica”. La crisis del capital ha desplazado el eje de la lucha, para sacarlo de la órbita de la distribución de la riqueza y finalmente para cuestionar el principio sacrosanto de la propiedad privada. Es por tanto un proceso objetivo pero que se diferencia de la tendencia histórica, que se construye en diferentes etapas y períodos, con fuerza e intensidad. El trabajo ha intentado desplazar al capital, reemplazándolo por el trabajador de la organización, buscando tomar el control de las empresas” (Lucita, 2002: 40).

Asociación trabajadores del gobierno (ATE) y los desempleados en la Federación de Tierras y vivienda (FTV). Está organizado sobre una base territorial. No tiene representatividad en el sector privado pero organiza a los trabajadores de las empresas recuperadas dentro de su rama industrial (FETyA).

Los trabajadores intentan imponer su decisión ante la aplicación de una decisión judicial: declaración de concurso y luego expropiación de la empresa. Si bien este fenómeno no representa una respuesta global al problema, constituye una alternativa concreta en situaciones específicas con indudables ventajas sociales. Esta alternativa permite a los empleados mantener su puesto de trabajo, su saber hacer, la cultura industrial, mientras mantienen su conciencia de clase.

Una conciencia histórica profunda

El movimiento de recuperación de empresas, que se desarrolló en Argentina a partir de 2001, es sobre todo el resultado de cierres de empresas del sector industrial vinculados a la crisis económica pero también, como explica Eduardo Lucita, el de una gestión defectuosa, incluso fraudulenta:

Las empresas que se encontraron en esta situación se habían endeudado real o ficticiamente, habían cedido activos a terceros, tenían deudas con impuestos y servicios públicos, y terminaron por recurrir a la competencia preventiva o yendo directas a la declaración de quiebra (Lucita, 2003).

Este movimiento alcanzó su punto máximo durante el período 2002–2003 con la recuperación de 120 empresas, pero el fenómeno continuó durante los años siguientes a un ritmo

ciertamente más lento, y aún concierne a unas cincuenta empresas. Con las consecuencias económicas de la crisis financiera mundial de 2008, incluso está experimentando un resurgimiento. Así, durante el período 2007–2008 se alrededor de quince empresas fueron recuperadas²⁶.

El fenómeno de la recuperación de empresas no es nuevo ya que hay una historia que se remonta a más de cuarenta años. Durante la huelga general de mayo–junio de 1964, tres millones de trabajadores habían ocupado 4.000 empresas y habían comenzado a organizar ellos mismos la producción (Solanas, 1968). Las cooperativas: Lozadur, CITA, CAT, El Progreso, etc. nacieron de esta lucha. Se formaron a partir de grandes fábricas y han pasado por diferentes etapas en su desarrollo. Más recientemente, entre finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, trabajadores de empresas en crisis crearon una veintena de cooperativas. En 1996 y 1998, se recuperaron las empresas metalúrgicas de refrigeración e IMPA de Yaguané.

A partir de mediados del año 2001 comienza la recuperación y se extiende a todo el país. Las primeras recuperaciones son aisladas y dispersas pero con el pico de la crisis, el proceso adquiere visibilidad pública y nace la primera organización nacional, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER). Este movimiento tiene sus raíces en la tradición de las luchas y, como observa Guillermo Almeyra, a pesar de la tragedia de la dictadura y sus 30.000 desapariciones que pudieron haber afectado la “transmisión de la memoria

26 Durante estos años, las recuperaciones de empresas se refieren principalmente al sector agroalimentario e industria textil.

histórica”, el movimiento obrero argentino “muestra que hay una conciencia histórica profunda, subyacente, oculta” (Almeyra, 2006: 204). Las ideas anarquistas y socialistas importadas por la emigración europea, principalmente italianos y españoles, durante el siglo XIX, no son, sin duda extrañas.

La escala del fenómeno

En 2008, 219 empresas recuperadas por los trabajadores (ERT) se censaron y distribuyeron en 17 provincias diferentes, con una fuerte concentración en la provincia de Buenos Aires que incluye casi la mitad (Osera, 2008). Reunen a cerca de 22.000 trabajadores organizados en cooperativas y otros 20.000 indirectamente (Abelli, 2009). En la ciudad de Buenos Aires, que concentra 35 empresas recuperadas, observamos que si bien el movimiento realmente no se inició hasta 2002 con 16 recuperaciones, continuó a un ritmo mucho menor hasta 2008, pero sin embargo se mantuvo continuo (Rebon, 2008).

El 78% de las unidades de producción tenían menos de 50 trabajadores y el 4% más de 200 trabajadores. En 2005, la encuesta realizada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y relativa a 161 ERT arrojó un promedio de 57 empleados por unidad de producción, excluyendo la mayor cooperativa azucarera, Ingenio La Esperanza, que emplea a 2200 trabajadores (Ruggeri et al., 2005). Esta cifra fue superior a la observada dos años antes por Gabriel Fajn, quien indicó que el

promedio de empresas autogestionadas era de treinta y ocho trabajadores. Según los observadores, al igual que la emblemática cooperativa FaSinPat (antes Zanón), cuya fuerza laboral aumentó de 240 en 2002 a 470 en 2008, este aumento de la fuerza de trabajo es real y la producción para la mayoría de ellas, después de arranques a veces laboriosos, ha aumentado a lo largo de los años. La mayoría de las cooperativas han logrado ganar estabilidad económica.

Según Gabriel Fajn, en 2003, en el 90% de los casos, se habían eliminado las posiciones jerárquicas y se había establecido un sistema igualitario de redistribución de beneficios (Fajn, 2002). La encuesta de la UBA indica que la igualdad salarial es más fuerte en las ERT que experimentaron un largo conflicto durante la recuperación y se recuperaron durante el período 2002–2003. Esta igualdad también varía según el tamaño de la empresa.

En 2005, las ERT se dividieron en diferentes sectores de actividad: metalurgia (29%), otras industrias (20%), industrias alimentarias (18%), otros servicios (10%), textiles (7%), industria gráfica (6%), salud (5%), cerámica (4%) y construcción (1%) (Ruggeri et al., 2005). De este proceso nacieron cuatro estructuras institucionales: el MNER (ya citado) que aglutinó hasta el 35% de las ERT, principalmente las ERT de la ciudad de Buenos Aires y determinadas zonas del interior antes de sufrir una gran escisión. En 2006 (el MNER federa cooperativas de producción independientes del Estado); el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por Obreros (MNFRT) que se ha convertido en la mayoría, agrupa principalmente a las ERT de la provincia de Buenos Aires; la

Federación de Cooperativas de la Provincia de Buenos Aires (Fecootra); y la Federación Nacional de Cooperativas de Trabajadores de Empresas Reconvertidas (Fencooter), más vinculadas al Estado, que es muy débil.

Las empresas que exigían la nacionalización bajo el control de los trabajadores (Brukman, Zanón) aceptaron paulatinamente la necesidad de crear cooperativas, aunque para los trabajadores de Zanón (FaSinPat), solo constituyen una fase transitoria a superar.

La experiencia emblemática de FaSinPat (ex-Zanón)

Popularizado por campañas de solidaridad internacional y la distribución mundial de varias películas²⁷, la experiencia de la empresa Zanón (una fábrica de cerámica ubicada en Neuquén) se ha convertido en el emblema del movimiento de recuperación empresarial en Argentina. Es así en varios aspectos: la extensión y duración de la lucha, la organización interna, las solidaridades tejidas con los movimientos sociales y las poblaciones locales, la lucha con el poder político y el modo de gestión.

En 2001, en respuesta al patrón que decidió reducir drásticamente la producción cerrando dos líneas de producción y recortando 180 puestos de trabajo, los trabajadores

²⁷ Por nombrar solo los principales: Naomi Klein y Avi Lewis (2004); Fernando Solanas (2006); Virna Molina y Ernesto Ardito (2008).

acamparon frente a la fábrica durante varios meses. El 2 de octubre, en asamblea general, decidieron por mayoría absoluta ocupar la fábrica para evitar la salida de máquinas y defender los puestos de trabajo. Cinco meses después, el 2 de marzo de 2002, los 240 trabajadores encienden los hornos y comenzaron a producir sin patrones. Los indígenas mapuches, que habían sido explotados por empresas cerámicas, pusieron sus canteras a disposición de los trabajadores de Zanón.



Es importante destacar que para el futuro, esta lucha fue precedida por una batalla interna contra la dirección sindical. En 1998, una lista de oposición “clasista” ganó al “comité interno” de la empresa por 177 votos contra 44 en la lista oficial. El secretario general del sindicato de rama, autoritario y burocrático, tenía una postura patronal y había aceptado todos los despidos durante años. En septiembre de 2000, al término de una feroz lucha que le permitió convertirse en la mayoría en las cuatro empresas cerámicas de la provincia de Neuquén, la

corriente de “lucha de clases” también conquistó la dirección del sindicato, el Sindicato de Trabajadores y Empleados Cerámicos de Neuquén (SOECN)²⁸.

En agosto de 2005, tras una larga lucha, los trabajadores obtuvieron la declaración de quiebra de Zanón y, en octubre, el reconocimiento provisional de la gestión obrera, bajo la condición de cooperativa FaSinPat. Después de ocho años de gestión obrera, la producción de cerámica ha aumentado de 10.000 m² a 400.000 m² y la cooperativa ha integrado 230 empleados adicionales. La seguridad ha mejorado significativamente, el número de accidentes anuales se ha reducido de trescientos treinta a treinta y no ha habido más víctimas mortales (Zibechi, 2005). A diferencia de numerosas cooperativas donde los nuevos reclutas se incorporan como empleados en Zanón, ingresan como socios asociados con los mismos derechos y obligaciones, siempre que se adhieran a las ideas de igualdad y democracia obrera que los ceramistas defienden.

Luego de haber funcionado en asambleas plenarias para organizar la producción y la defensa de la fábrica, los trabajadores adoptaron una organización que gira en torno a los coordinadores de producción, elegidos dentro de las distintas comisiones (compras, ventas, seguridad, producción, prensa). El equipo de coordinación vincula permanentemente temas relacionados con la organización de la producción (equipos, niveles de producción, salarios, gastos, ventas) y

28 En Argentina, la ley reconoce solo una organización sindical representativa por rama y por provincia. Así es como la CGT es representativa en todo el sector sector privado y CTA en el sector público. Por tanto, es fundamental conquistar el liderazgo de Unión.

discusiones políticas. Cada mes, la producción se detiene por un día y todos los trabajadores discuten los problemas, éxitos y desafíos. También es una oportunidad para discutir actividades sociales y culturales, así como temas políticos. Para Raul Godoy, “es lo único que nos mantiene vivos. De lo contrario, nos hubieran golpeado. Sin asamblea, no hay gestión de trabajadores que valga la pena. El patrón puede hacerte producir con el látigo, pero la gestión de los trabajadores depende de la convicción de que todos están tirando en la misma dirección. Nuestra principal inversión es el montaje” (Meyer y Chaves, 2008: 123).

La producción directa no siempre ha sido fácil, pero con la determinación que los impulsa, los trabajadores han podido eliminar los diversos obstáculos que enfrentaron. Fueron hostigados por la organización patronal por el tema del respeto a la propiedad privada, que exigió que las expropiaciones de empresas abandonadas por sus patrones fueran pagadas por los trabajadores, incluso en última instancia por el Estado. Los ceramistas han adoptado el principio de expropiación sin indemnización y comenzaron la lucha sobre esta base, considerando que no tenían que pagar la deuda del empleador. Asimismo, como indicó Alejandro López, secretario general del sindicato SOECN, se niegan a que el Estado pague la expropiación.

Los trabajadores de la gestión laboral ven su lucha como una necesidad para producir para la comunidad y no para lograr beneficios individuales. Es así como donaron cerámica para construir escuelas y salas de primeros auxilios en uno de los barrios más pobres de Neuquén, y ayudaron a reconstruir un

hospital en la ciudad de Santa Fe (ubicada a más de 1.500 kilómetros de la fábrica) que fue devastado por una inundación en 2003. Abrieron centros de salud y construyeron casas para los desfavorecidos y los huérfanos. Pagan fondos mensuales a comedores y hospitales populares. La empresa ha firmado un convenio de colaboración con la Universidad del Comahue para la organización de cursos de administración y economía.

Una vez recuperada la fábrica, los trabajadores establecieron estrechas relaciones con el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) de Neuquén, diversas organizaciones piqueteras y el Sindicato de Maestros de Río Negro (UNTER), afiliado a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), para la realización conjunta de diversas acciones. En 2002, organizaron el primer encuentro de fábricas recuperadas. Realizaron diversas acciones de solidaridad con los trabajadores de las empresas recuperadas y, en particular, los de la cooperativa hotelera Bauen y los trabajadores de la fábrica Brukman en Buenos Aires. Pretenden romper con el corporativismo y las divisiones que genera el sistema. También plantean la cuestión histórica de cómo se gestiona un negocio, como resumen Laura Meyer y Maria Chaves:

Los ceramistas de Zanón intentan mantener una articulación entre los problemas económicos inmediatos, las conquistas transitorias y las soluciones básicas, relacionando su situación concreta con los problemas de todos los trabajadores y transmitiendo la idea de que comparten los mismos intereses. [...] Al mismo tiempo, continúan la lucha por la expropiación final y continuar la gestión obrera, considerando la “cooperativa como una

solución transitoria” y discuten los problemas y las posibles soluciones básicas. Para ello, buscan mecanismos para alejarse de la “autoexplotación” que la constitución de una cooperativa les impone y con la que compiten en el mercado capitalista a una nacionalización bajo una administración democrática de los trabajadores (Meyer y Chaves, 2008: 134).

La deuda dejada por el patrón es una de las claves del problema, dada la legislación vigente en Argentina que obliga a la cooperativa a saldarla. Por eso, quienes son más conscientes nunca dejan de recordar a todos los trabajadores su objetivo, a saber, la nacionalización bajo el control de los trabajadores. Sin embargo, como indica el comunicado de Alejandro López, el debate no se congela: “Si el gobierno expropia la empresa y la entrega a la cooperativa, ésta seguirá gestionándola bajo la dirección de los trabajadores. El 12 de agosto de 2009, el Parlamento de la provincia de Neuquén adoptó finalmente la ley de expropiación definitiva de la fábrica.

Cooperativismo o nacionalización bajo control obrero

Aunque emblemática a nivel de combatividad y organización de los trabajadores, la experiencia FaSinPat no refleja sin embargo la realidad del movimiento de recuperación de empresas en Argentina. Ir más allá de la forma cooperativa no está en la agenda de la mayoría de las empresas y la demanda

de nacionalización bajo el control de los trabajadores es aislada, aunque las cuestiones inherentes a la expropiación de empresas y el pago de deudas siguen sin respuesta. Desde un punto de vista legal, dependiendo de las provincias y de la legislación vigente, las situaciones se resuelven caso por caso. Las cooperativas dependen directamente de la decisión de expropiación; esto es generalmente lento y pasan varios meses o incluso años durante los cuales realmente producen y comercializan sin que se legalice la situación.

El debate entre la nacionalización bajo control obrero y el cooperativismo sigue alimentando polémicas dentro de la izquierda argentina. Oponen las prácticas que se apoyan en una extensión del movimiento y corrientes que remiten a posiciones ideológicas más tradicionales y que consideran que la forma cooperativa solo puede ser temporal y que depende mucho de su generalización, a imagen de Eduardo Lucita:

El control de los trabajadores, que también presupone el servicio voluntario y la autonomía, mantiene a la empresa bajo la tutela del capital, privado o estatal, pero los trabajadores asumen el control de todo el proceso. [...] Fue una “reforma no reformista”, propia de un período de creciente lucha de clases, que no puede ser integrado por el capital y cuyo futuro depende de la generalización y un cambio profundo en la relación de fuerzas sociales (Lucita, 2002: 39).

En su controversia con Bernstein sobre las cooperativas inglesas, Rosa Luxemburg subraya el riesgo de autoexplotación en un sistema de competencia capitalista:

Esto se traduce en la necesidad de intensificar el trabajo, de acortar o ampliar su duración según la situación económica, de contratar o despedir mano de obra según las necesidades del mercado (Luxemburgo, 1969: 42).

Ruth Werner y Facundo Aguirre también insisten en los límites de las cooperativas:

La cooperativa, con todo el valor simbólico que tiene inicialmente, no es un camino de emancipación para la clase trabajadora.

Lejos de tender a unificar las fuerzas de los trabajadores, a movilizar a otros sectores populares a su lucha, concentra los esfuerzos dentro de la fábrica, para reemplazar y repetir los esquemas capitalistas.

[...] La administración directa de los trabajadores es una forma de autodeterminación, que deja la gestión de la producción y sus destinos en manos de la toma de decisiones colectivas, al tiempo que educa a la clase trabajadora en la gestión de la economía. Demuestra cómo la planificación democrática podría dar sentido social a la producción (Aguirre y Werner, 2002).

Con una concepción diferente, José Abelli (2003) piensa que la nacionalización de las empresas recuperadas bajo el control de los trabajadores “corresponde a una concepción de un Estado dirigido por los trabajadores. Pero en las condiciones actuales, la lucha por la nacionalización de las empresas recuperadas no le corresponde al Estado tal como existe hoy”. Las cooperativas permiten a los trabajadores decidir

libremente sin burocracia externa y de forma directa sobre el futuro de su empresa. Él cree, sin embargo, que la nacionalización puede ser un objetivo viable si el movimiento empresarial de recuperación global puede construir una masa crítica para cabildear las políticas públicas a favor de los sectores populares.

Por su parte, Javier Echaide considera que el debate básico está mucho más orientado a lo que significa la forma de autogestión que al modo de autogestión que se pretende alcanzar. La forma depende del nivel de conceptualización del modo cooperativo, pero no de la autogestión en sí. El modo cooperativo es sin duda una herramienta de transformación social:

La batalla es contra los medios de producción apropiados en forma privada y no entre las diferentes formas de autogestión. Es la oposición entre empleo asalariado y trabajo asociado. El tema de la propiedad privada de los medios de producción es central. El modo de autogestión se interpreta como una actividad privada o como una actividad alternativa distinta de la dicotomía entre privado y público. Esta sería una alternativa que podría romper con una relación de explotación de la fuerza laboral, y en última instancia del trabajador con la alienación (Echaide, 2003: 69).

Javier Echaide cree que el control de los medios de producción por parte de la clase trabajadora constituye una amenaza real para el Estado. La originalidad radica en el modo consciente de producción de quienes producen, quienes

controlan el capital y controlan las cantidades y el destino de la producción. No es necesario tener una clase dominante en el proceso de producción, el trabajador es su propio líder y lleva las riendas de su negocio. La forma cooperativa garantiza la legalidad de la empresa recuperada, permite defenderse de los patrones y romper con la anterior organización vertical.

En casi una década, el movimiento de recuperación de empresas se ha convertido en uno de los principales componentes del formidable laboratorio de experimentos sociales en Argentina. Constituye un primer paso para romper con el sistema capitalista y contribuye a la construcción de prácticas de autogestión. La transferencia de la propiedad privada de los medios de producción a la propiedad colectiva contribuye a la construcción de una alternativa al proceso de producción capitalista. Contribuye al establecimiento de nuevas relaciones sociales al permitir la recuperación de los valores democráticos, la innovación colectiva, la erradicación del despotismo patronal y la humanización de las relaciones de producción.

Para la mayoría de los experimentos, la gestión obrera permitió limitar el fenómeno de la autoexplotación regulando los ritmos de trabajo y producción y cubriendo las necesidades básicas. El proceso ha adquirido estabilidad jurídica, productiva y económica. Luego de lo que Eduardo Lucita califica como el “período heroico”, durante el cual prevaleció el perfil subversivo y una fuerte politización, las empresas están sujetas a un proceso objetivo, el del mercado y la competencia (Lucita, 2006). Para la mayoría de ellos, se trata de asumir el desafío de los “riesgos del éxito”. El primer encuentro latinoamericano de

empresas recuperadas realizado en Caracas en octubre de 2005 (209 empresas de siete países) ayudó a ir más allá del estrecho marco de las fronteras nacionales, para firmar acuerdos comerciales y colaboración, especialmente para que los delegados argentinos se den cuenta del impacto de su experiencia.

Si bien el proceso de recuperación se ralentizó después del pico de 2001–2003, no obstante, continuó significativamente en los años siguientes en Argentina y América Latina. Con la crisis del modelo capitalista dominante, incluso está recuperando vitalidad. Ante la incapacidad de los capitalistas para asegurarles un trabajo o unos ingresos dignos, los trabajadores retoman, de forma pragmática, la autogestión que se ha convertido en símbolo de una nueva etapa en la lucha de la clase obrera. El proceso de apropiación colectiva de los medios de producción, conocido hoy como el modelo “patrón” argentino, constituye una respuesta atrevida y creativa para evitar la marginalidad impuesta por el sistema. Como explica José Abelli (2009), el proceso penetró de manera decisiva en la conciencia de los trabajadores argentinos:

Hoy, en cualquier lugar del país, cuando una empresa cierra, los trabajadores ondean la bandera de la autogestión.

Este es el gran logro de la lucha de la clase obrera argentina.

Para saber más

- Abelli, José (2003), Recuperación del trabajo fuentes a partir de la autogestión de los trabajadores, Informe FETIA–CTA, Buenos Aires.
- Abelli, José (2009), “Empresas recuperadas”, Osera, 27 de febrero.
- Almeyra, Guillermo (2006), Rebeliones de Argentina: tercer estado, luchas sociales y autogestión, París, Syllepse.
- Echaide, Javier (2003), “Debate sobre empresas recuperadas, Un aporte desde lo legal; lo juridico y lo politico “, Cuaderno de trabajo, n ° 25, agosto.
- Fajn, Gabriel (2002), Clarín, suplemento “Zona, Buenos Aires”, 22 de septiembre, en Alberto Rezzonico, “Empresas recuperadas, Aspectos doctrinarios, economicos y legales”, Cuaderno de trabajo, n ° 16, Centro cultural de la cooperacion, Buenos Aires, mayo.
- Guthmann, Claudio y Genoveva Tournon (2006), El fenómeno de las empresas tomadas por sus ex empleados en Argentina, informe de la Unidad de Investigación Interdisciplinaria en Derechos Humanos (CRIDHO), Universidad Católica de Lovaina.
- Klein, Naomi y Avi Lewis (2004), The Take, Canadá, MK2.
- López, Alejandro (2008), “Entrevista”, Osera.
- Lucita, Eduardo (2002), “Ocupar, resistir, producir”, Cuadernos del Sur, n ° 34, “Ocupación de empresas y gestión obrera directa”, noviembre.

Lucita, Eduardo (2003), entrevista realizada por la autora el 18 de octubre en Buenos Aires.

Lucita, Eduardo (2006), "Empresas bajo gestión obrera: el éxito y sus peligros", Correspondancia de Prensa, Boletín, Red de solidaridad de la izquierda radical, año 3, n ° 9228, 11 de enero.

Luxemburg, Rosa (1969), ¿Reforma o revolución? Huelga de masas, partido y sindicatos, t. 1, París, François Maspero.

Meyer, Laura y Maria Chaves (2008), "Aires de libertad, Zanón bajo gestión obrera", Observatorio social de América latina, n ° 24, Buenos Aires, octubre.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad social, Programa de trabajo autogestionado,

"Cantidad de unidades de productivas recuperadas"; y "Distribución de unidades productivas de acuerdo a cantidad de trabajadores", Osera.

Molina, Virna y Ernesto Ardito (2008), Corazón defâbrica, Buenos Aires, Clacso.

Moreno Hugo (2005), El desastre argentino. Peronismo, política y violencia social (1930–2001), París, Syllepse, www.syllepse.net/Ing_FR_srub_65_ipro-d_261-le-desastre-argentin.html.

Neuville, Richard (2004), "Empresas" recuperadas "o autogestionadas", Rouge et Vert, n ° 206, mayo.

Osera (Observatorio social de empresas autogestionadas recuperadas), <http://>

webiigg.social.uba.ar/empresasrecuperadas/Num_4/index.htm.

Programa “Escuela abierta”, Facultad de Filosofía y Letras, www.recuperadasdoc.com.ar.

Rebon, Julian (2007), La empresa de la autonomía. Trabajadores recuperando la producción, Buenos Aires, Picaso.

Rebon, Julian (2008), “Transformaciones emergentes en el proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores”, Osera.

Ruggeri, Andrés, Carlos Martínez, Héctor Hugo Trincherro (eds.) (2005), Las empresas recuperadas en Argentina, informe de la segunda encuesta del programa “Facultad Abierta”, Universidad de Buenos Aires; síntesis producida por Richard Neuville,

Rouge et Vert, n ° 241, mayo de 2006.

Solanas, Fernando (1968), La hora de los hornos, Trigon Film.

Solanas, Fernando (2003), Memoria del saqueo, Ad Vitam.

Solanas, Fernando (2006), La dignidad de los nadie, Trigon Film.

Toussaint, Éric (2002), “Argentina: eslabón débil en la cadena de la deuda”, Comité para la condonación de la deuda del Tercer Mundo, www.cadtm.org.

Zibechi, Raúl (2005), “Otro mundo es posible: cerámica Zanón”, IRC Programma de las Américas, enero, trad. Catherine Goudounèche para Risal.

CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS RECUPERADAS

Richard Neville

Las Empresas Recuperadas de Trabajadores (ERT) no son solo un recuerdo lejano de la crisis de 2001. No solo no han desaparecido, sino que “se han convertido en una opción que los trabajadores reconocen como válida, a pesar de todas las dificultades, en lugar de resignarnos al cierre de empresas” (Ruggeri, 2010).

De hecho, el movimiento de recuperación continuó y las ERT incluso lograron en una alta proporción consolidarse, y esto se refuerza con la tercera encuesta de empresas recuperadas realizada en el marco del programa “Facultad Abierta” de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires (UBA), que se hizo pública en octubre de 2010.

Datos generales

El estudio identificó la existencia de 205 empresas recuperadas que emplean a 9.362 empleados²⁹. Estas cifras son indicativas de la dinámica del proceso en curso, especialmente

²⁹ Los datos son de marzo de 2010 (fin de la encuesta).

cuando se comparan con las 161 empresas y 6.900 trabajadores declarados en 2004 (Neuville, 2006). El estudio indica que el movimiento continuó más allá del período 2002–2004, ya que el número de ERT aumentó en un 10% entre 2005 y 2007 y en la misma proporción en 2008. La recuperación de empresas sigue siendo una herramienta que utilizan los trabajadores frente a la crisis.

En cuanto a la ubicación, mientras que en 2002 el 80% de las ERT se concentraban en el área metropolitana de Buenos Aires, esta proporción se ha reducido a casi el 50%. Esta evolución podría explicarse en particular por el hecho de que las ERT del interior del país han logrado influir en determinados parlamentos locales como Santa Fe, la provincia que concentra más empresas, mientras que desde 2007, con la elección de Macri (derecha liberal), el gobierno de la ciudad de Buenos Aires retiró todo apoyo. Sin embargo, la distribución de ERT sigue siendo desigual en todo el país y no coincide con el nivel de desarrollo industrial. Es el resultado sobre todo del apoyo de los sindicatos durante la lucha y de la ausencia de una política coherente en todo el país.

Por sectores de actividad, las ERT se caracterizan por una gran heterogeneidad y los cambios no modifican profundamente la estructura de 2004: las empresas metalúrgicas siguen siendo las más numerosas (23%), seguidas de las agroalimentarias (13%) y gráficas (8 %). La actividad industrial representa el 42% del total frente al 50% en 2004. Los servicios se han diversificado (salud, educación, comunicación, hostelería, transporte, logística) y actualmente representan el 22% del total.

En términos de antigüedad, las empresas recuperadas entre 2002 y 2004 todavía constituyen casi la mitad (49,75%) del total, frente al 26,8% antes de 2002 y el 20,9% desde 2005. Si bien el número de recuperaciones ha disminuido desde 2004, el proceso continuó e incluso experimentó un resurgimiento a partir de 2007 con la crisis. De hecho, el número de recuperaciones en 2007 es equivalente al del período comprendido entre 2005 y 2007. De las 161 empresas censadas en 2004, solo 22 han desaparecido o han cambiado de modo de gestión, lo que supone una tasa de actividad continuada bastante elevada, del orden del 90%.

El conflicto

Los motivos que llevan a los trabajadores a entablar la lucha son en primer lugar el impago de salarios (58%) y los despidos (40%) mientras que las quiebras o recurso de acreedores (51%) y de máquinas (47%) han disminuido respecto a la encuesta anterior.

En el 73% de los casos, los trabajadores ocuparon la empresa y en el 50% se enfrentaron a represión o amenaza de desalojo. Hay que tener en cuenta que este porcentaje cae al 37,5% para las recuperaciones más recientes. La duración media de los conflictos (desde la ocupación hasta la reanudación de la producción) se mantiene cercana a los 150 días, es decir, un nivel relativamente constante desde 2001 aunque una vez más se observa un ligero descenso por la experiencia acumulada por los trabajadores.

En materia de solidaridad, el principal avance desde 2005 ha sido el cambio de actitud de los sindicatos (65% contra 34%) y la reducción de movimientos sociales y partidos políticos (12% contra 20%) en apoyo de nuevas recuperaciones. En el 82% de los casos, los trabajadores cuentan con el apoyo de otras ERT o movimientos de empresas.

El estatus

El estatus favorecido por las ERT es el de cooperativa (95%), lo que confirma lo observado en 2004 (94%). Las ERT que lucharon por la nacionalización y el control obrero de la producción (como Zanón) hubieron de conformarse con crear cooperativas y solo se nacionalizó la Clínica Medrano.

El tema de la expropiación sigue siendo confuso y espinoso porque si bien el 63% de las ERT han obtenido una ley de expropiación, solo se considera definitivo en el 19% de los casos, para los demás es temporal o condicional. Este es particularmente el caso de Zanón que obtuvo la expropiación en 2009 en la provincia de Neuquén con la condición de devolverla en 20 años. Sin embargo, el 8% de las empresas sigue exigiendo una ley de expropiación que es fundamental. El único caso de rechazo a la expropiación a la fecha es el de la emblemática experiencia del Hotel de Bauen por parte de la Municipalidad de Buenos Aires.

Estas leyes han hecho posible operar negocios en forma cooperativa, pero como el Estado no paga las indemnizaciones previstas, salvo en una minoría de casos, son cada vez más frecuentes las sentencias para exigir la restitución de los bienes con el fin de reembolsar a los acreedores. Una solución sería modificar la ley de quiebras para permitir la compra de empresas por parte de los trabajadores.

La producción

En general, las capacidades de producción están infrautilizadas: el 59% de las ERT solo utilizan entre el 20% y el 60% de su potencial, mientras que solo el 7% lo utiliza en más del 80%. La explicación radica en que el 52% de las ERT tienen dificultades para ingresar al mercado, mientras que estudios anteriores revelaron que los principales obstáculos eran la falta de materias primas y el estado de las máquinas. Estos dos últimos parámetros parecen haberse superado porque el 71% de las ERT dice tener un dispositivo de producción en buen estado y el 59% ha invertido para mejorar o incorporar nuevos equipos. En el 60% de los casos, las cooperativas lo hicieron con fondos propios.

Mientras que el 49% de las ERT trabajan por contrato en determinadas proporciones, el 33% de las ERT dependen exclusivamente de los clientes que les proporcionan materias primas y les pagan solo por el trabajo. El 73% de las ERT dicen que mantienen los proveedores anteriores, mientras que casi el 40% de sus clientes son grandes empresas. Las ventas a otras

ERT representan el 13,5% y el 8,6% al Estado. El 47% de ellas dice tener dificultades de marketing.

Los trabajadores

La tendencia observada en 2004 se confirma ya que una gran mayoría (75%) de las ERT se clasifican en la categoría de pymes (menos de 50 trabajadores) y solo el 8% supera los 100 trabajadores. En el 84% de los casos, las ERT registraron muchas salidas durante la lucha y antes de la reanudación de la producción en forma cooperativa. Las razones suelen estar relacionadas con la caída de la producción y los salarios. Son principalmente los más jóvenes los que se han marchado. Entre los trabajadores que participaron en la recuperación de sus empresas, el 22% se jubiló y el 18% falleció (una cifra muy alta).

Sin embargo, el 77% de las ERT, han procedido a la contratación. Esta situación debe compararse con la consolidación de empresas. Cabe destacar que la contratación de nuevos trabajadores no es lo mismo en una empresa autogestionada que en una empresa clásica porque las ERT no quieren despedir trabajadores y por tanto los trabajadores no pueden ser la variable de ajuste de la producción. De hecho, la viabilidad de las ERT depende sobre todo de la preservación de los puestos de trabajo y no de los beneficios. La decisión de contratación es, por tanto, compleja y debe ser debidamente valorada, sobre todo porque se pretende que los nuevos trabajadores se conviertan en socios. Por lo tanto, la mayoría de las veces se contrata a ex empleados de la empresa o

familiares. La creación de mil puestos de trabajo es un esfuerzo importante y un indicador importante de la vitalidad de las ERT.

Las mujeres ocupan solo una sexta parte de los puestos de trabajo, principalmente en los sectores textil, sanitario y educativo y son en su mayoría jóvenes, a diferencia de los hombres.

La gestión

La principal característica de una ERT, su capital político y simbólico, es su método de gestión colectiva, que se basa en la junta directiva y la asamblea de socios. Mientras que en las cooperativas tradicionales la junta directiva vela por la gestión y convoca asambleas generales extraordinarias para validar los informes anuales y proceder a la elección de sus miembros, las ERT dependen principalmente de la asamblea general para su funcionamiento.

La participación de los trabajadores en la toma de decisiones es importante ya que el 88% de las ERT celebran juntas generales con regularidad (incluido el 44% una vez a la semana y el 35% una vez al mes). Solo el 8% de ellos ha delegado todas las decisiones en el consejo de administración.

Sin embargo, la rotación de puestos de responsabilidad sigue siendo bastante baja, ya que el 67% de los trabajadores afectados desempeñan más de un mandato. Por otro lado, dentro de los consejos de administración, el 63% de los

miembros pertenecen al sector productivo contra solo el 19% al sector administrativo. El 35% de los ex representantes sindicales integran las juntas directivas mientras que solo el 15% de los miembros pertenecía a la antigua jerarquía.

Si la tasa de ERT que emplea a trabajadores no asociados es del 46%, estos representan solo el 10% del total de puestos de trabajo, si bien se considera que están destinados a convertirse en asociados de la cooperativa el 45% de ellos según la encuesta.



La mayoría de las ERT se forman sin los empleados que anteriormente ocupaban cargos administrativos y gerenciales, por lo que es necesario subsanar la falta de capacitación y contar con el saber hacer de los trabajadores. La tendencia es, por tanto, a mantener la organización del trabajo anterior, este es el caso de más de la mitad (53%). A pesar de todo, con la introducción de nuevas máquinas y la reorganización del proceso de trabajo, el 70% de las ERT han introducido una rotación de puestos de trabajo.

En las empresas donde el tiempo de trabajo es equivalente, el 73% de los trabajadores recibe el mismo salario. Para aquellos en los que el salario no es equivalente, se justifica un 41% por la diferencia de tareas y un 27% por la cantidad de horas trabajadas. Solo el 6% de las ERT reconocen diferencias salariales superiores al 75% entre los que más ganan y los que menos ganan, mientras que en el 53% de los casos la diferencia es inferior al 25%, con una media del 33% para todos.

La cuestión sindical

La recuperación de empresas a través de la acción directa, como la ocupación, pertenece a principios ideológicos y prácticos, anclados en la tradición de resistencia de la clase obrera argentina. Sin embargo, durante los procesos de recuperación, los sindicatos han adoptado actitudes muy dispares. Si bien algunos sectores han apoyado a los trabajadores, otros han favorecido las estrategias de negociación tradicionales.

El 87% de los trabajadores dicen que estaban sindicados antes de la recuperación, lo que es significativamente más alto que la tasa general de sindicalización en Argentina (39%). Sin embargo, menos de la mitad de los representantes sindicales (43%) jugaron un papel activo durante la recuperación, el 28% adoptó una actitud pasiva durante el conflicto y en el 8% de las ERT, los delegados incluso se opusieron a la recuperación de la empresa. Actualmente, el 45% de las ERT mantienen relaciones con sindicatos de rama, proporción que se correlaciona con la

tasa citada anteriormente, en relación con el papel activo de los delegados.

Las relaciones entre la ERT y el sindicato se expresan principalmente a través del mantenimiento de garantías sociales. En Argentina, son los sindicatos los que gestionan la protección social.

Seguridad social

La ley argentina establece que la cooperativa de producción debe garantizar el acceso a la seguridad social a sus socios, pero también que estos últimos son considerados trabajadores por cuenta propia, lo que implica que los trabajadores deben afiliarse individualmente al esquema correspondiente que no les aplica más que una cobertura restringida y limitada en términos de derechos: pensiones y trabajo social y, en particular, excluye las asignaciones familiares.

Los trabajadores en edad de hacer valer sus derechos de pensión se ven obligados a continuar su actividad porque, en muchos casos, por un lado, las cotizaciones adeudadas por los empleadores no se han pagado en los últimos años y, por otro, el régimen de los trabajadores autónomos proporciona derechos de pensión más bajos.

Además, el sistema de protección de accidentes laborales solo cubre a los trabajadores que tienen una relación contractual con un empleador.

Por tanto, los trabajadores “autónomos” deben cubrir sus riesgos individualmente o la ERT, como colectivo autogestionado, debe hacerse cargo de la cobertura de accidentes personales, que es proporcionalmente mucho más cara que la protección común.

Finalmente, la cobertura médica solo cubre al titular, lo que obliga a los trabajadores a recurrir a un seguro adicional para su familia.

El Estado y las empresas recuperadas

Como se observó anteriormente, el apoyo estatal o su ausencia tiene consecuencias para las ERT y la existencia o no de herramientas legales podría simplificar o complicar los procesos. Esto se refiere en particular al marco legal de este tipo de leyes de expropiación cooperativa y de las dificultades legales no resueltas en favor de las ERT.

Las cuestiones relativas a la seguridad social, la asistencia técnica o el impacto de las políticas macroeconómicas indican claramente lo que las esferas gubernamentales podrían decidir para influir en la propia existencia de las ERT.

Durante la década, la intervención pública se limitó con frecuencia a la creación de programas de apoyo y

financiamiento, tanto a nivel nacional como provincial, pero a menudo se vieron frustrados por la actitud de ciertos jueces y funcionarios, y se caracterizaron por una gran heterogeneidad y cierta confusión. Así, la elección de Macri para el municipio de Buenos Aires fue seguida por la liquidación de los equipos especializados que trabajaban en asesoramiento de las ERT y la supresión de las líneas presupuestarias que estaban destinadas a ellas.

Sin embargo, en los últimos años se han incrementado las ayudas estatales a las ERT, a través del “Programa de trabajo autogestionado” desarrollado por el Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacional de Asociaciones y Economía Social (INAES). En 2010, el 85% de las ERT recibieron algún tipo de ayuda estatal (principalmente financiera) mientras que en 2004 eran solo el 46%.

Sin embargo, sigue siendo una política de apoyo detallada y fragmentaria sin coherencia de acción. La mayoría de las veces, son los propios trabajadores y sus organizaciones quienes tienen que ejercer presión y navegar por las complejidades de la administración para acceder a estas ayudas. Además, las ERT no tienen acceso a los créditos y planes de apoyo destinados a las PYMES, debido a la ambigüedad de su estatuto y a que el Estado que no hace nada para remediarlo.

La organización de la solidaridad

Las deficiencias de la acción sindical en el apoyo a las ERT llevaron a los trabajadores a organizarse en movimientos

específicos. El primero, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) fue creado en 2002 pero posteriormente sufrió una escisión. Hoy, el panorama aparece fragmentado entre distintas organizaciones con vocación nacional o regional, incluso por rama de actividad. A pesar de esta división, el 78% de las ERT están federadas en un movimiento. Solo uno, la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados (ANTA), es un sindicato y está adscrito a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). De los nueve grupos existentes, el movimiento nacional de fábricas recuperadas por trabajadores (MNFRT) y el MNER son los más representativos, agrupando el 41% y el 23% de las ERT respectivamente. También existe la Confederación Nacional de Cooperativas de Producción (CNTC) que federa cinco movimientos ERT y un número significativo de federaciones de cooperativas de producción clásicas de todo el país.

Si bien la encuesta de 2004 encontró la virtual inexistencia de intercambios comerciales entre las ERT (alrededor del 1,5%), actualmente el 36% de ellas tiene un vínculo económico, que se distribuye en un 90% por la compra y venta de productos o producción realizada de manera conjunta y en un 10% de apoyo financiero en forma de préstamos sin intereses. Los vínculos más fuertes se encuentran dentro de las cooperativas agrupadas en la “Red Gráfica”. Pero, en general, dada la diversidad de estructuras productivas, las posibles interrelaciones no son tan numerosas.

Durante la recuperación de las empresas, los trabajadores fueron apoyados por una amplia movilización solidaria, que en muchos casos fue decisiva. Este apoyo generó intercambios de

retroalimentación como la prestación de servicios y la solidaridad hacia las poblaciones, este es el caso del 57% de las ERT. Así, el 35% de ellos organiza eventos culturales y actividades educativas, el 30% realiza donaciones, el 24% colabora con organizaciones vecinales y el 11% con escuelas.

Este informe muestra ampliamente que durante una década, las empresas recuperadas han sido una realidad económica y social en Argentina. La potencialidad de estas formas de trabajo colectivo y “sin patrón” está demostrada por la existencia y consolidación de las ERT, pero podría ser mucho mayor con el apoyo de una política pública coherente.

Enero de 2011

Para saber más

Ruggeri, Andrés (dir.) (2010), “Las empresas recuperadas en la Argentina 2010”, Buenos Aires, octubre, www.recuperadasdoc.com.ar.

CURT-IMPEX

Pilar Gutiérrez

En 2012, los trabajadores de la empresa de cueros y pieles Curt-Impex tuvieron que enfrentarse a una fábrica vacía, endeudada y sin clientes. Hoy, cuentan su historia que ya sigue el camino de la lucha y esta pronta a convertirse en cooperativa de trabajo.

Trascurría el año 2012, y sin previo aviso, los 35 operarios pertenecientes a la fábrica de Curt-Impex SA dejaron de percibir su salario semanal, se quedaron sin vacaciones y aguinaldo, y se encontraron con que los dueños de la empresa habían dejado completamente acéfala la producción y elaboración diaria de cueros.

El único responsable que permaneció en la empresa y quedó a cargo fue un gerente «que continuó con el mismo plan de vaciamiento, sin pagar a los compañeros y manejando los hilos desde adentro », cuenta Rubén Rodríguez de Oliveira, quien es el actual presidente de la cooperativa de trabajo en formación. El trabajador, a la vez explica que la edad promedio de los compañeros era para ese momento de más de 50 años, una razón más que suficiente para pensar en las dificultades que conllevaría una potencial reinserción laboral en cada caso.

Por el contrario, los trabajadores de Curt-Impex SA decidieron en ese momento iniciar la lucha en la unidad de Cabildo 525 con el objetivo de reclamar la continuidad de sus puestos de trabajo y el pago inmediato de deudas por parte de la patronal. El monto adeudado en ese momento ascendía a 50.000 \$ USA, sólo en concepto de pago a proveedores y más de 270.000 \$ en servicios.

Este vaciamiento terminó de concretarse aproximadamente en noviembre de 2012, con la particularidad de que fueron los propios trabajadores quienes impusieron su finalización para poder organizarse y reanudar el ciclo diario de trabajo en la curtiembre, exigiendo al gerente que había quedado a cargo «que diera un paso al costado» y, en una demostración de generosidad conjunta, convocando a otros trabajadores de curtiembres cercanas que se encontraban desempleados, a pasar a formar parte de los ahora 30 socios de la cooperativa en formación.

En este sentido, el presidente de los trabajadores organizados explica que «junto con el sindicato [el de obreros curtidores] nos largamos en la aventura de autogestionarnos, para poder empezar a trabajar inmediatamente». De esta forma se dedicaron al trabajo de volver a insertar a Curt-Impex en sus niveles históricos de producción mensual de cueros y pieles, una cuestión nada sencilla.

Mientras tanto, dedicándose a esa tarea, también esperaban las matrículas nacional y provincial que son necesarias para poder empezar a funcionar legalmente como cooperativa. Pero

siguieron con su objetivo claro, y en función de ello, los operarios pusieron en marcha las máquinas.

«Convocamos a los proveedores y les pedimos que nos ayudaran a afrontar las deudas que la patronal había adquirido con ellos; llegamos a pagarles el 20 o 30% del total de lo que se les debía. Así, casi el total de los proveedores volvieron a confiar en nosotros y reanudamos el flujo de trabajo de la empresa», destacan con orgullo los trabajadores.

En diálogo con *Tiempo Argentino*, Rodríguez de Oliveira no duda en destacar el fuerte apoyo de los integrantes de la conducción del Sindicato de Obreros Curtidores (SOC) que, según sus palabras, «hicieron posibles las gestiones iniciales para la conformación de la cooperativa y, a la vez, mantuvieron la cobertura social a los más de 30 compañeros que nos habíamos quedado sin nada».

En este sentido, la experiencia de los trabajadores autogestionados de la Curtiembre Beccas SA [...], del partido de Avellaneda y muy cercana en su lucha y en los reclamos conjuntos a Curt-Impex, ratifica la política de apoyo integral que el sindicato que nuclea a los trabajadores del cuero toma frente a las empresas sociales del rubro. También en el caso de Beccas, el SOC mantiene hasta hoy la cobertura social y sigue acompañando el reclamo de los operarios de la unidad productiva por su inminente conformación como cooperativa de trabajo.

Rodríguez de Oliveira, por otra parte, se ocupó en señalar el trabajo mancomunado que se ha venido llevando a cabo con el

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social para la conformación de la empresa social, a través del otorgamiento de la Matrícula nacional (ya cuentan con la Provincial) que finalmente les permita a los trabajadores encuadrarse bajo la figura legal cooperativista.

«Nosotros buscamos todos los caminos para crecer y no trabajar en la penumbra. Lamentablemente, los tiempos de los papeles no son los nuestros, y la realidad es que necesitamos trabajar», asevera Rodríguez de Oliveira, a la vez que destaca las gestiones del gobierno nacional para permitir que el trabajo en la fábrica volviera a funcionar aun sin estar conformados en cooperativa.

La historia cuenta que el trabajo fabril de Curt-Impex llegó, en su mejor momento, a producir entre 10 mil y 15 mil pieles mensuales de nutria, conejo y zorro. Si bien los niveles de producción están actualmente por debajo de esas cifras, el apoyo de los clientes que respaldaron la conformación de la Cooperativa «sostiene el pago a proveedores y de productos necesarios para el trabajo diario».

Los socios de la empresa social en creación esperan poder crecer en número de trabajadores en el corto plazo, para de esa forma robustecer la producción como cooperativa autogestionada con plena producción y competitividad, pero también para poder ayudar a otros compañeros de la actividad que hoy se encuentran sin trabajo.

«Nosotros no pedimos nada que no nos corresponda. Únicamente queremos volver a nuestros puestos y poder funcionar como Cooperativa de Trabajo con la mayor cantidad de compañeros operando », finaliza Rodríguez de Oliveira.

19 de junio de 2014

Fuente: *Tiempo Argentino*, «La autogestión como camino»,

GÉNESIS DE UNA MOVILIZACIÓN OBRERA SIN PRECEDENTES

Maxime Quijoux

Desde finales de la década de 1990, Argentina ha experimentado una movilización social única: más de 160 empresas han sido ocupadas y luego tomadas gradualmente por sus empleados en todo el territorio (Lavaca, 2004). Colegios, hoteles, periódicos, hospitales, textil... todos los sectores de actividad se ven afectados, aunque la industria sigue siendo la más afectada. Esta movilización se da luego de treinta años de políticas neoliberales: introducidas en la época del golpe militar de 1976 para “modernizar” la economía y luchar contra el peronismo, constituyen desde la década de los noventa, la mayor parte de la acción política del doble mandato de Carlos Menem.

En nombre de la lucha contra la inflación, su gobierno está privatizando muchas empresas estatales, liberalizando el mercado laboral y vinculando el peso al dólar. La industria también está experimentando un declive histórico, debilitado por la especulación financiera y por una moneda nacional que se ha vuelto poco competitiva. A fines de la década de 1990, aunque la inflación estaba temporalmente controlada, el

historial económico y social del país era desastroso: históricamente bajo³⁰, el desempleo y el subempleo acumulados afectaron a uno de cada tres trabajadores; de manera más general, uno de cada dos argentinos vive ahora por debajo del umbral de pobreza³¹. La llegada en 1999 del presidente de centroizquierda Fernando de la Ruá no cambiará nada. Por el contrario, al mantener todas las políticas implementadas por su antecesor, precipitará al país hacia la bancarrota, provocando el 19 y 20 de diciembre de 2001, disturbios y una gran crisis política (los cacerolazos³²).

Este período de crisis económica y social coincidió con la aparición de las primeras recuperaciones de empresas: en 1996, en los suburbios de Buenos Aires, los trabajadores de una empresa constructora refrigerada decidieron ocupar su espacio de trabajo para protestar por el cierre de su fábrica. Después de una larga batalla contra el Estado y los patronos, obtienen una expropiación temporal de la fábrica y el estatus de cooperativa. En vísperas del año 2000, en un contexto de crisis generalizada, otras fábricas corrieron la misma suerte, pero el fenómeno aún era muy limitado. Experimentó una rápida expansión a raíz de los cacerolazos. El

30 A pesar de algunas fluctuaciones, el desempleo rondaba el 5% antes del golpe de Estado en 1976 (Rapoport, 2007).

31 Según cifras del Indec, "Argentina's Insee".

32 Denominamos con esta palabra la serie de manifestaciones masivas, a veces violentas, que tuvieron lugar

el 19 y 20 de diciembre de 2001, matando a 28 personas y empujando al presidente Fernando de la Ruá, que había sucedido a Carlos Menem, por dimisión. Su causa directa fue una decisión del gobierno, ante la crisis de la deuda que siguió a la de México en 2004 y a la de Brasil en 1999, para limitar los retiros de fondos en los bancos y prohibir las transferencias en el extranjero.

colapso de la economía nacional y de las autoridades públicas crea una situación propicia para la movilización social (Merlen, 2009). Había alrededor de diez empresas recuperadas antes de diciembre de 2001, su número se ha multiplicado por seis en pocos meses (Fajn, 2003).

Junto a los movimientos liderados por desocupados (piqueteros), asambleas vecinales y partidos de extrema izquierda, estas empresas se asocian generalmente con las luchas obreras más politizadas y radicales. La naturaleza de este fenómeno (ocupación y autogestión de los trabajadores) nos lleva a pensar que estas luchas corresponden a “tradiciones” de tipo marxista, opuestas al trabajo y al capital. Sin embargo, una encuesta etnográfica realizada entre 2003 y 2009 (Quijoux, 2009) atempera esta idea.

El estudio realizado dentro de dos empresas recuperadas de la capital –una en textiles, la otra en globos– revela una génesis de lucha sin precedentes: lejos de oponerse a la jerarquía, por el contrario, la ocupación y recuperación de estas fábricas es parte de la preservación de una cierta cultura laboral claramente establecida por su exjefe. A partir de estos dos casos, este artículo tiene como objetivo volver a los orígenes de estas movilizaciones obreras y mostrar cómo sus mecanismos surgen más de formas de dominación cultural en el trabajo que de las luchas tradicionales contra la opresión patronal.

¿Movilizaciones políticas?

A raíz de las revueltas del 19 y 20 de diciembre de 2001, en un contexto de agitación política, ciertas ocupaciones de empresas se volvieron emblemáticas. Una de ellas es Brukman Textile Factory. Empleando principalmente mujeres, esta fábrica de Buenos Aires se convirtió rápidamente en un símbolo de las movilizaciones en curso. Comenzando sólo veinticuatro horas antes de los cacerolazos, la movilización sigue a varios años de continua disminución de salarios y beneficios.

El 18 de diciembre de 2001, su patrón solo tenía dos pesos, - dos dólares de la época-, para ofrecer como salario semanal. De los aproximadamente cien trabajadores presentes, una veintena protestaron y exigieron una mejor paga. Sorprendido y acorralado, el jefe finge ir a buscar el dinero pero nunca regresa. Entonces comienza una lucha “inconsciente” para este pequeño grupo de trabajadores: esperan más al patrón que ocupan la fábrica. A pesar de la caída sustancial de sus salarios, siguen teniendo absoluta confianza en quien “tanto les ha dado” en el pasado. Por lo tanto, estas costureras ya se distinguen fuertemente de la imagen de la trabajadora combativa y politizada, a menudo asociada con la ocupación y la autogestión.

Sin embargo, el resto de su lucha cambiará eso. Después de un mes de esperar al jefe, un pequeño grupo de activistas trotskistas³³ hace su visita. Encuentran trabajadores a menudo

33 Los trotskistas en cuestión son miembros del PTS, Partido de los Trabajadores por el Socialismo. Es un pequeño grupo compuesto principalmente por estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. y algunos trabajadores, algunos de fábricas recuperadas. Apoyando una línea bastante ortodoxa, tratan de diversificar sus métodos de propaganda, insistiendo sobre la necesidad de visibilizar su partido en las movilizaciones y en los

temerosos de la represión de los cacerolazos observados desde las ventanas de la fábrica, temiendo una intervención similar. Logran tranquilizarlos pero sobre todo convencerlos de que el jefe no volverá. Ante lo que consideran una profunda traición, también se dejan persuadir para vender el stock y reiniciar la producción bajo el “control de los trabajadores”³⁴. Estos activistas no solo les brindan apoyo logístico externo. Ellos provocaron una politización rápida y radical de su movilización. A falta de experiencia y competencia política, las trabajadoras de Brukman asumen por su cuenta, en un contexto de ilegitimidad patronal, un repertorio de acciones colectivas y demandas muy claras: rechazan el estatus de cooperativa para exigir la “nacionalización” de la fábrica bajo el control de los trabajadores”³⁵. Organizan la ocupación por rotación, día y noche, de manifestaciones, cortes de carreteras y ocupaciones administrativas. Al mismo tiempo, relanzan la producción y se familiarizan con las decisiones colectivas y horizontales. En dos ocasiones, derrotaron los intentos de expulsión, lo que aumentó su notoriedad: Brukman se convirtió en un punto de encuentro para todos los movimientos sociales de la época. Encarnan lo que han condenado los cacerolazos, en particular el cinismo de la clase empresarial.

medios de comunicación. Para tal fin, incluso crearon su televisión por Internet, TV PTS. Muy presente durante las movilizaciones habiendo seguido los cacerolazos, ahora obtienen menos del 1% de los votos en las distintas elecciones.

34 No sin desgana por parte de gran parte del grupo que tenía muchas ganas de terminar la situación actual.

35 Este modelo no existe en Argentina. Los partidos de extrema izquierda han intentado imponer estas nacionalizaciones para algunas fábricas, aunque no existe un marco legislativo para ello. Por lo tanto, las solicitudes eran inadmisibles según la legislación argentina.

Sin embargo, su acción y su imagen de trabajadores combativos muestran sus límites paulatinamente: la lucha se empantana y son expulsados de la fábrica en abril de 2003. Esto revela profundas disparidades: la contribución política de los militantes es adoptada de manera muy desigual, lo que lleva desde el principio a una profunda división entre trabajo militante y trabajo de producción. La membresía en la movilización es muy parcial y los trabajadores generalmente malinterpretan las demandas. Aparte de un puñado de dirigentes convertidos al “control obrero”, los demás “están acostumbrados a estar detrás de su máquina, a que les den trabajo y ya está”³⁶.

La expulsión destaca sobre todo la brecha entre las propiedades sociales de estas “actrices” –su habitus– y su movilización, construida por activistas externos, en un contexto de protesta social. Estos trabajadores no solo carecen de habilidades políticas, sino que también mantuvieron una relación especial con la fábrica y el patrón durante mucho tiempo, lo que resultó ser contradictorio con ciertos métodos y demandas planteadas durante la movilización.

Cultura productivista y conducta celosa

A finales de diciembre de 2003, después de haber acampado durante meses en las afueras, los trabajadores regresaron triunfalmente a la fábrica. Ellos finalmente aceptaron la

³⁶ Según Lea (nombre ficticio), una joven trabajadora de Brukman. Entrevista realizada en marzo de 2004.

condición de cooperativa, lo que permitió el asentamiento institucional del conflicto. Pero los últimos meses han dejado huellas: han desestimado el apoyo trotskista para acercarse a un abogado peronista, clasificado más bien de derecha³⁷. Fueron sensibles a su discurso moderado, centrado en la independencia política, el respeto a la legalidad, la producción y el empleo.

Durante una entrevista en 2004, una trabajadora rechazó con vehemencia la afiliación política –circunstancial– a la extrema izquierda: “Entre nosotros, nadie está en la extrema izquierda. Es por eso que les digo que no encontré bien [los modos de lucha]”. Al igual que ella, muchas personas hoy lamentan el contenido de esta lucha. Están convencidos de que un arreglo pacífico habría sido más rápido y menos doloroso. Este sentimiento se explica tanto por la dureza de la movilización como por el perfil de los trabajadores mismos. Sus comportamientos, prácticas y discursos, asociados a una historia de su sociabilidad en el trabajo, revelan de hecho disposiciones sociológicas originales con respecto a la movilización y la autogestión. Hasta la “recuperación”, nunca habían considerado a su jefe como un enemigo.

En su trayectoria social, representó por el contrario el garante de nuevas, seguras y sostenibles condiciones de existencia. Inmigrantes, amas de casa o trabajadoras a domicilio, habían experimentado a menudo condiciones de

37 El abogado en cuestión se llama Luis Caro. También es presidente del Movimiento Nacional de fábricas recuperadas por trabajadores (MNFRT). Abogado controvertido por citas políticas sulfurosas, especialmente con ex golpistas, afirma más de 80 empresas recuperadas en su movimiento. Para obtener más información, consulte Quijoux (2009).

trabajo y empleo precarias. Su llegada a Brukman fue más parecida a un ascenso social en el que el jefe jugó un papel clave. A cambio de una alta productividad y una disciplina férrea, se aseguraron la estabilidad del trabajo y ganancias “cómodas” con el trabajo a destajo y muchas horas extraordinarias. En otras palabras, a cambio de una conducta celosa, el patrón les ofreció las condiciones de una base social y material hasta entonces desconocida para ellas. En un momento en que los salarios reales se desplomaban y el desempleo masculino se afirmaba, se reservaba un “trato preferencial” para ellos, en particular, “manteniéndoles” las horas extraordinarias y las bonificaciones, que luego fueron muy controvertidas. Constituyeron un maná económico sustancial y sobre todo adquirieron un carácter simbólico crucial, consagrando jerarquías en las que estos trabajadores se distinguían. Anteriormente subalternos y precarios, ahora conocían, gracias al jefe, un estatus social valioso.

Esta relación social quizás se afirma aún más en la otra fábrica aquí estudiada. Global, una pyme de globos ubicada en un suburbio de Buenos Aires, es una empresa que data de la década de 1940. Fue creada por iniciativa de dos industriales polacos hermanos.

Desde el principio, practican una “política de la casa” única. Las relaciones jerárquicas no solo son abiertas, incluso amistosas, como en muchas pymes. Son relaciones paternalistas, establecidas concienzudamente para estabilizar una fuerza laboral volátil.

Al igual que la fábrica Brukman, el personal de la fábrica es de hecho casi en su totalidad de origen “inmigrante”: del “interior del país” (Corrientes, Chaco, Formosa) o de países vecinos (Paraguay, Perú, Bolivia). En ambos casos, proviene de un entorno rural socialmente desfavorecido. Llegados jóvenes a la capital y sometidos a los trabajos más arduos y precarios (trabajos domésticos, limpieza o en la industria de la construcción), su contratación en Global constituye una oportunidad para afianzar trayectorias frágiles a través de la estabilidad del empleo y los ingresos. Pero significa más: por la naturaleza de las relaciones profesionales, la empresa crea las condiciones para una existencia social valorada, al tiempo que requiere una intensa inversión productiva. Los comportamientos más entusiastas son recompensados con “beneficios para la vivienda”, préstamos o servicios, a menudo acompañados de felicitaciones informales. “Me doy cuenta de que el jefe dijo que le gustaba ver felices a sus trabajadores”, me dijo un empleado en 2006 ³⁸. Para estos empleados, algunos de los cuales permanecerán en la empresa toda su vida, existe un gran sentimiento de pertenencia y reconocimiento, especialmente hacia sus jefes. Estos no son solo el origen de las condiciones materiales adecuadas, del acceso sostenible a un nivel de vida más alto. También son poderosas fuentes de identificación y categorización, mediante la incorporación de una cultura corporativa específica.

Economía moral y caída de un mundo social

38 Entrevista a Gloria, octubre de 2006.

La movilización en Global llega más tarde que en Brukman. A finales de 2005, dio lugar a la creación de una cooperativa de trabajadores³⁹. Aunque las dos fábricas se distinguen por su historia, su composición o su “recuperación”, comparten el perfil dominante de sus empleados. A sus ojos, el jefe encarna una autoridad que es a la vez justa y protectora. A cambio de una conducta disciplinada y productiva, reciben recompensas, materiales y simbólicas, que confirman cierta supremacía del trabajador. En el caso de Global, el jefe incluso tiene la figura de un “padre”, tanto por asegurar el rumbo de la vida como por la naturaleza de las relaciones profesionales. Los trabajadores de Brukman y Global forman parte, por tanto, de relaciones sociolaborales que se caracterizan por la incorporación de una cultura empresarial, a la que otorgamos confianza y legitimidad.

Sin embargo, a partir de la década de los noventa, esta cultura empresarial experimentó una serie de grandes trastornos. La economía argentina se está convirtiendo al neoliberalismo. El trabajo se libera de sus “limitaciones”. Los empresarios argentinos no tardaron en adoptar los nuevos paradigmas de la globalización. Ha llegado el momento de aumentar las ganancias y la productividad, en detrimento del empleo y la mano de obra. Pero una grave crisis (efecto tequila⁴⁰) aparece rápidamente. Lejos de frenar la liberalización financiera, se convierte en un pretexto para dismantelar la economía nacional. Aumentan las reformas, así como el

39 Para obtener más información sobre la lucha en Global, consulte Quijoux (2009).

40 En general, el "efecto tequila" se utiliza para designar las consecuencias de la crisis mexicana, en diciembre de 1994 por la repentina devaluación del peso mexicano, en otros países y en particular Argentina.

incumplimiento de la legislación laboral (impago de tasas, salarios, etc.). En tal contexto, los patrones de las fábricas Brukman y Global no se mantienen insensibles ni al modelo neoliberal, ni a las medidas tomadas por la administración de Menem (exención de cotizaciones patronales, desarrollo de contratos parciales y sin indemnización por despido, etc.) (Rapoport, 2007).

Esto comenzó a principios de la década de 1990 para Brukman, más tarde para Global. En Brukman, muchos trabajadores son despedidos oficialmente pero continúan trabajando en negro. Entre conversión ideológica y crisis económica, cada vez se trata menos de inculcar trabajo y disciplina, el interés ahora se centra en los objetivos a alcanzar y las ganancias de productividad: despidos, reducción de salarios, eliminación de horas extraordinarias, aumento de las tasas de producción, y finalmente “pluriempleo”. Se podría pensar que los cimientos de la antigua cultura patronal están amenazados. En realidad, permanece relativamente a salvo: a pesar de estas nuevas políticas, los patronos mantienen la misma “fachada” (Goffman, 1973), el mismo comportamiento cercano y amistoso. Es decir, mantienen la ilusión de las relaciones profesionales de antaño para aprovecharse mejor del sentimiento de pertenencia a la empresa de estos trabajadores.

En solidaridad con un patrón que “siempre” les ha dado “tanto”, se someten por fidelidad a los sacrificios impuestos oficialmente, no por los patronos, sino por las dificultades fuera de la fábrica. Porque en última instancia, quieren escapar de lo peor estos empleados que se consideran los mejores: el

desempleo. Su lealtad casi incondicional debe preservarlos de ello.

Cuando estos empleados toman conciencia del abandono (Brukman) o del cierre (Global) de la fábrica por parte de sus jefes, la movilización es, por tanto, más una cuestión de economía moral (Thompson, 1988) que de razones estrictamente políticas. Se dan cuenta de la “hipocresía” (Goffman, 1973) del que fueron víctimas, por parte de una persona que sin embargo estuvo en el origen de su ascenso económico y social.

Al abandonar a “sus” mejores trabajadores, el patrón no sólo les roba años de sacrificio, sino que ya no respeta los términos de un contrato moral que él mismo había impuesto: recompensar la conducta de los trabajadores compuesta de disciplina y productividad a través de la garantía de compensación material y simbólica. En otras palabras, la garantía de su valor social.

La originalidad de la brecha aquí subrayada entre los actores –“trabajadores celosos”– y la movilización –recuperación fabril– no significa que se trate de luchas aisladas o de tipo “exótico”. Por el contrario, muchas investigaciones sobre el fenómeno sugieren que este cambio es recurrente (Balladares, 2007; Álvarez, 2006; Rebon, 2004).

Entonces se puede plantear la cuestión de su impacto en la autogestión y, de manera más general, en la viabilidad de estas fábricas. Primera observación: más de diez años después de las primeras recuperaciones, casi ninguna de estas 170 empresas

ha cerrado. Por el contrario, algunas han experimentado un notable resurgimiento de la actividad. Pero no deben ocultarse las limitaciones que pesan sobre estas cooperativas. Así, tanto en Brukman como en Nueva Esperanza (ex-Global), las condiciones laborales y los salarios se han deteriorado considerablemente.

El ruinoso estado de las instalaciones, la falta de personal cualificado y la competencia debilitan a estas empresas, a veces al borde del colapso. Además de estas dificultades estructurales, podemos señalar que los antiguos trabajadores modelo tienen dificultades para trabajar juntos, para “cooperar”.

Con experiencia en productividad y salarios a destajo, a veces tienen dificultades en la transición a la autogestión. Dependiendo de la ayuda de las autoridades locales y federales, y beneficiándose de una economía nacional relativamente floreciente, estas empresas lo están "haciendo bien" hoy. Pero cualquier cambio en la situación política o económica los pondría en riesgo.

2010

Fuente: *Saber actuar*, n ° 13, 2010.

Para saber más:

- Balladares, C. (2007), Entre la “fabrica bajo patrón” y la “cooperativa de trabajadores”. Apuntes sobre una empresa recuperada argentina, Buenos Aires, Mimeo.
- Fajn, G. (ed.) (2003), Fâbricas y empresas recuperadas, social protesta, self-management y rupturas en la subjetividad, Buenos Aires, Centro Cultural de la Cooperacion.
- Fernández Álvarez, MI (2006), De la supervivencia a la dignidad. Una etnografía de los procesos de “recuperacion” de fabricas en la ciudad de Buenos Aires, tesis de antropología, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Estudios Superiores en Ciencias Sociales
- Goffman, Erving (1973), La puesta en escena de la vida cotidiana, París, Medianoche.
- Lavaca (colectivo) (2004), Sinpatron, Buenos Aires, Lavaca.
- Merklen, Denis (2009), Barrios populares, barrios políticos, París, La Dispute.
- Quijoux, Maxime (2009), Autogestión y apropiaciones populares de las clases trabajadoras en Argentina, tesis doctoral en sociología, Sorbonne Nouvelle–Universidad de París 3.
- Rapoport, M. (2007), Historia económica, social y política de Argentina, Buenos Aires, Emece.
- Rebon, J. (2004), Desobedeciendo al desempleo, la experiencia de empresas recuperadas, Buenos Aires, Picaso / La Rosa Blindada.
- Thompson, Edward P (1988), La formación de la clase trabajadora inglesa, París, Le Seuil.

JUGOS SUIN: EL JUGO DE FRUTAS AHORA SABE A TRABAJADORES

Gabriel Martín

Llegaron a tener 360 empleados. Pero quedaron 22 en la quiebra, y conformaron una cooperativa para reactivar una fábrica de zumos que había sido vaciada. Sin dinero para operar, se financiaron vendiendo cartones y hoy producen 1,8 millones de botellas de zumos por mes.

La pulcritud de la planta de Lanús Oeste es absoluta y estricta. El único sonido que musicaliza la jornada laboral es el de la máquina que acomoda las botellas plásticas que, en una fila sin fin, son rellenas con jugos a ritmo constante. Cuando comenzó a operar en 1985, Jugos Suin tuvo un crecimiento astronómico en apenas una década. Atravesó el estallido de fines de los 80 con pocos años en el mercado y mantuvo su crecimiento, alcanzando su techo en 1995.

Llegó a tener tres plantas distribuidas en Dock Sud, Barracas y Lanús con 365 trabajadores. Al auge del primer decenio, le llegaría la debacle que terminaría en la quiebra, en los diez años siguientes.

La empresa, propiedad de Claudio Roberto Balducci y José Walter Shore, se convertiría en Citrus Argentina SA, presuntamente integrada por otros tres miembros. Promediando la década menemista, las ventas comenzaron a bajar y financiar la operatividad era una misión cada vez más complicada, y la patronal comenzó a pegar por donde siempre : los trabajadores.

Para 1999, ya habían vendido las plantas de Dock Sud y Barracas, trasladando a todos los trabajadores a las instalaciones de Lanús. Y allí comenzaron despidos al por mayor, de a veinte y cincuenta trabajadores y en un momento los dueños emitieron al mismo tiempo la friolera de 170 telegramas de despidos, lanzando a la calle de un país, con un modelo acabado, a familias que tardarían, en la mayoría de los casos, mucho tiempo en encontrar otro sustento.

Sólo quedaron 67 compañeros. A fines de 2001, apenas eran 37. Juan Aguirre tiene 52 años y comenzó a trabajar en Suin en 1990 como operario general, y cinco años más tarde fue elegido como delegado gremial por sus compañeros. En diálogo con *Tiempo Argentino*, Aguirre relata que para 2001, «la patronal comienza a alejarse de la dirección personal de la fábrica y la gestión queda a cargo de una jefa de personal, otra de compras y el jefe de producción» y agrega que luego realizaron otra maniobra: «Dijeron que le habían vendido la planta a una persona, José Antonio Cantero, que vino y comenzó a vaciar a la empresa, vino con los zapatos destrozados y se fue en un Mercedes Benz.»

En ese momento la empresa perdió los cinco autoelevadores, los tornos y las máquinas de llenar las gaseosas y hasta las computadoras.

En un mes, había liquidado el stock. En la fábrica ni sabían quién era. El atraso salarial ya llevaba ocho meses, y finalmente se llegó a un límite. El presunto dueño nuevo también quiso vender la máquina productora del zumo, lo que significaba directamente el fin de la fábrica. «Le dijimos que no, y con esa máquina es con la que hoy producimos en la cooperativa», cuenta Juan. Con los sueldos atrasados, a comienzos de 2002 los empleados de Suin decidieron tomar la fábrica por única vez: «En dos horas apareció la plata», cuenta Juan.

De entre las cenizas y cartones. En agosto de 2005, Jugos Suin llegó a la quiebra. Hacía tiempo que los trabajadores no tenían ingresos y cuentan que la mayoría vivía de prestado para poder alimentar a sus familias, endeudándose. Apenas quedaban 22. Meses antes, Cantero quería retirar la máquina rellenadora de envases, afirmando que compraría una nueva.

«No le creímos y se fue diciendo que la traería para que viéramos que no mentía. Se fue y no lo volvimos a ver nunca más», cuenta Aguirre.

Al mes siguiente llegaron a la puerta de la fábrica los síndicos con la orden de desalojo y pudieron negociar que quedaran tres trabajadores en el interior, custodiando las máquinas y cobrando un salario, pero esto duró apenas un mes más, hasta septiembre, cuando se produce el desalojo definitivo.

«Uno de los trabajadores que vive a la vuelta de la planta se dio cuenta de que habían dejado la puerta abierta, por lo que si querían se llevaban las máquinas y no quedaba nada, pero ahí nos movilizamos y fuimos a la comisaría a hacer la denuncia, como les ganamos de mano a los síndicos, nos pusieron en guarda judicial», cuenta Aguirre. Así es que los trabajadores, en una fábrica arrasada, sin fondos, sin luz ni agua siquiera, comienzan a avanzar hacia el único plan viable para preservar la fuente de trabajo. «No conocíamos nada de la realidad de las empresas recuperadas en aquel entonces», rememora Aguirre: «Empezamos a recibir ayuda de otros compañeros de autogestionadas, aprendimos de sus experiencias, yo apenas tenía una vaga idea de cooperativismo con un compañero. Fuimos al sindicato pero nos dejaron solos y finalmente nos pusimos en contacto con un abogado del municipio que nos dio una mano y nos conectó con un colega de él para conformar la cooperativa.»

De ese modo, se oficializó el 25 de diciembre de 2005 la Cooperativa Citrus Argentina. En la mayoría de los casos de cooperativas surgidas de una empresa fallida, se encuentra la carencia de personal administrativo que, como es natural, accede primero a la información de la situación real de la fábrica y decide marcharse antes del final. La comercialización «Fue de lo más difícil para nosotros, no teníamos idea de cómo hacerlo, pero algunos compañeros comenzaron a salir a la calle y hacerse cargo de la venta, y fuimos adquiriendo experiencia y así empezamos a crecer», explica Aguirre.

Los nuevos socios afrontaron las deudas heredadas por falta de pago de numerosos créditos y revirtieron de ese modo la

pésima imagen que se había generado entre los clientes de la antigua firma. Las deudas, cuentan los trabajadores, llegaron a casi 30 millones de dólares, de los cuales un millón y medio correspondía a salarios, aportes patronales, beneficios e indemnizaciones por despidos jamás liquidados.

Los clientes fueron una tarea difícil. Muchos habían pagado por adelantado mercadería que nunca les fue entregada y los trabajadores tuvieron que desarrollar intensas reuniones para revertir la situación.

Como capital inicial contaban con cero pesos. Lograron rehabilitar los servicios esenciales, agua y luz, con dinero que les prestaron los trabajadores del Astilleros Unidos de Dock Sud.

Pero había que producir y no había con qué. «Empezamos vendiendo cartones y otras cosas que encontramos en la planta y nos hicimos de los primeros fondos para empezar a producir», recuerda Juan Aguirre, que ahora es presidente de la cooperativa Citrus.

Casi una década después de poner en marcha la autogestión de la fábrica, los trabajadores de Citrus envasan 300 mil packs de seis botellas por mes (1,8 millones de envases), produciendo 30 mil litros de zumos concentrados de naranja, ananá, pomelo, manzana, mandarina, durazno, pera y multifruta, distribuidos en una importante cartera de clientes, en la que se encuentran La Anónima, Diarco, HiperMay y con presencia en las provincias de Buenos Aires, Formosa, Chaco, Salta, Misiones, Corrientes y en toda la Patagonia.

Este año se sumaron al mercado de aguas saborizadas.

De los 22 socios fundadores de la cooperativa, hoy la planta cuenta con 53 trabajadores gracias también al apoyo del Estado que con subsidios del Ministerio de Trabajo primero, y Desarrollo Social después, les permitió comprar nuevas máquinas y materias primas, fabricar sus propios envases y sumar personal. «Estamos muy orgullosos de ser dueños de nuestro trabajo. No pensamos esto únicamente para nosotros sino también en nuestros hijos y nietos, queremos que quede para ellos», afirma Aguirre.

30 de octubre de 2014

Fuente

“Jugos Suin ahora vienen con el sabor de los trabajadores”,
Cooperativa de Trabajo Citrus Argentina,
<http://tiempo.infonews.com/nota/136477/ los-jugos-suin-ahora-vienen-con-el-sabor-de -los-trabajadores>.

LAS MÚLTIPLES FACETAS DE LAS COOPERATIVAS

Frank Mintz

En Argentina, el término “cooperativa” abarca los casos de empresas recuperadas o también el de reagrupamiento de desocupados que desarrollan una actividad de interés público reconocida a nivel municipal, y también cualquier producción, independientemente del significado habitual en Europa (desde cooperativas bancarias hasta Scops).

Consideraré diferentes casos enfatizando que Argentina no está en el primer mundo y navega en todos los campos socio-económicos según una brújula particular. Es el mismo instrumento que en el primer mundo, pero si el factor “corrupción” está presente en el 10% de citas, expedientes, etc. lo es de hecho, el 90% para los puestos y casos más importantes [...]. Último aspecto típico, una CGT en la bota de los gobernadores, mafiosos y adoptando desde hace un tiempo una crítica de izquierda a la presidencia de la República (que quiere eliminar a su líder demasiado invasivo) y la Central de trabajadores argentinos, creada (CTA) en 1995 sobre una base no corrupta y no neoliberal, muy dañada y dividida en dos desde 2010.

Las cooperativas de empresas y fábricas recuperadas

Para existir legalmente, cada cooperativa debe tener un estatus legal. En este caso, podemos deducir que un estatus estable significa una conducta neoliberal aceptable, y sin estabilidad legal todavía, por lo tanto, equivale a un peligro que el neoliberalismo argentino busca domesticar.

Las últimas cifras oficiales indican unas 200 empresas que agrupan a unos 10.000 empleados, incluso con tres o cuatro personas por familia, sólo tenemos 40.000 personas directamente interesadas. Esto es una gota de agua en comparación con los dos millones de desempleados que participan en cooperativas.

Sin embargo, es una experiencia que tiene una gran conciencia proletaria y es incuestionablemente formativa. Inicialmente, aunque hubo precedentes en la década de 1990, fue la crisis de 2001, principalmente el tsunami del 19 y 20 de diciembre de 2001, lo que provocó la fuga de numerosos patronos sin poder pagar salarios (los más “graves” con algunas o todas las máquinas). La respuesta improvisada de los trabajadores, en muchas ocasiones, ha sido la ocupación, ya sea para vender el resto de las máquinas para su beneficio, o para producir un poco y embolsarse algo, frente a un arreglo legal de la situación. No se propusieron consignas, ni sindicales ni políticas, en cuanto al famoso “que se vayan todos” (“que se vayan todos”, equivalente a “que se disparen todos”) a la dirección de todos los partidos sin excepción.

Otro elemento que hay que tener en cuenta es que los trabajadores están endeudados, empobrecidos, que no pueden hacer ninguna inversión, porque no tienen para comer. [...] Al final, hay que saber que se trata de empresas que se vacían de materia prima [...] con máquinas en mal estado, porque no se les hizo mantenimiento, y [sin embargo] estas empresas producen.

En el período 2010–2012, siguen apareciendo algunos casos, que se enfrentan a problemas de retrasos salariales y dificultades legales.

La verdadera distinción que debe hacerse es entre “empresas de islas privadas” y “empresas de islas abiertas”. De las 200 empresas recuperadas, las “islas abiertas” son, aproximadamente, FaSinPat (Fábrica sin patrón), ex–Zanón, una gran producción de cerámica en la Patagonia, en Neuquén; el gran hotel Bauen de Buenos Aires, una Empresa Nacional; la Imprenta Chilavert de Buenos Aires y una decena más. El resto está formado por “islas cerradas”, cuya existencia es casi desconocida (Unión Papelera Platense en La Plata).

Un ejemplo brillante es el de la empresa Brukman (una empresa textil con un centenar de empleados), encabezada por la fuerte solidaridad que brindan los grupos trotskistas argentinos, y en todos los países donde existen, entre 2001 y 2003. Existe un estudio externo e interno para 2004 y 2006 de Maxime Quijoux, *Neoliberalismo y autogestión: la experiencia argentina* (2011). El clima actual lo resume una líder, Celia Martínez, cercana al trotskismo hasta el punto de presentarse como candidata a las elecciones legislativas en Buenos Aires,

luego peronista (de una posible legalización como cooperativa a través de un líder obrero peronista). Alrededor de 2007, explicó:

Mientras estuvimos en el conflicto la gente estuvo muy unida con nosotros y nosotros también estuvimos muy unidos. Pero ahora ni siquiera vamos a marchas [de protesta]. No sé, tal vez estar en el Movimiento [Negocio Nacional de Salvamento] nos ha hecho más egoístas. Es la misma plantilla y la misma producción, pero sin apertura y sin solidaridad con el barrio, los comedores populares, los cientos de casos de lucha e injusticia social que sacuden al país cada mes.

Por otro lado, tenemos FaSinPat. Siendo una cooperativa legalizada, entonces en estado incierto debido a una denuncia del propietario legal italo–argentino ante la Unión Europea, FaSinPat sigue irradiando solidaridad, reduciendo accidentes laborales, creando empleos a favor de los discapacitados y los pueblos originarios mapuche. Una herejía para las clases medias argentinas (que dicen ser de origen europeo y viven con dos criterios: el de los ganadores y los perdedores y una cantidad significativa de dólares en la cuenta bancaria).

Cabe agregar que la situación es compleja porque las empresas recuperadas “islas abiertas” e “islas cerradas” tienen aspectos idénticos en la vida cotidiana. A nivel financiero, el acceso a la ayuda y la distribución se ve obstaculizado por su situación. En el nivel interno de la operación de autogestión, se aplica y se discute en cada caso el salario único y una cierta

diferenciación en la retribución según las tareas. Lo mismo ocurre con el papel de las asambleas y el liderazgo y su relación entre sí. No hay un patrón único.

Las cooperativas de desempleados que buscan un trabajo digno

La población afectada es la de los *piqueteros* (desempleados que luchan por su derecho a un trabajo real y digno). En muchos casos ya, la tercera generación de desempleados de la misma familia está en edad de trabajar. Dejamos a un lado el trabajo infantil (en agricultura intensiva, en el cuidado de gallinas, como indicadores de los límites de los campos de soja a fumigar) y la mortalidad debida a los productos químicos, sin mencionar la prostitución de menores muy pequeños, sumada a la trata de niños bolivianos.

En las principales estadísticas distorsionadas por la Presidencia de la República desde 2007, los piqueteros y sus familias representan alrededor de 2 millones de personas, cuyos ingresos alcanzan menos de la mitad del salario mínimo de 2011. Este salario está completamente desfasado, dada la inflación, y los aumentos del 30% otorgados en 2012 a empleados de las grandes empresas.

Es la escasez, más que la hambruna, la necesidad de supervivencia lo que explica entre los piqueteros la aparición de una multitud de microemprendimientos, mini cooperativas que se dirigen a una “clientela” sobre todo del mismo origen social, posiblemente unos pocos activistas y sus familias de clase media. Entonces vemos media docena de personas en un

huerto comunitario, una panadería, un taller de costura (y una escuela), una forja para hacer herramientas, recicladores de plástico que hacen escobas, etc. Hay que sumar grupos con actividades en la red vial, alcantarillado, etc., pagados por los ayuntamientos por 4 horas de trabajo por día (sin derecho a la seguridad social ni a ninguna antigüedad).

Lo significativo, se ubica en tres niveles, por orden de importancia. Encontrar o descubrir trabajos útiles, de calidad, gratificantes y reconocidos por los demás, de ahí el respeto a la puntualidad y asistencia de los nuevos empleados. Fortalecer las relaciones humanas sin jesuitismo jerárquico y crear hitos para una vida social fuera del capitalismo; para otro futuro. Y esto no solo de palabra, sino dentro de las organizaciones de piqueteros y dentro de sus mini cooperativas.

Esto se aplica, como en las asambleas vecinales semanales sobre la distribución de alimentos recibidos o por reclamar, para practicar la autogestión en la base con sus peculiaridades. De hecho, la rotación laboral es inaplicable en una panadería de Lanús (suburbio de Buenos Aires) donde solo hay una persona que conoce el trabajo y le gusta y no le molesta el hecho de trabajar entre la 1 y las 5 de la madrugada. También es necesario tener en cuenta las numerosas manifestaciones de solidaridad, generales o locales, y las sustituciones planificadas e improvisadas.

Agregaré una última área, el “bachillerato popular” que se ofrece a los jóvenes adultos que han abandonado sus estudios. Si Argentina tuvo una mayor educación y tasa de analfabetismo que España e Italia en los años 1965–1975, todo

cambió con la dictadura militar (1976–1983) y la introducción del neoliberalismo y las privatizaciones ametralladora. Brillantemente continuadas y profundizadas por los gobiernos democráticos de 1983 a 2012. Lo que ha dado lugar a una consecuencia cultural interesante: el aumento del analfabetismo y la ignorancia. Gran parte de los niños de secundaria que querían ir al bachillerato abandonaron el sistema escolar por el costo del transporte que las familias ya no podían permitirse, debido al incremento del costo de la vida a partir de diciembre de 2001. Un lema característico del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en marzo de 2004 fue, (el año escolar va de marzo a principios de diciembre) “Para este año, solo el 50% de los abandonos escolares”.

Las licenciaturas populares son ofrecidas por equipos de organizaciones piqueteras. Son docentes que trabajan horas extras o estudiantes que tienen al menos el 50% de sus títulos (norma del Ministerio de Educación cuando contrata auxiliares). El gran problema es que la enseñanza es una mezcla de los programas oficiales y la pedagogía de Paulo Freire (basado en las necesidades de los alumnos y reflexiones sobre su estilo de vida). En ocasiones también tenemos padres que cursan el bachillerato popular para adquirir conocimientos. Nos encontramos con los problemas de asistencia, de la necesidad de integrarse en un grupo y de los docentes, porque al menos por lo que sé, en La Plata, en varias asignaturas hay dos docentes (según sus posibilidades profesionales semanales). Es muy gratificante para alumnos y profesores. Pero completamente inestable porque casi imposible de administrar para los 24 ministros de educación del país y el ministro de educación nacional.

Ellos proponen el marco de la educación privada, por lo tanto el control de los programas y los docentes y de los impuestos a pagar. El razonamiento al que se oponen los docentes de los bachilleratos populares que cumplen el papel que el Estado se niega a brindar: la recuperación de una gran parte de los jóvenes condenados a la marginación cultural, de ahí la demanda de sueldos, premisas a cargo del Estado y reconocimiento de programas específicos.

La situación es mucho más fácil para determinadas empresas recuperadas que ofrecen el equivalente a un bachillerato profesional en su campo (imprenta Chilavert). Este ejemplo aún no es seguido por otras empresas recuperadas.

Como vemos, la Argentina de los piqueteros ofrece un panorama complejo y rico, constantemente desgarrado por los sobornos de los gobernantes del momento, que viven solo del clientelismo, en contraposición a los piqueteros que se basan en relaciones horizontalistas.

Agosto 2012

Para saber más

Quijoux, Maxime (2011), *Neoliberalismo y autogestión: La experiencia argentina*, París, IEHAL.

Fuente: *Emancipación*, septiembre de 2012.

OCUPAR, RESISTIR, PRODUCIR

Andrés Ruggeri

¿Podría presentarnos la magnitud del fenómeno de las recuperaciones de empresas por parte de los trabajadores en Argentina, su origen y su evolución?

En nuestro trabajo, hemos definido la empresa recuperada como el proceso en el que una empresa capitalista, estructurada en forma tradicional, generalmente abandonada o cerrada por sus dueños, se transforma en una empresa colectiva bajo formas autogestionadas. Los motivos que generan este proceso pueden ser varios. Pero en general, es el abandono por parte del patrón, a veces motivado por la crisis económica o porque forma parte de una búsqueda de acumulación de capital. Consiste en abandonar una empresa que no le permite obtener las ganancias sustanciales que desea y que lo lleva a privilegiar la inversión financiera. En otros, se trata de realizar una transformación tecnológica que permita la reducción de personal; los empresarios prefieren deshacerse los trabajadores sin pagar las indemnizaciones mediante una quiebra fraudulenta.

Todas estas situaciones son generalmente consecuencias de la política económica neoliberal, aunque son comunes en el

capitalismo como sistema. Esta situación es muy diferente a aquellas a que los trabajadores están acostumbrados a enfrentar en la organización y la experiencia sindical, en las que luchan contra el capitalista por salarios y condiciones de trabajo, sino que ahora, el capitalista no intenta necesariamente aumentar la plusvalía, excepto que pierde interés en la relación salarial. Ante esto, los trabajadores desarrollan una estrategia de ocupación de establecimientos con vistas a la formación de cooperativas o mediante otras formas de organización autogestionada.

El lema “Ocupar, resistir, producir”, que el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) tomó prestado del movimiento sin tierra brasileño, sintetiza las etapas más frecuentes del proceso, aunque no necesariamente cronológicas. La toma⁴¹, o la ocupación tiene como primera finalidad proteger instalaciones y máquinas del desmantelamiento que impediría continuar la producción, y generalmente se hace bajo el argumento legal de mantener sus puestos de trabajo. Si bien la legislación es muy desfavorable, la experiencia ha brindado herramientas de defensa legal a los trabajadores, que intentan aprovechar las áreas grises de la ley, diseñada para defender la propiedad privada más que el derecho al trabajo, para poder enfrentar y detener el cierre de la planta o su evacuación. La resistencia es la fase posterior a la ocupación cuando existe una amenaza de desalojo por parte de las autoridades judiciales o, incluso, cuando se produce. Este es el período crucial en el que el colectivo de trabajadores debe

41 El término "toma" (captura, ocupación) se utiliza en referencia a la huelga general de mayo-junio de 1964 durante el cual 3 millones de trabajadores ocuparon 4.000 empresas y empezaron a organizar la producción.

permanecer unido y así forjar los mecanismos de toma de decisiones y distribución de responsabilidades que posteriormente serán fundamentales. Finalmente, la producción es el objetivo final del proceso, cuando la cooperativa está formada y en posesión de las instalaciones.

Como hemos indicado anteriormente, estas fases no siempre son consecutivas, hay casos en los que los trabajadores nunca se rindieron o no se vieron obligados a ocupar su empresa y continuar la producción sin interrupción, sin embargo no son la mayoría. En general, existe un conflicto significativo y traumático que provoca que los trabajadores que piensan que tienen otras oportunidades de encontrar otro trabajo se vayan, generalmente el personal administrativo, jerárquico y técnico, la mayoría de las veces en connivencia con el empleador.

Según las cifras de nuestra última encuesta, había 205 ERT en Argentina, que empleaban a poco menos de 10.000 trabajadores. Desde entonces, muchas empresas han sido absorbidas o están en conflicto, lo que eleva la cifra a algo así como más de 310 y el número de trabajadores a 13.500⁴². Esto significa, en particular, que el proceso de recuperación de empresas de los trabajadores en Argentina está lejos de estar estancado o agotado. Al contrario, es un fenómeno que se mantiene vivo y en aumento como respuesta de la clase obrera al abandono de diversas fábricas y negocios por parte de los capitalistas.

42 Encuesta realizada entre septiembre de 2009 y marzo de 2010. La cifra de 310 ERT corresponde a un censo realizado a finales de 2013.

¿Estas experiencias realmente ayudan a establecer nuevas formas de organización del trabajo y nuevas relaciones sociales en la empresa?

Ante la ausencia del patrón, surge la necesidad de una organización colectiva. La mayoría de las ERT se estructuran en cooperativas de producción, que es la forma jurídica más adecuada para poder operar en el mercado, pero lo hacen de forma mucho más democrática que las cooperativas tradicionales, con la preeminencia absoluta de la asamblea, como órgano deliberativo y ejecutivo de la política de la empresa. En este sentido, la apropiación individual de la producción colectiva deja de ser el factor clave de la empresa. La acumulación de capital mediante la explotación de la fuerza de trabajo de los trabajadores, en busca de la máxima ganancia, deja de ser el objetivo esencial de la unidad económica, que se sustituye por la salvaguarda y la creación de puestos de trabajo. Es un cambio fundamental. Pero, por otro lado, este cambio interno en su lógica de funcionamiento y objetivos debe caer dentro de los estrechos márgenes del funcionamiento del mercado capitalista, que impone estas condiciones. La contradicción entre estas dos lógicas es el gran problema de la autogestión en el marco del capitalismo, tanto para las ERT argentinas como para las demás experiencias del país y del mundo.

Al mismo tiempo, más allá de la democratización de la estructura de toma de decisiones y otros cambios (muchas veces obligatorios) como la rotación laboral y la colegialidad de la gestión, es mucho más difícil encontrar alteraciones en los procesos de trabajo, generalmente condicionadas por las

máquinas e instalaciones existentes, sino también por la formación y la trayectoria de los trabajadores. Es aquí donde notamos más el carácter necesariamente aislado que siguen teniendo estas experiencias.

¿Cuáles son los avances y las dificultades de estas experiencias de autogestión?

Las dificultades son numerosas, entre el estado inicial de la fábrica o de la empresa y el momento de reiniciar la producción, lo que a menudo supone máquinas ausentes, o en mal estado de mantenimiento y obsoletas, pero la más importante es la falta de capital para la compra de materias primas y ajuste de máquinas, etc. Es por ello que los primeros tiempos son muy difíciles y los trabajadores suelen tener que trabajar con salarios muy exigüos, a veces solo a nivel de subsistencia hasta que pueden recapitalizar o mejorar el nivel de actividad de la empresa para poder incrementar sus salarios. Esta situación implica frecuentemente la necesidad de recurrir a la obra por contrato, que consiste en vender el “servicio” de la producción a un contratista externo que suministra las materias primas, paga el precio convenido por el producto terminado y distribuye y vende al exterior. Pero el principal problema es que al adoptar una forma de organización colectiva que prescindiera del jefe y, en algunos casos, de cualquier tipo de jerarquía interna, los trabajadores –que han sido empleados toda su vida– deben transformarse en trabajadores autogestionarios, transformarse ellos mismos en un colectivo de gestión que no solo reemplaza al jefe, sino que lo hace de manera socializada.

¿La recuperación de las empresas por parte de los trabajadores te parece un proceso viable y constituye una de las respuestas a la crisis del capitalismo y contribuye a un proyecto de emancipación?

El hecho de que la recuperación de empresas por parte de los trabajadores sea un proceso viable lo demuestran los hechos y no solo en Argentina. También es evidente que se trata de una posible y creciente respuesta a una de las consecuencias más perjudiciales para los trabajadores, como son el cierre de las herramientas del trabajo y el paro estructural de la actual crisis capitalista.

Al mismo tiempo, este fenómeno está intrínsecamente ligado a la evolución global del capitalismo responsable de la formación de una clase obrera cada vez más precaria y dotada de cada vez menos derechos, a medida que se desmantelan las viejas conquistas del movimiento obrero.

La recuperación de empresas por parte de los trabajadores se encuentra en la encrucijada de estos dos procesos: la defensa de los derechos laborales y la resistencia a la precariedad, pero con la virtud de generar simultáneamente una nueva lógica económica, la de la autogestión. Sin afirmar necesariamente que de estas experiencias surja un nuevo proceso emancipatorio, ciertamente abren un camino para la formulación o reformulación de ese proyecto.

Como académico que estás investigando este proceso, ¿podrías explicar la metodología utilizada?

El programa “Facultad Abierta” no se limita a la investigación y busca fundamentalmente apoyar y fortalecer procesos. Aseguramos que todas las iniciativas tengan un significado acorde a las necesidades del movimiento obrero, y al mismo tiempo que vayan más allá de los condicionamientos ligados a la coyuntura en la que se insertan cada lucha y proceso.

Es por ello que además de encuestas y otras investigaciones más conocidas, lo importante para nosotros es tener un vínculo permanente y confianza mutua con los protagonistas de la autogestión, así como contribuir al desarrollo tanto como a considerar discusiones más globales, incluso a nivel teórico, como proponemos en el marco de los encuentros de “La economía de los trabajadores”.

La metodología de la investigación no se aleja de este trabajo de articulación porque los objetivos planteados siempre están en consonancia con el objetivo de reforzar los procesos de autogestión, sin abandonar, sin embargo, la capacidad crítica.

En el caso de las encuestas siempre respetamos la voluntad de los trabajadores por la información que quieran dar y lo que intentamos hacer es una sistematización de sus conocimientos con el fin de poder ordenar y sistematizar los diferentes aspectos, organizar y aclarar las solicitudes y proporcionar a todos material para discutir los problemas y orientaciones del movimiento.

Pero al mismo tiempo, es un material de calidad científica para los investigadores y para quienes deciden sobre políticas

públicas, lo que ha permitido en particular monitorear el proceso durante los últimos doce años, trabajo que recientemente ha demostrado su compatibilidad con investigaciones similares en otros países, como Brasil.

Verano 2014

Fuente: Entrevista publicada en *Contretemps*, n ° 22, verano de 2014.

Para saber más:

Cuadernos para la autogestion, [www.recuperadasdoc.com.ar/cuadernos_autogestion](http://www.recuperadasdoc.com.ar/cuadernos_autogestion.html).html.

Programa Facultad Abierta: www.recuperadasdoc.com.ar y resúmenes en francés en el sitio web de la Asociación: www.autogestion.asso.fr/?p=2071.

Ruggeri, Andrés (2011), *Las empresas recuperadas en la Argentina 2010: Informe del tercer relevamiento de empresas recuperadas por sus trabajadores*, Buenos Aires, Ediciones de la cooperativa Chilavert.

Ruggeri, Andrés (2012), *Las empresas recuperadas: Autogestion obrera en Argentina y América Latina*, Buenos Aires, Editorial de la Facultad de filosofía y Letras.

- Ruggeri, Andrés (2014), Informe del 4 relevamiento de empresas recuperadas en la Argentina: Las empresas recuperadas en el periodo 2010–2013, Buenos Aires, Facultad de filosofía y Letras.
- Ruggeri, Andrés (2015), “Ocupar, resistir, producir”: Autogestión de trabajadores y empresas recuperados en Argentina, París, Syll epse, www.syllepse.net/Ing_FR_srub_37_ipro-d_631-ocuper-resister-prod_uire.html.
- Ruggeri, Andrés et al. (2014), Cooperativa Textiles Pigüé: Una historia de la recovery de una fábrica de Gatic, Buenos Aires, Continente.
- Ruggeri, Andrés, Henrique Novaes y Mauncio Sarda de Faria (ed.) (2014), Crisis y autogestion en el siglo XXI: Cooperativas y empresas recuperadas en tiempos de neoliberalismo, Buenos Aires, Continente.

PIPINAS, UN HOTEL ABANDONADO Y RECUPERADO

Pablo Waisberg

Un grupo de jóvenes que se negaba a dejar el lugar decidió recuperar el territorio en el que se habían nacido y criado.

Ahora albergan a turistas y también a los técnicos de la CONAE que pondrán en marcha el primer lanzador espacial de satélites de Latinoamérica.

La historia de la Cooperativa Pipinas Viva y de todo ese pueblo bonaerense de menos de mil habitantes está atravesado por las disputas políticas de compañías que integra la cúpula del empresariado y, también, por el desarrollo del primer lanzador espacial para colocar satélites en órbita. Los nombres de esa historia son Corcemar, Loma Negra y Tronador II, proyectos en que trabajan más de 600 técnicos liderados por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). El pueblo pareció morir cuando la cementera de Amalita Fortabat compró Corcemar y la fundió, pero comenzó a revivir de la mano de un grupo de jóvenes que se plantearon el desafío de recuperar los espacios abandonados por la empresa y crearon el Pipinas Hotel. Ahora, con la llegada de los técnicos de la

CONAE, volvió a cambiar el horizonte de los 1.040 habitantes de ese pueblo donde todavía se duerme siesta todos los días.

Pipinas, a 155 kilómetros de Buenos Aires, nació alrededor de la planta cementera Corcemar: un poblado obrero que dependían de la empresa. Corcemar hizo los barrios, el cine, el recreo para las familias, y todo giraba en torno a ella. Pero en 1991, el Gobierno central le quitó el subsidio para el combustible y la empresa comenzó a renquear. Poco después llegó Loma Negra, que competía en el sector cementero con ella, y la compró. «Loma Negra hizo un vaciamiento en diez años. Sacó el horno, cerró el cine y tiró abajo las casas del barrio Corcemar. Dijo que iba a modificar la cementera y la iba a convertir en una calera.



A los más viejos les hicieron una cancha de bochas (similar a la petanca) y los tuvieron ahí entretenidos. Así los tenían tranquilos. La gente se entusiasmó pero nos mintieron», dice Claudia Díaz, una periodista de 40 años, nacida y criada en

Pipinas y fundadora de la cooperativa que comenzó a rescatar el pueblo de su muerte lenta.

Para 1994, Loma Negra despidió 250 de sus 300 trabajadores y la convirtió en una calera. Siete años después la cerró. Ese golpe fue casi mortal: de los 3.500 pobladores que había en 1991 apenas quedaron 900 para 2001.

«A nosotros lo que ocurrió con la cementera nos destruyó la cabeza. Decíamos que éramos como una comunidad después de un desastre natural. La fábrica era todo en el pueblo porque fue la fábrica la que lo levantó. Por ejemplo, la fábrica tuvo luz propia, con un generador, en 1939 pero el pueblo tuvo luz eléctrica solo en 1970 cuando creó la cooperativa eléctrica de Pipinas», describe Claudia.

«En junio de 2002 se fueron otras 13 familias y ahí empezamos a pensar con mi hermano el Topo que había que hacer algo. A él justo le salió la posibilidad de irse a trabajar a Estados Unidos y todo eso junto nos puso a pensar en que algo teníamos que hacer», recuerda.

Así comenzaron las primeras reuniones con los vecinos para intentar alguna salida a esa crisis local que se combinaba con la peor crisis política, económica y social que había vivido la Argentina en su historia. De esos encuentros quedaron doce personas, todas entre treinta y cuarenta años, que decidieron organizar una cooperativa para recuperar el hotel de la empresa y un predio de recreación. El objetivo era reconvertir a Pipinas en un destino turístico: tenían el atractivo de un pueblo rural y, además, están a veinte kilómetros de la Bahía

Samborombóm. Hicieron una propuesta al municipio y, después de varias gestiones, ganaron la licitación en 2003 y comenzaron a trabajar en el hotel: tenía las cañerías tapadas, las paredes descascaradas y ningún mueble. Lo único que quedaba era la estructura vacía.

El 16 de enero de 2006 abrieron las puertas del Pipinas Hotel pero demoraron casi diez años en alcanzar el equilibrio económico, pero ahora tienen un hotel que puede recibir clientes. Y en los últimos meses comenzaron a alojar al personal de la CONAE, que trabaja en la planta de lanzamiento Tronador II.

El hotel cuenta con 16 habitaciones con baño privado, simples, con base doble, triple y familiar con una capacidad de 32 plazas. Ofrece también un servicio de restaurant con exquisitos platos de elaboración casera y servicios de lavandería y mucamas. También pueden contratarse servicios de cabalgada y bicicletas u optar por el uso opcional de la piscina del complejo.

Pero eso no fue todo porque desarrollaron en la zona el concepto de «turismo de base comunitaria». Eso significa que todos los habitantes de la zona son partícipes del proyecto. «Las pastas que se dan en el restorán del hotel las hacen unas señoras de acá, las bicicleteadas las organiza el bicicletero, los murales del Museo a Cielo Abierto se construyen junto a los alumnos de la escuela», explica Claudia y agrega: «En otros pueblos rurales se hicieron emprendimientos turísticos donde fueron capitales de afuera a montar negocios y todos los

vecinos del pueblo son sus empleados. Un día los capitalistas se van y el pueblo se queda en la ruina otra vez».

El hotel escuela

El Pipinas Hotel no sólo es un lugar donde alojarse también será el primer Hotel Escuela cooperativa. Los cooperativistas firmaron un acuerdo con la Universidad Nacional de Quilmes para trabajar junto con la Licenciatura en Administración Hotelera y la Tecnicatura en Cooperativismo. Será en el marco del Programa de Incubadora Social.

El proyecto se presentará el próximo 12 de mayo en el Pipinas Hotel. «Siempre el sector turístico forma empleados pero aquí van a poder tener una pasantía en un lugar autogestivo y pueden verse reflejados aquí y pensar en sus propios proyectos», dijo Claudia Díaz.

30 de abril de 2015

Fuente: «La Campora – Frente de economía social», *Tiempo Argentina*, 30 abril 2015.

Para saber más:

Cooperativo y comunitario, www.pipinas.com.

Fecootra [Fédération des coopératives de travail],
www.fecootra.org.ar.

Economía popular social y solidaria, www.economiapopular.coop.

«Pipinas recupera un hotel» (2006), Página12, 22 janvier.

MÁS DE 60 EMPRESAS SE RECUPERARON ENTRE 2010 Y 2013

Richard Neville

La cuarta encuesta nacional sobre empresas ocupadas por trabajadores (ERT) realizada por el programa “Facultad Abierta” de la Universidad de Buenos Aires confirma que el fenómeno de la toma de empresas ha sido duradero y que lo es hoy entre la clase obrera argentina. Desde 2001, más de 300 empresas en quiebra o abandonadas han sido reconvertidas por sus antiguos empleados, y de ellas, 63 lo han sido en los últimos tres años.

Las ERT no solo no han desaparecido, sino que se han convertido en una opción válida para los trabajadores y un remedio defensivo para los cierres de empresas (Ruggeri, 2010). Si la incertidumbre legal que rodea a estos procesos sigue siendo fuerte, parece que el camino de la recuperación de los empleados es un resultado positivo que es cada vez más apoyado por los sindicatos.

Los elementos sobresalientes de esta investigación proporcionan una demostración sorprendente. Presentado el

21 de marzo de 2014 en el Hotel Bauen, con motivo del 11 ° aniversario de su recuperación –aniversario del día que los trabajadores del hotel recuperado conocieron la decisión judicial ordenando su expulsión–, indica que hay más de 60 empresas que han sido tomadas durante los últimos tres años y 2.500 puestos de trabajo que se han conservado. Desde 2001, se han reconvertido más de 300 empresas que han fracasado o han sido abandonadas por sus propietarios, aunque muchas corren el riesgo de ser impugnadas por decisiones judiciales.

Esta encuesta también mostró que los datos de la encuesta anterior (2010) no eran exhaustivos, que se había subestimado el número de ERT y que esto se refería a unos 40 casos. La cifra de 2010 se ha reducido a 247.

Un marco legal complicado

Durante la presentación, Andrés Ruggeri, director del programa, dijo a la agencia Ansol que "uno de los datos más destacados del informe muestra que el impacto de la ley de quiebras, no es lo que se esperaba porque los conflictos duran más, aunque las empresas que han ganado su caso desde un punto de vista legal son muy pocas, pero también porque las expropiaciones requieren un proceso legal más largo, más complejo que antes "(Ansol, 2014).

De hecho, la duración de los conflictos ha aumentado desde que durante el período (2010-2013), incrementándose a 335 días frente a los 249 días anteriores.

En el 61% de los casos, los trabajadores se vieron obligados a ocupar la empresa o resistir las decisiones judiciales y los intentos de desalojo (37%). Si la nueva ley de 2011 se percibió inicialmente como un paso adelante en la medida en que permitía al juez otorgar la continuación de la actividad laboral bajo el control de una cooperativa de los trabajadores, lo cierto es que en la práctica el juez conserva toda la libertad para permitir esta posibilidad y a veces abusa de ella en detrimento de los trabajadores. Los hechos lo confirman ya que solo el 9,7% de los nuevos casos de recuperación pudieron aprovechar este recurso.

Mientras que en 2010, el 63% de las ERT habían obtenido una ley de expropiación, solo el 19% de los casos posteriores tuvieron éxito. Como ilustra el caso del Hotel Bauen, el marco legal sigue siendo problemático y los trabajadores de Fabricaciones Rosario se encuentran en la misma situación. Asimismo, en Buenos Aires, la imprenta Mon lleva dos años y medio cerrada y sus trabajadores siguen esperando en la puerta para entrar y reanudar la producción.

Sin embargo, este marco legal no obstaculiza la recuperación de la empresa. Por el contrario, ante los cierres prematuros de fábricas, el proceso continúa. Según la encuesta, durante el período 2010–2013, se llevaron a cabo precisamente 63 iniciativas de autogestión para preservar 2.664 puestos de trabajo.

Desarrollos observados durante la encuesta

Desde las primeras encuestas, realizadas entre 2001 y 2002, hasta la última, se han recuperado 311 empresas, procesos que han permitido preservar el empleo de 13.462 trabajadores en el país.

La cantidad de negocios recuperados sigue creciendo y la mitad de ellos (150) están ubicados en el área metropolitana (Ciudad y Gran Buenos Aires) y el resto se encuentran dentro de la provincia de Buenos Aires o en el resto del país. El área metropolitana de Buenos Aires y la región de la Pampa (provincias de Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe) representan por sí solas el 81% de las ERT. Sin embargo, en los últimos años, las ERT han extendido su base geográfica, ya que ahora están presentes de norte a sur en 21 de las 24 provincias del país.

Para Andrés Ruggeri: “Hay una nueva generación de empresas recuperadas y es necesario preguntarse por las razones de este resurgimiento que, si no tan masivo como en 2001 y 2002, muestra que la mitad de las empresas recuperadas existentes son posteriores a la crisis”. (Ansol, 2014).

Según los datos de la cuarta encuesta, el fenómeno de la recuperación se ha extendido a otros sectores de actividad: si bien la metalurgia dominaba en las tres primeras muestras, se ha diversificado en particular durante los últimos tres años con establecimientos educativos y gastronómicos, como muestran los ejemplos de el colegio Guido Spano o el restaurante Alé Alé.

La intensidad de los conflictos durante el período (2010–2013) se mantuvo en el nivel anterior, con una ocupación de empresas del 61% y un aumento de la duración media que ascendió a 335 días frente a 249 días, después de haber disminuido entre 2004 y 2010. Por otro lado, la represión y los intentos de desalojo se redujeron al 37%.

Mientras que en 2010, el 63% de las ERT habían obtenido una ley de expropiación, solo el 19% de los casos posteriores lo lograron, a pesar de la nueva ley de quiebras de 2011, vista inicialmente como un paso adelante.

Otro avance notable se refiere a la participación del movimiento sindical en el apoyo a los procesos. Si bien era del 44% hasta 2010, sube al 64% en el último período. Parece haber comprendido que el fenómeno no es simplemente cíclico, sino que está bien y verdaderamente anclado en la realidad económica y social del país.

Una gran mayoría de ERT (93%) mantiene reuniones generales periódicas (56% una vez a la semana). El 54% de ellas pertenece a algún movimiento u organización cooperativa y el 71% realiza actividades solidarias o culturales en conexión con su comunidad.

En general, la capacidad productiva sigue siendo menor que antes de la recuperación, la ausencia de capital (47,1%), materias primas (35,3%) y la dificultad para ingresar al mercado (29,4%) siguen siendo importantes. Sin embargo, los datos recopilados están cambiando en comparación con los registrados en 2003 y deben destacarse con la mejora de la

situación macroeconómica que permite la entrada de nuevas ERT más rápidamente. Sin embargo, su acceso al crédito sigue siendo problemático debido a su situación, por lo que el 29% de las ERT recurren al “trabajo por contrato”, lo que significa que dependen de un principal que les proporciona la materia prima y paga el trabajo y el mantenimiento de las máquinas. En algunos casos logran capitalizar y adquirir con el tiempo una cierta independencia, mientras que otros permanecen en situación de subcontratación. Tenga en cuenta también que el 61% de las ERT reciben ayudas estatales.

Otro rasgo significativo de este fenómeno es el mantenimiento de la igualdad salarial (52% de los casos). En los demás casos, la diferencia suele estar relacionada con la diferencia en el número de horas trabajadas (61,5%). En ningún caso la escala salarial es superior al 50%.

En entrevista con el diario Página 12, Andrés Ruggeri declara que “el proceso está consolidado a pesar de la precariedad y la falta de resolución general. Cambiar la ley de quiebras parecía la solución, pero ya ha demostrado que no es así y que las cosas están empeorando. Asimismo, el Estado no parece querer ni poder acabar con el fenómeno. Lo cierto es que durante este tiempo los procesos continúan” (Magnani, 2014).

Los resultados recogidos confirman a Andrés Ruggeri en su valoración general del fenómeno: “El movimiento de empresas argentinas recuperadas es un referente a nivel internacional, a nuestro entender, es el más importante del mundo. Los trabajadores han adoptado la recuperación de empresas como una herramienta viable cuando las oportunidades de empleo

están limitadas porque lo ven como una opción y una realidad “(Magnani, 2014).

Otra encuesta del Ministerio de Trabajo de noviembre de 2013 también confirma la vitalidad de las unidades productivas autogestionadas en Argentina, ya que cuenta con 786, de las cuales el 98% son cooperativas, que involucran a 28.000 trabajadores en todo el país. El número de empresas recuperadas corrobora el programa Facultad abierta ya que se enumeran 318 casos.

La encuesta del programa “Facultad Abierta” muestra efectivamente que los procesos de recuperación de empresas por los trabajadores en Argentina no son solo un recuerdo lejano de la crisis y, a pesar de las dificultades legales, están bien anclados en la clase trabajadora. Como declaró Andrés Ruggeri durante el encuentro internacional de “La economía de los trabajadores” en el Fralib de Gémenos, “la aspiración a la democratización de la producción y la redistribución de la riqueza está escrita en el ADN de los trabajadores” (Neuville, 2014).

22 de abril de 2014

Para saber más:

Agencia de Noticias Ansol (2014), Cooperativas, “Mas de 60 empresas recuperadas en tres años”, 7 de abril.

Centro de Documentación de Empresas Recuperadas, (2014), *Nuevas empresas recuperadas 2010–2013*, Buenos Aires, Ediciones Continente, Buenos Aires.

Magnani, Esteban (2014), “IV Relevamiento de la UBA sobre empresas recuperadas, Para no perder el empleo”, Pagina 12, 20 de abril.

Neuville, Richard (2014), “Encuentro europeo” La economía de los trabajadores “en la empresa Fralib”, *ContreTemps*, n ° 22, julio de 2014.

Ruggeri, Andrés (dir.) (2010), “Informe del Tercer Relevamiento Nacional de empresas recuperadas, Las empresas recuperadas en la Argentina 2010”, Buenos Aires, octubre.

Ruggeri, Andrés (coord.) (2014), “Informe del 4 relevamiento de empresas recuperadas en la Argentina, Las empresas recuperadas en el periodo 2010–2013 “, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Ruggeri, Andrés (2014) “Datos destacados del IV relevamiento de ERT del programa Facultad Abierta”, abril (Documento digital).

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (2013), “Informe del Programa de Trabajo Autogestionado”, noviembre.

Resúmenes en francés de encuestas anteriores en Richard Neuville (2012),

“Empresas absorbidas por trabajadores en Argentina”, www.autogestion.asso.fr/?p=2071.

RED GRÁFICA COOPERATIVA, UNA RED PARA LIBERARSE DE LAS LEYES DEL MERCADO

Richard Neuville

Ya en 2001, en Argentina, las ERT sintieron la necesidad de unirse dentro de organizaciones específicas. Había para esto al menos dos razones, ya que no fueron o fueron poco apoyados por los sindicatos (a excepción del Sindicato Ouvrière Metalúrgico de Quilmes y, más tarde, la Federación de Imprenta de Buenos Aires) y no se sintieron representadas por el movimiento cooperativo tradicional. Por tanto, debían dotarse de una forma de representación capaz de ser un interlocutor creíble con las autoridades públicas, pero también de desarrollar vínculos orgánicos entre ellas. En ese momento, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) jugó un papel protagónico en la transmisión de experiencias y solidaridad con las nuevas cooperativas, lo que les permitió adquirir una mayor visibilidad social, política y mediática. Entre 2002 y 2004, la importante ola de adquisiciones de empresas por parte de los trabajadores se benefició enormemente y su intervención fue en muchos casos decisiva.

Más allá de los altibajos y las divisiones derivadas de las diferencias políticas y organizativas que pudieran haber surgido posteriormente, la necesidad de organizarse desde un punto

de vista sectorial parecía fundamental. Probablemente no sea casualidad que el sector de la impresión sea pionero en este campo, sobre todo porque representa el 10% de las ERT del país y el 17% de las nuevas recuperaciones logradas durante el período 2010–2013.

Además, este sector se ha beneficiado de una alta tasa de sindicación y, en la actualidad, del apoyo activo de los sindicatos de rama en el proceso de recuperación, que está lejos de ser la regla en otros sectores de la industria. Este sector también cuenta con una fuerte tradición de sindicalismo revolucionario (la unión de tipógrafos de Buenos Aires se estableció en 1857) y una alta conciencia política.



La Red de Cooperativas de Impresión (Red Gráfica Cooperativa) fue creada en 2007 y ha seguido desarrollándose hasta que ahora agrupa a una treintena de cooperativas asociadas o vinculadas. Posteriormente ha sido imitado por otros sectores productivos, como la metalurgia, textil, agroalimentario y carnicería.

En lugar de permanecer aisladas en un sistema capitalista competitivo, las cooperativas de impresión han optado por agruparse en una red para desarrollar políticas comunes con miras a mancomunar inversiones productivas, compras, almacenamiento, producción y calidad, investigación y desarrollo, recursos humanos, formación, planificación estratégica y operativa, financiación, marketing, difusión y publicidad.

Beneficios económicos y sociales de la integración sectorial

Esta red permite garantizar la sostenibilidad económica y social de las cooperativas asociadas a partir de los beneficios y potencialidades que ofrece la integración sectorial: la puesta en práctica de la intercooperación humana, económica y financiera; la sinergia producida por el trabajo mancomunado; los beneficios generados por las economías de escala; optimización de procesos mediante reducciones estructurales; acceso a servicios comunes financiados por el conjunto; expandiendo el mercado a través de la complementariedad de sus productos y servicios.

Así, la red ha adquirido tecnología de punta que le permite ofrecer una gama muy amplia de productos y obtener contratos gubernamentales⁴³.

Red Gráfica cooperativa aglutina a más de 500 trabajadores asociados, que se benefician de una sólida formación técnica y profesional que les permite realizar un trabajo de reconocida calidad sin estar sujetos a los mismos criterios de productividad y rentabilidad que el sector privado tradicional y así tender a eliminar procesos de autoexplotación.

La experiencia Chilavert

Tampoco es completamente casual que este proceso de reagrupación sectorial haya sido iniciado por los trabajadores de la empresa Chilavert. Ésta, que se recuperó en 2002 con un apoyo significativo de movimientos sociales (asambleas populares, piqueteros, etc.) y la población del barrio, fue una de las luchas más publicitadas y emblemáticas con Zanón e IMPA. En 2002, durante la ocupación del local, los trabajadores lograron imprimir el libro *¿Qué son las asambleas populares?* Y sacar la producción por un hueco cavado en una medianera de acuerdo con el dueño del garaje contiguo mientras la policía se

43 Por ejemplo, no menos de cuatro cooperativas brindan servicios complementario, fotocomposición, portada, DTP e impresión de la serie de libros por la colección “Labor Economics Library” editada por las ediciones Continente.

apostaba día y noche frente a la puerta de entrada de la imprenta.

Más tarde, el pequeño equipo se dio cuenta rápidamente de que si la cooperativa permanecía aislada en el mercado, no se recuperaría. Por tanto, debían mantener estrechas relaciones con el entorno inmediato, los movimientos sociales, así como también tratar de unir al sector profesional. La empresa, ubicada en un popular distrito de Buenos Aires, Barrio Pompeya, está abierta a la población y sus instalaciones se utilizan para desarrollar diversas actividades sociales, culturales y educativas⁴⁴. En 2003 se crea una escuela de Bachillerato popular, adscrita a la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares (CEIP), en la que participan alrededor de un centenar de alumnos de todas las edades, entre los que se encuentran empleados de la empresa, con miras a obtener un Diploma de ciclo secundario reconocido por el Estado tras tres años de estudios. La pedagogía está inspirada en Paulo Freire: la escuela se concibe como una “organización popular que cuestiona el conocimiento establecido y genera conocimiento y poder popular en movimiento permanente y para la acción colectiva”.

Si bien el tema tecnológico resulta crucial para las ERT argentinas en la profundización de los procesos de autogestión, la Red Gráfica cooperativa ha logrado superar este dilema al aunar inversiones productivas y producción, lo que le permite innovar un punto de vista social mejorando condiciones

44 Chilavert Artes Gráficas también alberga el Centro de Documentación Empresarial recuperado, cogestionado con académicos del programa "Facultad abierta" de la Universidad de Buenos Aires.

laborales y reducción de la autoexplotación de los trabajadores asociados. Las buenas relaciones con el gremio de la imprenta permiten que los chilavert sigan beneficiándose de la cobertura de seguridad social aunque ya no se encuentren en condición de asalariados, lo que no ocurre con otros sectores de actividad que deben hacerse cargo directamente de ello.

La federación de empresas gráficas cooperativas es portadora de una estrategia de transformación social de la sociedad y de disrupción con el sistema de dominación capitalista. También está muy involucrada en la organización de encuentros regionales e internacionales de “La economía obrera”, uno de cuyos objetivos es forjar vínculos entre las diversas experiencias a escala planetaria para trazar alternativas concretas a la lógica capitalista.

Diciembre 2 014

Para saber más:

Chedid Henriques, Flavio (2014), Autogestão em empresas recuperadas por trabalhadores – Brasil e Argentina, Florianópolis, Editora Insular, Tecnologia Social Series, vol. 4.

Ruggeri, Andrés (2015), “Ocupar, resistir, producir”: Autogestión de trabajadores y negocios recuperados en Argentina, París, Syllepse,
www.syllepse.net/Ing_FR_srub_37_ipro-d_631-ocuper-resister-produit.html.

Chilavert, www.imprentachilavert.com.ar/.

MIRAR ALLÍ PARA CONSTRUIR AQUÍ...

Nils Solari

¿Qué lecciones podemos extraer del fenómeno de las empresas recuperadas en Argentina? ¿Cuál puede ser el interés, para el movimiento político y ciudadano que forma parte de la construcción de la autogestión, de centrarse en lo que se inició en este país hace ya más de diez años?

En un momento en que la “crisis de la deuda” está condenada a constituir un horizonte insuperable, sacrificando todo en el altar de la austeridad, ¿qué podemos retener de las experiencias colectivas que, aunque distantes, pretenden formar parte de la autogestión de los trabajadores? ¿En qué medida la perspectiva de estas iniciativas, enriquecida por una cierta distancia crítica, alimenta las reflexiones que se desarrollan aquí, en Francia y en Europa?

El retroceso histórico requiere ante todo reiterar la debacle a la que había conducido el “milagro argentino” de los años noventa, en este país que el FMI había identificado como su

“mejor alumno”⁴⁵. El examen de las políticas llevadas a cabo durante este período, en consonancia con la imposición del “Washington consensus” (disciplina presupuestaria, reorientación del gasto público, reforma tributaria, liberalización financiera, adopción de un tipo de cambio único y competitivo, liberalización comercial, eliminación de barreras a la inversión extranjera, privatización de empresas públicas, desregulación del mercado, etc.), no deja sin identificar algunos rasgos comunes con lo que se está desarrollando hoy en el contexto de la “crisis de la deuda soberana”, en Europa en particular.

Argentina constituyó así un verdadero laboratorio económico para la aplicación de las tesis neoliberales, que tuvo como corolario, un costo social y humano de lo más dramático. Sin embargo, si admitimos que la sucesión y la instalación en el tiempo de “crisis” son parte de la característica inherente del sistema capitalista financiarizado, entonces es crucial mirar este otro laboratorio, de experimentos sociales, que se desarrolló allí, como reacción a la debacle neoliberal.

Entre estas iniciativas populares, las empresas tomadas por sus trabajadores (ERT) han (re) emergido masivamente a raíz de movilizaciones de diciembre de 2001⁴⁶. Si podemos definirlas globalmente como “unidades económicas que pasan de una gestión capitalista a una gestión colectiva de

45 Para no confundirlo así con este otro milagro que algunos atribuyen a Argentina desde 2002, ver Rubenstein y Solari (2012).

46 De hecho, existen ocupaciones de fábricas y control obrero en Argentina desde el curso de la década de 1980; pero no fue hasta finales de la década de 1990 y principios de la de 2000 que el fenómeno ha experimentado un renacimiento masivo.

trabajadores” (Ruggeri, 2015: 24) y observamos que la gran mayoría de ellas están organizadas en forma de cooperativa (más del 95% de casos), sin embargo, constituyen un fenómeno muy heterogéneo, donde cada caso tiene su propia complejidad (debido a su historia, su cultura política, sus limitaciones económicas y tecnológicas...). La retrospectiva analítica, sobre este objeto relativamente reciente, lleva a subrayar que la elección de abordar tal o cual experiencia como un campo de observación no es neutra en cuanto a las conclusiones que se pueden formular y frente a la tendencia a cosificar a veces, incluso a pesar de uno mismo, a todo el fenómeno.

Como especifica Frédéric Vabre, en la medida en que “cuestiona la economía de las relaciones entre el individuo y el colectivo (s), la autogestión es una cuestión fuertemente ligada a la política, es decir, al conflicto por los valores últimos, en el sentido de la sociología weberiana”. En consecuencia, el estudio y los diversos trabajos realizados en torno a las ERT abren el camino a una cierta “confusión de géneros que se manifiesta tanto por un aspecto académico del discurso militante, pero sobre todo por un aspecto militante del discurso académico” (Vabre, 2007).

¿Por qué eso? Quizás, porque cuando estas mujeres y hombres deciden movilizarse, muchas veces de manera radical, es –hay que recordarlo– por una necesidad: deben preservar la “fuente de trabajo”. “Entonces, el fenómeno de la ERT choca directamente contra uno de los pilares de la economía capitalista, ya que plantea interrogantes sobre la propiedad privada. En tercer lugar, porque estas iniciativas, estas

ocupaciones, se iniciaron no sólo en forma de ilegalidad, por tanto en una relación de hostilidad al Estado, sino también en diferencias con los sindicatos tradicionales. La pugnacidad de estos trabajadores en su lucha diaria puede, por tanto, inspirar admiración.

Además, además de querer romper con el modo de gestión de la empresa capitalista (introduciendo más horizontalidad en la organización del trabajo, una igualdad o cuasi igualdad en la escala salarial, la polivalencia y la rotación en puestos de responsabilidad y más democracia política dentro de la empresa), y para afirmar su solidaridad con la “comunidad” que participó en las recuperaciones, las ERT tuvieron que crear sus propias organizaciones. En lugar de los sindicatos tradicionales, estos “movimientos”⁴⁷ actúan como interlocutores con los políticos y como lugares de recursos ante el Vía Crucis legal con el que se enfrentan las ERT. Del mismo modo, surgiendo inicialmente en torno a casos aislados, las recuperaciones se fueron convirtiendo gradualmente en parte de la tradición de lucha de los trabajadores, como un proceso, es decir como “modalidad reiterada de acción y demanda ante situaciones de cierres o quiebras” (Fernández Álvarez, 2007).

Por tanto, un panorama así solo puede despertar entusiasmo. Sin embargo, estas experiencias no están libres de contradicciones, ya que enfrentan dificultades económicas, financieras o logísticas. Por ejemplo, la gran mayoría, si no todas, de estas fábricas recuperadas se caracterizan por una

47 Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), Movimiento Nacional de Fábrica recuperado (MNFRT), Federación Argentina de Trabajadores Autogestionados (FACTA), Asociación Trabajadores Autogestionados Nacionales (ANTA), etc.

capacidad de producción insuficiente crónica⁴⁸, que le permite rondar el espectro de la autoexplotación, identificado en particular desde la crítica marxista de los sistemas cooperativos. Pero también, la falta inicial de capital o la ausencia de volumen de negocios implica a veces el recurso a un “trabajo contratado⁴⁹” o la vuelta al “justo a tiempo⁵⁰” del toyotismo. A esto se suma la necesidad de lidiar con maquinaria que a menudo es obsoleta o ruinoso, cuando no ha sido simplemente robada por la dirección anterior.

Las limitaciones materiales también se yuxtaponen a la dificultad de pasar de una relación salarial (relación de dependencia) a la de cooperadores, lo que implica un salto cualitativo, incluso una verdadera revolución cultural de mentes y formas de hacer las cosas. En efecto, el taller “sin cronómetro” y sin capataz puede llevar a efectos perversos: comportamientos de absentismo o de diletantismo laboral pueden obligar a algunos compañeros a restablecer la disciplina estricta, incluso a desprenderse de quienes no llegan a asumir la responsabilidad colectiva de la gestión obrera.

Todas estas dificultades, estas contradicciones no son sin consecuencias en relación con las diferentes culturas y trayectorias políticas que pasan por el fenómeno de las empresas recuperadas. Si bien algunos se han planteado luchar

48 Estabilizado en torno al 60% de la utilización de la capacidad productiva (Ruggeri, 2015: 116).

49 Trabajos realizados por cuenta de un tercero, que proporciona la materia prima o capital necesario para iniciar la producción y que luego sale con el producto terminado para su marketing (Ruggeri, 2015: 37).

50 Técnica de esperar al pedido del cliente para iniciar el suministro de materias primas por ejemplo.

por la nacionalización bajo el control de los trabajadores (FaSinPat, ex-Zanón) o por el reconocimiento político como sujeto del trabajador autónomo (Coordinación Nacional de Trabajadores Autogestionados), otras experiencias han preferido centrarse más exclusivamente en el trabajo productivo y abandonar el campo de las demandas políticas.

En resumen, el interés militante por las experiencias de empresas recuperadas en Argentina no es insignificante, ya que es un fenómeno con una fuerte capacidad de impacto político (Ruggeri, 2005). Alimenta la reflexión sobre las modalidades de respuesta a la ofensiva de los mercados financieros y frente a las medidas neoliberales que hoy nublan las perspectivas de las naciones europeas, Grecia en primer lugar.

Sin embargo, este llamamiento activista también debe tener en cuenta la heterogeneidad de las diferentes situaciones y las dificultades y escollos que caracterizan a las ERT. Del mismo modo, la necesidad de integrar las limitaciones que enfrentan estos trabajadores argentinos debe poder nutrir la reinversión de estas lecciones en la práctica, en apoyo de iniciativas actuales (la de Fralibo Pilpa, por ejemplo) o en construcción.

A pesar de sus especificidades, fragilidad y contradicciones, debilidades, incluso tensiones, que caracterizan estas experiencias de autogestión, incluidas las más exitosas (FaSinPat, Unión Solidaria de Trabajadores, Chilavert, etc.), estas dinámicas deben ser apoyadas y su análisis reinvertido, teniendo en cuenta todos los aspectos que los caracterizan. La

construcción de la autogestión, aquí o en otro lugar, tiene ese precio.

Julio de 2015

Para saber más

Fernández Álvarez, María Inés (2007), “De la recuperación como acción a la recuperación como proceso: prácticas de movilización social y acciones estatales en torno a las recuperaciones de fábricas”, *Cuadernos de Antropología social*, n ° 25.

Rubenstein, Jérémy y Nils Solari (2012), “Una visión nublada del mundo sobre Argentina”, Acrimed, 23 de julio.

Ruggeri, Andrés (dir.) (2005), *Las empresas recuperadas en la Argentina*, programa “Facultad abierta”, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires.

Ruggeri, Andrés (2015), “Ocupar, resistir, producir”: Autogestión de los trabajadores y negocios recuperados en Argentina, París, Syllepse.

Vabre, Frédéric (2007): “Empresas autogestionadas: entre la movilización y la estandarización. Análisis sociopolítico de prácticas recientes de “recuperación” de unidades productivas en Argentina”, en Diana Quattorchi Woisson (dir.) (2007), *Argentina después de la debacle: Itinerario de una recomposición*, París, Houdiard.

BRASIL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

La experiencia de Porto Alegre es la más conocida de los intentos recientes de ir más allá de la democracia de delegación. Si bien muestra que el debilitamiento de la delegación de poder y el ejercicio real de la soberanía popular aumentan la efectividad de las políticas públicas, también ha permitido que los grupos dominados recuperen la conciencia colectiva, condición necesaria para superar la dominación social.

El sufragio da derecho a elegir, no da poder. Permite contabilizar una multiplicidad de deseos individuales expresados en el secreto de las urnas por parte de hombres y mujeres cuya convergencia de deseos no les permite aún organizarse y unirse para una acción común (Gorz, 1975).

Haciendo referencia aquí al prefacio de la edición alemana de 1872 del *Manifiesto Comunista*, André Gorz critica el déficit democrático del sistema parlamentario. Señala también el escollo del burocratismo que sólo puede evitarse mediante un eco-socialismo basado en reformas radicales que no se

reduzcan ni a “la simple conquista electoral de una mayoría”, “ni a la promulgación de una serie de reformas por parte de una coalición ocasional de socialdemócratas y socialistas” (Gorz, 1975: 72) y que forman parte de una perspectiva transicional y revolucionaria.

Al igual que Jean–Paul Sartre que criticó el “absurdo” de este ritual electoral “pseudodemocrático” (Sartre, 1972), Gorz critica el concepto de “democracia indirecta” como una de las mistificaciones que consiste en que “es las instituciones están diseñadas para perpetuar la separación de los individuos y su dispersión molecular; negarles cualquier poder colectivo sobre la organización de la sociedad, dejándoles, por vía del poder popular, sólo la posibilidad de una delegación permanente cada cuatro o cinco años a representantes sin derechos directos al poder. Apoyo de las masas, a partidos que se consideraban “socios aceptables” sólo con la condición de que, después de las elecciones, representen los intereses supremos del Estado capitalista, en lugar de lo inverso.” (Gorz, 1975).

Dos siglos antes, Condorcet había intentado combinar el principio representativo con la democracia rousseauiana, que afirma la soberanía absoluta del pueblo y se niega a delegarla en los funcionarios electos. Buscó concebir una soberanía popular inalterada sin caer en una fragmentación del interés general que resultaría de decisiones locales inconexas (Rosanvallon, 2000: 54). Hegel señaló que la representación política no significa que la gente sepa de antemano lo que quiere e instruya a sus representantes para defender sus intereses (Zizek, 2009: 145). En este sentido, el presupuesto

participativo representaría por tanto una concretización particularmente exitosa de este intento de conjugar la soberanía del poder constituyente y el ejercicio de la delegación (Gret y Sintomer, 2002: 121).

La experiencia Porto Alegre

En 1989, cuando el Partido de los Trabajadores (PT) accedió a la alcaldía de Porto Alegre, sus líderes se fijaron los objetivos tanto de mejorar la condición de los más pobres como de iniciar un proceso de control popular sobre el nuevo poder. El PT tiene un punto de vista crítico sobre el funcionamiento de la democracia representativa, socavado en gran medida por casos de corrupción al más alto nivel del Estado que conducirá en particular a la destitución del presidente del país, Fernando Collor un poco más tarde. Su ascenso al poder también coincide, pocos meses después, con la caída del Muro de Berlín. El PT y su corriente de izquierda, la Democracia Socialista⁵¹, están marcados por los excesos burocráticos que han caracterizado a los países “socialistas” del bloque del Este. Por ello, pretenden establecer empíricamente reglas de participación ciudadana para evitar su propia burocratización.

Basándose en el artículo 1º de la Constitución Brasileña de 1998 –“Todo poder emana del pueblo, que lo ejerce por medio de sus representantes elegidos o directamente, según los términos de esta Constitución”– los líderes del PT se apoderan

51 La democracia socialista era entonces mayoritaria dentro del PT en Porto Alegre y sirvió como Sección brasileña de la IV Internacional.

de la posibilidad de ejercicio directo de la soberanía de la gente. Incluso si, como señala Raúl Pont⁵², es una “paráfrasis del concepto clásico de los estados democráticos modernos” todavía presente teóricamente pero casi nunca materializado (Pont, 2007). Refiriéndose a Jean-Jacques Rousseau, según el cual la soberanía del pueblo no puede transferirse, delegarse ni compartirse, recuerda el gran desafío que tuvo que asumir el PT para lograr un avance democrático dentro de las concepciones liberales que llevaron a sistemas representativos más cercanos al “liberalismo propietario”.

El pensamiento marxista teorizó experiencias concretas como la Comuna de París e intentó extraer de él nuevas relaciones entre la sociedad y el Estado. Los Consejos (soviets) durante los primeros años de la Revolución Rusa plantearon la cuestión de la representación y delegación de poder. Pero la experiencia soviética no sobrevivió al autoritarismo burocrático y la guerra civil. El poder central, el partido único, el autoritarismo y la burocratización destruyeron cualquier posibilidad de una democracia socialista. Al mismo tiempo, las experiencias socialdemócratas o las resultantes de las democracias burguesas liberales han impuesto una visión de la democracia representativa como una especie de horizonte infranqueable de emancipación humana. Sin embargo, es claro que el sistema representativo, si bien es ampliamente aceptado como un logro democrático, se ha enfrentado a una crisis de legitimidad y se ha ido desacreditando

52 El catedrático Raúl Pont ganó el Ayuntamiento de Porto Alegre en la primera vuelta en 1997. Es uno de los fundadores del PT y miembro de su dirección nacional. Impulsa la tendencia Democracia socialista, fuertemente asentada en el estado de Rio Grande do Sul.

gradualmente, hasta el punto de alimentar una profunda crisis en la política y su representación.

Frente a las políticas liberales lideradas por sucesivos gobiernos brasileños en la década de 1980, la población se autoorganizó y comenzó a exigir más a los gobiernos locales. Estos últimos se han visto obligados a desarrollar los servicios públicos a pesar de los muy bajos ingresos fiscales⁵³. Es en este contexto y en base a estas observaciones que el PT decide poner en marcha el enfoque participativo en Porto Alegre.

La victoria del Frente Popular, nacida del crecimiento del PT y los movimientos sociales de la década de 1980, se logró tomando en cuenta los intereses y demandas de las poblaciones más empobrecidas. Pero para innovar verdaderamente en la forma de gobernar, era imperativo involucrar a la ciudadanía con formas incentivadoras de participación que permitan actuar directamente sobre el Poder Ejecutivo. Esta forma de participación debe ser pública, directa y deliberativa, no solo consultiva. Debe permitir que la población decida sobre los impuestos y la distribución de los recursos de la ciudad a través del presupuesto. A principios de 1989, el nuevo municipio fue atacado por las comunidades de base que exigían inversiones para sus barrios. Como acababa

53 En Brasil, los municipios reciben solo el 14% de los ingresos fiscales, el Estado retiene el 63% y los estados regionales recuperan el 23% restante cuando tienen que gestionar la salud, educación y seguridad pública. En 1988, en Porto Alegre, el 98% del presupuesto estaba monopolizado por los gastos corrientes del ayuntamiento.

de asumir el cargo, Olivio Dutra⁵⁴ ha debido resolver aumentar los ingresos para proporcionar los medios para su política. Siguiendo el consejo de su equipo, decidió experimentar con el presupuesto participativo diseñado por uno de sus principales asesores, Ubiratan de Souza, y que define en estos términos:

Un proceso de democracia directa, voluntaria y universal, a través del cual la población puede discutir y definir el presupuesto y las políticas públicas. El presupuesto participativo combina democracia directa y democracia representativa, lejos de limitarse a la elección de los titulares de los poderes ejecutivo y legislativo, la participación ciudadana también se concreta en decisiones sobre prioridades de gasto y control de la gestión de los poderes públicos. El ciudadano deja de ser el autor de la política clásica para convertirse en un protagonista permanente de la administración pública. El presupuesto participativo asocia la democracia directa con la democracia representativa, un activo que debe ser preservado y valorado (Tarso y De Sousa, 1998).

El proceso de participación popular

Después de un diálogo con la población, la ciudad se dividió en doce sectores y a nivel de ciudad se crearon cinco comités temáticos: transporte y tráfico, salud y asistencia social,

54 Olivio Dutra es uno de los fundadores del PT. Ex sindicalista, es uno de los fundadores de Central Única de Trabajadores (CUT). Después de ser el primer alcalde de Porto Alegre en 1988, se convirtió en gobernador del estado de Rio Grande do Sul en 1998.

educación, cultura y ocio, organización y desarrollo de la ciudad. El proceso de presupuesto participativo tiene lugar durante todo el año y se divide en varios ciclos (Toulotte, 2000).

Durante el primero (15 de marzo–15 de abril), el alcalde presenta el informe de avance de los logros del plan de inversiones para el año en curso a los participantes de las reuniones públicas que se desarrollan en cada uno de los sectores y las cinco comisiones temáticas. Durante estas reuniones, que en ocasiones reúnen a mil personas, el alcalde informa sobre la ejecución del presupuesto del año anterior y la población elige a sus delegados a razón de uno por cada diez asistentes. Estos delegados conforman el foro de delegados que coordina todo el proceso de discusión con la población para identificar los temas prioritarios, el trabajo a realizar y los servicios a desarrollar.

El segundo ciclo, conocido como intermedio (del 15 de marzo a finales de mayo) es esencialmente autogestionado por la estructura participativa. La población se reúne de forma independiente en numerosas ocasiones y prioriza sus solicitudes de obras y servicios.

Durante el tercer ciclo (principios de junio–15 de julio), el ayuntamiento representa las principales líneas presupuestarias para el año siguiente: estimaciones de gastos e ingresos. Cada sector y cada comité temático designan dos asesores titulares y dos adjuntos al consejo de presupuesto participativo, quienes tienen un mandato de un año renovable una sola vez. La población delega en sus asesores la

elaboración del presupuesto público y el plan de inversiones para el año siguiente, que se definen en cogestión con el municipio.

Cada sector y cada comisión temática envían un documento especificando sus cuatro prioridades temáticas de las ocho posibles: saneamiento, vivienda, carreteras, educación, asistencia social, salud, transporte y tráfico, organización de la ciudad. Cada solicitud es objeto de una nota según su orden de prioridad. Estas solicitudes se envían a los servicios municipales que estudian la viabilidad técnica, legal y financiera teniendo en cuenta tres parámetros: la lógica mayoría, las elecciones de comisiones temáticas y la lógica redistributiva entre los distritos, decisiva para frenar la lógica “corporativista” de beneficiar su propio distrito en detrimento de los demás.

Durante el cuarto ciclo (julio–principios de septiembre), el gabinete de planificación elabora una primera matriz presupuestaria que es discutida por la asamblea financiera de la ciudad. Mientras tanto, se está configurando el nuevo consejo de presupuesto participativo. También participan en este consejo un representante de la Unión de Asociaciones de Vecinos y un representante sindical de empleados municipales. En agosto, los miembros de este consejo asisten a sesiones de capacitación presupuestaria.

Finalmente, en el último ciclo (1º octubre al 30 de noviembre), la Cámara Legislativa vota la propuesta de presupuesto. Paralelamente, los servicios del ayuntamiento, en consulta con el consejo de presupuesto participativo, elaboran

el plan de inversiones para el año siguiente según tres criterios de gestión que fueron mantenidos por el ayuntamiento y los representantes de la población. En diciembre, el proceso finaliza con una nueva discusión entre el ayuntamiento y la población para co–desarrollar las reglas para el año siguiente.

Si bien el proceso puede parecer complejo, se ha ido perfeccionando a lo largo de los años y la población ha jugado un papel importante en la definición de las reglas de funcionamiento. La participación popular ha caído de menos de 1.000 en el primer año a 30.000 en los últimos años. En total, casi 140.000 personas intervinieron durante los primeros diez años. Pero lo más importante es sin duda que en Porto Alegre “los habitantes son conscientes de los asuntos públicos, y de que ellos deciden sobre ellos, convirtiéndose así cada día más en actores de su propio futuro” (Pont, 2000). Si bien todavía estamos lejos de una autogestión generalizada con la participación de todos, el avance es, sin embargo, considerable y de importancia histórica.

Según Raúl Pont (2007), el presupuesto participativo ha sido la principal herramienta para el cambio de orientación política en Porto Alegre. Permitted la participación directa de la población en la definición y evaluación de los gastos e inversiones de la ciudad. Durante esta experiencia, que duró dieciséis años (1989–2004), el gasto social se quintuplicó; los gastos operativos se han reducido significativamente a favor de las actividades estratégicas; el presupuesto casi se ha triplicado gracias a la abolición de las exenciones fiscales, la lucha contra

la evasión fiscal y gracias a una nueva política fiscal más justa, basada en la fiscalidad progresiva.

Resultados significativos

En quince años, el presupuesto participativo ha permitido lograr avances muy significativos en las áreas de vivienda, acceso al transporte, agua, saneamiento, educación, salud y prevención para los más pobres (ONU–Habitat, 2005).

- La construcción anual de viviendas sociales se duplicó entre 1989 y 2003 en comparación con el período 1973–1988 (este desarrollo permitió reducir sustancialmente el déficit habitacional).

- Se ha mejorado el acceso al transporte público y la infraestructura pública en los barrios más pobres de Porto Alegre. Los caminos sin pavimentar se han reducido a la mitad.

- La proporción de viviendas conectadas al agua potable aumentó del 94,7% en 1989 al 99,5% en 2002.

- La conexión a la red de evacuación de aguas residuales ha cambiado de 46% en 1989 a 84% en 2002 y la proporción de residuos líquidos pasó del 2% en 1989 al 27,5% en 2002.

- El número de escuelas públicas aumentó de 29 en 1988 a 84 en 2002 y el número de alumnos aumentó de 17.862 a 55.741 (se implementaron e integraron programas de alfabetización

de adultos y educación de jóvenes en el sistema de educación pública; se crearon 126 instituciones de cuidado de niños, que afecta a 10 000 niños).

- La salud ha visto aumentar el gasto de la administración central del municipio del 10% en la década de 1980 al 18%.

- La prevención infantil, la atención a las víctimas de la violencia, la atención a los ancianos abandonados y las familias de bajos ingresos también se encuentran entre los avances logrados en Porto Alegre.

Todo esto solo fue posible con la participación popular, que jugó un papel fundamental en el establecimiento de prioridades. Esto tendería a demostrar que cuanto menos delegación de poder, más personas y sociedad organizada demuestran que pueden ejercer su soberanía.

La experiencia del presupuesto participativo en Porto Alegre ha demostrado que la cuestión de la democracia está en el centro de cualquier proceso de confrontación con el neoliberalismo dominante. Ha sido objeto de numerosos estudios y análisis relativamente consistentes. Si no representa un modelo universal, constituye un referente serio, ineludible y muy fructífero para los autogestionarios.

Para Raúl Pont, es fundamental avanzar hacia otra modalidad de democracia porque la experiencia del presupuesto participativo “estigmatiza los límites y las insuficiencias del sistema representativo y [subraya] la importancia de asumir el gran desafío de la construcción. Una democracia participativa, lo que reduce las instancias de delegación y burocracia que

instalan los sistemas puramente representativos” (Pont, 2007). Para ello, es posible contar con la población:

El presupuesto participativo muestra que la población, participando activamente en él y tomando decisiones, es perfectamente capaz de elaborar reglas más justas, unidas, más objetivas en cuanto a las deficiencias sociales y de incidir en un gasto público más democrático.



La cuestión de las reglas es decisiva como observa Yves Sintomer: Sin las reglas que favorecen las inversiones en los sectores más pobres, sin las que permiten una síntesis objetiva entre las demandas que emanan de las calles, los barrios, los sectores, se lograría una adición de solicitudes locales, o una selección arbitraria de los líderes asociativos o políticos entre la multiplicidad de solicitudes. Sin embargo, con el presupuesto participativo se está construyendo un proyecto global (Sintomer, 2 005).

En cuanto a Martine Toulotte (2000), insiste sobre todo en el cambio que se produce en la población y en la mente de las personas, que sintetiza en pocas palabras: dignidad, solidaridad, descubrimiento de la ciudad, adquisición de conocimientos, comprensión de cómo funciona la sociedad, desarrollo de la conciencia colectiva. Para ello, “el proceso de presupuesto participativo de Porto Alegre no es solo una herramienta de transformación urbana, sino también de transformación social”.

Marion Gret e Yves Sintomer (2002: 94, 97) señalan que el proceso da más espacio a aquellos que están socialmente dominados en la sociedad y en la política dominante. Incluso se observó una fuerte presencia de mujeres en las asambleas donde se convirtieron en mayoría a partir de 1998 aunque permanecieron en minoría en los consejos y foros. El proceso permite la afiliación y una presencia masiva de las clases populares que pueden ver la efectividad de su compromiso. También observan que “el dispositivo se diferencia concretamente de la vanguardia autoritaria: está abierto a todos; la pirámide participativa prevé la elección de funcionarios en todos los niveles, y no su cooptación o su nombramiento desde arriba; los criterios de distribución son bastante transparentes y dificultan una relación paternalista entre la vanguardia y el resto de la gente...”

También se observa que el “socialismo municipal” de Porto Alegre se desarrolló después de los cambios en Europa del Este y que aprendió las lecciones del fracaso del socialismo burocrático. Constituye, por tanto, “una de las experiencias

más originales que demuestran que una lucha radical por la justicia social no tiene por qué conducir al totalitarismo”.

Pero, ¿es cogestión o autogestión? El análisis de la estructura del presupuesto participativo muestra que no es, a los ojos de Marion Gret e Yves Sintomer, estrictamente hablando un proceso autogestionario. Más bien, las decisiones se toman globalmente entre el ejecutivo y una pirámide participativa en un proceso de cogestión. Estos autores (2002: 100–101) muestran que, según el caso, se trata de un proceso de autogestión: cuando los participantes toman la decisión final sin intervención del ejecutivo; autogestión bajo el control del ejecutivo: cuando las decisiones se toman de forma autónoma pero controladas por el ejecutivo en el caso de la economía solidaria subvencionada por el ayuntamiento; cogestión por control o influencia del ejecutivo en las decisiones populares: cuando las decisiones son tomadas por la estructura participativa pero deben ser negociadas con el gobierno local; cogestión por control popular sobre las decisiones ejecutivas: cuando las iniciativas deseadas por el ejecutivo están sujetas a la aprobación de la pirámide participativa con poder de veto; poder de decisión del ejecutivo con consulta de los participantes: cuando la interpelación recíproca entre las dos partes termina con una decisión unilateral del ejecutivo; finalmente, decisiones democráticas del ejecutivo: cuando la estructura participativa es totalmente dependiente del ejecutivo. En general, la capacidad de influencia de los ciudadanos es mayor a nivel de barrios o asambleas y foros sectoriales, mientras que la del ejecutivo se siente más a nivel de ciudad y el asesoramiento presupuestario participativo. Las diferenciaciones señaladas

dentro del propio proceso muestran claramente que en un contexto capitalista y en el corsé institucional brasileño, no puede haber un proceso de autogestión plena, ni una autogestión generalizada. Pero estas diferenciaciones no invalidan en modo alguno la apreciación de la dinámica político-social del proceso de una experiencia que sí calificamos, por nuestra parte, de experiencia de autogestión.

La experiencia en el estado de Rio Grande do Sul

En 1998, el PT ganó las elecciones en el estado de Rio Grande do Sul. Olívio Dutra, ex alcalde de Porto Alegre, el primero en experimentar el presupuesto participativo, se convierte en gobernador. Él decide extender la experiencia a todo el estado. Se trata de demostrar que el presupuesto participativo no es alcanzable solo a escala municipal y que las poblaciones de los 497 municipios pueden desarrollar y decidir el presupuesto y el programa de inversiones del Estado. Dada la importancia de los recursos de que dispone el Estado, esta victoria electoral aumentó significativamente los montos debatidos por el presupuesto participativo. De hecho, el acceso al crédito a través de los bancos de desarrollo (Barisol, BNDES y Banco de Brasil) proporciona importantes recursos utilizados para financiar programas en los sectores agrícolas y el desarrollo económico regional. Estas asignaciones financieras también se discuten en el marco del presupuesto participativo.

El Estado también amplía las facultades legales para ejecutar políticas públicas en una escala más significativa a nivel de Rio

Grande do Sul, en particular: transporte y tráfico (pavimentación de carreteras, construcción de puentes), vivienda (vivienda rural, cooperativismo, servicios sociales), vivienda, regularización de tierras), medio ambiente, seguridad pública, educación (red de escuelas públicas, creación de una universidad), salud (implementación de programas regionales y municipales de salud pública), agricultura (reforma agraria, agricultura familiar, programas de lucha contra la pobreza en el medio rural), gestión empresarial (creación de empresas, apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa), economía popular y solidaria (apoyo a los sistemas productivos locales), energía (programa de iluminación en el campo, desarrollo de la producción y distribución de energía eléctrica), inclusión social (renta mínima y red de ciudadanía) (De Souza, 2003).

La transposición del presupuesto participativo del nivel municipal al Estado se realiza esencialmente bajo el mismo principio y la misma arquitectura: se crean veintitrés sectores geográficos, foros temáticos y una pirámide a tres niveles con en la base asambleas plenarias municipales; en el nivel intermedio, asambleas sectoriales; en la parte superior, un consejo presupuestario participativo a nivel estatal. También encontramos los tres parámetros (democracia mayoritaria, justicia social y técnica) así como los tres criterios de asignación presupuestaria (prioridades de habitantes, carencias y poblaciones), siendo el ciclo organizado a lo largo del año (Gret y Sintomer, 2002: 62).

El Estado también establece otra modalidad de relación con los municipios que están llamados a colaborar en la implementación de políticas públicas en la región. Para Ubiratan de Souza, “las relaciones políticas y clientelistas tradicionales comenzaron a ceder en todos los niveles a través de una nueva forma de gestión pública que estableció un control social y la lucha contra las desigualdades regionales mediante el establecimiento de un pacto federal entre el Estado y los municipios” (De Souza, 2003). Otro avance fue la creación a nivel federal de una metodología de la democracia directa y la planificación participativa con un carácter de deliberación en asambleas públicas en todos los municipios gauchos⁵⁵.

Pero la implementación del presupuesto participativo entre 1999 y 2002 encontró una oposición más virulenta en el parlamento regional, donde el PT estaba en minoría. En 2000, un recurso judicial de un diputado federal de la oposición impidió que el proceso continuara al prohibir la asignación de fondos para el funcionamiento de la estructura participativa. No obstante, delegados del presupuesto participativo, alcaldes, organizaciones de base y ciudadanas respondieron organizando reuniones para continuar el proceso de forma autoorganizada y creando el Foro Gaucho para la Defensa de la Participación Popular. La duración del proceso (que no se renovó tras el triunfo de la oposición a finales de 2002) no permite hacer una valoración exhaustiva de esta experiencia a este nivel. Sin embargo, cabe señalar la fuerte participación: la asistencia fluctuó entre 188.000 personas en 1999 y 333.000

55 Se refiere a la región pampeana del sur del país.

personas en 2002; el número de asambleas públicas durante cuatro años asciende a 2.824 y el número de delegados electos a 57.193 (De Souza, 2003).

Las experiencias de Porto Alegre y del estado de Rio Grande do Sul han tenido repercusiones en Brasil, América Latina y el resto del mundo, ya que el “modelo” se ha inspirado y se ha retomado aunque adopte diversas formas.

La ampliación del presupuesto participativo

Ha habido tres fases principales de expansión del presupuesto participativo. La primera (1989–1997) se caracterizó por experiencias en un número limitado de ciudades. La segunda (1997–2000) estuvo marcada por la consolidación en Brasil. Durante esta fase, más de 130 ciudades adoptaron el presupuesto participativo. La tercera fase (a partir de 2000) fue la de expansión y diversificación más allá de las fronteras de Brasil. El presupuesto participativo se ha implementado en 130 ciudades y 30 países diferentes alrededor del mundo (ONU–Habitat, 2005). Según otras fuentes, 1.200 municipios de América Latina han adoptado el presupuesto participativo, alrededor de cincuenta en Europa, de las cuales solo diez en Francia.

Brasil sigue siendo el principal país donde se practica el presupuesto participativo ya que representa casi el 80% de los casos. Pero también se ha desarrollado en la región andina (Perú, Ecuador y más recientemente en Bolivia y Colombia). También existen experiencias de presupuestación

participativa en diversos grados y niveles de formalización en otros países de América Latina y el Caribe (Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, República Dominicana, El Salvador y México). Algunas ciudades europeas han iniciado procesos de presupuestación participativa (principalmente en España, Italia, Alemania y Francia) y se han sumado varias ciudades africanas (Camerún por ejemplo) y asiáticas (especialmente Sri Lanka).

El presupuesto participativo se practica en ciudades de diferentes tamaños (desde ciudades de menos de 20 000 habitantes hasta megaciudades como Buenos Aires o São Paulo). Se practica en municipios rurales o semirurales o localidades totalmente urbanizadas. También se practica en localidades con diversos recursos públicos, como Villa El Salvador en Perú que tiene un presupuesto per cápita diez veces menor que el de las ciudades europeas. A veces también se limita a una parte del municipio como en Buenos Aires o El Alto en Bolivia. También se ha implementado a mayor escala, como en el Estado de Rio Grande do Sul y en algunas provincias del Perú, siendo este país el único país que cuenta con una ley nacional de presupuesto participativo aplicable a todos los municipios y provincias.

No existe un modelo estándar en la ejecución del presupuesto participativo porque las experiencias son producto de las realidades de cada región, de su historia, de su ciudadanía pero también de la cultura administrativa de los poderes públicos.

En América Latina, el presupuesto participativo es, como el experimento de Porto Alegre, una herramienta para

redefinir prioridades y promover la justicia social, lo que no ocurre en Europa. Los ciudadanos pasan de la condición de observadores a la de actores de pleno derecho.

En Europa, uno de los grandes problemas de la mayoría de experiencias es, según Yves Sintomer, “que carecen de la movilización de las asociaciones, la de la sociedad civil”; el proceso es impulsado desde “arriba” y no está inervado por las discusiones de base que forman la base del presupuesto participativo de Porto Alegre. Este es particularmente el caso de Francia. Otra dificultad es la falta de reglas claras que permitan sintetizar las diferentes solicitudes de manera no arbitraria en la materia. ¡Francia es un buen ejemplo! Es el país de la informalidad, de la ausencia de claridad, de la vaguedad en la forma en que se establece la síntesis al final de las discusiones; los políticos escuchan, luego seleccionan subjetivamente” (Sintomer, 2005).

El presupuesto participativo fue llevado en Francia principalmente por la red Democratizar radicalmente la democracia, pero tuvo una respuesta limitada debido al fuerte significado de la democracia representativa, la falta de interés y la confiscación del poder por parte de los concejales, así como la débil aportación proporcionada por la mayor parte de la “izquierda de la izquierda”. Solo fue apoyado por la izquierda alternativa y algunos sectores del PCF, y en menor medida por los Verdes electos y, más raramente, por los socialistas. Basta observar el papel de casi todos los funcionarios electos, hostiles, indiferentes o condescendientes, en los consejos vecinales. Esta situación es paradójica por decir lo mínimo en un país donde Rousseau y Condorcet ejercieron una influencia

significativa en el pensamiento político y que experimentó formas de democracia directa durante las diversas revoluciones y comunas de 1792 y 1871.

Si el presupuesto participativo no puede representar un “modelo” excluyente, sin duda la experiencia de Porto Alegre permitió renovar radicalmente la democracia y demostrar que es posible involucrar a la población en la definición y decisión de las políticas públicas que principalmente les conciernen.

Mientras que en las sociedades occidentales, la democracia representativa se encuentra en medio de una crisis, expresada por su creciente descrédito y el continuo aumento de la abstención por parte del electorado popular, de que el capitalismo globalizado está reduciendo sus poderes, el presupuesto participativo fue una innovación clave y demostró que formas democráticas de organización heredada de finales del siglo XIX, podrían ser revisadas. Esta experiencia también mostró que no basta con referirse a las múltiples experiencias e intentos de emancipación, autodeterminación, autogestión de los trabajadores, que marcaron los dos últimos siglos para justificar una estrategia de ruptura. De hecho, las instituciones políticas que gestionan la “ciudad”, la sociedad, ya no pueden funcionar como en el pasado. Se cuestiona la democracia representativa:

La globalización financiera e industrial, la resultante concentración extrema en las principales actividades económicas, reducen la capacidad de los Estados para regular las relaciones sociales e incluso los obliga a delegar

determinadas funciones soberanas. La ley, la justicia, las monedas son administradas cada vez más por instituciones internacionales protegidas de todas las sanciones electorales. El mantenimiento del orden nacional e internacional suele ser la función última de los Estados hasta el punto de darle una sorprendente actualidad a la fórmula de Engels “el Estado es un grupo de hombres armados” (Fiant, 2005).

En general, la desaparición de la democracia representativa conduce al establecimiento de Estados autoritarios, al mismo tiempo que la respuesta de los partidos burgueses y políticos de derecha a la crisis de la política y su representación se afirma: acentuación de la profesionalización de la política y una condescendencia asumida y no disimulada frente al sufragio universal (Lefebvre, 2009).

Los estamentos elegidos no representan ni las aspiraciones ni las protestas populares. La credibilidad de las instituciones políticas, comenzando por los propios partidos políticos, se ve cada vez más afectada por esta regresión generalizada de la democracia:

La democracia se ha convertido en una ideología de clase que legitima sistemas que permiten a unos pocos individuos gobernar, y gobernar por así decirlo sin el pueblo; sistemas que parecen excluir de su modus operandi cualquier posibilidad que no sea la reproducción infinita (Ross, 2009: 118).

Por tanto, la democracia no es renovar, sino reinventar. Para nosotros, es la resultante de una generalización de la autogestión, la de la república autogestionaria. Considerado globalmente, este tema es la alternativa a la profesionalización de la política al permitir que la democracia y la política se conviertan en asunto de todos. En este contexto, el presupuesto participativo en Porto Alegre fue más que un experimento porque “la gran cantidad de casos en los que este modo de democracia se ha establecido de manera ejemplar nos confirma en la idea de que es una forma de construir un proyecto socialista “(Pont, 2007).

Abril de 2010

Para saber más:

Burgos–Vigna, Diana (2006), “Los cambios en la gobernabilidad democrática en América Latina”, CERI.

De Souza, Ubiratan (2003), “Orçamento participativo – experiencia del gobierno del estado de Rio Grande do Sul”, enero.

Favreau, Louis (2008), “Villa El Salvador: economía solidaria, desarrollo local y coproducción de servicios en un barrio pobre”, en Julie Duchatel y Florian Rochat (2008), *Produire de la riche else*, Ginebra, CETIM.

Fiant, Michel (2005), “Bocetos para un proyecto de autogestión”, junio.

Genro, Tarso y Ubiratan De Souza (1998), Cuando los habitantes realmente gestionan su ciudad: la experiencia de Porto Alegre, París, L'école des Amériques.

Gorz, André (Michel Bosquet) (1975), Ecología y política, París, Galilée.

Gorz, André (1991), Capitalismo, socialismo, ecología, París, Galilée.

Granet, Estelle y Solidaridad (2003), Porto Alegre, las voces de la democracia, París, Syllepse.

Gret, Marion e Yves Sintomer (2002), Porto Alegre. Esperanza de otra democracia, París, La Découverte.

Lefebvre, Rémi (2009), "Hacer política o vivir en política", Le Monde diplomatique, octubre.

Münster, Arno (2008), André Gorz o socialismo difícil, París, Lines.

ONU-Hábitat (2005), 72 preguntas comunes sobre el presupuesto participativo, Programa de gestión urbana.

Pont (Raúl) (2000), "La experiencia del presupuesto participativo de Porto Alegre", Le Monde diplomatique, suplemento: "Cuando la ciudad es portadora de las esperanzas de ciudadanía", mayo.

Pont (Raúl) (2007), "La experiencia de Porto Alegre", Fundaciones, n ° 5, Fundación Gabriel Péri.

Red de empoderamiento ciudadano (2000), No formación ciudadana sin acción sobre la realidad. Presupuesto participativo de Porto Alegre.

Rosanvallon, Pierre (2000), “La presentación de las reflexiones de Condorcet”, en Pierre Rosanvallon, La democracia inconclusa, París, Gallimard.

Ross, Kristin (2009), “Democracy for Sale”, en George Agamben et al.

(2009), Democracia, ¿en qué estado?, París, La Fabrique.

Sartre, Jean–Paul, Pierre Victor, Philippe Gavi (1972), Tenemos razón en rebelarnos, París, Gallimard.

Sintomer, Yves (2005), “Entrevista”, Territoire.

Toulotte, Martine (2000), “Porto Alegre, un ejemplo de democracia participativa a seguir”, intervención en el Congreso de Alternativas.

LA COMUNA 17 DE ABRIL

Flora Bajard y Julien Terrié

“La pregunta ¿Qué ciudad queremos? es inseparable de una multitud de otras preguntas: ¿Qué tipo de personas queremos ser? ¿Qué relaciones sociales perseguimos? ¿Qué relación con la naturaleza defendemos? ¿Qué vida diaria queremos? ¿Qué tecnologías consideramos apropiadas? ¿Qué valores estéticos defendemos? El derecho a la ciudad, por tanto, no se reduce a un derecho de acceso individual a los recursos que encarna la ciudad: es un derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad de tal manera que la haga más acorde con nuestro deseo»

(Harvey, 2009).

Un *acampamento* es la ocupación de tierras que no cumplen con su función social, es decir, tierras improductivas o que producen en monocultivo para exportación, transgénicos o

trabajadores esclavos, destinado a atraer la atención de las autoridades públicas sobre la situación mientras se espera la expropiación de la misma⁵⁶. Reconocibles por las afortunadas casas construidas con madera y lonas negras, los *acampamentos* pueden mantenerse durante varios años cuando las instituciones estatales o federales no dan respuesta. Por otro lado, una vez que la tierra ha sido asignada a los “sin tierra” por medios legales, se convierte en un *asentamiento*. Si bien los acampamentos generalmente se ubican en el campo, en Fortaleza, la cuarta ciudad más grande de Brasil (Estado de Ceará) en el noreste de Brasil, se creó un campamento urbano el 17 de abril de 2010. Fue bautizado por sus habitantes “Comuna 17 de abril”. Así es como los ocupantes presentan los hechos:

En la madrugada del 17 de abril de 2010, cuatrocientas familias del Movimiento de Consejos Populares (MCP)⁵⁷ y del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST)⁵⁸ ocuparon el predio de São Jorge, en el barrio José

56 Ley 184 de la Constitución Federal de Brasil: "Es responsabilidad de la Unión expropiar por razón social o con fines de reforma agraria, la propiedad rural que no cumpla su función social, sujeta a una compensación previa y justa."

57 Movimiento de consejos populares. Nacido en 2004, este movimiento político de barrios. Los grupos populares de Fortaleza cobraron impulso durante la campaña electoral de Luiziane Lins. (Partido de los Trabajadores) en 2008, que ayudó a ganar. Desde 2008, decepcionado con el mandato por Luiziane Lins, el MCP se distancia y elige formas de luchas radicales, en particular en forma de ocupación de edificios.

58 Movimiento de trabajadores rurales sin tierra. Movimiento social nacido en 1985, el MST es un movimiento popular rural que organiza a los campesinos sin tierra en 24 estados, de los 26 cuenta Brasil. Su objetivo es la implementación de una verdadera reforma agraria, y para esto interviene en el campo político, en particular al ocupar tierras improductivas latifundios con miras a obtener su expropiación. El MST organiza alrededor de un millón familias sin tierra en Brasil, y es el movimiento social brasileño más poderoso.

Walter de Fortaleza. Era el latifundio⁵⁹ más grande de Fortaleza, más de 500 hectáreas de terreno en un área urbana, equipado con toda la infraestructura y solo esperando el desarrollo del terreno. El sitio de São Jorge perteneció a la familia Montenegro, uno de los principales terratenientes de nuestra ciudad. El Municipio nació de la necesidad de cuatrocientas familias, algunas de las cuales, organizadas desde 2007 en la lucha por una vivienda digna, ya no veían en las autoridades públicas ninguna perspectiva de éxito en su solicitud de vivienda⁶⁰.

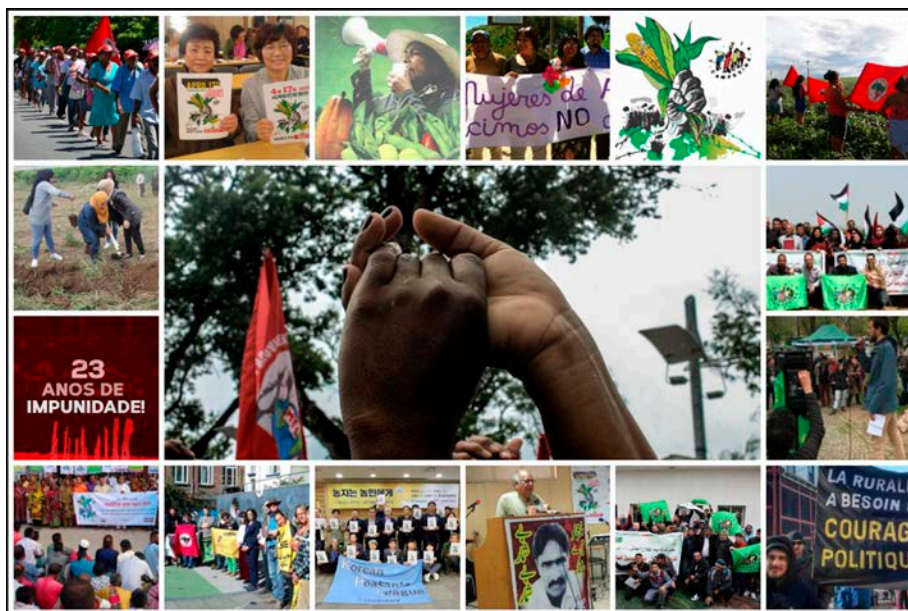
El 2 de marzo de 2011, un año después del inicio de la ocupación, las familias obtuvieron una importante victoria: mil doscientas viviendas se construirán en la tierra ocupada. De ahí la pregunta que nos interesa aquí, si nos marcamos el objetivo de mirar esta experiencia local brasileña como un laboratorio de reflexión sobre la autogestión y la reorientación estratégica de estos movimientos sociales: a la luz de qué hallazgos encaja esta ocupación urbana en nuevas formas de lucha política? ¿Qué fuerzas ha permitido poner en acción la experiencia de la Comuna durante este año de ocupación para lograr tal resultado, y cómo caracterizar el proceso que ha conducido a ello?

Cuando fuimos a la Comuna 17 de abril de mayo de 2010, el lugar parecía un lugar en fase de emergencia: se había levantado una carpa de circo en el centro del terreno, se habían levantado casas improvisadas de madera y chapa y había otras, de las que no se percibían más que estructuras

59 Gran propiedad territorial.

60 Texto del blog del Ayuntamiento del 17 de abril, <http://comuna17deabril.blogspot.fr/>.

ligeras de ramas, que llamaban la atención. Los ocupantes cavaban trincheras, otros estaban ocupados con la limpieza del local. Pero esta fase de instalación ya estaba anclada en otra dinámica que se había concretado en apenas unas semanas de ocupación: la de la vida política, la organización colectiva y las actividades comunitarias del acampamento. Un paseo por el Municipio reveló que la escuela, donde mujeres de todas las edades aprendían a dibujar las letras del alfabeto, estaba funcionando, que el cuartel ya estaba organizado en núcleos⁶¹, y que la gran carpa servía de lugar de encuentro para discusiones colectivas y toma de decisiones.



En definitiva, en la Comuna 17 de abril ya se pusieron en práctica muchos principios operativos que se encuentran en la mayoría de los acampamentos y asentamientos⁶². En este sentido, es importante señalar que la organización espacial y

61 Unidad básica de la organización, a menudo formada por diez familias. En Fortaleza, los núcleos se crearon de acuerdo con los barrios de origen de las familias.

62 Sobre la organización del MST, ver Stedile y Mançano (2003).

humana no apunta a una apariencia de orden, sino que constituye la implementación material y concreta de los objetivos filosóficos y políticos del movimiento. En efecto, es a través de un conjunto de elementos objetivos y simbólicos que se materializa el proyecto de emancipación de cada persona como sujeto, pero también el futuro colectivo, que consiste en redescubrir la visibilidad y el reconocimiento social: agrupaciones de viviendas en núcleos y organización participativa, realización de encuentros y asambleas, organización de actividades por sectores (salud, educación, cooperativas, arte...), trabajo, estética y representaciones específicas (canciones, teatro, iconografía, consignas...) y, por supuesto, producción agrícola.

Un aspecto particularmente llamativo de esta organización social y política, a fortiori para un observador acostumbrado a formas más clásicas de compromiso y militancia, es la fuerte creatividad para desarrollar soluciones a los problemas encontrados y consolidar el trabajo colectivo. Así, gracias a la experiencia del MST, algunas de sus prácticas como las *místicas*, una forma de educación permanente, por ejemplo, han sido importadas a la Comuna. Las *místicas* son celebraciones que no se limitan a la religión, sino que abordan los temas de la opresión y el sueño de una sociedad futura a construir a través del teatro, el canto, la danza, la poesía. Las *místicas* permiten, en forma metafórica y simbólica, materializar las aspiraciones de todos, y crear un “todo” consolidando lo colectivo y una conciencia de clase en construcción: es en estos términos que los militantes lo expresan habitualmente. Al igual que con otras actividades (toma de decisiones sobre la vida colectiva, trabajo agrícola,

participación en las tareas del hogar, construcción y renovación de edificios, animación de talleres, etc.), las místicas involucran física y mentalmente a cada ocupante en un nuevo rol social: el de actor de la propia vida, integrado en un colectivo que comparte trayectorias y condiciones de vida similares, y habiendo comprendido que la opresión no es el resultado de una condición social perteneciente a un destino, sino la consecuencia de un sistema cuyos mecanismos conducen a relaciones de dominación entre clases sociales. Así, lugar de residencia, trabajo, organización colectiva, la Comuna es un lugar para jugar con la transformación de los destinos, forjados por los propios actores del movimiento, “territorio pendiente”, el “acampamento” permite romper con un visión cerrada, homogénea del tiempo y abre una brecha hacia un tiempo de posibilidades –de “otro mundo posible”– dentro del cual se pondrán a prueba nuevos valores” (Martig, 2012). Si la Comuna es este espacio de espera, también lo atraviesa una dinámica, un proceso interminable y un desafío perpetuo: la transformación de las condiciones de vida objetivas y la constitución de un sentimiento de pertenencia a una clase social.

El retorno a la tierra en un entorno urbano: las especificidades de las comunas *da terra*

Las comunas son, pues, lugares de socialización, politización y educación popular y militante. Estratégicamente, ellas –al igual que los *acampamentos* y *asentamientos* en general– constituyen puntos de referencia o apoyo para nuevas

experiencias del mismo tipo cerca o en otro lugar del país. En Fortaleza, la Comuna 17 de abril tiene todas las características de las ocupaciones de los sin tierra. Sin embargo, como ocupación en un entorno urbano, el Municipio constituye una experiencia innovadora en Brasil⁶³. Por tanto, para comprender esto es necesario identificar sus especificidades con respecto a los *acampamentos* tradicionales.

En primer lugar, por primera vez, la mayoría de los habitantes de la ciudad, sujetos a una dominación económica, social y simbólica anclada en las formas urbanas del capitalismo (trabajos ocasionales, favelas, miseria y violencia urbana) tuvieron que aprender a cultivar la tierra y vivir de este trabajo. A la conciencia política se sumó, por tanto, la necesidad de formación en agricultura: cultivar hortalizas y frutas, o cultivar cereales, los nuevos ocupantes de la Comuna tenían que aprenderlo, o recordarlo. Así, la operación de una comunidad se diferencia ante todo de los *acampamentos* o *asentamentos*, en que es portadora de un nuevo proceso: el de un “retorno a la tierra en un medio urbano” entendido como “recreación, revalorización y reactivación de los valores de la moral campesina “(Goldfarb, 2007: 72).

El funcionamiento en el trabajo cooperativo y colectivo permite, como en otras ocupaciones, escapar de las relaciones de producción de la lógica capitalista. Sin embargo, también se crea aquí un territorio “campesino” en la ciudad, en relación con el tiempo, con la vida cotidiana y con los valores

63 Se iniciaron otras tres ocupaciones urbanas en Campinas, Guarulhos y Belo Horizonte. Vea los detalles a continuación sobre estas comunas da terra en áreas urbanas.

éticos asociados a ella. Segunda especificidad, el término de Comuna en el MST implica que se trata de una “concesión de derecho real de uso”, un estatuto particular que prohíbe la propiedad individual del terreno, aunque esto sea posible en otras ocupaciones del MST. Por lo tanto, no existe título de propiedad de la Comuna 17 de abril, y en ningún momento las familias pueden revender individualmente los terrenos obtenidos, como ha sucedido, aunque en raras ocasiones, en otros *asentamientos* del MST.

Finalmente, la última diferencia de ésta con las ocupaciones “clásicas” en Brasil: el entorno urbano en el que se establece la Comuna, modifica levemente sus desafíos y su funcionamiento en comparación con el entorno rural. En primer lugar, la proximidad a las redes de tráfico ilícito (en particular de drogas) requiere una mayor vigilancia por parte de las organizaciones y ocupantes, frente a los riesgos de implantación de estas redes dentro de las comunidades. Luego, el contenido de las actividades creadas en el *asentamiento* queda vinculado al contexto urbano, donde el sector terciario se está desarrollando más: la Comuna 17 de abril tiene por ejemplo un salón de belleza comunitario, una cooperativa de costura, una bodega denominada Victoria Colectiva, y una tienda de comestibles que vende productos de la Comuna y garantiza precios populares en las necesidades básicas. Tales espacios generan una economía abierta a la ciudad.

Las comunas *da terra*: ¿una estrategia con futuro?

Somos parte de una estrategia más amplia, una estrategia común a todos los movimientos sociales, que es la de la revolución, del sueño de un mundo diferente, de transformación. Creo que esto es lo que unió estas luchas en este movimiento de movimientos

(Talita, activista del MCP en la Comuna).

Si bien los problemas vinculados a la posesión y el trabajo de la tierra, en Brasil como en el resto de América Latina, han tomado esencialmente la forma de luchas en las áreas rurales, dos observaciones han surgido en los últimos años: primera, los impactos de la propiedad de la tierra en las relaciones de dominación política y económica se sienten tanto en los grandes centros urbanos, como en las zonas rurales⁶⁴. Además, la ciudad es un espacio donde se concentran las contradicciones más fuertes del modelo capitalista, y por tanto grandes poblaciones que pueden movilizarse para los objetivos revolucionarios que buscan los movimientos sociales y partidos políticos de la izquierda radical. Además, el Movimiento de los Sin Tierra, después de veintisiete años de existencia y enormes avances históricos en la reforma agraria (más de 20 millones de hectáreas expropiadas, cerca de un millón de familias sin tierra organizadas) conoce perfectamente los límites de su lucha política: Brasil es un país esencialmente urbano, país, porque aunque la relación con el poder sigue muy ligada a la posesión

64 Tenga en cuenta que la Copa Mundial de la FIFA 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 fortalecer las políticas de planificación regional basadas en el desplazamiento de poblaciones pobres en las afueras de las ciudades.

de la tierra rural, el 87% de la población vive ahora en las ciudades, especialmente las clases pobres⁶⁵.

Además, desde finales de la década de 1990, la dirección del MST ha orientado su pensamiento estratégico hacia la “conquista” de las ciudades. Teniendo esto en cuenta, se habían probado dos ideas principales: el establecimiento de activistas del MST en las favelas, por un lado, y el apoyo del MST a los movimientos por la vivienda, como el MTST (Movimiento de trabajadores sin hogar), por el otro. Sin embargo, dos grandes contradicciones vinieron a impedir estos experimentos. La primera, la confrontación con las organizaciones en las favelas, incluidas las organizaciones criminales vinculadas a diversas formas de trata de personas. La segunda, que aquí nos interesa especialmente, ligada a la naturaleza de la lucha por la vivienda: la construcción de organizaciones en torno a la conquista de la vivienda no conduce, sin embargo, a diferencia de la lucha por la tierra, a la conquista de la vivienda y medios de producción. En otras palabras, las personas sin hogar obtienen una vivienda, pero a menudo permanecen en la pobreza, sin perspectivas de trabajo más que a trabajos ocasionales o indigencia⁶⁶.

Así, desde 2001, en el Estado de São Paulo, el MST está considerando un proyecto de *comunas da terra* –que pondrá en práctica a partir de 2003 en Guarulhos y Campinas– y la experiencia de Fortaleza es parte de la continuidad de estas

65 Cifras dadas por la Universidad de Sherbrooke (Quebec) en 2010.

66 Esto también explica el menor impacto político de las conquistas urbanas en Brasil, y la equilibrio de poder mucho menos favorable a los movimientos sociales que crean con las Instituciones.

reflexiones. Se suponía que sembrar, plantar, cosechar, transformar, vender productos agrícolas aglutinaría las aspiraciones de estos dos movimientos, el MST y el MCP: dar una vivienda digna a las personas sin hogar y salir de un sistema de alquiler que perpetúa la precariedad. Ofrecerles un trabajo, el de la tierra, sin el cual su sustento económico y social no podría existir.

En Fortaleza, fue primero a través del “trabajo de base” y una presencia en los barrios iniciada por el MCP en 2008 que se inició este movimiento. La idea es unir a los residentes en torno a este gran tema: la lucha por la vivienda. Esto podría constituir entonces el inicio de otras luchas (trabajo, salud, educación), y el punto de partida de un proceso que sería percibido, según Erika (miembro del Partido Socialismo y Libertades que milita en la Comuna 17 de abril), por los habitantes como una “forma de conquistar su existencia”. Hoy, la ocupación urbana de tierras cultivables en Fortaleza ha permitido ofrecer perspectivas de hábitat y producción, pero también venta directa al consumidor de productos agrícolas provenientes de la agricultura campesina; productos ecológicos y cooperativos. Importando a la ciudad demandas, formas de militancia y organización del MST, la Comuna del 17 de abril prefigura así la nueva estrategia de los movimientos campesinos y anticapitalistas en Brasil, encaminados a la reforma agraria y urbana. En este caso, la ocupación de tierras en la ciudad y la conquista de un hábitat, asociado al funcionamiento productivo autogestionado del Municipio, permitió la implementación conjunta del derecho a la vivienda y el derecho al trabajo.

Finalmente, estas dos lógicas desplegadas dentro de la organización colectiva del MST han llevado también a los habitantes-productores a convertirse, como Jacinte (activista del MST y ocupante de la Comuna 17 de abril), en “sujetos de su propia historia”. Porque el registro en una lucha política con el MST y el MCP introduce otros parámetros, además de la obtención de un techo y un empleo: luchas globales contra los latifundios, los distribuidores de productos agrícolas, transgénicos, agroindustria nacional o internacional, pero también contra la especulación inmobiliaria, así como contra el tráfico y sus redes. Esta inclusión en una lucha más generalizada y la conciencia, a través de los intensos momentos de discusión, formación e información inherentes a los procesos de luchas sociales y vida colectiva en *acampamento*, constituyen elementos de (re) construcción individual y de sujetos sociales colectivos, que ahora afrontan las injusticias y males que los habían “deshumanizado” hasta entonces.

Esta estrategia ganando en Fortaleza podría ser un soplo de aire fresco para un MST en tensión entre su tendencia gubernativa (cercana al gobierno) y su tendencia más combativa cercana al Partido de los Trabajadores (PT). De hecho, hoy el MST se encuentra en un precario equilibrio en su apoyo crítico a Dilma Rouseff y su gobierno, mientras que las expropiaciones han estado bloqueadas desde que Lula llegó al poder (2002).

Es indiscutible que muchas de las demandas del MST han sido satisfechas con respecto a los *asentamientos* (créditos, programas sociales...), pero es probable que las dificultades del

MST aumenten porque el gobierno ha optado ahora por una agroindustria orientada a la exportación y la economía “verde” (agrocombustibles, monocultivos, transgénicos), y abandona por completo el proyecto de agricultura familiar. Según el MST, 2011 fue el peor año de conquistas referentes a la reforma agraria desde su existencia, razón suficiente para inventar nuevas estrategias, como ya lo había hecho el Movimiento a lo largo de su historia.

2013

Fuente: Flora Bajard y Julien Terrié, en Franck Gaudichaud, (coord.) América Latina: Émancipations en construction, París, Syllepse, 2013,

www.syllepse.net/Ing_FR_srub_98_iprod_560-ameriques-latinas-emancipations-en-construction.html.

A consultar: Bajard, Flora y Julien Terrié (2011), Comuna, documental, 28 mn, [www.youtube.com / watch? v = jZYDw2NnqhU](http://www.youtube.com/watch?v=jZYDw2NnqhU).

Para saber más:

Goldfarb, Yamila (2007), “A luta pela terra entre o campo ea cidade: as comunas d a terra do MST, sua gestacao, principais atores e desafios”, Dissertacao de Mestrado, apresentada ao curos de Post–Graduacao, Geografia humana, Universidad de São Paulo.

Harvey David (2009), “El derecho a la ciudad”, Revista internacional de libros e ideas, Octubre 12.

Martig, Alexis (2012), “El fenómeno del acampamento en Brasil: ocupación del territorio, expectativa de la tierra y reconocimiento social...”, <http://terriat.hypotheses.org/518>.

Stedile, João–Pedro y Bernardo Mançano Fernandes (2003), Landless people, Pantin, El tiempo de las cerezas.

DEMOCRATIZACIÓN, CRISIS ECONÓMICA Y RECUPERACIÓN DE EMPRESAS

Vanessa Moreira Sigolo

¿Podría presentarnos el alcance del fenómeno de recuperación de empresas gestionadas por trabajadores en su país, su origen y su evolución?

En Brasil, el fenómeno de la toma de empresas por parte de los trabajadores surgió en la década de 1980 y se aceleró en la década de 1990 en el contexto de la redemocratización del país, tras la intensa actividad de los movimientos sociales contra la dictadura militar y las grandes manifestaciones populares por la realización de elecciones directas (Diretas-Já). Pero también fue un período de grave crisis económica, provocada por la creciente integración del país al proceso de globalización económica y la implementación de políticas neoliberales, que generó un aumento significativo en el número de quiebras empresariales y provocó la pérdida de puestos de trabajo para miles de trabajadores. En reacción y resistencia a la pérdida de empleo y la pobreza, los

trabajadores ocupan, resisten y recuperan sus fábricas y, a través de la lucha y la negociación, tienen éxito en acceder a los medios de producción de las empresas y a la propiedad colectiva.

En América Latina, las experiencias más antiguas del fenómeno de las empresas recuperadas por los trabajadores se encuentran en Brasil. Entre los más conocidos están los casos de ocupación y recuperación de una mina de carbón en Santa Catarina, ahora Cooperminas; la lucha por la tierra y el control de una fábrica de azúcar de caña en Pernambuco, la fábrica Catende; la recuperación de empresas metalúrgicas como Uniforja y Coopermetal; y el caso de la fábrica ocupada Flaskô, que desarrolla una intensa actividad política y comunitaria. Durante las últimas décadas, en varios estados del país, ha habido docenas de luchas por las tomas de posesión de los trabajadores. Según datos proporcionados por los archivos de Anteaq, durante la década de 1990, más de 700 empresas en quiebra contactaron con la asociación en busca de apoyo para las recuperaciones. Cabe señalar que las primeras experiencias fueron confrontadas con la resistencia del movimiento sindical, encerrado en la clásica relación patrón–empleado. En muchos casos, los trabajadores fueron apoyados por movimientos sociales, grupos políticos vinculados a la oposición sindical (en particular a través de la importante experiencia de los comités de fábrica) y grupos de la Iglesia (con una fuerte influencia de la teología de la liberación, que apoyó la formación y organización política de los trabajadores durante la dictadura). Sólo posteriormente, a fines de la década de 1990 y principios de la de 2000, el tema de la recuperación y la autogestión conquistó un espacio

dentro de la Central Única de Trabajadores (CUT), en particular con la creación de Unisol–Brasil (Central de cooperativas y empresas solidarias).

Durante nuestra investigación en 2011–2012, identificamos 145 casos de ERT, de los cuales 67 todavía están activos hoy en el país. Agrupan a unos once mil trabajadores, principalmente hombres (67%), con un nivel máximo de educación hasta la secundaria. La gran mayoría de empresas son urbanas, del sector industrial, constituidas en cooperativas y en ocasiones formadas por alrededor de un centenar de socios (solo hay cuatro casos que superan los 500 trabajadores). Están involucrados en varias ramas de la producción: metalurgia, textiles/vestuario, productos lácteos/alimentos, químicos, plásticos, hoteles, alcohol y azúcar, calzado, cerámica, muebles, educación y minería.

¿Estas experiencias realmente ayudan a establecer nuevas formas de organización del trabajo y nuevas relaciones sociales en la empresa?

En general, frente a innumerables desafíos, como confirman las investigaciones, las empresas logran poner en práctica formas colectivas y democráticas de organización del trabajo. Casi en todos los casos (92%), afirman practicar la autogestión en respuesta a la pregunta sobre la forma de organización del trabajo. Entre los datos importantes: la creación de nuevos espacios, mecanismos colectivos de toma de decisiones, nuevas estrategias de transparencia y acceso al

financiamiento; aumento de la flexibilidad del trabajo (horarios y funciones); la sustancial reducción del número de accidentes de trabajo y la considerable reducción de las diferencias de remuneración (en la mayoría es de uno a cuatro veces menor). Estos datos son concomitantes con los informes que subrayan una mayor libertad y participación en las decisiones relacionadas con el trabajo, una mayor estabilidad, la reducción de la presión y la mejora de la relación entre los trabajadores, permiten afirmar el surgimiento de nuevas formas de organización y relación laboral en las empresas gestionadas por los trabajadores. Sin embargo, es importante subrayar que existe una gran diversidad de casos, que incluyen empresas que han cambiado poco en la organización del trabajo y reproducen las divisiones y desequilibrios de poder entre los trabajadores, así como también son muchas las experiencias que han establecido nuevas formas de organización y trabajo colectivo, prácticas políticas y comunitarias, orientadas por la lógica de la autogestión y la democratización de las relaciones sociales. Esta diversidad indica que el cambio en la propiedad de los medios de producción no implica necesariamente transformaciones completas en las relaciones sociales de producción, aunque son esenciales para estas transformaciones.

¿La recuperación de empresas por parte de los trabajadores te parece un proceso viable y constituye una de las respuestas a la crisis del capitalismo y contribuye a un proyecto de emancipación?

A pesar de un panorama bastante diverso, las experiencias de recuperación de empresas por los trabajadores tienen claramente en común el sentido de resistencia, de mantener espacios de trabajo que, según la lógica del capital, han desaparecido. El hecho de que decenas de casos sigan activos en Brasil, muchos desde hace más de quince años, demuestra la viabilidad de la producción con la autogestión de los trabajadores. Además, estas experiencias demuestran agudamente la posibilidad concreta de restituir el estatus de productores directos a los trabajadores y la inutilidad de la figura del patrón, desafían el debate político público sobre los elementos centrales de la reproducción del sistema capitalista: trabajo asalariado/subordinado y propiedad privada capitalista. Tales experiencias constituyen referentes para la renovación del socialismo en la actualidad y deben estar vinculadas a los movimientos sociales comprometidos con la profundización de la democracia y la centralidad de la lucha por la autoemancipación del trabajo y de la sociedad.

¿Cuáles son los avances y las dificultades de estas experiencias de autogestión en su país?

Durante la última década, ha habido muy pocos casos nuevos de recuperación por los trabajadores. Esto debe ser analizado considerando las mayores tasas de empleo formal y el desarrollo de políticas públicas sociales, pero también los impactos de la nueva ley concursal aprobada en 2005, que creó nuevos mecanismos para el mantenimiento del negocio y la reducción de la posibilidad de recuperación de la

empresa por los trabajadores. Sin embargo, es un hecho que siguen surgiendo nuevas experiencias de recuperación en Brasil, lo que demuestra la posibilidad de que el fenómeno continúe incluso en períodos de expansión económica porque seguimos siendo uno de los países más desiguales del mundo.

Sobre las dificultades, en la investigación, los trabajadores destacaron principalmente la falta de apoyo del Estado: la ausencia de políticas de asistencia técnica y educativa; falta de acceso a crédito, tecnología y un marco legal adecuado; y finalmente el tipo impositivo excesivo.

Las únicas políticas públicas existentes se ganaron mediante la movilización social, a saber, la creación de la secretaría nacional de economía solidaria dentro del ministerio de trabajo y empleo y el programa del Banco Nacional para el desarrollo económico y social. Además, en el contexto de las crisis sociales, económicas y ecológicas del capitalismo contemporáneo, las experiencias de las empresas en recuperación son cada vez más de actualidad en los países del centro del capitalismo.

El surgimiento de nuevos casos y las nuevas relaciones e intercambios que se establecen entre las experiencias de diferentes países, en los que la trayectoria de recuperación de las empresas por parte de los trabajadores latinoamericanos ha inspirado la lucha de los trabajadores de otras regiones del mundo e indican posibles nuevas formas de acción política de los trabajadores.

¿Cómo se desarrolla el trabajo de articulación y debate entre investigadores, trabajadores y activistas? ¿Podría explicar la metodología utilizada?

Yo soy formadora–investigadora en Nesol–USP, donde trabajamos desde una concepción de una Universidad que se sustenta en tres pilares: docencia, investigación y extensión. Esta última dimensión, a menudo marginada, garantiza la realización del principio de inseparabilidad entre teoría y práctica. También significa la lucha por la apertura de la Universidad a la sociedad y particularmente a los movimientos sociales y populares. Nuestro trabajo se basa en referencias pedagógicas de educación popular (Paulo Freire) y el principio político de autogestión, como proceso de construcción permanente, incluso en la organización interna del centro. La investigación realizada con las empresas recuperadas por los trabajadores resulta de la articulación entre investigadores de diez universidades brasileñas, poseyendo una experiencia activista y colaboración con los trabajadores de las empresas recuperadas, incluyendo proyectos con Anteag y Unisol. Así, el trabajo tiene sentido en el diálogo permanente y la construcción conjunta del conocimiento con los trabajadores, cuyo principal objetivo es contribuir al fortalecimiento y aumento de las experiencias de autogestión como formas de resistencia y de lucha obrera. En cuanto a la investigación realizada, ahora estamos trabajando en la divulgación amplia de los datos y se están organizando reuniones para discutir los resultados con los trabajadores. Con ellos y las organizaciones del movimiento de economía solidaria, propusimos al gobierno federal la realización de una conferencia temática nacional sobre empresas recuperadas por

trabajadores en 2014. Además, los investigadores del grupo continúan implementando nuevos trabajos colaborativos con los trabajadores en sus distintas universidades y campos disciplinares (como ingeniería, sociología y educación).

Verano 2014

Fuente: *Contretemps* (2014), n ° 22, verano, París, Syllepse.

Para saber más:

Anteag (2004, 2005, 2006), *Autogestão e economia solidária, uma nova metodologia*, vol. 1, 2 y 3, Brasilia, Ministério do Trabalho e Emprego.

Chedid Henriques, Flavio (2014), *Autogestão em empresas recuperadas por trabalhadores Brasil e Argentina*, Florianópolis, Insular.

Chedid Henriques, Flavio et al. (2013), *Empresas Recuperadas por Trabalhadores no Brasil*, Río de Janeiro, Multifoco.

Chedid Henriques, Flavio et al. (2014), "Las Empresas recuperadas por los trabajadores/as en Brasil: resultados de un relevamiento nacional", en Andrés Ruggeri, Henrique Novaes y Mauricio Sarda de Faria (dir.), *Crisis y autogestión en el siglo XXI: Cooperativas y empresas recuperadas en tiempos de neoliberalismo*, Buenos Aires, Continente.

Nascimento, Claudio (2014), "Sindicalismo y autogestión", en Andrés Ruggeri, Henrique Novaes y Mauricio Sarda de Faria

(eds.), Crisis y autogestión en el siglo XXI: Cooperativas y empresas recuperadas en tiempos de neoliberalismo, Buenos Aires, Continente.

Novaes, Henrique y Mauricio Sarda de Faria (2014), “¿Hacia dónde van las empresas recuperadas por los trabajadores brasileños?”, En Andrés Ruggeri et al. (ed.), Crisis y autogestión en el siglo XXI: Cooperativas y empresas recuperadas en tiempos de neoliberalismo, Buenos Aires, Continente.

LAS EMPRESAS RECUPERADAS POR LOS TRABAJADORES

Richard Neville

La publicación de un libro sobre el proceso de recuperación en Brasil nos recordó que en este país se da un proceso idéntico al de Argentina y que incluso lo precedió (Chedid, 2013). El libro está prologado por Paul Singer⁶⁷, que desarrolló la implementación tecnológica de cooperativas populares en el Estado de São Paulo, y más tarde en todo Brasil.

Prácticamente desconocido en Francia y Europa, el proceso ERT brasileño sigue siendo una realidad que ha dado lugar a cientos de luchas y recuperaciones de los trabajadores que alcanzaron su punto máximo durante el período 1993–2003. Un proceso que algunos de nosotros habíamos descubierto durante los primeros Foros Sociales Mundiales en Porto Alegre durante visitas a fábricas recuperadas y reuniones con activistas de autogestión directamente involucrados en el apoyo a estas experiencias en el estado de Rio Grande do Sul. En ese momento, curiosamente

⁶⁷ Economista, participó en la creación del Partido de los Trabajadores. Es secretario de estado de economía y Solidaridad en 2003 tras la elección de Lula, entonces en el Ministerio de Trabajo y Empleo.

nuestros compañeros brasileños desconocían las recuperaciones en Argentina. Los siguientes foros sociales ayudarían a incrementar los intercambios entre las experiencias de estos dos países, así como el trabajo académico que se llevó a cabo en 2007 en el I Encuentro Internacional de “La Economía de los Trabajadores” en Buenos Aires.

Como muestran los datos recopilados, este proceso difiere en muchos aspectos del “modelo” argentino. La encuesta se inspira en la metodología de investigación del programa “Facultad Abierta” de la Universidad de Buenos Aires que caracteriza la recuperación “como un proceso social y económico que presupone la existencia de una empresa capitalista previa cuya quiebra o viabilidad económica conduce a la lucha de los trabajadores por su autogestión” (Ruggeri, 2009). Las primeras experiencias de recuperación de empresas se observaron en la década de los ochenta, pero fue durante los noventa bajo las presidencias de Fernando Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso quienes lanzaron un plan para frenar la inflación lanzando una ola de privatización de empresas públicas y apertura al capital extranjero, que el proceso se expande significativamente en respuesta al cierre de miles de empresas.

En 1994, a medida que se multiplicaban los intentos de recuperación, la Asociación Nacional de Trabajadores de Empresas Autogestionadas y Participación Accionaria (Anteag⁶⁸) fue creada para federar el movimiento y asesorar a

68 Fundada en 1994 por ex sindicalistas y trabajadores de las primeras empresas recuperadas.

los equipos de trabajadores (Neuville, 2006). Inicialmente, fueron principalmente los movimientos sociales, la izquierda sindical y los grupos eclesiales vinculados a la teología de la liberación los que apoyaron estas luchas. Las organizaciones sindicales, que inicialmente tenían una fuerte reticencia a apoyar los primeros casos de recuperación, se involucraron posteriormente a través de la creación de estructuras específicas.

En 2000, los sindicatos de la metalurgia y la química crearon la Unión y Solidaridad de Cooperativas (Unisol Cooperativas) en São Paulo, luego en 2004, con el apoyo de la Central Única de Trabajadores (CUT) y la Agencia de desarrollo solidario (ADS), seguida de Unisol Brasil. Al mismo tiempo, en 2002, surge el Movimiento de Fábricas Ocupadas (MFO) con la ocupación de las fábricas de Cipla e Interfibras (Estado de Santa Catarina). Esto se diferencia de la economía solidaria y exige la nacionalización de las fábricas, poniéndolas bajo el control de los trabajadores. Pero solo una de ellos logró continuar la producción, la empresa Flaskô (Estado de São Paulo) que ocupa la fábrica durante once años y opera bajo el control de los trabajadores (Moreira Sigolo, 2014).

Para respetar el trabajo metodológico de la encuesta y para una mejor comprensión del proceso, utilizamos el marco adoptado por los investigadores con comentarios comparativos.

Los datos genéricos

La encuesta realizada en 2011–2012 permitió identificar la existencia de 145 empresas absorbidas por trabajadores (ERT) con 67 grupos activos de 11.704 trabajadores en Brasil. Esto no es mucho a la vista de las luchas identificadas que plantean la recuperación de las empresas en la década de los noventa ya que entonces más de 700 casos entraron en contacto con Anteag. El tamaño de las empresas en cuestión es proporcionalmente mayor en Brasil que en Argentina, ya que las 311 ERT argentinas emplean allí a 13.462 trabajadores. Las ERT brasileñas se ubican principalmente en la industria: el 45% de las empresas pertenecen al sector metalúrgico, el 16% al textil y el 13% al agroalimentario y el 10% al químico y el plástico. Se concentran en las regiones industriales del país: 55% en el sureste y 32% en el sur y están presentes en cinco estados.

El proceso Recuperación

En una gran mayoría de los casos estudiados (81%), la recuperación de la empresa se inició durante una crisis financiera tras la quiebra de la empresa, dando lugar al impago de salarios (43%) y la renuncia de trabajadores (23%). La concomitancia de las recuperaciones con la crisis y las políticas implementadas (planes de ajuste estructural, apertura al capital extranjero, privatizaciones) es muy clara ya que el 60% de las ERT son durante el período 1995–1999 (31%) y 2000–2004 (29%).

En el 48% de los casos, las empresas se habían creado antes de la década de 1970 y el 44% de las cuales tenían más de cuarenta años.

El 68% de las recuperaciones fueron precedidas por ocupaciones que duraron un promedio de cincuenta y dos días. Esta cifra contrasta con la realidad argentina para la cual las ocupaciones son mucho más largas. Otra diferencia notable es que ha habido pocos casos de represión.

El marco legal

Como en Argentina, las ERT brasileñas adoptan principalmente la forma cooperativa (85%), las demás mantienen la condición de empresas (10%), asociaciones (3%) o comisiones de fábrica (2%).

En cuanto a la propiedad: 44% alquila el local, 36% ha comprado la empresa y 14% ocupa el espacio (con autorización judicial o por la fuerza); para el dispositivo de producción: el 66% lo ha adquirido, mientras que el 19,6% lo alquila.

El 46% de las ERT se crearon tras declararse en quiebra (a veces después de que los trabajadores hubieran asumido la dirección por un tiempo). El 24% de los casos enfrentan un proceso legal continuo que genera incertidumbre para la empresa, proveedores y clientes. En el 26% de los casos no se

declaró la quiebra porque los antiguos propietarios decidieron cesar sus actividades sin regularizar su situación.

El perfil de los trabajadores

En términos de género, las ERT representan el 23% de mujeres y el 77% de hombres, de los cuales 67% son socios y 37% son empleados; El 46,2% tiene entre 36 y 54 años, el 39% entre 18 y 35 años, el 12,7% entre 55 y 64 años y el 19% mayores de 65 años. El 26,1% de los trabajadores ha seguido un curso de educación secundaria, el 21,7% un curso de primaria, solo el 10% tiene un nivel de educación superior.

En cuanto al tamaño de las empresas, en el 42% de los casos el número de trabajadores (socios y empleados) está entre 0 y 50, 18% entre 50 y 100, 33% entre 100 y 500 y 6% más de 500, es decir, cuatro empresas.

Otro elemento significativo, el 25% de las ERT tienen más empleados que asociados. Sin embargo, en casi el 60% de los casos, el número de empleados no supera el 10%. Además, el 40% de las ERT han contratado al menos a un ejecutivo senior de la empresa anterior.

Producción y tecnología

La gran mayoría de las ERT producen a una tasa superior al 50% de la producción anterior. Las razones de la disminución de la productividad se explica por las dificultades de colocación de los productos en el mercado (21%), la falta de capital y el escaso acceso al crédito (16%), la falta de demanda de productos (13%), la ausencia de materiales (9%), ausencia de maquinaria adecuada (8%), ausencia de trabajadores especializados (6%) y demás (26% estacionalidad, problemas de calidad del producto, crisis del sector, planificación).

Sin embargo, el 84% de las ERT han realizado transformaciones, como la innovación del proceso de trabajo, máquinas o instalaciones desde la recuperación. Casi la mitad de las instalaciones están en buenas condiciones, mientras que para la otra mitad el aparato de producción está obsoleto.

Relaciones laborales

El 88% de las ERT afirman haber realizado transformaciones relativas a la descentralización del poder y el nivel jerárquico, la rotación de tareas y versatilidad, la flexibilidad de horarios, funciones y puestos de trabajo, mejora del diálogo, autonomía y acceso a la información permitiendo un mejor conocimiento del sistema productivo y contribuyendo al proceso de desalienación del trabajo.

Si las mujeres son minoría, los investigadores observaron que son activas en el proceso y que en ocasiones asumen un papel importante en la gestión y producción en el 31% de los casos. Desde la recuperación, han ocupado cargos previamente

asignados a hombres, como los de coordinadores, directores de procesos administrativos y productivos o presidentes.

El perfil organizacional

En algunos casos, los miembros del Consejo de administración ejercen más de un mandato: por lo tanto, existe una rotación relativamente pequeña en la gestión de las ERT.

El tiempo medio de trabajo es de ocho horas al día o 44 horas a la semana. Varias empresas utilizan horas extraordinarias para satisfacer sus necesidades, especialmente en las empresas rurales, que operan por temporadas.

En la mitad de las ERT, el horario laboral es el mismo para todos. Los investigadores refutan el mito de que existe una autoexplotación de los trabajadores de ERT porque la duración de la jornada laboral y el ritmo de trabajo están determinados por los propios trabajadores.

En cuanto al salario, existen diferencias según las funciones desempeñadas, los niveles de responsabilidad y la cualificación (96% de los casos): la escala salarial es de 1 a 4,76.

Esta es una diferencia notable con la situación argentina donde el 52% de las ERT practican la igualdad de remuneración, y donde la diferencia salarial nunca supera el 50% (Neuville, 2014).

La comercialización y el crédito

Los principales proveedores son empresas tradicionales (pequeñas, medianas y grandes). Ninguna ERT se provee de otra empresa recuperada.

Esta situación se explica en particular por la fuerte presencia de empresas metalúrgicas.

A nivel de marketing, el 76% vende sus productos a intermediarios, el 35% directamente a los consumidores y el 15% prestan servicios.

Pero existe un grado considerable de dependencia, ya que casi un tercio de las ERT venden más del 80% de su producción a hasta tres clientes. El 59,2% afirma tener dificultades de marketing debido a la fuerte competencia del mercado.

A pesar de las dificultades para acceder al crédito, el 71% de las ERT tienen éxito: 37,9% con bancos públicos, 34,5% con bancos privados y 27,6% con otras instituciones como cooperativas de crédito, sindicatos, municipios y organismos federales de desarrollo. Nótese que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) otorgó una línea de crédito para empresas autogestionadas hace algunos años, pero ante sus exigencias, pocas ERT pudieron acceder a este recurso.

Seguridad social y otros seguros del trabajo

En el 71,5% de los casos, los accidentes laborales han disminuido desde la recuperación de la empresa. Entre las razones citadas, los cambios relativos a la presión ejercida sobre el trabajador (90,5%), la reducción de control y jerarquía, 42% cotiza para la jubilación. En el 98% de los casos hay trabajadores jubilados o en situación de retiro inminente; del 10 al 20% de los trabajadores se encuentran en esta situación.

La relación con los movimientos sociales y sindicales

No existe un patrón consistente de apoyo por los sindicatos, aunque hay casos en los que el sindicato ha apoyado y acompañado a los trabajadores durante todo el proceso de recuperación, jugando un papel importante en la resolución de problemas. En la mayoría de estos casos, después de la formación de la cooperativa, el sindicato siguió desempeñando un papel, tomando decisiones con los trabajadores, acompañando el proceso de negociación y, en ocasiones, ocupando funciones específicas en las cooperativas.

Pero hay otros casos en los que, desde el inicio del proceso, el sindicato se ha mantenido al margen sin apoyar a los

trabajadores, incluyendo poniéndose del lado de los patronos al negociar la compensación.

En general, hay muy pocas relaciones con el sector de la economía solidaria, lo que muestra un cierto aislamiento de las ERT. Cuando existen, se refieren principalmente a la formación de los trabajadores. Esta situación limita el comercio con el sector, lo que sería muy importante para mejorar los puntos de venta y desarrollar experiencias. Asimismo, son muy pocos los casos en los que las ERT realizan actividades solidarias y culturales para la comunidad o los vecinos.

Esta situación contrasta con la observada en Argentina donde las ERT desarrollaron desde sus inicios vínculos orgánicos con asambleas vecinales, vecinos y movimientos sociales.

Relaciones con el Estado

La mayoría de las ERT indican que no recibieron apoyo del Estado en el momento de la recuperación (58%) o para el mantenimiento del negocio (59%). Para el resto, los gobiernos regionales y de los municipios parecen ser los principales apoyos en forma de acceso al crédito y apoyo político en el momento de la recuperación (38%).

Entre los que recibieron apoyo para su mantenimiento, citan municipios (40%), gobiernos estatales (25%) o el gobierno federal (15%). El 45% dice no recibir apoyo de organismos públicos vinculados a la economía solidaria y el 16% indicó que obtuvieron apoyos indirectos como financiamiento para

asesorías en el marco del Programa de Acción para la recuperación de empresas por trabajadores en autogestión. El 70% de las ERT consideran que el apoyo del gobierno es insatisfactorio. Entre las necesidades expresadas dominan el apoyo legal para la formación de cooperativas (37%), los incentivos fiscales (33%) y la asignación de créditos (23%).

La autoevaluación del proceso

Expresa la percepción de los trabajadores sobre las transformaciones y los principales logros resultantes del proceso de recuperación. La mejora de las relaciones laborales es la primera respuesta (52,3%), especialmente en lo que respecta al respeto a la opinión de los trabajadores, mayor conciencia y responsabilidad de los asociados. Solo una minoría de trabajadores mencionó el éxito financiero: el 6% apunta a una mejor comercialización como resultado de mejoras en los procesos de trabajo y la calidad del producto y el 16,7% indica mejores ganancias y un aumento en el poder adquisitivo de los trabajadores.

Los investigadores observaron que las ERT tienen que luchar a diario por la viabilidad económica de sus productos en el mercado. Pero algunas respuestas potencian sus vivencias al creer que van más allá de la supervivencia económica y que perfilan perspectivas de trabajo digno, de producción comprometida según otros principios y valores con la esperanza de que sus construcciones sean sostenibles para los

socios actuales, pero también para la comunidad y las generaciones futuras.

Conclusiones

Esta investigación revela que las iniciativas de estos trabajadores no representan una parte significativa del PIB brasileño pero que no pueden ser ignoradas. En particular, han salvado miles de puestos de trabajo en el sector industrial. Son fuentes de innovación a nivel de organización del trabajo y estrategias de lucha de los trabajadores. La persistencia de estas experiencias de recuperación representa un nuevo fenómeno que abre distintas perspectivas a las clásicas luchas contra el desempleo y la reducción de puestos de trabajo.

A pesar de una disminución significativa de nuevas experiencias a partir de la segunda mitad de la década del 2000, lo cierto es que el proceso continúa incluso en tiempos de expansión de las actividades económicas en Brasil, lo que demuestra su continuidad.

Sin embargo, los débiles vínculos con un movimiento social más amplio no permiten politizar el debate para estimular prácticas susceptibles de ir más allá de la lógica capitalista. La diversidad de los casos observados muestra que la transferencia de propiedad de los medios de producción no implica automáticamente la transformación completa de las relaciones sociales de producción.

Las principales características de las ERT brasileñas son que están organizadas principalmente en sectores industriales urbanos y en las regiones más industrializadas del país; surgieron del proceso de lucha por el mantenimiento del trabajo de empresas anteriores en tiempos de crisis, la mayoría de ellas involucrando la ocupación de fábricas por trabajadores que anteriormente eran miembros sindicados.

Actualmente, la gran mayoría de ellos están constituidos en cooperativas compuestas, en más de la mitad, por un centenar de asociados. Aunque estas experiencias son recientes, indican un cambio de la lógica capitalista de organización del trabajo. Esta encuesta busca promover experiencias existentes, aún poco conocidas en Brasil, sabiendo que la autogestión es un proceso de construcción permanente.

Los autores recuerdan convenientemente que más allá de las múltiples experiencias en curso en Argentina, Venezuela y Uruguay, con la sucesión y profundización de las crisis desde 2001, también hay casos en España, Grecia, Indonesia, Canadá, Irlanda, Serbia, Egipto, Tailandia, Paraguay, México, Bolivia y Estados Unidos. Y, en Francia, estaríamos tentados a agregar...

29 de mayo de 2014

Para saber más:

Chedid, Henriques, Flavio (2014), Autogestão em empresas recuperadas por trabalhadores: Brasil e

Argentina, Florianopolis, Insular, Tecnologia Social Series, vol. 4.

Chedid, Henriques, Flavio et al. (2013), Empresas Recuperadas por Trabajadores no Brasil, Río de Janeiro, Multifoco.

Neuville, Richard (2006), “Brasil: Asociación Nacional de Trabajadores de Empresas Autogestionadas”, febrero, <http://alterautogestion.blogspot.fr/2009/03/bresil-a-n-teag.html>.

Neuville, Richard (2014), “Elementos salientes del 4º comunicado de empresas recuperadas en Argentina”, de nota enviada por Andrés Ruggeri “Datos destacados del IV relevamiento de ERT del programa Facultad Abierta”, 10 de mayo, <http://alterautogestion.blogspot.fr/2014/05/elements-saillants-du-4-eme-releve-des-10.html>.

Ruggeri, Andrés (coord.) (2009), Las empresas recuperadas: Autogestion obrera en Argentina y América Latina, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras.

FLASKÔ, DIEZ AÑOS DE OCUPACIÓN

Vanessa Moreira Sígolo

Durante diez años, la fábrica Flaskô en Brasil ha sido ocupada por sus trabajadores con el fin de reclamar su nacionalización bajo el control de los trabajadores. Emblemática de un movimiento tan vivo como diversificado en la recuperación de empresas por parte de los trabajadores de otros lugares, esta ocupación reaviva el debate sobre el papel emancipador de las cooperativas o del Estado.

Las primeras ocupaciones y tomas de empresas por parte de los trabajadores en Brasil se remontan a la década de 1980, inicio de la democratización del país después de varios años de dictadura militar. También fue un período de grave crisis económica que se intensificó en la década de 1990 con la integración del país a la globalización y la implementación de políticas neoliberales. Para enfrentar la quiebra empresarial y el desempleo, ocupar y recuperar las fábricas en las que trabajaban fue una forma práctica de resistencia utilizada por un número significativo de trabajadores.

Este fenómeno ha aparecido en diferentes regiones del país, con unos cientos de luchas. Estas experiencias surgieron principalmente en los espacios urbanos, con ocupación y recuperación de industrias metalúrgicas, químicas y textiles, pero también en el campo, en el sector agroalimentario por ejemplo. En la investigación que realizamos en los años 2011 y 2012, con la participación de investigadores de diez universidades brasileñas⁶⁹, habíamos identificado 145 empresas que han sido ocupadas y devueltas a la producción por la autogestión de los trabajadores durante las últimas décadas en Brasil. Solo 67 de estas recuperaciones permanecen activas hasta el día de hoy, lo que representa a 12.000 trabajadores.



Como resultado de estas experiencias, ha surgido un debate político relacionado con la autogestión de los trabajadores y los procesos de organización política de los trabajadores en las empresas ocupadas y recuperadas del país. Ha dado lugar a posiciones a veces aproximadas, que resultan de diferentes perspectivas teóricas y políticas sobre el papel de la

69 Los resultados de la investigación se publicaron en Chedid (2013).

autogestión en el movimiento sindical y en el pensamiento socialista y marxista.

Ante la reticencia del movimiento sindical a los primeros casos de ocupación y recuperación explicados por el predominio de una visión limitada de las relaciones laborales entre empleador y empleado, la Asociación Nacional de Trabajadores de Empresas Autogestionadas (Anteag) fue creada en 1994 por ex sindicalistas participantes de la Oposición Sindical y grupos religiosos vinculados a la teología de la liberación. Esta articulación formó el corpus político del movimiento de autogestión y resistencia cooperativa, lo que permitió a las empresas recuperadas tomar una parte activa importante en la creación del movimiento de economía solidaria. Posteriormente, las cooperativas encontraron un espacio, que sin embargo sigue siendo marginal, en la Central Única de Trabajadores (CUT), con la creación de Unisol–Brasil en la década del 2000.

Al mismo tiempo, se construyó otra orientación con el surgimiento del Movimiento de Fábricas Ocupadas, en 2003, que aboga por la estatización de las fábricas bajo control obrero, orientación en la que se inscribe la historia de Flaskô⁷⁰. Más allá de esta fábrica de envases plásticos, ubicada en el Estado de São Paulo, con sus 70 trabajadores, este movimiento apoyó la ocupación de otras fábricas como las ubicadas en el Estado de Santa Catarina, Interfibra y Cipla, quienes fueron evacuadas a la fuerza luego de cinco años de ocupación por la justicia en 2007.

70 Según Flávio Henriques Chedid (2014), Flaskô siguió siendo la única empresa miembro del Movimiento de empresas recuperadas en 2012.

La fábrica sigue ocupada y ha estado produciendo durante más de diez años. A diferencia de la mayoría de las empresas tomadas por los trabajadores en el país, esta no formó una cooperativa, debido a la demanda política de expropiación y nacionalización de la fábrica por parte del Estado. Por otro lado, con la continua amenaza de intervención judicial –como la que tuvo lugar en 2007– los trabajadores y activistas que apoyan a Flaskô están trabajando para mantener la movilización política y la acción con la comunidad circundante. También es un medio de lucha y presión social que encontramos con mucha frecuencia en las experiencias de empresas en recuperación en Argentina que se multiplicaron después de la crisis de 2001.

En 2012, el movimiento logró articular la presentación de dos anteproyectos que actualmente se encuentran en discusión en el Senado. El primero se refiere a la declaración de interés social para el territorio de Flaskô y su aldea de trabajadores. El segundo, más general, se refiere a la posibilidad de expropiación y transferencia del control de las empresas en quiebra a sus trabajadores.

Estas leyes y el logro de un marco legal favorable son fundamentales para el desarrollo de la autogestión en Brasil. Los diez años de Flaskô, así como la existencia de varias empresas tomadas por trabajadores en Brasil desde hace más de veinte años, atestiguan la viabilidad de la producción bajo la autogestión.

Más allá de que miles de trabajadores, en la urgencia de la necesidad, luchan por mantener su trabajo, el debate socialista

sobre el papel revolucionario de las cooperativas y el Estado, como herramientas de autoemancipación del trabajo, sigue siendo más relevante que nunca.

Marzo del 2014

Ver: www.youtube.com/watch?v=M6GbPwO_f0q.

Para saber más

Chedid Henrique, Flavio (2013), *Empresas Recuperadas por trabalhadores no Brasil*, Río de Janeiro, Multifoco.

Chedid Henrique, Flavio (2014), "Flaskô", en *Autogestao em empresas recuperadas por trabalhadores–Brasil e Argentina*, Serie Tecnologia, vol. 4, Fioranopolis, Insular.

EL MANIFIESTO DE FLASKÔ

Adoptado el 15 de junio de 2013 en Sumaré (São Paulo) durante el encuentro organizado con motivo del 10° aniversario de la ocupación de la fábrica, este manifiesto refleja una lucha emblemática pero aislada que plantea la cuestión de la nacionalización bajo control planteado por trabajadores argentinos de la fábrica de cerámica Zanón. Luego de una década de gestión obrera, los argentinos habían resuelto crear una cooperativa luego de obtener el voto de la ley de expropiaciones por parte del Parlamento de la provincia de Neuquén. Los de Flaskô aún no han obtenido la expropiación y continúan su lucha por el control obrero.

El 12 de junio de 2003 decidimos tomar las riendas de nuestro futuro y decidimos cambiar el destino que nos imponen el capitalismo y los patronos. Decidimos tomar el control de la fábrica y ponerla bajo el control de los trabajadores. Durante diez años, luchamos defendiendo la consigna de “fábrica en quiebra, fábrica ocupada” y la fábrica ocupada debería haber sido nacionalizada y puesta bajo el control de los trabajadores.

La fuerza que nos movió fue la misma que, a lo largo de nuestra vida, nos hizo sudar de sol a sol para vender nuestra fuerza de trabajo y hacer funcionar las máquinas del capitalismo para recibir un salario que nos permitiera alimentarnos, vivir y criar a nuestros hijos. Pero más que eso, la fuerza que nos llevó estaba justificada por el deseo de acabar con el horror que vivimos en la imagen de toda nuestra clase.

Pero el 12 de junio de 2003, nuestra fortaleza también se vio reforzada por la certeza de que ese período tenía que terminar. El período en el que todo estaba organizado únicamente en beneficio de los patronos. Esta esperanza fue la victoria de Lula como presidente, nuestro valor se multiplicó por diez para enfrentar al capital. Ese día, más de 300 asistimos a la asamblea. Éramos una fuerza que podía cambiar el curso de la historia. Por eso decidimos reconstruir todo. Como resultado, ocupamos la fábrica y hablamos de garantizar el derecho al trabajo, nuestra principal forma de dignidad. Solo había un camino, el de fortalecer la lucha para quitar las fábricas a los patronos, para reorganizarlas en interés de nuestra clase y de la humanidad en general: la vida y la solidaridad entre los trabajadores, una vida sin explotación. A partir de ahí, organizamos una nueva fábrica para trabajar. Nos unimos a los sin tierra para luchar por la reforma agraria y el fin del latifundio. Gritamos: “Cuando el campo y la ciudad se unan, la burguesía no podrá resistir.”

Asimismo, nos hemos unido a los trabajadores explotados impulsando la lucha por la vivienda. Decidimos comenzar a combinar la convicción y la acción en el terreno del jefe que, durante décadas, sangró nuestras vidas. Recuperamos la tierra

y construimos la Villa obrera donde ahora viven 564 familias. También impulsamos el proyecto Fábrica de la Cultura y del Deporte, realizando cientos de actividades, involucrando a toda la comunidad, niños, jóvenes y adultos, garantizando el acceso a la cultura y el ocio.

En esto, con cada paso dado, hemos contribuido a crear una cultura mejor que la de nuestros enemigos: los patronos y sus representantes en los gobiernos, incluso dentro del gobierno de Lula. Cuando se desarrolló la campaña de apoyo al gobierno venezolano, la Federación de Industrias de São Paulo (FIESP) se levantó contra nosotros, llamando a los empresarios a manifestarse en contra de nuestra lucha. Cuando emprendimos el trabajo de articulación de las fábricas recuperadas en América Latina, la OMC intervino y trató de impedir el avance de esta unidad en construcción.

En 2007, el Estado decidió atacarnos. Más de 150 policías federales tomaron posesión de las dos empresas ocupadas, Cipla e Interfibra en Santa Catarina, y expulsó a los trabajadores para imponer allí un líder reaccionario encargado de cuestionar las conquistas sociales, legales y humanas que habían garantizado cinco años de control obrero. Manifestaron su preocupación cuando expresaron expresamente en el juicio: “Imagínense la cosa extendiéndose.”

Sin embargo, no dudaron en utilizar la táctica de la criminalización, desarrollando una campaña de difamación e intentando deslegitimar a toda la clase trabajadora. Evidentemente, utilizaron su monopolio de los medios de comunicación para lograr sus fines. La revista *Veja* incluso

afirmó que éramos el “MST de las fábricas”. Muy bien, ¡es un orgullo para nosotros!

Sin embargo, nosotros, los trabajadores más valientes de Flaskô, hemos decidido resistir. Y con la fuerza y solidaridad que hemos recibido en todo Brasil y el mundo entero, reuniendo a la mayoría de las centrales sindicales y varios partidos políticos de amplio espectro y con el objetivo de constituir un frente único, hemos actuado en cada etapa con una dinámica de lucha de clases. Si, por un lado, nunca pudimos estar seguros de cuánto tiempo resistiríamos, debido a la inestabilidad diaria, teníamos la certeza de que ganaríamos.

Hoy han pasado diez años. Han pasado dos gobiernos de Lula. Y cada paso hacia el socialismo que podríamos esperar con este gobierno se ha esfumado. El primer gobierno de Lula se negó a dar una solución, a pesar de las diversas propuestas que se le presentaron, desde la demanda de nacionalización bajo control de los trabajadores hasta la propuesta que presentó el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Lula dijo que la línea no estaba “en el menú”. Pero encontramos que el menú de los trabajadores difería significativamente del de los grandes capitalistas, ya que el mismo estudio del BNDES se utilizó por el gobierno para Aracruz Celulose, JBS FriBoi, Groupe Votorantim, etc. El segundo gobierno decidió atacar nuestro movimiento criminalizándolo y llevando la lucha de las fábricas ocupadas hasta la asfixia.

El actual gobierno de Dilma [Rousseff] está impidiendo la aprobación de los proyectos de ley que hemos presentado al Senado. Como ya informamos, destacan dos proyectos: la expropiación de la fábrica transformándola en propiedad social gestionada por los trabajadores y el otro proyecto estipula que cada fábrica abandonada puede ser expropiada y transmitida a los trabajadores para su gestión democrática.

Esta es la razón por la que, en los últimos diez años, hemos pasado a la ofensiva en varias ocasiones. Hemos intensificado la presión sobre el gobierno de Dilma y sobre el Senado Federal para que aprueben de inmediato la declaración de interés social de Flaskô para su expropiación. Sería una decisión política que permitiría otorgar una herramienta eficaz para la lucha obrera.

Y tenemos la certeza de que podemos ganar porque no es solo una fábrica que resiste al capitalismo, sino una fábrica ocupada que resiste en defensa de las bases históricas de la clase trabajadora hacia el socialismo. Esto es lo que podemos observar durante este encuentro de hoy, que es una gran demostración de unidad de clase, con la presencia de varias delegaciones internacionales, diversas organizaciones populares (del campo y la ciudad), decenas de sindicatos y delegaciones estudiantiles.

La nueva coyuntura de crisis del capitalismo, del auge de las luchas de masas, de la rearticulación de los movimientos sociales en todo el mundo, que también afecta a Brasil, obligará a la burguesía a reprimir, a criminalizar y entonces las contradicciones serán cada vez más fuertes y nos permitirá

prever la construcción de otra empresa que ya no se base en la explotación de la fuerza de trabajo.

Sabemos a ciencia cierta que el socialismo no puede existir en un país y menos en una fábrica ocupada. Para ello, como hemos demostrado durante estos diez años, la unidad de clase, más allá de las fronteras nacionales, permite una salida real para la lucha de la clase obrera hacia la transformación de la sociedad.

Así, la lucha continuará y necesitamos toda la solidaridad de clase, que se ha expresado con Flaskô hasta hoy. Por lo tanto, hemos convocado a todos aquellos que están comprometidos en la lucha por la emancipación de la clase trabajadora y para unificar nuestras luchas y nuestras batallas en el período venidero. Inmediatamente emitimos la invitación para la Caravana a Brasilia el 23 de octubre de 2013, para la convocatoria de una audiencia pública donde discutiremos los proyectos de ley diferidos, así como las perspectivas de las fábricas ocupadas y la garantía de las conquistas sociales de la clase trabajadora. [...]

15 de junio de 2013

Para saber más:

www.fabricasocupadas.org.br.

www.fabricasocupadas.org.br/site/index.php/manifesto.

OCUPACIÓN URBANA Y COOPERATIVA SOLIDARIA

Richard Neuville

A unos cientos de metros del Palacio Piratini (sede del gobierno del Estado de Rio Grande do Sul) y de la Asamblea Legislativa Regional y, no lejos del centro histórico, un imponente edificio, ubicado en una de las principales avenidas de Porto Alegre, llama la atención. En la fachada recién pintada, las inscripciones “Assentamento urbano Utopia e luta” y “Coopsul” que sobresalen de los murales de la planta baja disipan cualquier malentendido en cuanto a la interpretación, se trata de un edificio habitado y autogestionado. Las numerosas idas y venidas dan fe de la actividad bien perceptible del lugar.

Atravesamos la puerta para conocer más sobre cómo funciona este lugar autogestionado. Somos recibidos por Paula quien está ocupada en la panadería y explicamos el propósito de nuestra visita. Unos minutos después, nos encontramos con Eduardo Solari, uruguayo y eje del colectivo. Nos lleva al auditorio que sirve de sala de espectáculos y reuniones de las distintas asambleas y nos cuenta la historia de la ocupación y el funcionamiento del lugar.

Todo empezó en 2005, con motivo del Foro Social Mundial (FSM), cuando varios movimientos sociales (incluido NoVox) decidieron ocupar el edificio abandonado, que en realidad era un antiguo anexo de un hospital. Durante el mismo período, en paralelo a la ocupación de tierras, se ocuparán sucesivamente cerca de 300 viviendas en todo Brasil, pero esta es la única que ha podido mantenerse. Eduardo nos cuenta que la recuperación se dio en un contexto favorable y en su momento contó con la benevolencia del Ministro de la Ciudad y exgobernador del Estado, Olivio Dutra. Para Eduardo, “es una victoria que representa un símbolo de autonomía y autodeterminación popular”.

En los años siguientes, el edificio será completamente renovado por miembros del colectivo y vecinos del barrio. Con siete plantas, las grandes salas que ocupaban todo el espacio de los diferentes niveles se disponen en estudios y salas de actividades. El ascensor vuelve a estar en servicio. Las escaleras están decoradas con frescos. En la planta baja, además de la panadería y recepción, hay una biblioteca, una sala de informática y una sala de espectáculos.

La azotea permite la producción de diversas plantas medicinales y se ha instalado un invernadero para asegurar la producción de verduras, frutas, hierbas y especias para 150 familias del barrio. Esta es la primera experiencia de terraza urbana a tal escala en Brasil. Hoy en día, más de una decena de personas ocupan y permanecen permanentemente en el edificio.

El lugar es administrado por una cooperativa mixta y solidaria, denominada “Ocupación Urbana de Utopía y Lucha” (Coopsul), que reúne a vecinos del edificio, trabajadores y familias del barrio de bajos ingresos. La cooperativa está perfectamente integrada en el distrito y ha desarrollado una alianza con diversas estructuras asociativas (Amigos de la Tierra), académicos (Universidad Federal de Rio Grande do Sul), sindicatos (Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos).

Coopsul lanzó un proyecto global, titulado “Creación de alternativas y gestión sostenible”, con el objetivo de realizar acciones de inclusión social a favor de las personas de bajos ingresos, en una “preocupación por la solidaridad de clase” y a través de alternativas para generar ingresos y oportunidades de empleo. Esto está patrocinado como parte del programa “Desarrollo y ciudadanía” de Petrobras. Se trata de proponer una alternativa real que permita garantizar la dignidad y los derechos básicos de los vecinos del distrito a través de diversas actividades organizadas en los talleres de producción, generando recursos y ofreciendo cursos de formación profesional:

- El jardín hidropónico produce verduras y frutas orgánicas. Esta innovación tecnológica permite incrementar la producción y escapar de la agroindustria y del sistema de distribución cada vez más concentrado.

- La panadería produce “pan de la libertad y la autogestión” de diferentes variedades y sabores, así como pasteles orgánicos y pasteles salados. Trabaja en conjunto con otras empresas solidarias.

- El taller textil cuenta con una línea completa de máquinas que permite a los habitantes del distrito recibir capacitación en corte, costura y acabado, y modelar ropa para producir bolsos, camisas y pañuelos.

- La lavandería comunitaria permite limitar y combinar el uso de agua y productos químicos, producir su propio jabón líquido, reciclar e intercambiar ropa.

- El taller de serigrafía desarrolla sus propias marcas e impresiones y produce carteles, pancartas y pegatinas. Es utilizado por diferentes colectivos y se ha convertido en un espacio de referencia cultural y artístico.

En el corazón del proyecto también está la formación ciudadana. Esto se refiere en particular a las buenas prácticas en términos de seguridad y prevención de la salud de los trabajadores, la viabilidad económica de los productos desarrollados, la autonomía de los trabajadores, la formación en emprendimiento y la economía solidaria, pero también en educación ambiental, cooperación y prácticas solidarias, el desarrollo de la participación ciudadana, género e igualdad racial, etc. Dentro de esta ocupación urbana se dan las condiciones para producir la propia comida, confeccionar ropa, divertirse, educarse y recuperar la dignidad. Esta autosuficiencia evita la exclusión económica y asegura que las personas permanezcan en los centros urbanos.

El colectivo ofrece un programa y talleres artísticos. Publica una revista, *Utopia e luta*, que informa sobre las actividades de Coopsul, así como sobre las luchas sociales locales y los

problemas ambientales. El periódico también participa en luchas sociales, ambientales y solidarias. Inicia o participa en numerosas movilizaciones a nivel local y nacional y desarrolla vínculos con otros colectivos en Brasil y América Latina.

Para Eduardo, esta ocupación urbana constituye a la vez “un sueño de utopía y un movimiento de lucha, que desde el momento de la ocupación, permite conservar en el tiempo la llama de la autogestión de las comunidades involucradas en este proyecto “.

Marzo de 2012

Para saber más:

<http://utopia-e-luta.blogspot.com/>.

<http://coopsul.blogspot.com>.

PARTICIPACIÓN POPULAR Y CIUDADANA EN EL ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL

Richard Neville

Cualquiera que sea la evaluación que se pueda hacer de las políticas seguidas por el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) a nivel estatal federal, en algunos estados y en algunos municipios, se debe reconocer que tiene una preocupación constante por la innovación y la implementación de mecanismos de participación popular. Casi veinticinco años después del inicio del presupuesto participativo en la ciudad de Porto Alegre, el estado de Rio Grande do Sul se ilustra una vez más experimentando con todo un sistema de participación ciudadana para definir prioridades en términos de inversiones y ejercer control sobre las políticas públicas. Mientras muchos países se enfrentan a movimientos ciudadanos que impugnan los abusos de la llamada democracia “representativa”, cuya abstención sigue creciendo, algunos gobiernos –comenzando por el nuestro– podrían inspirarse en este ejemplo para volver a conectar con sus “mandatarios”.

Entre 1998 y 2002, el Estado de Rio Grande do Sul, administrado por el PT y Olívio Dutra, estableció el presupuesto

participativo. El objetivo era demostrar que la experiencia de Porto Alegre (1989–2004) podía transponerse a la escala de un estado de 10 millones de habitantes y que las poblaciones de los 497 municipios podían desarrollar y decidir sobre los programas de presupuesto y de inversión del Estado.

Además, dado que este último tiene más competencias que un municipio, se trataba de experimentar a una escala más significativa: transporte y tráfico (pavimentación de carreteras, construcción de puentes), vivienda (vivienda rural, cooperativismo, vivienda social, regularización territorial), medio ambiente, seguridad pública, educación (red de escuelas públicas, creación de una universidad), salud (implementación de programas regionales y municipales de salud pública), agricultura (reforma agraria, agricultura familiar, programas de lucha contra la pobreza en zonas rurales), gestión de empresas (creación de empresas, apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa), economía popular y solidaria (apoyo a los sistemas productivos locales), energía (programa de iluminación en el campo, desarrollo de la producción y distribución de energía eléctrica), inclusión social (renta mínima y red de ciudadanía).

La transposición del presupuesto participativo del nivel municipal al Estado se llevó a cabo esencialmente bajo el mismo principio y la misma arquitectura: 23 sectores geográficos, foros temáticos y una pirámide en tres niveles con la base en los plenos municipales; en el nivel intermedio, asambleas sectoriales y en la parte superior, un consejo presupuestario participativo a nivel estatal.

Encontramos los tres parámetros (democracia mayoritaria, justicia social y técnica) así como los tres criterios de asignación presupuestaria (prioridades de habitantes, carencias y poblaciones) en un ciclo organizado a lo largo del año (Gret y Sintomer, 2002: 62). El Estado también establece otra modalidad de relación con los municipios que están llamados a colaborar en la implementación de políticas públicas en la región. Para Ubiratan de Souza:

Las relaciones políticas tradicionales y clientelistas comenzaron a ceder en todos los niveles con una nueva forma de gobernanza que establece el control social y la lucha contra las desigualdades regionales estableciendo un pacto federalista entre el Estado y los municipios (De Souza, 2003).

Pero la implementación del presupuesto participativo entre 1999 y 2002 iba a toparse con una oposición más virulenta en el parlamento regional donde el PT era minoría. En 2000, un recurso judicial de un diputado federal opositor impidió que el proceso continuara al prohibir la asignación de fondos para el funcionamiento de la estructura participativa.

La duración del proceso (que no se renovó tras el triunfo de la oposición a finales de 2002) no permitió hacer una valoración exhaustiva de esta experiencia a este nivel, aunque la participación hubiera sido significativa: la asistencia había fluctuado entre 188.000 personas en 1999 y 333.000 personas en 2002; el número de reuniones públicas durante cuatro años fue de 2.824 y el número de delegados electos 57.193.

El retorno del PT y la implementación de mecanismos de participación

En octubre de 2010 (ocho años después del final del mandato de Olívio Dutra), el candidato del PT Tarso Genro⁷¹, fue elegido gobernador del Estado. Tiene la intención de poner la “participación popular y ciudadana” en el centro de su agenda. En febrero de 2011, poco después de su investidura, declaró:

Nuestro gobierno estará marcado por una relación permanente y respetuosa con el Parlamento, pero también por una relación intensa con la sociedad civil y la participación ciudadana, el respeto a las comunidades organizadas, movimientos sociales, entidades de clase, consejos temáticos diversos y regionales y con todos aquellos que estén dispuestos a construir y mejorar los mecanismos de control público sobre el Estado (Estado RGdS, 2012: 5).

El 15 de junio de 2011, durante la instalación del consejo de participación popular, aclaró:

Las democracias en crisis nos muestran que si nos limitamos a ejercer la representación política sin un diálogo constante con la sociedad –lo que permite, mediante mecanismos de transparencia y participación, que las

71 Tarso Genro, líder del PT, fue alcalde de Porto Alegre dos veces (1993-1996) y (2001-2002), después de haber sido asistente de Olívio Dutra (1989-1992). Fue elegido gobernador de Estado de Rio Grande do Sul en octubre de 2010.

comunidades puedan interferir en la conducta de los gobernantes– los Estados serán cada vez más autoritarios y los gobiernos cada vez más deslegitimados. Esta es la pregunta clave que plantea el concepto de sistema de participación popular, que combina la democracia representativa con la participación directa de la ciudadanía, no solo en los mecanismos de gestión, sino también en las estructuras de toma de decisiones (Estado RGdS, 2012: 6).

Desde principios de 2011 se puso en funcionamiento la participación popular y ciudadana. La arquitectura del sistema se divide en cuatro formas de participación y control: decisiones presupuestarias (plan plurianual y presupuesto participativo con consulta popular); control social (Consejo de Desarrollo Económico y Social); diálogo social (asambleas temáticas, programas de combate a las desigualdades sociales); participación digital (programa de desarrollo informático para aumentar la participación en las consultas).

El conjunto está coordinado por un comité de gestión conjunta (representantes del gobierno y la sociedad civil) a nivel estatal.

Entre marzo y mayo, el plan plurianual PPA (2012–2015) se ha definido de manera participativa, en nueve seminarios regionales que reunieron a 6 000 representantes y 350 agencias, y luego se presentó a la Asamblea Legislativa.

Entre mayo y julio se desarrolló el presupuesto participativo en las tres primeras etapas (audiencias públicas regionales,

asambleas de foros municipales y microrregionales y regionales), participaron 60 000 personas. Luego, el 10 de agosto de 2011, el proceso fue validado durante la consulta sobre las prioridades del presupuesto de 2012, que contó con una participación de 1.134.000 personas, o el 14% del electorado (Estado RGdS, 2012: 13).

En 2012 se definieron las áreas prioritarias para el presupuesto de 2013 después de tres meses de intensos debates entre el gobierno, el Consejo de Desarrollo Regional, los movimientos sociales y la sociedad civil. El 4 de julio, 1.028.000 ciudadanos, o el 12% del electorado, votaron sobre 500 propuestas de inversión prioritarias para las 28 regiones del estado. Por primera vez, como experimento, se pudo votar por Internet o por teléfono móvil, opción elegida por casi el 20% de los participantes.

Las prioridades que recibieron más votos son la educación, la salud y la seguridad pública, seguidas por el desarrollo, el turismo rural, el deporte y el ocio y finalmente el desarrollo económico. En más de 20 regiones, los recursos ambientales y el agua, el saneamiento y el desarrollo urbano, el desarrollo social y la lucha contra la pobreza también aparecen como preocupaciones.

Para el gobernador Tarso Genro, el proceso de participación debe brindar todos los instrumentos para la expresión de la ciudadanía, especialmente los digitales:

A ningún ciudadano se le debe impedir que hable con el gobierno estatal cuando lo desee. Por tanto, para ello

debemos dotarlo de todos los medios posibles (Estado RGdS, 2012: 6).

Tras la consulta de julio, el proceso continúa en el Foro de Estado. Está integrado por delegados de las 28 regiones, cuya tarea es discutir con los Secretarios de Estado las mejores formas de aplicar los programas y validar el presupuesto antes de su presentación al Parlamento en septiembre.

A pesar de los límites de una democracia participativa impulsada por el Estado donde los riesgos de la recuperación política no están exentos, el sistema de participación popular y ciudadana en el Estado de Rio Grande do Sul tiene al menos el gran mérito de intentar dar respuesta a la profunda crisis de la “representación”. Esta crisis, que se puede observar desde Madrid a Santiago, pasando por Dakar, Montreal, Moscú y México, pero también en Francia donde la abstención masiva se expresa con gran agudeza en cada elección. Ya no es posible gobernar hoy como lo fue en el siglo pasado. En todo el planeta, los poderes constituidos deben desarrollar formas de participación y pensar en articulaciones entre la democracia representativa y la democracia directa que permitan tomar en cuenta las aspiraciones de las poblaciones. Esto es a lo que algunos dirigentes del PT, como Tarso Genro, parecen haber tomado la medida cuando este último considera que en ausencia de mecanismos de participación y control ciudadano, los Estados se volverán cada vez más autoritarios y deslegitimados, y por lo tanto serán cada vez más impugnados (Farina, 2012).

Para João Motta y Vinisius Wu⁷², el sistema de participación propuesto por el gobierno gaúcho aún no se ha desarrollado:

Esto requiere en particular un mayor control social de la acción estatal y una mayor participación ciudadana. [...] También es fundamental contribuir a una renovación democrática a escala mundial. Se trata de una tarea especialmente compleja que requiere mucha utopía, pero es importante trabajar en esta dirección (Motta y Wu, 2011).

La participación popular y ciudadana, valor intrínseco de cualquier proyecto democrático, contiene las semillas de un potencial emancipatorio que debe verse emerger, siempre que se creen las condiciones.

31 de julio de 2012

PD: Tarso Genro fue derrotado en 2014 por José Ivo Sartori, miembro del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), aliado del PT en la coalición del gobierno federal.

Para saber más:

72 João Motta y Vinisius Wu fueron respectivamente Secretario de Estado de Planificación y Participación Ciudadana y Jefe de Gabinete del Gobernador del Estado de Rio Grande do Sul durante del mandato (2010-2014).

De Souza, Ubiratan (2003), “Orçamento participativo”–experiência del gobierno del estado de Rio Grande do Sul”, Porto Alegre.

Estado do Rio Grande do Sul (2012), *Sistema Estadual de Participdo Popular e Cidadã*, Puerto alegre.

Genro, Tarso y Ubiratan de Souza (1998), Cuando los habitantes realmente gestionan su ciudad: *La experiencia de Porto Alegre*, París, Léopold Mayer.

Gret, Marion e Yves Sintomer (2002), *Porto Alegre: La esperanza de otra democracia*, París, el descubrimiento.

Motta João y Vinisius Wu, (2011), “Uma nova utopia democratica”, Zero Hora, 30 de septiembre.

CHILE

(UNIDAD POPULAR, 1970–1973)

PODER POPULAR

Si el Chile de septiembre de 1973 permanece en nuestra memoria como una herida, no debemos olvidar la formidable experiencia de autoorganización entre 1970 y 1973. Heredero de una larga tradición de lucha e impulsado por la radicalización popular, parte del movimiento obrero chileno dió a luz a un movimiento único en América Latina.

A lo largo de su investigación, el historiador Jean-Louis Robert ha podido describir la existencia contemporánea de un “largo período de autogestión”, que se extiende por dos siglos en la Europa industrial (Robert, 2004: 321–332). América Latina también ha estado salpicada, en el transcurso de luchas sociales a menudo explosivas, por múltiples “destellos de autogestión”, pero con identidades colectivas, culturas militantes, repertorios de acción y una “geografía social” propia de este continente y sus formaciones sociales.

(Iturraspe, 1986). Los intentos de autoorganización revolucionaria estuvieron particularmente presentes durante los años 1960–1970, época en que el aire estaba enrojecido tras la revolución cubana y cuando el Che Guevara argentino llamó a la multiplicación de “un, dos, tres Vietnam” contra la “bestia imperialista”. Más que una “época de autogestión” (Rosanvallon) como en Europa, es dentro de esta trayectoria histórica donde podemos ubicar el concepto de “poder popular” latinoamericano que atraviesa el continente.



Lo que aquí llamaremos “poderes populares constituyentes” se refiere a la demanda de control obrero, expandiéndose a otros territorios imaginarios sociales y políticos distintos a los de la fábrica: ocupaciones de tierras y autoconstrucción urbana, cogestión y cooperativas; experiencias comunitarias en barrios populares, etc. Podríamos hablar del surgimiento de formas de autogestión y autoorganización originadas en la “pobreza” de los pueblos y el campo y que encontramos durante esta larga década en los ensayos de cogestión en el Perú; durante el Cordobazo en Argentina (1969); la Asamblea Popular de Bolivia (1971)... Una época que alcanzó su apogeo

en Chile y terminó –repentinamente– el 11 de septiembre de 1973 (Gaudichaud, 2013).

Mil días que sacudieron el mundo

Más de treinta años después del golpe de Estado del general Augusto Pinochet, Chile sigue siendo un “país símbolo”, arrastrando tras de sí su cohorte de imágenes míticas, a veces ingresadas en el gran libro de la memoria por la puerta del reduccionismo histórico. La historia de los “poderes populares” y la autoorganización durante el gobierno de Salvador Allende (1970–1973) sigue siendo relativamente desconocida. Debido a que se ha mantenido al margen de los objetivos de participación gubernamental deseados por los principales partidos de la izquierda marxista, pero sobre todo porque hoy está ensombrecido por una transición democrática neoliberal, esta experiencia colectiva ha sido muchas veces ignorada por los partidos políticos que se han esforzado por reconstruir los tumultuosos acontecimientos de los mil días de Unidad Popular (*Disidencias* 2004).

Para comprender la dinámica de la lucha social de este período, hay que volver rápidamente a esta alianza que ganó las elecciones presidenciales de septiembre de 1970, provocando el inicio de una gran celebración popular y colectiva. La Unidad Popular fue una coalición de izquierda liderada por Salvador Allende, un médico francmasón muy carismático y parlamentario socialista desde hacía mucho tiempo (Moulian 1999). Este último intenta coordinar partidos

políticos que van desde el Partido Comunista (peso pesado de la alianza) hasta el pequeño Partido Radical, pasando por el Partido Socialista (PS, un partido marxista heterogéneo en crecimiento) y pronto sectores democristianos (como el MAPU y, más tarde, la izquierda cristiana). La estrategia de Unidad Popular, en particular a través de su proyecto de alianza con la “burguesía nacional progresista”, forma parte de la continuidad de los frentes populares de finales de los años treinta, pero bajo la hegemonía de dos partidos obreros mayoritarios: el Partido Comunista (PC) y el PS. Este programa se caracteriza por reformas sociales atrevidas y antiimperialistas, en un país que sufre de un mal desarrollo desigual articulado en torno al enclave minero (primera reserva del cobre mundial).

La voluntad de la Unidad Popular es salir de los caminos de gobiernos anteriores (incluido el populismo demócrata cristiano), con el objetivo de establecer una democratización política, social y económica significativa, incluida la nacionalización de las minas de cobre (“el salario de Chile”) en manos del capital estadounidense, una reforma agraria, la nacionalización de 90 importantes monopolios industriales y bancarios, así como una serie de reformas sociales (las “Cuarenta medidas”), incluido el consiguiente aumento de los salarios de los trabajadores⁷³. Para Salvador Allende, se trata de demostrar al mundo que el “camino chileno al socialismo” es posible, sin tener que seguir el camino burocrático soviético o la lucha armada cubana y, así, respetar las instituciones existentes, resultado de la Constitución liberal de 1925. Este proyecto está influido en gran medida por la reforma

⁷³ Vea los numerosos documentos de archivo y textos analíticos en www.archivochile.com.

moderada del PC chileno que reafirma la táctica de “vía pacífica”, inspirada en el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética y la posibilidad de una transición escalonada al socialismo. De hecho, los intelectuales de la Unidad Popular explican la “flexibilidad institucional” del Estado “compromiso” chileno, que según ellos garantizaría el funcionamiento de la democracia pero esta vez en beneficio de las clases populares y del socialismo, al igual que la “constitucionalidad” de las Fuerzas Armadas “y su respeto –supuestamente inquebrantable– por el sufragio universal”.

Las primeras aplicaciones de este programa son posibles gracias a una formidable movilización social y a las inmensas esperanzas que significa esta victoria electoral, tan inesperada como esperada. Destaquemos que este período es de intensa dinámica de democratización–participación– politización de la sociedad chilena, que sacude todas las estructuras de dominación de este pequeño país tercermundista.

Sin embargo, desde sus orígenes, la Unidad Popular estuvo imbuida de una gran tensión: fue producto de una campaña popular muy amplia, y llamó a la creación de un nuevo “poder popular”; pero deseando que éste no cuestione directamente las instituciones chilenas, su ejército o su transición por pasos. Esta apuesta es tanto más difícil cuanto que la izquierda parlamentaria solo controla el gobierno y está en minoría en el Congreso (las otras instituciones están dominadas en gran parte por la oposición), lo que la obligará a interminables negociaciones con la Democracia Cristiana (DC)⁷⁴. Al mismo

74 Salvador Allende pudo tomar la presidencia con solo el 36,3% de los votos, en parte gracias a la división de la oposición entre el centro democristiano y la derecha

tiempo, el gobierno está tratando de establecer un sistema original de cogestión y participación de los trabajadores en las empresas nacionalizadas, conocidas como “áreas de propiedad social”. Esto está previsto a través de una estrecha colaboración con la poderosa Central Única de Trabajadores (CUT). Es en este espíritu que Salvador Allende declaró el 1º de mayo de 1971: “El fortalecimiento del poder popular y consolidar, equivale a hacer a los sindicatos más poderosos, haciéndolos conscientes de que constituyen uno de los pilares del gobierno”. Además de su carácter democrático (en última instancia “controlado”⁷⁵), esta participación también se concibe como un instrumento de productividad empresarial y de “batalla de la producción”. Pero el proyecto de nacionalización se dirige inicialmente solo a una parte limitada de la economía, principalmente al sector moderno y monopolista: solo se trata del 10% de los trabajadores industriales (55.800 personas) y menos del 1% de las empresas chilenas...⁷⁶ Deja y sin perspectiva, a la gran mayoría de empleados de la pequeña y mediana industria, considerados “no estratégicos”, pero también a sectores enteros de la industria textil, de la construcción y de la alimentación. Por otro lado, la CUT se está integrando paulatinamente en la gestión de las empresas nacionalizadas, luego en el gobierno, lo que no deja de generar tensiones.

(Renovación nacional): aquí encontramos la denominada distribución de “tres tercios” que marca el sistema político Chileno hasta 1973 (ver Sarget, 1996).

75 Según los acuerdos celebrados entre la CUT y el gobierno, el Estado sigue siendo la mayoría en el junta directiva y trabajadores minoritarios, mientras que el poder de dirección concedida a la asamblea de trabajadores se separa artificialmente de la de ejecución dejado a la jerarquía corporativa (ver Espinoza y Zimbalist, 1978).

76 91 empresas registradas en su programa, incluidas 74 industriales, mientras que más de 200 fueron planeados originalmente.

A principios de noviembre de 1972, se constituyó un ejecutivo cívico–militar para evitar una guerra civil latente: encontramos, hombro con hombro, tres jefes de las Fuerzas Armadas con Rolando Calderón (PS y secretario general de la CUT) en el Ministerio de Agricultura y Luis Figueroa (PC y Presidente de la CUT) en el Ministerio de Trabajo.

En esa fecha, el gobierno se encontraba cada vez más en una posición difícil, atrapado en un juego institucional claramente hostil y ante una polarización social cada vez más profunda como las negociaciones en el Congreso bloqueadas por la oposición.

Poder constituyente popular y cordones industriales

Herederio de una larga tradición de lucha e impulsado por la radicalización popular, parte del movimiento obrero dará lugar a un movimiento de autoorganización, único en su alcance en América Latina. Durante los enfrentamientos de octubre de 1972 y las grandes movilizaciones de 1973, las demandas económicas estuvieron ligadas a las demandas políticas de los trabajadores más radicales: esta conexión se reflejó en particular en la formación de líneas industriales (Silva y Santa Lucia 1975: 675–847). Cuando durante el “Octubre Rojo” de 1972, las grandes empresas, comerciantes, profesionales liberales toman la ventaja de la huelga de los camioneros (financiada por miles de dólares de la CIA) en un intento por paralizar la economía del país, una fracción de la clase trabajadora industrial ocupa masivamente las fábricas y

algunos trabajadores logran reiniciarlas parcialmente, bajo su control. Lo mismo ocurre en el campo de la distribución, donde parte de la juventud militante apoya a los empleados para abastecer a los barrios y mercados populares. Los cordones industriales se forman a partir de la coordinación territorial horizontal de varias decenas de fábricas, independientemente de su rama económica o pertenezcan o no al sector privado. Tras haber sido liderados esencialmente “desde arriba” en la emergencia de octubre, por dirigentes sindicales y militantes del PS o del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)⁷⁷, las asambleas de trabajadores se instalan en las fábricas más combativas. El objetivo declarado era que estas asambleas eligieran a dos o tres delegados, revocables en cualquier momento, quienes ellos mismos votarían las decisiones dentro de la asamblea de delegados del cordón. No obstante, rápidamente, los trabajadores del cordón chocan con los límites de la estrategia de la izquierda gubernamental. Sin embargo, estas formas de organizaciones alternativas dan un paso más hacia la unificación de su lucha, al crear en julio de 1973, la Coordinación de Cordones Industriales de la Provincia de Santiago⁷⁸. Durante la crisis de octubre de 1972, tras el levantamiento militar del coronel Souper en junio de 1973, luego de la nueva huelga patronal de julio del mismo año, estas formas de dualización del poder,

77 MIR: Movimiento de Izquierda Revolucionaria (creado en 1964). Este partido, después de haber descartado

la mayoría de los antiguos dirigentes obreros que lo fundaron, se orientaron, desde 1967, hacia el modelo de la “guerra popular prolongada”. Este es un apoyo muy crítico y extraparlamentario para Unidad Popular, a menudo combatida como “izquierdista” o “contrarrevolucionaria” por el PC Chileno.

78 Para una historia oral de este proceso, vea Gaudichaud (2003, 2004).

“viniendo desde abajo”, experimentarán una notable extensión en todo el país. El término “poder popular” reivindicado por toda una parte de la izquierda se encarna entonces como una realidad transitoria:

La democracia de “todo el pueblo” amenaza las formas representativas y delegativas de hacer política. La dinámica de socialización de las luchas se esparce por todo el territorio y se multiplica dentro de las empresas. La “participación popular” comienza a transformarse en “poder popular” (Cruz Salas, 1999: 411-412).

En Santiago, los cordones Cerrillos y Vicuña Mackenna jugarán el papel más importante, junto a los cordones O’Higgins, San Joaquín, Santa Rosa, Recoleta, Mapocho–Cordillera, Santiago Centro y Panamericana–Norte. En la capital, el cordón concentra algunas decenas de miles de trabajadores, pero también se encuentran de norte a sur: en Arica, Concepción o incluso Talcahuano y Punta Arenas. Esta forma original de desarrollo del control obrero también se ve facilitada por la dinámica paralela del movimiento de pobladores, que desde fines de la década de 1960 se organiza en las áreas de la periferia urbana (las *poblaciones*). Sin embargo, los comandos municipales que, según la izquierda revolucionaria, iban a reagrupar trabajadores, estudiantes, y *pobladores*, no logran desarrollarse por falta de una conjunción estable entre estos diferentes actores sociales. Existe un debate feroz incluso entre los activistas acerca de si la prioridad se debe dar a los cordones obreros (según el PS) o directamente a los comandos (voluntad del MIR). Parece que esta discusión fue sobre todo un reflejo de la implantación de

cada partido. En efecto, el cordón industrial estuvo dominado por socialistas como Hernán Ortega (cordón de Cerrillos) o el sindicalista Armando Cruces (cordón de Vicuña Mackenna), mientras que el MIR tiene sus raíces sobre todo en los sectores del semiproletariado urbano. Estos militantes del MIR, sin embargo, lograron manejar de manera notable distritos enteros, como el de Nueva La Habana, verdadero pueblo autogestionado, dentro de Santiago.

Más allá de su diversidad y sus contradicciones, este poder constituyente urbano popular puede definirse como un “poder en movimiento”, como lo entiende el politólogo Sidney Tarrow (1994). Es innegable que estas iniciativas no fueron “espontáneas”, sino fruto de una acumulación de experiencias militantes, de luchas y también de hechos cotidianos, de la construcción de una identidad colectiva dentro del espacio urbano movilizado: lo que el historiador Edward P. Thompson llama una “experiencia de clase” (Thompson 1968). Esta gran ola de autoorganización, impulsada por los militantes de izquierda de la Unidad Popular (sectores radicales del PS, izquierda cristiana) y por el MIR, significa fundamentalmente la crisis de las organizaciones históricas de mediación y liderazgo del movimiento obrero. Acusándolos de paralelismo, tanto la CUT como el PC, intentarán activamente frenar su constitución, rechazando cualquier “creación de un poder alternativo al gobierno”. A lo que el MIR, encabezado por Miguel Enríquez, respondió con el deseo de ver el nacimiento de un poder dual real, negándose a “mantener la subordinación de las masas a la democracia burguesa” y a la estrategia de Allende. En cuanto al PS, en busca de una síntesis imposible, reconoció “el desarrollo

de un poder popular alternativo a las instituciones burguesas, pero no al gobierno” ...

La distancia entre Allende y el Poder Popular se ensanchó a medida que la política económica de la izquierda flaqueaba y finalmente se hundía en la parálisis, el mercado negro y la hiperinflación. A partir de enero de 1973, los cordones industriales se opusieron tajantemente al proyecto del ministro comunista Orlando Millas, quien pidió hacer las fábricas “no estratégicas”, para no aumentar la carga del gobierno cívico–militar y poder reanudar las negociaciones parlamentarias con una DC siempre más a la derecha. En marzo, el gobierno puede reafirmar su legitimidad como “gobierno del pueblo” con más del 43% de los votos en las elecciones legislativas. Pero, a lo largo de 1973, el ejército, lejos de ser una fuerza neutral, inició su labor de represión. Aprovechando una ley aprobada en 1972 sobre “control de armas”, los soldados intervienen en los bastiones de los trabajadores, confiscan las pocas armas que encuentran allí y sobre todo evalúan la resistencia. Tras la crisis de junio, y mientras los medios de comunicación (casi todos en manos de la oposición, empezando por *El Mercurio*) claman contra la dictadura del proletariado, la CUT reitera sus llamamientos para hacer ocupar algunas de las fábricas. El 9 de agosto se conformó un nuevo gabinete cívico–militar, conocido como “seguridad nacional”, donde había tres generales y el comandante en jefe de la policía. Armando Cruzes del cordón Vicuña Mackenna declara: “Los militares en el gobierno, así como en Octubre, representa una garantía para los patronos y no para la clase trabajadora”. En vano, porque un mes después el golpe de estado fue encabezado por un tal general Pinochet,

recién nombrado jefe de Estado Mayor, tras la renuncia del general legalista Carlos Prats...

Como primera apreciación, es inevitable subrayar que, a pesar de la magnitud del fenómeno de la dualización de poderes, las formas del poder popular constituyente han sido, sin embargo, embrionarias y temporales. Sus acciones se llevaron a cabo principalmente de manera defensiva y mal planificada. Su coordinación sigue siendo una simple superestructura dirigida por ciertos sindicalistas y no una organización de masas resultante de asambleas de trabajadores organizados.

El cordón industrial no logra unificar políticamente, ni siquiera contar con un proyecto alternativo al modelo propuesto por el gobierno y por el que han luchado. El MIR, fuera de la clandestinidad desde hace apenas cuatro años, sigue impotente para cambiar este modelo, oscilando entre el voluntarismo excesivo, la dura crítica a la Unidad Popular y la tentación de aliarse con su ala izquierda. A pesar del innegable éxito de la difusión de sus ideas, los miristas mantendrán, además, la composición verticalista y cerrada de sus “grupos político-militares ” y “frentes de masas”.

La hegemonía de los comunistas y demócratas cristianos dentro del movimiento obrero y la CUT sigue siendo indiscutible. En estas condiciones, este poder popular constituyente no tuvo ni tiempo ni fuerzas para prepararse para enfrentar el golpe de Estado (que contó con el apoyo directo de Estados Unidos).

La Unidad Popular no supo apoyarse en esta “revolución desde abajo” que surgió por todos lados, y tan bien descrita por el estudio monográfico del historiador Peter Winn sobre la gran fábrica textil de Yarur (Winn 1986). Estos militantes reclamaron ante todo la extensión de las nacionalizaciones a sus fábricas, pero también el control obrero, la organización de comités de defensa, el cierre del Congreso y la formación de una Asamblea Constituyente, la depuración del ejército de oficiales reaccionarios, y la nacionalización bajo control popular de la distribución con el fin de evitar el mercado negro. El 4 de septiembre de 1973, Santiago fue inundado por una marea humana de más de 800.000 personas (la capital tenía entonces sólo 3 millones de habitantes), que exigieron la “mano dura” contra la reacción. Unos días después, solo unas pocas docenas de militantes experimentados se enfrentan a tanques y aviones de combate en la Moneda (el palacio presidencial) en llamas, mientras los soldados invaden el cordón industrial y los barrios de clase trabajadora.

Algunas lecciones de la “Batalla de Chile”

Le advertimos, camarada, con todo el respeto y la confianza que todavía tenemos en usted, que si no lleva a cabo el programa de Unidad Popular, si no confía en las masas, perderá el único apoyo real que tiene como persona y como gobernante, y será responsable de llevar al país, no a la guerra civil, que ya está en pleno desarrollo, sino a una

fría y planificada masacre de la clase obrera, la más consciente y organizada de América Latina.

Es en estos términos que la Coordinación Provincial de los Cordones Industriales de Santiago se dirigió, el 5 de septiembre de 1973, al “compañero–presidente” Allende. La batalla de Chile, muy bien documentada por Patricio Guzmán (1975–1979), fue el epicentro de la lucha de clases en América Latina. Ni las élites locales, ni el imperialismo tenían ninguna intención de dejar intacto el nuevo eslabón débil. El movimiento popular se encuentra entonces completamente desarmado (tanto política como militarmente). El golpe estableció una dictadura de diecisiete años, sinónimo de feroz represión y transformó al país en un laboratorio del capitalismo neoliberal.

El aplastamiento de la “vía chilena” tuvo un impacto, cuya onda de choque no ha terminado de repercutir en la izquierda global. Sabemos, por ejemplo, que a raíz del “septiembre chileno”, el eurocomunismo vio la confirmación de que la democracia liberal era ahora un horizonte no superable. Muy recientemente, ex dirigentes comunistas chilenos, ahora fervientes defensores del social–liberalismo de la presidenta Michèle Bachelet, realizaron un largo ejercicio de contrición, en un libro titulado *Después de la Revolución* (Ottone y Munos Riveros, 2008). Explican por qué habían estado “equivocados” al adoptar una perspectiva anticapitalista e intentan “aprender del fracaso de la utopía socialista” en un momento en que América Latina está agitada por nuevos vientos y cuando se discute sobre el “socialismo del siglo XXI”. En efecto, es necesario extraer lecciones de esta experiencia, para

ponerlas en debate con respecto a los procesos actuales, ¡pero no para negar las luchas libradas por todo un pueblo movilizado ni para tratar de justificar las renunciaciones de hoy con los dolores del pasado!

Incluso hoy en día, como Maurice Najman escribió en 1974, “Chile está cerca”, en el sentido de que nos habla de los retos que hay que superar para cualquier política de emancipación para el siglo XXI (Najman, 1974). Estos momentos de ruptura histórica siempre están marcados por una impresionante discordancia de tiempos sociales y políticos: entre la relativa autonomía del campo de las movilizaciones colectivas y los intentos de canalización de los partidos o del Estado; entre la lógica de la lucha de clases y la voluntad del gobierno de seguir el tiempo institucional a pesar de todo. El “constitucionalismo obstinado” de la Unidad Popular, su visión paso a paso de la transformación social y una confianza desmesurada en las Fuerzas Armadas explican por qué Allende tuvo que desempeñar este papel de equilibrista, árbitro de un conflicto agudizado por la praxis de las luchas colectivas y la polarización política. Una lógica que Carlos Altamirano, secretario nacional del PS chileno, había llamado la “dialéctica de la derrota” y que se aceleró considerablemente con la presencia de un ejecutivo paralizado y sin mayoría parlamentaria⁷⁹. Sin embargo, el gesto chileno también tiende a demostrar que un gobierno resultado de grandes movilizaciones puede servir de apoyo a un movimiento de emancipación y realmente promoverlo si decide apoyar estos “destellos de autogestión” que atraviesan la sociedad, mientras intenta neutralizar la acción represiva del

⁷⁹ De ahí los planes de Salvador Allende de convocar un referéndum para convocar a Asamblea Constituyente, proyecto frustrado por el golpe.

Estado. Como ya había señalado Marx en sus estudios sobre la Comuna de París, sería ilusorio proclamar la transición al socialismo combinándolo con la defensa incondicional del Estado. Cualquier proceso de transición, por tanto de ruptura de la hegemonía burguesa, debe buscar favorecer sistemáticamente la “revolución desde abajo” y las formas de los poderes populares constituyentes para crear nuevas estructuras de participación y control democrático, en todos los niveles. Para hacer un paralelo, podemos decir que los recientes procesos constituyentes en Bolivia, Ecuador y Venezuela, si bien han permitido un tremendo avance en materia de derechos democráticos en estos países, aún no han transformado radicalmente el Estado y las múltiples estructuras de dominación. El desafío en estos países es mantener una dinámica sostenida de transformación social y democrática, a riesgo de empantanarse en un hipotético neodesarrollo o “capitalismo ando–amazónico”, como lo pide el vicepresidente de Bolivia García Linera o la “burguesía bolivariana” venezolana. La cuestión sobre la relación entre “gente movilizada”, nuevas formas de autoorganización local, Estado burocrático, capitalismo rentista y la construcción de una democracia alternativa está además agudamente planteada en la Venezuela bolivariana (Compagnon et al., 2009).

Los instantes históricos de dualización de poderes, donde lo viejo no deja de pesar y emergen las nuevas luchas, son también los de todos los peligros. Aunque de duración variable, no son eternos y, a menudo, incluso son efímeros. Históricamente, las clases dominantes nunca se han dejado despojar sin defender sus intereses: se confirmó el papel del

ejército y del imperialismo como garante del orden establecido, la necesidad de afrontar la difícil cuestión de la violencia o incluso el trabajo político hacia los soldados en Chile. El golpe de Estado de abril de 2002 en Caracas contra el presidente Hugo Chávez y el golpe de estado de junio de 2009 en Honduras nos recuerdan que este espectro no ha desaparecido en América Latina. Bajo Allende, como ha demostrado el politólogo Juan Carlos Gómez, la verdadera “frontera de la democracia” para las élites era la propiedad de los principales medios de producción. Al pretender socializarlos de forma gradual y parcial, sin ruptura institucional, la izquierda pensó que podría evitar el enfrentamiento violento. Sin embargo, “el conflicto en los ámbitos de la propiedad social nunca se ha resuelto democráticamente, pero sí se ha resuelto en otro aspecto: el derecho a la propiedad ha vuelto a ser inviolable, garantizada no a través de formas constitucionales, sino por las fuerzas armadas” (Gómez, 2004). Hoy, en América Latina, ningún gobierno nacionalista progresista o radical se ha atrevido a cruzar este Rubicón. Además, ninguno de ellos pudo siquiera imponer, como Allende supo (en el contexto internacional), nacionalizaciones significativas sin compensación (expropiaciones) en el rostro y la barba de Estados Unidos...

Una vez que se han hecho estas observaciones, los retos del socialismo en el siglo XXI no se paran por ello, por el contrario, ¡apenas están empezando! Resumir el fracaso del experimento chileno por la ausencia de destrucción del Estado oligárquico sería absolutamente absurdo. Pasar a la constitución de poderes alternativos embrionarios para la construcción de otra sociedad, auto-gestionada y planificada democráticamente,

supone el éxito (a diferencia de los regímenes burocráticos del siglo XX) del enorme reto de la plena apropiación pública y social, imposible en un marco estrictamente nacional. También representa la creación de una contrahegemonía cultural, el respeto a la autonomía de los movimientos sociales y el derecho a la autodeterminación de la gente indígena. Significa una reflexión crítica sobre la cuestión del “sujeto revolucionario” y el papel de las organizaciones políticas en un proceso de emancipación; sobre lo que podría significar el sustitucionismo de los partidos, el sectarismo o el verticalismo político (en América Latina como en cualquier otro lugar). En definitiva, cuestionar los caminos de la democracia y del bien común para llegar hasta el final...

Durante una década, el continente de José Martí, Carlos Mariátegui, Luis Recabarren y el “Che” Guevara ha vuelto a estar en plena agitación social (Gaudichaud, 2008). Ciertamente es dentro de las movilizaciones actuales y las luchas en curso donde nacerá la energía creativa capaz de revivir algunos de los “tesoros perdidos” autogestionados (parafraseando a Hannah Arendt) de la experiencia chilena.

Abril de 2010

Fuente: Versión adaptada y actualizada de “Regreso a las lecciones de Chile”, *ContreTemps*, n ° 10, París, Textuel, 2004.

Para saber más:

Colectiva “En torno al Movimiento Revolucionario Chileno”, *Disidencias*, nº 14–15, enero de 2004, www.dissidences.net.

Compagnon, Olivier, Julien Rebotier, Sandrine Revet (coord.) (2009), *Venezuela más allá del mito. Chávez: Democracia, Cambio Social*, París, L'Atelier.

Cruz–Salas, Luis (1999), “Estado, partidos y movimiento obrero”, en Luis Vitale (ed.), *Para recuperar la memoria histórica. Frei, Allende, Pinochet*, Santiago de Chile, ChileAmerica / CESOC.

Espinoza, Juan G. y Andrew S. Zimbalist (1978), *Democracia económica: Participación de los trabajadores en la industria chilena 1970–1973*, Londres, Academic Press.

Gaudichaud, Franck (2003), “Unidad popular de los que lo hicieron”, *Le Monde diplomatique*, París, septiembre.

Gaudichaud, Franck (2004), *Poder popular y cordones industriales: Testimonios sobre la dinámica del movimiento popular urbano durante el gobierno por Salvador Allende*, Santiago de Chile, LOM.

Gaudichaud, Franck (dir.), (2008), *El volcán latinoamericano: izquierdistas, movimientos sociales y neoliberalismo en América Latina*, París, Textuel.

Gaudichaud, Franck (2013), *Chile 1970–1973: A Thousand Days That Shaken the World*, Rennes, Rennes University Press.

Gómez, Juan Carlos (2004), *La frontera de la democracia. El derecho de propiedad en Chile. 1925–1973* 3 Santiago de Chile, LOM.

Guzman, Patricio (1975–1979), *La Batalla de Chile*, Chile, Cuba, Venezuela, video, París, Montparnasse.

Iturraspe Francisco (1986), *Participación, cogestión y autogestión en América Latina*, Caracas, Nueva Sociedad.

Moulian, Tomas (1999), *Conversación interrumpida con Allende*, Santiago, ARCIS–LOM.

Najman, Maurice (1974), *Chile está cerca: Revolución y contrarrevolución en el Chile de Unidad Popular*, París, François Maspero.

Ottone, Ernesto y Sergio Muñoz Riveros (2008), *Después de la revolución: Soñar con los pies en la tierra*, Nantes, L Atalante, 2008.

Robert, Jean–Louis (2003), “Cambiar la empresa, cambiar el trabajo” en Frank Georgi (dir.), *Autogestión. ¿La última utopía?*, París, Publications de la Sorbonne.

Sarget, Marie–Noëlle (1996), *Historia de Chile desde la conquista hasta nuestros días*, París, L’Harmattan.

Silva, Angélica y Patricia Santa Lucía (1975), “Cordones industriales: una expresión del poder popular en Chile”, *Tiempos Modernos*, enero.

Tarrow, Sidney (1994), *Poder en movimiento, movimientos sociales, acción colectiva y política*, Cambridge University Press.

Thompson, Edward P (1968), *The Making of the English Working Class*, Londres, Penguin.

Winn, Peter (1986), *Weavers of Revolution, the YARUR Workers and Chile Road to Socialism*, Nueva York, Londres, Oxford University Press.

PROYECTO DE LEY SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE AUTOGESTIÓN

Artículo 1. Se crea un sistema nacional de autogestión; estará integrado por las empresas señaladas por esta ley, cuyo objeto será acentuar el proceso de control de la economía por parte de los trabajadores y de su participación en el desarrollo nacional. El sistema integrará el área social de la economía [...].

Artículo 2. Podrán ser empresas laborales autogestionadas: 1) aquellas cuyo patrimonio supere los 14.000.000 de escudos al 31 de diciembre de 1969, cuando estos no estén relacionados con las actividades que la Constitución o la ley reserven para el Estado [...]; 2) los que serán creados o adquiridos por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo); 3) los que la ley transfiera del área privada o mixta al área social [...]; 4) los que habían sido declarados en quiebra, aquellos cuyo cese se deba a la responsabilidad del empleador o aquellos cuya parálisis, cierre o liquidación provoquen el despido de grandes grupos de trabajadores [...]; 5) Los que, ahora y en el futuro, serán administrados íntegramente por sus trabajadores, cualquiera que sea su forma jurídica. Si lo deciden por mayoría y si su integración al sistema es aprobada por la Corfo a través de sus comités sectoriales. [...]; 6) Las Cooperativas [...].

Artículo 3. La autogestión de las empresas de trabajo dependerá de la comisión sectorial correspondiente. En este órgano, las empresas en autogestión contarán con dos representantes elegidos por votación directa, proporcional, unipersonal y secreta, de los trabajadores de estas empresas. Los representantes procederán de los miembros de los Consejos de administración de estas sociedades.

Artículo 4. A tal efecto, los comités sectoriales de la Corfo estarán facultados para adquirir y vender bienes, valores, emitir y colocar valores en el mercado, otorgar préstamos a empresas en moneda nacional o su equivalente en moneda extranjera, también tener la facultad de negociar y obtener créditos en el exterior de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, y en general de negociar transacciones comerciales de exportación e importación. También podrán recibir aportes de capital del Estado, corporaciones o asambleas de desarrollo regional de municipios, particulares y en general de cualquier persona. Quienes traigan el capital no tendrán derecho a intervenir en la gestión ni en la administración [...].

Artículo 6. Los Comités sectoriales [...] podrá crear un sistema nacional de fondos destinados a realizar inversiones en empresas autogestionadas y garantizarán el correcto funcionamiento de este sistema.

Artículo 7. Anualmente, las comisiones sectoriales [...] en coordinación con la Dirección Nacional de Planificación y la Dirección de Industria y Comercio del Ministerio de Economía [...] fijarán las bases anuales de la posible política productiva, por sector y rama industrial así como la

correspondiente política de precios. Esta información se utilizará como criterio básico para la fijación del excedente y el reembolso obligatorio de las empresas y para evaluar las posibilidades de realizar los nuevos proyectos de estas empresas.

Sobre las empresas autogestionadas

Artículo 8. Se denominará empresa de autogestión, cualquier unidad productiva de carácter industrial, minero y de servicios cuya gestión y la administración sea ejercida íntegramente por los trabajadores [...]. Solo las personas físicas pueden formar parte de estas empresas. En estas empresas, habrá una diferencia entre la gestión y la propiedad del capital. En efecto, el capital de las empresas estará constituido por la Corfo, y la gestión revertirá al colectivo de trabajo de cada empresa autogestionada.

Artículo 9. Las sociedades autogestionarias podrán recibir directamente aportes de capital de terceros, pero estos aportes no darán derecho a la administración. Estos aportes de capital formarán parte del patrimonio de la Corfo [...]. Las aportaciones de capital que realice una de las personas a una sociedad autogestionaria tendrán el carácter de valores con plazo indefinido y se reajustarán semestralmente de acuerdo con una tasa que será establecida por el Consejo General de la Corfo previo acuerdo del director del Banco Central. [...]

Artículo 12. Estas empresas de autogestión incluirán a todas aquellas personas que allí trabajen, en cualquier momento del proceso de trabajo y en cualquiera de los puestos de producción o de la actividad habitual o nueva de la unidad con contrato indefinido o temporal. En el caso de técnicos o profesionales contratados para realizar tareas específicas, la normativa determina su participación en la empresa.

Artículo 13. La Corfo a través de sus comisiones sectoriales determinará la política de remuneraciones de las empresas que integrarán el sistema, en relación con el esfuerzo productivo y de acuerdo con la política general de funcionamiento. La Corfo tenderá a asegurar que exista la mayor homogeneidad entre los ingresos de las distintas empresas de una misma categoría y la distribución más equitativa de los ingresos en cada una de ellas. Corfo también tendrá la facultad de fijar las condiciones mínimas para la contratación de trabajadores temporales [...].

Artículo 14. La dirección, administración y funcionamiento de las empresas autogestionarias estará a cargo de la Asamblea de trabajadores y del consejo de administración [...].

Artículo 15. La Asamblea de trabajadores es la máxima autoridad en la empresa y estará integrada por todos los trabajadores que tengan la condición de personal fijo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de esta ley, y las decisiones que la Asamblea adopte [...].

Artículo 18. Las funciones de la Asamblea de trabajadores serán las siguientes: a) Discutir y aprobar los planes y políticas de la empresa, de acuerdo con las directivas establecidas por

Corfo [...]; b) elegir y renovar a los miembros del consejo mediante elecciones generales, democráticas y secretas; c) crear los comités necesarios y establecer los procedimientos para la elección de sus miembros; [...]

Artículo 19. La Junta directiva estará integrada por cinco trabajadores elegidos por la asamblea [...] y será responsable de la administración superior de la empresa, en ejecución de las directivas adoptadas por la Asamblea. Sus miembros serán elegidos por dos años: se renovarán parcialmente y solo podrán ser reelegidos una vez. [...]

Artículo 21. El cargo de asesor no implicará remuneración o beneficios adicionales para la persona que lo desempeñe, ni el abandono del trabajo normal que desempeña en la empresa, salvo en los casos previstos en el reglamento y estatutos internos.[\[CC\]](#).

Artículo 22. La junta directiva nombrará al Gerente, quien será responsable de realizar las tareas que le asigne la junta, y será responsable del sistema de producción. Podrá participar con derecho a voto en las sesiones de la Junta directiva y en la Asamblea de trabajadores.

El Gerente será exclusivamente responsable ante el consejo de administración y será renovado por éste, previa ratificación de la junta. En todos los casos, la asamblea de trabajadores puede solicitar a la junta directiva que cambie de Gerente. [...]

Atribuciones de la Corfo y de los Comités de sector

Artículo 23. [...] a) crear nuevas empresas autogestionadas y aprobar la incorporación al sistema de una empresa existente; b) emitir valores autogestionados, los cuales se reajustarán de acuerdo al índice de precios al consumidor y devengarán intereses; c) hacerse cargo de la administración de las empresas en los siguientes casos: cuando durante tres años consecutivos y seis meses cada una, las empresas registren un déficit en su balance; [...] cuando el déficit sea tal que ponga en peligro el futuro de la empresa y el capital invertido. [...] En caso de conflicto o parálisis laboral, se aplicará la legislación vigente con la particularidad de que el comisionado que designe el Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá ser designado a propuesta de la Corfo. Fuera de este caso, la empresa será administrada por la Corfo, que deberá decidir en un plazo máximo de dos años sobre su normalización, reorganización o disolución.

Las prerrogativas de administración son responsabilidad exclusiva de los comités sectoriales de Corfo específicos para la operación diaria del negocio; d) fijar anualmente los reembolsos obligatorios que cada empresa deberá realizar a la Corfo; e) inspeccionar y evaluar técnicamente las empresas autogestionarias, controlar su capital y en general su normal funcionamiento [...]; f) establecer la política de remuneración [...]; g) aprobar anualmente los planes de producción de cada empresa, así como sus programas financieros; [...] j) coordinar

empresas con organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros. [...]

Las Cooperativas de trabajadores

Artículo 36. Se considerarán cooperativas de trabajadores las siguientes: cooperativas de trabajo; [...] de trabajo y transporte y de trabajo y servicios que estarán compuestos por trabajadores de estas ramas de actividad. En consecuencia, no puede haber socios no trabajadores ni trabajadores no socios, excepto en el caso de los que tendrán carácter transitorio [...].

Artículo 37. Estas cooperativas podrán formar parte del sistema nacional de empresas autogestionadas sin más condición que haberlo solicitado y ser aprobadas por el consejo general de la Corfo. [...]

Sobre traspasos de empresas al sistema de autogestión nacional

Artículo 40. El Consejo General de la Corfo podrá decidir por mayoría de dos tercios de sus miembros la expropiación total o parcial de las empresas, sus acciones o propiedad [...].

Artículo 41. Los propietarios afectados por la expropiación sólo tendrán derecho a indemnización. [...]

Para saber más:

Raptis, Michel (1973), *¿Qué socialismo en Chile? Estatalismo o autogestión*, París, Anthropos.

MÉXICO

Richard Neville

“Hoy afirmamos con alegría que somos los pueblos de Oaxaca porque hemos redescubierto la memoria de nuestros orígenes indígenas, la comunidad como modo de convivencia social, armónica, respetuosa y horizontal entre mujeres y hombres de una misma sociedad, porque hemos redescubierto la autonomía como modo de existencia y de relación más justa entre los pueblos que comparten el territorio. [...] Hoy, con la lluvia vigorizante de la revolución social, nuestras raíces indígenas se están regenerando en nosotros, en los pueblos y en los campos, en las fábricas, en las empresas y en las escuelas de Oaxaca “ (Vocal, 2009).

Luego del movimiento excepcional que desencadenó la “Comuna” en 2006 y a pesar de la feroz represión de noviembre–diciembre, los pueblos de Oaxaca no fueron aniquilados. Permanecen de pie. La movilización popular ha continuado e incluso se ha fortalecido al recurrir a otras formas de resistencia al modelo de dominación capitalista y represivo. Los intentos de instrumentalizar la Asamblea Popular de los

Pueblos de Oaxaca (APPO) fracasaron a favor de un fortalecimiento horizontal de la organización y experimentación social a través de espacios autónomos y alternos en las comunidades indígenas del Estado y barrios populares de Oaxaca.

El 11 y 12 de febrero de 2007, la APPO realizó su primer congreso con el fin de definir nuevas modalidades de acción para continuar la lucha y fortalecer el movimiento social dentro del Estado. La APPO se enfrentó a un intento de golpe por parte de algunos de sus componentes: el Frente Popular Revolucionario (FPR), el Frente Amplio de Lucha Popular (FALP), Nueva Izquierda (Nueva Izquierda) y la Coordinación de Mujeres de Oaxaca (COMO), controlados por organizaciones políticas comunistas, marxistas-leninistas o afines al Partido Revolucionario Democrático (PRD), quien trabajó para la APPO para participar y presentar sus propios candidatos en las elecciones locales de agosto y octubre de 2007. Según Ángel Luna Cosme, que es miembro de la APPO y Vocal en la Casota (Casa autónoma, solidaria y autogestionada) ubicada en un barrio popular de la ciudad de Oaxaca, “estas organizaciones incluso crearon movimientos títeres para obtener la mayoría y defendieron el principio de decisión por votación y no por consenso. Pero no lograron sus fines y fracasaron en su intento “(Cosme, 2010). El congreso de la APPO advierte que como movimiento social, la Asamblea no participaría en el proceso electoral y adoptó una decisión de acuerdo con sus principios, ya que no se concibe como una política de partido. Por tanto, se acordó que los partidos políticos, que quisieran, podrían participar en las elecciones como tales, pero que ningún candidato podría usar el nombre

o reclamo de la relación de su organización con la APPO durante su campaña y, que los delegados que participasen en el proceso electoral debían renunciar tan pronto como su candidatura sea aceptado por un partido político. La APPO se limitó estrictamente a convocar un voto sancionador contra los candidatos del gobernador, Ulises Ruiz y sus aliados. Este intento de instrumentalización chocó con la oposición de representantes de comunidades indígenas y organizaciones sociales que se niegan a participar en las elecciones y quieren mantenerse independientes de las estructuras de poder. En julio de 2006, solo el 7% de la población del Estado había participado en las elecciones presidenciales. Las comunidades indígenas, que representan el 80% de la población y pueblan 420 municipios de 570 las habían boicoteado.

Al final de este congreso, las organizaciones de base crearon un espacio abierto y autónomo, *Vocal* (Voces Oaxaqueñas construyendo autonomía y libertad) en marzo de 2007 para fortalecer la asamblea, la toma colectiva de decisiones y el movimiento social. Este espacio se ha marcado el objetivo de construir otra sociedad de base e independiente de los partidos políticos y ha adoptado un manifiesto:

Los que actualmente integramos este espacio somos personas autónomas, colectivos libertarios, lugares autogestionados [...], colectivos zapatistas, miembros de las barricadas y de la APPO y miembros de la Otra Campaña. Todos ellos comprometidos con el actual movimiento social de Oaxaca. Este espacio se concibe como un medio de federar las iniciativas autónomas de los pueblos de Oaxaca movilizados; participamos

activamente en el movimiento social, pertenezca o no a organizaciones estructuradas como la APPO y nos preocupamos por mantener nuestro movimiento social respetando sus principios de autonomía e independencia frente a los partidos políticos; reivindicando la soberanía de la asamblea como la forma más justa y armoniosa de entenderse; organizarnos de forma autónoma y gobernarnos, en cuyo contexto los acuerdos no se basan ni en el predominio de la mayoría sobre la minoría, ni en ninguna otra forma de imponer el punto de vista como el que comúnmente ejercen los poderes desde arriba, sino en una relación de respeto mutuo entre todos los componentes del pueblo.

En este espacio, luchamos por la construcción, el fortalecimiento y la alianza de autonomías, de hecho consideramos la autonomía de pueblos, grupos, colectivos, individuos y organizaciones como una alternativa real de oposición al actual sistema de gobierno autoritario. La autonomía, como proceso de construcción de otras realidades, muestra que hay otra forma de cambiar las cosas desde el momento en que las personas deciden sus propias formas de vida, y no desde las instituciones de poder, que se contentan con reformar espacios opresivos y represivos. [...] Por ello, la actividad de *Vocal* no se limita a los períodos electorales, con ellos y sin ellos, la autonomía avanza en la organización y la propuesta de otra sociedad posible.

En la etapa actual del movimiento, con las inminentes elecciones que se nos han presentado como posibilidad de

obtener la victoria, creemos que es necesario que todas las mujeres, hombres, pueblos y regiones de nuestros Estados que se han sumado y participado en este gran movimiento por la independencia y la autonomía de los partidos políticos, venga con los que compartimos esta idea, para afirmar que esta situación es circunstancial y que tendremos que salir de este proceso electoral más fuerte, más preparados para enfrentar la embestida de los gobiernos que sirven a los intereses de los amos del dinero. [...] Observamos que dentro como fuera de la APPO, el pueblo movilizado comparte la idea de preservar la independencia y la autonomía de nuestro movimiento frente a los partidos políticos. La historia de nuestro país ha demostrado que todos los partidos políticos en diferentes circunstancias reprimieron y actuaron contra los legítimos intereses del pueblo. [...]

El pueblo de Oaxaca conoce la importancia de la movilización y la organización para lograr la victoria. Para ello, creemos que es necesario continuar la movilización en todo el Estado, y más allá de las diferentes formas de entender la sociedad, la resistencia en su pluralidad y sus características, Vocal es una llamada a impulsar la lucha. [...] Le corresponde por tanto a las personas movilizadas entablar un diálogo con la APPO, colectivos y personas que, como nosotros, participan de forma independiente en esta lucha. [...]

Queremos justicia, dignidad, no tener miedo de expresar nuestras ideas, no conocer discriminación por nuestro color, nuestro pensamiento, nuestro lenguaje,

nuestros gustos, queremos alimentos saludables obtenidos a través de nuestro trabajo. Ya no queremos que los ricos nos roben, queremos usar nuestra energía creativa para el bien común, queremos libertad para nuestras presas y presos. Queremos ser libres para elegir nuestra forma de vida y que no nos impongan sus mentiras, su violencia y su forma de gobernar. [...] Buscamos unir por lazos fraternos nuestras experiencias de lucha hasta el último rincón de nuestro Estado, buscamos compartir nuestras ideas e intercambiarlas con los hombres y mujeres de Oaxaca [...] con todos los que luchan por un mundo mejor.

Desde su creación, *Vocal* ha trabajado en colaboración con las comunidades indígenas y las poblaciones de los barrios obreros de la ciudad aumentando el número de intercambios y forjando vínculos entre ellos. Dada la lógica del sistema capitalista que explota y devasta los territorios y expulsa a las comunidades, *Vocal* acompaña las resistencias y luchas del pueblo en defensa de su tierra y sus territorios. Este espacio también organiza movilizaciones contra el establecimiento de multinacionales que quieren explotar los recursos del Estado (biodiversidad, energía, minerales, etc.) y expulsar a los campesinos de sus tierras. Para Ángel Luna Cosme:

Defendemos la tierra y el territorio, por ejemplo frente a los megaproyectos eólicos de multinacionales, como Endesa, Iberdrola, EDF, etc., programados bajo el plan Puebla Panamá. El objetivo también es dar a conocer proyectos y casos de represión. La razón de ser de *Vocal* es resistir todos estos proyectos, contra el establecimiento de

una base militar en Mérida y buscar alternativas a las instituciones del Estado.

En los espacios alternativos, *Vocal* también apoya los procesos autónomos de resistencia de las comunidades, como en la región del Istmo, en Bibaani, el colectivo Guiee Triqui en el Centro Comunitario para la Autonomía y en los barrios obreros de la ciudad de Oaxaca. Pone en práctica formas alternativas de vida comunitaria más armoniosa y construye nuevas relaciones sociales basadas en la cooperación y la solidaridad. Estos espacios implican valores de apoyo mutuo, reciprocidad, complementariedad, equilibrio y unidad en la diversidad. Se trata de espacios de autonomía práctica en los que, de manera autogestionada, producimos, intercambiamos y aprendemos colectivamente.

Desde octubre de 2008, *Vocal* colabora con otros potenciando la actividad de La Casota. Ángel Luna Cosme, uno de los jóvenes implicados en su funcionamiento, describe su actividad:

Es un espacio cultural de encuentro, reflexión y acción, ubicado en un barrio popular de la ciudad de Oaxaca. Hay un comedor popular, un dormitorio para acoger a personas solidarias de otras regiones de México y el mundo, una biblioteca alternativa, serigrafía, pintura, grabado, imprenta, talleres de reciclaje de computadoras, una emisora de radio, una consulta médica, una tienda comunitaria. etc.

También organiza ferias del libro, conciertos, exposiciones, formaciones, debates, etc.

La tienda Lorenzo Sampablo Cervantès, que lleva el nombre de un miembro de la APPO asesinado en agosto de 2006 por la policía, vende artesanías producidas por presos políticos para brindarles ayuda material, así como frutas y verduras de las comunidades. Se trata de una venta directa a precios reducidos para eludir los canales de distribución tradicionales. La Casota contribuye al desarrollo de cooperativas y artesanías. Se han creado varias cooperativas de consumidores de barrio, compran directamente a las comunidades indígenas y a los pequeños productores. La Casota contribuye al desarrollo de la agricultura orgánica urbana mediante la organización de intercambios de semillas para permitir que los residentes de los barrios de clase trabajadora de Oaxaca produzcan algunas frutas y verduras. También se ha creado una red de defensa de la soberanía alimentaria y un centro de documentación sobre tecnologías alternativas. La Casota está desarrollando relaciones de solidaridad con otras regiones del mundo. En diciembre de 2008, la policía tomó posesión de su local, pero ante la masiva movilización de los habitantes del distrito, tuvo que retirarse.

Hay cuatro ubicaciones alternativas equivalentes en la ciudad de Oaxaca. Estas formas de autogestión no solo pretenden ser visionarias y utópicas, sino también decididamente prácticas. Es necesario responder a las necesidades y esperanzas de las poblaciones (Cosme, 2010).

Durante el 2º Congreso de la APPO que se realizó en febrero de 2009 con la presencia de 702 delegados de todas las regiones del Estado, el número de comunidades indígenas representadas fue en aumento y se situó en cerca de 300. El FPR y otros reiteraron su deseo de involucrar a la APPO en las próximas elecciones. Las comunidades de base y la mayoría de los movimientos sociales, incluida la poderosa sección 22 del sindicato de maestros (SNTE), se opusieron nuevamente. Según Ángel Luna Cosme, “aunque sea prácticamente un hecho que en las próximas elecciones estatales de julio de 2010, el PRD obtendrá el cargo de gobernador y la mayoría en el parlamento regional, no hay nada que esperar”. Más allá de las elecciones, queda la esperanza porque los pueblos se organizan cada vez más y están cada vez más decididos a tomar las riendas de su destino. No están dispuestos a aceptar a aquellos que ayer pronunciaron ardientes discursos revolucionarios y ahora hablan sólo de realismo político y adoptan un enfoque reformista. Prefieren “construir ahora iniciativas y proyectos autónomos que lleven las semillas de la nueva sociedad que quieren” (Vocal, 2009). Vocal no intenta imponer nada a las poblaciones, sigue siendo un lugar de intercambio, convergencia de acciones y experimentos sociales. A pesar de las diferencias tácticas y estratégicas dentro de la APPO, sigue jugando un papel importante en la movilización. La declaración del Congreso de 2009 reafirmó ciertos principios y ejes de lucha como: la lucha por la democratización del país, que significa la libertad de organizarse de manera independiente y autónoma y la libertad de las comunidades y pueblos indígenas de ejercer su libre determinación de considerar el presente y el futuro; el fortalecimiento de la lucha anticapitalista y la búsqueda de la unidad en la práctica;

independencia de los partidos políticos; reorganización horizontal y estatal; toma de decisiones por consenso; la liberación de los presos políticos y la lucha contra las privatizaciones y las multinacionales.

El espíritu de la Municipalidad de Oaxaca permanece muy vivo. ¿Podrá la insurrección del pueblo acabar con la tiranía? La acumulación de fuerzas y experiencias es fundamental para emprender un cambio profundo en la sociedad. Por tanto, es importante respetar los ritmos y la maduración de los pueblos.

Abril de 2010

Para saber más:

La Casota: <http://casota.wordpress.com/>.

Angel Luna Cosme (2010), entrevista a Richard Neville (23 de marzo).

Declaración del segundo congreso de la APPO:
[http://lahaine.org/vocal/articulo.php?p = 227etmás = 1etc = 1](http://lahaine.org/vocal/articulo.php?p=227etm%C3%A1s=1etc=1).

Fisher, Miriam (2007), "Oaxaca, entre rebelión y utopía", película.

Lapierre, Georges (2008), *La Comuna de Oaxaca*, París, Rue des cascades.

Contribución vocal al 2º congreso de la APPO en Oaxaca (20–22 de febrero de 2009).

Vocal, *Manifiesto* (marzo de 2007).

¿PUEDEN LOS TRABAJADORES GESTIONAR UNA GRAN FÁBRICA?

Jane Slaughter

En el día 879 de su huelga, los trabajadores de neumáticos mexicanos buscaron ayuda en Alemania, donde tenía su sede la multinacional que quería cerrar su planta. Después de una determinada campaña de 1.141 días, la empresa les vendió la planta, que ahora gestionan como cooperativa. “Si los propietarios no lo quieren, hagámoslo nosotros mismos”. Cuando una fábrica cierra, a veces surge la idea de convertirla en una cooperativa propiedad de los trabajadores, y generalmente muere.

Los obstáculos para comprar una planta, incluso si falla, son enormes, y una vez en el negocio, los nuevos trabajadores–propietarios enfrentan todas las presiones que ayudaron a la empresa a quebrar en primer lugar. La mayoría de las cooperativas de trabajadores son pequeñas, como un colectivo de taxis en Madison o una panadería en San Francisco. Pero en México una cooperativa de trabajadores de tamaño gigante ha estado fabricando neumáticos desde 2005. La fábrica compite en el mercado mundial, los empleados son

1.050 copropietarios y tienen mejores salarios y pensiones de cualquier otra planta industrial mexicana.

Pero esta inusual victoria es prácticamente desconocida en Estados Unidos. Amigos de Guadalajara me instaron a que viniera a ver cómo funciona la cooperativa Tradoc. Su presidente, que era presidente del sindicato cuando la planta era propiedad de Continental Tire, habló en un taller de la Conferencia Labor Notes de 2010. Jesús “Chuy” Torres es uno de los sindicalistas más impresionantes que he conocido, aunque ya no es oficialmente sindicalista. Aún así, “nuestra clase es la clase trabajadora”, me dijo.

Lejos de entregarse a una mentalidad de “tenemos a los nuestros”, los trabajadores de Tradoc están decididos a mantener la solidaridad con los trabajadores que todavía tienen la maldición de un jefe.

Es difícil decidir qué es más notable: cómo los trabajadores de Continental convirtieron el cierre de una planta en propiedad de los trabajadores a través de una campaña determinada de 1.141 días, o cómo se las han arreglado para sobrevivir y prosperar desde entonces. En cualquier caso, debemos celebrar esas victorias. Contaré la historia en dos partes.

Abriendo las puertas cerradas de la fábrica

Tomar el control de su planta no fue idea de los trabajadores. Continental Tire propuso vendérsela, después de que el

sindicato arrinconó a la dirección con tanta fuerza que los propietarios no querían saber nada más.

Pero para llegar a ese punto, los trabajadores tuvieron que hacer una huelga de tres años y lo que en Estados Unidos llamamos una “campaña integral”. Los trabajadores dicen que no fue solo una táctica la que les dio la victoria, sino una combinación de presiones implacables.

Continental Tire, con sede en Alemania, es el cuarto fabricante de neumáticos más grande del mundo. Compró una fábrica en El Salto, en las afueras de Guadalajara, en el oeste de México, en 1998, con la intención de producir principalmente para el mercado estadounidense. Cuando fue construida por la empresa mexicana Euzkadi en 1970, era la planta de fabricación de neumáticos más avanzada de América Latina. Seguía siendo la más moderna en México a principios de la década del 2000.

Pero las plantas mexicanas de fabricación de neumáticos estaban cayendo como moscas en ese momento: Goodyear, Uniroyal. El TLCAN había hecho que las importaciones de neumáticos del extranjero se triplicaran entre 1996 y 2000. En Firestone, el sindicato dominado por la empresa aceptó un recorte salarial del 25 por ciento, multitareas y una semana de siete días para tratar de evitar un cierre.

La mayoría de los sindicatos en México son sindicatos solo de nombre, organismos laborales dependientes del gobierno cuyas funciones son recaudar y controlar a los trabajadores.

Pero la planta de Continental tuvo una historia diferente. Los trabajadores habían tenido un sindicato “rojo” independiente desde 1935, SNRTE (Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores de Euzkadi). La historia del sindicato cuenta con orgullo la historia de cuando Fidel Velásquez, alto funcionario del sindicato gubernamental corrupto CTM, vino a su asamblea en 1959 y pidió que se pusiera en sus manos la negociación del convenio. Velásquez fue expulsado de la asamblea “por ser indigno de estar presente en una asamblea de trabajadores”.

Los trabajadores eligieron a Chuy Torres y Red Slate, que trabajaron en una plataforma de resistencia a las demandas de Continental, en 2001. La gerencia había comenzado a recortar costos de manera agresiva desde el momento en que compró la empresa, cerrando una fábrica hermana en otro estado. Trajo a un gerente con experiencia en la lucha contra los sindicatos, José Neto Carvalho, que había obtenido enormes concesiones en Portugal.

Entonces Carvalho envió cartas a todos los hogares de los trabajadores, exigiendo una producción de siete días y una jornada de 12 horas, recortes salariales, aceleración, recortes de empleo, no más antigüedad para las ofertas de trabajo y el fin de las camionetas pagadas por la empresa que traían a los trabajadores a la planta.

Salvador (Chava) Hernández, ahora jubilado, recordó: “Veíamos una cosa y la empresa decía lo contrario. Fabricamos 14.000 neumáticos al día. La empresa dijo que no vendían, que iban a la quiebra. Los supervisores nos amenazaron durante meses”.

Pero los trabajadores se negaron a modificar su contrato. No creían en las afirmaciones de la gerencia de que su planta era improductiva y eran muy conscientes de la diferencia entre sus propios salarios y los de los trabajadores de Continental en Alemania y Estados Unidos: un trabajador de Continental mexicano ganaba alrededor de 25 \$ al día.

El shock del cierre

La noche del 16 de diciembre de 2001, los trabajadores de la sala de calderas llegaron a la planta y encontraron un aviso en la puerta principal: Cerrado.

Llamaron a los representantes sindicales de inmediato. Se montaron guardias para evitar que la gerencia sacara la maquinaria. Dos días después se convocó a una asamblea a la que asistieron casi todos los 940 trabajadores.

La gerencia instó a los trabajadores a tomar su indemnización por despido adeudado legalmente y volver a casa. De hecho, los gerentes tenían o reclutaron a un grupo de trabajadores para tratar de convencer a otros, prometiendo una recompensa de 10.000 pesos (1.100 \$) por cada trabajador que persuadieran. A este grupo se le prometió que serían recontratados prioritariamente cuando la planta volviera a abrir.

Cuando se conoció este esquema, confirmó la sospecha de los representantes sindicales de que el plan real de Continental

era deshacerse del sindicato, no de la fábrica. Era el único sindicato independiente de la industria.

Los trabajadores votaron a favor de luchar contra el cierre, que consideraron ilegal porque la gerencia había actuado de repente, sin seguir los procedimientos de notificación legal y sin probar que la empresa no era rentable. Torres dijo más tarde que realmente no veía forma de que los ejecutivos de Continental cambiaran de opinión, pero estaba decidido a “darles una pelea como nunca lo habían imaginado”.

El sindicato inició oficialmente su huelga, contra una fábrica cerrada, un mes después. Cuatro mil trabajadores, familias y simpatizantes marcharon casi seis millas desde el ayuntamiento de El Salto para colgar pancartas rojas y negras en las puertas de la planta. Según la ley mexicana, estas pancartas representan una huelga y no se permite sacar nada de una planta durante una huelga (Esta es una de las varias áreas donde la legislación laboral mexicana es superior a la de Estados Unidos). Un día antes, Continental había traído cien remolques a la propiedad, con la intención de sacar las 70.000 llantas del interior. Colocó guardias armados en el techo, grabando video. En media hora, 200 trabajadores y familiares llegaron a la planta para bloquear el paso.

El lema que pintaron en una pancarta en el exterior era “No se va ni un solo tornillo”. La demanda de los trabajadores era simple: que Continental cumpliera su contrato y mantuviera la planta en funcionamiento.

¡A la capital!

Una semana después, los trabajadores comenzaron una marcha hacia la capital nacional Ciudad de México, tomando una ruta semicircular en la que recorrieron casi 500 millas (usaron camionetas y autobuses la mayor parte del camino) a través de siete estados hasta lugares donde otros trabajadores estaban en lucha. Mantuvieron grandes reuniones públicas con trabajadores de GM, Nissan, General Tire y Volkswagen, pero la más emotiva fue con campesinos en San Salvador Atenco, quienes estaban combatiendo (exitosamente) el intento del gobierno de construir un aeropuerto en sus tierras ancestrales. El líder campesino presentó a Torres con un machete como muestra de amistad.

En el camino, el sindicato aseguró una reunión con el presidente Vicente Fox, un empresario cuya elección en el 2000 había alentado a las corporaciones a tomar medidas enérgicas contra sus empleados. Los trabajadores exigieron que el gobierno nacionalizara la fábrica de neumáticos, como había hecho recientemente con un ingenio azucarero. Fox se ofreció a ayudar a los trabajadores a obtener un buen acuerdo financiero con el cierre, pero Torres respondió que lo que querían eran sus trabajos.

Cuando los trabajadores llegaron a la Ciudad de México, tenían 10 000 partidarios detrás de ellos en el histórico Zócalo, la plaza principal.

Solidaridad internacional

Mientras tanto, los líderes sindicales buscaron ayuda en el exterior. El local de los Continental Steelworkers en Charlotte, Carolina del Norte, no ofreció ayuda; la gerencia amenazó a los sindicalistas locales que si lo hacían, su planta cerraría. Cerró de todos modos.

Torres dijo que la única ayuda que SNRTE recibió del sindicato estadounidense fue un eslogan: que el sindicato duraría “un día más” que Continental. En los Estados Unidos, este lema ha sido un sustituto de la estrategia, pero en México resonó entre los trabajadores que venían a la empresa desde muchos ángulos.

Lo mismo sucedió con el sindicato de trabajadores químicos alemán que representaba a los trabajadores de Continental. El jefe del comité de empresa de Continental dijo abiertamente que el término “solidaridad internacional” no significaba nada para él.

Pero el SNRTE hizo otras conexiones. Torres pertenecía a un grupo de socialistas con vínculos en Europa. Esas conexiones ayudaron a SNRTE a reunirse con líderes sindicales en plantas de neumáticos y otras fábricas en España. El Parlamento Europeo aprobó una resolución denunciando las violaciones de derechos humanos en México por parte de multinacionales europeas, citando a Continental. La pequeña delegación del sindicato consiguió una reunión de cinco minutos con el

director ejecutivo de Continental, Manfred Wennemer, en la que Wennemer culpó a Torres por el cierre de la fábrica.

La acción más emocionante fue la visita de los trabajadores a la junta de accionistas de Continental. A través de sus conexiones, se reunieron con un grupo denominado “Accionistas Críticos”, que se organizó para protestar contra las violaciones de los derechos laborales y ambientales en varias empresas. Ese grupo entregó sus pases a la reunión a la delegación mexicana.

“Me temblaban las piernas cuando me levanté para hablar frente a más de mil accionistas”, dijo Torres. Pero luego Wennemer dijo que les diría a sus subordinados en México que negociaran con el sindicato. “Sin embargo, tiene que ser en México”, dijo Wennemer, según Torres. “No hay razón para que ustedes vengan aquí.”

Sin embargo, esas negociaciones fueron infructuosas y al año siguiente los mexicanos estaban de regreso en Alemania. En esta ocasión, Wennemer se sintió obligado a justificar el cierre de El Salto a los accionistas, calificando a los trabajadores de improductivos, con un 25 por ciento de absentismo. Torres lo refutó con cifras que mostraban que la planta era la planta de llantas más productiva del país.

El ministro de Economía alemán convocó a una reunión entre las dos partes, incluido el embajador de México. Un distinguido abogado mexicano explicó cómo el cierre no había cumplido con la ley. El encuentro elevó el perfil internacional del

conflicto y demostró que las autoridades mexicanas no estaban encontrando una solución.

En el tercer viaje de los trabajadores a Europa, en 2004, los acompañaron un congresista mexicano y un especialista en derecho laboral universitario.

El congresista pidió a los accionistas una solución negociada y que Continental respetase la legislación laboral mexicana. Su presencia mostró a los accionistas que los círculos políticos de México estaban prestando atención.

Dio la casualidad de que el canciller alemán Gerhard Schroeder y Fox pronto se reunirían en una cumbre bienal entre Europa y América Latina, en Guadalajara, en el patio trasero de los trabajadores.

Los mexicanos y sus aliados en grupos europeos de derechos humanos (aún sin el apoyo de los sindicatos) también estaban haciendo ruido sobre el patrocinio de Continental de la próxima Copa del Mundo en Alemania. En el centro de Hannover, sitio de la sede de Continental, la compañía había construido un gran monumento con el símbolo de la Copa del Mundo.

La campaña prometía “juego limpio” en El Salto, mientras los trabajadores intentarían agitar en la Copa del Mundo si no se resolvía el conflicto. Algunos miembros de la delegación de SNRTE de 2004 repartieron volantes mientras que otros patearon un balón de fútbol alrededor del monumento.

La democracia se extiende

Mientras tanto, los trabajadores de la otra fábrica de Continental en México estaban inquietos. Esta planta de General Tire estaba en San Luis de Potosí, a 200 millas de El Salto.

Habían tenido un sindicato amarillo de empresa que estaba complacido de cooperar con el plan de la dirección para deshacerse del convenio pactado. En una dramática reunión en abril de 2003, los trabajadores eliminaron a sus antiguos delegados y votaron por un sindicalista que había sido despedido por resistirse al acuerdo secreto.

En julio, mientras Wennemer visitaba México, los 252 trabajadores de San Luis de Potosí hicieron huelga. Wennemer regañó al gobierno local por no usar la policía contra ellos. Pero despidió a su director general en México.

Y en enero de 2004, dos años después de la huelga de El Salto, el gobierno finalmente declaró legal la huelga, lo que hizo que Continental fuera responsable de dos años de salarios atrasados (otra faceta de la ley mexicana), una cifra que solo aumentaría cuanto más durara la huelga.

“Estimamos que la planta tenía un valor de 80 millones de dólares”, dijo Torres. Y el pago atrasado fue de 40 millones. Esto se sumaba a la indemnización adeudada por despido, que 587 trabajadores se habían negado a aceptar todavía.

La marea cambia a favor de los trabajadores

Los trabajadores que se mantuvieron firmes en la lucha soportaron muchas dificultades. Algunos se fueron a trabajar a Estados Unidos. Otras familias dependían de los bajos salarios de sus esposas. Los propietarios de las fábricas locales mantenían una lista negra; incluso los familiares de los huelguistas no podían conseguir trabajo. Un grupo de esposas fue fundamental para la lucha y pasó mucho tiempo localizando diferentes agencias y organizaciones que donaron alimentos.

Conchita Vélez de Hernández encabezó el grupo de mujeres. Su familia era la columna vertebral de quienes montaban guardia en la puerta de la fábrica. Cuando la policía amenazó a sus maridos, dice, las esposas acudieron a la Secretaría de Seguridad Pública para protestar. E invadieron una reunión de propietarios de fábricas para exigir el fin de la lista negra.

Uno de los momentos más dramáticos de la huelga se produjo en abril de 2002, durante la Semana Santa, cuando la dirección hizo uno de los dos intentos de provocar violencia al intentar sacar los neumáticos y la maquinaria de la planta. Los campesinos de Atenco, que estaban protegiendo sus propios límites, aconsejaron sacos de arena. Los campesinos viajaron a El Salto para ayudar a los trabajadores, esposas y simpatizantes a llenar las bolsas con tierra y apilarlas frente a la planta.

Durante toda la duración del conflicto, no se retiró ni un solo tornillo.

Alemania es el segundo mayor inversor en México, después de Estados Unidos. Torres cree que, aunque el gobierno mexicano nunca fue un aliado de su lucha, los políticos de alto nivel de ambos lados llegaron a considerar que era mejor acabar de una vez.

En agosto de 2004, menos de tres meses después de que el presidente Fox y el canciller Schroeder se reunieran en Guadalajara, Wennemer hizo una oferta seria. La empresa vendería a los trabajadores la mitad de la participación en la planta a cambio del pago atrasado que la empresa les debía.

Los trabajadores seguirían recibiendo su indemnización por despido, que totalizó 230 millones de pesos para 587 trabajadores, unos 34.000 dólares cada uno. La planta reabriría en sociedad con una empresa mexicana, un distribuidor de neumáticos, que compraría la otra mitad a Continental. Todos los trabajadores que se habían resistido recuperarían sus trabajos.

Torres pareció tan asombrado por la victoria como cualquiera. “El legado más importante de esta lucha es demostrarle a los trabajadores cómo un pequeño sindicato puede vencer a una transnacional de la capacidad de Continental”, dijo.

El 18 de febrero de 2005, la planta, ahora denominada Corporation de Occidente, o Western Corp., fue entregada formalmente a sus nuevos propietarios.

“Apostaban a que fracasaríamos”, dijo Torres

Un neumático no es solo un trozo de goma con un agujero. Aprendí esto cuando visité la cooperativa de trabajadores que fabrica las llantas Cooper en El Salto, México. Una llanta es un producto sofisticado que surge a través de una cadena de procesos químicos, muchos golpes de máquinas y aún así la intervención de manos humanas.

El inspector ferviente señaló que cada neumático se prueba en condiciones similares a las de la carretera: “Si no, podría matar gente”, señaló. Y, agregó, “mantener los neumáticos seguros salva nuestros trabajos”.

Estos trabajadores se quedaron sin trabajo durante tres años durante la huelga que finalmente llevó a la fundación de su cooperativa. Han estado fabricando neumáticos como trabajadores–propietarios desde 2005, vendiéndolos en los Estados Unidos y México y ahora se pagan a sí mismos el salario más alto en la industria de los neumáticos.

¿Cómo funciona una cooperativa de trabajadores con 1.050 miembros? Ya es bastante difícil que la gestión de los trabajadores tenga éxito bajo cualquier tamaño, porque cualquier empresa que compite en un mercado está sujeta a la misma carrera de recortes de costes que una empresa capitalista. Los trabajadores se ven impulsados a apretarse el cinturón y recortar su propio salario o se ven obligados a cerrar el negocio. Y la mayoría de los trabajadores aquí solo tienen una educación secundaria.

Sin embargo, la cooperativa Tradoc, (Trabajadores democráticos de Occidente) está prosperando. Trabajadores–gestores entusiastas han modernizado su planta, aumentando la productividad y la calidad a través de su trabajo cualificado. Esos factores, junto con sus precios ciertamente bajos, les han permitido competir en el mercado mundial.

Propietarios reacios

Los huelguistas de Continental Tire, 2002–2005, fueron propietarios reacios. Cuando lucharon contra el cierre de su planta por parte de la multinacional alemana, solo pidieron todo el tiempo a los propietarios que la reabrieran. Al final, Continental se rindió y ofreció vender la mitad de la empresa a los trabajadores y la otra mitad a su ex distribuidor, Llanti Systems.

“Le dijimos a Llanti Systems:” Comprad la planta. Simplemente contrátennos como trabajadores y paguen lo que nos atrasan”, recuerda Jesús Torres, quien era entonces presidente del sindicato en huelga. “Para nosotros ese hubiera sido el mayor triunfo, reabrir la planta y mantener nuestro trabajo”. Pero ellos dijeron: “No, no, no estamos locos, sabemos de lo que son capaces. Nos interesan ustedes como propietarios, no como empleados”. Entonces dijimos, “¿No hay otra salida? Bueno, tenemos que intentarlo”.

De los 940 trabajadores en nómina cuando Continental cerró la planta en diciembre de 2001, quedaban 587. El resto,

impulsado por las dificultades, había aceptado su indemnización.

El primero en ingresar a la planta como propietario, en febrero de 2005, fue Salvador “Chava” Hernández, quien había sido un incondicional manteniendo a los guardias del sindicato en la puerta de la fábrica cerrada. Tenía la piel de gallina. “Era nuestra planta”, me dijo. “Llevábamos tres años sin nada”.

No había luz en el interior, por lo que los trabajadores limpiaron las telarañas en la oscuridad, chocando con máquinas y evitando serpientes y búhos. “Era un cadáver cuando entramos”, dijo Torres.

En cinco meses, las máquinas volvieron a funcionar y habían fabricado su primer neumático. “Todos corrimos para tomarnos una foto con el primer neumático”, dijo Hernández. “Era un neumático de camión. Y mucha, mucha gente trabajó en ese neumático, cada uno haciendo un pequeño ajuste”.

Un problema que tenía la nueva cooperativa al principio era que había demasiados trabajadores en nómina, pero no estaban dispuestos a despedir a nadie.

También tenían una nueva marca, Pneustone, que el público no conocía.

Y la ayuda que Continental prometió nunca llegó. La compañía había dicho que vendería las materias primas de la cooperativa, compraría la producción de la planta y brindaría asesoramiento técnico durante un año. Ninguna de

estas promesas se cumplió. Continental dijo que podría conseguir neumáticos más baratos en otros lugares. “Cuando la empresa firmó los papeles”, dijo Rosendo Castillo, quien ahora está en el consejo de la cooperativa, dijeron: “Aquí está el cadáver”. Durante los primeros cuatro años, la nueva empresa estuvo en números rojos. Los primeros neumáticos se vendieron muy baratos, con pérdidas, a Walmart. Los líderes de las cooperativas sabían que la clave para sobrevivir era obtener materias primas a buen precio, algo que solo una gran empresa podía garantizar, y que sería mucho mejor si esa empresa distribuyera neumáticos en los EE. UU. Entonces buscaron un nuevo socio internacional.

En 2008, Cooper Tire, con sede en Findlay, Ohio, inyectó nuevo capital; ahora posee el 58 por ciento de la Corporación de Occidente (COOCSA), o Western Corp., y la cooperativa Tradoc posee el 42 por ciento. Cooper tiene cuatro miembros en la junta directiva y Tradoc tres; sólo se pueden tomar decisiones si el 75 por ciento está de acuerdo, o el 100 por ciento para decisiones importantes como inversiones o ventas de activos. En otras palabras, todas las decisiones de gestión se toman por acuerdo entre las dos entidades. [...]

Construyendo un neumático

Hacer una llanta es como hacer un pastel, dice Torres. Hay recetas, es realmente un proceso químico. Los diferentes tipos de caucho provienen de Malasia, Guatemala y Singapur, y se utilizan para diferentes partes del neumático: sus paredes, su

piso. Uno de los tres mezcladores de Tradoc, donde se agrega petróleo al caucho fundido, es el más grande del mundo, con dos pisos de altura.

El acero, como en los “neumáticos con cinturón de acero”, y el nailon se enroscan en una etapa posterior. En cada paso, los técnicos prueban la consistencia de la mezcla de caucho y, al final, una serie de controles de calidad dan como resultado una tasa de descarte de 1,8–2,5 por ciento. El número de diferentes máquinas computarizadas que amasan o trituran el caucho es asombroso; la planta El Salto tiene más de media milla de largo. Y cerca del final, los trabajadores y las máquinas trabajan en conjunto para unir las piezas. Observé a un constructor de llantas de alto nivel llamado Carlos, quien debido a su productividad gana uno de los salarios más altos de la planta, moviéndose rápidamente para colocar y tirar de las tiras de goma, una llanta a la vez. Esto sucede 15.000 veces al día, 4,2 millones de veces en 2012.

“El hecho de que un neumático sea tan difícil de fabricar hace que sea aún más impresionante que estemos haciendo esto”, dice Torres inmodestamente. En todo el mundo, la fabricación de neumáticos se moderniza continuamente y requiere una inversión constante.

Los nuevos miembros más jóvenes, los “cinturones negros”, están buscando cómo mejorar el proceso. Por ejemplo, les gustaría reducir el uso de solventes y así evitar problemas en la piel. Descubrirán un nuevo producto y cuánto costaría para toda la planta, y harán una presentación.

Estructura de la cooperativa, pago, beneficios y condiciones

Uno de las medidas más sencillas del nuevo sistema fue eliminar a los capataces. “Fue fácil”, dijo Torres. “Cada trabajador conoce su trabajo, conoce su cuota. No hay que vigilarlos”. Las cuotas se establecen lo suficientemente bajas como para que muchos trabajadores terminen un par de horas antes y se relajen hasta la hora. Tampoco hay un departamento de limpieza; los trabajadores limpian sus propias áreas.

Tradoc celebra una asamblea general sólo dos veces al año, pero esa asamblea tiene poder de veto sobre decisiones importantes como la venta de activos, la realización de inversiones y la compra de maquinaria. Por ejemplo, la asociación con Cooper fue aprobada por la asamblea después de un intenso debate, pero con una abrumadora mayoría. Las reuniones cuentan con mucho debate, con propuestas exitosas provenientes de la sala, no solo de los líderes.

En el funcionamiento diario de la planta, el Consejo de Administración toma decisiones. El gerente de planta que no es parte de la cooperativa supervisa todas las actividades, pero por supuesto no puede tomar decisiones unilaterales. “Y hasta ahora, esta estructura ha funcionado casi perfectamente”, dice Torres.

Tradoc tiene su propio Consejo de Vigilancia interno para revisar las finanzas de la cooperativa; sus miembros también pueden participar en las decisiones de la empresa que puedan afectarles. Tradoc está a cargo en realidad, de la contratación

de nuevos miembros de la cooperativa. Un miembro puede ser despedido solo con el consentimiento de Tradoc, lo que ha sucedido solo en casos extremos.

La empresa conjunta no ha dudado en volver a contratar a técnicos, ingenieros y especialistas que trabajaron durante años bajo la antigua dirección. Uno es Gonzalo, químico que dirige el laboratorio; fue despedido sumariamente cuando la planta cerró. Regresó para capacitar a los trabajadores de producción en sus habilidades. Al principio trabajó sin sueldo. Los miembros de Tradoc ascendieron desde el taller para asumir trabajos técnicos, aprendieron rápido, dice, y ahora le gusta más su trabajo porque puede trabajar de manera cooperativa con personas que tienen los ojos puestos en el futuro. “Antes, tenías que hacer denuncias, dar castigos”, me dijo. “Ahora que tienen responsabilidades saben trabajar”.

No hay duda de que en la cooperativa se trata de “trabajar de forma más inteligente”. Para una persona que predicó los males del “concepto de equipo” y los programas de cooperación entre los trabajadores y la administración durante las décadas de 1980 y 1990, fue discordante ver resucitar algunos lemas familiares bajo una estructura de propiedad diferente.

Los sellos distintivos del concepto de equipo son que los trabajadores que se controlan entre sí y compiten para presentar sugerencias que ahorren trabajo. Cuando un trabajador dijo: “Ahora nos presionamos unos a otros para hacerlo bien la primera vez”, tuve que recordarme a mí mismo dónde estaba. Pero, ¿no es esto lo que los miembros del

equipo deberían hacer cuando estamos todos del mismo lado? ¿No es el número de lados, uno o dos, el meollo del asunto?

El concepto de equipo pretende producir dignidad y satisfacción del trabajador al solicitar las ideas de los demás para aumentar las ganancias de otra persona. Cuando las ganancias son tuyas y de tus compañeros de trabajo, la dignidad y la satisfacción pueden ser reales. Un aviso en el tablón de anuncios felicitó al miembro Joel Gutiérrez por su idea de salvar de 12 a 25 neumáticos por día del montón de chatarra. Es el tipo de aviso que se puede encontrar en cualquier planta, pero aquí con diferentes implicaciones. “Aunque algunas consignas pueden ser similares”, dijo Torres, “en Tradoc prevalece el interés colectivo”. Y el colectivo puede elegir cómo equilibrar sus diferentes objetivos: tenga en cuenta los altos salarios y los tiempos de abandono temprano del trabajo. Rosendo Castillo, del consejo de la cooperativa, dice que los miembros quieren invertir en maquinaria que los salvará del trabajo pesado, aunque esto supuestamente significa menos trabajo en el corto plazo.

Aunque es arriesgado extrapolar demasiado de un recorrido por la planta, encontré una atmósfera en la que nadie parecía estresado, una sensación de competencia tranquila (aunque Carlos se movía muy rápido). Le pregunté a un técnico de laboratorio si sentía presión por parte de sus compañeros de trabajo para ignorar los malos resultados de las pruebas a fin de mantener la producción en movimiento. “Nunca los ignoro, dijo solemnemente, la responsabilidad es una forma de vida”.

La cooperativa comenzó con salarios iguales para todos. Esto generó problemas, explicó Torres. “Algunos dijeron, ¿Por qué debería trabajar más duro si al final del día, gano el mismo dinero que el resto de ustedes?” Cuando los líderes propusieron una escala salarial, la asamblea fue casi unánime a favor.

Ahora hay siete niveles de pago, de 2 a 8, con la mayoría de los trabajadores en las tasas de 5–7 y muy pocos en la 2 o 3, que son principalmente para los nuevos empleados. Bajo el precepto “igual trabajo, igual salario”, el salario mensual se determina por el esfuerzo físico y la responsabilidad. La antigüedad determina quién puede transferirse a un trabajo vacante. En el corredor industrial donde se encuentra la planta, el salario habitual de las fábricas es de 192 \$ a 384 \$ al mes. En Tradoc, los trabajadores en el rango de 5–7 ganan 240–375 \$ a la semana. Los miembros del consejo de administración obtienen lo mismo que el trabajador mejor pagado.

La planta opera bajo el mismo horario que antes de la huelga: tres turnos de ocho horas por día (incluido el almuerzo), seis días a la semana. Los trabajadores rotan en turnos de mañana, tarde y medianoche cada tres semanas, y sus días libres también rotan, un día diferente cada semana. Esto significa que solo están fuera dos días seguidos un tercio del tiempo (el domingo siempre es gratis). Hay algunas horas extraordinarias, aunque el objetivo es reducirlas. En los Estados Unidos, los turnos rotativos se consideran brutales, duros para el cuerpo y la vida familiar. En las plantas, los que tienen mayor antigüedad tienen el privilegio de elegir su turno, y los que tienen menos sufren en la medianoche

hasta que llevan un tiempo allí. Pero Torres señala que los socios estaban acostumbrados al sistema de rotación y agrega: “Nos regimos por el criterio de igual esfuerzo”.

En México, la pensión del gobierno (equivalente a la Seguridad Social) se basa en lo que el empleador paga al sistema en los últimos cinco años trabajados. De modo que Tradoc paga a una tasa muy alta durante esos cinco años, lo suficiente para asegurar a cada trabajador 1.500 \$ al mes, casi la misma paga que cuando estaban trabajando. Es una jubilación muy digna, la más alta del Estado.

Se nota la ausencia de cascos y tapones para los oídos en la planta. Castillo dijo: “Los responsables han tratado de decírselo, pero los trabajadores dicen: “Puedo cuidarme solo, soy el dueño”.

Como era de esperar, a todos en El Salto les gustaría trabajar en la fábrica de neumáticos. Los trabajadores han mantenido las vacantes para los miembros de su familia, incluidas 25 hijas, las primeras mujeres en trabajar en la producción. Hablé con una madre joven con dos hijos, cuyo padre consiguió que entrase. Ella planea quedarse, dijo.

El futuro

Cuando los trabajadores tomaron el relevo, dice Torres, “sabíamos cómo hacer neumáticos, pero no sabíamos cómo venderlos”. Por eso necesitaban un socio capitalista, y

todavía lo necesitan. Pero saben que su arreglo con Cooper puede no durar para siempre.

Cooper es una empresa anti-trabajadores, después de todo. En 2012 bloqueó a su fuerza laboral estadounidense, buscando profundas concesiones, con éxito. Cuando Tradoc envió una carta de solidaridad a la unidad (que nunca fue respondida), la gerencia estaba furiosa.

“Tenemos una historia que no vamos a negar”, dijo Torres a los gerentes de Cooper”. “Nuestra clase es la clase trabajadora. Somos una cooperativa. Tenemos la planta. Vosotros solamente vendéis los neumáticos”.

Pero mirando hacia el futuro, Tradoc quiere estar preparada para hacerse cargo de las ventas, que es donde se encuentran las mayores ganancias. La próxima asamblea general escuchará un plan para abrir una tienda de llantas en la cercana gran ciudad de Guadalajara.

La compañía aún tiene que pagar dividendos a los accionistas-trabajadores, pero puede ser posible por primera vez este año. Sin embargo, si hay ganancias, los líderes aconsejarán que algunas se retengan para invertir.

En las elecciones para el consejo cooperativo que se celebran cada tres años, siempre hay una lista de derechas y otra de izquierdas. La de derecha sostiene que los miembros deben prestar atención solo a su propia planta e ignorar las luchas de los trabajadores en otros lugares. También quieren un salario más alto para los puestos de “dirección” que buscan. Hasta ahora, la izquierda ha ganado cómodamente.

Entonces la cooperativa tiene un fondo de solidaridad, un par de dólares a la semana del sueldo de cada trabajador. Publican un periódico bimestral de noticias laborales, la *Gaceta de los trabajadores*, y ayudan a apoyar a los trabajadores eléctricos y mineros encerrados, a los trabajadores de Honda despedidos, a los campesinos encarcelados por defender su tierra. “Esto no es nuevo”, explica Torres. “Nuestro sindicato siempre fue muy solidario. Enviamos dinero a la Guerra Civil Española en los años treinta.

¿Qué podemos aprender de esta historia en curso? Hizo una gran diferencia que los líderes de esta lucha fueran socialistas, poco dispuestos a vender o ceder, y tuvieran presente la necesidad de buscar aliados internacionales. Sin ese liderazgo, el cierre de planta habría terminado como tantos otros. Pero una vez que comenzó la cooperativa, es un placer relatar que los trabajadores realmente manejan una fábrica mejor que los patronos. No solo controlan la planta, sin necesidad de supervisores, sino que también presentan ideas para mejorar la producción en ambos sentidos: más y mejores neumáticos, menos residuos, pero también menos trabajo agotador.

Con aproximadamente la misma fuerza laboral, la planta produce un 50 por ciento más de neumáticos que antes de cerrar. Los trabajadores han introducido nueva maquinaria para impulsar la productividad, pero también lo hacen la mayoría de las empresas. Las corporaciones también utilizan la aceleración, los recortes salariales y un desprecio total por el medio ambiente. Esas cosas no suceden en esta cooperativa.

Los representantes de Tradoc están ahora en contacto con los trabajadores de neumáticos de Goodyear en Francia que también quieren hacerse cargo de su planta como cooperativa. Están ansiosos por compartir sus ideas y experiencias con cualquier trabajador que esté considerando la cooperativa como una opción en un conflicto industrial.

Abril de 2013

Fuente:

Labor Notes, 2 de abril de 2013, www.labornotes.org.

LA COMUNA DE OAXACA

Richard Neville

A partir de la historia de una movilización de maestros mexicanos por demandas salariales que, ante la represión, se transforma en una vasta movilización popular y conduce a una Asamblea Popular del Pueblo. Integrado por 260 delegados, este movimiento se convirtió en un “parlamento popular” que autogestionó el espacio público durante unos meses. Un movimiento de movimientos cuyos estallidos continúan hasta hoy. De los soviets en la Sierra Madre...

El estado de Oaxaca está ubicado al sur de México, al suroeste del Istmo de Tehuantepec, en las montañas y valles de la Sierra Madre del Sur y Sierra Madre Oriental. Está rodeado por Guerrero al oeste y Chiapas al este. Estos tres estados tienen las densidades más altas de comunidades indígenas y son los más pobres de México. El estado de Oaxaca tiene solo 3,5 millones de habitantes, casi la mitad de los cuales pertenecen a pueblos indígenas zapotecas o mixtecos. Cuenta con una amplia variedad de recursos naturales (minerales, bosques vírgenes, agua, etc.) y áreas geográficas que permiten

el desarrollo de actividades productivas y turísticas. Pero los indicadores sociales revelan un nivel de pobreza muy alto (83% de la población por debajo de la línea de pobreza), una tasa de analfabetismo del 21,5%, desnutrición significativa y niveles muy altos de inseguridad. El envío de divisas por parte de los emigrantes constituye la principal fuente de ingresos de la población (Esteva, 2008).

El saqueo colonial y el modelo de desarrollo económico impuesto la condenó a ser solo un productor de materias primas, esto es lo que explica la pobreza crónica de una mayoría de la población y la importante emigración. Como el resto de México, pero de forma amplificadas, Oaxaca es víctima de la globalización capitalista y financiera, de las políticas neoliberales que destruyen la agricultura y los recursos naturales.

A nivel político, Oaxaca todavía está gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI)⁸⁰ que se apoya en redes clientelistas profundamente arraigadas en la sociedad, lo que se traduce concretamente en prácticas altamente desarrolladas de cooptación, represión y corrupción. En las últimas décadas, estos métodos han aniquilado todas las perspectivas alternativas. Para Beas Torres, “la sociedad colonial no desapareció en Oaxaca; ni la guerra de independencia, ni la revolución lograron modificar las estructuras de control colonial y el poder local se fundamenta

⁸⁰ El PRI se estableció en 1929. Ocupó el poder durante setenta años al nivel nacional. Su candidato presidencial fue derrotado por primera vez en 2000. Continúa administrando la mayoría de los treinta y dos estados del país y ha logrado regresar a la vanguardia de la escena política nacional al ganar las elecciones legislativas de Julio de 2009.

en los caciques aglutinados en el PRI” (2006: 235). Los sucesivos gobiernos han combinado el paternalismo populista y la tiranía bárbara. En alianza con la oligarquía local, utilizaron el terror para violar los derechos ciudadanos más básicos. Estos gobiernos han procesado a periodistas críticos, asesinado, amenazado o desalojado brutalmente a propietarios indígenas de tierras o recursos naturales. Miles de indígenas han cumplido o siguen cumpliendo largas penas de prisión. La votación es una práctica bien establecida y existe una gran presión sobre los votantes. Los funcionarios públicos naturalmente se convierten en representantes del PRI y utilizan de manera descarada e ilegal los subsidios públicos. En el Estado de Oaxaca, la farsa electoral adquiere todas estas dimensiones y es una demostración de simulación, ilegalidad y desprecio a la voluntad ciudadana (Beas Torres, 2006: 236).

En las últimas décadas ha crecido la movilización ciudadana contra las administraciones del PRI y para exigir la destitución de varios gobernadores, quienes se caracterizaron por su arrogancia, corrupción e incompetencia. En las elecciones de 2004, el gobernador, Ulises Ruiz Ortiz, se distinguió por malgastar millones de pesos y actuar ilegalmente. La abstención ascendió al 60%. Para ganar su legitimidad, como todo nuevo gobernador, comenzó su mandato reprimiendo a sus oponentes. Persiguió a su principal opositor político y ordenó el encarcelamiento de decenas de indígenas que protestaron contra el nombramiento de autoridades locales desafiando las convenciones⁸¹. Durante los primeros dieciocho meses de su mandato se han registrado seiscientos presos

81 La gran mayoría de los municipios de Oaxaca eligen a su alcalde ya las autoridades en asamblea general, de acuerdo con los “modos y costumbres” indígenas.

políticos y 35 muertos como consecuencia de conflictos políticos y agrarios.

Pero más de treinta años de acumulación de fuerzas, luchas, resistencias y conquistas de municipios han permitido constituir un tejido asociativo denso y autónomo de instituciones y partidos, integrado por pueblos indígenas, coordinaciones campesinas, gremios, asociaciones ambientales, coaliciones de base y artesanos. Las relaciones entre la administración y la sociedad civil han cambiado radicalmente y la represión no ha provocado la desmovilización social, al contrario. El poder puede haber avivado la fantasía de las guerrillas en un intento por deslegitimar esta movilización, ninguna organización armada o partido político es capaz de estimular una autoorganización ciudadana y autónoma como esa. Estos componentes sociales también han podido desarrollar importantes relaciones internacionales para evitar el aislamiento. El movimiento social, que se forjó durante este período, expresa el rechazo a la opresión, la dominación imperial y las terribles condiciones de vida de los indígenas y campesinos. También reivindica la igualdad entre las minorías indígenas y los blancos y mestizos (Almeyra, 2007).

Entre estos actores, “la sección 22⁸² del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se destaca como la organización más poderosa y popular. Tiene una tradición antiburocrática, un funcionamiento democrático y horizontal y

82 La sección 22 corresponde al territorio del Estado de Oaxaca. SNTE es el único sindicato reconocido como representante en todo el país. En diciembre de 2006, el liderazgo nacional del SNTE priista decidió crear la sección 59 en un intento de contrarrestar la influencia de la sección 22.

una larga experiencia de luchas. En 1981, un sector de maestros de izquierda ganó las elecciones internas del sindicato, hasta entonces controlado por el PRI. Desde entonces, la Sección 22 ha adoptado métodos de toma de decisiones más participativos, utilizando regularmente reuniones generales. Su fuerte cohesión les permite resistir todos los intentos de división ejercidos y orquestados por las autoridades. Además, los trabajadores de la educación tienen “una larga tradición de relaciones con organizaciones campesinas e indígenas. En una sociedad en la que el mundo rural tiene tanto peso, los maestros a menudo funcionan como intelectuales orgánicos de la comunidad. Su conocimiento de las complejidades de las instituciones y del español les lleva muy a menudo a resolver cuestiones administrativas en los pueblos” (Hernández Navarro, 2006: 72). Trabajan en condiciones precarias con muy pocos recursos y materiales educativos. Con frecuencia, sus alumnos llegan a la escuela con hambre y se ven obligados a abandonar el aula para ayudar a sus padres con el trabajo del campo. En estas condiciones, los docentes se han identificado constantemente con el destino de las comunidades, de donde ellos y en su mayoría provienen.

“Cuando en el otoño llegó la primavera”

La movilización anual de la sección 22 del sindicato de maestros, organizada el 5 de mayo de 2006, para exigir aumentos salariales y mejores condiciones laborales, activará el “Municipio de Oaxaca”. Ese día, los maestros fueron arrestados durante una manifestación. El 22 de mayo, ante la

negativa del gobernador a negociar, el sindicato decidió instalar un campamento en la capital y piquetes bloqueando los principales accesos. Poco a poco, las demandas fueron encontrando cierto eco dentro de una parte de la sociedad. El 14 de junio, luego de más de tres semanas de movilización y ocupación, la policía estatal expulsó violentamente a los piquetes y destruyó las instalaciones de Radio Plantón.

Al día siguiente, los docentes, que hasta ese momento habían estado parcialmente aislados en su lucha, recibieron el apoyo activo y físico de muchos sectores de la población, indignados por la represión. Después de largas horas de enfrentamientos con la policía, el campamento se trasladó al centro histórico de la ciudad. A partir de ese momento, el conflicto fue mucho más allá de la protesta docente y cerca de trescientas cincuenta organizaciones formaron la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO). Allí se encuentran: el Comité de Defensa de los Derechos de los Pueblos (CODEP) Coordinación de Mujeres Oaxaca (COMO), el Frente Popular Revolucionario (FPR), la Liga Mexicana de Derechos Humanos (LIMEDH) Organizaciones Indígenas por los derechos humanos del Estado de Oaxaca (OIHDHO) y partidos políticos como Nueva Alianza, Partido Socialista Obrero (POS), Partido Comunista Mexicano y anarquistas.

Por tanto, la APPO pretende ser un espacio abierto que reúna a colectivos, organizaciones e individuos muy diversos en su componente ideológico y social. Los pueblos indígenas están plenamente integrados en él. La APPO crea un Consejo de Estado provisional, integrado por 260 delegados, que actuará como un “Parlamento Ciudadano” durante los varios meses del

conflicto. La Sección 22 del SNTE, que en un principio fue la columna vertebradora del movimiento estructurante es sólo un componente entre otros, a pesar de su importancia numérica y su capacidad de movilización.

La escala de la movilización demuestra claramente la profunda crisis que existe entre la clase política y la sociedad, también revela el obstinado rechazo del despotismo. El movimiento de desobediencia civil está muy cerca de convertirse en un levantamiento popular y se fortalece cada día. Desde el principio, la demanda de renuncia del gobernador del Estado fue unánime y permitió unir a diferentes capas de la población. La movilización coincide con la campaña electoral general. El 2 de julio, los votantes sancionan al PRI y al PAN y por defecto votan por el PRD aunque la Otra Campaña se niegue a dar instrucciones de voto⁸³.

Entre junio y noviembre de 2006, la APPO se consolida, las acciones colectivas se multiplican: toma de los medios de comunicación, levantamiento de barricadas en varios distritos de la ciudad, extensión territorial del conflicto en la periferia de la ciudad y en otras localidades del estado. El movimiento asume el control de la ciudad y comienza a transformarse en el

83 El Partido Acción Nacional (PAN) fue creado en 1939 como partido demócrata cristiano. Dirige el país desde 2000. En 2006, Felipe Calderón reemplazó a Vicente Fox Quesada. El PAN gobierna ocho de los treinta y dos estados. El Partido Revolucionario Democrático (PRD) fue creado en 1988. Es el resultado de una escisión en el PRI, que tuvo lugar para apoyar la candidatura a las elecciones elección presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas. Dirige seis estados, incluido el Distrito de México. La Otra Campaña fue una iniciativa encabezada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el movimiento neozapatista mexicano con motivo de la elección presidencial. Ella quería escuchar a la "gente de abajo". Desde el 1 de enero de 2006, una marcha cruzó en todo el país para conocer organizaciones sociales.

embrión de un gobierno alternativo. Bloquea la entrada a los hoteles de lujo del centro y al aeropuerto local, obstruye el tráfico rodado e impide el acceso a los edificios públicos y al Congreso del Estado. En una ciudad de menos de un millón de habitantes, las manifestaciones reúnen entre 700.000 y 800.000 personas, pero en ningún momento habrá saqueos de comercios como durante el caracazo. Los pueblos indígenas acuden en masa de sus aldeas y participan activamente en la movilización. Con los excluidos, plenamente identificados en el movimiento, juegan un papel fundamental en la defensa de las barricadas, lo que demuestra el carácter plebeyo de la Municipalidad de Oaxaca.

Durante este período, el movimiento adoptó nuevas formas y lógicas de organización practicando la autogestión en los territorios recuperados. Las asambleas populares se convierten en órganos de los que emana el nuevo mandato político. La participación es masiva y la acción colectiva se expresa en muchos espacios con mucha innovación. Los actores sociales reconstruyen una sociabilidad y redes de vida alternativas hasta alcanzar una forma hegemónica.

La imaginación al poder

La experiencia de la APPO concentra un amplio repertorio de acciones que refleja la diversidad del movimiento y los actores involucrados. Estos se reapropian de las formas clásicas de acción y crean otras nuevas (García Guerreiro y Waren, 2008). Durante los seis meses del conflicto se utilizaron múltiples

modalidades de acción: manifestaciones masivas, campamentos en plazas, ocupación de edificios públicos y centros comerciales, bloqueos de carreteras y calles, cientos de barricadas en varios puntos de la ciudad, marchas hacia la capital del país, piquetes, huelgas de hambre, expresión artística (poesía, frescos, grafitis, música, etc.), tomas de los medios de comunicación (radios comerciales y canales de difusión pública), enfrentamientos y resistencia activa en las calles contra la represión de la policía federal y estatal.

Los insurgentes adoptaron la barricada, una forma clásica de acción del movimiento obrero, utilizada por los principales movimientos revolucionarios desde la revuelta de 1830 en París hasta la rebelión argentina de 2001, incluidas las revoluciones rusas de 1905 y 1917 y la Primavera de Praga. En un inicio, las barricadas se levantaron para defender los espacios conquistados: edificios públicos y medios de comunicación. Nombran a dos representantes en la Asamblea. Son autónomos en su propio territorio, incluso manteniendo su independencia frente a la APPO que coordina las acciones. Realizan sus propias asambleas y, bajo la influencia de los pueblos indígenas, ponen en práctica un nuevo tipo de organización: *mandar obedeciendo*⁸⁴. Durante el mes de agosto se crean cientos de barricadas por toda la ciudad, resultado de la acción espontánea de miles de ciudadanos, de todas las edades y profesiones, y no de ningún comité central. Crean una poderosa red en la que se expresa mucha solidaridad y fraternidad (Beas Torres, 2006: 240).

84 "Manda obedeciendo", una práctica de la autonomía maya, actualizada por el movimiento Zapatista de Chiapas en los "Consejos de Buen Gobierno", Los Caracoles.

Los espacios de comunicación y la creación de medios alternativos también juegan un papel importante en la experiencia de lucha de Oaxaca. No solo para cuestionar el discurso de los medios hegemónicos sino también para organizar. De hecho, los espacios de resistencia se mantienen gracias a las estaciones de radio y la intervención de los colectivos de artistas independientes, que se han convertido en una herramienta fundamental en la lucha de la APPO. Lo mismo ocurre con la producción audiovisual. Desde el principio, videos y producciones independientes revelan las injusticias y abusos de la policía y los paramilitares. Los sitios de Internet y los blogs también se utilizan ampliamente para popularizar el movimiento, entre ellos *Oaxaca Libre*, creado por jóvenes indignados por la falta de expresión mediática.

En México, como en la mayoría de los países, los medios de comunicación se caracterizan por su concentración y su servilismo hacia los poderes establecidos. No es casual, por tanto, que una de las características de este movimiento sea la ocupación de los medios de comunicación públicos y privados y la creación de sus propios espacios de información y expresión que se multiplican a partir de la represión del 14 de junio. Radio Plantón, la radio del gremio docente continúa su actividad gracias a la solidaridad y comienzan a emitir nuevas radios como Radio Universidad. Se desarrollan al ritmo de la movilización popular y se convierten en el principal canal de transmisión de información.

Varios medios comerciales y públicos son objeto de intervenciones directas. El 1º de agosto de 2006, ante la

negativa de Canal 9 (vinculado al PRI) a dar minutos a los colectivos en conflicto, las mujeres con el apoyo de miembros de la APPO decidieron ocupar la estación de radio y televisión. Si bien la mayoría de ellas nunca había hablado frente a un micrófono o una cámara, estas mujeres brindan gestión y programación al servicio del movimiento durante veintiún días. Las radios y los medios de comunicación recuperados por el movimiento se convierten en lugares de encuentro y coordinación de acciones.

El control de los medios de comunicación fue central durante todo el período, incluido el 25 de noviembre durante la represión de la policía federal. Radio Universidad sigue informando a la población mexicana y gracias a Internet al mundo entero.

El uso de medios alternativos de comunicación, la apropiación y autogestión de los medios de masas son herramientas estratégicas de la APPO que le permiten romper con la información impuesta y dictada por el poder.

Estas experiencias de comunicación y construcción de información alternativa en Oaxaca contribuyen a construir nuevas formas de sociabilidad al crear una interacción distinta entre oyentes y transmisores, una relación de igualdad, de reciprocidad donde la comunicación se produce de manera participativa y democrática; otra forma de comunicación se construye en perfecta armonía con la sociedad cambiante.

Esperando nuevas primaveras

En la última semana de noviembre de 2006, el proceso fue reprimido ferozmente por la policía federal y los grupos paramilitares. Las fuerzas represivas retoman el centro de la ciudad pero no logran apoderarse de la Universidad de Oaxaca en la que continúa transmitiendo Radio Universidad. Durante los días siguientes, el gobierno libró una guerra de baja intensidad contra la población en todo el estado de Oaxaca. Se cuentan cientos de heridos, detenidos (muchos de los cuales son torturados) y varios muertos. Las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales revelan los abusos y la violación sistemática de los derechos y garantías constitucionales por parte de la policía y los grupos paramilitares. El 19 de enero de 2007, se envió un informe a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que no fue escuchado.

El proceso de la APPO ha concentrado viejas y nuevas formas de lucha, extraídas de diversas tradiciones: las formas de organización de las comunidades indígenas, las acciones tradicionales de los movimientos sociales, novedades en la intervención artística y mediática, la convergencia de diferentes actores sociales en torno a una demanda unificadora. Las formas radicales y horizontales de organización en conjunción con el repertorio de acciones y las tradiciones políticas en juego han permitido el surgimiento de un nuevo colectivo social en una apuesta radical y alternativa al sistema hegemónico. La Municipalidad de Oaxaca ha agregado

la mayoría de los parámetros de una democracia radical, participativa e incluyente directa, de autogestión, autonomía de sujetos y colectivos sociales.

La APPO fue y sigue siendo en parte “un germen de doble poder” contra el Estado. Decretó normas, organizó el orden público y recuperó el espacio público confiscado por el gobierno en beneficio de los intereses privados. Capacitó a los grupos de autodefensa de maestros y nativos y se hizo cargo de los medios de comunicación, la educación y la justicia en las áreas controladas por las barricadas (Almeyra: 2007).

Al igual que las Juntas de Buen Gobierno Zapatistas en Chiapas o los grupos de defensa comunitaria electos en asamblea en Xochistlahuaca en el estado de Guerrero, las experiencias de “poder popular” resultan del fortalecimiento de la conciencia de clase y ayudan a debilitar la dominación capitalista.

La APPO es el resultado de iniciativas y acciones que presionan a los poderes constituidos generando formas alternativas y autónomas de sociabilidad. La APPO constituye un movimiento de movimientos sociales o una red de masas flexible, en la que una amplia gama de actores y colectivos actúa en la esfera pública.

Luego de la represión sufrida en noviembre de 2006, el movimiento continuó en la clandestinidad en redes inmersas en el tejido social, manteniendo espacios de sociabilidad y creación política. Estos involucran a nuevos actores en otras partes del Estado.

Así, en 2007 se creó el primer municipio autónomo del Estado de Oaxaca en el pueblo Triqui en la zona de San Juan Copala y la Asamblea Regional de Pueblos del Istmo (Beas Torres, 2006: 243). Asimismo, caravanas de jóvenes recorren las distintas zonas de Oaxaca para fortalecer las redes de solidaridad y coordinación del movimiento.

Si bien el movimiento se encuentra “en un período de reflexión en su capacidad de aparecer en el espacio público, [...] vigoriza los lazos mutuos y permite el fortalecimiento y consolidación de los movimientos sociales que son los actores que pueden construir las «primaveras» del mañana”(García Guerreiro y Warhen, 2008).

Abril de 2010

Para saber más:

Almeyra, Guillermo (2007), “Revolución, poder, libertad: la experiencia de la APPO (Oaxaca)”, comunicación al Congreso Marx Internacional 5, 3–6 de octubre, La Sorbonne / Paris 10–Nanterre.

Almeyra, Guillermo (2008), “El legado de la APPO”, en Carlos Beas Torres (coord.) (2008), *La batalla por Oaxaca*, Oaxaca, Yope Power.

Beas Torres, Carlos (2006), “Oaxaca, una rebelión plebeya”, *Osai*, nº 21, septiembre–diciembre, Buenos Aires, Clacso.

Esteva, Gustavo et al. (2008), *Cuando hasta las piedras se levantan*. Oaxaca, México, 2006, Buenos Aires, Antropofagia.

García Guerreiro, Luciana et al. (2008), *La Comuna de Oaxaca: cuando el otoño fue primavera. Acciones colectivas, medios de comunicación e identidades políticas; el caso de la Asamblea Popular de los pueblos de Oaxaca (APPO)*, Jornadas internacionales de problemas latinoamericanos, Mar del Plata, 26–28 de septiembre.

Hernández Navarro, Luis (2006), “Oaxaca: sublevación y crisis de un sistema regional de dominio”, *Osal*, n ° 20, mayo–agosto, Buenos Aires, Clacso.

Hernández Navarro, Luis (2006), “Resistencia y represión en Oaxaca”, IRC Programa de las Américas, publicado por Risal y traducido por Frédéric Lévêque.

Recondo, David (2009), *Democracia mexicana en tierras indígenas*, París, Karthala / CERI.

CONTINENTAL: UNA MULTINACIONAL DERROTADA

Richard Neuville

En este otoño sombrío donde caen como si lloviera reestructuraciones industriales y planes de destrucción de puestos de trabajo, conviene recordar la lucha que libraron los trabajadores de Continental en México y tratar de extraer enseñanzas.

En 2001 Continental Tire, que cuenta con 25 fábricas en todo el mundo, aprovechó la oportunidad de la elección de Vicente Fox (Partido Acción Nacional – Derecha) como presidente de la República de México para iniciar la flexibilización y la precariedad laboral dentro de la empresa. De hecho, el nuevo presidente se comprometió a liberalizar la economía en el marco del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLC) entró en vigor el 1º de enero de 1994. La multinacional alemana compró la fábrica Hulera de Euzkadi en 1998, situada en El Salto en la periferia de Guadalajara, y ahora entabla una lucha con el Sindicato Nacional de Trabajadores Revolucionarios (SNTRE) de la empresa Hulera de Euzkadi, que cuenta con mil trabajadores, para imponer su plan de reestructuración. Esto sin contar con la determinación de los

trabajadores que rechazarán el chantaje del cierre e inician una huelga muy larga que terminará con la transferencia de parte de la unidad de producción y la reanudación de la producción bajo la dirección de los trabajadores con estatus cooperativo.

La empresa Euzkadi fue fundada en la década de 1930 por un vasco exiliado en la Ciudad de México para producir alpargatas y suelas de goma. En 1935 se creó el Sindicato Único Revolucionario de Trabajadores de Euzkadi (SURTE) y tres años más tarde, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, se firmó un convenio colectivo sectorial que preveía en particular 40 horas y 56 días de licencia. El sindicato es entonces animado por una corriente de clase, de inspiración marxista, la *corriente roja*, y adopta un funcionamiento democrático que se basa en la toma de decisiones en asamblea general. En la década de 1970, la SURTE, que se convirtió en el Sindicato Nacional Revolucionario de Euzkadi (SNTRE), se desafiliaba de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), largamente comprometida con el partido en el poder y en prácticas clientelistas.

Durante el período de 1989 a 1998, la empresa perteneció al grupo Carso y vivió una fase de prosperidad, que no impidió que fuera adquirida por Continental Tire. La multinacional está aprovechando el contexto de desregulación acorde con el TLCAN y las perspectivas que ofrece el futuro plan Puebla Panamá (región Centroamérica) para cuestionar las conquistas obreras con el apoyo del Estado. Desde el principio, los nuevos propietarios deciden imponer flexibilidad en la empresa, lo que se traduce en el deseo de intensificar la productividad y reducir los salarios para alinear la producción con el estándar internacional vigente en otras fábricas del grupo. En 1999,

Continental Tire despidió a 18 trabajadores, entre ellos el líder sindical Jesús Torres Nuno. Siguió una lucha por su reintegro y, en 2001, a pesar de la presión ejercida por la multinacional sobre los trabajadores, la corriente roja ganó las elecciones contra el sindicato blanco y recuperó la representatividad.

El 17 de diciembre de 2001, los trabajadores supieron que Continental Tire estaba considerando cerrar la fábrica si el plan de reestructuración, que incluía el despido de 200 trabajadores, era rechazado por el sindicato. Para lograr sus fines, la multinacional se prepara para cerrar la fábrica por cuatro semanas (con un salario del 50%) para hacer ceder al sindicato, es decir imponer un lock-out patronal. El plan de la multinacional prevé, en particular, la puesta en duda del convenio de trabajo, el aumento de la jornada laboral a 12 horas, el aumento de la productividad en un 35%, la reducción de la plantilla, el cuestionamiento de la jornada y el reglamento interno.

Ante la negativa de la SNTRE, la multinacional decidió cerrar unilateralmente la empresa como había anunciado. De inmediato, la asamblea general de trabajadores elaboró un plan de lucha con ocupación permanente con el fin de evitar el desmantelamiento de las máquinas. Los trabajadores rodearon la fábrica, levantaron barricadas y luego iniciaron una larga huelga que duró 1.141 días (tres años, un mes y diez días). En su lucha, los trabajadores se enfrentan a los poderes patronales pero también a los políticos, estos últimos acusan al sindicato de intransigencia y de ser responsable del cierre de la fábrica, la CTM (Central sindical comprometida con el poder y no representativa) llega incluso a negociar la revisión del

convenio de trabajo para dejar a los trabajadores sin seguridad social. Pero el sindicato se organiza, define una estrategia y despliega todo un repertorio de acciones para buscar alianzas y apoyos. Esto se refleja en particular en el fortalecimiento de la solidaridad familiar, la denuncia pública de la actitud de Continental, las intervenciones de sindicalistas en las juntas generales de accionistas, la búsqueda de apoyos en México, pero también con organizaciones de defensa de los derechos humanos en Alemania, como FIAN y Germanwatch (dado el tímido apoyo de los sindicatos alemanes) y por la internacionalización del conflicto a nivel sindical.

Inspirándose en el movimiento zapatista, los trabajadores de Euzkadi emprenden una marcha por todo el país para desarrollar la solidaridad. Desde el inicio cuentan con el apoyo inquebrantable de la gran cooperativa Pascual (agroalimentaria) y el gremio mexicano de electricistas. Logran establecer contactos con otros sectores, como con el movimiento campesino de San Salvador Atenco (que lucha contra un megaproyecto aeroportuario).

A nivel internacional, el SNTRE encuentra apoyo en Europa, con sindicatos latinoamericanos (Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala y Uruguay) agrupados en el Frente Unido de Trabajadores del Caucho (Futinal) y la Federación Mundial de la Industria Química. En mayo de 2003, los representantes sindicales realizaron una gira por Europa invitados por organizaciones sindicales y de derechos humanos para internacionalizar su lucha. El movimiento también es retransmitido en Europa por la IV Internacional y los sindicalistas serán invitados por miembros de la LCR con

motivo de la visita del presidente mexicano al paramento europeo.

Durante todos estos años, el gobierno de Vicente Fox rechazó el reclamo de nacionalización o expropiación de la empresa, como pretendían los trabajadores, y brindó un apoyo infalible a la multinacional apostando por la asfixia del movimiento. Mientras mantienen un piquete permanente, algunos trabajadores se ven obligados a aceptar otros trabajos, sus esposas e hijos buscan trabajo para poder resistir. Después de un año de huelga, 250 trabajadores se resignaron a la liquidación y entre ellos 150 emigraron a Estados Unidos. Se hace necesario buscar una salida a la lucha que permita la preservación de la herramienta de trabajo y así salvaguardar los puestos de trabajo, pero no bajo ninguna condición. Los trabajadores, sin aliento, han perdido un tercio de sus camaradas, terminan adoptando la idea de establecer una cooperativa.

El 17 de enero de 2005, al término de una negociación de tres meses, con la mediación del gobierno mexicano y bajo la presión política ejercida desde Alemania, Continental Tire decidió retirarse de El Salto ofreciendo vender la mitad de la fábrica a los 604 trabajadores que resistieron (de los 971 presentes cuando cerró la empresa) contra el pago de los salarios perdidos durante la lucha, es decir, 12 millones de dólares. La peculiaridad de este convenio consiste en invertir parte de las indemnizaciones adeudadas en la propiedad de la mitad de la planta, brindar asistencia técnica durante nueve meses para la exitosa puesta en marcha, la compra de 500.000 llantas por año por Continental y la venta de materias primas

con precios preferenciales, más 225 millones de pesos pagados por Continental. (Estos puntos solo serán respetados parcialmente por la multinacional). La otra mitad de la planta se vende a una distribuidora de neumáticos, Llanti Systems.

El 26 de enero de 2005, la dirección de Continental y Llanti Systems, por un lado, y los trabajadores, por otro, firmaron oficialmente la cesión de la planta. El 18 de febrero de 2005, los trabajadores, organizados en una cooperativa, la Cooperativa de Trabajadores Democráticos de Occidente (Tradoc) toman posesión de la empresa. Gracias a la solidaridad externa, vuelven a poner en funcionamiento la planta en cinco meses y comienzan a producir. La producción pasa de 1500 neumáticos diarios en 2005 a 11.000 en 2010 (Covarrubias, 1911). Para Jesús Torres Nuño, secretario general de SNTRE y ahora presidente del consejo de administración, “este éxito demuestra la capacidad de los trabajadores para gestionar ellos mismos una gran empresa” (Nuño, 2009).

Al término de esta lucha ejemplar, muchos trabajadores continuaron con su compromiso político y siguieron solidarizándose con movimientos como el de San Salvador Atenco (citado anteriormente), la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), diversos conflictos sindicales y apoyan trabajadores de las *maquiladoras* (fábricas del norte del país que producen a bajo costo y exentas de derechos de aduana). Los activistas también simpatizan con la Otra Campaña Zapatista y se movilizan para denunciar el fraude electoral en 2006. Una delegación va a Hannover en 2008 para manifestarse con otros trabajadores de Continental,

junto con los de Clairoux. Se organizó un encuentro solidario con los compañeros de Clairoux frente a la embajada de Francia en la Ciudad de México durante su juicio en Amiens en 2010.

En 2008, debido a la crisis económica y los problemas de suministro de materias primas, la cooperativa Tradoc se vio obligada a buscar socios. Al término de una negociación se llega a un acuerdo entre la empresa estadounidense Cooper Tire, que adquiere una participación del 38,5% a Llanty Sistem al 20,5% y Tradoc, que retiene el 41% de las acciones para constituir la Corporación de Occidente. El acuerdo estipula explícitamente el compromiso de mantener la autogestión de los trabajadores en la producción, los otros dos socios solo intervendrán en la comercialización y adquisición de materias primas. La empresa opera con una junta directiva tripartita. Luego se creó otra cooperativa de producción, PROEM, para integrar tanto a los nuevos trabajadores, alrededor de 200, que se asociaron a los dos años, como a los de Tradoc.

A finales de 2011, la plantilla de la fábrica se acercaba a los mil trabajadores y los salarios eran los más altos del sector. En los últimos dos años se han realizado importantes inversiones para modernizar la herramienta productiva que se ha convertido en una de las más productivas de México.

Como otras recuperaciones empresariales en Argentina o Brasil, esta experiencia puede calificarse como un proceso de autogestión sui generis que resulta sobre todo de una lucha por salvaguardar el empleo y que obedece a las limitaciones del mercado. Por tanto, no se trata de una búsqueda de una alternativa al capitalismo sino de una consecuencia del proceso

neoliberal basado en la búsqueda del máximo beneficio y la nueva división internacional del trabajo que se deriva de ello, ya que el mismo año Michelin y Goodyear cerraban sus fábricas en México. Sin embargo, esta lucha obrera de gran trascendencia, tanto en su duración como en su desarrollo, ha demostrado ampliamente que puede haber una alternativa para preservar el empleo, las ganancias sociales y la dignidad humana, pero sobre todo es posible detener los planes de una multinacional, incluso apoyada por un Estado, y obligarla a negociar. Esta experiencia sigue siendo ejemplar desde este punto de vista y demuestra una vez más, si es necesario, que los trabajadores pueden administrar una gran empresa bajo gestión obrera. Que ella inspire a los participantes en otras luchas contra planes de reestructuración puramente intensivos del capital en otras latitudes...

Octubre de 2012

Para saber más:

Covarrubias, Jorge (2011), “Cooperativa Tradoc festeja su consolidación a 10 años del cierre de la fábrica de Euzkadi”, 16 de diciembre, *La Jornada*.

Centro de documentación sobre zapatismo (2008), “Las cuatro ruedas del capitalismo: explotación – Cooperativa de Trabajadores Democraticos de Occidente”,

26 de diciembre, www.cedoz.org/site/content.php?doc=585.

Dean, Matteo (2010), “No es fundamental tener un patrón”,

Desinformémonos, 1 st julio [http://desinformemonos.org/2010/07/ No Es Tener-Fundamental-a-jefe /](http://desinformemonos.org/2010/07/ No Es Tener-Fundamental-a-jefe/).

Luna Broda, Sarya M. (2010), “Apuntes para la discusión sobre autogestión obrera y la precarización laboral en empresas trasnacionales del caso de Euzkadi en México”, Osera.

Torres Nuño, Jesús (2006), “Tres años de huelga”, Rouge, n ° 2143, 26 de enero.

Torres Nuño, Jesús (2009), “La cooperativa mexicana de Continental”, [www.npa2009.org / content / linternationale-des-employee% C3% A9s-du-pneus](http://www.npa2009.org/content/linternationale-des-employee%C3%A9s-du-pneus).

Consultar:

[www.youtube.com/watch?v=Y4bh1JKu2Ew&feature=endscreen & NR = 1.](http://www.youtube.com/watch?v=Y4bh1JKu2Ew&feature=endscreen&NR=1)

[www.youtube.com/watch?v=19yJ9aR8Bb0&feature=relmfu.](http://www.youtube.com/watch?v=19yJ9aR8Bb0&feature=relmfu)

[www.youtube.com/watch?v=OnYv7IHEnGk&feature=relmfu.](http://www.youtube.com/watch?v=OnYv7IHEnGk&feature=relmfu)

[www.youtube.com/watch?v=f_RKZCoOZCM&feature=related.](http://www.youtube.com/watch?v=f_RKZCoOZCM&feature=related)

ZAPATISMO: SINGULARIDADES DE AUTOGESTIÓN EN LA PLURALIDAD DE RESISTENCIAS MUNDIALES

Fernando Matamoros Ponce

Es después de muchos años de experiencia de autogestión que miles de campesinos indígenas, con pasamontañas, se unieron en el grito de “¡Ya Basta!” contra la miseria, el hambre y la muerte, haciendo irrupción el 1º enero de 1994 en los principales municipios de Chiapas: San Cristóbal de las Casas, Las Margaritas, Ocosingo y Altamirano. Organizados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la autogestión organizacional rompió el silencio de las normatividades de las leyes y la violencia institucional del poder capitalista.

Este evento abrió el principio de “negación” del “fin de la historia” y los decretos del comercio liberal. En contra de la corriente de la historia de la violencia en los documentos de la historia, se presentaban como los más pequeños, descendientes de la noche y la clandestinidad de la cultura de la resistencia indígena, pero en el corazón y centro vital de la actualización de los “grandes momentos del indigenismo” (Villoro, 1979) de la rebelión en México; dentro del proceso de

configuración de las luchas de resistencia al colonialismo, como la independencia de 1810 o las comunidades indígenas en la Revolución Mexicana de 1910 (Gilly, 1995).

Para seguir mejor el rastro de las singularidades culturales de las subjetividades de lo plural, observamos los procesos históricos de resistencia de los indígenas mayas; quienes, además, también forman parte de la universalidad de los humanos que luchan contra la violencia de las nuevas formas de acumulación capitalista. Entonces, para comprender y subrayar los contenidos sociales presentes en las subjetividades de los rebeldes indígenas, nos planteamos varias preguntas. ¿Cuáles serían las racionalidades que constituirían las subjetividades de la resistencia y la rebelión mundial? ¿Qué hay de objetivo en las palabras y actos organizativos del EZLN? ¿Qué provoca, en estas peculiaridades mayas, un eco en las subjetividades heridas por el mundo? ¿Qué tememos que preguntar mientras caminamos por las montañas y selvas de Chiapas? ¿De qué sirve comprender el pasado inmediato de esta rebelión? ¿Por qué las temporalidades zapatistas relacionan su espacialidad del pasado con la de su organización del presente: el EZLN? ¿Cómo se relacionan su propia cultura y cosmogonías con una actualización de las constelaciones mesoamericanas, con la universalidad de la historia mundial actual? ¿Qué tienen en común los nativos de Chiapas con otros pueblos de México y el mundo? ¿Cuáles pueden ser las conexiones con África, Asia, el mundo árabe y otros? Y, como dicen los zapatistas, ¿será posible pensar en estar unidos en la guerra de la humanidad contra el neoliberalismo? ¿O son, nuevamente, quimeras de las utopías del siglo pasado cuando Zapata pensaba (Gilly, 1973) de la revolución mundial: *¡la tierra*

es de quien la trabaja en libertad, justicia y solidaridad con el otro!

Como veremos, el hecho de 1994 fue paradójico, porque a pesar de haber sido fruto de su fuerza de autogestión, rompió con la particularidad. Por un lado, los nativos de Chiapas afirmaron ser los herederos de 500 años de colonización y, por otro, llamaron al pueblo mexicano a luchar contra la injusticia de la explotación. No resultaron ser el único ejemplo de la cultura de la rebelión indígena mexicana. Lanzaron puentes arcoíris para lograr la revolución nacional en este mundo de violencia ancestral. Manteniéndose conscientemente apegados a sus raíces, a lo local y al pasado, asumieron, de manera organizativa y en autogestión, su existencia en un mundo colonizado por las ideologías neoliberales.

Y este viento de abajo, el de la rebelión, el de la dignidad, no es solo una respuesta a los mandamientos del viento de arriba, no es solo una protesta imprudente, es portador de una nueva propuesta, no es solo la destrucción de un sistema injusto y arbitrario, es ante todo una esperanza, la de la transformación de la dignidad y de la revuelta en libertad y dignidad (Marcos, 1994).

El EZLN actualizó las temporalidades de un pasado común sin dejar de referirse a las temporalidades nacionales y globales de las luchas por la justicia, la democracia y la libertad. En la soledad de los mitos y la construcción de alternativas, dieron contenido social a la lucha de clases por la autonomía con los cinco *caracoles* (grupo de municipios zapatistas) organizados en consejos de buen gobierno (*juntas de buen gobierno*). Así,

afianzaron incansablemente su existencia en la autogestión, la de los valores comunitarios en la vida cotidiana. Cuando imaginan otro mundo, compuesto por muchos mundos, recurren al entrelazamiento de experiencias de más de 500 años. A diferencia de las democracias de dominación, imaginan otro mundo para gobernarse según los principios básicos de mandar obedeciendo: 1) Servir y no servirse. 2) Representar y no representarse. 3) Construir y no destruir. 4) Sugerir y no mandar. 5) Proponer y no imponer. 6) Convencer y no vencer. 7) Decrecer y no progresar (Matamoros, 2014).



Sus palabras de la revolución no fueron, únicamente, representaciones sin contenido social y político de la historia de los vencidos. No se trata de un fenómeno aislado, sin referencia al pasado de la explotación y dominación de los vencedores, sino de constelaciones que están conectadas a otros mundos, aun cuando estas alternativas autónomas

fueron construidas contradictoriamente en la soledad del mundo. Anarquía de selvas y montañas. Los comunicados y declaraciones del Comando Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI), así como los escritos de Marcos y otros comandantes, ofrecen alternativas singulares, pero también globales, frente a la violencia del mundo capitalista, que demostraron, una vez más, con su iniciativa de la *Pequeña escuela* 2013–2014 (Matamoros, 2014). Así, con el grito fundador “Ya Basta”, considerado por John Holloway (2007) como la base de la “negación de la disonancia” contra la mutilación diaria, los actores zapatistas, expresión de la *alteridad*, hacen parte de una totalidad inscrita en manifestaciones multiculturales, penetradas a pesar de todo por la forma capitalista.

El tiempo dominante y la temporalidad de la lucha de clases

Como veremos, las constelaciones particulares de la lucha de clases del indigenismo moderno son esenciales para la fuerza del zapatista. La elección del amanecer del Año Nuevo en 1994 no es fortuita, ni fruto de un accidente folclórico de los culturalistas e indigenistas de una posmodernidad sin lucha de clases. En primer lugar, esta fecha corresponde al Katún del calendario de la cultura indígena: el fin de un ciclo de veinte años en la cosmogonía maya (García de León, 1995). Luego, en las Seis Declaraciones de la Selva Lacandona, podemos observar que la configuración política del EZLN, su existencia,

su organización y su fuerza convocatoria corresponden a las diversas temporalidades de la lucha de clases en México y en el mundo. Tanto la subjetividad indígena como las experiencias de las luchas campesinas por la tierra están vinculadas a la resistencia al capitalismo y a las temporalidades del neoliberalismo en las espacialidades territoriales. El grito de los indígenas integrantes del EZLN estalló en una zona donde “hasta las piedras lloran” y lloran de dolor (Fuentes, 1994). Fue la manifestación profética de esperanza y salvación ante el huracán de la violencia capitalista. Como dijo Marcos en un texto de 1992: el sureste estaba en medio de dos vientos, una tormenta y una profecía.

La parte que el capitalismo impone al sureste de este país, siempre ha sido el caso desde su nacimiento, mezcla sangre y barro [...], las fauces de las finanzas obtuvieron, en 1989, un total de 1.222.669 millones de pesos, de los cuales donó solo 616 340 millones, en obras y créditos. Más de 600 millones de pesos terminaron en el estómago de la bestia. En Chiapas, los 86 dientes de Pemex se plantan en los municipios [...]. Todos los días, se chupan 92.000 barriles de petróleo y cerca de 155 milímetros cúbicos de gas SDRA. Toman gas y petróleo y dejan a cambio la huella del capitalismo: destrucción ecológica, privación agrícola, hiperinflación, alcoholismo, prostitución y pobreza. La bestia no se conforma con eso y extiende sus tentáculos hasta la selva lacandona: se están estudiando ocho campos petroleros [...]. Los árboles caen, las explosiones de dinamita resuenan a través de la tierra donde los campesinos no pueden talar árboles para sembrar. Cada árbol talado puede costarles una multa de

diez veces el salario mínimo y la pena de cárcel. Los pobres no pueden talar árboles; la bestia petrolera, en manos cada vez más extranjeras, sí. El campesino se deforma para vivir; la bestia se descompone para saquear. También es en forma de café que Chiapas pierde su sangre. El 35% de la producción nacional de café se exporta, principalmente a Estados Unidos y Europa. Más de 100.000 toneladas de café salieron del Estado para inundar las cuentas bancarias del animal: en 1988 se vendió al exterior el kilo de café crudo a un precio promedio de 8.000 pesos, pero se le pagó al productor chiapaneco 2.500 pesos o menos [...]. El tributo que recibe el capitalismo de Chiapas no tiene equivalente en la historia.

El 50% de la energía hidroeléctrica nacional proviene de este estado, que también produce el 20% de la energía eléctrica total de México. Sin embargo, solo un tercio de las viviendas en Chiapas están equipadas con electricidad [...]. La salud y la comida compiten con la miseria. El 54% de la población de Chiapas sufre desnutrición, cifra que supera el 80% en las alturas y en la selva.

La temporalidad de la acumulación de capital a fuego y sangre no se detiene con la nueva moralidad del humanismo y los “derechos humanos” que prevalece sobre la conceptualización global y capitalista neoliberal. Por el contrario, la institucionalización del “gran banquete” del libre comercio, con las cúpulas administrativas del poder mexicano celebrando la incorporación de México a los Tratados de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, también conocido como NAFTA, North American Free Trade Agreement), muestra

que la crisis del capitalismo está reconfigurando la geografía del capital (Harvey, 2010). La entrada de México al Primer Mundo, junto a Estados Unidos y Canadá, unió el mito de los “falsos profetas” del desarrollo al del Progreso, mediante proyectos viales y hoteleros, pero también, al mismo tiempo, la construcción de cárceles y cuarteles asociados a la militarización exponencial para, según ellos, protegerse del terrorismo y los “coyotes” que explotan y trafican migrantes (México se ha convertido en la salvaguarda de Estados Unidos).

Mediante leyes y normas, estos acuerdos fomentaron el libre comercio de las transnacionales entre los países integrantes, con un fuerte aumento en el control de los servicios migratorios para regular la fuerza laboral migrante. En este contexto, la naturaleza en Chiapas, ríos y lagos, selva y montañas, todos estos recursos naturales, se habían convertido en objeto de la codicia de las empresas mineras transnacionales (Alternatives Sud, 2011 y 2013) y del poder con sus principales proyectos de reforma energética en el petróleo. Gracias al mito del *progreso* ampliamente difundido por los medios de comunicación para atraer capitales extranjeros y nacionales, se estaban poniendo en entredicho leyes anteriores, también capitalistas, por supuesto. Así, gracias a estas reformas, la globalización y la mundialización de las lógicas de mercado neoliberales pudieron extenderse y desarrollarse: reformas de privatización de empresas públicas de salud, educación, cultura, recursos naturales y bienes comunales relacionados con la propiedad de la tierra. Chiapas se convirtió así en imprescindible para los intereses de lucro y acumulación de las políticas neoliberales de la lucha de clases,

porque allí no solo hay, como hemos visto anteriormente, grandes reservas de agua, gas y petróleo, sino que también el 40% de la energía que abastece al país (Ramonet, 2001) se concentra en los límites culturales de comunidades con tradiciones, costumbres y tradiciones milenarias vinculadas a la tierra como base y fuente esencial de vida.

Es importante recordar que para hacer realidad la firma del TLCAN fue necesario realizar muchas reformas al artículo 27 de la Constitución mexicana, uno de los principales logros de la Revolución Mexicana de 1910–1917, y lograr otros Acuerdos bilaterales de inmigración: México se transformó en una “policía fronteriza”, protegiendo a sus “hermanos” del Norte. Debemos subrayar que el artículo 27 se refiere a la propiedad comunal y *ejidal*⁸⁵ de los campesinos y nativos del país. Una conquista de la lucha de clases del siglo pasado: Revolución Mexicana, Lázaro Cárdenas...

Por estas razones y pudiendo concluir los acuerdos del TLCAN, el presidente activo, Carlos Salinas de Gortari (1988–1994), candidato a la presidencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC), elegido “Hombre del Año» Por *Time* (Ouvina Hernán y Sanyù, 2007), lideró y concluyó las reformas de este artículo. Las contradicciones en la propiedad de la tierra eran obvias. El trabajo de la tierra se utilizaba para producir bienes, pero esta tierra era, al mismo tiempo, propiedad comunal, local o regional y servía a los intereses de

85 Parte de la tierra administrada y compartida por la comunidad. Esta propiedad, principal conquista de la revolución de 1910-1917, consagrada como un derecho inalienable, volvió a causa de Carlos Salinas de Gortari en 1991 con una reforma que permitió la apropiación de estas tierras por el sector privado y el capital extranjero.

la gente de la comunidad. Sin embargo, la reforma de esta ley agraria abrió las puertas al mercado porque los campesinos que tenían el usufructo podrían, en adelante, venderlo al capital dominante, provocando fragmentación y divisiones dentro de estas mismas comunidades.

Por tanto, nos parece importante recordar que la subjetividad de los indígenas del EZLN no solo objetivó local y unitariamente la resistencia y la revuelta contra el TLCAN, expresión del mito del progreso y desarrollo del capitalismo moderno.

Sus lemas, además, “el mundo no es una mercancía”, “otro mundo es posible”, “un mundo hecho de muchos mundos” o “detrás de nosotros, estás tú”, llegaron a confirmar que las propuestas culturales de la resistencia indígena participaron en el mundo de recomposiciones políticas globales. Así, la llegada de los zapatistas fue, para Carlos Fuentes (1994), la expresión de la primera rebelión del nuevo milenio.

De hecho, las temporalidades de la organización indígena mostraron que sus acciones fueron la primera demostración de autogestión del final del siglo XX contra la globalización neoliberal, una experiencia comunitaria de autogestión que se combina con otras experiencias y subjetividades que se manifestaron, por ejemplo, en las luchas de Seattle (1999) contra la OMC. Así, los temas de pertenencia y los símbolos culturales del EZLN ofrecieron resonancias y mediaciones de clase con orígenes culturales y políticos de resistencia al capitalismo.

Historia a contracorriente

El levantamiento zapatista apareció durante las políticas conservadoras que ponían en relieve el Final de la Historia de las utopías revolucionarias del siglo XX. Sin embargo, en medio de la historia de los vencedores, 1994 inauguró un nuevo ciclo de luchas sociales y resistencias colectivas del pensamiento crítico que se encontraba entonces en un proceso de reflujo y reflexión tras la caída del Muro de Berlín en 1989 (Baschet, 2002). No revelaremos un secreto al decir que los indígenas y mestizos del EZLN sabían que las raíces de su movimiento eran parte de la historia a contracorriente de los vencidos y que se dieron cuenta de que su movimiento enfrentó y confronta los poderes ideológicos y militares del capitalismo imperante. También eran perfectamente conscientes de que el liberalismo imponía su dura ley (la viven a diario) mediante una ideología del miedo impuesta por los discursos de seguridad policial, desplegados y financiados con presupuestos nacionales, así como con la compra de armas y patrullas de seguridad nacional. La dominación y la violencia capitalista buscaban ejercerse y difundirse entre una población dividida en individualismos extremos y empujada hacia la neurosis o la esquizofrenia (Matamoros, 2012). Esta política de violencia neoliberal también buscó aprovechar la fragilidad de las luchas colectivas y la fragmentación de los movimientos sociales y políticos. Por tanto, es en este contexto ideológico que los

zapatistas vivieron veinte años escondidos desde 1974 hasta 1994.

No solo vivían en soledad física, sino también en soledad política. Desde el exterior, solo recibieron información de radio de onda corta. La Voz de América, Radio Internacional Francia, la BBC, Radio La Habana que describían un mundo en el que todas las certezas se desmoronaban. Todo mostraba que el mundo revolucionario se desmoronaba (Matamoros, 2014: 196).

El comandante Tacho recuerda:

Se nos dijo que cualquier intento estaba condenado al fracaso; que estábamos locos. Personas que conocían nuestro movimiento intentaron asustarnos, decirnos que ya no era posible luchar [...]. El muro de Berlín había caído [...], mucha gente nos decía ¡“estáis locos”! ¿Cómo queréis librar una guerra contra los tanques, los helicópteros? (Le Bot, 1997).

Además de la derrota de la guerrilla en Centroamérica (Guatemala, Salvador, Nicaragua...), el despliegue de políticas neoliberales así como la debilidad de las formas tradicionales de lucha –sindicatos, partidos revolucionarios, guerrillas tradicionales y guevaristas– demostraban que la publicidad del Fin de la Historia se institucionalizaba militarmente en la cultura de masas de la libre empresa y el individualismo. Sin embargo, frente y contra la violencia desplegada por la crisis del capitalismo, provocando un empobrecimiento creciente

expresado en más pobreza, más hambre, más migración masiva, más enfrentamientos, más guerras, más sangre, más muerte, hay un movimiento de esperanza: las reconfiguraciones culturales de constelaciones de movimientos que se reflejan en la búsqueda de relaciones políticas entre diversas corrientes de la historia.



Así, frente a las ideologías que condicionan la fragmentación de las subjetividades de resistencia, se desarrolla una búsqueda de alternativas de autogestión, basadas en la cultura de tradiciones, costumbres y usos; en el condicionamiento histórico de la vida cotidiana para enfrentar la avalancha de los medios de comunicación y la represión del sistema capitalista. No se debe olvidar que uno de los actos fundacionales del EZLN, durante el congreso indígena de 1974, fue materializar la organización campesina indígena (García de León, 1995: 129; Baschet, 2002: 23). Este acto que conmemora el quinto centenario del nacimiento de Bartolomé de Las Casas (conocido como Defensor de los Indios), realizado con el apoyo

de sectores de la Iglesia de Chiapas (teólogos de la liberación que se encontraban en lugares de difícil acceso), surgió después del desarrollo de una amplia crisis agraria que se expresó en las luchas que llevaron a las reformas cardenistas del reparto agrario en 1940. En el contexto social, ideológico y económico de este congreso indígena, el gobernador del Estado de Chiapas, Manuel Velasco Suárez, intervino infundiéndole la violencia del racismo de la cultura mixta mexicana. Aprovechando este evento, quiso celebrar con este congreso un siglo y medio de mexicanismo en Chiapas. Sin embargo, en este torbellino de contradicciones institucionales e ideológicas, el congreso desarrolló “fuerzas ocultas”, permitiendo que diferentes actores se unieran a través de palabras relacionadas con la resistencia y acciones autoorganizadas. Aquí es donde se resumieron las palabras de 250.000 indígenas de 327 comunidades (500.000 vivían en ese estado en ese momento) [...]. El quinto tema, el de la política, había sido censurado por los organizadores del evento *ladino*⁸⁶, aunque, sin duda, era el tema [central] que bañaba el congreso de sus colores (García de León, 1995)⁸⁷.

La masiva participación de las comunidades indígenas en la sierra y en la selva de Chiapas demostró, a pesar de la violencia represiva ejercida por el Estado, que el pensamiento crítico

86 No indios. También se utiliza como sinónimo de métis (mixto).

87 Según Jérôme Baschet, el congreso reunió a 1.230 delegados tzotziles, tzeltales, chols, tojolobals y otros grupos étnicos, compartiendo las mismas realidades: explotación en fincas y mantenimiento de Estado campesino acasillado (como en la época colonial, apegado a una tierra y a un propietario como siervos), invasión de tierras comunitarias por pastores y no aplicación de resoluciones presidenciales sobre la propiedad de tierras indígenas. Según Carlos Fazio (1994), 2000 personas respondieron al llamado de la diócesis; es decir, la representación de 1.000 comunidades o un total de 400.000 personas.

reapareció en el presente con resignificaciones simbólicas y alegóricas de la historia. Las palabras y acuerdos del Congreso demostraron, metafóricamente, gestaciones de perspectivas políticas entre el pasado y el presente. La tierra fue reclamada del pasado de prejuicios ancestrales: opresión, lucha y resistencia contra la expansión del capitalismo. Las comunidades se refieren constantemente al largo proceso de sacrificios e inmolaciones de indios rebeldes en el sumidero de la geografía chiapanesca del siglo XVI.

Sin embargo, estas reflexiones históricas y simbólicas se materializaron en la unificación de experiencias de luchas campesinas por la tierra y contra el racismo ancestral de Chiapas y México. Así, según Carlos Fazio (1994), con el grito “la unidad es fuerza” se inició un proceso de reconstrucción de afinidades teológicas y políticas. Se crearon muchas organizaciones campesinas independientes (Matamoros, 1998): la Unión de Sindicatos decidió reclamar sus tierras y la liberación de los presos políticos. Diecisiete *ejidos* formaron la Unión de Ejidos *Quiptic Ta Lecubtesel*, que significa en idioma tzeltal: “Nuestra fuerza para avanzar”. Participaron tzeltales, choles y tzotziles del Canadá de Patihuitz y del valle de San Quintín del municipio de Ocosingo; la Unión de Ejidos de Lucha Campesina, conformada por indios tojolobal del municipio de Las Margaritas y la Unión de Ejidos Tierra y Libertad (referencia directa al significativo llamado de guerra de Emiliano Zapata).

Posteriormente, el 10 de abril de 1976, fecha conmemorativa de la muerte de Emiliano Zapata, se creó la Alianza del 10 de abril, que tuvo como dinámica la ocupación de tierras y las luchas por los desaparecidos y la liberación de los presos

políticos. Podríamos decir, por tanto, que en este congreso confluyeron tres corrientes históricas en el proceso de unificación indígena. La primera, las comunidades indígenas ancestrales que aparecieron en el espectro político. En otras palabras, los llamados “hombres de verdad”, los “hombres de buena palabra”, los “más pequeños, los que hablan con el corazón”. La segunda, la Iglesia, basada en “la opción preferencial por los pobres”, uno de los baluartes de la teología de la liberación, y que será importante en las reconfiguraciones de la Iglesia de Chiapas. Y, el tercero, los militantes revolucionarios guerrilleros del Frente de Liberación Nacional (FLN), del centro y del norte del país, quienes conocieron a las élites indígenas de Chiapas. Estas guerrillas, en su mayoría de tendencia maoísta, conocieron a los indígenas que participaron dentro de la Iglesia de Chiapas en la organización llamada Línea Proletaria, cuya estrategia es la de la línea de masas. Sin embargo, el centro de la experiencia no utilizó ni la estrategia ni la táctica de las formas políticas institucionales sino que fueron las formas ancestrales indígenas de política comunitaria, *pedir para caminar, aprender preguntando y escuchando al Otro*, las que fueron sus pilares. Las asambleas de toma de decisiones constituyeron la subjetividad de los líderes que *mandaban obedeciendo*. Fue durante estos procesos simbólicos y alegóricos que se establecieron las relaciones políticas entre los actores de la Iglesia de Chiapas y los líderes políticos indígenas y guerrilleros, personajes que se dice que fueron el origen del EZLN. En este sentido, podemos constatar, por tanto, que el movimiento de unificación se reforzó desde lo indígena local, pero siempre en conexión con la experiencia del exterior: la iglesia y la organización guerrillera. Por tanto, es con la Primera Declaración de la Selva

Lacandona que notamos que la subjetividad de los zapatistas no es un resultado aislado de la historia a contrapelo de la opresión capitalista en Chiapas, y que se inscribe, por supuesto, en la resistencia al neoliberalismo. Así, su grito *¡Ya Basta!* de la Primera Declaración demostró que eran producto de la historia de la lucha de clases en Chiapas y, al tiempo que afirmaban su origen mexicano, se declaraban herederos de los vencidos del pasado en el presente.

Somos producto de quinientos años de lucha, primero contra la esclavitud, durante la guerra de independencia contra España liderada por los insurgentes, luego contra los intentos de expansionismo norteamericano, luego para promulgar nuestra Constitución y expulsar al Imperio francés de nuestro suelo; finalmente contra la dictadura porfirista que rechazó una aplicación justa de las leyes resultantes de la Reforma. Del pueblo insurgente formando sus propios líderes brotaron Villa y Zapata, pobres como nosotros, a los que siempre se ha negado el más mínimo reconocimiento, destinados a servir de carne de cañón, para que los opresores saqueen impunemente las riquezas de nuestro país, sin que les importe lo más mínimo que muramos de hambre y enfermedades curables; sin que sea importante para ellos que no tengamos nada, absolutamente nada, ni un techo digno de ese nombre, ni tierra, ni trabajo, ni cuidados, ni recursos alimentarios, ni educación; sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras propias autoridades, sin ninguna independencia del exterior, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos [...]. Pueblo de México, nosotros, hombres y mujeres libres y rectos, somos conscientes de

que la guerra que hemos declarado es una medida definitiva pero justa.

Los dictadores llevan muchos años practicando una guerra genocida encubierta contra nuestros pueblos. Por eso les pedimos su participación activa en el apoyo a este proyecto del pueblo mexicano en lucha por el trabajo, la tierra, la vivienda, la alimentación, la salud, la educación, la independencia, la libertad, la democracia, la justicia y la paz. Declaramos que no cesaremos la lucha hasta que estas demandas básicas de nuestro pueblo estén plenamente satisfechas y se forme un gobierno libre y democrático de nuestro país. Únete a las fuerzas insurgentes (Primera declaración de la selva lacandona.

Frente a estas palabras, condensando una historia a contracorriente, el gobierno mexicano desplegó 12.000 soldados en nuevos campamentos militares en el acuerdo de desgastar a los líderes por ser “profesionales de la violencia llegados desde el exterior para alterar la normalidad en las comunidades”. Concretamente, podríamos decir que, según el Ministerio del Interior, estos guerrilleros podrían ser “terroristas y narcotraficantes pertenecientes a una red de facciones violentas del mundo: los indígenas habían estado recluidos bajo presión, luego manipulados por lo que parecía ser grupos de Centroamérica”⁸⁸.

En respuesta a estas acusaciones de *chivos expiatorios* o extranjeros manipulando a los pobres indígenas, el EZLN demostró que los verdaderos dirigentes eran la Comandancia

⁸⁸ <http://www.cspcl.ouvaton.org/>

General del Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI), integrado, en su totalidad, por representantes indígenas que vivieron durante años en los territorios zapatistas. No eran una guerrilla sino un ejército del pueblo. Al descubrir los significados históricos de la cultura indígena en los procesos de resistencia y autogestión comunitaria, el EZLN demostró que el pensamiento crítico y las luchas del zapatismo estaban y están inscritos en los significados que objetivan la dominación capitalista, pero también las formas tradicionales de luchas del pasado: partidos, sindicatos, organizaciones campesinas tradicionales, etc.

Actualidad e imaginarios zapatistas

Si escudriñamos las palabras plasmadas en los actos de los indígenas de Chiapas, podríamos decir que las “raíces” del árbol zapatista se hunden en más de 500 años de luchas culturales, todas ligadas a la cosmogonía temporal de los signos inscritos en las fechas clave de su propia organización. Usos y costumbres reafirmaron las tradiciones de resistencia a los discursos y leyes coloniales de dominación capitalista. Como afirma Antonio García de León (1995), la fuerza de las palabras de los zapatistas proviene de varias corrientes, antropológicas por supuesto, pero ligadas a los problemas sociales de la sociedad donde se construyen las luchas de estas comunidades. En este sentido, podríamos preguntarnos ¿cuáles son las referencias antropológicas del mundo indígena frente a la conceptualización de las palabras y la cultura del mercado? ¿Por qué tantas referencias poéticas a

la naturaleza: al viento, a las montañas y a los árboles, al fuego y al corazón? ¿Podemos decir que estas referencias ecológicas a la naturaleza humana son un intento de reconfigurar o conceptualizar el mundo desde la cultura misma, para confrontar conceptualizaciones coloniales que destruyeron representaciones milenarias del pasado indígena mexicano?

Con la experiencia zapatista se actualizaron múltiples significados de los vencidos del pasado: por ejemplo, el pasamontañas y el pañuelo rojo (paliacate), que representaban realidades concretas de resistencia local y regional a los grandes proyectos de los poderes establecidos, tanto a nivel nacional como globalmente. De forma pragmática, se trata de una protección contra el frío de la montaña, pero también son una garantía de seguridad en la tierra. Sin embargo, debemos señalar que estos “objetos ordinarios”, popularizados en la cultura del mercado mexicano y turístico, se han convertido en un símbolo de la modernidad de la rebelión. Símbolos esenciales de la resistencia más antigua de la humanidad, las palabras y acciones comunitarias se han convertido en la creatividad colectiva de hombres y mujeres para construir, contra la identidad que da el poder, algo nuevo.



Los indígenas zapatistas, desde el inicio de su iniciativa, hasta el día de hoy, han afirmado que nosotros (tik en la lengua maya tzelzal–tojobal) estábamos en el centro de sus formas de vestir y sus formas de actuar. Paradójicamente, aseguraron que se tapaban la cara para ser vistos (“detrás de nosotros, somos ustedes”), porque los poderes establecidos por la democracia formal del progreso y la civilización, así como los medios de comunicación, habían decretado ellos no existían y por lo tanto nosotros no existimos. Asimismo, estos objetos rompieron con las identidades impuestas a hombres y mujeres explotados, que viven en la miseria, el hambre y el folclore culturalista de la posmodernidad. Así, sus identidades se transformaron en reflejos colectivos de resistencia al neoliberalismo. Afirmaron que “detrás de nosotros, estamos tú”: todos los feos; los pobremente educados, los *nacos* (palabra y abreviatura que tiene su origen en el concepto racista de desprecio a los totonacas; también *pinches* y *gueyes*), que bajaron de las montañas y dejaron las selvas, sin saber hablar *castilla* (español); los salvajes; los bárbaros del paganismo; los que no

tienen la piel clara; los millones de hombres y mujeres de tez bronceada que, todos los días, van al campo, a las fábricas y a la escuela y que esconden el rostro y el corazón porque se avergüenzan de ser indios.

A nivel simbólico, cultural, religioso y comunitario, afirman que surgieron de la sombra de los dioses; de la larga noche y la luz de los grandes acontecimientos del México moderno del que sus abuelos tuvieron que huir para escapar de las masacres provocadas por las mitologías capitalistas coloniales. Así, como afirma Antonio García de León (1995), podemos subrayar, con él, que el zapatismo moderno contiene temporalidades de las más antiguas tradiciones de resistencia. En sus palabras, no siempre entendidas desde fuera, aparecen alegorías de tiempos dialécticos de la resistencia y defensa de sus tierras, la naturaleza, opuestas y complementarias a la luz y la oscuridad. Por tanto, sus referencias al tiempo son la naturaleza y la animalidad de hombres y mujeres. Sus palabras, símbolos y representaciones se refieren a la tierra, las sombras, la noche y la luna; al águila y al jaguar, guerreros de la luz y la oscuridad; al aire y la tierra, elementos fundamentales de la vida; al fuego y al agua que se complementan de por vida; al hombre y la mujer para sobrevivir y existir en un mundo de amor; a la llama y las brasas que avivan la vida en el fuego de las palabras; en fin, uno está abierto, el otro es oculto, como la palpitación de la esperanza de la noche (Akbal–nuit o Vo'tan, corazón por excelencia). Así, el poderoso rostro oculto del calendario tzeltal es Ak'bal, la noche, el Vo'tan, este latido del corazón de la gente, pueblo, palpitante en las montañas y a quien dios envió a distribuir la tierra entre las comunidades y que las protegía de la noche colonial.

Estas concepciones, comparadas con la historia lineal y homogénea del capitalismo, destacan los análisis de Walter Benjamin. Para nosotros, los imaginarios zapatistas actualizarían el "buen sentido" de la historia favoreciendo la naturaleza y los hombres.

Si el trabajo social estuviera bien ordenado, según Fourier, veríamos cuatro lunas iluminar la noche terrestre, los hielos retirarse de los polos, el agua del mar ablandarse, los animales salvajes poniéndose al servicio del hombre. Todo esto ilustra una forma de trabajo que, lejos de explotar la naturaleza, es capaz de dar a luz las creaciones virtuales que yacen latentes en ella (Benjamin, 2000: 3, 437).

Es por eso que las referencias simbólicas a los abuelos (tatas), quienes protegieron el tesoro del conocimiento ancestral de la naturaleza, son tan importantes en las comunidades indígenas. Así, la historia del origen del pasamontañas le fue transmitida a Marcos por el Viejo Antonio, el abuelo que lo convirtió al indigenismo. Además, no solo convirtió a la guerrilla, hizo lo mismo con los sacerdotes de la teología de la liberación. Les enseñó que los dioses se sacrificaron para dar vida al sol, a la luna; que el carbón es negro, y por eso la combustión y las palpitaciones dan vida a la vida (Le Bot, 1997: 153); son como el jaguar con manchas estrelladas, como el cielo nocturno, protector y guardián de las horas de las palabras auténticas de la lengua materna de la tierra, que preceden al amanecer. Durante varios encuentros, el Viejo Antonio transmitió historias relativas a Votan-Zapata, este señor de la noche que, como Emiliano

Zapata, galopa entre los dolores de la evocación inmemorial de los vencidos de la historia. En este sentido, podemos decir que la experiencia de autogestión del zapatismo se presenta como una constelación, una peculiaridad o un punto de inflexión de los imaginarios en el capitalismo generalizado del modelo neoliberal.

No cabe duda de que las peculiaridades de los cuarenta años de construcción del zapatismo (1974–1994), en la rebelión (1994–2014) y en la “Escuela Pequeña” zapatista (2013–2014) son la resistencia al dolor y a la acumulación de capital. Por un lado, es el punto central de una renovación autogestionada del pensamiento de las fuerzas críticas que declaran abiertamente la guerra a la bestia capitalista que destruye el mundo. Por otro lado, para citar a Walter Benjamin (2000: 3, 429), se trata de una frágil fuerza mesiánica, basada en la autogestión revolucionaria de la vida cotidiana en el silencio de las noches de Chiapas, frente a la maquinaria de los monstruos capitalistas tecnológicos. Sin embargo, aunque frágil en la construcción de su existencia, el zapatismo demuestra que es posible superar las limitaciones totalitarias de los pensamientos tradicionales de izquierda dominantes y liberarse de las subjetividades de los posmodernismos del individualismo y triunfar sobre la resignación del pensamiento único.

En este sentido, el zapatismo es paradójico. Esta no es una receta para una doctrina totalitaria o una nueva ideología política. Es una invitación a repensar, a actuar, a pensar nuestra subjetividad en la guerra de la humanidad contra el neoliberalismo, para no morir en la soledad de los

particularismos culturalistas posmodernos que se presentan sin lucha de clases. Así, el zapatismo se ofrece como una contribución al pensamiento crítico. Parafraseando las palabras de los rebeldes indígenas: el zapatismo no es una nueva ideología política ni un renacimiento de viejas ideologías. El zapatismo no es y no existe, se construye en la autogestión para servir, como hacen los puentes para pasar de una ribera a otra. En el zapatismo todo el mundo tiene un lugar porque, como he intentado demostrar, no es una identidad cerrada. Nunca dejan de imaginar cómo salir de la soledad de las montañas.

Saben que sería un suicidio permanecer en autonomía sin relación con el mundo, lo que explica su paradójica estrategia de apertura y cierre. Se protegen de la represión, pero se comunican y comparten las posibilidades de construir la solidaridad con el mundo como lo demostraron con las comunicaciones de la “Escuela Pequeña” en 2013 y 2014. No tienen receta, ni líneas preestablecidas, en cambio forjan vínculos con el otro, tendiendo puentes de orilla a orilla, animados por el deseo y la esperanza de un mundo mejor y nuevo hecho de múltiples mundos en el mundo. Por eso el zapatismo no es de nadie: es la conjunción autogestionaria de encrucijadas en la historia de la resistencia contra la violencia y la destrucción del mundo.

15 de agosto de 2014

Traducción al francés: Sylvie Bosserelle–Matamoros

Para más información:

Alternatives Sud (2011), “Agrofuels: impact in the South?”, Vuelo. 18, París, Syllepse. Alternatives Sud (2013), “Industrias mineras. ¿Extraer a toda costa? ”, Vuelo. 20, París, Syllepse.

Baschet, Jérôme (2002), *La chispa zapatista*, París, Denoël.

Benjamin, Walter (2000), *Obras*, t. 3, París, Gallimard.

Fazio, Carlos (1994), *Samuel Ruiz, el caminante*, México, Espasa–Calpe mexicana. Fuentes, Carlos (1994), “Chiapas, donde hasta las piedras gritan”, *La Jornada*. García de León, Antonio (1995), “La vuelta del Katun. Chiapas, a veinte años del Congreso indígena”, *Chiapas*, nº 1, México, UNAM / Era.

Gilly, Adolfo, (1995), *La revolución mexicana (1910–1920): una revolución interrumpida. Una guerra campesina por la tierra y el poder*, París, Syllepse.

Harvey David (2010), *Geografía y capital, hacia un materialismo histórico–geográfico*, París, Syllepse.

Holloway, John (2007), *Cambiar el mundo sin tomar el poder, el significado de la revolución hoy*, París / Quebec Lux / Syllepse.

Le Bot, Yvon (1997), *Subcomandante Marcos, el sueño zapatista*, París, Seuil.

Marcos (1994) “Chiapas: el sureste a dos vientos, una tormenta y una profecía”, www.cspcl.ouvaton.org.

Matamoros Ponce, Fernando (2014), “La parole en marche: de la emergencia zapatista a la escuelita”, en Bernard Duterme (coord.), *Zapatisme, la rébellion qui du re*, Paris / Louvain-la-Neuve, Syllepse / Tricontinental Centrar.

Matamoros Ponce, Fernando (2012), “Prefiguraciones dialécticas de la redención. Violencia, estado de emergencia y metafísica de la esperanza en Oaxaca” (2006), *Contretemps*.

Matamoros Ponce, Fernando (1998), *Memoria y utopía en México: Mitos, tradiciones e imaginación indígena en la génesis del neozapatismo*, París, Syllepse.

Ouvina Hernan y Sanyu (2007), *Zapatismo: del EZLN y el Subcomandante Marcos a la Otra Campaña*, Buenos Aires, Era Naciente.

Ramonet, Ignacio, (2001), *Marcos: La dignité rebelle*, París, Galileo.

Villoro, Luis, (1979), *Los grandes momentos de indigenismo en México*, México, La Casa Chata.

Centro de informacion zapatista: www.cedoz.org.

Comité de Solidaridad con los pueblos de Chiapas en lucha: www.cspcl.ouvaton.org.

Enlace zapatista: www.enlacezapatista.ezln.org.mx.

Radio insurgente: www.radioinsurgente.org.

Revista Chiapas: www.revistachiapas.org.

Revista rebeldía: www.revistarebeldia.org.

Sitio oficial del EZLN: www.ezln.org.mx.

PERÚ

TRABAJADORES Y AUTOGESTIÓN

Michel Raptis

Desde la victoria electoral de la Unión Popular en Chile en 1970, y el establecimiento del gobierno militar en Perú en octubre de 1968, los dos gobiernos se esforzaron por organizar la participación y autogestión de las masas trabajadoras. Pero, en Chile, asistimos a una interacción entre la dirección política y su base popular, en un contexto que aún sigue siendo sorprendentemente democrático, mientras que en Perú las reformas revolucionarias se otorgan desde arriba, por el momento en medio de una considerable apatía en el parte de las masas que se benefician de estas reformas.

En ambos casos, sin embargo, la idea básica es la siguiente: se trata de combinar un cambio en las relaciones de propiedad con un cambio en las relaciones sociales, para evolucionar no hacia un “socialismo” tecnoburocrático, “administrativo”, sino

hacia una sociedad verdaderamente democrática, en cuya gestión participan directamente productores y ciudadanos.

[...] En el Perú, el “participacionismo” está institucionalizado por importantes textos, que se inspiran en la ideología global del régimen, que ha sido claramente expresada en muchas ocasiones. Basta, en este sentido, leer los discursos del presidente Velasco (2013), quien concentra el poder real en sus manos. Sorprende que, en este país latinoamericano, un régimen militar ya haya realizado reformas muy importantes que hacen que algunos de sus opositores de extrema izquierda digan que este régimen está en proceso de cumplir las tareas de la Revolución democrática burguesa, pero que no irá más lejos. Suponiendo que esta afirmación es correcta, implicaría [...] la posibilidad de ver la aparición en los países subdesarrollados, en la fase actual del imperialismo, de los regímenes “burgueses” capaces de realizar tareas históricamente progresivos que uno cree que son la prerrogativa de las revoluciones “proletarias y socialistas”.

El hecho de que se respeten siempre las libertades democráticas fundamentales, así como el especial énfasis en la participación de los trabajadores, permiten decir que el régimen de Velasco constituye, con mucho, la forma más desarrollada de “nasserismo”. Pero a los Nassers suceden los Sadats si, mientras tanto, el régimen no logra vincularse a las masas y transferirles la verdadera gestión del poder. En términos de estructuras económicas, la “nueva empresa peruana” que crea la revolución se caracteriza por un gran sector estatal, empresas del sector privado reformadas por las comunidades trabajadoras, y un área de propiedad social que,

gracias al uso de técnicos y ayuda prioritaria y financiera del Estado, se convertirá en el sector dominante de toda la economía del país. Ya incluye grandes complejos agroindustriales autogestionados, formados a raíz de la aplicación de la reforma agraria, y cooperativas de producción agrícola, también autogestionadas, conocidas como Sociedades agrícolas de interés social (SAIS).

Una nueva ley [...] institucionalizará este sector de la propiedad social que está destinado a experimentar una expansión considerable. Se prevé la creación en 1973–1974 de 1.175 nuevas empresas de “propiedad social”, que incorporarán 164.000 socios activos, que darán apoyo a una población de 1.400.000 personas.

Es a través de estas empresas que se pasará la primera fase de industrialización equilibrada del país, que aún está en pañales. Se prevé al mismo tiempo la creación de 500 nuevas cooperativas agrícolas autogestionadas, que incluirán 60.000 agricultores, permitiendo vivir a una población de más de 300.000 personas y las 200 unidades autogestionadas se encuentran en el sector servicios (cooperativas de consumo, transporte, ahorros, préstamos, etc.), que beneficiará a unas 600.000 personas.

Se prevén medidas similares para la organización de artesanos en cooperativas autogestionadas.

La tradición prehispánica

Hasta hace poco, en el importante discurso pronunciado el 19 de noviembre en Paracas, con motivo de la ceremonia de clausura de la conferencia anual de representantes de la industria privada, el presidente Velasco se centró en los siguientes puntos: la “revolución peruana” rechaza el “sistema capitalista” porque perpetúa el subdesarrollo del país y la dependencia del extranjero y porque, como “fenómeno total”, implica una moral y una filosofía de vida, “egoísta”, “antisocial” y “anticomunal”. Sin embargo, la “revolución peruana” considera que el hombre es ante todo un “ser social”, cuya vocación más profunda es la “solidaridad” así como la aptitud para la “libertad, praxis, creación, invención permanente”. La “revolución peruana” también rechaza el “comunismo”, que encomienda la gestión de la sociedad a la “burocracia estatal” y que atrofia las capacidades creativas del hombre asociado. La “revolución peruana” apuesta por una sociedad fundada en la participación real directa de los productores y ciudadanos en todos los campos y en todos los niveles, único marco capaz de desarrollar la inmensa creatividad del hombre asociado.

Esta tendencia “participacionista” quiere estar en línea con las tradiciones comunitarias del Perú. Los ideólogos del régimen, como Carlos Delgado, que anima Sinamos⁸⁹ y que, en colaboración con todo un equipo de elementos marxistas, libertarios, exguerrilleros, etc., contribuyen fuertemente a conceptualizar la política económica y social del régimen, sin

⁸⁹ Sistema nacional de apoyo a la movilización social, creado para estimular la creación y desarrollo de instituciones sociales básicas de autogestión.

dudar en referirse en este sentido a la tradición de las “comunidades campesinas de origen prehispánico”, aún muy viva entre la mayoría indígena de la población. [...]

Febrero de 1973

Fuente:

Michel Raptis, “Trabajadores y autogestión en Chile y Perú”, *Le Monde diplomatique*, febrero de 1973.

Para saber más:

Velasco, Juan Alvarado (2013), *La Voz de la Revolución, 1968–1970*, Peisa, Lima.

VILLA EL SALVADOR: ECONOMÍA SOLIDARIA, DESARROLLO LOCAL Y COPRODUCCIÓN DE SERVICIOS EN UN BARRIO MARGINAL

Luis Favreau

Quizás el mayor logro en la construcción de una comunidad local solidaria en el mundo es el de Villa El Salvador en Lima, donde los ciudadanos plantaron medio millón de árboles, construyeron 26 escuelas, 150 guarderías, 300 comedores comunitarios y capacitaron a cientos de auxiliares médicos que atienden de puerta en puerta. Los principales artífices de este éxito han sido una vasta red de agrupaciones de mujeres y la estructura administrativa y democrática de las asociaciones de vecinos, que tiene representantes en cada bloque de viviendas. En conjunto, forman una mezcla equilibrada entre una organización de base altamente desarrollada y un sistema de administración, que reacciona con rapidez, para obtener la mayor participación posible en el diseño e implementación de acciones comunitarias.

¿Puede extenderse al año 2007 este diagnóstico de finales de la década de 1980 realizado por el Instituto Mundial (Durning, 199X: 264–265)? Villa El Salvador es un barrio marginal de 350.000 habitantes, en los suburbios de Lima en Perú. Este

barrio de chabolas, convertido en municipio, se caracteriza por su alto grado de organización social (en él trabajan más de 3.000 asociaciones vecinales y sectoriales) y por su polígono industrial cogestionado por el municipio y asociaciones locales de empresarios. ¿Cómo están organizados estos 350.000 habitantes y cómo ha logrado este asentamiento planificar y tener éxito en su desarrollo?⁹⁰

Villa El Salvador nació gracias a una situación particular, la de 600 familias que en 1970–1971 ocuparon un rincón del desierto a 30 kilómetros del centro de Lima. El gobierno reformista que ha llegado al poder es sensible al tema de los barrios marginales. Aprovecha la oportunidad que se le brinda para introducir una política urbanística que priorice los barrios marginales y aliente la participación de la población en la planificación del territorio.

El desarrollo del territorio

En Villa El Salvador, la adquisición de terrenos no será solo una simple ocupación del local. Al principio, Villa El Salvador se dotó de una forma particular de organización social en su espacio al hacer del grupo residencial la unidad básica de la organización de su territorio. El grupo residencial comprende una media de 384 familias organizadas por manzanas, es decir, entre 2.000 y 2.500 personas. Las familias cuentan con casas

⁹⁰ Basado en una investigación in situ y varios intercambios entre peruanos y canadienses (Quebequenses) comprometidos con la cooperación internacional y la economía social, hacemos cuenta aquí con la experiencia de desarrollo local y solidario de Villa El Salvador, la conquista de su desarrollo (durante más de treinta años).

agrupadas en torno a un lugar común reservado para los servicios básicos que tienen en común: la guardería, el centro de salud, el local comunal, el patio de recreo... Villa El Salvador planificará su desarrollo creando en unos años 120 lugares comunes. Cada lugar tiene su grupo residencial y cada grupo residencial sus delegados a la comunidad autogestionada de Villa El Salvador (CUAVES).



Al hacerlo, Villa El Salvador innova sobre todo rompiendo el clásico modelo colonial de las ciudades latinoamericanas. De hecho, las ciudades heredadas de la colonización española se construyen alrededor de la Plaza de Armas, un lugar central de armas que contenía el palacio del gobernador, la iglesia, el palacio de justicia y la prisión. Esta plaza tiene un gran valor simbólico ya que a su alrededor se construyen los edificios que simbolizan el poder del Estado y de la Iglesia. En el caso de Villa El Salvador, por el contrario, el lugar común concebido de

manera comunitaria con una democracia a escala microsocial es un concepto que favorece la descentralización. Más bien, estos 120 lugares forman un conjunto de espacios democráticos que promueven la estructuración de la sociedad civil.

La organización sociopolítica

En 1983–1984, Villa El Salvador se separó del municipio de Lima y pudo elegir su propio alcalde. Esta nueva estructura política introdujo entonces por primera vez una institución de carácter público basada en la ciudadanía y la democracia representativa. La organización de la ciudad cambia en consecuencia: el poder se comparte entre la organización comunitaria de la población y el municipio. El nuevo funcionamiento es el siguiente: como antes, cada manzana, es decir, 24 familias, sigue eligiendo a su delegado que participa en la asamblea general del grupo residencial (cada grupo residencial está compuesto por una veintena de manzanas). Los delegados designados por cada uno de los 120 grupos residenciales forman las CUAVES. Una vez constituida la administración, el municipio y sus funcionarios electos reconocieron primero a la CUAVES, luego las dos partes llegaron a un acuerdo para encomendar el poder a una comisión mixta en la que participan los funcionarios municipales electos, funcionarios y delegados de la CUAVES,

encargados de tratar los temas que les preocupan con el municipio.

En 1999 se puso en marcha un nuevo plan decenal, basado en los principios administrativos de la planificación estratégica. Si bien el Plan de 1983 había sido elaborado principalmente por profesionales pertenecientes a ONGs que colaboraban con Villa El Salvador, esta vez Villa El Salvador, como municipio, creó sus propios órganos para formular un plan: primero, asambleas públicas, luego regionales y mesas de concertación sectorial, finalmente, a los ocho meses, una consulta pública, realizada en casa por 2.500 jóvenes entre la población de 16 y más años, con el objetivo de poner a prueba el pulso de las prioridades sentidas. En orden de importancia, las prioridades identificadas fueron las siguientes, la primera reunió al 50% de los encuestados: una ciudad saludable, limpia y verde; una comunidad educativa; un distrito productivo y generador de riqueza; una comunidad unida y una comunidad democrática.

El plan de 1999 se basó en el paradigma de la consulta. De hecho, no solo el municipio participó en su realización, sino también ONGs, instituciones del sector público y del sector privado así como organizaciones populares. Las mesas redondas sectoriales, creadas cuando se estaba elaborando el plan, ayudaron a concretarlo. Había cinco en funcionamiento en ese momento (2000): educación, pequeñas y microempresas, salud e higiene, juventud y comercio. En la mesa de salud, que se suscribe al movimiento Ciudades y Pueblos Saludables, encontramos a la CUAVES, la Federación de Mujeres (Fepomuves), los líderes vecinales, el Ministerio de

Salud, la red de salud comunitaria y algunas ONG como Médicos sin Fronteras (Somos Villa El Salvador, 1999: 12).

El plan de desarrollo integral también preveía la creación de un presupuesto participativo. En 1999, se celebró una sesión plenaria en la Plaza de la Solidaridad.

Luego, unos 500 delegados de ocho sectores del municipio trabajaron para identificar las prioridades en cada uno de estos sectores, quienes recibieron una parte aproximadamente equivalente de un presupuesto de transferencias del gobierno central (2 millones de soles, unos 580.000 dólares). En los años que siguieron, el municipio quería ampliar la consulta para asegurar que todo el presupuesto estuviera sujeto a una planificación participativa.

El parque industrial

Originalmente, la administración del parque industrial estuvo a cargo del Ministerio de Industria, que asignó el terreno a la ubicación de grandes industrias con el objetivo de generar empleo para la población migrante de los distritos desérticos del sur. Pero como la gran industria mostró poco interés en este proyecto, dejó una puerta abierta para que CUAVES, la Asociación de Pequeños Industriales (Apemives) y el municipio solicitaran la cesión de estas tierras. Así en 1987 se crea la Autoridad Autónoma, entidad mixta formada por tres representantes del gobierno nacional y tres del VES. Esta

última representada por una persona del municipio, una persona de CUAVES y una tercera de Apemives.

Los principales objetivos pasaron entonces a ser los siguientes: a) promover la instalación y desarrollo de proyectos de pequeña empresa proporcionándoles, a cambio de su presencia en el parque industrial, infraestructura básica y asistencia técnica; b) realizar estudios, diseños, financiamiento, comercialización, construcción y programas de desarrollo para pequeñas unidades productivas.

Hasta entonces, Villa El Salvador había sido una ciudad dormitorio y buscaba desarrollar su propia economía. El Parque será el resultado del trabajo organizativo de pequeños empresarios ya presentes en Villa El Salvador pero diseminados por todo el barrio y muy mal organizados.

La Autoridad Autónoma tuvo que enfrentar obstáculos que limitaron su capacidad para llevar a cabo sus objetivos. El período 1990–1992 fue particularmente difícil debido a la violencia política que sacudió al país en general y a Villa El Salvador en particular. Sin embargo, fue en 1992 cuando la relación entre la ciudad y los empresarios se fortaleció. En ese momento, estamos ante una propuesta de desarrollo integral basada en el marketing, la asistencia técnica a la producción, el financiamiento y la formación empresarial.

A principios de la década de 2000, la actividad industrial de Villa El Salvador se vio fortalecida por la aparición de servicios de apoyo técnico. Además del Centro de promoción empresarial, un servicio de apoyo a emprendedores que

reporta directamente al municipio de Villa El Salvador, han surgido otros centros de apoyo técnico. Este es particularmente el caso del Centro de Soporte Aconsur, una institución sin fines de lucro creada por iniciativa de la cooperación italiana y el Ministerio de Industria peruano. Este Centro ofrece servicios a la micro y pequeña empresa, en particular al sector textil y a grupos de mujeres tejedoras pertenecientes a los sectores populares de Lima.

Al enfocarse en la reagrupación de pequeñas unidades productivas locales más que en un hipotético establecimiento de grandes empresas, Villa El Salvador ha alentado a los artesanos de producción local a organizarse en el campo profesional dentro de empresas que van más allá del marco familiar único, y mancomuna sus compras, maquinaria y marketing de productos. Hoy, después de quince años de esfuerzos, los resultados son contundentes: de una población activa de 100.000 habitantes, Villa El Salvador ha logrado reunir, desde su parque industrial como polo de desarrollo, 30.000 puestos de trabajo distribuidos en 8.000 micro y pequeñas empresas, de las cuales 5000 comerciales, 2000 en la industria y 1 000 en los servicios.

2008

Fuente:

Julie Duhamel y Florian Rochat (coord.), *Produire de la riche else, Ginebra, Centre Europe–Tiers–monde* (CETIM), 2008. Publicado con la amable autorización del editor.

Para saber más:

Boletín *Somos Villa El Salvador* (1999), n ° 1, mayo.

Durning, Alan B. (1992), Worldwatch Institute.

URUGUAY

LA COOPERATIVA ABC

Richard Neuvile

La ciudad Colonia del Sacramento es conocida por la riqueza de su patrimonio histórico, que le permitió ser clasificada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1995. Fundada en 1680 por los portugueses, perteneció sucesivamente a Portugal, a España y Brasil antes de convertirse en la capital del departamento de Colonia tras la independencia de Uruguay en 1825.

La ciudad más antigua de Uruguay, tiene la distinción de estar ubicada en el suroeste del país, en la margen norte del Río de la Plata frente a Buenos Aires, a una hora de travesía en ferry. Además de su carácter turístico por su encanto arquitectónico y urbanístico, también es una ciudad de tránsito entre Buenos Aires y Montevideo. Mientras pasea por el centro

de la ciudad, la atención del visitante no dejará de ser atraída por la vista de los autobuses rojos y negros adornados con enormes inscripciones laterales “Gestion Obrera”, que dan servicio a la línea que conecta el centro histórico y el distrito Real San Carlos.



La historia de ABC Coop comienza en septiembre de 2001 cuando los primeros signos de la crisis económica argentina resuenan en Uruguay. Los propietarios endeudados deciden abandonar el negocio por completo. El país ha entrado en recesión y mientras al otro lado del Río de la Plata, los trabajadores argentinos emprenden la recuperación de empresas abandonadas para retomar la producción, los operadores de buses ABC deciden seguir su ejemplo. Arriesgando la pérdida de su trabajo, organizan reuniones para discutir su futuro y deciden hacerse cargo de la gestión de su empresa. Para Luis Rivas, “la tarea más difícil fue explicarles a los trabajadores que la única salida era organizarse y poner en marcha los medios de producción y que podríamos hacerlo

mejor que el patrón si estábamos convencidos de ello” (Rivas, 2009).

Ese mismo año, bajo los auspicios del Ministerio de Trabajo, se firmó un convenio con el empleador que preveía el traslado de tres vehículos e instalaciones hasta 2006 en compensación por impago de salarios. No fue fácil porque este acuerdo podría sentar un precedente como explicó Luis Rivas:

Representamos un riesgo inminente para los intereses de los empresarios porque podíamos ser un ejemplo para otros trabajadores demostrando que podíamos gestionar mejor que ellos la empresa. Por eso, era necesario eliminarnos.

Connivencia entre poderes públicos y empresas

Si en un principio el enfrentamiento se produjo con el anterior propietario, a partir de 2001 la cooperativa tuvo que librar una encarnizada batalla con el resto de empresas de transporte de la ciudad. Al defender y hacer cumplir un “arancel popular”, ABC Coop se opuso sistemáticamente a cualquier aumento de aranceles perjudicial para la población de Colonia. Como esto depende de una decisión consensuada entre las distintas partes, el servicio del ayuntamiento y las empresas, ABC Coop lleva años bloqueando cualquier posibilidad de aumento.

Este *statu quo*, además, habría perjudicado a la empresa COTUC, que había prestado un servicio durante treinta años en la ciudad y que mantenía estrechas relaciones con el Ayuntamiento. En quiebra, COTUC creó una nueva empresa, Sol Antigua SA, que inmediatamente obtuvo la concesión de tres líneas mientras ABC Cooperativa sigue asegurando una sola línea. Cada vez que trató de desarrollar sus servicios, el municipio se lo impidió.

Estábamos en guerra contra la empresa privada contra la que competíamos, una empresa de treinta años, amiga del poder político y que juntos buscaba nuestra separación (Rivas, 2009).

En 2009, con el apoyo del Banco de Fomento de Venezuela (BanDes), ABC Coop logró adquirir un nuevo vehículo y solicitó la asignación de la línea al distrito El General. Pero aunque la principal empresa competidora, con un nombre diferente, no ofreció mejoras en el servicio, consiguió el trato. Desde entonces, ABC Coop ha seguido denunciando el amiguismo y favoritismo ilegal del municipio otorgado a Sol Antigua y sigue reclamando la atribución de esta línea.

La misma situación se repitió en 2012, cuando ABC Coop solicitó la adjudicación de la línea interurbana que conecta Carmelo con Colonia, a 80 kilómetros del departamento. Aunque fue la única empresa que se presentó, fue impugnada sin ninguna razón válida.

La democracia obrera en acción

Todos los sábados, los trabajadores se reúnen en asamblea general para discutir colectivamente la gestión. Se debaten todos los aspectos de la vida de la empresa, desde los horarios de los turnos hasta el mantenimiento del vehículo o la gestión de fondos hasta la organización de las comidas. Los cargos gerenciales y de secretaría de la cooperativa, designados por votación, son revocables en cada reunión. En esto, ABC Coop se diferencia de otras cooperativas de transporte en Uruguay, que generalmente son administradas por un directorio que no se reúne más de una vez al año con los empleados para informarles de la situación de la empresa. Según Luis Rivas, “en nuestras asambleas no hay por un lado compañeros que informan y por otro lado los que escuchan. Las propuestas más pequeñas se debaten y se aprueban por votación. Es la expresión misma de la democracia obrera, donde los merodeadores están convencidos de que todos contribuyen a resolver los problemas “(Rivas, 2014). Al final de cada reunión, los gerentes son responsables de implementar las resoluciones.

ABC Coop ha establecido una rotación de funciones: producción, gestión, administración. La empresa también ha puesto en marcha una escuela de conducción de autobuses que forma tanto a los nuevos trabajadores de la cooperativa como a los que pretenden trabajar para otras empresas de transporte.

Todo un símbolo, los autobuses están numerados en referencia a personalidades ilustres o movimientos revolucionarios, como el “17”, el “26”, el “28”, etc., en referencias a la revolución de Octubre, al movimiento 26 de julio (guerrilla cubana), al año del nacimiento del Che. El siguiente es el “43” en memoria de la cantidad de alumnos desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa (Estado de Guerrero en México) el 26 de septiembre de 2014.

Contra todo pronóstico, ABC Coop logró enfrentar el desafío y bajo la dirección de los trabajadores, pudo saldar las deudas dejadas por el patrón en el ayuntamiento y pagar las contribuciones adeudadas al Banco de Protección Social.

La cooperativa ha aumentado los salarios un 50% por encima de la media nacional y ha creado nuevos puestos de trabajo. De nueve, su número pasó a quince en 2013, es decir, una plantilla proporcionalmente un 50% superior a la de una empresa tradicional. Aún según Luis Rivas: “En tiempos de crisis, ABC Cooperativa demuestra que la cooperativa puede seguir invirtiendo y creando empleo”.

Dado que no existe un sindicato específico de autobuses en Colonia, los trabajadores de ABC contaron con la ayuda de la Unión Nacional de Trabajadores del Transporte (UNOTT) y las dos cooperativas ómnibus de Montevideo para adquirir nuevos vehículos a menor costo. Esta solidaridad terminó cuando ABC Cooperativa fue expulsada de la Central Sindical Única (PIT-CNT) por criticar el apoyo a la política gubernamental sostenida por la central.

Contrariamente a la tendencia general de las empresas de transporte que han eliminado los puestos de control al dar esta tarea a los conductores, ABC Coop mantiene dos trabajadores en cada autobús.

No se trata solo de evitar un aumento del número de parados sino de obtener una calidad de servicio a la población que permita estar disponibles para orientar a los pasajeros mientras el conductor se concentra en la conducción.

En 2006, ABC Coop concretó su afán de apertura hacia la población mediante la creación de un centro cultural en un barrio de la periferia y la instalación de una radio comunitaria, Iskra 102.9 FM.

Con sus éxitos y dificultades, la experiencia de ABC Coop, bajo gestión obrera desde hace más de una década, arroja luz sobre un posible horizonte para la lucha de los movimientos de transporte social, como el que se propaga en muchas ciudades de Brasil en junio de 2013 contra el aumento de tarifas. Se plantea la cuestión de la expropiación del transporte público retirándolo de la iniciativa privada para trasladarlo a servicios públicos o cooperativas bajo el control de los trabajadores y la población.

El transporte público representa un mercado enorme en toda América Latina, que sigue estando en gran parte controlado por empresas del sector privado y genera altas ganancias y gran corrupción con el consentimiento de las autoridades públicas. Además, este sector, constituido como un poderoso lobby, ejerce una enorme influencia en la vida social y política a

todos los niveles. En el subcontinente, el sector cooperativo tiene una pequeña participación y en Uruguay hay algunas empresas recuperadas en el transporte público, pero no se guían por la misma lucha de clases.

Febrero de 2015

Descubra más:

- Burdin, Gabriel (2013), “Autogestión en Uruguay: Economía social y empresas sin patronos”, Brecha, 30 de agosto.
- Guerra, Pablo (2014), “Promoción del empleo autogestionado en empresas recuperadas. El caso de desarrollo (Fondes) in Uruguay”, en Lou Hammond Ketilson y Marie–Paule Robichaud Villettaz (dir.), *El poder de innovar de las cooperativas: Textos escogidos de la convocatoria internacional de artículos científicos*, Lévis, *Cumbre internacional de cooperativas*, International Summit of Cooperatives.
- Martí, Juan Pablo, Florencia Thul y Valentina Cancela (2013), “Las empresas recuperadas como cooperativas de trabajo en Uruguay: entre la crisis y la oportunidad”, documento de trabajo, Montevideo, Universidad de la República, marzo.
- Rieiro, Anabel (2012), “Representación y democracia: sujetos colectivos en el campo de la autogestión”, Osera n ° 7.
- Rivas, Luis (2009), “Entrevista a los obreros de la cooperativa de transports ABC Coop (Gestion obrera) de Colonia de Sacramento, Uruguay”, marzo de 2009, <http://>

[//argentina.elmilitante.org/amrica-latina -othermenu-42 / uruguay-other- menu-50/4088-entrevista-a-los-obreros-de -la-cooperativa-de-transportes -abc-coop-gestin-obrera-d e-colonia-de-sacramento -uruguay.html](http://argentina.elmilitante.org/amrica-latina-othermenu-42/uruguay-other-menu-50/4088-entrevista-a-los-obreros-de-la-cooperativa-de-transportes-abc-coop-gestin-obrera-de-colonia-de-sacramento-uruguay.html).

Rivas, Luis (2014), "Trabajadores de Gestion Obrera ABC solidarios con la causa por los 43 de Ayotzinapa", La Izquierda Diario, diciembre.

Zibechi, Raúl (2010), "Una década de fabricas recuperadas: Reinventar la vida desde el trabajo", Programa de las Américas, 3 de noviembre, [www. cipamericas.org/ es / archives / 3515](http://www.cipamericas.org/es/archives/3515).

"La historia de la ABC Cooperativa" (2013), [http://revista.bus-america.com/Notas/ ABC% 20Coop% 20-% 20Control% 20Obrero.htm](http://revista.bus-america.com/Notas/ABC%20Coop%20-%20Control%20Obrero.htm).

UN PROCESO HISTÓRICO DE RECUPERACIÓN DE EMPRESAS

Richard Neville

“Cuando una experiencia social supera los diez años, trasciende el umbral de la supervivencia para plantearse cambiar el mundo. Las fábricas tomadas por sus trabajadores demuestran que el sueño de crear un mundo sin un jefe sigue existiendo y es posible. [...] Una parte de los movimientos sociales no se limitan a la defensa del empleo y el aumento de salarios o al consumo sino que tratan de ir más allá y buscar, ya sea por convicción o por necesidad, superar el vínculo de subordinación asignado a ellos por la sociedad”

(Zibechi, 2010).

El movimiento de empresas recuperadas por los trabajadores uruguayos es parte de una tradición de luchas por la “emancipación económica y social”⁹¹. Tiene sus raíces en la

91 Con referencia a los estatutos de la primera organización de trabajadores creada en 1875: la Federación de la República Oriental del Uruguay o "Federación Montevideana", que es transformada en Federación de Trabajadores de Uruguay en 1885 y luego en Federación de Trabajadores Unión Regional de Uruguay (FORU) en 1905 que permitió lograr la unificación sindical.

historia del movimiento obrero que, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, fue capaz de articular la formación de sindicatos y la creación de un movimiento cooperativo de gran alcance. Las corrientes migratorias de Europa importaron sus ideales socialistas y anarquistas y sus vivencias de luchas que marcarán permanentemente al movimiento obrero uruguayo que se caracteriza en particular por la constante preocupación por la búsqueda de la unificación sindical⁹².

Al mismo tiempo, las organizaciones cooperativas se están desarrollando en estrecha relación con el surgimiento de movimientos sociales, en particular corporaciones.

Repetidamente, las diversas formas cooperativas están estrechamente relacionadas con las corporaciones, por un lado, las cooperativas consumo, de producción y vivienda son creadas por iniciativa de los trabajadores urbanos y, por otro lado, cooperativas agrarias rurales, de ahorro y crédito, creadas por iniciativa de pequeños y medianos productores rurales. A lo largo de su existencia, el movimiento cooperativo ha mantenido su independencia de las autoridades

92 Debido a la Revolución Rusa, la unidad sindical se rompió en 1923 con la creación del Sindicato de Sindicatos de Uruguay (USU) que agrupa a los anarcosindicalistas partidarios de la Revolución Rusa y los militantes del Partido Comunista, y posteriormente con la constitución en 1929 de la Confederación General del Trabajo Uruguayo (CGTU) que agrupa a los pro-estalinistas. El movimiento sindical se encontrará dividido en tres corrientes, FORU, USU y CGTU, y debilitado para hacer frente a la crisis de 1929. En 1964, el sindicalismo clasista se reagrupará y se realizará la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) y el congreso de unificación sindical en 1966. La CNT será declarada ilegal en 1973 al inicio de la dictadura. En 1981, una nueva organización, el Pleno Intersindical de Trabajadores (PIT), se constituirá y se convertirá en el epicentro de la contienda bajo la dictadura. En 1985, cuando regresó la democracia, la central sindical única se convertirá en el PIT-CNT (David-Bellemare, 2011) y la unión se llevará a cabo nuevamente.

públicas. Existen cerca de 300 cooperativas de trabajadores en Uruguay⁹³ (Guerra, 2013: 28).

La recuperación de empresas por trabajadores (ERT) en forma de cooperativa no es una novedad en la historia económica uruguaya.

Retrocediendo en el tiempo, nos encontramos con una historia que data de mediados del siglo XX. Por tanto, es posible hablar de un proceso histórico, aunque se desarrolle principalmente en tiempos de crisis. Si el fenómeno sigue siendo limitado desde el punto de vista cuantitativo, lo cierto es que se trata de un movimiento importante con unidades productivas estratégicas en el ámbito económico del país. La importancia de estas experiencias de administración obrera, que no se puede reducir al número de empresas y trabajadores involucrados, sí tiene un significado simbólico, que es el de la autogestión de los trabajadores (Riero, 2012). En los últimos años, en línea con la cultura obrera uruguaya, este movimiento ha logrado estructurarse y convertirse en interlocutor de las autoridades públicas y forjar estrechas relaciones con la central sindical. También participó en un intento de federar organizaciones de autogestión con miras a la transformación social.

Se suele decir que Uruguay vive al ritmo del gran vecino argentino (dictaduras, crisis económicas, etc.). Además, cuando estalló la crisis de 2002, los efectos fueron comparables y se inició un nuevo proceso de recuperación de

⁹³ En el último censo oficial de población, Uruguay tenía 3.286.314 habitantes, (Fuente Instituto Nacional de Estadística); y una población activa de 1.749.379 personas en 2013.

empresas. Pero el país, no obstante, tiene peculiaridades y cultiva su singularidad. En efecto, el proceso uruguayo se diferencia tanto históricamente de sus homólogos argentino y brasileño como en el enfoque político y sindical: se ha beneficiado, y especialmente en el último período, del apoyo de las autoridades públicas, en particular del Estado, a través de la implementación de políticas públicas favorables. Los sindicatos han jugado un papel fundamental, a veces siendo la iniciativa y el apoyo para la creación de cooperativas.

Un proceso en tres etapas

Los investigadores Martí, Thul y Cancela, que trabajaron desde los archivos de la Federación de Uruguay (FPCU) (www.fcpu.coop), distinguen tres etapas históricas de recuperación. La primera, vinculada a la crisis del modelo de industrialización frente a las importaciones, se desarrolla entre mediados de la década de 1950 y principios de la de 1970. La segunda, producto de la crisis de la deuda externa y la política de apertura, se sitúa entre los inicios de los 80 y los comienzos de los 90. El último está relacionado con la crisis del modelo neoliberal y se sitúa entre finales de la década de 1990 y la actualidad (Martí et al., 2013).

Primera etapa

El primer caso de una empresa recuperada identificada es la Cooperativa de Transporte Paysandú (Copay). En diciembre

de 1952, Renacimiento (ERSA), que prestaba servicios de transporte de pasajeros en el departamento de Paysandú (tercera ciudad del país) desde 1948, solicitó al municipio un aumento significativo del subsidio para continuar su actividad. La comunidad se opuso y la empresa decidió interrumpir el servicio hasta febrero de 1953. Entre las diversas propuestas consideradas por el municipio de Paysandú, se decidió crear, de forma experimental durante un año, una cooperativa con el personal. Esta posibilidad fue apoyada por el alcalde y el ejecutivo departamental. El municipio adquirió los trece vehículos (de los cuales siete estaban en funcionamiento) y se hizo cargo de la importación de repuestos y motores. A cambio, el municipio nombró a un inspector municipal para que interviniera dentro de la cooperativa. En 1956, Copay obtuvo la concesión del transporte urbano por una concesión inicial de diez años. Copay todavía está hoy en funcionamiento.

La Cooperativa de Talleres Mecánicos (Cotame) está ubicada en la misma localidad. Fue creada en 1957, tras la quiebra de los Talleres Mecánicos de Paysandú (Tapaysa), por 14 socios iniciales que compraron el taller. El sindicato de mecánicos local y los fundadores de La Cotame decidieron crear una cooperativa para evitar la pérdida de puestos de trabajo.

Durante este período también nació la Cooperativa de artesanos del vidrio (Codarvi). A principios de la década de 1960, en plena crisis de la industria del vidrio, la empresa Vidaplan decidió cerrar su fábrica de cristal y mantener únicamente la producción de vidrio plano y envases. Ante el riesgo de quedarse sin trabajo, los trabajadores se organizaron

en una cooperativa, renunciaron al seguro de desempleo y negociaron la adquisición de la fábrica. La creación se realizó en base a un convenio con Vidaplan: la cooperativa siguió funcionando en el mismo establecimiento y con las máquinas a cambio de hacerse cargo de las deudas contraídas con el Instituto de Bienestar Social⁹⁴.

Existen todavía otros ejemplos, entre ellos los molinos harineros: la Cooperativa de Trabajadores del Molino Maragata Manuel Artigas (Comma) y la Cooperativa Laboral Américo Caorsi (CTAC). En el caso de Comma, los ex trabajadores de Molino Gramon no triunfaron en mantener su fábrica y compraron otro molino harinero: el molino Américo Caorsi en Sarandi Grande. Posteriormente, la cooperativa se transformó en una sociedad anónima. El CTAC o Caorsi tuvo una trayectoria mucho más larga y aún está activo. Esta experiencia surgió cuando Américo Caorsi, que tenía una actividad de molienda y panadería, se declaró en quiebra tras un incendio. Declarada de utilidad pública por el Parlamento en 1962, la expropiación de la fábrica con sus máquinas, edificios y anexos se materializó en 1964. La cooperativa también recibió ayuda del municipio para restaurar las máquinas y el Parlamento otorgó una subvención. Todavía está en funcionamiento hoy.

En un país que consume gran cantidad de mate, también se puede mencionar la creación en 1966 de la Cooperativa de Producción de Termos (COTER) con la recuperación de la empresa Silbergias. La cooperativa tendrá hasta 300 trabajadores en la década de 1970.

94 Organización en particular a cargo de las prestaciones por desempleo en Uruguay.

La Cooperativa de Artesanos Joyeros (Coarjo), fundada en 1973 cuando el propietario decidió retirarse del mercado y dedicarse a la producción artesanal de cadenas, cruces, medallas, anillos y alianzas.

Estos no son los únicos ejemplos de recuperación empresarial en esta etapa. Un estudio realizado a principios de la década de 1980 sobre cooperativas en Montevideo indicó que el 65% de los socios que se unieron a una cooperativa de producción lo hicieron para mantener sus puestos de trabajo (Martorelli et al., 1982).

Segunda etapa

Se abre con la liberalización de la economía uruguaya iniciada bajo la dictadura militar (1973–1985), que contribuyó a la desindustrialización del país. La importación de productos, favorecida por un dólar infravalorado y reforzada por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y la concentración de ingresos, contribuye entonces a la pérdida de competitividad de las pequeñas y medianas empresas que producen principalmente para el mercado interno y promueven la quiebra.

Un informe de 1989 contabilizaba 210 cooperativas de producción para un total de 8.815 asociados; el 15% de ellas fueron el resultado de un proceso de crisis en las empresas

tradicionales que llevó a los trabajadores a asumir la dirección de la empresa (Errandonea y Supervielle, 1992).

La Cooperativa Unidad Cardiorrespiratoria Emergencia Mobil fue creada en 1987. UCAR fue fundada en 1984 por un grupo de médicos y contadores para garantizar los servicios móviles de salud de emergencia en Montevideo. La costosa inversión iba a ser parcialmente compensada mediante un acuerdo negociado con la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA)⁹⁵, pero esto no se materializó. Ante esta situación, los propietarios propusieron vender los activos para saldar las deudas con los trabajadores. Al notar que los activos no permitían liquidar las deudas, los empleados decidieron hacerse cargo de la gestión. Tras elegir la forma jurídica de sociedad de responsabilidad limitada, constituyeron una cooperativa en 1987. Esta ha crecido hasta contar con más de 200 trabajadores asociados, convirtiéndose en uno de los principales proveedores de servicios médicos de emergencia de la región.

La Librería Cooperativa Cordon (LCC) surge con el cierre en 1995 de la Librería Mínimas, que, creada en 1965, contaba con hasta 200 empleados. En deuda, la empresa cerró en noviembre de 1994. Los empleados inmediatamente tomaron medidas para crear una cooperativa. En febrero de 1995, sus ex empleados decidieron hacerse cargo de la dirección de la empresa, que se convertiría en la primera librería cooperativa

⁹⁵ La Asociación Nacional de Afiliados (ANDA) fue fundada en 1933, opera como un fondo mutuo y brinda servicios de crédito y garantía para alquileres, servicios funerarios, prevención médica, etc. y reúne a más de 100.000 asociados.

de Sudamérica. En tan solo un año logró saldar las deudas sin poder, sin embargo, adquirir el local.

Además de la recuperación de las empresas y la creación de la Barraca Cooperativa Sergio Zeballos que vende equipo de construcción (1993) y la Cooperativa Radio Taxi del Cerro (1993), fue sobre todo en el sector textil, muy afectado por el proceso de apertura comercial, donde se crearon cooperativas. La cooperativa Aurora fue creada por 300 trabajadores de una emblemática fábrica de la industria textil fundada en 1910.

La Fábrica de Algodón Uruguayo (Mausa) comenzó a operar con 80 trabajadores. En ambos casos, los operarios invirtieron su indemnización por despido.

La cooperativa COEPI fue formada por 174 de los 470 trabajadores de la empresa textil PHUASA en febrero de 1993. Comenzó produciendo tejidos e hilos de algodón y poliéster bajo un préstamo contratado con el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU)⁹⁶. Con el fin de compensar una importante deuda del local y las máquinas.

Asimismo, se recuperó Industrias Torino. Fundada por 27 de los 120 empleados, fabricaba ropa y jabones, pero tuvo que enfrentarse a la competencia internacional.

También podemos citar la constitución de la Cooperativa Maderera del Norte (Comanor) que fue creada en 1993 por 48 ex trabajadores de Industria Maderera del Norte (explotación y

⁹⁶ Banco público creado en 1896 y principal banco de Uruguay.

comercialización de madera) en el departamento de Artigas (norte del país).

En la mayoría de los casos, el principal acreedor era el banco estatal, BROU, pero en ese momento los trabajadores recibieron poco apoyo de las autoridades y algunos colapsaron luego de algunos años de actividad.

Tercer paso

Corresponde a la crisis del modelo neoliberal en América del Sur. A partir de 1998, la economía uruguaya entró en recesión y, en 2002, la crisis afectó a toda la economía nacional. En este contexto, se inició el proceso de recuperación de empresas. Entre 1997 y 2004, una veintena de empresas en quiebra, principalmente industriales, fueron absorbidas y transformadas en cooperativa: Colase en 1997 (alimentación), Uruven en 1997 (cuero), Molino Santa Rosa en 1998 y Cofuesa en 2000 (alimentación). Coopima en 2000 y Coopdy en 2001 (textiles), Funsacoop en 2002 (caucho con 240 trabajadores), Ingraco en 2002 (impresión) y Victoria en en 2004 (servicios), etc.

Evoquemos dos casos significativos en esta etapa: la Cooperativa NiboPlast y la Cooperativa de Trabajadores del Molino Santa Rosa.

NiboPlast fue fundada en 1952 para la producción de artículos de plástico. En la década de 1990, la manufactura se

orientó principalmente hacia el sector industrial y abasteció el 80% del mercado. Cuando se cerró NiboPlast, estalló una disputa porque los empleados no solo perdieron sus trabajos, sino que no recibieron su compensación de despido. El sindicato reaccionó rápidamente ocupando la fábrica y evitando su desmantelamiento. La creación de la cooperativa contó con el apoyo activo de la Unión Nacional de Trabajadores de los Sectores Metalmecánicos y Afines (UNTMRA), al que estaban afiliados la mayoría de los trabajadores. La recuperación estuvo impulsada por una treintena de trabajadores, que se caracterizaban por tener una determinada edad y larga antigüedad en la empresa, criterios que complicaban su reintegración al mercado laboral. La constitución de la cooperativa se concretó el 31 de enero del 2000. Ante el riesgo de perder las máquinas no pignoradas de la antigua fábrica, obtuvieron una ubicación en el parque tecnológico industrial Cerro, cedida por el municipio de Montevideo.

El Molino Santa Rosa fue un molino harinero creado en la década de 1920. La Cooperativa de Trabajadores del Molino Santa Rosa fue creada en 1999 en respuesta a la quiebra de la empresa propietaria, Saltram. Al principio, la cooperativa alquilaba la fábrica al dueño anterior para que pudieran trabajar. Tras un desalojo judicial de Saltram, se rescindió el contrato de arrendamiento y se otorgó a la cooperativa el derecho de ocupar la planta como custodio legal. En 2002 se inició un proceso de negociación con el BROU, principal acreedor de la firma, con lo cual se concluyó un compromiso de cesión de derechos en junio de 2004. La cooperativa se convirtió en propietaria de la fábrica a cambio de una hipoteca

sobre las máquinas. Actualmente, emplea a 69 trabajadores, incluidos 57 socios y dos asesores técnicos. Su estrategia de desarrollo y consolidación pasa por fortalecer la cooperación con los distintos actores de la localidad y el departamento.

Este paso tiene algunas peculiaridades. En primer lugar, la recuperación de las empresas se da en un contexto de profunda crisis, provocando el cierre del 35 al 40% de las empresas del país, durante la “crisis del modo de acumulación basado en principios neoliberales”. El desempleo luego cayó del 10% en 1998 al 17% en 2002 (Riero, 2014: 124). En segundo lugar, el proceso ha recibido una importante cobertura mediática y hay un “efecto de contagio” (Marti et al., 2013). Finalmente, el fenómeno se ha convertido en un objeto político y, como tal, se han implementado políticas públicas específicas, como ilustra el apoyo brindado a la Cooperativa de Trabajadores de la Cerámica (CTC).

La lucha emblemática de la CTC

Entre las recientes recuperaciones, se encuentra la ERT uruguaya más importante, la Cooperativa de Trabajadores Cerámicos (CTC) en Empalme Olmos, un pequeño pueblo de 4000 habitantes ubicado a 40 kilómetros de distancia al noreste de Montevideo en el departamento de Canelones. Fundada en 1937, la fábrica perteneció a la empresa Metzen y Cia antes de convertirse en 1945 en Metzen y Sena. Inicialmente empleaba a 40 trabajadores que producían baldosas de barro estilo azulejos valencianos.

Posteriormente, la fábrica amplió su gama de productos con la fabricación de porcelánicos sanitarios (1958), vajilla (1960) y azulejos bajo la marca Olmos, que fue creada en 1942 (www.olmos.com.uy/es/#nosotros). En la década de los 80, la empresa contaba con 2.800 trabajadores y a finales de 2009, cuando se declaró en quiebra, aún quedaban 700, el 90% de los cuales residían en Empalme Olmos.

A partir de entonces, comenzó una larga lucha para evitar la liquidación. Los trabajadores continuaron asegurando el mantenimiento de la herramienta de trabajo y solicitaron cuatro veces el uso temporal de la unidad productiva. Diez meses después, en septiembre de 2010, 450 de ellos, reunidos en junta general, formaron la cooperativa con 62 socios fundadores y el deseo de integrar gradualmente a todos los trabajadores⁹⁷. Posteriormente, consiguieron financiación para volver a poner en funcionamiento la planta. En diciembre de 2010 organizaron un campamento de diecinueve días frente al Parlamento para obtener un préstamo del BROU, acción que conduciría a la creación del Fondo de Desarrollo (Fondes)⁹⁸. En noviembre de 2012, el juez les otorgó el uso provisional de la fábrica y las canteras, además de las ubicadas en el bosque que aún pertenecía a Metzen y Sena. Durante 2013, la CTC recibió un préstamo de 10,8 millones de dólares de Fondes para recuperar la planta y obtener capital de trabajo.

97 www.produccionnacional.com.uy/notas/emprendedores/ex-trabajadores-de-metzen-crearon-ctc-empalme-olmos-5/, «Ex trabajadores de Metzen crearon CTC Empalme Olmos», Producción nacional, 3 septiembre 2010.

98 Creado el 27 de septiembre de 2011 por decreto presidencial, de conformidad con una ley del 24 de diciembre

2010, está destinado principalmente a respaldar las empresas recuperadas y autogestionadas.

La producción comenzó el 1º de julio de 2013, después de un juicio de casi cuatro años. Para Andrés Soca, secretario de la CTC, un año después había 362 trabajadores cooperadores (un tercio de ellos mujeres) y solo diez empleados. La contratación se realiza desde un Lugar de Trabajo donde están registrados todos los ex trabajadores⁹⁹.

El desarrollo de los mercados de exportación ha sido fundamental para mantener la producción. Actualmente, la cooperativa exporta a Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, México y Venezuela. Trabaja con diseñadores italianos y ha introducido cambios significativos en el modo de producción al pasar del gasificador al gas licuado (la energía representa el 40% de los costes de producción).

Muchos trabajadores de CTC están afiliados al Sindicato Único de la Construcción con el que han liderado la lucha. La cooperativa es muy activa dentro de la Asociación Nacional de Empresas Recuperadas por sus Trabajadores (ANERT)¹⁰⁰ y participa en las actividades de la Federación de Cooperativas de Producción de Uruguay (FPCU) y el Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop) (IEEM, 2014). Andrés Soca representó el CLC y fue mandatado por el ANERT con motivo de la 5ª reunión internacional de “Economía de los trabajadores” en Venezuela en julio de 2015.

Finalmente, anotemos, aunque no se trata en rigor de una ERT, la creación de Alas–Uruguay en octubre de 2013 por ex

99 Entrevista el 24 de julio de 2015.

100 Asociación Nacional de Empresas Recuperadas por sus Trabajadores, Video de presentación www.youtube.com/watch?v=Cnp4neK8CLo

trabajadores de la aerolínea La Pluna, que cerró en 2012 tras setenta y seis años de actividad, la más tiempo bajo el estatus de empresa pública antes de ser parcialmente privatizado. Proporciona pequeños enlaces dentro del Mercosur y con Chile y es la única aerolínea del país.

Durante las tres etapas de la recuperación empresarial en Uruguay, en muchos casos, los trabajadores recibieron ayudas sustanciales que les permitieron enfrentar situaciones críticas y aprovechar oportunidades. El Estado uruguayo ha estado “presente como factor de recuperación a lo largo de la historia y particularmente durante la primera y tercera etapa”. Los sindicatos también han jugado un papel fundamental (Marti et al., 2013).

Magnitud y características del proceso

Existen diferentes fuentes para analizar el impacto real de las ERT en Uruguay. En una investigación realizada en 2008, la socióloga Anabel Rieiro realizó una encuesta entre 20 ERT identificadas como tales (Rieiro, 2008). Con motivo del IV Encuentro Internacional “La economía de los trabajadores” en 2013 en Brasil, evocó las cifras de 30 ERT activas y más de 3.000 trabajadores (Rieiro, 2014: 124; 2012).

Durante la segunda encuesta nacional de cooperativas realizada en 2008 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se identificaron 30 cooperativas surgidas del proceso de recuperación (INE, 2010). Las tres cuartas partes empleaban a menos de 50 asociados. La gran mayoría fueron el resultado de

la crisis de 2002: 20 ERT lo habían hecho entre 1998 y 2008, incluyendo 17 antes de 2002. En términos de actividad, nueve estaban en manufactura, seis en transporte y cinco en educación. Un censo realizado a solicitud del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTSS) en 2009, también contabilizó 30 (Martínez, 2012). Las ERT representaron el 10,6% de las 284 cooperativas de producción del país (Guerra, 2013) 1.

Según las investigaciones realizadas en 2013 por Pablo Guerra, existían 40 ERTs, cuatro de las cuales estaban en condición de sociedad limitada (Ebigold, Urutransfor, Noblemark y Dyrus) y 36 en condición de cooperativa (Guerra, 2013: 29). En noviembre de 2014, con motivo de la Cumbre Internacional de Cooperativas de Quebec, el autor menciona la cifra de 41 ERT, 37 de las cuales tienen carácter cooperativo (Guerra, 2014: 541). Por lo tanto, retendremos este último número que es el más reciente, aunque notamos que ninguna encuesta es exhaustiva: la experiencia de ABC Cooperativa (Servicio de transporte en autobús en Colonia do Sacramento) no aparece en ninguna lista.

Al igual que en Argentina, el debate se centró en la denominación de estas experiencias: se mencionaron los términos “autogestionado”, “ocupado y tomado”, “usurpado”, “reconvertido”, “recuperado”. Finalmente, es este último término el que se adoptó en referencia a la definición propuesta por Andrés Ruggeri:

Un proceso social y económico que presupone la existencia de una empresa anterior, operando bajo el modelo de una empresa capitalista tradicional, [...] cuyo

proceso de quiebra, liquidación o inviabilidad ha llevado a sus trabajadores a luchar para volver a ponerla en funcionamiento, operando en formas autogestionadas (Ruggeri et al., 2005: 23).

Pablo Guerra da una definición ligeramente diferente considerándolo como un negocio recuperado:

Unidad económica formada por trabajadores con experiencia laboral previa común y que en conjunto gestionan al menos parte de los activos (tangibles o intangibles), provenientes de la empresa en la que trabajaban como empleados (Guerra, 2013: 29).

Desde este punto de vista, puede haber casos que, aunque se acerquen al concepto, no puedan ser considerados como tales. Guerra cita en particular a la Cooperativa de Trabajadores Emprendimiento Popular Alimentario (CTEPA), formado a raíz de un conflicto sindical de 20 trabajadores de dos empresas diferentes. En la medida en que las empresas capitalistas continúen operando en el mercado y sus ex trabajadores no hayan recuperado la marca, máquinas, herramientas o dominios de su anterior empleador, la CTEPA no puede contarse como ERT (Guerra, 2013).

Las 37 ERT con estatus de cooperativa están representadas principalmente en el sector industrial (59%). Se dividen en alimentos (7), textiles y prendas de vestir (6), metalurgia (3), impresión (2), cuero (2), cerámica (1) y caucho (1) con Funsacoop, que durante mucho tiempo ha sido el más grande con 240 trabajadores, superado en 2.013 por la CTC que cuenta

con 360 trabajadores. El resto de las ERT se encuentran en el sector servicios (41%): educación (8), servicios varios (3) transporte (2), librerías (1) y salud (1)¹⁰¹.

Pablo Guerra estima que solo “el 44% de las ERT son totalmente autogestionadas en la medida en que el 56% de ellas emplean trabajadores en relación de dependencia”. Precisa que el único sector donde la norma legislativa que limita la proporción de empleados al 20% es el de educación. Se ilustra su punto de vista a partir de la encuesta llevada a cabo en cuatro colegios: de un total de 202 trabajadores, solamente 74 están asociados, se deduce que más del 60% de los trabajadores están, por tanto, en una relación de dependencia. Para el autor, “no se puede hablar en estas condiciones de empresas autogestionadas aunque se hayan recuperado”. Sin embargo, las entrevistas individuales han demostrado que algunos cooperativistas tienen dificultades para asociar a los profesores por falta de interés o por razones puramente económicas, en la medida en que solo imparten unas pocas horas lectivas en los establecimientos. Por tanto, no sería solo una cuestión de motivación en un sector particular donde el volumen de negocios es significativo. (Guerra, 2013).

Hasta donde sabemos, ningún estudio indica con precisión el número de trabajadores involucrados en el fenómeno de la recuperación de empresas. Según un comunicado de Daniel Placeres, director de ANERT (mayo de 2014), hay más de 3.000

101 Declaración del autor de este artículo a partir de datos de la lista establecida por Pablo Guerra en 2014.

trabajadores en las ERT uruguayas¹⁰². Esta cifra corrobora la mencionada anteriormente por Anabel Rieiro (Rieiro, 2014: 124). La cultura laboral y la voluntad de las ERT, si se deja de lado el sector educativo, la tasa de trabajadores asociados y participación es generalmente alta.

Como en Argentina y Brasil, la apropiación de los medios de producción no se da desde una perspectiva ideológica, sino que resulta de acciones colectivas en respuesta a la amenaza de exclusión simbolizada por el cierre del lugar de trabajo en un contexto de crisis generalizada. Al apropiarse de la empresa, los trabajadores inician un proceso de aprendizaje de prácticas colectivas de toma de decisiones en asamblea que no conocían en su cultura anterior. Las empresas industriales recuperadas se caracterizan por una existencia media de cuarenta años, en los que hubo una fuerte presencia sindical (el 60% de los trabajadores estaban sindicalizados con una permanencia media en la empresa de dieciocho años), con reivindicaciones clásicas, como la defensa de salarios y condiciones laborales. Dependiendo del caso, hay matices en el modo de gestión porque el “proceso es heterogéneo pero la recuperación es siempre un proceso dinámico que depende del número de trabajadores, del sector de actividad, de la cohesión del grupo, de la historia de la empresa, etc.” (Rieiro, 2014: 125).

Para Anabel Rieiro, si inicialmente la autogestión se ve como una forma de preservar el trabajo, entonces existen dos caminos posibles. Por un lado, se reducen las acciones colectivas. Una vez que se reinicia la producción, “la

102 Entrevista a Daniel Placeres, director de ANERT, *El Telégrafo*, 21 de mayo de 2014.

preocupación central es la supervivencia en el mercado capitalista. El proceso puede caracterizarse como un cambio de propietario individual a nuevo propietario colectivo corporativo”. Por otro lado, las acciones colectivas pueden renovarse:

Algunos trabajadores están comenzando a ofrecer la autogestión no solo como medio de recuperación sino también como herramienta política para promover la transición a otro tipo de sociedad. Del proceso de recuperación y la lucha por los medios de producción surgen nuevas prácticas y subjetividades políticas que trascienden el proyecto productivo (Rieiro, 2012).

Este dilema es inherente a los distintos movimientos de recuperación (Argentina, Brasil, etc.) con, en algunos casos, la estricta preservación de los puestos de trabajo en propiedad colectiva y una adaptación más o menos clásica a los imperativos del mercado y, para otros, la iniciación de un proceso de autogestión que no se reduce a cambios en las prácticas y organización de la producción sino que pone en perspectiva la transformación de la sociedad, dando carácter emancipatorio a estas experiencias. La estructuración del movimiento también puede convertirse en una herramienta para contribuir al mismo.

Un campo social autogestionario en construcción

Durante las dos primeras etapas históricas, las ERT se afiliaron a la FCPU y mantuvieron estrechas relaciones con el movimiento sindical y no habrían buscado organizarse de manera autónoma. A partir de la crisis de 2002, a medida que el proceso se aceleraba, las ERT sintieron la necesidad de organizarse. En 2010, también se intentó federar diversas organizaciones en la búsqueda de una transformación social sobre una base de autogestión.

Entre 2002 y 2007, varias ERT se agruparon en el sector industrial dentro de la central sindical PIT–CNT¹⁰³. Con la crisis de 2002 se formaron diferentes espacios colectivos en las empresas. Se establecen nuevas relaciones sociales y dinámicas de toma de decisiones que plantean la cuestión de la recuperación. A partir de 2003, algunas ERT comenzaron a agruparse en organismos nacionales y se organizaron reuniones en 2003 y 2004 en conjunto con el departamento de industria y agroalimentación de la central sindical PIT–CNT. También desarrollan intercambios de información y participan en reuniones regionales (Argentina, Brasil y Venezuela). En octubre de 2005, una delegación de trabajadores uruguayos participó en el encuentro latinoamericano de ERT organizado en Venezuela por Hugo Chávez. A fines de 2005, Venezuela y Uruguay firman un convenio de cooperación que prevé que el

103 La Plenaria Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT–CNT) es la única confederación sindical uruguaya. Su nombre actual proviene por un lado de la Convención Nacional de trabajadores (CNT) creada en 1964 y proscrita tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, y de otra parte del Pleno Intersyndicale des Travailleurs (PIT), creado en 1982, cuando la junta militar concedió una relativa liberalización del régimen. El 1 de mayo de 1984 se reanudó la confederación con el nombre inicial de CNT, sin abandonar la sigla PIT. El PIT-CNT ahora tiene 64 federaciones sindicales, con 200.000 miembros, 150.000 de los cuales contribuyen regularmente (ver David-Bellemare, 2011).

gobierno venezolano brindará apoyo financiero para la reactivación de tres emblemáticas empresas uruguayas recuperadas: Funsa, Unsa, Uruven y Envridrio.

En octubre de 2007, las empresas recuperadas crearon la Asociación Nacional de Empresas Recuperadas de Trabajadores (ANERT), una asociación autónoma del movimiento sindical aunque mantiene estrechos vínculos con él. Su objetivo es abordar una serie de desafíos relacionados con cuestiones legales, políticas y económicas. Sin embargo, las empresas siguen afiliadas a la FCPU. ANERT se convierte rápidamente en un interlocutor reconocido por las autoridades políticas. Hoy agrupa a una veintena de empresas recuperadas.

Durante el año 2010, en un contexto político favorable, se creó la Mesa de Autogestión y Construcción Colectiva (Mepacc) con el objetivo de transformar la realidad social a través de la autogestión. Agrupa a la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda Mutua (Fucvam), la FCPU, ANERT, la Red de Economía Social y Solidaria (RESS) y la Universidad de la República (UdelaR).

Las organizaciones partieron del “postulado de que la autogestión no solo sirve para desarrollar empresas sino que puede ser una forma de gestionar la realidad y la sociedad en general”. Convencidos de “que desde los principios de la autogestión, es posible sentar las bases de una sociedad más justa e inclusiva”, los actores de Mepacc definieron tres ejes de discusión: 1) la construcción de una plataforma de acción; 2) la necesidad de entablar un debate público sobre la autogestión con los funcionarios gubernamentales; 3) la creación de redes

de solidaridad y el impulso de nuevas relaciones sociales a través de la participación directa (Rieiro, 2014: 131).

Pero este espacio abierto a la reflexión y la acción no dura mucho y fracasa tras un desacuerdo sobre la forma de estructuración y concepción política. ANERT quería crear una organización con un liderazgo integrado por las diferentes entidades, pero también planteó la cuestión de la representación y la participación partidista. Se retiró en 2011.

En abril de 2012 se habilitó un nuevo espacio de articulación con el sindicato central, el “Pleno Nacional de Empresas Autogestionadas por Trabajadores”, que agrupa a ANERT, FPCU y PIT–CNT. Hay una inclinación a mantener relaciones con el poder político y, durante el segundo encuentro, varios representantes del gobierno y el presidente de la República, José Mujica¹⁰⁴ (2010–2015), participan.

Si las prácticas de autogestión analizadas emergen como estrategias de lucha contra el desempleo, primero empezaron a organizarse en el movimiento sindical para luego optar por una agrupación independiente. La evolución del fenómeno muestra que las alianzas están resurgiendo y que hay posibilidades de que estas experiencias encuentren su lugar en el movimiento sindical (Rieiro, 2012).

104 José, llamado Pepe, Mujica fue presidente de la República (2010-2015). Pertenece a Movimiento de participación popular (liderado por exguerrilleros Tupamaros), miembro del Frente Amplio.

La innegable utilidad del fondo de desarrollo

A más de diez años de la crisis económica y con la llegada al poder del Frente Amplio¹⁰⁵, el fenómeno de la recuperación de las empresas por parte de sus trabajadores, fuera de su contexto de emergencia, ha crecido lentamente y podemos decir que se encuentra en un nuevo marco de oportunidades. En Uruguay, existen políticas públicas orientadas al sector, en particular a través del Fondes, cuyo objetivo es asistir y apoyar financieramente proyectos productivos impulsados por grupos de trabajadores que detentan el capital y la dirección de las empresas, en particular las gestionadas de acuerdo con los principios de la autogestión.

El surgimiento de nuevas experiencias de recuperación en Uruguay también debe observarse a través de un nuevo contexto político, sumado a la experiencia acumulada por las ERT en la última década, que promueve la autogestión de los trabajadores como una posibilidad concreta, visible y productiva con reconocimiento social. Diferente a las primeras empresas recuperadas, desprovistas de referentes ideológicos, entendidas como experiencias de socialización de las fuerzas productivas para resistir el empleo en un contexto de crisis, el nuevo marco de oportunidades se beneficia del apoyo de determinados sectores del Estado y del movimiento de autogestión que promueven la autogestión como proyecto de transformación económico-cultural.

105 El Frente Amplio es una coalición de partidos de izquierda y centro izquierda, creada en 1971, que agrupa a 21 organizaciones, entre otras, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Demócrata Cristiano, escisión de los partidos Blanco y Colorado, el Movimiento popular (liderado por ex guerrilleros tupamaros). Llega al poder en 2004 con la primera elección de Tabaré Vázquez como presidente de la República.

El fenómeno de la recuperación uruguaya, por lo tanto, se beneficiará de políticas públicas más favorables que en Argentina. Así, en julio de 2004, la ley de cooperativas de trabajo da la posibilidad al juez de otorgar el uso de la infraestructura de la empresa antes de que la cooperativa sea creada por los trabajadores y, para compensar la falta de capital, permite a los trabajadores solicitar el anticipo del monto total de sus prestaciones por desempleo para aumentar el capital social.

Por voluntad personal de *Pepe Mujica*, muchas veces contra sectores influyentes del Frente Amplio y del PIT-CNT, su mandato estuvo marcado por avances innegables y la implementación de políticas específicas para las ERT. Éste, que había calificado la autogestión como “la mejor de las utopías” hace una clara distinción entre las ERT y la empresa capitalista en la que “los trabajadores trabajan para otros” y donde hay “explotación del hombre por el hombre”. Y, previendo un proyecto a largo plazo basado en estas experiencias, añade que “algún día los trabajadores tendrán que gestionar la sociedad”¹⁰⁶. Expresa así su fuerte interés por estas experiencias en las que percibe una mayor implicación de la clase trabajadora en un proyecto mayor que el de una simple empresa autogestionada (Guerra, 2014).

El 27 de septiembre de 2011, Mujica creó mediante decreto presidencial el Fondo de Desarrollo (Fondes), cuya posibilidad fue posible gracias a una ley de diciembre de 2010. Este fondo tiene como objetivo impulsar sectores estratégicos

106 José Mujica, entrevista a *La Diaria*, 27 de septiembre de 2012.

“con especial atención a los proyectos autogestionados en donde la propiedad del capital, la dirección y el trabajo se combinan” (art. 1) y el decreto es inequívoco, se trata de “privilegiar las empresas económicas con la participación de los trabajadores en la dirección y el capital en casos particulares de autogestión...” (Art. 3)¹⁰⁷. Esta herramienta ayuda a apoyar a un sector alternativo que tiene dificultades para acceder al crédito. Se divide en cuatro líneas presupuestarias: fondo de asistencia técnica no reembolsable, fondo de garantía de crédito, fondo de financiamiento, fondo financiero semilla y capital de riesgo. En abril de 2013, un decreto añadió un quinto subfondo: el fondo de inmovilizado. En 2012, cuatro empresas (incluidas tres ERT) pudieron beneficiarse del Fondo y en 2013, hubo trece, en particular CTC (principal beneficiario) y Alas-U (experiencias mencionadas anteriormente). Según Guerra, “los principales beneficiarios fueron las empresas autogestionadas que, en circunstancias difíciles, pudieron obtener préstamos con un impacto positivo en términos de trabajo y empleo generado” (Guerra, 2014).

Esta iniciativa presidencial ha suscitado muchas críticas, como era de esperar del sector empresarial capitalista, que habla de discriminación en beneficio de empresas que no están en condiciones de solicitar líneas de crédito en el mercado. Pero también por parte de ciertos sectores sindicales que no ven favorablemente las empresas dirigidas por trabajadores, considerando que no se puede ser empresario y trabajador en una economía de mercado y dentro del gobierno, particularmente en la aerolínea Alas-U. Por su parte, el

107 Uruguay (2011). Decreto 341/011, Montevideo, Ministerio de Economía y Finanzas.

movimiento cooperativo está a favor. El principal apoyo vino de las ERT, las cooperativas de trabajo (FPCU), la mayoría del PIT–CNT, la izquierda más autogestionada y el sector Mujica dentro del Frente Amplio, el Movimiento de Participación Popular (MPP) (Guerra, 2014). Con el regreso de Tabaré Vázquez a la presidencia en marzo de 2015¹⁰⁸, las líneas presupuestarias y las prioridades del Fondo, principalmente destinadas al sector de la autogestión, son objeto de un serio debate en el gobierno y los servicios estatales. Sin embargo, la herramienta no sería cuestionada porque fue legalmente consolidada por la potencia anterior.

Aunque reciente, el Fondes parece ser una herramienta importante para las empresas autogestionadas, ha permitido la recuperación de empresas como la ex Metzen y Sena o Paylana (que emplean a varios centenares de cooperativistas). Mientras que las ERT anteriores, como Molino Santa Rosa o FUNSA, tuvieron que atravesar caminos políticos y financieros complejos para obtener apoyo, las nuevas generaciones de ERT pueden contar con un nuevo instrumento concreto al que pueden recurrir para iniciar y consolidar la recuperación de sus Herramienta de trabajo.

En Uruguay, el movimiento de toma de empresas por parte de los trabajadores se caracteriza por tres etapas concomitantes con las principales crisis ocurridas en las últimas seis décadas. Por lo tanto, es parte de un proceso histórico que

108 Tabaré Ramón Vázquez Rosas, líder del Partido Socialista, miembro de la coalición Frente Amplio, fue Presidente de la República desde el 1 de marzo de 2005 al 1 de marzo de 2010 (primer presidente de Uruguay). Lo es nuevamente desde el 1 de marzo de 2015 para reemplazar a José Mujica. Se caracteriza por posiciones políticas moderadas a nivel económico, social e internacional.

se basa profundamente en la cultura y la memoria de la clase trabajadora de este país. La tercera etapa, resultado de la crisis de 2002, fue la más importante y permitió en particular estructurar el movimiento y establecer una nueva forma de articulación con el sindicato central, conjugando en un enfoque dialéctico, al mismo tiempo la autonomía y la integración en él. Esta configuración, sin embargo, no está libre de discordancias, pero se distingue claramente de los procesos argentino y brasileño o, más en general, de la tensión permanente entre sindicalismo y autogestión. Este último paso también se da en un contexto político más favorable que trae nuevas oportunidades, en el que la aprehensión del fenómeno contrasta con los países vecinos. En efecto, las políticas públicas no se pueden interpretar únicamente como resultado de una acumulación de fuerzas del sector autogestionario, también han sido impulsadas por el Estado. A diferencia de la Federación de Cooperativas de Vivienda (Fucvam) en constante disputa con el Estado, ANERT adopta un registro de relaciones menos conflictivas en la inevitable contradicción con el poder. Esta postura del movimiento de ERT no está exenta de responsabilidad en el fracaso del intento de federar varias organizaciones dentro de la Mepacc, cuyo objetivo era esbozar una perspectiva de transformación social sobre una base de la autogestión.

En un país históricamente reformista, muy centrado en el Estado y amortiguador de los conflictos sociales, como puede ser Uruguay, “la recuperación de empresas surge primero como una forma de acción directa, lo que significa que el conflicto no se institucionaliza y se renueva el repertorio de luchas existentes”. La importancia de estas experiencias de

autogestión en el ámbito productivo no se reduce al número de empresas y trabajadores involucrados, sino al impacto simbólico que tiene la autogestión de los trabajadores en términos de apertura de realidad y posibilidad. Estas “rupturas culturales permiten que surjan ciertas contradicciones latentes al generar nuevos debates que representan un potencial de renovación política en la sociedad” (Rieiro, 2012).

septiembre de 2015

Para saber más:

Bertullo, Jorge, Gabriel Isola, Diego Castro, Milton Silveira (2003), *El cooperativismo en Uruguay*, Red universitaria de las Américas en estudios cooperativos y asociativismo.

Burdin, Gabriel (2003), “Autogestión en Uruguay: Economía social y empresas sin patronos”, *Brecha*, 30 de agosto.

Cantera, Valeria y Sebastian Pérez (2015), “Autogestión empresarial: El caso uruguayo”, *Hambre des industries d’Uruguay*, mayo; www.ciu.com.uy/innovaportal/file/14317/1/autogestion_empresarial.pdf.

Collective (2010), *Gestion obrera: del fragmento a la acción colectiva*, Montevideo, Nordan / Comunidad del Sur.

David–Bellemare, Étienne (2011), *El movimiento sindical en Uruguay: trayectoria contemporánea y nuevas perspectivas para el plenario intersindical de trabajadores–Convención Nacional de Trabajadores (PIT–CNT)*, Montreal, Universidad de Quebec en Montreal.

Errandonea, Alfredo y Marcos Supervielle (1992), *Las cooperativas en el Uruguay. Análisis sociológico del primer relevamiento nacional de entidades cooperativas*, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria.

Gatti, Daniel (2014), “La única fábrica de cerámicas del país está de vuelta gracias a sus trabajadores”, Revista Ajena, 5 de junio, www.revistaajena.com/la-fabrica/.

Grupo de estudios y acción libertaria (GEAL) (2004), *Orígenes del movimiento obrero en Uruguay*, Montevideo.

Guerra, Pablo (2013), *Autogestión empresarial en Uruguay – Análisis de caso del Fondes*, Facultad de Derecho – Universidad de la República, septiembre, www.fder.edu.uy/publicaciones/dt1.pdf.

Guerra, Pablo (2014), *Promoción del empleo autogestionado en empresas recuperadas: El caso de desarrollo (Fondes) en Uruguay*, Quebec, Cumbre internacional de cooperativas.

Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2010), *Censo Nacional de Cooperativas y Sociedades de Fomento rural (2008–2009)*.

Marti, Juan Pablo, Florencia Thul y Valentina Cancela (2013), *Las empresas recuperadas como cooperativas de trabajo en Uruguay: entre la crisis y la oportunidad*, Montevideo.

Martínez, Álvaro (2012), “El Fondes se convertirá en banco y apoyara a empresas privadas”, Semanario Crónicas.

Martorelli y col. (1982), *El cooperativismo en la situación socioeconómica del Uruguay actual: El caso de las cooperativas de producción de Montevideo*, Montevideo, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo.

- Olivari, Jorge R. (2010), "Empresas recuperadas por trabajadoras y trabajadores en el Uruguay. Entre la fundación y la funcionalidad", en Collectif, *Gestion obrera: del fragmento a la acción*, Montevideo, Nordan / Comunidad del Sur.
- Puerto, Virginia (2010) "Unidades productivas recuperadas. Los caminos hacia la reconstrucción de la fuente de trabajo. El caso de MidobeEs", en Collectif, *Gestion obrera: del fragmento a la accion colectiva*, Montévideo, Nordan / Comunidad del Sur.
- Rieiro, Anabel (2008), "Cooperativismo y sindicalismo en Uruguay: Retomando los aportes de Marx y Gramsci para el caso de las empresas recuperadas por sus trabajadores en Uruguay", *Revista Estudios Cooperativos*, n ° 1, 13º grado.
- Rieiro, Anabel (2010), "Sujetos colectivos y recuperacion del trabajo en un contexto de reificacion", en *Gestion obrera: del fragmento a la accion colectiva*, Montevideo, Nordan / Comunidad del Sur.
- Rieiro, Anabel (2012), "Representación y democracia: sujetos colectivos en el campo de la autogestión", *Osera*, n ° 7, 2º semestre.
- Rieiro, Anabel (2014), "Sujetos colectivos autogestionarios y política pública en Uruguay", en Andrés Ruggeri, Henrique T. Novaes y Mauncio Sarda de Faria (eds.), *Crisis y autogestión en el siglo XXI: Cooperativas y empresas recuperadas en tiempos de neoliberalismo*, Buenos Aires, Continente.
- Andrés Ruggeri y col. (2005), *Las empresas recuperadas en la Argentina: Informe del segundo relevamiento del programa*, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, Facultad de filosofía y letras.

Zibechi, Raúl (2010), “Una década de fabricas recuperadas: Reinventar la vida desde el trabajo”, Programa de las Américas, 3 de noviembre, www.cipamericas.org/es/archives/3515.

LOS URBANITAS SIN TIERRA

Richard Neuville

La ciudad no es un conjunto de viviendas. Aunque todos los seres humanos necesitan un techo, la ciudad se construye de forma colectiva y cooperativa. La experiencia uruguaya de construir viviendas a través de la ayuda mutua es un referente mundial, en particular porque va mucho más allá del techo (Zibechi, 2011). En Uruguay, el Estado nunca ha dejado de favorecer los intereses de la burguesía nacional mediante la acumulación de tierras y la construcción de viviendas.

Es evidente la ausencia de una política que promueva el acceso a la vivienda para todos. En un país donde el movimiento cooperativo está presente en todos los sectores de la economía y donde el movimiento obrero ha sido fuertemente influenciado por corrientes clasistas, el surgimiento a fines de la década de 1960 de un poderoso movimiento de cooperativas de vivienda ha permitido conquistar un marco legal favorable. Las luchas de los “urbanos sin tierra” son la expresión de uno de los rasgos más interesantes del movimiento popular en América Latina.

Un movimiento obrero “clasista”

La historia sindical es un factor determinante en el origen de las luchas actuales. Las primeras uniones nacieron a finales del siglo XIX, bajo el liderazgo de la emigración europea. Estas corrientes migratorias importaron sus ideales socialistas y anarquistas y sus vivencias de luchas. En ese momento, el movimiento obrero estuvo influenciado mayoritariamente por las ideas de Bakunin y Kropotkin. Practica la ayuda mutua y difunde los ideales de emancipación social. Bajo su influencia, se desarrollan “sociedades de resistencia” y organizaciones cooperativas y construyen alternativas de producción y fuentes de ingresos para apoyar a los huelguistas (GEAL, 2004).

En 1905, la Federación Regional de Trabajadores de Uruguay (FORU) se convirtió en la principal herramienta de lucha obrera. De inspiración anarquista, se caracteriza por la acción directa y apunta a la huelga general revolucionaria. Se inicia un proceso de institucionalización con la llegada al poder de José Battle y Ordóñez¹⁰⁹ en 1903 y la hegemonía relativa de la FORU fue golpeada un poco más tarde por la revolución rusa.

El movimiento sindical se vio debilitado y dividido entre proestalinistas y anarcosindicalistas para enfrentar la crisis de 1929. Los valores subversivos contruidos por los trabajadores

109 Presidente de la República de 1903 a 1907 y de 1911 a 1915, de inspiración liberal y modernizador, dirigió durante un cuarto de siglo el partido Colorado, representante de la burguesía y los estratos medios urbanos. El otro gran partido es el partido Blanco, que representa terratenientes y pastores del interior del país. Estos dos partidos creados en 1836 dominará la vida política nacional hasta 2005.

continuaron encarnándose hasta la década de 1950, mediante la intervención en otros sectores como las cooperativas y varios campos contraculturales. Hoy, esta tradición de lucha antiautoritaria continúa y se expresa a través de organizaciones de desempleados y estudiantes, comisiones de autogestión, radios comunitarias y cooperativas en las que continúa el afán de emancipación.

En 1964, el sindicalismo de clase se reagrupa en la Convención Nacional de Trabajadores (CNT). Fue declarada ilegal en 1973 al inicio de la dictadura, pero el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT), creado en 1981, se convirtió en el epicentro de la contienda contra la dictadura y contribuyó a su derrocamiento en 1985.

Con el regreso de la democracia, el PIT–CNT se convierte en la central única de trabajadores.

Con el acercamiento de la victoria del Frente Amplio¹¹⁰ a nivel nacional, se forman dos corrientes: una, que aglutina a los militantes de los partidos socialista y comunista, que tiene como objetivo “aunar la lucha parlamentaria y las luchas sociales en un espíritu de cooperación y apoyo mutuo” y la otra formada por el movimiento de participación popular y la corriente de izquierda, que considera que el movimiento de relación sindical con un posible gobierno progresista debe estar liderada por la independencia de clase [...] y, en ningún caso, debería aceptar subordinarse a las directivas del gobierno o de

110 Coalición de partidos de izquierda y centro izquierda, creada en 1971, que agrupa a 21 organizaciones, entre otros, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Demócrata Cristiano, escisiones de los partidos Blanco y Colorado, el Movimiento de Participación Popular (animado por exguerrilleros Tupamaros).

cualquier fuerza política progresista “(David–Bellemare, 2011: 15).

Bajo la presidencia de Tabaré Vázquez¹¹¹, comienza un acercamiento con las autoridades, pero para Raul Zibechi (2007), el PIT–CNT logra preservar su autonomía.

Un denso tejido cooperativo

El movimiento cooperativo uruguayo también tiene sus orígenes a finales del siglo XIX y realizó su evolución estrechamente vinculado a la aparición de los movimientos sociales, especialmente las corporaciones, sindicatos, etc. En 1870, los trabajadores tipográficos, influenciados por las ideas de Proudhon y Bakunin, crearon la primera sociedad de ayuda mutua, la Sociéte typographique montevidéenne, que se unió a la Asociación Internacional de Trabajadores (Federación Jura) en 1872¹¹².

En 1889 se crearon en Montevideo las primeras cooperativas de consumo y producción de los “trabajadores tipográficos” y posteriormente se desarrollaron otras formas en el interior del país, como las uniones de crédito y las uniones agrícolas cristianas (Bertullo, 2003: 6). Desde la década de 1890, los

111 Presidente de la República (2004-2009) y Alcalde de Montevideo (1990-1995) con el apoyo del Frente Amplio, del que fue director principal (1996-2005).

112 Después de la división en el Congreso de la AIT en La Haya en 1872, tras el enfrentamiento entre "mutualistas" y "colectivistas" anarquistas de Bakunin y marxistas, los "jurásicos" constituyen una nueva Internacional denominada "antiautoritaria" que aglutina a las federaciones hostiles al Consejo General.

ateneos libertarios van en aumento y el Centro Internacional de Estudios Sociales que reúne a trabajadores e intelectuales juega un papel clave en 1898 al ofrecer clases nocturnas y conferencias sobre la cuestión social. Ayuda a construir una cultura alternativa al margen del sistema educativo formal. Este didacticismo mutuo marcó a varias generaciones de trabajadores y no solo a los libertarios (GEAL 2004). De manera recurrente, las diferentes formas cooperativas están íntimamente ligadas a las corporaciones, estando por un lado las cooperativas de consumo, producción y vivienda creadas a iniciativa de los asalariados urbanos y, por el otro, las cooperativas rurales agrarias, de ahorro y crédito creadas por instigación de pequeños y medianos productores rurales.

Si en la década de 1940, el Estado legisló y permitió así el desarrollo del movimiento cooperativo, mantuvo la independencia de las autoridades públicas (Bertullo, 2003: 5). Éste, a diferencia de otros movimientos sociales, se despliega particularmente en el interior del país, con la excepción de las cooperativas de vivienda concentradas principalmente en la capital.

Políticas públicas liberales

Uruguay está históricamente marcado por un modelo de acumulación de tierras donde el tema de la vivienda ha sido poco apoyado por el Estado. En la segunda mitad del siglo XIX, las políticas liberales se limitan a estimular al sector privado promoviendo la construcción de viviendas mediante la venta

de tierras del Estado. No fue hasta la década de 1930 que el Estado comenzó a abordar el problema de la vivienda (Aristondo, 2003). Durante el período (1930–1973), el Estado quiso ser un poco más intervencionista legislando sobre el uso del suelo, la calidad del hábitat y la vivienda social: ley catastral (1933), de urbanismo (1939), Ley de Normas de Higiene de la Vivienda (1928), creación del Instituto Nacional de Vivienda Económica (1937). La congelación de la renta urbana, introducida por la creación de los consejos salariales (1943), resulta ser, de hecho, la primera medida reguladora del mercado. A principios de la década de 1960, Uruguay se incorporó a los diversos procesos de desarrollo regional: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Alianza para el Progreso, promovida por Estados Unidos para contener las tendencias revolucionarias de los países de América del Sur (Folléas, 2012). La vivienda se convierte en una de las prioridades frente al malestar social en un contexto de estancamiento económico, por lo que el gobierno uruguayo creó una comisión interministerial para establecer un diagnóstico de la situación habitacional.

En 1966, la creación de tres cooperativas de vivienda en el interior del país con la colaboración del Centro Cooperativo Uruguayo desafiará a las autoridades. El Parlamento aprobó la Ley Nacional de Vivienda en diciembre de 1968, que estableció un marco legal para la promoción de programas de vivienda social, a través de dos métodos de gestión: la “ayuda mutua” o el “ahorro previo” y dos estatutos: cooperativas de usuarios o de propietarios. En el proceso, se crearon dos federaciones: la Federación de cooperativas de vivienda para usuarios por ahorro previo (Fecovi) en 1969 y la Federación de cooperativas

de vivienda para usuarios por ayuda mutua (Fucvam) en 1970. Esta última, como instrumento de contrapoder, con una función afirmada de autogestión, jugará un papel decisivo en las movilizaciones junto a los “urbanos sin tierra” durante las próximas décadas.

Cuarenta años después, la situación de la vivienda sigue siendo complicada porque el Estado y los municipios nunca la han convertido en una prioridad. Se observa un déficit de 80.000 viviendas en todo el país y parte del stock está cualitativamente degradado¹¹³.

Durante su campaña electoral en 2008, José “Pepe” Mujica¹¹⁴ había anunciado la creación de cien mil viviendas durante su mandato. Pero una vez más, la implementación se retrasó...

Sin embargo, Fucvam cree que bajo su presidencia, el diálogo fue más fácil que con los gobiernos anteriores, lo que resultó en la concesión de un número significativamente mayor de préstamos.

Además, se promulgó un decreto presidencial que permite la participación del Estado para ayudar a las familias que tienen dificultades para pagar sus préstamos¹¹⁵.

113 Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes, el 90% de la población vive en áreas urbanas, de los cuales 40% en Montevideo. Solo en la capital, hay cerca de 500 casas y 80 edificios abandonadas, 55.000 viviendas desocupadas y casi 300.000 personas sin hogar (Jablon 2009) y 110 barrios marginales.

114 José "Pepe" Mujica, ex Tupamaro, fue Presidente de la República de 2009 a 2015, sucedió a Tabaré Vázquez.

115 Entrevista realizada a Waldemar Pera, miembro de la junta nacional de Fucvam en 8 de octubre de 2014 en Montevideo.

Las sucesivas políticas habitacionales han favorecido la propiedad individual de la vivienda y se mantienen orientadas principalmente hacia los estratos medios, a través del acceso al crédito ofrecido por el Banco Hipotecario de Uruguay.

El mercado de la vivienda para los grupos desfavorecidos todavía está controlado por actores privados.

El FUCVAM: un movimiento popular autónomo

Su creación está asociada al proceso de acumulación de fuerzas, aglutina a la clase trabajadora y otros sectores sociales: intelectuales, estudiantes y jubilados. Es la principal y más activa organización social uruguaya en el campo de la vivienda popular y el desarrollo urbano. Agrupa a más de 600 cooperativas de base en todo el país y actualmente se están creando 80. Las apoya en las distintas etapas de su desarrollo: proyecto, construcción y gestión. Agrupa a 25.000 familias de ingresos bajos y medios, representativas de un amplio segmento de trabajadores. Las cooperativas están compuestas principalmente por trabajadores de servicios, empleados del sector público y trabajadores industriales, que están fuertemente sindicalizados.

Con la precariedad del empleo, que ha afectado a Uruguay desde hace una década, varias cooperativas compuestas principalmente por empleados del “sector informal” de la economía han emergido sobre bases territoriales a iniciativa de colectivos de vecinos o áreas de ocupación informal

(Golluccio, 2011). Las cooperativas de ayuda mutua se basan en la participación activa de los socios en las tareas de construcción de viviendas, 80 horas mensuales de trabajo solidario y dotación de personal cualificado. Este aporte de ayuda mutua sumado a los de la cooperativa corresponde al 15% del valor máximo de la construcción. El 85% restante lo cubre el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización (FNVU). El tamaño de las cooperativas de usuarios o propietarios oscila entre diez y doscientos asociados. La cooperativa administra la propiedad colectiva y los miembros son los usuarios. Tienen un derecho de uso que pueden revender a la cooperativa en caso de su salida o traspasar en herencia a miembros de su familia. A cambio de este derecho habitual, los cooperadores pagan una cuota mensual a la cooperativa.

El modelo desarrollado durante los cuarenta y cinco años de lucha de Fucvam tiene como objetivo garantizar una vivienda digna y se basa en cuatro principios intangibles:

- *La ayuda mutua*: si la autoconstrucción representa el 15% del valor total de la construcción, en realidad permite un ahorro mucho mayor, del orden del 30 al 40%, debido a la ausencia de costos de construcción, mano de obra e intermediarios. Sobre todo, permite agrupar y federar grupos de vecinos, en los que las mujeres ocupan un lugar importante.

- *La autogestión*: permite la puesta en común de recursos y desarrolla en la conciencia de los trabajadores su capacidad para transformar su calidad de vida.

- *La democracia directa*: los miembros participan directamente en el proceso de la toma de decisiones; la representación es limitada y solo puede ejercerse en estricto cumplimiento de las decisiones adoptadas.

- *La propiedad colectiva*: la cooperativa es propietaria de los terrenos y edificios, los cooperadores tienen el uso de los mismos a través del capital social que poseen.

Fucvam juega un papel decisivo a través de aportes logísticos, legales, técnicos y políticos que brinda a los trabajadores que se organizan en cooperativas con miras a acceder a una vivienda digna. Dispone de centro de formación, instalaciones deportivas, residencias universitarias, campamentos de verano, bibliotecas, guarderías, clínicas, desarrolla numerosas acciones de educación popular y publica un periódico. Está en marcha la creación de una primera escuela. Desde hace una década, en alianza con el Centro Cooperativo Sueco, viene desarrollando acciones solidarias y promoviendo el modelo uruguayo en Argentina, Bolivia, Brasil, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, El Salvador, pero también en Cuba y en el Estado español.



Fucvam constituye un verdadero contrapoder con una fuerte capacidad de movilización y un anclaje en el movimiento social, como en el marco de su participación en la lucha por la gestión del agua. Afirma claramente su objetivo emancipatorio, incluso “anticapitalista”.

Tres olas de movilizaciones

Las cooperativas de vivienda agrupadas en Fucvam son el resultado de tres grandes oleadas de luchas por el suelo urbano.

Entre 1970 y 1972, más del 40% de las asignaciones de vivienda pública se destinaron al movimiento cooperativo y durante este período nacieron alrededor de 150 cooperativas en todo el país (Zibechi, 2007). La dictadura militar (1973–1985) frenó el desarrollo de las cooperativas reprimiéndolas fuertemente y tratando de transformarlas en propiedad individual (Golluccio, 2011). Pero Fucvam resistió y

lanzó una petición en 1984 que recolectó 33.000 firmas en Montevideo.

Con el regreso de la democracia, los asentamientos urbanos ilegales se multiplicaron y, en 1989, tras la elección de Tabaré Vázquez del Frente Amplio como alcalde de Montevideo, se iniciaron negociaciones con el movimiento cooperativo para identificar la tierra. Durante la década de 1990, 250 cooperativas obtuvieron acceso a la tierra y algunas de ellas comenzaron a construir viviendas. Al mismo tiempo, Fucvam lanzó una ola de movilizaciones, en particular ocupando los ministerios de vivienda y economía y tierras disponibles o abandonadas. Las ocupaciones de 1989 constituyen un punto de inflexión para el movimiento y los “urbanitas sin tierra” aparecen al frente del escenario.

La tercera ola de movilizaciones se desarrolló en 2006, poco después de la victoria del Frente Amplio a nivel estatal. Cerca de un centenar de agrupaciones cooperativas en la lucha por la tierra se forman para denunciar la política habitacional tras una década de ajuste estructural. En octubre de 2006, decidieron ocupar un terreno propiedad de la empresa pública de ferrocarriles que había estado abandonado durante cuarenta años. Obtuvieron veinte lotes de tierra y allí se establecieron cuarenta cooperativas. Pero, como el Movimiento de Campesinos Sin Tierra (MST) en Brasil, el movimiento ha de hacer frente a la represión de un gobierno de izquierda. En 2007, el Parlamento incluso aprobó una ley que fortaleció el aparato represivo contra las ocupaciones de tierras. Esto de ninguna manera desalienta a Fucvam que, junto con los trabajadores rurales, ocupa 32 hectáreas de tierra en

Montevideo y organiza marchas en julio de 2007 para denunciar la criminalización estatal de las ocupaciones. Con estas acciones, Fucvam pretende denunciar el modelo económico, el incumplimiento de los compromisos gubernamentales en materia de construcción de viviendas y la falta de gestión de la emigración rural (Zibechi, 2007).

Con el acceso a la presidencia de José “Pepe” Mujica en 2009, las tensiones disminuyen pero el ex tupamaro divide al movimiento social. A través de los préstamos financieros necesarios para la construcción, las autoridades inicialmente favorecieron al PIT–CNT más “conciliador” en detrimento del Fucvam, más “autónomo”. En 2011, el PIT–CNT concluyó un convenio para un plan de construcción de 10.000 viviendas de bajo costo con el gobierno y el otorgamiento de terrenos por parte del municipio de Montevideo. La central sindical tiene la intención de desarrollar cooperativas de vivienda para sus miembros de bajos ingresos sin apoyo financiero previo. La principal crítica del PIT–CNT frente al Fucvam se refiere al número de horas mensuales de trabajo solidario, el sindicato ofrece viviendas prefabricadas y una cotización mensual limitada a 36 horas. Pero, para Gustavo González¹¹⁶, el “plan de vivienda sindical inaugura un nuevo estilo de vivienda para los trabajadores, que realmente contrasta con lo que las cooperativas vienen impulsando por ayuda mutua desde hace cuatro décadas”. Para Fucvam, el “plan sindical” es paradójico por decir lo menos porque consiste en crear “cooperativas de propietarios” y de hecho promover la propiedad privada, más que el concepto de propiedad colectiva. Inspirado en Raúl

116 Gustavo González fue secretario general y presidente de Fucvam.

Zibechi, el movimiento cooperativo es parte de una lógica diferente, se trata sobre todo de construir “hábitats” y no solo viviendas, para diseñar una alternativa urbana con un tejido social y cooperativo, no solo capaz de edificar sino también de construir una sociedad emancipadora (González, 2010). De hecho, la participación activa de los socios en las tareas de construcción rompe la alienación de la división capitalista del trabajo.

Las probadas insuficiencias de las políticas de vivienda social y la escasa oferta del sector del alquiler¹¹⁷ fueron factores decisivos para el desarrollo de las cooperativas, lo que sin duda constituye un recurso de acceso a la vivienda para los hogares de bajos ingresos. El sector cooperativo ha demostrado ampliamente su capacidad para crear viviendas de calidad para los hogares que no pueden acceder al mercado inmobiliario privado. El acceso a este modelo, sin embargo, queda condicionado para los futuros cooperativistas a criterios económicos y de estabilidad laboral, además la oferta de las federaciones se mantiene por debajo de la demanda porque depende de la voluntad política de los municipios o departamentos. Para el acceso a la tierra del Estado para acceso a préstamos (Folléas, 2012). Gustavo González no niega que “la capacidad de integrar trabajadores informales sin experiencia sindical sigue siendo compleja”, pero considera que “si el modelo de cooperativas de vivienda no puede ser el único, sin embargo constituye una alternativa real” (Zibechi, 2011).

117 La vivienda en alquiler representa solo el 30% del parque de viviendas.

En Uruguay quedan por conquistar los derechos de acceso a la tierra y la vivienda, este es el principal desafío de los movimientos sociales. El uso de la tierra y el cuestionamiento de la propiedad privada están en el centro de la lucha de los “urbanos sin tierra” y los asentamientos se desarrollan en las afueras de Montevideo a pesar de un contexto económico más favorable al empleo. El gobierno del Frente Amplio permanece sordo a ciertas demandas, el presupuesto de vivienda se mantiene estable. Durante la campaña electoral de otoño de 2014, Fucvam pidió a los candidatos presidenciales que se comprometieran finalmente a gravar las viviendas vacías para abastecer el fondo de vivienda. ¿Se dará seguimiento finalmente a esta demanda? En Uruguay, la vivienda sigue siendo un bien cuando debería ser un derecho.

Mayo de 2015

Para saber más:

Aristondo, Martín y Graciela Laura (2003), “Cooperativismo, autoayuda y autogestión: Una alternativa uruguaya para la vivienda de interés social”, *Scripta Nova, Revista e electrónica de geografía y ciencias sociales*, Barcelona, Universidad de Barcelona, vol. 7, no 146.

Bertullo, Jorge et al. (2003), “El cooperativismo en Uruguay, Red universitaria de las Américas en estudios cooperativos y

asociativismo”, Montevideo, Universitaria de las Américas en estudios cooperativos y asociativismo, www.universidad.edu.uy/pmb/opac_css/doc_num.php?expl_num_id=323.

David–Bellemare, Étienne (2011), “El movimiento sindical en Uruguay: trayectoria contemporánea y nuevas perspectivas para el plenario intersindical de trabajadores–Convención Nacional de Trabajadores (PIT–CNT)”, Montreal, Universidad de Quebec en Montreal (UQAM).

Folléas, Sarah (2012), “Cooperativas de vivienda en Uruguay: una producción de oferta de vivienda por parte del tercer sector”, Métropoliques, 18 de enero.

Fucvam, www.fucvam.org.uy.

Golluccio, Audrey (2011), “Cooperativas de habitantes en el exterior”, Fiche Uruguay, Habicoop, marzo.

González, Gustavo (2010), “La vivienda popular uruguaya, Uruguay: mas alla de la vivienda”, Montevideo, 8 de enero, <http://blogdegustavogonzalez.blogspot.es/2010/01/la-vivienda-popular-uruguaya.html>.

Grupo de estudios y acción libertaria (GEAL) (2004), *Orígenes del movimiento obrero en Uruguay*, Montevideo, 2004, trad. y publicación del Syndicat intercorporatif anarcho–syndicaliste de Caen.

Jablon Hismuel (2009), *Formas alternativas - Acceso a la vivienda para hogares de bajos ingresos: El aporte de experiencias extranjeras*, Misión de estudio.

González, Gustavo y Benjamin Nahoum (coord.) (2014), “La vivienda, entre el derecho y la mercancía: Las formas de propiedad en América latina”, Montevideo, Trilce.

Nahoum, Benjamin (2013), *Algunas claves: Reflexiones sobre aspectos esenciales de la vivienda cooperativa por ayuda mutua*, Montevideo, Trilce.

Zibechi, Raúl (2007), “Cooperativas de vivienda en Uruguay: los urbanos sin tierra”, RISAL, 21 de septiembre, <http://risal.collectifs.net/spip.php?article2332>.

Zibechi, Raúl (2011), “Acerca del libro Los Sin Tierra urbanos: Sin tierra urbanos. Construir vivienda o hacer ciudad”, Brecha, 3 de agosto, Montevideo, <http://blogde-gustavogonzalez.blogspot.fr/2011/08/reportaje-semanario-brecha-uruguay.html>.

Zibechi, Raúl (2011), “Plan de vivienda sindical: Y la nave va”, Brecha, 11 de agosto.

VENEZUELA

AYUNTAMIENTOS Y DOBLE PODER

Richard Neville

Contrapoder, doble poder... el proceso de ruptura bolivariana es un intermedio donde lo viejo se quiebra y lo nuevo aparece, se crea y prospera. Contrariamente a las apariencias mediáticas, la dinámica política y social actual no se puede reducir a las brillantes acciones de Hugo Chávez. Nacen y se desarrollan órganos de poder popular que la Constitución legitima.

La experiencia bolivariana se caracteriza por formas de democracia y planificación participativa y popular sin precedentes en esta escala. Un formidable punto de apoyo a las luchas sociales y políticas en todo el continente sudamericano, su dinámica de autoorganización popular fortalece la resistencia a la oligarquía económica y a la burocracia administrativa y política en el país. No exento de críticas, sin embargo, se muestra lo que podría ser un “socialismo del siglo XXI”

El proceso bolivariano sigue siendo extraordinariamente heterogéneo ideológicamente. Sobre todo, se radicalizó gracias a una ejemplar movilización del movimiento popular (Lander, 2009).

Iniciado desde hace una década, el proceso revolucionario bolivariano ha suscitado mucha controversia y a menudo ha sido caricaturizado en el mundo occidental porque no solo constituyó una ruptura radical con el modelo dominante en Venezuela, sino que también desafió la hegemonía imperial de Estados Unidos. Además, tuvo una profunda repercusión en todo el subcontinente latinoamericano, donde se ha convertido en un referente, incluso un modelo para los pueblos, los actores sociales y políticos de esta región. En términos más generales, tiene un interés real en muchos actores del movimiento altermundista. Este cambio lo encarna, en particular, Hugo Chávez, el líder carismático, que a veces es percibido de manera mítica por los pueblos latinoamericanos y como un referente esencial dentro de la izquierda de la transformación social en Europa. Sin lugar a dudas, su elección en 1998 permitió cambiar la vida de millones de venezolanos y modificar radicalmente las estructuras institucionales, económicas y sociales del país, poniendo la participación activa en el centro del proceso.

Es evidente que la ruptura lograda no se reduce a la retórica única del presidente de la República y su estilo teatral. La ausencia de análisis sobre los fundamentos de este carisma oscurecería la compleja dialéctica que existe entre la base y el líder y que en parte caracteriza el cambio. Asimismo, la crítica al excesivo centralismo del proceso no parece muy

creíble. En efecto, el poder autónomo y alternativo, que ha surgido en los últimos años, tenderá a demostrar que es capaz de confrontar directamente las estructuras estatales existentes. Citemos los Concejos municipales y las comunas socialistas que permitieron dar pasos importantes hacia el desarrollo de una democracia más completa y profunda y actualizar el concepto de “doble poder”. Esto surgió durante la experiencia de la Comuna insurreccional de París en 1792, que jugó un papel esencial de poder dual frente a la Convención Nacional al crear instituciones de democracia directa.

En su libro sobre la Comuna de 1871, Marx desarrolla la idea de los consejos democráticos. Posteriormente, Lenin antes de su ascenso al poder, evoca un “tipo de poder diferente”, distinto de las democracias burguesas existentes (Lenin, 2007). El poder popular sí da un carácter especial a la revolución bolivariana, lo que probablemente se ha convertido en uno de los más importantes acontecimientos políticos del principio del siglo XXI.

Para comprender mejor el proceso democrático en marcha, es útil evocar el punto de inflexión de 1989 en Venezuela y la génesis del proyecto bolivariano. Desde un principio, es objetivo prioritario acabar con el sistema de representación y confiscación del poder de la IV República. Así, en 1999, la democracia participativa fue consagrada como derecho inalienable en la nueva Constitución. El poder popular es fundamental para la supervivencia y profundización del proceso, como lo demuestran las distintas fases que ha atravesado. A partir de 2002, las primeras formas participativas demostraron un entusiasmo real y una participación efectiva

de la población en los órganos de gestión como los consejos locales de planificación pública (CLPP). A partir de 2003, la implementación de los programas sociales, las Misiones sociales, solo confirmaron esta necesidad de ser actor y ser reconocido como ciudadano, particularmente a través del acceso a derechos fundamentales como la salud y la educación. En materia de economía social, el trabajador es plenamente reconocido a través de su implicación en el desarrollo de las cooperativas y su participación en la gestión de empresas expropiadas. Finalmente, la ley de 2006 relativa a la implementación de los consejos municipales constituye una etapa adicional en la democracia activa y el establecimiento del “poder dual”. Estos organismos responden claramente a la aspiración de las poblaciones de hacerse cargo de su destino decidiendo directamente las inversiones en sus lugares de vida.

El fin de la “excepción venezolana”

El año 1989 constituye un punto de inflexión en la historia del país, es el fin de la “excepción venezolana” (Ellner, 2003). En febrero, la masiva y espontánea revuelta popular, el Caracazo, fue duramente reprimida, cobrando más de 3.000 víctimas. Revela un agravamiento de las tensiones sociales que se reflejaron en la vida cotidiana y, particularmente, en el espacio político en años anteriores. Tan pronto como llegó al poder y, en contra de sus compromisos, Carlos Andrés Pérez (1989–1993) decidió implementar reformas neoliberales y

aplicar el “tratamiento de choque” impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que constituye una clara ruptura con el pasado.

Desde el fin de la dictadura en 1958, los gobiernos habían adoptado una estrategia de intervencionismo en la economía y proteccionismo para apoyar la industria nacional. El “ajuste estructural” también marca una ruptura en el consenso político, el pacto de Punto Fijo¹¹⁸, que había sido un pilar del sistema político venezolano desde 1958. Antes de 1989, Venezuela era vista como un escaparate de la democracia latinoamericana, en la medida en que hubo elecciones regulares, alternancia de partidos en el poder¹¹⁹ y respeto a los principales derechos humanos. Era una “sociedad centralizada por el Estado, caracterizada como socialdemócrata y desarrollista” (Lander, 2007: 65–86). Durante las tres décadas que precedieron, el país conoció una estabilidad política que culminó con la revuelta popular y el intento de golpe de Estado cívico–militar de 1992 que resultó de ella. Éstos tienen, en efecto, un eco rotundo en la juventud popular y en las organizaciones de base de los *cerros*, las colinas donde se concentran los barrios obreros y los barrios marginales de Caracas.

Durante la década de los noventa, el descontento general superó con creces las movilizaciones y disturbios espontáneos,

118 Pacto celebrado en 1958 entre los partidos que contribuyeron al derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez. El Partido Comunista será rápidamente excluido y pasará a la clandestinidad. Una parte del PCV integrará a la guerrilla.

119 En el poder entre 1958 y 1994: Acción Democrática (AD), el Partido Socialdemócrata y el Comité de organización política electoral independiente (COPEI), Demócrata cristiano.

y fue emergiendo una transformación radical del viejo sistema de partidos políticos que dominaba el país. El abandono de las políticas redistributivas, la privatización de grandes sectores de la economía y la transferencia de la industria al capital extranjero empeoran considerablemente las condiciones de vida de gran parte de la población del país. La tasa de pobreza sube abruptamente y pasa del 35% al 80% entre 1989 y 1998. El abismo entre el pueblo y el sistema bipartidista centralizado, apoyado por la burguesía, crece inexorablemente. Bajo la presidencia de Rafael Caldera (1994–1998), demócrata cristiano aliado de un partido de izquierda, la Causa Radical (LCR), las políticas liberales continúan y las desigualdades continúan ampliándose.

Desde 1994, Hugo Chávez y el Movimiento Bolivariano Revolucionario–200 (MBR–200)¹²⁰ están convencidos de la necesidad de romper con las políticas neoliberales y acabar con el sistema representativo centralizado que se basa únicamente en los partidos, legado de la Constitución de 1961 y del pacto de 1958. La reconstrucción del país y la sustitución de la 4ª República se imponen. Se pronuncian a favor de una asamblea constituyente y la renacionalización del petróleo y sectores clave de la economía. En 1997, haciéndose eco de la aspiración de los movimientos sociales, formularon la idea de desarrollar la democracia participativa, en la que el pueblo será el “protagonista” del cambio. La democracia no puede limitarse a la delegación de poder, que se ha agotado. Hugo Chávez, por

120 Creado en 1982 por oficiales jóvenes, el movimiento permaneció clandestino hasta 1997, cuando se registró ante el Consejo Supremo Electoral para participar en las elecciones. Ha creado para ello una estructura electoral, bajo el nombre de Movimiento Quinta República (MVR).

tanto, piensa que es fundamental “sustituir el modelo de democracia liberal representativa por un modelo de democracia participativa en el que se reconozca al pueblo como actor principal” (Lander y Navarrete, 2008).

La democracia participativa en el corazón de la nueva Constitución

Elegido Presidente de la República con el 56,7% de los votos en diciembre de 1998, Hugo Chávez asumió el cargo el 4 de febrero de 1999, de conformidad con la Constitución vigente. En los días posteriores a su llegada al Palacio de Miraflores, firmó un decreto y convocó a referéndum para cambiar la Constitución de la IV República y así deshacerse parcialmente del patrimonio institucional de la llamada “democracia petrolera”. En abril se elige la Asamblea Constituyente (el 92% de los miembros provienen del Polo Patriótico)¹²¹, realiza una amplia consulta con la población. La participación de la sociedad civil es muy activa y se están creando muchas redes formales e informativas para redactar propuestas y participar en la redacción de la nueva Constitución. Se forman grupos de lectura de forma espontánea para estudiar, comprender y defender el texto. Estos luego se convierten en Círculos Bolivarianos, comités revolucionarios de barrio, que apoyan a Chávez pero también rechazan los intentos de formalizar la

121 En 1998, el Polo Patriótico estaba integrado principalmente por el MVR (Movimiento por la 5a República) creado en 1997 y resultado del MBR-200, el PPT (Patrie pour tous) creado en 1997, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) creado en 1931, del Movimiento al Socialismo (MAS) creado en 1971 y resultado del PCV y el Movimiento Electoral Popular (MEP) creado en 1967.

revolución. La Constitución fue adoptada el 15 de diciembre de 1999 con el 71% de los votos.

La Constitución Bolivariana innova en muchas áreas e incluso servirá de referencia para los nuevos poderes en Bolivia y Ecuador. Establece dos poderes adicionales al clásico tríptico (ejecutivo, legislativo y judicial): el poder ciudadano (Defensor del Pueblo, Procurador General de la República y Controlador General de la República) y el poder electoral (Consejo Nacional Electoral). En el preámbulo afirma: “El objetivo supremo de la reconstrucción de la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagonista, multiétnica y pluricultural en un estado de justicia, federal y descentralizada.”

El derecho de los ciudadanos a participar libremente en los asuntos públicos, en forma “directa, semidirecta o indirecta” se declara fundamental en el Título IV. Este derecho se entiende en sentido amplio, tiene como objetivo promover la participación de la población en “procesos de formación, ejecución y control de la gestión de los asuntos públicos y es el medio necesario para hacer del ciudadano el actor principal en el proceso garantizando su pleno desarrollo, tanto individual como colectivo. Es deber del Estado y deber de la sociedad facilitar la creación de las condiciones más favorables para su ejercicio” (art. 62).

Existen varios instrumentos de participación directa, como los distintos referendos (consultivo, abrogatorio, revocatorio), legislativo, constitucional, de iniciativa constituyente y asambleas ciudadanas (art. 70). La Constitución también prevé

la posibilidad de destitución a mitad de período de todas las funciones electivas y limita la renovación de mandatos (art. 72, que se revisará en febrero de 2009). Se alienta a las comunidades organizadas a participar en los consejos locales de planificación pública a nivel municipal (art. 182), en las juntas de planificación y coordinación de políticas públicas de cada estado (art. 166) 338 y en el Consejo Federal de Gobierno, a nivel nacional (art.185).

En el plano económico y social, facilita la actuación de órganos de cogestión y autogestión a través de la “participación de los trabajadores en la gestión de empresas públicas” y la “gestión de empresas en forma cooperativa y empresas comunitarias. De servicios a promover el empleo” y “cualquier forma de asociación guiada por los valores de cooperación mutua y solidaridad”. También especifica que “la ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los estados y municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos organizados de habitantes, los servicios que administran, siempre que tengan la capacidad para atenderlos” (art. 184). Este artículo servirá de referencia en 2006 para la creación de los Concejos municipales.

Roland Denis, autogestionario y exministro de Planificación, define la experiencia de la Asamblea Constituyente como un avance indiscutible, cuyas repercusiones van mucho más allá del territorio venezolano: “Si hay un legado que nos ha dejado la revolución bolivariana en el orden de las luchas por la emancipación, es precisamente la herencia constitutiva, un elemento que se ha extendido por el continente como una

matriz de luchas completamente distinta de la vieja concepción de la toma del poder y el liderazgo evolutivo” (Denis, 2003).

La participación ciudadana en el trabajo de la Asamblea Constituyente y la aprobación de la nueva Constitución, sin duda, crean las condiciones para una transformación social y política del país y permiten contar con la gente para superar las difíciles etapas del proceso y construir una nueva hegemonía.

Las fases del proceso bolivariano

Para Edgardo Lander y Pablo Navarrete (2008: 182–183), este proceso atravesó cuatro fases cruciales para su supervivencia y su profundización, pero la democracia participativa, definida como una noción alternativa a la democracia liberal, fue el eje político permanente y preponderante del “Chavismo”.

El primer período es entre la asunción del cargo de Chávez y la promulgación de las cuarenta y nueve leyes “habilitantes” en noviembre de 2001, que transforman profundamente la economía venezolana y aglutinan intereses heterogéneos opuestos al proyecto bolivariano, como la ley de hidrocarburos que interrumpe el proceso de privatización de PDVSA, la empresa pública petrolera, la ley de tierras que permite iniciar la reforma agraria y la ley de pesca que protege la pesca artesanal del apetito de los industriales.

El segundo, que se prolongó hasta mediados de 2003, durante el cual se inició una pugna con la oposición por el control estatal, dio lugar a una serie de cierres patronales en el sector petrolero y acciones políticas insurreccionales de la oposición (golpe de Estado de abril de 2002).

Durante la tercera fase, cuando la oposición es derrotada con considerable apoyo popular, las autoridades bolivarianas aceleran las reformas y recuperan la gestión de la petrolera PDVSA. Durante 2003, el gobierno pasó a la ofensiva y lanzó programas sociales, “misiones sociales”. Para ello, pasa por alto la burocracia institucional (heredada del poder anterior y que bloquea todas las decisiones del poder) y se apoya en la movilización para implementar la participación de capas populares.

La elección presidencial de diciembre de 2006 marca el inicio de la cuarta fase y consolida la etapa de la “Venezuela socialista”. El 30 de enero de 2005, Hugo Chávez mencionó por primera vez, durante un acto con motivo del 5^º Foro Social Mundial de Porto Alegre, la necesidad de crear un “socialismo del siglo XXI” y se pronunció por el fortalecimiento del poder popular:

Es una cuestión de empezar a abrir el camino para la construcción de una sociedad socialista donde la gente y la gran mayoría popular sean los protagonistas, por lo que son la fuerza y la organización de ésta, que señalen la dirección y definan los objetivos (Acosta, 2007: 21–29).

Este concepto, no definido con precisión, se basa sin embargo en tres ejes precisos: el énfasis en la democracia participativa sobre la representativa, la prioridad dada a la economía social y el desarrollo endógeno, y finalmente la integración latinoamericana y la multipolaridad (Lander y Navarrete, 2008: 183).

Durante estas cuatro fases, el poder popular ha seguido fortaleciéndose y desempeñando un papel fundamental. La participación fue plenamente reconocida por la Constitución; las organizaciones de base (Círculos Bolivarianos, Tupamaros, etc.) y el pueblo permitieron que Chávez regresara a la presidencia durante el golpe; los estratos populares participaron directamente en la implementación de los programas sociales; y finalmente pudieron organizarse dentro de los consejos municipales. Para Steve Ellner (2009a: 31–34), el proceso ha pasado de la moderación al antiliberalismo (fases 1 y 2), y posteriormente al surgimiento de un nuevo modelo (fases 3 y 4).

Reformas para una participación popular efectiva. Los Consejos locales de planificación pública

En 2002, la ley de consejos locales de planificación pública (CLPP) contribuirá al desarrollo de la democracia participativa y el control de la gestión pública. Establece la participación del pueblo en la formulación, ejecución y control de las políticas públicas. Es parte de un sistema de planificación participativa a

nivel nacional, estatal, municipal, distrital y comunal. El objetivo es animar a los municipios a trabajar con comunidades organizadas. Es un espacio de cogestión donde las dos autoridades deciden conjuntamente sobre inversiones. Los habituales intervienen en la elaboración de presupuestos y programas adecuados a sus necesidades e intereses. Los CLPP les permiten realizar proyectos que consideran prioritarios. Esta herramienta de participación ciudadana tiene como objetivo lograr un desarrollo equilibrado del territorio. Los CLPP tienen tres funciones principales: participan en la planificación, deben promover la autogestión transfiriendo competencias a las comunidades locales y también contribuyen al control social de la gestión pública.

Los miembros provienen de diferentes sectores de la sociedad civil y son elegidos por asambleas de ciudadanos representativos de la diversidad. Los CLPP aparecen entonces como instituciones de participación ciudadana. Permiten la aparición de nuevos jugadores. Jessica Brandler Weinreb (2009: 78) realizó una encuesta en la que observó que son principalmente las mujeres las que han intervenido en los CLPP porque estas organizaciones requieren trabajo voluntario y una fuerte participación individual. Las mujeres que ingresan al CLPP provienen de diversos orígenes sociales, con predominio de la clase media baja y la clase trabajadora. Tienen un cierto grado de “cultura social” y muestran diversas opiniones políticas. A diferencia de otras experiencias en América Latina, los CLPP deben implementarse en todos los municipios. Sin embargo, la aplicación ha sido desigual.

Las Misiones sociales

A partir del segundo trimestre de 2003, el gobierno lanzó una serie de programas sociales basados en la movilización popular: salud, educación, empleo, distribución de tierras, alimentos y acceso al deporte y la cultura. Por lo tanto, pretende eludir las burocracias en los ministerios, estados y municipios, que han seguido frenando los planes de gobierno. La nueva política social se fundamenta en valores que sitúan al ser humano en el centro de la acción social, como ciudadano activo, involucrándolo directamente en la organización, desarrollo, implementación y gestión, control de las políticas y programas públicos.

Se trata de una política social integral, que no se resigna al éxito de objetivos limitados y al manejo parcial de la pobreza, sino que se plantea como objetivo superarla a través de la universalidad y la acción transversal de los programas. La educación, la salud y la vivienda se integran en el marco de la seguridad social universal. La satisfacción de las necesidades sociales es reconocida como un derecho inalienable de todos los venezolanos. A través de estas medidas se busca garantizar el goce de los derechos sociales en forma universal y equitativa, mejorar la distribución de la riqueza, fortalecer la participación social y generar poder ciudadano en los espacios públicos de toma de decisiones (Neuville, 2005: 11 –25).

Estos programas afectan hasta al 65% de la población. “En los últimos años, un millón y medio de personas se benefician del

programa de alfabetización, del acceso a la medicina gratuita de proximidad, 120 mil familias han sido beneficiadas con la reforma agraria, miles de estudiantes acceden a la universidad, miles de trabajadores se benefician de la iniciación al cooperativismo”, agregó. “Los ‘sin papeles’ están regularizados, 3,5 millones de personas están conectadas a la red de distribución de agua potable.

Los bancos se ven obligados a dedicar parte de sus préstamos a la economía social y se está desarrollando toda una red de cooperativas.

El cambio social es real y las vidas de los pobres han cambiado. Pero sobre todo, la población se involucra en la gestión de estos programas a través de los distintos comités técnicos de gestión de agua, suelo, vivienda, salud, abastecimiento, etc. Las comisiones técnicas del agua y los consejos comunitarios del agua son sin duda las experiencias más ricas y sistemáticas de gestión pública participativa. Las empresas públicas de agua ayudan a organizar las comunidades para que, a su vez, participen en la gestión de estas empresas.

Economía social y desarrollo endógeno

Promulgada en septiembre de 2001, la ley de cooperativas inicialmente tuvo efectos limitados, pero a partir de 2004 y la implementación del “nuevo modelo de

desarrollo”, estas estructuras experimentaron un verdadero auge. El modo de desarrollo se define como “endógeno”¹²² y se centra principalmente en la economía social, como opción estratégica.

En marzo de 2004, para combatir la pobreza y crear empleo se lanzó la Misión *Vuelvan Caras*. Se trata de “cambiar el modelo económico, social, político y cultural del país, para instaurar un estado de justicia y derecho apoyado en un desarrollo socioeconómico endógeno” (MINEP, 2005). Se organiza la formación cooperativa y se crean núcleos de desarrollo endógeno (NUDE) en los sectores de turismo, agricultura, servicios e industria. Entre diciembre de 2004 y mayo de 2005 se capacitó a más de 250.000 personas en los valores del cooperativismo. En septiembre de 2004, el gobierno creó el Ministerio de Economía Popular (MINEP) para institucionalizar el programa *Vuelvan Caras*, promover el NUDE y coordinar el trabajo de las instituciones de crédito. Se considera que las cooperativas son un componente esencial de “un modelo económico orientado al bienestar colectivo más que a la acumulación de capital” (MINEP, 2005). En las bases, sobre todo en Caracas y en el Estado de Guyana, están surgiendo consejos de autogestión con el objetivo de crear redes productivas autogestionadas y redes de distribución para emanciparse de las redes capitalistas.

Uno de los ejemplos más reveladores de desarrollo endógeno es el lanzamiento por parte del gobierno de una cadena de supermercados, Mercal. Este fue creado para evitar

122 Concepto inspirado en las ideas de Osvaldo Sunkel (1993).

la escasez de 2002, provocada por los adversarios del poder durante el golpe de Estado. En tres años, Mercal cuenta con 14.000 puntos de venta, ubicados en barrios pobres y donde los productos básicos se venden a precios entre un 20% y un 50% más baratos que los del mercado. Rápidamente se convirtió en la principal cadena de distribución y la segunda empresa más grande del país. Sus establecimientos atraen una clientela de todas las tendencias políticas gracias a sus bajos precios y la calidad de sus productos. Con el fin de promover la soberanía alimentaria, Mercal está aumentando gradualmente su proporción de proveedores nacionales favoreciendo a las cooperativas.

Estas medidas están dando resultados importantes. De 800 cooperativas y 20.000 asociados en 1998, el país pasó entre 2003 y finales de 2006 de 8.000 a 160.000 cooperativas y a un millón y medio de miembros. Entre 2003 y 2005, la tasa oficial de desempleo cayó del 18% al 11,5%. Los cooperadores trabajan principalmente en cuatro sectores: 31% en comercio y hoteles, 29% en transporte, logística y comunicaciones, 18% en agricultura y pesca y 8% en manufactura (MINEP, 2006). La gran mayoría de las cooperativas son unidades pequeñas y algunas de ellas periclitarán rápidamente. También hay cambios de dirección y las empresas capitalistas se están convirtiendo en cooperativas. Sunacoop, el organismo responsable de supervisar las cooperativas, debe trabajar para sanear el sector. Quedarían alrededor de 100.000 en 2009. El magistral desarrollo estuvo acompañado de una gran dependencia frente a los mercados estatales y municipales. La convivencia con el movimiento cooperativo tradicional, que es

más autónomo, no es muy fácil. Lucha por ser reconocido como un verdadero actor.

En enero de 2005, el gobierno decidió expropiar industrias en deuda con el Estado o abandonadas por sus dueños. El MINEP se encarga de apoyar a los trabajadores en la toma de control de empresas amenazadas por la quiebra. Si una instalación industrial no utilizada se considera de utilidad pública, se inicia un procedimiento de expropiación que prevé la negociación de una compensación económica a los propietarios. En colaboración con la Unión Nacional de Trabajadores (UNT)¹²³, se elaboró una relación de setecientas empresas, cerradas o en quiebra. El Estado pasa a ser dueño de la empresa y cede el 49% de las acciones a la cooperativa creada por los trabajadores. Estas empresas son administradas por un Consejo de administración integrado por representantes elegidos por los trabajadores y personas designadas por el gobierno, bajo el concepto de cogestión. En julio de 2005, el presidente Chávez impulsó un nuevo tipo de unidad productiva, las “empresas de producción social” (EPS). Éstas se conciben como unidades de producción en las que existe igualdad entre sus integrantes, que se basan en una “planificación participativa y activa y que se colocan bajo el régimen de propiedad pública, propiedad colectiva o combinación de ambas”. Dentro de Alcasa (la principal industria del aluminio del país), los consejos de fábrica constituyeron la primera experiencia de control obrero a nivel

123 La UNT fue creada en abril de 2003. Está integrada principalmente por sindicatos de la Central de Trabajadores Venezolanos (CTV), comprometida en el golpe de Estado de abril de 2002 y que apoyó los cierres patronales de octubre de 2002 y de diciembre de 2002 a enero de 2003. UNT está organizado en varias tendencias.

de industria a gran escala. Sirvieron de referencia para romper con las jerarquías opresivas entre directivos y trabajadores y permitieron el desarrollo de los intercambios y la democracia empresarial.

Al favorecer la economía social, el gobierno venezolano ha optado por formas asociativas de propiedad y control. Las cooperativas son parte esencial del nuevo modelo económico. Tienen potencial suficiente para cumplir una serie de objetivos de la revolución bolivariana, entre otros los de la lucha contra el desempleo, la promoción de un desarrollo económico sostenible, la competencia con las empresas capitalistas clásicas y el desarrollo de la economía. Proyecto socialista.



En una década, todos estos programas han permitido lograr enormes avances en beneficio de los más pobres: reducción significativa de la pobreza (del 68% al 30% de la población),

reducción de la mortalidad infantil (del 21% al 14%), aumento significativo en matriculación en preescolar (del 45% al 61%) y acceso a la educación superior (del 22% al 30%), aumento del poder adquisitivo en un 400%, salarios multiplicados por seis (es decir, por tres expresados en dólares), desempleo oficial (de 16% al 6%), acceso al agua potable (del 80% al 92%), saneamiento (del 62% al 82%) y salud para todos (del 1,36 al 2,25% del PIB), etc. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) alcanzó 0,82 (Venezuela ganó 30 lugares a nivel mundial). Venezuela se convierte en el único país en alcanzar los principales Objetivos de Desarrollo del Milenio, mucho antes de 2015.

Los Consejos municipales: hacia la instauración de un doble poder

Como se desarrolló anteriormente, el proceso de integración social y política constituye uno de los principales cambios operados en Venezuela desde 1998. Las poblaciones históricamente excluidas de la acción política tienen la posibilidad de convertirse en sujetos por derecho propio. A principios de 2007, Hugo Chávez declaró en su discurso inaugural tras su reelección que “el poder municipal constituye uno de los cinco motores para profundizar y consolidar la revolución bolivariana y construir el socialismo. [...] Paulatinamente, el poder constituido debe transferir el poder político, social, económico y administrativo al poder comunal para ir hacia el Estado social y que salgamos de las viejas

estructuras del Estado capitalista burgués que frena los impulsos revolucionarios”¹²⁴ (López Heredia, 2008: 6).

Se trata, pues, de desarrollar el poder comunal para acabar gradualmente con el Estado burgués. El desarrollo de los consejos municipales en 2006¹²⁵, reforzada por la promulgación de la ley del 10 de abril, marca la voluntad de fortalecer la participación en el desarrollo e implementación de la política local. Así, la ley permite a las comunidades organizarse democráticamente y presentar proyectos a los organismos estatales. Se establece una forma de “poder dual” (doble poder), dentro de la revolución venezolana, una articulación entre democracia representativa y democracia directa. Los Concejos municipales se definen como “órganos de participación, articulación e integración de las distintas organizaciones comunitarias, grupos sociales ciudadanos, que permiten a las personas organizadas ejercer directamente la gestión de las políticas y proyectos destinados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social” (art. 2). El Concejo comunal es un órgano de articulación e integración de las distintas organizaciones sociales ya presentes dentro de la comunidad, como los programas sociales¹²⁶. La ley también prevé la creación de “comités

124 Los otros impulsores son: la ley que permite legislar por decreto, la reforma constitucional, la educación en valores socialistas y la reorganización geopolítica de la nación.

125 La creación de los consejos municipales precedió a la ley, al igual que las comunas precedieron la creación del ministerio de las comunas y la ley en preparación.

126 La ley de Concejos municipales reconoce a la comunidad como colectividad económica y social local.

integrados de seguridad”, una especie de comité local de defensa y seguridad.

Un Concejo municipal agrupa de 200 a 400 familias en las zonas urbanas, 20 en las zonas rurales y diez en las regiones indígenas (art. 4). Una asamblea ciudadana debe estar formada por al menos el 20% de la población adulta mayor de quince años, es el órgano de decisión del Concejo municipal (art. 6). El propio Concejo municipal define el territorio y sus miembros son voluntarios y elegidos por dos años. Cada uno de ellos está integrado por tres órganos: una unidad de gestión financiera (banco cooperativo comunal), un órgano ejecutivo y una unidad de fiscalización social (que controla el uso de recursos y la ejecución de programas). Todas las decisiones son tomadas por la Asamblea general de ciudadanos, que elige y, en caso necesario, destituye a los miembros de las distintas unidades, que sólo pueden participar en un órgano.

La formación de un Concejo municipal se enmarca en un procedimiento preciso. Un equipo promotor provisional convoca una Asamblea de ciudadanos, encargada de elegir una comisión promotora y una comisión electoral. La comisión promotora elabora un “diagnóstico participativo y social” del distrito: número de habitantes, ingresos, problemas técnicos y sociales identificados. Convoca a la Asamblea constituyente de la comunidad que, a partir del diagnóstico, formula proyectos que serán financiados por el gobierno. La comisión electoral organiza la elección de voceros de las comisiones que integran el órgano ejecutivo, la unidad de inspección social y la unidad de gestión financiera.

Cada Concejo comunal determina sus prioridades, sus áreas de intervención y crea sus propios comités: salud, educación, alimentación, vivienda, economía popular, cultura, seguridad, agua, servicios públicos, información y telecomunicaciones, etc. La iniciativa proviene de los habitantes que administran los subsidios y controlan la ejecución de las obras. También pueden hacerse cargo de la realización ellos mismos, pero no pueden ser remunerados. El consejo municipal puede realizar transmisiones comunitarias de radio o televisión. Recoge la historia de la comunidad, elabora la cartografía y el censo de la zona. Por tanto, existe una transferencia efectiva de poder a la comunidad, que toma conciencia y asume su papel. El Concejo tiene una verdadera dimensión política y emancipadora. Es el interlocutor de la comunidad y las autoridades gubernamentales. Puede desarrollar acciones de formación y sensibilización política (Nuria Cabot y Riera, 2009: 13). Para las elecciones municipales de 2008, los Concejos municipales nombraron a varios candidatos.

La unidad de gestión financiera es el órgano de control económico y financiero. Está integrado por cinco miembros de la comunidad, elegidos por la Asamblea ciudadana. En la mayoría de los casos, crea una cooperativa específica responsable de “administrar los recursos financieros y no financieros, actúa como una red de inversión y crédito, y desempeña el papel de intermediario entre los fondos generados, asignados y recibidos” (art. 10). Presenta un informe anual a Sunacoop.

La unidad de inspección social también incluye cinco vocales designados por la asamblea ciudadana para “realizar

el seguimiento y control fiscal del uso de los recursos” (art. 11). Además, tiene competencia para supervisar “programas y proyectos de inversión, presupuestados y ejecutados por las autoridades gubernamentales, a nivel nacional, regional y municipal”. Esta autoridad es una herramienta en la lucha contra las burocracias corruptas, aunque esta posibilidad en ocasiones lucha por materializarse. Existen varios órganos de control de los Concejos municipales: las comisiones presidenciales nacionales, regionales y locales del poder popular. Es la comisión presidencial nacional la que registra oficialmente los Concejos municipales y se encarga de los trámites relacionados con los recursos técnicos y financieros necesarios para la ejecución de los proyectos (art. 30).

El Fondo Nacional de Concejos Comunales (Fundacomunal) financia los proyectos comunitarios presentados por la Comisión Nacional del Poder Popular (art. 29). En la mayoría de los casos, las subvenciones se abonan en tres plazos, tras las inspecciones realizadas para conocer el avance de los proyectos. Algunos proyectos requieren conocimientos técnicos, luego los Consejos recurren a empresas o cooperativas, pero la mayoría de ellos los llevan a cabo los propios habitantes.

Los Concejos municipales operan bajo el principio de corresponsabilidad entre el Estado y los actores populares, como las misiones sociales. Para Anne–Florence Louzé (2009), no han adquirido la “apertura absoluta que les permitiría decidir sobre el 100% del presupuesto local, como es el caso del presupuesto participativo de Porto Alegre en Brasil”. Critica en particular la dependencia directa de los Concejos del Jefe de

Estado porque es él “quien decide la creación de nuevas estructuras, quien ordena la discusión de los proyectos de ley en cuestión y asigna los recursos”. El punto debe ponerse en perspectiva en la medida en que el presupuesto participativo se refería principalmente a inversiones que fluctuaron entre el 5% y el 17% del presupuesto total de la ciudad entre 1989 y 2001 y que una parte correspondió a programas de medio plazo (Gret y Sintomer, 2002: 104). Sobre el segundo argumento, el presupuesto participativo de Porto Alegre también fue sometido a un proceso de arbitraje por parte del ejecutivo. Los dos dispositivos sumamente innovadores se encuentran a medio camino entre la cogestión y la autogestión bajo el control del ejecutivo, aunque este último se ubique en un nivel diferente.

El número de estructuras creadas (33.500 Concejos comunales en tres años) y los miles de proyectos realizados demuestran el éxito de este sistema. En la práctica, la financiación es otorgada por diferentes comunidades y diversos organismos públicos. Sin embargo, la convivencia con los municipios no siempre es fácil. Mientras que algunas autoridades locales han transferido el 100% de los presupuestos a los Concejos para que puedan gestionarlos directamente, otros municipios (ayuntamientos), que están en la oposición o incluso en la mayoría, se niegan a ceder sus prerrogativas (Nuria Cabot y Riera, 2009: 34). Asimismo, algunos ciudadanos se niegan a participar porque los consideran instituciones paralelas y subordinadas a los organismos estatales formales. Por tanto, su desarrollo no se produce sin dificultades y obstáculos. Estos mecanismos de participación generan en ocasiones conflictos con las

organizaciones sociales existentes en las comunidades (comités de ordenamiento territorial urbano, comités de agua, comités de salud, etc.); la idea de que se integren en los Concejos comunales no siempre es fácil de conseguir (Lander, 2007: 65–86). A pesar de las tensiones generadas y las críticas a los representantes electos (democracia por delegación) dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se han completado miles de proyectos y muchos más están en marcha por juntas municipales, lo que constituye un paso sin precedentes en la historia del país.

Sin embargo, los Concejos municipales no están en condiciones de reemplazar a los ayuntamientos. Realizan principalmente proyectos prioritarios. Es sobre todo un proceso experimental. Como las “comunidades socialistas” que se crean en determinados territorios mediante la reagrupación de Consejos comunales sobre la base de intereses comunes.

Los municipios socialistas, sin embargo, permiten la realización de proyectos más ambiciosos. Si bien algunos han sido impulsados por instituciones estatales, muchos de ellos nacen de iniciativas de base.

Para Hugo Chávez, “el municipio debe ser el espacio en el que vamos a dar a luz al socialismo. Debe surgir de la base, no se puede decretar. [...] La comunidad socialista debe ser una creación popular, de las masas” (Harnecker, 2009).

Steve Ellner considera que la democracia participativa en Venezuela, ante todo, permite incluir a grupos de la población, comenzando por los lugares donde viven las comunidades. Los

sectores marginales de la población ganan confianza a través de la toma de decisiones colectivas (Ellner, 2009b). Los Consejos municipales evitan proyectos mal diseñados y sobre todo una corrupción bastante frecuente. Recuerda que fueron creados ante la ineficiencia de las burocracias municipales:

Además de las dimensiones sociales e institucionales, la movilización de los beneficiarios constituye un apoyo al gobierno frente a los ataques y la intransigencia de la oposición, que cuenta con grandes recursos.

De hecho, el logro de metas claras es un desafío formidable para un nuevo camino hacia el socialismo en Venezuela.

Poder popular, poder dual y el papel del Estado

La Comuna de París de 1792 fue de fundamental importancia porque fue el origen de muchas prácticas de los movimientos obreros y revolucionarios. La noción de soberanía popular –enunciada a menudo por Hugo Chávez– y sus consecuencias, que son la democracia directa y el mandato imperativo, han sido constantes en la mayoría de las revoluciones, desde 1848 a la Comuna de París de 1871, a los consejos obreros de 1917, a la autogestión practicada en Cataluña en 1936, o más recientemente por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en México.

Estas nociones de poder popular y poder dual suscitan debates dentro de la izquierda venezolana y entre los observadores del proceso. Los ayuntamientos constituyen un primer paso en la afirmación de un poder local, popular y ciudadano, que sin duda es necesario profundizar para lograr una verdadera dualidad de poder. Así, para el ex vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, Chávez se define como “un subversivo del poder”:

Chávez es el antipoder, es el único que hace que las cosas sucedan tanto dentro como fuera. Del poder. ¿Por qué? Porque es alguien que ha desconceptualizado el poder, que lo ha desmitificado acercándolo a la gente, haciéndolo lo más posible en conexión con el ciudadano (Rangel, 2007).

Ayudó a crear este anti-poder o contrapoder de una manera significativa y decisiva. Los Concejos comunales son herramientas de poder popular que deben fortalecerse. La historia del poder dual venezolano es inherente a la naturaleza de la relación establecida entre Chávez y el pueblo desde 1992 y reforzada durante etapas cruciales del proceso. Sin embargo, el Estado bolivariano está lejos de ser una unidad homogénea y las situaciones de doble poder son por definición inestables y no exentas de riesgos. El papel ambiguo de ciertos sectores del aparato estatal en la promoción del poder dual hace que estas amenazas sean complejas y difíciles de identificar. La dependencia actual frente a los subsidios petroleros puede obstaculizar a los Concejos comunales a la hora de afirmar una autonomía real frente al Estado. El desarrollo endógeno local y el abandono de una economía basada en materias primas son,

por tanto, fundamentales para fortalecer el poder municipal. Como la transformación de la estructura económica es poco probable a corto plazo, los movimientos revolucionarios venezolanos deben operar como lo han hecho durante décadas, avanzando estratégicamente y consolidando gradualmente los Consejos comunales como un poder dual viable, capaz de luchar con la estructura estatal actual y transformarla radicalmente. Paulatinamente, el poder constituido debe traspasar el poder político, social, económico y administrativo al poder comunal para avanzar hacia el estado social y salir de las viejas estructuras del Estado burgués que frenan los impulsos revolucionarios (Ciccariello–Maher, 2007).

Para los Tupamaros¹²⁷, el camino revolucionario es explícitamente anti institucional. Su objetivo es estimular el poder dual fortaleciendo la participación popular para vincular, organizar y multiplicar las fuerzas sociales autónomas. La línea divisoria entre revolucionarios y reformistas cruza la propia estructura del Estado. Para ellos, los Concejos municipales son elementos centrales en la estrategia de poder dual construida por el poder constituido. Consejeros como Roland Denis, creen que las organizaciones de base venezolanas y, en particular, los Concejos municipales, deben lograr una autonomía “absoluta” frente al Estado y el partido. El poder dual debe “transformarse en una estrategia permanente de acuerdo con la necesidad de

127 Los Tupamaros de Venezuela son una organización de inspiración maoísta que pasó de la guerra de guerrillas.

a la autodefensa urbana. Tuvieron un papel activo en abril de 2002 para derrotar el golpe de Estado.

organizar un poder socializado y no estatal” (Denis, 2006a). Por tanto, debe acelerarse la democratización:

A partir de ahora, es fundamental que factores determinantes refuercen la consolidación de la autonomía política de las organizaciones y colectivos que hoy constituyen la base y el alma del proceso revolucionario (Denis, 2008).

Steve Ellner matiza al considerar que antes de la elección de Chávez en 1998, Venezuela carecía de movimientos sociales como los que permitieron las elecciones de Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. Durante varios años, las asociaciones de vecinos y el movimiento cooperativo fueron independientes del Estado pero no prosperaron; no jugaron un papel fundamental en la mejora de las condiciones de vida de los venezolanos. Por otro lado, la inyección de grandes sumas de dinero en los ayuntamientos y programas sociales ha contribuido a estimular a los sectores marginales y darles los medios para controlar sus vidas. A pesar de la dependencia financiera del Estado, los chavistas de base que participan en estos programas siguen siendo críticos y su apoyo al gobierno está lejos de ser incondicional y en ocasiones se abstienen como lo demuestra la derrota del poder en el referéndum constitucional de 2007.

Un proceso revolucionario innovador

La buena salud de un proceso revolucionario, independientemente de sus características y ritmos, es la formación básica de los organismos del poder autónomo, que en forma de organizaciones de masa, posibilitar el ejercicio del poder en la empresa, el barrio y la comunidad. Para evitar que este poder sea recuperado por las clases dominantes, es fundamental convertir estas organizaciones tan pronto como sea posible en instrumentos de control político en una perspectiva claramente anticapitalista (Denis, 2006b).

Venezuela no es una excepción en este sentido. A diferencia de la Revolución Cubana, la Unidad Popular en Chile o la Revolución Sandinista en Nicaragua, ha habido un cambio de hegemonía fundamental donde pasó el peso dirigente del proceso revolucionario manos de cuerpos generados por el poder constituyente.

El carácter pacífico, constitucional y democrático de la revolución y el largo proceso de cambio estructural hicieron posible romper con la Unión Soviética y la herencia totalitaria y, más en general, con el socialismo autoritario heredado del siglo XX. La influencia ideológica consejista en el proceso bolivariano ha permitido la multiplicación de instancias básicas autoorganizadas que, en la medida en que se radicaliza el proceso y se fortalece la conciencia colectiva, pueden asumir el carácter de órganos de gobierno popular. Los cambios más importantes probablemente se encuentran en la “cultura política y en la politización de grandes sectores de la población” (Lander, 2009). Esto se ha traducido en una gran implicación de las clases populares en la gestión de los programas sociales y en los Concejos municipales. Los

“sentimientos de exclusión se transformaron rápidamente en un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de ser” (Lander y Navarrete, 2008: 195). Las tasas de participación electoral también aumentaron durante las consultas electorales. En general, más allá de interrogantes y certezas, la “democracia venezolana se transforma” (López Heredia, 2008).

Sin embargo, el proceso tiene al menos tres limitaciones. En primer lugar, el marco institucional sigue siendo globalmente un marco republicano típicamente burgués y capitalista a pesar del inmenso espacio democrático conquistado. En segundo lugar, la herencia autoritaria y de vanguardia sigue desempeñando un papel importante en las organizaciones revolucionarias e influyendo en muchos cuadros del movimiento popular. Finalmente, la ausencia de debates ideológicos y de confrontación real con los intereses económicos del Estado petrolero, la burguesía y las multinacionales contribuye al mantenimiento de un modelo de explotación de tipo capitalista.

Las orientaciones y la profundización del proceso revolucionario permanecen abiertas, nada hay fijo. Experiencias y sucesivas rupturas han transformado radicalmente el país. El fortalecimiento del poder popular y la autonomía política podría anclar aún más el proceso en una perspectiva de autogestión. Si el socialismo del siglo XXI no es una “doctrina estable o un corpus de conceptos” (Lander, 2009), sin embargo es posible percibir algunas características de autogestión: la articulación entre el poder constituyente y poder constituido, apropiación social y gestión democrática de los medios de producción (Neuville, 2009). El pueblo

venezolano tiene en parte la clave de la radicalización de la revolución democrática.

Abril de 2010

Para saber más:

Acosta, Vladimir (2007), "El socialismo del siglo XXI y la revolución bolivariana. Una reflexión inicial "en Margarita López Maya, Ideas para debatir el socialismo del siglo XXI, Venezuela, Alfa.

Aznarez, Carlos (2000), Los sueños de Bolívar en la Venezuela de hoy, Tafalla, Txalaparta.

Brandler Weinreb, Jessica (2009), "La participación política de las mujeres en los consejos de planificación pública local", en Olivier Compagnon, Julien Rebotier y Sandrine Reve (d ir.), Le Venezuela más allá del mito. Chávez, democracia, cambio social, París, LAtelier.

Ellner, Steve y Daniel Hellinger (2003), La política venezolana en la época de Chávez, Clases, polarización y conflicto, Caracas, Nueva Sociedad.

Ellner, Steve (2009a), "¿Una revolución sin metas? El proceso revolucionario en Venezuela ", en Olivier Compagnon, Julien Rebotier y Sandrine Reve (eds.), Venezuela más allá del mito. Chávez, democracia, cambio social, París, L'Atelier.

Gret, Marion e Yves Sintomer (2002), Porto Alegre: La esperanza de otra democracia, París, La Découverte / Syros.

Harnecker, Marta (2009), “Las comunas, sus problemas y como enfrentarlos”, Alo Presidente, 11 de junio.

Lander, Edgardo (2007), “El estado y las tensiones de la participación popular en Venezuela”, Observatorio social de América latina (Osal), n ° 22, Buenos Aires, septiembre.

Lander, Edgardo y Pablo Navarrete (2008), “Venezuela y el proceso bolivariano”, en Franck Gaudichaud (eds.), El volcán latinoamericano: Gauches, movimientos sociales y neoliberalismo en América Latina, París, Textuel.

Lander, Edgardo (2009), “El proceso bolivariano: ¿un proyecto alternativo en tensión? », Entrevista realizada por Gaudichaud, Franck, Contretemps, 2009 y publicada en el sitio de Risal, 4 de febrero.

Lemoine, Maurice (2003), Chávez Presidente, París, Flammarion.

Lemoine, Maurice (2006), Le Venezuela de Chávez, Pontoise, Alternatives.

Lenin, Vladimir (2007), “El doble poder”, La Pravda, n ° 28, 9 de abril de 1917, citado en George Ciccariello–Maher, “Poder dual en la Revolución venezolana”, Revista mensual, vol. 59, n ° 4, septiembre.

Lopez Heredia, Damellys (2008), *Venezuela: ¿Poder Comunal como una forma de ejercicio del poder?*, Asociación mexicana de estudios del Caribe.

Louzé, Anne–Florence (2009), “Los consejos municipales en Venezuela: ¿una herramienta para la emancipación política? », En Olivier Compagnon, Julien Rebotier y Sandrine Reve (eds.), *Venezuela*

más allá del mito: Chávez, democracia, cambio social, París, LAtelier.

MINEP (Ministerio de Economía Popular) (2005), “Informe de Gestión para la Asamblea General de la OEA”; MINEP (2006), citado por Betsy Bowman y Bob Stone, “La revolución cooperativa de Venezuela”, Dollars and Sense.org.

Neuville, Richard (2005), “Venezuela: ¿una revolución lenta? », Rouge et Vert, n ° 222, abril.

Neuville, Richard (2009), “Una década del proceso bolivariano: avances reales y límites de una revolución democrática”, Rouge et Vert, n ° 289, abril.

Nuria Cabot, Elisa y Miguel Riera (2009), *De Consejos y comunas*, Barcelona, El Viejo Topo.

Rangel, José Vicente (2007), “Chávez es el antipoder”, Últimas Noticias, Caracas, 16 de abril, citado por George Ciccariello–Maher, “Poder dual en la Revolución venezolana”, Monthly Review, vol. 59, n ° 4, septiembre.

Roland, Denis (2006a), “Venezuela: los movimientos populares y el gobierno”, Revista Socialista Internacional, n ° 110.

Roland, Denis (2006b), “De los Consejos comunales a los Consejos Autogestionarios, de Fabrica y de Defensa”, Proyecto Nuestra América, Movimiento 13 de Abril, www.aporrea.org.

Roland, Denis (2007), “Asambleismo Popular Constituyente”, www.aporrea.org, 1 st de septiembre.

Singer, Daniel (2004), *¿Quién es dueño del futuro? Para una utopía realista*, Bruselas, Complex.

Sunkel, Osvaldo (1993), "Desarrollo desde adentro: Hacia un enfoque neoestructuralista para América Latina".

CONTROL OBRERO Y ESTADO BOLIVARIANO

Nicolas Johansson–Rosen

Según los últimos datos puestos a disposición por la Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop), en 2010 Venezuela contaba con cerca de 74.000 cooperativas, cientos de grandes empresas cogestionadas por el Estado y los trabajadores, y varios miles de EPSC (Empresas de Propiedad Social Comunal), empresas municipales autogestionadas o cogestionadas entre el Estado y los trabajadores que producen sobre todo en interés de la comunidad (Azzellini, 2013). ¿Cómo pudo un país antes dominado por el neoliberalismo haber dado tal paso adelante hacia la emancipación de su clase trabajadora?

Para entender esto, debemos comenzar con un enfoque integral de la revolución bolivariana y sus objetivos. Desde sus inicios, este proceso generó una inmensa esperanza entre las clases dominadas del continente latinoamericano. Por primera vez, un gobierno elegido democráticamente pudo hacer frente a la precipitada carrera hacia “el Fin de la Historia”. Algunos comentaristas han tratado de explicarlo como un simple “espectáculo” cuyo único anfitrión habría sido el ex presidente

Hugo Chávez. Pero, como escribe George Cicarrielo–Maher (2013), el chavismo no es una creación *sui generis* de un grupo de soldados clientelistas. Es el resultado de décadas de luchas populares.

Si partimos del análisis liberal más extendido, Venezuela ha sido un espacio de “excepcionalidad democrática”: dos partidos dominantes obligados por el pacto de Punto Fijo desde 1958, compartieron pacíficamente el poder y el excedente del petróleo. Aun cuando la región se caracterizó por la expansión de dictaduras sanguinarias, Venezuela gozó de una estabilidad permanente. Pero este punto de vista es dudoso: el MIR, los Tupamaros y otros grupos armados han mantenido una resistencia permanente a este sistema bipartidista organizado para evitar el ascenso al poder del otrora poderoso Partido Comunista. Las desapariciones forzadas y los asesinatos selectivos eran comunes en la República del Punto Fijo. La ganancia codiciada del petróleo, por su parte, benefició sobre todo a una burguesía parasitaria, que mantuvo relaciones particularmente incestuosas con las cúpulas del Estado. A partir de la década de 1980, con la crisis de la deuda, comenzó la desintegración de este modelo, que alcanzó su punto culminante con la masacre de 3.000 civiles durante los disturbios urbanos en el Caracazo de 1989.

El cambio se inició en 1999 con la llegada democrática al poder, casi por sorpresa, del teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías, quien en 1992 había intentado derrocar al gobierno de Carlos Andrés Pérez, responsable de la masiva represión de 1989, con un golpe fallido.

Ese mismo año se promulgó una nueva Constitución que servirá de base para futuras reformas. Ciertamente consagra la propiedad privada, pero también insiste en la propiedad pública y social, novedad que resultará particularmente útil más adelante en la implementación del Control Obrero en Venezuela. En su artículo 70, reconoce la necesidad de la autogestión, la cogestión y las cooperativas en todas sus formas. El artículo 118, por su parte, garantiza y protege el derecho de los trabajadores y las comunidades a la propiedad colectiva y la autoorganización.

Es a partir de ahí que comenzará un ciclo de intensas movilizaciones, que llegará a su clímax, en 2006, lo que nos permite afirmar que no se trata de una revolución “de arriba hacia abajo”, sino de un proceso resultante de la permanente interacción entre un pueblo en lucha y el líder de su revolución.

Tras la reanudación del control de la petrolera PDVSA en 2003, que había quedado bajo el control de gerentes sin escrúpulos que la habían transformado en una propiedad inmobiliaria dentro del estado, en particular organizando la fuga de sus ingresos a los Estados Unidos, el gobierno bolivariano ahora tenía la herramienta clave que serviría como punta de lanza en su intento de transformar su modelo productivo. Se ha implementado una nueva política para permitir que los trabajadores logren su emancipación. El resultado no tardó en llegar a nivel social, con la creación de las “Misiones Bolivarianas”, programas masivos de salud pública, educación y vivienda que, mediante la redistribución del superávit social, permitieron una reducción de los índices masivos de pobreza e indigencia.

La autogestión/cogestión al Estado comunal

Pero no fue así, al contrario de lo que muchos analistas liberales, Javier Corrales y Michael Penfold (2012) pueden avanzar, a partir de un patrocinio puramente político: el objetivo de Hugo Chávez fue la creación permanente de un “socialismo del siglo XXI”, el cual tratase de evitar los errores del socialismo real para transformar fundamentalmente la sociedad venezolana.

La clave de este “socialismo del siglo XXI” que acaba de surgir y ya puede estar cerca de su fin, no puede ser otro que la autogestión, según Camila Piñeiro Harnecker. La cual permite que la democracia descienda a la esfera del trabajo, aspecto esencial en la construcción del individuo, aunque solo sea por el tiempo que pasa allí, transformándolo a la vez que reconfigura el proceso general de trabajo directo. Sin embargo, en su estudio de quince cooperativas venezolanas, la autora no oculta sus debilidades: baja motivación del personal, falta de cualificación y reconstrucción de jerarquías a partir de la diferenciación entre trabajo manual e intelectual así como la concesión de competencias especiales reconocidas a determinados miembros con carisma (Pineiro Harnecker, 2007)

Este último punto debe ponerse en paralelo con la tesis de Maxime Quijoux concernientes a dos empresas autogestionadas en Argentina, en las que los trabajadores más celosos y experimentados, así como ciertas personalidades clave concentran el poder de decisión concreto (Quijoux,

2013). Un paralelo que queda por matizar, sin embargo, la politización de los trabajadores argentinos en los que se centró la investigación no es comparable a lo que podemos encontrar en Venezuela, aunque solo sea por el contexto de politización masiva y extremadamente polarizada entre una izquierda con proyectos mal definidos y una derecha ultrarreaccionaria.

El futuro de la producción democrática en Venezuela, sin embargo, parece prometedor a pesar de las dificultades encontradas: esto es lo que emerge de los textos de Dario Azzellini, para quien la autogestión constituye una verdadera herramienta de emancipación de los trabajadores, en particular a través de la toma de control del proceso de trabajo directo. Los empleados involucrados ahora saben para quién y por qué están trabajando, aprenden a tomar gradualmente el control del proceso de su trabajo inmediato y global y desarrollan nuevas prácticas participativas dentro de sus unidades de producción (Azzellini, 2013).

Pero las cooperativas no son inmunes a las vicisitudes capitalistas: encajan en un marco económico que todavía es liberal y pueden caer fácilmente bajo el control de sus clientes privados, creando así mecanismos genuinos de explotación colectiva. Pero, como subraya Andrés Ruggeri en su trabajo sobre la autogestión argentina, incluso en los casos más extremos, los trabajadores recuperan cierto control sobre su propia existencia a través de las condiciones laborales (Ruggeri, 2013).

Esto nos lleva a plantearnos la cuestión de la relación entre la autogestión, la cogestión, las cooperativas y el Estado. La

articulación entre empresas autogestionadas/cogestionadas y las “comunas”, órganos de democracia directa local que sirven como “ladrillos” para la construcción del nuevo Estado, es uno de los pilares de la revolución bolivariana.

Este conjunto lleva el nombre de “estado comunal”, teorizado por Marta Harnecker: a largo plazo, se trata de reemplazar el Estado burgués por estructuras democráticas locales y productivas. En su texto fundacional “De los consejos comunales a las comunas: construyendo el socialismo del siglo XXI” (Harnecker, 2009) indica algunas vías a seguir para hacer realidad este sueño:

- Respeto a la autonomía comunal y no imposición de ejecutivos y gerentes externos.

- Intransigencia en cuanto al respeto a los mecanismos de democracia comunal y no a la instrumentalización del poder político.

- Ir más allá de la simple democracia representativa por un sistema de “representantes” populares bajo control permanente de las bases encargadas de implementar las decisiones de las comunas.

Pero este proyecto está lejos de haber visto la luz de lleno y aún nos encontramos en el marco de una “sociedad civil dependiente” sobre todo, de la Presidencia, que financia los órganos de la democracia local y productiva a través de fondos especiales, los cuales permiten paradójicamente que las comunas y las cooperativas se independicen frente a municipios y otros órganos “clásicos” del Estado, pero

dificultan el ejercicio de una praxis crítica frente al poder vigente.

Surge la siguiente pregunta: ¿en qué medida se puede considerar que el Estado comunal y en particular sus manifestaciones económicas se están expandiendo, aunque la economía venezolana sigue siendo en un 70% propiedad del sector privado?

¿Se trata de un proyecto emancipatorio real, o simplemente lo que Nicos Poulantzas denominó una “autonomía relativa del Estado capitalista” (Poulantzas, 1968), es decir, una configuración, variable según la coyuntura e inscrita en la materialidad del Estado capitalista, en que la estructura parece a veces ceder a las demandas populares, pero no obstante, sirve sobre todo a los intereses de las clases dominantes estructuradas en un bloque de poder, impidiendo incluso desde allí cualquier autoorganización de los trabajadores?

Para ello es necesario profundizar en el estudio de la autogestión/cogestión, porque, como escribe Karl Marx, “es siempre en la relación inmediata entre el propietario de los medios de producción y el productor directo... donde debemos buscar [...] la forma específica que toma el Estado en un período determinado” (Marx, 1963; 1968).

La implementación de la autogestión/cogestión en Venezuela

La democratización de la producción en Venezuela no se hizo de manera sencilla. Siguió varios caminos, dependiendo de la pluralidad de situaciones existentes sobre el terreno. De forma esquemática, podemos hablar de dos modalidades en el despliegue de este proceso:

Una implementación paralela al capitalismo existente, vía la creación de nuevas instituciones y cooperativas: autogestión supervisada por el Estado

Inicialmente se creó el Ministerio de Economía Popular, ahora Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunitaria (MINEC) para centralizar los esfuerzos implementados en la construcción de un tejido económico autogestionario. Su función es, a través de sus vínculos con los bancos estatales, facilitar el crédito a las cooperativas, con la ayuda de Sunacoop. El MINEC también aseguró, a través de la Misión Che Guevara, la capacitación de las cooperativas y la supervisión de su actividad.

El MINEC fue reemplazado en marzo de 2009 por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, que además de funciones del antiguo ministerio, tiene como objetivo facilitar el acceso al crédito de los cooperativistas.

Las empresas autogestionadas se organizan en torno a las comunas, “ladrillos” del nuevo estado revolucionario,

destinado, a reemplazar al estado burgués a largo plazo. Sus objetivos económicos son fortalecer la economía social, pero también estimular la participación y el poder popular, objetivos que priman sobre el de la organización.

En cuanto a la Misión Che Guevara, ha dado paso a la Gran Misión Saber y Trabajo, especializada en la supervisión de la producción y la formación de trabajadores, que trabaja en simbiosis con los municipios, con el objetivo de crear un nuevo modo de organización basado en la coordinación de Consejos de trabajadores, que fortalece la democracia participativa y protagónica.

Existen dos tipos de empresas autogestionadas/cogestionadas previstas por la ley orgánica de los municipios:

- Empresas de propiedad social y municipal directa: estas entidades pertenecen directamente al municipio, que es el origen de su creación. Son autogestionadas por los productores directos, pero deben devolver cuentas al municipio y, sobre todo, producir respetando los intereses de la comunidad.

- Empresas de propiedad indirecta social y municipal: estas empresas siguen siendo parte del municipio, pero esta vez son creadas por el Estado. Están organizadas según modalidades de cogestión entre el estado y los trabajadores y su marco legal prevé una transición gradual hacia la autogestión total.

Sin embargo, hasta la fecha, el resultado de tales programas debe ponerse en perspectiva, habiendo surgido un gran número de “cooperativas fantasmas” para apropiarse ilícitamente de fondos públicos.

La socialización/nacionalización como salida al conflicto económico de clases: empresas cogestionadas

Muchos grandes centros productivos han pasado al control de los trabajadores, lo que significa concretamente una dualidad de poder que se materializa en la cogestión entre los trabajadores y el Estado (51% de las acciones para el Estado, 49% para los trabajadores organizados en cooperativas).

Este es el caso de empresas nacionalizadas como las fábricas de válvulas CNV (ahora Inveval), la fábrica textil Invetex, la productora de tubos Venepal y el gigante siderúrgico continental Sidor. En los dos ejemplos emblemáticos del presente caso, Sidor e Inveval, la lucha fue larga y difícil.

La dirección descapitalizó el rentable negocio, preparándose para su cierre, violando las leyes laborales y llegando a no pagar los salarios durante meses.

La lucha de los trabajadores por recuperar sus herramientas de trabajo duró meses, durante los cuales se encontraron con una burocracia extremadamente hostil, especialmente judicial y local, así como con una opinión pública relativamente indiferente.

Pero en la práctica, la victoria no fue total en todos los casos: Sidor, por ejemplo, se quedó en la etapa de pura y simple nacionalización, habiendo tenido que admitir el actual presidente Nicolás Maduro que no había ningún control

obrero. Estamos ante una lucha entre dos concepciones del socialismo:

- La primera, muy clásica, no traspasa los límites del “socialismo real” y de ninguna manera diferencia entre socialización de los medios de producción y nacionalización, asimilando el Estado bolivariano al pueblo.

- La segunda, a la vez innovadora, y también el resultado de una larga tradición de lucha de los trabajadores cuyos orígenes datan del siglo XIX, no concibe una posible separación entre los productores directos y los medios de producción, y asimila socialización de los medios de producción y autogestión.

El “control obrero” no siempre es una realidad. En la mayoría de los casos, dos factores determinan lo que sucede en la práctica:

- La mayor o menor movilización de trabajadores organizados en la base.

- Un mayor o menor grado de apertura de las autoridades según las circunstancias (así, en el caso de Sidor, el gobierno decidió jugar la carta de la represión abierta a la acción sindical, mientras que en los casos igualmente emblemáticos de Industrias Diana y Lácteos Los Andes, el Estado finalmente cedió a la presión de los trabajadores).

La cogestión como expresión de las luchas de clases en su aspecto más exacerbado; el surgimiento de una nueva contradicción entre el estado y el movimiento obrero

Ahora vamos a reenfocar nuestro estudio en tres casos concretos de cogestión. De hecho, las empresas afectadas son las que han sufrido los conflictos sociales más duros. Y como afirma Althusser, al igual que Poulantzas, las clases sociales no existen antes de las luchas. Es a través de la lucha de clases que se constituyen las diferentes fuerzas sociales. Así que veamos qué sucede a través del breve análisis de tres casos concretos, todos con el mismo punto de partida: el de haber sido nacionalizados en 2008, tras una ola de conflictos sociales.

Empresa Sidor

Fundada en 1960 como componente de la Corporación Venezolana de Guayana, un gran consorcio industrial público, en la ciudad de Puerto Ordaz por decreto emitido por el presidente Marcos Pérez Jiménez, la acería Sidor es una de las más grandes del continente latinoamericano. Privatizada en 1997, fue renacionalizado por decisión de Hugo Chávez en 2008 tras un conflicto sindical que duró más de quince meses, donde el principal escollo era el convenio colectivo pero también las cuestiones de salud, seguridad y cobertura de transporte o catering corporativo. Este es un ejemplo típico de una empresa venezolana nacionalizada no en el marco de un conjunto de políticas públicas de arriba hacia abajo, sino cuyo

cambio de estatus resulta, por el contrario, de la presión ejercida por la base sindical.

Tras su estatización, la empresa vivió dos años de control obrero real (cogestión) en 2009–2010, pero la burocracia estatal recuperó muy rápidamente el control de la situación, a tal punto que la mera mención del “control obrero” despierta ahora el rechazo dentro de la base que ve en ella otro mecanismo para privarla de su parte activa en la toma de decisiones.



Actualmente, la lucha se relanza a raíz de las demandas de los trabajadores de la empresa que reclaman por un lado la renegociación del convenio colectivo de la empresa, en gran parte desactualizado para luego renegociar sin el conocimiento de los trabajadores, en el contexto de una crisis económica manifestada por la inflación más alta del continente latinoamericano, así como por la constante escasez de

productos básicos, a veces solo disponibles en el mercado negro.

Para algunos componentes sindicales actuales, el tema básico ya no es el retorno al control obrero, que está ampliamente desacreditado, sino, en primer lugar, la recuperación de las modalidades clave de una democracia obrera, a saber, la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y total transparencia en la gestión contable y productiva.

Los sindicatos de trabajadores opuestos a la línea oficial que obtuvo la firma de un convenio colectivo muy por debajo de las expectativas de los empleados, se encuentran con la hostilidad del gobierno de Nicolás Maduro y deben enfrentar una criminalización del movimiento social por parte de las autoridades. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, acompañado de altos mandos del ejército y del gobernador del estado Bolívar, no dudó en calificar de “mafiosos” a los sindicalistas involucrados en esta lucha.

Por el momento, no parece haber una solución a la vista y el conflicto se agudiza: a las manifestaciones de miles de trabajadores el Estado se ha opuesto con la represión directa y las balas de goma. Las elecciones sindicales, que deberían haber tenido lugar a finales de febrero de 2015, fueron aplazadas *sine die* y todas las listas invalidadas, por temor a ver la victoria de una coalición opuesta a la línea oficial.

Se trata, pues, de saber si la vocación socialista del proyecto bolivariano (es importante insistir en que no es un proyecto directamente socialista, sino con vocación socialista) se vería potencialmente puesta en juego por un posible cambio de Actitud del gobierno de Nicolás Maduro hacia la clase trabajadora.

Este caso particular también pone de relieve uno de los obstáculos que enfrenta la revolución bolivariana: la brecha creciente entre las prácticas gubernamentales discursivas, siempre siguiendo una línea radical y revolucionaria, y la realidad sobre el terreno, a veces mucho menos apasionante.

La empresa Industrias Diana

Industrias Diana es una fábrica de aceites y grasas que aporta más del 38% de la producción nacional. El 80% de sus productos son vendidos por distribuidoras estatales como la popular cadena de supermercados Mercal, y el 20% va al sector privado. Cuenta con cinco plantas de fabricación, ubicadas en Maracaibo, San Cristóbal, Barquisimeto, Valencia y Caracas. Nacionalizada en 2008, ha estado en conflicto con el Estado desde finales de julio de 2013 tras el nombramiento de su nuevo gerente por el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. De hecho, este último, un empresario típicamente capitalista, ya director general de cinco empresas agroindustriales, es percibido como ilegítimo por los trabajadores de las distintas fábricas de Diana, organizadas

tanto en consejos de trabajadores como a través del Sindicato Único de la empresa, que también reclaman el derecho a elegir a sus propios líderes de entre ellos mismos como un componente del poder de los trabajadores.

Los trabajadores de Diana han sido objeto de hostigamiento y abierta represión por parte del aparato estatal: se han bloqueado las cuentas de la empresa destinadas al pago de salarios. La SADA, el organismo oficial encargado de cobrar la producción ya no envió camiones, impidiendo cualquier venta a el sector privado. El SEBIN (servicio secreto venezolano) interrogó a varios trabajadores en Valencia durante casi cinco horas.

A pesar de que la lucha continuaba, la empresa operó durante más de un mes en agosto de 2013 sin administración, sin una disminución notable en la producción.

La empresa finalmente quedó bajo el control directo de los consejos de trabajadores que finalmente eligieron su propia dirección, después de un paréntesis de gestión por parte de un militar. Aunque es una democracia obrera, es sin embargo una democracia incompleta, las viejas jerarquías corporativas se ven reforzadas por los mecanismos del voto.

Empresa Lácteos Los Andes

Lácteos Los Andes, líder nacional en la producción de leche, zumos, yogures, postres varios y quesos fue nacionalizada en 2008. La nacionalización siguió una doble lógica: se trataba de

incrementar la producción y reenfoclarla en productos de primera necesidad, por ejemplo pasteurizados y leche. El objetivo se ha cumplido durante los tres primeros años. En 2011, la propiedad de la empresa fue transferida al Ministerio de Agricultura y Tierras, que también transfirió la responsabilidad conjunta de 23 unidades de producción más pequeñas que no eran necesariamente rentables, lo que dificultaba relativamente la gestión de la situación de Lácteos Los Andes sin comprometer su viabilidad.

La situación de la empresa se deterioró notablemente en 2013 desde la creación de un departamento integrado por una treintena de directivos lanzados en paracaídas por el ministerio.

En 2013, la caída de la productividad fue de alrededor del 40 al 50%. Mientras tanto, Hairo Arellana, presidente de la empresa había desapareció totalmente, incluso cuando las demandas de los trabajadores por el control se hicieron cada vez más apremiantes. Según los trabajadores, en realidad se trataba de descapitalizar la empresa, de reducir voluntariamente su productividad y paralizar su oferta para hacerla, reprivatizar en última instancia.

Los trabajadores de cada centro de producción finalmente obtuvieron el derecho a elegir a sus dirigentes, y se implementó la autogestión, pero no es completa. Las autoridades pasaron por alto a ciertos trabajadores electos a través de “coordinadores” designados arbitrariamente. Finalmente, Lácteos Los Andes atraviesa actualmente grandes dificultades de distribución: algunos productos desaparecen

ocasionalmente del mercado debido, en particular, a la “guerra económica” que la pequeña y gran burguesía comercial libra contra las unidades productivas que han quedado bajo el control de los trabajadores. Pero, de las tres empresas que se presentan en este artículo, esta es la que mejor ha implementado hasta la fecha el control de los trabajadores.

Una política de geometría variable frente a las demandas de control obrero, la cual es una de las bases de la nueva sociedad deseada por Hugo Chávez, remite a un cuestionamiento clave de la revolución bolivariana. Con la transición a la cima del estado tras la muerte del ex presidente, ¿su sucesor, Nicolás Maduro, sigue tan decidido a continuar el inicio de la transición al socialismo que experimentó Venezuela durante la década de 2000? Es posible dudarlo en cierta medida, dada la política de inmovilidad que sigue el gobierno, particularmente en el plano económico y social, así como la creciente criminalización de parte del movimiento sindical por parte del Estado. Sin embargo, no sería un retorno a una relativa “autonomía del Estado capitalista”, ya que se mantiene el apoyo a las iniciativas de autogestión y cogestión, en un contexto, sin embargo, marcado por el temor a una “pérdida de control”. por parte de la burocracia y algunos representantes elegidos. El Estado Bolivariano atraviesa un período de estancamiento, pero aún constituye un punto de apoyo para las luchas populares (aunque no es posible la comparación con el periodo de presidencia de Hugo Chávez).

Al mismo tiempo, continúan las luchas obreras de base, como lo demuestra el ejemplo de la empresa Clorox, abandonada por su dirección estadounidense y asumida por

trabajadores organizados en consejos obreros tras una ardua lucha. El futuro de la revolución bolivariana dependerá de la intensidad de la lucha de clases que libren los trabajadores, y no de un gobierno superado por una crisis económica, institucional y social que se niega a afrontar el estancamiento, apoyándose en la atomización de la oposición y su ausencia de un líder real.

Como escribió Karl Marx en su discurso de 1864 a la AIT, “la emancipación de la clase trabajadora debe ser obra de los propios trabajadores”.

Agosto de 2015

Fuente:

Una primera versión de este artículo apareció en el dossier “Venezuela: el proceso bolivariano en crisis”, *Contre Temps*, nº 25, abril de 2015, París, Syllepse.

Para saber más:

Artous, Antoine (2003), *Trabajo y emancipación social*, París, Syllepse.

- Azzellini, Dario (2013), “De cooperativas a empresas de propiedad social directa en el proceso venezolano”, en Camila Piñeiro Harnecker, *Cooperativas y socialismo: una mirada desde Cuba*, Londres, Palgrave y MacMilan.
- Burbach, Roger, Michael Fox, Federico Fuentes (2013), *Transición turbulenta de América Latina: El futuro del socialismo del siglo XXI*, Winnipeg, Zed Books.
- Ciccariello–Maher (2013), George, *We Created Chavez: A People History of the Venezuelan Revolution*, Durham / London, Duke University Press.
- Colloges, Lucien (coord.) (2010), *Autogestión: ayer, hoy, mañana*, París, Syllepse.
- Cormenzana, Pablo (2009), *La Batalla de Inveval: La Lucha por el Control Obrero en Venezuela*, Madrid, Fundación Federico Engels.
- Corrales, Javier y Michael Penfold (2012), *Un Dragon en el Trópico*, Caracas, La Hoja del Norte.
- Steve Ellner (2008), *Repensar la política venezolana: clase, conflicto y el fenómeno de Chávez*, Boulder / Londres, Lynne Rienner Publishers.
- Gaudichaud, Franck (dir.) (2008), *Le volcan latino–Américain: Izquierda, movimientos sociales y neoliberalismo en América Latina*, París, Textuel.
- Guillaudat, Patrick y Pierre Mouterde (2012), *Hugo Chávez y la revolución bolivariana: promesas y desafíos de un proceso de cambio social*, Mont–Royal, M. Éditeur.

Harnecker, Marta (2009), “De los consejos comunales a las comunas: construyendo el socialismo del siglo XXI”, www.rebellion.org/docs/97085.pdf.

Lievesley, Geraldine y Steve Ludlam (eds) (2009), *Reclaiming Latin America: Experiments in Radical Social Democracy*, Londres / Nueva York, Zed Books.

Louzé, Anne–Florence (2011), *Pueblo y poder en Venezuela de Hugo Chávez: ¿Un camino a seguir para la democracia?*, Saarbrücken, Editorial Universitaria Europea.

Martínez, Carlos, Michael Fox, Jojo Farrell (2010), *Venezuela Speaks! Voices from the Grassroots*, Oakland, PM Press.

Marx, Karl (1963, 1968), *Le Capital*, París, Folio / Gallimard.

Pearson, Tamara (2007), “Attacks on Venezuela’s worker run Diana industries increase, Maduro appoints new manager”, <http://venezuelanalysis.com/noticias/9937>.

Pineiro Harnecker, Ca milá (2007), “Democracia laboral y conciencia social: un estudio de cooperativas en Venezuela”, *Revista Temas*, nº 50–51, La Habana.

Ponniah, Thomas y Jonathan Eastwood (eds) (2011), *The Révolution in Venezuela: Social and Political Change under Chávez*, Cambridge / London, The David Rockefeller Center Series on Latin American Studies, Harvard University Press.

Poulantzas, Nicos (1968), *Poder político y clases sociales*, París, François Maspero / Fundaciones.

- Poulantzas, Nicos (1974), *Clases sociales en el capitalismo actual*, París, Le Seuil.
- Poulantzas, Nicos (1981), *El Estado, el poder, el socialismo*, París, PUF.
- Quijoux, Maxime (2013), *Neoliberalismo y autogestión: La experiencia argentina*, París, IHEAL.
- Renfer, Irene (2010), *Democracia Directa en Argentina, Uruguay y Venezuela: Tres Ejemplos de Democracia Directa en América Latina*, Buenos Aires Prometeo Libros.
- Ruggeri, Andrés (2013), “Autogestión del trabajador en Argentina: problemas y potencialidades del trabajo autogestionado en el contexto de la poscrisis neoliberal”, en Camila Pineiro Harnecker, *Cooperatives and Socialism: A View from Cuba*, Londres, Palgrave y MacMilan.
- Smilde, David y Daniel Hellinger (eds) (2011), *Venezuela’s Bolivarian Democracy: Participation, Politics and Culture under Chávez*, Durham / London, Duke University Press.
- Thwaites Rey, Mabel (2007), *Estado y Marxismo: Un Siglo y Medio de Debates*, Buenos Aires, Prometeo Libros.

ENSAYO DE CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO BOLIVARIANO

Richard Neville

Las autoridades bolivarianas han puesto en marcha mecanismos de democracia activa al servicio de la justicia social, que han resultado en una gran participación de las clases populares en la gestión de los programas sociales y en los Concejos municipales. El ejercicio del poder popular ha permitido el surgimiento de una cultura política y la politización de amplios sectores de la población. Al mismo tiempo, el gobierno ha implementado o fomentado diversas formas de socialización de la producción (cooperativas, empresas de producción social, nacionalizaciones). ¿Los trabajadores realmente se apropiaron de estas herramientas? ¿Realmente ejercen un poder real de control desde una perspectiva anticapitalista y autogestionaria?

Desde hace poco más de una década, el proceso bolivariano se ha caracterizado por una ruptura radical con el modelo dominante en Venezuela porque desafía la hegemonía del Imperio y el modelo neoliberal. Sin duda, la llegada al poder de Hugo Chávez en febrero de 1999 ha permitido cambiar la vida de millones de venezolanos. Las estructuras institucionales, económicas y sociales del país se han transformado, poniendo la participación activa en el centro del

proceso. Es innegable que el proceso se ha “radicalizado gracias a la ejemplar movilización del movimiento popular”, especialmente durante el período 2003–2005 (Lander, 2009).

La fortaleza de Chávez radica en haber sabido crear tanto un vínculo vertical con la gente como un vínculo horizontal mediante el desarrollo de mecanismos de democracia participativa en la base: establecimiento de Consejos públicos locales de planificación (2002), Misiones sociales (2003), cooperativas (2004), desarrollo endógeno, Concejos municipales (2006) etc., al servicio de la justicia social (Neuville, 2010).

Pero, ¿esta participación activa y redistribución de los subsidios petroleros realmente ha resultado en una nueva distribución de la riqueza y ha estimulado un desarrollo equilibrado y sostenible en todo el país? Más allá de los logros concretos muy reales, es importante plantearse la cuestión de la sostenibilidad de la acción. El surgimiento de una nueva casta (la “boli-burguesía”), la corrupción y la burocracia son factores susceptibles de obstaculizar el modelo de desarrollo. La persistencia de un estado rentista dependiente en gran medida del petróleo que redistribuye los recursos sin crear las condiciones para el desarrollo sostenible puede obstaculizar la sostenibilidad del proceso (Sintomer, 2009).

El proceso actual se define como “una revolución sui generis” (Harnecker, 2004), ideológicamente indefinida, no sin contradicciones profundas y el discurso oficial sobre los “socialismo del siglo XXI” dibuja una visión más que matizada (Sintomer 2009: 218). Según Edgardo Lander, no constituye

una “doctrina estable ni un cuerpo de conceptos” (2009). Y Steve Ellner incluso se pregunta sobre los objetivos de la revolución (2009).

Para Hugo Chávez, “se trata de empezar a abrir el camino para la construcción de una sociedad socialista donde el pueblo y la gran mayoría popular sean los protagonistas, para que sean la fuerza y la organización de ésta, que señalen su dirección y definan sus objetivos”(Acosta, 2007). Este “concepto” vago se sustenta oficialmente en tres ejes precisos: el énfasis en la democracia participativa sobre la representativa, la prioridad dada a la economía social y el desarrollo endógeno. Pero, ¿qué realidad cubren estos dos últimos?

El ejercicio del poder popular

La noción de soberanía popular –enunciada a menudo por Hugo Chávez– y sus consecuencias, que son democracia directa y mandato imperativo fueron constantes en la mayoría de las revoluciones, desde 1848 hasta la Comuna de París de 1871, los consejos obreros de 1917, a la autogestión practicada en Cataluña en 1936, o más recientemente por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en México.

Estas nociones de poder popular y poder dual despiertan debates dentro de la izquierda venezolana. Los Concejos municipales constituyen un primer paso en la afirmación de un poder local, popular y ciudadano, que sin duda es necesario profundizar para lograr una verdadera dualidad de poderes. Son herramientas de poder popular que deben fortalecerse. La

historia del poder dual venezolano es inherente a la naturaleza de la relación establecida entre Chávez y el pueblo desde 1992 y reforzada durante etapas cruciales del proceso.

Pero el Estado Bolivariano está lejos de ser una unidad homogénea. El papel ambiguo de ciertos sectores del aparato estatal en la promoción del poder dual hace que estas amenazas sean complejas y difíciles de identificar.

El desarrollo endógeno local y el abandono de una economía basada en las materias primas son, por tanto, imprescindibles.

Consejeros, como Roland Denis, creen que las organizaciones de base venezolanas y, en particular los ayuntamientos, deben lograr una autonomía “absoluta” frente al Estado y el partido. El poder dual debe “transformarse en una estrategia permanente de acuerdo con la necesidad de organizar un poder socializado y no estatal”. Por tanto, debe acelerarse la democratización:

A partir de ahora, es fundamental que los determinantes refuercen la consolidación de la autonomía política de las organizaciones y colectivos que hoy constituyen la base y el alma del proceso revolucionario (Denis, 2006: 35).

Steve Ellner (2009) matiza al considerar que antes de la elección de Chávez en 1998, Venezuela carecía de movimientos sociales como los que permitieron las elecciones de Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. Durante varios años, las asociaciones de vecinos y el movimiento cooperativo fueron independientes del Estado pero no prosperaron; no jugaron un papel fundamental en la mejora de las condiciones

de vida de los venezolanos. Por otro lado, la inyección de grandes sumas de dinero en Concejos municipales y programas sociales ha permitido estimular los sectores marginales y darles los medios para controlar sus vidas.

Una socialización creciente de la producción

La ejemplar participación popular en la implementación y gestión de Misiones sociales y Concejos municipales no puede por sí sola resolver las dificultades estructurales en materia de desarrollo económico: implementación de una agricultura sostenible mediante el uso de la tierra disponible, modernización del sistema de producción de petróleo, diversificación y reconversión de la industria, etc.

Sin embargo, el gobierno trató de innovar con la Constitución de 1999 que permite el establecimiento de diferentes tipos de órganos de participación en la gestión, adoptó diferentes leyes y varios planes: ley de cooperativas (2001), Misión *Vuelvan caras* (2004), Plan Nacional Simón Bolívar (2007–2013), Ley de Desarrollo de la Economía Popular (2008), Plan Socialista de Guyana (2009–2019). El objetivo es reducir la “subordinación del trabajo al capital” para que “pueda ser suplantado por la asociación de productores libres”.

La constitución adoptada en diciembre prevé órganos de cogestión y autogestión mediante la “participación de los trabajadores en la gestión de empresas públicas” y la “gestión

de empresas en forma de cooperativas y empresas de servicios comunitarios para promover el empleo”. Forma de asociación guiada por los valores de cooperación mutua y solidaridad “(art. 184) Pero siguiendo el ejemplo de Henri Lefebvre (1966), podemos preguntarnos: ¿las dos concepciones: la cogestión y la autogestión no son contradictorias?

La ley de cooperativas de 2001 inicialmente tuvo efectos limitados, pero a partir de 2004 y la implementación del “nuevo modelo de desarrollo”, estas estructuras experimentaron un verdadero auge. El modo de desarrollo se define como “endógeno” (concepto definido por Oswaldo Sunkel, 1993) y se centra principalmente en la economía social, como una opción estratégica.

En marzo de 2004, se lanzó la Misión Vuelvan Caras para combatir la pobreza y crear empleo. Se trata de “cambiar el modelo económico, social, político y cultural del país, con el fin de establecer un estado de justicia y derecho apoyado en el desarrollo socioeconómico endógeno” (Harnecker, 2005). En septiembre de 2004, el gobierno institucionalizó el programa Vuelvan Caras, promueve el Nucleo (Núcleos de Desarrollo Endógeno) y coordina el trabajo de las instituciones de crédito.

Las cooperativas son consideradas como un componente esencial “de un modelo económico orientado al bienestar colectivo más que a la acumulación de capital” (Harnecker, 2005). Constituyen una “primera brecha en el sistema” en la que “se elimina el antagonismo entre capital y trabajo” (Marx, *El capital*, libro 3). A nivel de base, sobre todo en Caracas y en el estado de Guyana, están surgiendo consejos de autogestión

con el objetivo de crear redes productivas autogestionadas y redes de distribución para liberarse de las redes capitalistas.

De 2001 a 2008, el número de cooperativas aumentó de 1.045 a 264.000 registradas y legalizadas por Sunacoop, pero muchas colapsaron rápidamente o nunca funcionaron. Solo 63.000 estaban activas a finales de 2008, lo que sumaba dos millones de asociados (DSESSV, 2009), más que Argentina, Brasil y Colombia juntos.



En enero de 2005, el gobierno decidió expropiar industrias en suspensión de pagos, en particular aquellas que tenían deudas con el Estado o que habían sido abandonadas por sus propietarios. MINEP es responsable de ayudar a los trabajadores a tomar el control de empresas amenazadas de quiebra. Si una instalación industrial no utilizada se considera de utilidad pública, se inicia un procedimiento de expropiación que prevé la negociación de una compensación económica con los propietarios. En colaboración con la Unión

Nacional de Trabajadores (UNT)¹²⁸, se elabora una lista de 700 empresas. El Estado pasa a ser dueño de la empresa y cede el 49% de las acciones a la cooperativa creada por los trabajadores. Estas empresas son administradas por un directorio integrado por representantes elegidos por los trabajadores y personas designadas por el gobierno, bajo el concepto de cogestión. Las empresas Inpeval (papel) e Inveval (válvulas para la industria petrolera) se gestionan bajo este principio, pero la cogestión entre el Estado y las cooperativas de trabajadores no va muy bien (Neuville, 2006).

En diciembre de 2006, las empresas de telecomunicaciones (CANTV) y electricidad (Electricidad de Caracas) fueron nacionalizadas sin control real de los trabajadores. Estas empresas siguen estando muy burocratizadas y el servicio que se brinda a los usuarios no siempre está a la altura de lo que cabría esperar (Rodríguez, 2010).

El gobierno impulsa la idea del control de los trabajadores sobre la gestión de las empresas públicas y recuperadas. Pero está claro que no hay un movimiento fuerte para hacerse cargo de las empresas por parte de los trabajadores.

El plan nacional Simón Bolívar (2007–2013), plan de la Nación para el desarrollo económico y social, fija los ejes principales de las políticas públicas y sienta las bases de un “nuevo modelo productivo” (NMP). En Venezuela, se están probando así nuevas relaciones entre los principios cooperativos y la

128 Creado en abril de 2003, está compuesto principalmente por sindicatos de la Central de los Trabajadores venezolanos (CTV), que se vio comprometida en el golpe de Estado de abril de 2002 y que apoyó los cierres patronales de octubre de 2002 y de diciembre de 2002 a enero de 2003. UNT está organizado en varias tendencias.

economía pública. Este programa de socialización de la economía, para la creación de una “economía popular”, se dirige específicamente a territorios y ámbitos económicos estratégicos. El objetivo es lograr una distribución justa de tres tercios entre el sector público, el sector de la economía social y el sector privado.

En junio de 2008 se aprobó la ley para el desarrollo de la economía popular. Permite la creación de nuevas organizaciones socioproductivas con la idea de crear una asociación estrecha entre el sector cooperativo y los órganos ejecutivos del “poder popular” (Consejos municipales que implementan la democracia participativa local). Esta ley califica como “organizaciones socioproductivas” empresas de distribución social, grupos de intercambio solidario, empresas de propiedad social comunal o directa, grupos de trueque comunitario, así como empresas de producción social (EPS). Corresponden en cierto modo a las Sociedades Cooperativas de Interés Colectivo (SCIC) en Francia.

Durante 2008, el gobierno también anunció la nacionalización del sector cementero, que hasta entonces pertenecía a tres transnacionales (Lafarge–Francia, Holcim–Suiza y Cemex–México) y nacionalizó la siderúrgica Sidor.

En 2009, tras la escasez de alimentos organizada por la burguesía y las multinacionales, diversas empresas: azucareras, lecherías, arrozales o productoras de café y harina de maíz se transformaron en empresas socializadas (Lácteos Los Andes o la transnacional de granos Cargill) y dos cadenas de

supermercados fueron nacionalizadas bajo el “control de los trabajadores”. Estas nacionalizaciones en este sector se justificaron por la necesidad de mejorar la oferta alimentaria de la población. El Banco de Venezuela, uno de los principales bancos privados del Santander, también quedó bajo control estatal. Tras la crisis energética de principios de 2010, la empresa nacional Corpelec quedó bajo el control de los trabajadores y la antigua dirección, considerada burocrática, fue despedida.

Todas las nacionalizaciones, como las que las precedieron (sector eléctrico, telecomunicaciones, campos petrolíferos del Orinoco, etc.), “han sido objeto de generosas compensaciones a los propietarios privados: Venezuela utiliza parte de la renta petrolera para recuperar el control de ciertos sectores estratégicos del economía”. El recurso a la indemnización se justifica por el deseo de evitar condenas por incumplimiento de los tratados bilaterales de inversión suscritos por Venezuela y por el derecho internacional (Toussaint, 2009).

El 13 de mayo de 2010, un decreto ratificó el plan socialista de Guyana 2009-2019 e hizo pasar toda la industria extractiva y metalúrgica bajo la apelación de “autogestión bajo control obrero”: La Corporación venezolana de Guyana agrupa a quince empresas que emplean a 18.000 trabajadores y representa a la economía y eje social de una región que incluye cinco estados y más de la mitad del territorio venezolano. Los trabajadores eligieron delegados para organizar la producción, la comercialización, las condiciones laborales y la protección del medio ambiente. La dirección de las empresas fue despedida. El objetivo no es conformarse con la exportación de

materias primas y productos semiacabados sino desarrollar la industria manufacturera. Se trata de propiciar el surgimiento de nuevas organizaciones socioproductivas participativas.

Al favorecer la economía social, el gobierno venezolano ha optado por formas asociativas de propiedad y control. Las cooperativas forman parte del nuevo modelo económico, y tienen potencial para cumplir una serie de objetivos de la revolución bolivariana, entre otros los de la lucha contra el desempleo, la promoción de un desarrollo económico sostenible, la competencia con las clásicas empresas capitalistas y el desarrollo del proyecto socialista pero su peso permanece muy bajo. Sin embargo, el peso del sector privado en el PIB sigue siendo muy alto e incluso aumentó entre 1983 y 2008, pasando de 64,7% a 70,9% (Toussaint, 2009).

Para Víctor Álvarez, ex ministro de Industria, la economía de Venezuela, miembro fundador de la OPEP, está intrínsecamente ligada a “la captación de los ingresos petroleros por un reducido número de personas”.

Esta “economía portuaria” fundamentalmente desigual no ha permitido un desarrollo económico sostenible (agricultura, industria manufacturera, investigación y desarrollo, etc.). El Plan Nacional Simón Bolívar se concibe como una alternativa al capitalismo rentista (ausencia de redistribución de capital en el sector industrial, latifundismo en el sector agrícola) por la democratización del acceso a la creación de riqueza a través de la redistribución de los excedentes dentro de los territorios caracterizados por significativos déficits sociales.

Como la transformación de la estructura económica es poco probable en el corto plazo, los movimientos revolucionarios venezolanos deben operar como lo han hecho durante décadas, avanzando estratégicamente y consolidando gradualmente los Concejos municipales como un poder dual viable, capaz de luchar con el Estado actual, estructurarlo y transformarlo radicalmente. Paulatinamente, el poder constituido debe transferir el poder político, social, económico y administrativo al poder comunal para avanzar hacia el Estado social y salir de las viejas estructuras del estado capitalista burgués que frenan los impulsos revolucionarios (Ciccariello–Maher, 2007).

La relativa influencia del movimiento obrero en la profundización del proceso

El dinamismo y la fuerte participación que se observa a nivel comunitario en la gestión de los servicios no pueden enmascarar otra realidad: una baja tasa de trabajadores en la gestión de la economía formal (alrededor del 50%), aunque esta ha aumentado en un 8% entre 2000 y 2007 con el desarrollo de cooperativas que afectarían al 14% de la población activa en 2009, una división sindical entre la CTV (ligada a la oposición y muy débil) y la UNT (creada en 2003 y que tarda en dotarse de estructuras verdaderamente democráticas), la debilidad de las corrientes revolucionarias y autogestionarias y la ausencia de un movimiento fuerte de

recuperación de empresas (si lo comparamos con Argentina o Brasil). Teniendo en cuenta las modestas dimensiones del parque industrial venezolano, las recuperaciones de empresas por parte de los trabajadores no superaron las 30 empresas en 2006 (Lucena, 2006) aunque continuaron a partir de entonces.

La movilización de los trabajadores fue especialmente fuerte durante el golpe de Estado de abril de 2002 y los cierres patronales de diciembre de 2002 y abril de 2003. Ocuparon sus fábricas y sus empresas negándose a obedecer las instrucciones del sindicato central, la CTV, que se desprestigió totalmente. La creación de la UNT despertó una inmensa esperanza en la clase trabajadora pero sigue dividida entre corrientes acrílicas y seguidores en relación con el bolivarianismo y una corriente clasista bastante débil que sigue siendo muy tradicional en sus demandas, aunque se esfuerce por estimular una radicalización del proceso.

En 2005, dentro de Alccasa (la principal industria del aluminio del país), los Consejos de fábrica fueron el primer experimento en el control de los trabajadores a nivel de industria a gran escala. Sirvieron de referencia para romper con las jerarquías opresivas entre directivos y trabajadores y permitieron el desarrollo de los intercambios y la democracia empresarial.

En 2008, los 15.000 trabajadores de Sidor, que al final de una lucha de quince meses en la que la dilación del poder (autoridades locales y Ministerio de Trabajo) fue muy fuerte, obtuvieron satisfacción. Los trabajadores luchaban por transformar 9.000 subcontratos en contratos indefinidos. Ante

el rechazo de los empresarios, la empresa será finalmente renacionalizada en mayo de 2008.

Se llevó a cabo una primera reunión nacional para discutir el modo socialista de gestión, el control obrero y la participación de los trabajadores celebrada en Caracas el 17 y 18 de septiembre de 2010, en presencia de 220 sindicalistas y trabajadores de diversas empresas nacionalizadas, recuperadas o sociales en las que se desarrolla un proceso de control obrero. Terminó con una declaración muy crítica frente al gobierno, en particular sobre: el comportamiento burocrático de las direcciones designadas por el Estado; injerencia en la organización y funcionamiento de los consejos de trabajadores; y la retención de información relacionada con la planificación, administración, producción y comercialización de empresas bajo el control de los trabajadores. Los participantes consideraron fundamental el establecimiento de un órgano nacional de articulación y socialización de las experiencias de control y gestión de los trabajadores y la elección democrática de la gestión de empresas por parte de los trabajadores.

Esta observación demuestra la dilación del poder que socializa la producción de acuerdo con los eventos y movilizaciones y el carácter burocrático del proceso. Al mismo tiempo, la clase trabajadora venezolana es incapaz de amplificar el proceso de recuperación de empresas. La adopción de un orden como la nacionalización bajo el control de los trabajadores, ¿no muestra todos sus límites, aunque pueda ser un paso transitorio hacia la gestión obrera desde una perspectiva de autogestión?

Reflexiones sobre el debate: nacionalización bajo control o autogestión de los trabajadores

En 2009, las nacionalizaciones relanzaron el debate sobre el control de los trabajadores estableciendo mecanismos de control obrero de los órganos de dirección de las empresas nacionalizadas. Para evitar la mala gestión, el despilfarro, la malversación, la corrupción, el abuso de los activos corporativos, los trabajadores quieren en particular obtener la apertura de libros de cuentas, transparencia en la estrategia comercial e industrial de las empresas y presentación periódica de informes de gestión. Para la izquierda sindical, también “a través del control obrero, los trabajadores aumentan la confianza en sí mismos y en la autoorganización para intervenir colectivamente para dar un contenido socialista a la gestión y las relaciones laborales en las empresas, ya sean nacionalizadas o en manos de de capital privado. También debería plantearse la cuestión del sector petrolero del que están excluidos los trabajadores. La batalla por el control de los trabajadores sobre la gestión de las empresas es absolutamente fundamental. Su resultado es decisivo para la profundización del proceso en curso en Venezuela” (Toussaint, 2009). Pero el control obrero solo puede ser una demanda transitoria y no una finalidad si nos colocamos en una perspectiva de autogestión. ¿Por qué no reclamar asesoramiento de gestión o asesoramiento de fábrica, en lugar de solo control? (Gurvitch, 1966).

Si la nacionalización de las empresas recuperadas bajo control obrero corresponde más bien a una concepción de un Estado dirigido por los trabajadores, se puede entender. Pero, ¿es este realmente el caso de Venezuela? Sin embargo, para los marxistas, no se trata de construir el socialismo con las manos de la burguesía, sino de utilizar las situaciones que surgen en el capitalismo de Estado y hacer avanzar el movimiento revolucionario. En estas condiciones, el control de los trabajadores solo puede ser una demanda y una fase de transición.

Tan pronto como adquiere un carácter masivo, el control obrero emerge muy rápidamente de sus límites y se transforma en expresión de la capacidad de los trabajadores para gestionar su propia vida profesional y social. Como su nombre indica, la aplicación del control obrero se limita únicamente al seguimiento y verificación del funcionamiento de una empresa cuya gestión efectiva queda en manos de los capitalistas o representantes del Estado. La autogestión y el control de los trabajadores son por lo tanto, de naturaleza fundamentalmente diferente.

Si el control obrero solo puede lograrse a través de la lucha, pone en marcha un proceso dinámico y “constituye para los trabajadores un ejercicio preparatorio, en cierto modo, que los hace conscientes de la necesidad de pasar a una fase superior de la acción”. El papel de los revolucionarios es colocar todas las luchas parciales por el control obrero en la perspectiva de la autogestión. La autogestión representa ir más allá de las perspectivas reformistas en cualquier forma que aparezcan”.

Si el control obrero es, por tanto, una especie de banco de pruebas que hace perceptible la necesidad de autogestión, la autogestión de una fábrica o de un servicio aislado, o incluso de un conjunto de varias unidades, es, por regla general, un negocio que es utópico bajo un régimen capitalista. El entorno hostil paralizará rápidamente su funcionamiento al secar el suministro de materias primas y sabotear la comercialización y el flujo de producción (TMRI, 1972).

Evidentemente, el éxito de la autogestión requiere su extensión a ramas enteras de la actividad económica. A partir de las demandas inmediatas, la estrategia de la autogestión plantea de manera concreta el marchitamiento y destrucción del aparato del estado burgués y el derrocamiento de la burocracia. Porque “pone en tela de juicio al Estado, como poderosa coacción, erigida por encima de toda la sociedad”. Para generalizar, para transformarse en “sistema”, la autogestión no puede evitar chocar con el “sistema político–estatal” (Lefebvre, 1966).

En el contexto venezolano, sin duda sería deseable el desarrollo de contraplanes obreros para diversificar la producción (como lo que parece comenzar con el plan socialista de Guyana).

El Poder Bolivariano, que reivindica el socialismo no está totalmente libre de atavíos burgueses y está atravesado por profundas contradicciones. Indudablemente, está más dispuesto a socializar la producción y los servicios que otros gobiernos de carácter burgués. De hecho existen condiciones objetivas más favorables para el control popular y obrero y

para lograr la gestión obrera, pero el caso de Sidor muestra que persiste la resistencia burocrática y reformista. En estas condiciones, la debilidad del movimiento obrero es probablemente un serio obstáculo para la profundización y radicalización del proceso desde una perspectiva de autogestión.

septiembre de 2010

TIPOLOGÍA DE COOPERATIVAS

- El 44% se creó de forma espontánea (sin apoyo ni incentivos financieros del gobierno).
- El 34% son bancos municipales (creados por los consejos municipales y transferidos a las unidades administrativas en 2009 porque implica la gestión de fondos asignados por el Estado).
- 14% fueron promovidas por el Estado (derivadas de incentivos financieros y contractuales del Estado).
- El 5% están vinculados a empresas cogestionadas (proceso público/privado con responsabilidad de gestión parcial).
- El 1% son cajas de ahorro (fondos de trabajadores de empresas públicas o privadas o cooperativas de crédito tradicionales).
- 1% son clásicos (afiliados a grupos o federaciones).
- 1% son cooperativas innovadoras.

Los miembros de la cooperativa trabajan principalmente en cuatro sectores:

- 31% en comercio y hoteles, 29% en transporte, logística y comunicaciones, 18% en agricultura y pesca y 8% en manufactura (MINEP, 2006).

- La gran mayoría de las cooperativas son unidades pequeñas y algunas de ellas incluso colapsaron rápidamente. También hay cambios de dirección y las empresas capitalistas se están convirtiendo en cooperativas. Sunacoop, el organismo encargado de supervisar las cooperativas, debe trabajar para sanear el sector. El desarrollo magistral ha ido acompañado de una gran dependencia de los mercados estatales y municipales. La convivencia con el movimiento cooperativo tradicional, que es más autónomo, no es muy fácil. Lucha por ser reconocido como un actor real (DSESSV, 2009).

Los desafíos del plan de desarrollo económico y social de la nación (2007–2013)

- Adoptar nuevas condiciones para la creación de cooperativas.

- Construir un verdadero movimiento cooperativo y romper con el archipiélago de iniciativas aisladas.

- Ampliar el proceso de cogestión. El plan de desarrollo económico y social de la nación (2007–2013) preveía en

particular una distribución justa de tres tercios entre el sector público, el sector de la economía social y el sector privado.

- Anclar la economía solidaria en el sector energético (petróleo, gas, electricidad y carbón) para acabar con las prácticas burocráticas y alienantes y lograr un “trabajo asociado”.

- Acentuar la formación en principios cooperativos y crear una red de centros de formación.

- Especificar en una ley los conceptos de trabajo asociado, relaciones con el Estado y cogestión.

- Fomentar políticas de conservación ambiental para lograr un desarrollo equilibrado (DSESSV, 2009).

Empresas de producción social

“La originalidad de estas sociedades, regidas por el estatuto de sociedad limitada, radica en la promoción de la participación de los miembros de una comunidad (espacio territorial específico) en el funcionamiento y desarrollo de las estructuras. La propiedad del capital se asume de forma colectiva e igualitaria entre las entidades asociativas fundadas en los principios de cooperación y solidaridad (federaciones de cooperativas) y los órganos responsables de la gestión de los fondos públicos encargados de su creación (institutos

autónomos de impulso del aparato productivo). La propiedad de los medios de producción no es estrictamente privada ni estatal, sino de las comunidades administradas por los Consejos municipales. Las EPS están presentes en los diferentes sectores de la economía nacional: construcción, transporte de carga, transformación de materias primas, turismo... Se dice que su producción es “social” y el indicador de su productividad se basa en la valoración lograda por unidad producida. La distribución de los beneficios del trabajo colectivo determina la remuneración; es el salario social, evaluado según las necesidades locales y el aporte productivo de cada integrante. Esta distribución se realiza de forma democrática (asambleas); el consejo de administración está integrado a partes iguales por representantes de asociaciones y empresas públicas. El objetivo fundamental no es la búsqueda de lucro, sino el de la creación de empleo y la satisfacción de las necesidades de las poblaciones registradas en el entorno de la empresa.

El reparto de responsabilidades debe permitir la interacción entre los diversos actores del territorio y contribuir a la construcción de su desarrollo endógeno (propiciar el surgimiento de otras EPS, por ejemplo) “(Lavergne, 2009).

Los ejes de la diversificación del aparato productivo

“1. Desarrollo de un polo siderúrgico y metalúrgico mediante la aplicación de una política de sustitución de importaciones (Venezuela producirá los tubos que necesita para construir

oleoductos mientras que hasta ahora eran importados; con la ayuda de China, el país producirá equipos ferroviarios y reurbanizará su red).

2. Apoyo a la producción agrícola local para acercarse lo más posible a una situación de soberanía alimentaria cuando se importa cerca del 90% de los alimentos consumidos en el país (legado de décadas de utilizar los ingresos petroleros para importar todo lo que Venezuela necesitaba).

3. Desarrollo de una industria petroquímica.

4. Mejora de la producción y distribución de electricidad producida en su mayor parte a partir de energía hidráulica (y afortunadamente no a partir del petróleo). En este nivel, contrariamente a las intenciones oficiales, debemos evitar embarcarnos en la producción de electricidad por centrales nucleares.

5. Nacionalización de la industria cementera para desarrollar la política de construcción de viviendas.

En cuanto al deseo de reducir la dependencia del petróleo, Venezuela también busca disminuir su dependencia de Estados Unidos, su principal comprador de hidrocarburos, buscando aumentar el suministro a China (según algunas fuentes gubernamentales, la esperanza es que China compre tanto como Estados Unidos en 2014, lo que parece muy difícil de lograr).

Política agraria: se ha puesto en marcha una reforma agraria, las cooperativas y las pequeñas explotaciones están sujetas a

importantes subvenciones, pero partimos de una situación muy difícil. El peso de la agricultura en el PIB es muy bajo y, salvo excepciones muy importantes –como las regiones de los grandes huertos comerciales en los Andes–, Venezuela es uno de esos países donde el campesinado está muy debilitado por el modelo importador aplicado desde hace décadas.

¿Cómo reconstituir un campesinado asegurando la soberanía alimentaria de una población que llegará a los 30 millones en los próximos años? Debe reconocerse que el problema es muy difícil de resolver. Para ello, el Estado debe implementar una batería muy grande de medidas de estímulo, que incluyen: una mejora sustancial en la calidad de los servicios públicos en las zonas rurales para reducir la presión del éxodo rural a las ciudades; brindar apoyo a diversos niveles a la agricultura familiar y otras formas tradicionales de producción agrícola sin ejercer una presión indebida a favor de las cooperativas; el desarrollo de una red pública para la comercialización de los productos de los agricultores asegurándoles una salida estable y precios lo suficientemente altos como para estimularlos y sacarlos de las garras de las redes privadas que imponen sus precios a los productores y se aseguran márgenes de ganancia excesivamente altos “(Toussaint, 2009).

Fuente:

Comunicación en el Congreso Marx International 6,
Universidad Paris Oeste

Nanterre–La Défense.

Para saber más:

Acosta, Vladimir (2007), “El socialismo del siglo XXI y la revolución bolivariana. Una reflexión inicial “en Margarita López Maya, Ideas para debatir el socialismo del siglo XXI, Venezuela, Alfa.

Ciccariello–Maher, George (2007), “Poder dual en la Revolución venezolana”, Revista mensual, vol. 59, n ° 4, septiembre.

Compagnon, Olivier, Julien Rebotier y Sandrine Revet (eds) (2009), Venezuela más allá del mito: Chávez, democracia, cambio social, París, L’Atelier / Éditions Ouvrières.

Cruelles, Josep (2010), “Venezuela, control obrero y autogestión”, Corriente alterna, julio.

DSESSV (Diagnostico del sector de la economía social y solidaria en Venezuela) (2009), ACI Américas, Investigación del centro cooperativo sueco y cooperativa Gestión Participativa.

Denis, Roland (2006), “De los Consejos municipales a los Consejos Autogestionarios, de Fabrica y de Defensa ”, Proyecto Nuestra América – Movimiento 13 de Abril, [www . aporrea.org](http://www.aporrea.org).

Denis, Roland (2006), “Venezuela: los movimientos populares y el gobierno”, Revista Socialista Internacional, n ° 110.

Ellner, Steve (2009), “¿Una revolución sin metas? El proceso revolucionario en Venezuela “, en Compagnon, Olivier, Julien Rebotier y Sandrine Revet (eds.), Venezuela más allá del mito: Chávez, democracia, cambio social, París, L’Atelier/Éditions Ouvrières.

Ellner, Steve (2009), “Un modelo atractivo con fallas: los Consejos Comunales de Venezuela”, Nacla: Informe sobre las Américas, publicado por Rebelion, [www . rebelión. org](http://www.rebelión.org).

Harnecker Pineiro, Camila (2005), “El Nuevo Movimiento Cooperativo Venezolano”, Venezuelanalysis.com, 17 de diciembre de 2005.

Harnecker, Marta (2004), Venezuela: Una revolución sui generis, folleto.

Lander, Edgardo (2009), “El proceso bolivariano: ¿un proyecto alternativo en tensión?”, Entrevista de Franck Gaudichaud, Contretemps, enero.

Gurvitch, Georges (1966), “El advenimiento de los consejos de fábrica”, Autogestión, nº 1, diciembre.

Lander, Edgardo y Pablo Navarrete (2008), “Venezuela y el proceso boliviano”, en Franck Gaudichaud (eds.), El volcán latinoamericano: izquierda, movimientos sociales y neoliberalismo en América Latina, París, Textuel.

Lavergne, Pierrick (2009), “Nuevos modelos de economía social en Venezuela, (¿una respuesta al capitalismo rentista?)”, Revista Internacional de Economía Social (RECMA).

Lefebvre, Henri (1966), “Problemas teóricos de la autogestión”, Autogestión, n ° 1, diciembre.

Lucena, Héctor y Hermes Carmona (2006), “Empresas recuperadas: posibilidades y limitaciones de la experiencia con Invepal”, Universidad de Carabobo, marzo.

Neuville, Richard (2006), Venezuela: “Cogestión bajo el control del trabajador”, Rouge & Vert, n ° 236–237, febrero.

Rangel, José Vicente (2007), “Chavez es el antipoder”, Últimas Noticias, Caracas, 16 de abril.

Rodríguez, Domingo (2010), “La CANTV y la revolución bolivariana: Telecomunicaciones socialistas? », Alterinfos, 2 de julio, www.alterinfos.org/spip.php?article4501.

Sunkel, Oswaldo (1993), “Desarrollo desde adentro: Hacia un enfoque neoestructuralista para América Latina”.

Sintomer, Yves (2009), “Postface”, en Compagnon, Olivier, Julien Rebotier y Sandrine Revet (eds.), Venezuela más allá del mito: Chávez, democracia, cambio social, París, L’Atelier/Ediciones de los trabajadores.

TMRI (Tendencia marxista–revolucionaria internacional) (1972), “La lucha por la autogestión y la revolución”, París, François Maspero.

Toussaint, Éric (2009), “Cambios en curso en Venezuela”, en “La rueda gira en Venezuela, Ecuador y Bolivia”, Inprecór, septiembre.

IMPACTO E IMPLICACIONES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL DESARROLLO COOPERATIVO

Richard Neuville

La Constitución venezolana aprobada en 1999 dio un lugar preponderante a la participación popular. En el plano económico y social, en su artículo 184, facilita la actuación de los órganos de cogestión con la “participación de los trabajadores en la gestión de empresas públicas” la autogestión, así como la “gestión de empresas en forma cooperativa y empresas de servicios comunitarios para la promoción del empleo” y “cualquier forma de asociación guiada por los valores de cooperación mutua y solidaridad”.

La economía social y el “desarrollo endógeno” figuran entre las prioridades del gobierno bolivariano. Está en ese espíritu que la ley de cooperativas fue promulgada en septiembre de 2001. Si inicialmente sus efectos fueron limitados, las cooperativas experimentaron un verdadero boom a partir de 2004 con la implementación del “nuevo modelo de desarrollo” definido en un punto de vista estratégico como endógeno. Entre diciembre de 2004 y mayo de 2005 se capacitó a más de 250.000 personas en los valores del

cooperativismo. En septiembre de 2004, el gobierno creó el Ministerio de Economía Popular (MINEP) para institucionalizar el programa *Vuelvan Caras*, promover el Nucleo (centros de desarrollo) y coordinar el trabajo de las instituciones de crédito. Las cooperativas son vistas como un componente esencial “de un modelo económico orientado al bienestar colectivo más que a la acumulación de capital” (Azzellini, 2011).

Este voluntarismo político dará rápidamente resultados convincentes, pero también mostrará límites. Su número aumentará de 800 cooperativas y 20.000 asociados en 1998 a 260.000 cooperativas y un millón y medio de asociados en 2008. La gran mayoría fueron unidades pequeñas y algunas de ellas colapsaron rápidamente. También se observaron derivas en la gestión y las empresas capitalistas aprovecharon el marco legal para constituirse en cooperativas. Sunacoop, el organismo encargado de supervisar las cooperativas, debe trabajar para sanear el sector. El desarrollo vendrá acompañado de una gran dependencia de los mercados estatales y municipales. La convivencia con el movimiento cooperativo tradicional y más autónomo resultará complicada (Neuville, 2009; 2010). A partir de 2007, sobre la base de estas observaciones, el desarrollo de las cooperativas dejará de ser una prioridad para el gobierno.

Las políticas públicas y el cooperativismo venezolano

Un estudio universitario realizado por Héctor Lucena y Dioni Alvarado publicado en 2013 analiza la complejidad del desarrollo cooperativo iniciado en el marco del proceso

político bolivariano durante el período 1999–2013 y cuestiona en particular las repercusiones de las políticas públicas y sus implicaciones para la autonomía del movimiento cooperativo (Lucena y Alvarado, 2013).

Los autores recuerdan que si las asociaciones de cooperativas habían participado en el proceso de constitución y redacción de la nueva Constitución adoptada en diciembre de 1999 y, que si se había consultado a determinados sectores cooperativos antes de la publicación del decreto–ley de cooperativas de 2001, este movimiento posteriormente fue ignorado en gran medida. También señalan que el desarrollo cooperativo, iniciado a nivel estatal, ha favorecido a las cooperativas de trabajo y producción del sector servicios y que algunas empresas en dificultades económicas se han reestructurado mediante la cooperación.

El desarrollo cooperativo en el proceso revolucionario bolivariano

El impulso dado por el gobierno pasó por dos etapas: la primera entre 2001 y 2003 y la segunda entre 2004 y 2007, durante las cuales se conformaron el 81% de las cooperativas. Estos dos ciclos de desarrollo se comparan con la gran inestabilidad política (golpe de Estado y cierre patronal) que vivió el país durante el primer período. A partir de 2004, el gobierno consolidado en el poder se comprometió a reponer la capacidad productiva y de servicios del emprendimiento

privado transfiriéndola a personas organizadas en cooperativas. Pero la gran mayoría de iniciativas (74%) respondieron a necesidades familiares, asociadas y de la comunidad con el objetivo de encontrar una salida para los desempleados.

A finales de 2008 se habían registrado 260.000 cooperativas, mientras que en 2000 eran apenas mil. La mayor parte de este desarrollo está vinculado a la acción del gobierno, pero este boom ha abierto el apetito de empresas privadas que querían acceder a beneficios, créditos y contratos con entidades públicas. En algunos casos, los empleadores han obligado a sus trabajadores a organizarse en cooperativas para trabajar en subcontratación.

Para Nelson Freitez, el desarrollo estatal del cooperativismo responde más a “una política asistencial que al desarrollo económico”, lo que se ha traducido en un mejor desarrollo en el sector asociativo que en el productivo (Freitez, 2013). Si hasta 1997 las cooperativas estaban presentes principalmente en los sectores de ahorro y crédito, servicios personales, agricultura y transporte, a partir de entonces predominaron los servicios personales y empresariales.

El sector cooperativo tradicional –que, recordemos, participó activamente en la redacción de los principios en el marco de la Asamblea Constituyente en 1999– expresó reservas y cierto escepticismo frente al desarrollo cooperativo impulsado por el Estado. El decreto–ley de 2001 se apartaba de los principios mismos de ese movimiento. Rápidamente, se pudo ver que estos temores estaban bien fundados porque muchas de las

organizaciones apenas creadas desaparecieron. En el censo de 2006, apenas el 25% de los 15.000 registrados cumplió las condiciones requeridas como la capacidad de mostrar los libros de deliberación colectiva y el nombramiento de socios.

Así, durante los últimos quince años, el Estado ha sido el principal protagonista en el impulso a la creación de cooperativas en Venezuela. Durante el período 2001–2012, se crearon 300.000 cooperativas, mientras que en 1998 eran sólo 762. Sin embargo, a pesar de la impresionante expansión cuantitativa, muchas organizaciones se formaron con el número mínimo de cinco socios, como lo exige la ley. Entre 1998 y 2008 se otorgaron 1.500 millones de bolívares de crédito, una parte significativa del cual no se recuperó. Como se indicó anteriormente, la ley ha sido ampliamente utilizada por el sector privado para desarrollar la subcontratación con el fin de reducir los costos de producción y desvincularse de sus responsabilidades salariales. El sector público no se quedó fuera y animó fuertemente a las empresas subcontratistas a formar cooperativas. Según el censo de 2006, que registró 42.000 cooperativas activas de los cientos de miles formados, Venezuela sería el líder entre los países latinoamericanos en cuanto al número de entidades con 1 millón de asociados. Sin embargo, el impacto económico fue mucho menor de lo esperado. Paradójicamente, las cooperativas más importantes son organizaciones que fueron, en su mayor parte, creadas antes de 1998, como la empresa Cecosesola que se fundó en 1967 y que hoy cuenta con 1.200 socios (Kerneur y Ferret, 2014).

El crecimiento exponencial de las cooperativas en Venezuela ha sido criticado por actores del movimiento cooperativo tradicional. Oscar Bastidas señaló la existencia de “falsas cooperativas” que no cumplen con los estándares de este movimiento, en el sentido de que no cubren la doble dimensión asociación/empresa. Debe entenderse por esto, que no tienen sentido de propiedad colectiva, ni de gestión democrática real, sino que están constituidos por grupos de cinco socios que se convierten en socios de facto, capitalistas que explotan la fuerza de trabajo de sus empleados. Este “pequeño grupo dominante en las falsas cooperativas no respeta los principios y valores cooperativos y no desarrolla formación, participación o integración”. Estas cooperativas están pensadas para “generar beneficios exclusivamente sin incluir la responsabilidad social con y para la comunidad” (Bastidas, 2013).

Autonomía de las cooperativas y políticas públicas

Los autores del estudio también señalan la "subordinación de las cooperativas al poder económico del Estado, lo que facilita su incorporación a la maquinaria electoral que beneficia sobre todo al estatus político, pero que no rinde en términos económicos". Para ellos, el mecenazgo político se ha desarrollado significativamente en los últimos años, lo que ha “generado distorsiones en el funcionamiento de las cooperativas”; recuerdan que valores como la autonomía y la transparencia son incompatibles con formas de clientelismo político.

Ilustran su punto con la cooperativa Copalar (Asociación de múltiples servicios agrícolas), creada en 1980 en el estado de Lara, que fue una de las cooperativas agrícolas más desarrolladas en términos de asociados y producción en Venezuela. Esta cooperativa estaba conformada por productores de café y reunió a 700 familias de 80 caseríos de la zona en 1990. Su desarrollo fue complejo pero constante, logrando producir para la exportación con el fin de mejorar las condiciones de vida de los socios. Pero en 2005, en el marco del “Plan Café”, el gobierno les ofreció importantes créditos con la condición expresa de vender su producción a determinadas empresas y les solicitó la instalación de una tostadora, que pronto se enfrentaría a graves problemas estructurales. Al cabo de un tiempo, la cooperativa se encontró en quiebra debido a la corrupción y la mala gestión, que se dejó tentar por la afluencia de recursos sin control.

Algunas cooperativas históricas se ven más afectadas que las beneficiarias del clientelismo en el trabajo con las políticas públicas de desarrollo. El estudio destaca las características subyacentes que aparecen cuando el Estado interviene en el movimiento cooperativo sin medir el alcance de sus políticas. Asimismo, los valores de autonomía y transparencia no son solo principios morales, sino también elementos prácticos esenciales para la viabilidad económica de las cooperativas.

El diagnóstico de “pseudocooperatismo”, consistente en el desarrollo masivo de cooperativas que adoptan la forma pero no el fondo, ha sido compartido por analistas cercanos ideológicamente al gobierno. Ya en 2007, Hugo Chávez,

consciente de las dificultades y, curiosamente, en referencia a la experiencia cooperativa de Yugoslavia, declaró que el programa de cooperación de Venezuela no había sido un instrumento de transición hacia los objetivos socialistas que la “revolución bolivariana” afirmó implementar (Chavez, 2007). A partir de ahí, las cooperativas dejaron de ser el vehículo ideológico fundamental para la transformación económica. Fueron reemplazados por empresas de producción social (EPS), en el marco del proyecto nacional Simón Bolívar 2007–2013, que posteriormente se convirtieron en empresas de propiedad social (El Troudi, 2013).

Más allá de los límites. Una mayor inclusión social

A pesar de estas observaciones, es innegable que históricamente las cooperativas han jugado un papel importante al permitir la inclusión de sectores populares en el tejido social venezolano, con distintos grados de éxito según las áreas y regiones del país, y en las actividades económicas del país en cuanto a producción de bienes y servicios, consumo y ahorro. A partir de la Constitución de 1999 y la ley de 2001, las cooperativas han constituido el arquetipo organizativo a desarrollar mediante políticas públicas con el fin de generar una economía social activa y reemplazar de cierta manera a las empresas capitalistas. Sin embargo, el desarrollo exponencial de las cooperativas, vinculado a los contratos con el Estado y al dinero público, ha resultado ser un callejón sin salida. La reacción del Estado fue entonces declarar la inutilidad del

cooperativismo como instrumento transformador de la sociedad y sustituirlo por las EPS.

En su estudio, Lucena y Alvarado concluyen que luego de más de una década de desarrollo cooperativo, cabe señalar que hoy hay cuarenta veces más cooperativas que al inicio del proceso, y que muchas de ellas han habilitado a familias y trabajadores en actividades informales para adquirir personalidad jurídica a través del apoyo de políticas públicas. Casi todo el cooperativismo tradicional se mantiene al margen de los recursos estatales, aunque ciertas experiencias a las que se ha recurrido han amenazado la autonomía del cooperativismo.

La experiencia venezolana es interesante en más de un sentido y merece ser analizada más a fondo a nuestro nivel para aprender de ella. Confirma que el desarrollo significativo de las cooperativas, incluso a escala masiva, no es suficiente para iniciar una transición poscapitalista. Esto demuestra que el voluntarismo del gobierno bolivariano y la provisión de subsidios significativos sin ningún control real engendran abusos y, a veces ponen en tela de juicio la autonomía del movimiento cooperativo; y que las experiencias históricas basadas en las iniciativas de los trabajadores resisten mejor, que siguen desarrollándose en ocasiones y que siguen siendo las más importantes del país como la Central Cooperativa de Servicios Sociales del Estado de Lara, San José Obrero, Corandes, las cooperativas en Alianza con Venequip, Cooperativa Rubio, Cooperativa Bermúdez, Cooperativa Araya, Cecosesola, etc. Pero también que las políticas públicas han

jugado un papel inclusivo nada despreciable para las clases trabajadoras.

Esta experiencia plantea varios problemas a partir de los cuales sería conveniente plantear algunas hipótesis para esbozar un “proyecto” de transición que sea capaz de romper con el sistema capitalista. Una cantera que ciertamente permanece abierto...

Agosto de 2014

Para saber más:

Azzellini, Dario (2011), “De las cooperativas a las empresas de propiedad social directa en el proceso venezolano”, en Camila Pineiro Harnecker (coord.) (2011), *Cooperativas y Socialismo: Una mirada desde Cuba*, La Habana, Caminos.

Bastidas, Oscar (2013), “Las falsas cooperativas venezolanas”, www.analitica.com.

Chávez Frías, Hugo (2007), “Discurso ante la Asamblea Nacional”, 15 de agosto.

El Troudi, Haiman (2013), “Empresas de producción social. Instrumento para el socialismo del siglo XXI, 2006, Venezuela”, Osera, n° 9, Buenos Aires, 2º semestre.

Freitez, Nelson (2013), *El cooperativismo en el Estado Lara, desde 1968 hasta el 2008*, tesis doctoral, UCV

Johansson–Rosen, Nicolás (2015), “Experiencias de control de trabajadores en Venezuela y el Estado Bolivariano”, *Contre Temps*, n ° 25, abril.

Kerneur Ronan y David Ferret (2014), *La Experiencia Cecosolva*, Francia, Guatemala, Venezuela, 59 min, Tropos Movies, www.facebook.com/troposfilms.

Lander, Edgardo (2011), “Venezuela: ¿Radicalizar el proceso? Mas estatismo verticalista y personalista o mas democracia y mas participación”, *Cal y Arena*, n ° 2, Caracas, febrero.

Neuville, Richard (2010), “Venezuela: ¿En qué medida los trabajadores contribuyen a la profundización y radicalización del proceso revolucionario?”, Octubre, <http://alterautogestion.blogspot.fr/2010/10/venezuela-la-dans-quel-mesure-les.html>.

Neuville, Richard (2009), “Venezuela: Una década del proceso bolivariano. Avances reales y límites de una revolución democrática”, *Rouge & Vert*, n ° 289, abril.